

VOLUMEN 1

NUEVAS BASES PARA UNA SOCIEDAD GLOBAL SOSTENIBLE

Coordinadores del tema

Eduardo Moyano Estrada
y Tomás García Azcárate

DESAFÍOS CIENTÍFICOS DEL CSIC: RUMBO AL 2030

Desafíos coordinados por:

Jesús Marco de Lucas y M. Victoria Moreno-Arribas

VOLUMEN 1

NUEVAS BASES PARA UNA SOCIEDAD GLOBAL SOSTENIBLE

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Más información sobre esta licencia en <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la exclusiva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado:
<https://cpage.mpr.gob.es>

EDITORIAL CSIC:
<http://editorial.csic.es> (correo: publ@csic.es)



- © CSIC
- © de cada texto, sus autores
- © de las ilustraciones, las fuentes mencionadas

ISBN Vol. 1: 978-84-00-11034-5
ISBN O.C.: 978-84-00-11008-6
e-ISBN Vol. 1: 978-84-00-10770-3
e-ISBN O.C.: 978-84-00-11010-9
NIPO: 833-22-112-5
e-NIPO: 833-22-113-0
DL O.C.: M-15686-2022

Diseño y maquetación: gráfica futura

DESAFÍOS CIENTÍFICOS DEL CSIC: RUMBO AL 2030

VOLUMEN 1

NUEVAS BASES PARA UNA SOCIEDAD GLOBAL SOSTENIBLE

Coordinadores del tema

Eduardo Moyano Estrada
y Tomás García Azcárate

DESAFÍOS CIENTÍFICOS DEL CSIC: RUMBO AL 2030

¿Cuáles son los principales desafíos científicos de la primera mitad del siglo XXI? ¿Podemos establecer las prioridades para el futuro? ¿Cómo debe abordarlos la comunidad científica?

Este libro presenta las reflexiones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre 14 temas estratégicos establecidos en función de su impacto científico e importancia social.

Se abordan cuestiones fundamentales como el origen de la vida, la exploración del universo, la inteligencia artificial, el desarrollo de energías limpias, seguras y eficientes o la comprensión del funcionamiento del cerebro. El documento identifica desafíos complejos en áreas como la salud y las ciencias sociales, y los temas estratégicos seleccionados abarcan tanto cuestiones básicas como posibles aplicaciones del conocimiento. En este análisis han participado cerca de 1100 investigadores de más de 100 centros del CSIC y otras instituciones (organismos públicos de investigación, universidades, etc.). Todos coinciden en la necesidad de adoptar un enfoque multidisciplinario y en fomentar la investigación colaborativa que permita poner en marcha proyectos ambiciosos centrados en temas concretos.

Estos 14 libros blancos, concebidos como marco de referencia para el desarrollo de la estrategia científica de la institución, permitirán conocer la investigación que se realiza actualmente en el CSIC y, al mismo tiempo, construir una visión global de lo que serán los principales desafíos científicos en la próxima década.

VOLÚMENES QUE COMPONEN LA OBRA

- 1 *Nuevos fundamentos para una sociedad global sostenible*
- 2 *Orígenes, (co)evolución, diversidad y síntesis de la vida*
- 3 *Genoma y epigenética*
- 4 *Desafíos en el ámbito de la biomedicina y la salud*
- 5 *Cerebro, mente y comportamiento*
- 6 *Producción primaria sostenible*
- 7 *Impactos del cambio global*
- 8 *Energía limpia, segura y eficiente*
- 9 *Comprensión de los elementos básicos del universo, su estructura y evolución*
- 10 *Información digital y compleja*
- 11 *Inteligencia artificial, robótica y ciencia de los datos*
- 12 *¿Nuestro futuro? Espacio, colonización y exploración*
- 13 *Desafíos de las ciencias del mar para el 2030*
- 14 *Dynamic Earth: Explorando el pasado, preparando el futuro*

Desafíos científicos del CSIC: rumbo al 2030

Desafíos coordinados por:

Jesús Marco de Lucas y M. Victoria Moreno-Arribas

Volumen 1

Nuevas bases para una sociedad global sostenible

Coordinadores del tema:

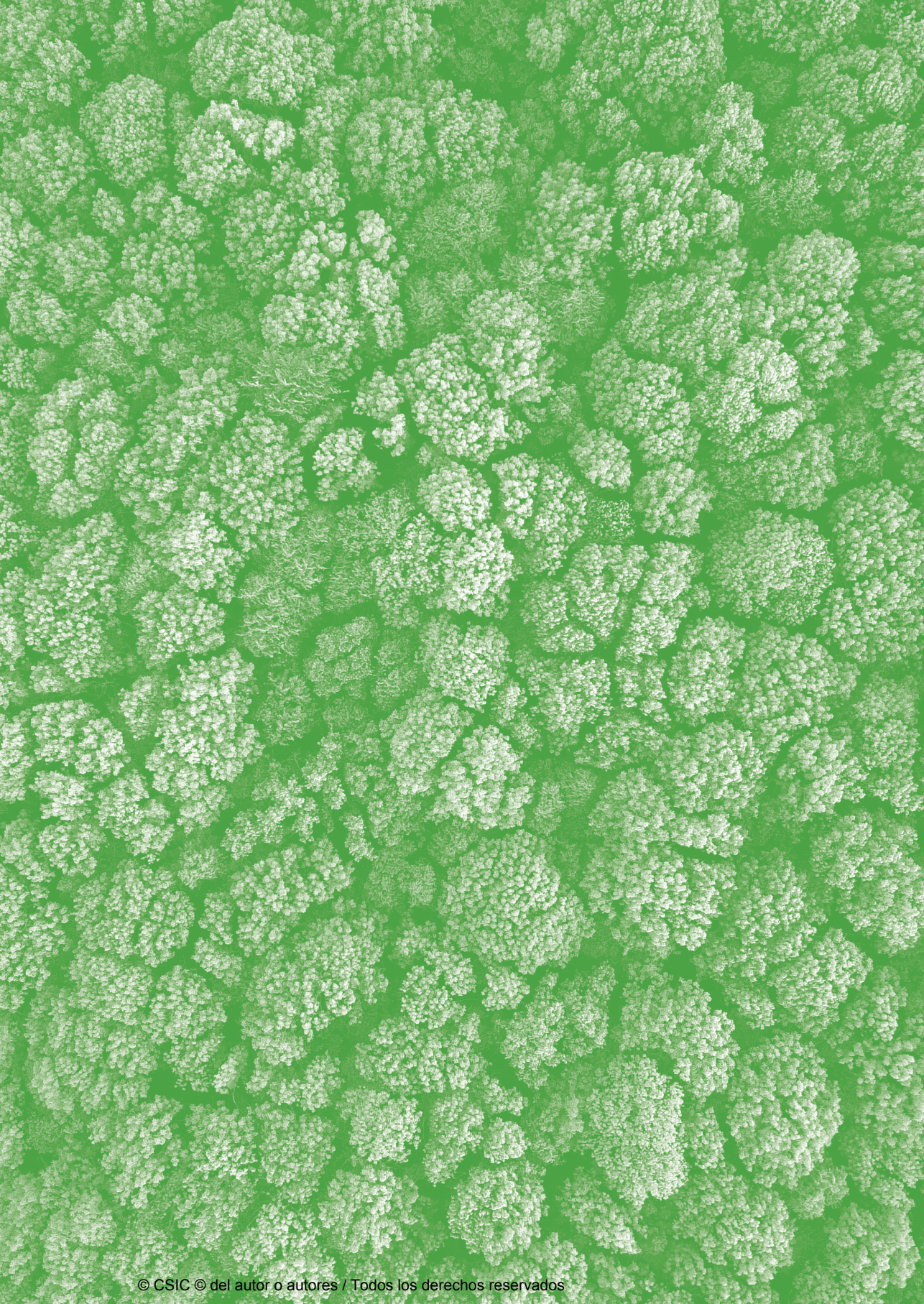
Eduardo Moyano Estrada (IESA, CSIC) y Tomás García Azcárate (IEGD, CSIC)

Coordinadores de desafíos:

Jordi Brandts Bernad (IAE, CSIC), Carolina Cañibano Sánchez (INGENIO, CSIC-UPV), María Dolores del Castillo Bilbao (CIAL, CSIC-UAM), Teresa Castro Martín (IEGD, CSIC), Francisco Colom González (IFS, CSIC), Felipe Criado Boada (INCIPIIT, CSIC), José Fernández Albertos (IPP, CSIC), Gloria Fernández-Mayoralas (IEGD, CSIC), Francisco Ferrándiz Martín (ILLA), Ada Ferrer i Carbonell (IAE, CSIC), Joan Font Fàbregas (IESA, CSIC), Amparo González Ferrer (IEGD, CSIC), Ana López Sala (IEGD, CSIC), Josep Martí Pérez (IMF, CSIC), Oscar Martínez Álvarez (ICTAN, CSIC), Catalina Martínez García (IPP, CSIC), Reyes Mate Rupérez (IFS, CSIC), Fco. Javier Moreno Fuentes (IPP, CSIC), Idoia Murga Castro (IH, CSIC), Vincenzo Pavone (IPP, CSIC), Manuel Pérez Yruela (IESA, CSIC), Blanca Ramírez Barat (CENIM), Juan Carlos Velasco Arroyo (IFS, CSIC)

Centros participantes:

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS, CSIC)
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM, CSIC)
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL, CSIC-UAM)
Estación Biológica de Doñana (EBD, CSIC)
Escuela de Estudios Árabes (EEA, CSIC)
Escuela de Estudios Hispano-americanos (EEHA, CSIC)
Instituto de Análisis Económico (IAE, CSIC)
Instituto de Arqueología (IAM, CSIC-Junta de Extremadura)
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA, CSIC)
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN, CSIC)
Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD, CSIC)
Instituto de Estructura de la Materia (IEM, CSIC)
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA, CSIC)
Instituto de Filosofía (IFS, CSIC)
Instituto de Geociencias (IGEO, CSIC-UCM)
Instituto de Historia (IH, CSIC)
Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (IIBM, CSIC-UAM)
Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo (ILC, CSIC)
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA, CSIC)
Institución Milá y Fontanals (IMF, CSIC)
Instituto de Ciencias del Patrimonio (INCIPIIT, CSIC)
Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento (INGENIO, CSIC-UPV)
Instituto Pirenaico de Ecología (IPE, CSIC)
Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP, CSIC)
Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR, CSIC)
Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC)



- 10 **CAPÍTULO 1**
INTRODUCCIÓN
Coordinadores Eduardo Moyano Estrada y Tomás García Azcárate
- 14 **CAPÍTULO 2**
MARCO DE REFERENCIA
Coordinadores Eduardo Moyano Estrada y Tomás García Azcárate
- 20 **CAPÍTULO 3**
**RETOS Y PROPUESTAS PARA UN FUTURO
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN**
Coordinadores Eduardo Moyano Estrada y Tomás García Azcárate
- 96 **CAPÍTULO 4**
CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
Coordinadores Eduardo Moyano Estrada y Tomás García Azcárate
- ANEXOS**
- 102 **ANEXO 1**
- 112 **DESAFÍO A**
**CIENCIA, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA MODELOS
SOSTENIBLES DE DESARROLLO**
Coordinadores Carolina Cañibano Sánchez y Vincenzo Pavone
- 140 **DESAFÍO B**
LAS CIENCIAS HUMANAS EN ESCENARIOS DE TRANSICIÓN
Coordinadores Josep Martí Pérez y Idoia Murga Castro
- 154 **DESAFÍO C**
**DESARROLLO TERRITORIAL EN NUEVOS ESCENARIOS DE
INTERACCIÓN RURAL-URBANA**
Coordinadores Francisco Colom González y Ana M^a López Sala
- 186 **DESAFÍO D**
**RETOS DEMOGRÁFICOS EN UN ESCENARIO
SOCIAL DE LONGEVIDAD Y ENVEJECIMIENTO**
Coordinadores Teresa Castro Martín y Gloria Fernández-Mayoralas

224 **DESAFÍO E**

MIGRACIONES INTERNACIONALES
EN UN CONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL

Coordinadores Juan Carlos Velasco Arroyo y Amparo González Ferrer

244 **DESAFÍO F**

ALIMENTACIÓN SEGURA Y SALUDABLE
EN SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

Coordinadores María Dolores del Castillo Bilbao y Oscar Martínez Alvarez

272 **DESAFÍO G**

CAMBIO TECNOLÓGICO Y NUEVAS FORMAS
DE TRABAJO/EMPLEO EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

Coordinadores Jordi Brandts Bernad y Catalina Martínez García

286 **DESAFÍO H**

TERCER SECTOR Y ECONOMÍA SOCIAL
Y COLABORATIVA EN LAS SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS. EL CASO DEL TERCER SECTOR EN ESPAÑA

Coordinador Manuel Pérez Yruela

330 **DESAFÍO I**

DEMOCRACIA, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN
EN ESCENARIOS DE PLURALIDAD SOCIAL Y POLÍTICA

Coordinadores Joan Font Fábregas y José Fernández Albertos

340 **DESAFÍO J**

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL
EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE BIENESTAR

Coordinadores Francisco Javier Moreno Fuentes y Ada Ferrer i Carbonell

374 **DESAFÍO K**

LO QUE QUEDA DEL FUTURO: SOSTENIBILIDAD
A TRAVÉS DEL PATRIMONIO

Coordinadores Felipe Criado Boado y Blanca Ramírez Barat

398 **DESAFÍO L**

MEMORIAS MOVILIZADAS. DESPLIEGUES DEL
PASADO EN EL PRESENTE Y EL FUTURO

Coordinadores Francisco Ferrándiz Martín y Reyes Mate Rupérez

RESUMEN

En esta Introducción, los coordinadores de la UT-1 exponen la estructura general del volumen, que se centra en el eje “Nuevas bases para una sociedad global sostenible”. Este título es una apuesta por la convergencia entre áreas y líneas de investigación. Hablar de “globalización” y “sostenibilidad” implica un enfoque multidisciplinar, porque ambos términos afectan prácticamente a todas las dimensiones de la sociedad contemporánea. Por ello, apelan a la cooperación entre todas las disciplinas de investigación científica. Para este ejercicio de prospectiva, los coordinadores generales han organizado la UT-1 en DOCE Retos Temáticos y han encomendado la coordinación de cada Reto a investigadores que, formando parte del personal científico del CSIC, se han considerado los más adecuados para esta tarea.

INTRODUCCIÓN

Coordinadores

Eduardo Moyano Estrada (IESA, CSIC)
y Tomás García Azcárate (IEGD, CSIC)

El objetivo del Libro Blanco del CSIC es situar al Consejo ante el reto de dar respuesta a los profundos cambios que están teniendo lugar en la actual sociedad española, valorando sus efectos con una perspectiva de 30 años, en el horizonte 2050.

Para afrontar ese reto, la VICYT ha delimitado 14 Unidades Temáticas (UT), con las que procura cubrir, desde todas las áreas del CSIC y con una vocación transversal e integradora, el amplio y complejo panorama que conforma el actual proceso de cambio.

Por ejemplo, la gestión de los recursos naturales; la expansión de las pandemias víricas; la recurrencia de los desastres naturales; las nuevas fuentes de producción y uso de la energía; la movilidad viaria y el transporte intra- e inter-territorial; las nuevas formas de organización económica; la preservación de los ecosistemas; el avance de la robótica y la inteligencia artificial; la ingeniería genética; la biomedicina; la preservación de ríos, mares y océanos; la exploración del espacio interestelar; los asuntos relacionados con la gobernanza; la mitigación de los efectos del cambio climático; la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de salud; los cambios en los hábitos alimentarios; las relaciones internacionales; los cambios demográficos y el aumento de la esperanza de vida; la desigualdad social y la exclusión; la movilidad geográfica y los flujos migratorios... son, todos ellos, temas que se ven afectados por los actuales procesos de cambio global y que no pueden ser entendidos desde las estrechas y, al mismo

tiempo, limitadas perspectivas sectoriales, ni tampoco siquiera desde cada una de las áreas Vida, Materia y Sociedad en que se estructura el CSIC.

Por ello, es imprescindible la cooperación entre las diversas disciplinas científicas del CSIC si queremos abordar con rigor estos grandes temas, volcando en ellos todo el conocimiento acumulado en una institución tan rica y diversa como la nuestra.

El Libro Blanco es, además, un documento elaborado desde el CSIC, pero para ser leído fuera de nuestra institución y, muy especialmente, en las distintas áreas de la administración pública. Ello nos obliga a utilizar un estilo divulgativo, que, sin caer en la banalización de los temas tratados, vaya dirigido a un público no especializado en materia científica, así como a unos poderes públicos de los que depende la sostenibilidad económica y financiera del CSIC.

Es, en definitiva, un documento de prospectiva donde vertimos ideas y propuestas sobre lo que puede aportar el CSIC para un mejor conocimiento del actual proceso de cambio, contribuyendo así a cumplir con nuestra misión como institución al servicio de la sociedad.

Ése es el encargo que nos ha transmitido la Presidencia del CSIC a los distintos coordinadores de las UT, encargo que hemos reflejado mediante la estructuración de cada UT en Desafíos Temáticos (DT), cada uno de ellos coordinado por personal científico de nuestra institución.

De las 14 Unidades Temáticas del Libro Blanco, la UT-1 se centra en el eje “*Nuevas bases para una sociedad global sostenible*”, cuyo título es en sí mismo una apuesta por la convergencia entre áreas y líneas de investigación. Hablar de “globalización” y de “sostenibilidad” implica hacerlo desde un enfoque multidisciplinar, ya que ambos términos afectan a prácticamente todas las dimensiones de la sociedad contemporánea, apelando, por tanto, a la cooperación entre todas las disciplinas de la investigación científica. Para este ejercicio de prospectiva, hemos organizado la UT-1 en DOCE desafíos temáticos, encargando la coordinación de cada Desafío al personal científico del CSIC que hemos considerado más idóneo para esa tarea.

El resultado final del trabajo desarrollado en la UT-1 es el Informe que se presenta en estas páginas, informe que, junto al de las demás UT, compondrá el Libro Blanco del CSIC. El Informe de la UT-1 es el resultado del esfuerzo de integración en un texto único de las ideas transmitidas por los distintos Desafíos a través de sus correspondientes documentos. Estos documentos se

incorporan como Anexos a este Informe tal como han sido enviados por los coordinadores/as y sin modificación alguna.

De acuerdo con las instrucciones recibidas desde la VICYT y transmitidas por los coordinadores de la UT-1 a los Desafíos, este Informe se articula en las siguientes tres secciones, además de esta sección introductoria:

- *marco de referencia*, donde se expone la relevancia y el interés social y científico de los temas que han sido objeto de la UT-1, así como las características más relevantes del entorno en que se insertan;
- *retos futuros* (tanto científicos, como sociales) de los distintos Desafíos de la UT-1, donde se exponen las posibles respuestas que se les puede dar desde el CSIC y se hacen algunas recomendaciones para potenciar las fortalezas existentes, neutralizar las debilidades detectadas y aprovechar las posibles oportunidades;
- *conclusiones*, donde se hace una síntesis de los principales resultados y se hacen algunas propuestas y recomendaciones para el conjunto de la UT, dando lugar todo ello a un Informe Ejecutivo.

RESUMEN

En este capítulo, los coordinadores del Volumen exponen el marco de referencia de la UT-1. Consideran que es necesario incluir la perspectiva histórica de forma transversal, e incorporar la dimensión de género así como un componente ético-normativo. Sin embargo, el marco de referencia se centra en aspectos relacionados con la demografía, el envejecimiento, la salud, el bienestar y la organización de los núcleos familiares, dando lugar a nuevos roles y modelos de familia, a nuevos sistemas de cuidados y a nuevas formas de desigualdad. Además, también se centra en la forma de producir los alimentos y en las actitudes y comportamientos de los consumidores. Los coordinadores consideran también que el cambio social tiene importantes efectos en todo lo relacionado con las formas de empleo/trabajo, los nuevos modelos de organización económica y el papel que deben desempeñar las políticas públicas, así como los modos de participación ciudadana en la vida política y los flujos migratorios. Por último, consideran necesario poner el foco en las cuestiones relacionadas con la conservación y la puesta en valor del patrimonio y la memoria histórica. Por ello, este informe UT-1 agrupa los DOCE retos en CUATRO bloques temáticos.

MARCO DE REFERENCIA

Coordinadores

Eduardo Moyano Estrada (IESA, CSIC)
y Tomás García Azcárate (IEGD, CSIC)

Como hemos señalado, la UT-1 se centra en el eje “*Nuevas bases para una sociedad global sostenible*”, y hace referencia al importante proceso de cambio global que afecta a todas las dimensiones de la sociedad, alterando el contexto en el que se ha venido desarrollando nuestro quehacer científico en las últimas décadas.

Es un proceso de cambio no comparable a lo ocurrido décadas atrás, debido sobre todo a su amplitud, multidimensionalidad e interdependencia, y también al hecho mismo de que dicho proceso se manifiesta de forma simultánea en muchas áreas, territorios y grupos sociales.

Su análisis nos exige, por tanto, realizar un ejercicio de convergencia entre áreas y líneas de investigación, apostando por un enfoque multidisciplinar, ya que tanto la “globalización”, como la “sostenibilidad” son, como hemos señalado, conceptos que afectan a todas las dimensiones de la sociedad contemporánea.

De un modo general, el marco de referencia de la UT-1 parte de la base de que la vida social fluye siempre en escenarios más o menos cambiantes, y que toda aproximación científica a los hechos sociales ha de hacerse teniendo en cuenta su variabilidad en las coordenadas espacio/tiempo. Por eso, hemos considerado necesario incluir de un modo transversal la *perspectiva histórica*, ya que muchos acontecimientos de hoy sólo pueden comprenderse y ser explicados recurriendo al conocimiento que proporciona la historia. Por esas mismas razones, todo ejercicio de prospectiva no puede hacerse sólo desde el presente, sino a través de la indagación de los elementos clave que nos han conducido hasta aquí.

También entendemos que las actuales dinámicas de cambio tienen efectos desiguales en la población, según sea el entorno territorial donde se viva y según las características sociodemográficas, especialmente las relacionadas con la edad y el sexo. De ahí la necesidad de incorporar la dimensión de *género* en nuestros análisis de prospectiva, así como de incluir en ellos una *componente ético-normativa*. En este sentido, afirmamos que, debido a la naturaleza singular de su objeto de estudio, las ciencias humanas y sociales no son disciplinas neutrales y asepticas ante lo que analizan, sino que han de adoptar un compromiso ético sin que ello implique renunciar a la objetividad que debe orientar el trabajo científico.

De un modo más concreto, el marco de referencia de la UT-1 se manifiesta en los aspectos relacionados con la demografía, el envejecimiento, la salud, el bienestar y la organización de los núcleos familiares, dando lugar a nuevos roles y modelos de familia, a nuevos sistemas de cuidados y a nuevas formas de desigualdad. También se manifiesta en el modo de producir alimentos y en las actitudes y comportamientos de los consumidores. Y todo ello vinculado a la creciente conciencia de la ciudadanía sobre el medio ambiente y a la relación de los seres humanos con la naturaleza, dando lugar a nuevas dinámicas de interacción rural-urbana.

Pero el proceso de cambio tiene además claros efectos en todo lo relativo a las formas de empleo/trabajo, a los nuevos modelos de organización económica y al papel a desempeñar por las políticas públicas. A ello habría que añadir todo lo que se refiere a los modos de participación de la ciudadanía en la vida política y a las formas de gobernanza de que se dota. Asimismo, los flujos migratorios y la diversidad cultural que ello conlleva en sociedades abiertas e inclusivas son temas que se sitúan en el frontispicio de los procesos de cambio. Lo mismo sucede con lo relacionado con la conservación y valorización del patrimonio y con la memoria histórica, en tanto despliegues del pasado en el presente y el futuro de los ciudadanos.

Consideramos, además, que el actual proceso de cambio debe ser estudiado definiendo nuevos conceptos, utilizando nuevas herramientas metodológicas e incorporando los avances que se están produciendo en las técnicas de recogida, tratamiento y análisis de la información empírica, tanto en el ámbito de las humanidades como de las ciencias sociales.

También consideramos necesario establecer puentes de cooperación con otras áreas científicas del CSIC a fin de aprehender la complejidad de los procesos de cambio, y muy especialmente todo lo relativo a la percepción del riesgo, a la vulnerabilidad física y sus implicaciones sociales y a la puesta en marcha de

protocolos de comunicación y prevención que nos permitan mejorar la resiliencia de las sociedades contemporáneas.

Todo ello explica que este informe de la UT-1 agrupe los Desafíos en cuatro Bloques Temáticos (ver Cuadro nº 1).

BLOQUE TEMÁTICO I: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

El desafío A *“Ciencia, innovación y nuevas formas de conocimiento para modelos sostenibles de desarrollo”* hace referencia al modo como las ciencias sociales están abordando los actuales procesos de cambio, tanto en términos teóricos, como metodológicos, redefiniendo y ampliando los conceptos de ciencia, innovación y sostenibilidad. Por su parte, en el desafío B *“Las ciencias humanas en escenarios de transición”* se hace un similar ejercicio de análisis respecto al modo como las humanidades afrontan los retos de las disciplinas que las forman.

BLOQUE TEMÁTICO II: POBLACIÓN, TERRITORIO Y ALIMENTACIÓN

En el desafío C *“Desarrollo territorial en nuevos escenarios de interacción rural-urbana”* se analiza el territorio donde se asienta la población y el espacio físico donde se producen las dinámicas sociales y económicas, estudiándose las tendencias observadas y apostándose por un enfoque innovador que supere la tradicional separación entre espacios rurales y espacios urbanos. El desafío D *“Retos demográficos en un escenario social de longevidad y envejecimiento”* trata de analizar los cambios en los procesos demográficos, tanto de los ya observados, como de las tendencias que se prevén en el futuro. En el desafío E *“Flujos migratorios en sociedades abiertas e inclusivas”* se aborda el tema de la migración y las políticas públicas encargadas de gestionarlo, temas éstos íntimamente relacionados con los dos desafíos anteriores, dada su vinculación con las tendencias demográficas y los evidentes efectos de los flujos migratorios en el desarrollo de los territorios rurales y urbanos.

El objeto de análisis del desafío F *“Alimentación segura y saludable en sistemas alimentarios sostenibles”*, son las cuestiones relacionadas con la nutrición y la alimentación a la luz de los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores.

Cuadro nº 1

BLOQUES TEMÁTICOS, DESAFÍOS Y COORDINADORES

Bloque temático I: Aspectos teórico-metodológicos de las ciencias sociales y humanas

- A. Ciencia, innovación y conocimiento para modelos sostenibles de desarrollo
Coordinadores: Carolina Cañibano Sánchez (INGENIO, CSIC-UPV) y Vincenzo Pavone (IPP, CSIC)
- B. Las ciencias humanas en escenarios de transición
Coordinadores: Josep Martí Pérez (IMF, CSIC) y Idoia Murga Castro (IH, CSIC)

Bloque temático II: Población, territorio y alimentación

- C. Desarrollo territorial en nuevos escenarios de interacción rural-urbana
Coordinadores: Francisco Colom González (IFS, CSIC) y Ana López Sala (IEGD, CSIC)
- D. Retos demográficos en un escenario social de longevidad y envejecimiento
Coordinadores: Teresa Castro Martín (IEGD, CSIC) y Gloria Fernández-Mayoralas (IEGD, CSIC)
- E. Flujos migratorios en sociedades abiertas e inclusivas
Coordinadores: Juan Carlos Velasco Arroyo (IFS, CSIC) y Amparo González Ferrer (IEGD, CSIC)
- F. Alimentación segura y saludable en sistemas alimentarios sostenibles
Coordinadores: Dolores del Castillo Bilbao (CIAL, CSIC-UAM) y Oscar Martínez Alvarez (ICTAN, CSIC)

Bloque temático III: Efectos sociales y políticos del proceso de cambio económico y tecnológico

- G. Cambio tecnológico y nuevas formas de trabajo / empleo
Coordinadores: Jordi Brandts Bernad (IAE, CSIC) y Catalina Martínez García (IPP, CSIC)
- H. Tercer sector, economía social y colaborativa
Coordinadores: Manuel Pérez Yruela (IESA, CSIC)
- I. Democracia, gobernanza y participación en escenarios de pluralidad social y política
Coordinadores: Joan Font Fábregas (IESA, CSIC) y José Fernández Albertos (IPP, CSIC)
- J. Estrategias y políticas de inclusión social en sistemas sostenibles de bienestar
Coordinadores: Francisco Javier Moreno Fuentes (IPP, CSIC) y Ada Ferrer i Carbonell (IAE, CSIC)

Bloque temático IV: Patrimonio y memoria

- K. Lo que queda del futuro: sostenibilidad a través del patrimonio
Coordinadores: Felipe Criado Boado (INCIPIT, CSIC) y Blanca Ramírez-Barat (CENIM)
- L. Memorias movilizadas: despliegues del pasado en el presente y el futuro
Coordinadores: Francisco Ferrándiz Martín (ILLA) y M. Reyes Mate Rupérez (IFS, CSIC)

BLOQUE TEMÁTICO III: EFECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DEL PROCESO DE CAMBIO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO

En el desafío G *“Cambio tecnológico y nuevas formas de trabajo/empleo en la sociedad contemporánea”* se analiza precisamente el impacto de la automatización y la robótica en el empleo y las condiciones del mercado de trabajo, con la emergencia de nuevas formas de empleabilidad (como el teletrabajo) que conllevan nuevas relaciones sociales y que tienen efectos evidentes en las actitudes, preferencias y motivaciones de la población respecto al hecho mismo de trabajar. El desafío H *“Tercer sector, economía social y colaborativa en la sociedad contemporánea”* trata de analizar las formas de organización económica, complementarias a las que se regulan en el mercado laboral y que desempeñan un papel cada vez más relevante en la nueva economía (cooperativas, fundaciones, asociaciones...) prestando especial atención a las formas emergentes de la llamada “economía colaborativa”. El Desafío I *“Democracia, gobernanza y participación en escenarios de pluralidad social y política”* aborda el tema de la implicación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, analizándose las nuevas formas de participación que emergen en las democracias modernas (referéndums de iniciativa popular, presupuestos participativos, administración telemática...) y que dan lugar a nuevas formas de gobernanza. El desafío J *“Estrategias y políticas de inclusión social en sistemas sostenibles de bienestar”* trata de cómo afrontar desde el ámbito de las políticas públicas el reto de neutralizar los problemas de desigualdad y exclusión asociados al proceso de globalización y cambio tecnológico.

BLOQUE TEMÁTICO IV: PATRIMONIO Y MEMORIA

En el desafío K *“Lo que queda del futuro: La sostenibilidad a través del patrimonio”* se abordan los retos relacionados con la ciencia del patrimonio analizando cuestiones relativas al origen, historia y significado de los bienes culturales y su influencia en el desarrollo económico, dada su importancia como activo movilizador de recursos y como importante elemento de construcción de la identidad colectiva. El desafío L *“Memorias movilizadas: despliegues del pasado en el presente y en el futuro”* trata de los retos que se les plantean hoy a los estudios de la memoria, en tanto factor fundamental en la configuración de las sociedades humanas y también en tanto elemento clave, junto con los temas de conservación y valorización del patrimonio, de las identidades individuales y colectivas.

CAPÍTULO 3

RESUMEN

En este capítulo, los coordinadores destacan un conjunto de DESAFÍOS y una serie de PROPUESTAS para lograr que el CSIC siga jugando un papel relevante como institución científica. Con este fin, han organizado los resultados de este informe agrupando los 12 Retos en 4 Bloques Temáticos, presentando una síntesis de los documentos elaborados en cada Desafío, que se incluyen en su totalidad en 12 Anexos.

CAPÍTULO 3

RETOS Y PROPUESTAS PARA UN FUTURO PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Coordinadores

Eduardo Moyano Estrada (IESA, CSIC)
y Tomás García Azcárate (IEGD, CSIC)

De la información proporcionada por los DOCE Desafíos Temáticos en los que se ha estructurado la UT-1, cabe destacar un conjunto de RETOS y una serie de PROPUESTAS para que el CSIC pueda continuar desempeñando en el futuro un papel relevante como institución científica.

Aunque son evidentes las convergencias temáticas entre los distintos Desafíos, y la duplicidad observada en algunas propuestas y recomendaciones, también es verdad las diferencias que existen en los retos teóricos y metodológicos de cada Desafío, y en las cuestiones abordadas por el personal científico que ha participado en todo este proceso de debate.

Por ello, hemos optado por organizar los resultados de este Informe agrupando los doce Desafíos en cuatro Bloques Temáticos, presentando una síntesis de los documentos elaborados en cada Desafío, que, como hemos señalado, se incluyen en su totalidad como Anexo. En todo caso, el contenido de este Informe-síntesis es responsabilidad exclusiva de sus dos coordinadores (Dres. Moyano y García Azcárate).

BLOQUE TEMÁTICO I: ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Desafío A: Ciencia, innovación y conocimiento para modelos sostenibles de desarrollo

Coordinadores

Carolina Cañibano Sánchez
(INGENIO, CSIC-UPV)
Vincenzo Pavone
(IPP, CSIC)

Investigadores y Centros

Davide Consoli (INGENIO, CSIC-UPV), Ricardo Díaz Delgado (EBD, CSIC), Manuel Fernández Esquinas (IESA, CSIC), Pablo Fernández Méndez (INGENIO, CSIC-UPV), Pedro Marques (INGENIO, CSIC-UPV), Irene Monsonís Paya (INGENIO, CSIC-UPV), Elisa Oteros Rozas (Universidad de Vic-UCC), François Perruchas (INGENIO, CSIC-UPV), Sergio Segura (INGENIO, CSIC-UPV), Richard Woolley (INGENIO, CSIC-UPV)

1. Introducción

La evidencia científica actual muestra que “el sistema tierra al completo se enfrenta a cambios a escala global que afectan a la capacidad de supervivencia del ser humano” y que estos cambios afectan “al clima, al nivel del mar, a los usos y la salud del suelo y a las propias sociedades humanas”. Cabe añadir que la humanidad “se enfrenta al reto ineludible de encaminarse hacia futuros más sostenibles, los cuales requerirán cambios socioculturales, económicos y tecnológicos que, por ser interdependientes, han de diseñarse cuidadosamente y acoplarse a diferentes niveles geográficos y sectoriales”.

Consideramos, además, que las ciencias sociales y humanas, en colaboración con otras disciplinas científicas, tienen la responsabilidad de sumarse al reto de afrontar una gran variedad de retos emergentes, de los que cabe destacar los siguientes: “i) la identificación y ordenación de los problemas más apremiantes para la sostenibilidad de las sociedades; ii) la comprensión de la naturaleza de estos problemas y de sus mecanismos subyacentes; iii) la búsqueda de soluciones y respuestas innovadoras a estos problemas, que no por ser en su mayoría globales se viven y padecen de la misma forma en todos los ámbitos sociales, culturales o geográficos y iv) el apoyo a las instituciones y estructuras de gobernanza en el diseño e implementación de soluciones que deberían revertir directamente en beneficio de las sociedades y del conjunto del planeta.”

En ese marco de referencia, consideramos el concepto de “sostenibilidad” como el centro de muchos de los actuales debates sociales, políticos y científicos. Pero, al mismo tiempo, observamos que existe disconformidad sobre la estrecha visión con la que se ha definido dicho concepto y en la que predominan las dimensiones

ecológica y tecnológica. Por eso consideramos necesario acudir a otras perspectivas a fin de poder ampliar el horizonte e ir incorporando dimensiones complementarias, como la dimensión social de la sostenibilidad o su dimensión política, abriendo así el campo de estudio para que puedan intervenir las ciencias sociales.

En lo que respecta a la “innovación”, este concepto también se ha visto afectado por los debates científicos actuales, de tal modo que se plantea ahora un enfoque más holístico de la innovación en el que la dimensión social desempeña un papel fundamental. En estos debates sobre la relación entre *sostenibilidad e innovación*, cabe distinguir tres posiciones distintas: la que enfatiza la innovación tecnológica, si bien situándola en un contexto y trayectoria temporal; la que se interesa por la innovación institucional (redes y sistemas de gobernanza), y la que se centra en la transición socioecológica y en la resiliencia local y sus capacidades adaptativas.

No obstante, y en paralelo a ese debate que alienta transiciones, cabe señalar que hay otro, más intenso, que se refleja en la importancia cada vez mayor de los defensores de un enfoque “fuerte” de la sostenibilidad. Este otro debate viene marcado por los estudios en “innovación de sistemas”, que se pregunta sobre la dirección fundamental del cambio impulsado por la innovación y los efectos (externalidades) negativos de la innovación tecnológica. Asimismo, consideramos necesario añadir al enfoque de la innovación para la sostenibilidad el concepto de “fronteras sociales”, como complemento al concepto de “fronteras planetarias”, incorporando así cuestiones sociopolíticas al debate. Con ello, queremos poner de manifiesto la desconexión existente entre, de un lado, el nivel de las dinámicas de innovación a escala local y, de otro, el de los fenómenos de la innovación global. De este modo, creemos necesario reconectar ambos niveles de la innovación, enfatizando el papel de los llamados “intermediarios de la sostenibilidad” en la comprensión de la naturaleza y dirección de los cambios emergentes.

En definitiva, planteamos como eje del marco de referencia de este Desafío la necesidad de “avanzar hacia una innovación que sea capaz de integrar lo social con lo ecológico”, y donde se conecte de forma más explícita la innovación social y la sostenibilidad social. Y es en ese marco donde cabe definir los escenarios fundamentales para un futuro programa de investigación.

2. Escenarios de investigación

Ciencia y conocimiento en la transición hacia la sostenibilidad

El conocimiento científico y la innovación tecnológica que emerge de sus descubrimientos son, cada vez más, percibidos de forma ambivalente. Tal ambivalencia estriba en el hecho de que el conocimiento científico no sólo no puede dar certidumbre, sino que también genera escenarios no previstos que incluso pueden desbordar el eco-sistema del planeta. Por eso, consideramos que, si queremos que la sostenibilidad social y medioambiental sea la aspiración prioritaria, es necesario repensar las bases en que se sustenta el conocimiento científico y tecnológico: “repensar cómo se produce el conocimiento, como se gestiona la innovación y qué implicaciones tiene todo ello en la transición hacia un desarrollo sostenible”. De ahí que sea también necesaria la participación activa de los ciudadanos y de otros actores sociales, de tal modo que los científicos puedan adoptar una aproximación más reflexiva y ‘responsable’ a sus actividades, evitando que las innovaciones sean lanzadas sin ningún tipo de reflexión previa al mercado. Asimismo, consideramos crucial la coordinación y colaboración efectiva entre las distintas disciplinas científicas que componen las grandes áreas de Sociedad, Vida y Materia del CSIC.

Tecnologías sostenibles

Cualquier escenario para limitar el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente debe contemplar el desarrollo y la difusión de tecnologías ‘verdes’ o ‘limpias’, sean de mitigación o de adaptación. Deben ser tecnologías que permitan “mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptar los sistemas socio-tecnológicos al cambio climático, gestionar la contaminación del agua y del aire, y limitar el impacto de la humanidad sobre la biodiversidad”. No obstante, consideramos que es importante estudiarlas como parte de “un ecosistema de tecnologías, ya que no sólo una tecnología debe ser sostenible, sino todas las que la sustentan”. Además, al tener características distintas, la difusión de las tecnologías ‘verdes’ requieren de ciertas habilidades específicas entre los trabajadores que las desarrollan, lo que exige que las políticas públicas tengan en cuenta la formación y el capital humano específicos al tipo y grado de madurez de las tecnologías. Abordar el estudio de estos procesos tecnológicos, pero con una clara dimensión social, requiere, además, la formación de equipos interdisciplinarios que aúnen los esfuerzos de las disciplinas técnicas y científicas, con las humanas y sociales.

Sociedades sostenibles en transición

La transición hacia sociedades más sostenibles desde un punto de vista social y medioambiental, exige tener en cuenta aspectos relacionados con los cambios en las formas de empleo y el mercado de trabajo y en las ofertas formativas. También es necesario considerar los cambios relacionados con la investigación en el campo de la bioeconomía (tanto en su dimensión de economía de la innovación biotecnológica, como de economía de la biomasa) y con las formas de asentamiento territorial.

Respecto al *empleo*, cabe señalar que “un reto científico es comprender mejor la conexión entre ‘trabajo’ y ‘vida’ (personal), en un contexto socio-técnico en el que la tecnología puede ser tanto aliada de una conexión fructífera y enriquecedora entre ambas esferas, como también de otra alienante y destructiva”. Asimismo, el trabajo y los procesos de producción se han vuelto progresivamente más complejos e intensivos en conocimiento, de tal modo que el trabajo está experimentando una transformación profunda de la mano de la digitalización y el cambio técnico, que modifica la estructura de los empleos disponibles y de la distribución de los salarios (ver Desafío G). Por ello, consideramos como otro escenario crucial para las ciencias sociales profundizar en la comprensión de estas dinámicas, así como ahondar en las características intrínsecas de las ocupaciones como, por ejemplo, el conjunto de tareas y habilidades que definen sus ámbitos de acción.

Respecto a la *oferta formativa*, consideramos que “la compleja adaptación del conocimiento a la transición ecológica implica cambios en la demanda de ocupaciones, lo que supone modificar los sistemas educativos para adaptar su oferta en materia de formación tanto en lo que se refiere a la educación superior, como a la formación profesional”. No obstante, como la transición ecológica se encuentra aún en su fase inicial, las buenas prácticas compatibles con la sostenibilidad no se han consolidado todavía, estando sujetas a experimentación y aprendizaje basados en ensayo y error. Por eso, consideramos que el análisis de la adaptación de la oferta formativa, de sus contenidos y de su organización, constituye otro nuevo escenario para las ciencias sociales.

En relación a la *transición hacia la bioeconomía*, consideramos que es una de las transiciones más prometedoras de los últimos veinte años, ajustándose al propósito de dejar atrás la economía basada en la energía fósil, para pasar a una economía en la que las biotecnologías y las biomásas tengan un papel determinante. En nuestra opinión la transición hacia la bioeconomía conlleva la emergencia de varios escenarios, destacando, en lo que a la actividad científica se

refiere, el hecho de que “está acelerando un cambio radical de la forma de entender la ciencia, cada vez más alejada de la ciencia básica y más orientada a la innovación comercial basada en colaboraciones público-privadas donde varios conflictos de interés entre los mundos de la política, de la empresa y de la ciencia no se están ni reconociendo ni abordando”. Por eso, planteamos la necesidad de que todas las disciplinas científicas, incluyendo las ciencias sociales y humanas, contribuyan a una nueva etapa de la bioeconomía, caracterizada por un tratamiento más profundo de la sostenibilidad, tanto en el tiempo (tomando en cuenta las necesidades de las próximas generaciones) como en el espacio (tomando en cuenta que cualquier solución sostenible tiene que serlo en todas las latitudes del globo).

Respecto a los cambios producidos en *las formas de asentamiento territorial*, cabe centrarse en los debates sobre el papel del territorio en las transiciones hacia la sostenibilidad, reconociendo que la investigación disponible hasta la fecha es limitada. De ahí que reclamemos innovaciones metodológicas para conocer la capacidad de integración de los distintos tipos de innovación (social, tecnológica...), así como la agilidad con la que esta integración se realiza en contextos territoriales caracterizados por distintos marcos institucionales y legales (*innovation embedding*) (ver Desafío C). En nuestra opinión, todo ello plantea retos cruciales a la investigación científica, tales como los siguientes: identificar regiones que han sido capaces de cambiar su trayectoria e identificar a los agentes de cambio (empresas, gobiernos, ONGs...); investigar el potencial de modelos alternativos de desarrollo local y regional (economía circular); entender qué factores organizativos e institucionales impiden el cambio económico estructural y mantienen los territorios en situación de estancamiento, o invertir en estudios sobre la coordinación multiescalar de las políticas públicas y, en concreto, en la identificación de sistemas de monitorización de las políticas de innovación que se adecúen a las “características de los territorios y a objetivos que vayan más allá del crecimiento en el número patentes o en el gasto en I+D”.

3. Retos teóricos y metodológicos

Con objeto de superar la urgencia que suele caracterizar los debates sobre la transición a la sostenibilidad, proponemos un horizonte de, al menos, una década, priorizando un conjunto de retos a los que se deberá dar respuesta. Partiendo de una perspectiva de pensamiento sistémico, que conceptualiza las interacciones complejas y adaptativas entre los seres humanos y la naturaleza como sistemas socio-ecológicos, cabe plantear retos teóricos y

metodológicos tanto a nivel de la gobernanza, como de la planificación, gestión y diseño de políticas e instituciones.

En el medio plazo, consideramos necesario definir a una escala inferior (regional y local) los conceptos empleados para explicar el origen antropogénico del cambio global, lo que requiere tomar en consideración los contextos específicos (socioculturales, administrativos y sectoriales) y las interrelaciones entre las distintas escalas espaciales y temporales, actualizándose los últimos desarrollos teóricos y metodológicos en el campo de las ciencias de la sostenibilidad.

En relación con los retos metodológicos, cabe destacar los siguientes, con especial énfasis en su transdisciplinariedad:

- i)** desarrollo de marcos de investigación orientados a la transformación hacia la sostenibilidad socio-ecológica;
- ii)** reconocimiento de la complementariedad y la necesidad de entretener múltiples aproximaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas para una comprensión holística de los valores y las contribuciones de la naturaleza a las personas;
- iii)** incorporación de las interacciones múltiples que se dan entre la ciencia y la sociedad a lo largo de todo el proceso de investigación;
- iv)** puesta en valor y fomento de interfaces robustas ciencia-política-sociedad, que incorporen el trabajo en equipos interdisciplinarios de expertos de las Ciencias Sociales y Naturales desde las fases de diseño, así como metodologías de investigación-acción participativa y transdisciplinar y el co-diseño de sistemas de seguimiento a largo plazo, y
- v)** facilitar la familiarización de los actores sociales con las tecnologías y datos de observación de la Tierra, contribuyendo así a la toma de decisiones basadas en la evidencia.

Desafío B: Las ciencias humanas en escenarios de transición

Coordinadores

Josep Martí Pérez (IMF, CSIC)

Idoia Murga Castro (IH, CSIC)

Investigadores y Centros:

Ángel Alloza Aparicio (IH, CSIC), Ivan Armenteros Martínez (IMF, CSIC), Jon Arrizabalaga Valbuena (IMF, CSIC), M^a Luisa Ávila Navarro (EEA, CSIC), Montserrat Benítez Fernández (EEA, CSIC), Salvador Bernabéu Albert (EEHA, CSIC), Esmeralda Broullón Acuña (EEHA, CSIC), Miguel Cabañas Bravo (IH, CSIC), Luis Calvo Calvo (IMF, CSIC), José Manuel Cañas Reillo (ILCMOP), Ana María Carballeira Debasa (EEA, CSIC), Juan R. Castilla Brazales (EEA, CSIC), Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (IH, CSIC), Emilio J. Gallardo Saborido (EEHA, CSIC), Laura Giraudo (EEHA, CSIC), César González Pérez (INCIPIT, CSIC), Leoncio López-Ocón Cabrera (IH, CSIC), José Antonio López Sáez (IH, CSIC), Jesús R. Navarro García (EEHA, CSIC), Antonio M^a Orihuela Uzal (EEA, CSIC), José Pardo-Tomás (IMF, CSIC), M^a Teresa Penelas Meléndez (EEA, CSIC), Luis G. Pérez Aguilar (IAM), Irene Rincón Narros (IFS, CSIC), Roberto Rodríguez Aramayo (IFS, CSIC), Roser Salicrú i Lluch (IMF, CSIC), Delfina Serrano Ruano (IFS, CSIC), Sandra Souto Kustrin (IH, CSIC), Pablo Toribio Pérez (IFS, CSIC), M^a de los Ángeles Utrero Agudo (EEA, CSIC), Pere Verdés Pijuan (IMF, CSIC), Jaime Vindel Gamonal (IH, CSIC), Débora Zurro Hernández (IMF, CSIC)

1. Introducción

Hablar de “crisis de las humanidades” es algo habitual en algunos sectores de la sociedad y también en ciertos ámbitos académicos, queriendo con ello expresar cierta pérdida no de relevancia social, sino de confianza institucional. Esa pérdida se manifiesta en el recorte de presupuestos, en la supresión de asignaturas de tipo humanístico en el bachillerato e incluso en el cierre de facultades de humanidades.

Da la impresión de que las humanidades se minusvaloran y no se sabe muy bien la utilidad y aplicación de unas disciplinas que estudian el pasado y su producción artística, literaria o lingüística, que proponen reflexiones éticas, políticas y jurídicas, y que analizan el multiculturalismo, las religiones, la bioética o las cuestiones de género.

Es precisamente la convicción de que las humanidades son necesarias en un mundo como el actual donde sigue existiendo la discriminación, la violencia o la injusticia social, lo que lleva a formular este Desafío en términos de “humanidades en transición”. Se quiere con ello indicar la necesidad de que estas disciplinas se adecúen a los cambios de las sociedades contemporáneas para lograr el peso social que por su relevancia intrínseca deberían tener.

Somos conscientes de que el panorama es adverso para el desarrollo de las humanidades, sobre todo por su poca presencia en el CSIC (menos del 10% del

número total de investigadores) y por la escasa consideración que reciben. En ocasiones se las refiere como “ciencias humanas”, en otras sencillamente como “humanidades”, y, entre sus especialistas, hay también quienes prefieren entender su labor dentro del ámbito de las ciencias sociales.

2. Retos para las ciencias humanas en un futuro programa de investigación

Respecto a los retos de las humanidades en un mundo tan cambiante y dinámico como el actual, cabe destacar los relativos a los objetos de estudio, las herramientas conceptuales y de análisis y los valores.

Los objetos de estudio

El hecho de tener en cuenta los actuales escenarios de transición no significa tener que abandonar los ámbitos de investigación propios de esta área que tienen una larga tradición en el CSIC y que deben seguir siendo apoyados. Pero sí es preciso añadir nuevos objetos de estudio estrechamente relacionados con los problemas y temáticas de la realidad actual.

Es indudable los efectos que están teniendo los *grandes avances tecnológicos* en la generación, difusión y recepción de información en todos los campos de la investigación científica, además de sus implicaciones teóricas y metodológicas. Estos cambios resultan evidentes en la aparición de las denominadas “humanidades digitales”.

Asimismo, “la gravedad del *cambio climático* y la creciente *conciencia ecológica* constituye un nuevo objeto de estudio para las humanidades, en la medida en que puede aportar nuevos conceptos y categorías de análisis para entender el mundo de hoy, marcado por la fuerte incidencia de los seres humanos en la evolución de planeta (antropoceno) y por la profunda crisis de valores asociada a ello. Además, las humanidades pueden ayudar a promover cambios en los comportamientos individuales y colectivos, de tal forma “que se avance en los principios de la sostenibilidad y en la formulación de nuevos modelos de cultura material y de regulación de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza”.

Todo ello, sin embargo, se plantea en un *escenario de globalización económica y cultural*, pero que manifiesta sus efectos en las realidades locales (de ahí el concepto de “glocalización”). Por ello, las humanidades tienen que saber interconectar lo “global” y lo “local” si quieren ser científicamente relevantes en el mundo de hoy. Es lo que algunos autores denominan la “práctica de proximidad”, como rasgo que debe caracterizar a las ciencias humanas.

En ese contexto global y de intensificación de los intercambios económicos y sociales, cabe señalar la relevancia que adquiere el fenómeno de la *movilidad geográfica*, y dentro del mismo los *procesos migratorios*. Es un hecho que, si bien las migraciones son fenómenos consustanciales con la especie humana, las que se producen en el siglo XXI adquieren una especial visibilidad por la rapidez como se producen y por la intensidad en que se manifiesta en determinadas zonas del mundo. Ante esa realidad, las humanidades tienen el reto de reflexionar sobre cómo abordar estos fenómenos y sobre cómo debe abordarse su gestión social y política de acuerdo con los valores de la dignidad humana (ver Desafío E).

Pero “el proceso de globalización genera situaciones de *creciente desigualdad en la sociedad*, lo que hace difícil, por no decir imposible, avanzar por la senda del desarrollo humano si no se reducen tales desigualdades”. Ello se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, desde la distribución de la renta y la riqueza, a la precariedad laboral, al consumo o a la identidad de género, entre otros, y da lugar a nuevas olas de movimientos sociales que buscan re-conducir el actual modelo de desarrollo hacia un camino de mayor igualdad. Sin embargo, las humanidades tienen mucho que decir ante las desigualdades sociales y económicas asociadas a la globalización, siendo uno de sus retos contribuir a impulsar ese cambio ético y normativo.

Es necesario abordar también el tema de las *identidades colectivas*, que siempre ha sido un importante objeto de estudio de las humanidades, y que es ahora un elemento relevante de los escenarios de transición en los que deben situarse las ciencias humanas. Además de aquellas identidades que de forma más recurrente han llamado la atención de los investigadores, como las relativas al género, la etnicidad, la religión o la clase social, se suman las que, de un carácter más fluido e inestable, continuamente van surgiendo relacionadas con estilos de vida, edad, condiciones corporales... En los actuales escenarios de globalización, con sus fricciones identitarias, las ciencias humanas se sitúan ante el reto de analizar, para comprender, los procesos que configuran y re-configuran las identidades, especialmente las que emergen en las condiciones económicas, sociales y políticas del mundo contemporáneo.

La comentada fricción de identidades que se produce en las sociedades actuales, así como las desigualdades que genera el proceso de globalización, hace necesario implementar lo que los especialistas llaman *perspectivas decoloniales*. Son perspectivas dirigidas a favorecer la concienciación, empatía y entendimiento de la alteridad, es decir, de la existencia de “otras” identidades, para posibilitar nuevos modelos de relación, alternativos a las lógicas de

explotación asociadas al sistema capitalista. Tales perspectivas se convierten en un interesante nuevo objeto de estudio para las ciencias humanas.

Un rasgo que marca las estructuras sociales de hoy está relacionado con *la dinámica demográfica* (ver Desafío 1-D). Es ésta una dinámica que no tiene sólo que ver con el exponencial crecimiento de la población mundial, aunque vaya acompañada de descensos poblacionales en determinadas áreas y regiones del planeta, sino también con los cambios que se producen en términos de envejecimiento, y que genera importantes relaciones diferenciales entre los grupos de edad. Los efectos de esas dinámicas en los distintos ámbitos de la vida social y política, constituyen un nuevo escenario de estudio para que las humanidades definan sus programas futuros de investigación.

Cabe señalar también que los avances en el *campo de la biotecnología* constituyen una característica del mundo de hoy, con todo lo que lleva asociado a ello: ciborgización, robótica, inteligencia artificial, manipulación genética, nanotecnología... Este escenario tiene un impacto de tal magnitud en la población, que debe procurarse su integración gradual y progresiva atendiendo a cuestiones de ética y de equidad. Es ahí donde las ciencias humanas tienen mucho que decir, reformulando el significado de conceptos como “progreso”, y sus implicaciones sociales, económicas y políticas.

Pero quizá el gran potencial de las humanidades sea proporcionar *alternativas y nuevos modelos de interpretación* de un mundo tan complejo como el actual. En este sentido, conceptos como utopía, memoria o poética, pueden ser claves para dialogar con nuestro pasado, analizar la situación de nuestras sociedades contemporáneas y aportar soluciones que puedan mejorar nuestro futuro. Además de lo anterior, la emergencia de nuevas formas de participación ciudadana y el desarrollo de movimientos sociales son también objetos de estudio en los que las humanidades deben anclar sus programas de investigación.

El desarrollo de herramientas conceptuales y de análisis

Además de definir nuevos objetos de investigación, las ciencias humanas tienen como reto desarrollar herramientas conceptuales y de análisis que estén acordes con las necesidades que emergen de la realidad actual.

Por eso, la investigación de las humanidades en el CSIC no puede quedar al margen de las nuevas corrientes que a nivel internacional van surgiendo, sino que debe adaptarse, desde el punto de vista epistemológico, a los tiempos actuales, con visiones críticas hacia la tradición humanista y al mismo tiempo propositivas para el presente. En el núcleo de estas corrientes se halla el reconocimiento explícito

de la necesidad de reformular, replantear o incluso superar el mismo pensamiento humanista del cual han surgido las humanidades. Estas corrientes constituyen un importante reto epistemológico tanto para las ciencias humanas, como para las ciencias sociales, y también representan una posible respuesta a la denominada crisis e inherente pérdida de peso social de las humanidades.

Un reto asimismo importante para las humanidades en la actualidad es la necesidad de contrarrestar la progresiva fragmentación del conocimiento mediante enfoques inter y trans-disciplinares, tendiendo puentes con las denominadas “ciencias duras”. En el caso del CSIC, la colaboración con otras áreas científicas ajenas a las humanidades es ya una realidad en varios grupos de investigación, si bien para que esa cultura de la cooperación se extienda es necesario la dotación de recursos y el establecimiento de incentivos que facilite la implementación de proyectos conjuntos.

Los valores

Intrínseco al trabajo que se desarrolla en las ciencias humanas está el tema de los valores que forman parte de la tradición humanística, valores que deben estar presentes a la hora de implicarse los investigadores en los retos del nuevo escenario que conforman los procesos de cambio.

Hablar de valores en las humanidades no se refiere sólo a la práctica científica, algo que es común a otras disciplinas, sino también a la necesidad de que las actuaciones emprendidas desde las ciencias humanas se adecuen a los valores que predominan en el mundo de hoy, como el feminismo, el ecologismo o el reconocimiento de la diversidad. También tiene que ver con el compromiso moral de superar el individualismo en pro de actitudes más colaborativas y de incluir los valores éticos en las investigaciones científicas.

THEMATIC II: POPULATION, TERRITORY, AND FOOD

Desafío C: Desarrollo territorial en nuevos escenarios de interacción rural-urbana

Coordinators

Francisco Colom González
(IFS, CSIC)
Ana M^a López Sala
(IEGD, CSIC)

Investigadores y Centros

Javier Martínez-Vega, Tomás García Azcárate, Gloria Fernández-Mayoralas, Samir Mili, Javier Sanz, Fermina Rojo (IEGD, CSIC), Julio Navarro Palazón (EEA, CSIC), Pedro Tomé Martín (ILLA), Alberto Corsín (ILLA), Inés Sastre, Javier Sánchez-Palencia, Almudena Orejas, Manuel Lucena Giraldo (IH, CSIC), Carolina Boix (CEBAS, CSIC), Teodoro Lasanta (IPE, CSIC), Fernando Garrido (IESA, CSIC), Roberto Goycoolea (Universidad de Alcalá), and Aylin Topal (Middle East Technical University).

1. Introducción

Los profundos cambios sociales y económicos que se han producido durante las últimas décadas han reducido en las sociedades avanzadas las diferencias entre los niveles y modos de vida de los medios rural y urbano, intensificándose, además, las relaciones e intercambios económicos y sociales entre ambos.

A ello se le une el acelerado proceso de urbanización, que ha hecho que en el siglo XXI las áreas urbanas sean los espacios predominantes de asentamiento humano. En 2007, y por primera vez en la historia, la población de las áreas urbanas superó a la de las áreas rurales, y las previsiones son que en 2050 la población urbana sea ya casi el 70% de la población mundial).

La mejora de las infraestructuras viarias y de servicios y los avances tecnológicos han tenido que ver mucho en ello. Se ha producido, además, un cambio en la naturaleza de los procesos migratorios rural-urbanos, que han dejado de ser, como lo eran antaño, flujos permanentes y unidireccionales desde el campo a la ciudad, para convertirse hoy en flujos más complejos y de múltiples sentidos. Es una movilidad geográfica, pero también virtual favorecida ésta por el acceso a las nuevas tecnologías, siendo factores que contribuyen a estos cambios.

Las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático y la conservación de los recursos naturales son otro factor de cambio en las relaciones rural-urbanas. De hecho, la transversalidad de las exigencias ambientales y paisajísticas, así como el uso sostenible de los recursos naturales y las acciones de lucha contra los efectos del cambio climático, condicionan el uso del territorio y restringe el desarrollo de las actividades de tipo extractivo (la agricultura entre ellas, pero también la minería o la pesca). A ello se les une las nuevas demandas de la población urbana respecto a los espacios naturales, que hacen que los territorios ya no sean percibidos por los ciudadanos sólo como lugares de producción, sino también como lugares para la contemplación estética, el ocio o la recreación, introduciendo restricciones al uso de tales espacios con fines económico-productivos.

Otro elemento de cambio ha sido el creciente número de actividades económicas que se instalan en el medio rural procedentes en gran medida del medio urbano, y que aprovechan las ventajas comparativas que ofrecen los territorios rurales. Asimismo, cabe destacar la plena integración del medio rural en las pautas generales que rigen la vida social y económica, y que hace que el mundo rural pierda su singularidad como espacio de vida. Es ésta una integración no subordinada ni dependiente como antaño,

sino producida en el marco de una nueva síntesis rural/urbana que revaloriza los territorios rurales como espacios de bienestar.

En el marco de ese proceso de cambios se está realmente transformando el modo de afrontar el futuro de los territorios rurales y urbanos, tanto desde el ámbito de la política, como de la opinión pública. En este sentido se amplía el punto de mira sobre los territorios rurales, contemplándolos ya no como espacios singulares, sino como espacios abiertos e integrados en las dinámicas globales que acontecen en su entorno circundante (en la escala local, pero también en escalas de mayor tamaño, gracias a las posibilidades que ofrece la red de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías).

A ello habría de añadirse que el impacto de “este proceso en el desarrollo territorial, el medio ambiente y el asentamiento de la población, tiene enormes consecuencias en términos de sostenibilidad medioambiental, equilibrio territorial, producción alimentaria y gobernanza política”. De hecho, las grandes ciudades “consumen cantidades ingentes de energía, recursos naturales y alimentos, lo que, sumado a la expansión de sus áreas de influencia, está llevando a la transformación de los hábitats y a la progresiva antropización de los espacios naturales”. Todas estas dinámicas plantean una serie de nuevos escenarios de interacción rural-urbana de cara al futuro.

2. Retos para el análisis de la interacción rural-urbana

Cambios en la concepción del desarrollo rural y la actividad agraria

Como es conocido, la producción y el suministro de alimentos ha constituido históricamente el eje tradicional de la interacción entre el medio rural y el medio urbano. Sin embargo, “la apertura de los mercados mundiales y la progresiva eliminación de los sistemas de protección agrícola, sumados a toda una serie de exigencias y limitaciones a la actividad agraria, ha abierto el debate sobre el desarrollo territorial. Se plantea ahora un enfoque basado “en las dinámicas locales/regionales y en la apertura a nuevas funciones, como la mitigación de los efectos del cambio climático, la incorporación de los circuitos de ocio y la reintegración e inserción social de determinados sectores de la población”. El reto consiste, por tanto, “en concebir un ecodesarrollo colaborativo entre las zonas urbanas y rurales que ayude a generar una economía circular y sostenible adaptada a los desafíos del cambio climático”.

La gestión del paisaje como patrimonio y recurso económico

Es una realidad evidente que “el medio rural cada vez se asume menos como un lugar exclusivamente de producción y cada vez más como un elemento especialmente valioso para la calidad de vida”. La concepción del territorio como *paisaje* ha hecho que, además, se le vea como un espacio con un valor estético, de ocio y recreativo. Sin embargo, en la actualidad han dejado prácticamente de existir los paisajes naturales, al ser hoy el paisaje el resultado directo de las actividades humanas. El paisaje es “objeto de conocimiento histórico por su propio contenido y es también objeto de divulgación, gestión y protección patrimonial en su condición de recurso económico”. De ahí que “los criterios de conservación del paisaje sólo pueden tener éxito si éste se concibe como una realidad viva, activa y cambiante”. El reto aquí es “desarrollar armónicamente las investigaciones sobre el paisaje de manera que se coaliguen con un turismo sostenible y con todos los sectores productivos que inciden en el desarrollo del medio rural”.

Despoblamiento rural y flujos migratorios

Es comúnmente aceptado que el criterio principal para garantizar la sostenibilidad demográfica del territorio es “su adecuada gestión y ordenación, de manera que la jerarquización territorial no suponga exclusión social”. En este sentido cabe señalar que “la despoblación es un fenómeno complejo y con múltiples causas”, si bien, más recientemente, “ha estado vinculada sobre todo a la concentración de inversiones, servicios y oportunidades de empleo en las áreas urbanas y metropolitanas, en contraposición al medio rural”. Así, consideramos que “la retención de población y la generación de riqueza en el medio rural se verá dificultada mientras no se valore su trabajo y no se pueda vivir dignamente del mismo, lo que implica abrirlo a nuevos sectores e iniciativas económicas”. El reto sería, por tanto, “gestionar el desarrollo territorial de manera que se eviten desequilibrios, dualidades y rupturas de la cohesión socio-espacial”. Creemos que el modo de afrontar este problema debe consistir “en una gestión del medio rural más centrada en la promoción de su funcionalidad (agraria, ganadera, cultural)”, que no en intentos de repoblar núcleos fuertemente envejecidos que han perdido su antigua función, salvo que esa repoblación vaya acompañada de una redefinición de las funciones de dichos territorios.

Envejecimiento y calidad del entorno vital

Si bien las áreas rurales tienen en España una estructura demográfica envejecida, la población de mayor edad, al igual que la población en su conjunto, también se concentra en las áreas urbanas. La calidad del entorno habitacional es de

extremada relevancia para los mayores, pues se considera que el espacio físico de vida en este grupo de edad constituye un espacio de uso prevalente. Por eso, cabe afirmar que “el entorno habitacional no sólo constituye el espacio de vida actual, y en muchos casos pasada, sino el lugar donde suceden buena parte de las relaciones sociales y las dinámicas de integración comunitaria”. La amigabilidad del espacio es lo que permite que “la población mayor pueda permanecer en su entorno habitual de residencia el mayor tiempo posible, pero esto sólo es factible si se diseñan y ejecutan los proyectos pertinentes para hacer del espacio residencial, ya sea éste urbano o rural, un lugar habitable”. La idea del “envejecimiento saludable” está, por tanto, ligada a la de la habitabilidad y la amigabilidad del entorno. El reto consiste, por tanto, en “integrar el envejecimiento saludable en una concepción social del desarrollo sostenible”, para lo cual es preciso “modificar las perspectivas vitales en la vejez y abordar los determinantes ambientales y sociales del proceso de envejecimiento” (ver Desafío D).

Expansión urbana y movilidad sostenible

Los problemas a los que se enfrentan las ciudades en general poseen una serie de rasgos comunes: congestión, contaminación, concentración de población y actividades... Estos fenómenos “están ligados a desajustes demográficos intraurbanos provocados por la expulsión de población de los centros de las ciudades, la degradación de los centros urbanos no gentrificados, las desigualdades en el acceso a los servicios y los medios de transporte y el crecimiento a gran escala de las metrópolis sobre las zonas periurbanas”. Todo ello impacta también sobre las áreas rurales y, cada vez más, sobre el despoblamiento de las ciudades intermedias. Además, este modo de ocupación del territorio incide en la calidad del paisaje y en la degradación ambiental del territorio. En este sentido, cabe afirmar que “la supervivencia del medio rural es cada vez más dependiente de unos medios de transporte eficaces que enlacen a su población con los centros de trabajo y de servicios”. Por ello, el reto consiste en “desarrollar nuevos servicios de movilidad sostenible en el ámbito de una economía circular de reutilización y reciclado de los materiales”.

Segregación espacial y habitabilidad del entorno urbano

Es un hecho que “en las ciudades coexisten de forma territorialmente jerarquizada zonas depauperadas y áreas opulentas, barrios receptores de flujos migratorios internacionales y viejos centros urbanos sometidos a procesos de *gentrificación*”. A ello habría que añadir la creciente *financiarización* del espacio urbano, es decir la transformación de los bienes raíces en bienes financieros dirigidos a su rentabilización en los mercados internacionales, un proceso que está íntimamente

vinculado a los de “verticalización, densificación, crecimiento urbano descontrolado y formación de burbujas inmobiliarias, con su consiguiente repercusión sobre las políticas públicas y los sectores sociales más vulnerables”. Por eso, junto al desafío de generar espacios habitables y sanos en las ciudades, existe el problema bastante generalizado de la creciente falta de empatía de los ciudadanos con los lugares que habitan. “La globalización de la cultura, el turismo, las franquicias, un urbanismo funcional y especulativo, la desaparición del comercio local, entre otros factores, están creando ciudades en las que los vecinos no se sienten identificados con su entorno ni motivados para su mejora”. De ahí que el reto sea “la creación de ciudades sostenibles e inclusivas mediante la generación de espacios urbanos sanos y habitables”, que, en la medida de lo posible contribuyan, además, a la desaceleración del cambio climático.

Procesos de conurbación y gobernanza territorial

Como es bien sabido, muchas de las ideas que manejamos sobre el gobierno político de los grupos humanos están históricamente asociadas a las ciudades. No obstante, con el avance de los procesos de conurbación ese marco conceptual se ha visto desbordado. Pese al enfoque eminentemente tecnocrático con que se ha abordado la implementación de mesogobiernos territoriales, es “evidente que cualquier decisión que afecte a las estructuras jurisdiccionales de un país terminará implicando a los actores políticos, a los órganos municipales mancomunados y a la opinión pública”. A ello habría que añadir que “la formación de las áreas metropolitanas no siempre ha estado acompañada del correspondiente marco institucional”. Esto ha dado lugar a que la fragmentación político-administrativa impida a este tipo de áreas metropolitanas dotarse de medios adecuados y desarrollar políticas efectivas para enfrentarse a problemas caracterizados por la interdependencia de sus causas y el desbordamiento de los marcos territoriales en los que se originan. Por eso, el gobierno de estas áreas no puede consistir “en un traslado sin más de los modelos de gobernanza municipal a una escala superior”. El reto consiste, por tanto, en “la creación de formas de gobierno supralocal por encima de la tradicional división rural/urbana, que amortigüen las diferencias territoriales y equilibren política y administrativamente los distintos intereses en juego” (ver Desafío I).

Desafío D: Retos demográficos en un escenario social de longevidad y envejecimiento

Coordinadoras

Teresa Castro Martín
(IEGD, CSIC)

Gloria Fernández-Mayoralas
(IEGD, CSIC)

Investigadores y Centros

Antonio Abellán García (IEGD, CSIC), M^a Ángeles Durán de las Heras (IEGD, CSIC), Ana López Sala (IEGD, CSIC), Silvia Marcu (IEGD, CSIC), Teresa Martín García (IEGD, CSIC), Julio Pérez Díaz (IEGD, CSIC), María Dolores Puga González (IEGD, CSIC), Diego Ramiro Fariñas (IEGD, CSIC), Vicente Rodríguez Rodríguez (IEGD, CSIC), Fermina Rojo Pérez (IEGD, CSIC), Javier Sanz Cañada (IEGD, CSIC), Vincenzo Pavone (IPP, CSIC), Francisco Colom González (IFS, CSIC), Mario Toboso Martín (IFS, CSIC), Juan Carlos Velasco Arroyo (IFS, CSIC), Rafael Huertas García-Alejo (IH, CSIC), Fernando Garrido Fernández (IESA, CSIC), Belén Peral Fuentes (IIBM, CSIC-UAM), M. João Forjaz (ISCIII), Carmen Rodríguez Blázquez (ISCIII), Rocío Fernández-Ballesteros (UAM), Diego Sánchez González (UNED), M^a Eugenia Prieto Flores (Universidad Nacional de La Pampa, CONICET), Verónica Montes de Oca Zavala (Universidad Autónoma de México)

1. Introducción

Comenzamos el análisis de este Desafío afirmando que “la demografía ocupa en la actualidad un lugar central en la agenda política” tanto a escala internacional, con la existencia en la Comisión Europea de una Vicepresidencia para Democracia y Demografía, como nacional, con la creación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

También en los medios de comunicación y en el debate social se le presta cada vez mayor atención a la influencia de los temas demográficos en la economía, el mercado laboral, la vivienda, la sanidad, las pensiones, el medio ambiente, la equidad intergeneracional y de género...

Consideramos que los escenarios demográficos del futuro próximo “suponen múltiples desafíos sociales, pero también un sinnúmero de oportunidades”, y cabe poner varios ejemplos. Uno es el relacionado con el envejecimiento de la población, que lo vemos, en efecto, como un problema importante en todo lo relativo al gasto en pensiones, salud y dependencia, así como a la organización de los cuidados formales e informales. Pero también lo consideramos como una oportunidad para lo que se denomina la *economía plateada* y el desarrollo de “comunidades y entornos residenciales sostenibles e inclusivos que podrían contribuir a frenar las tendencias despobladoras” en algunos territorios rurales.

Por eso, señalamos que, como sociedad, debemos cambiar el paradigma edadista “vejez igual a carga” y sustituirlo por la promoción del “envejecimiento activo y saludable”. Consideramos, además, que este cambio redundará en una reducción de costes, una mejor gestión de los servicios públicos y, en definitiva,

una mejora de la calidad de vida a todas las edades y sin poner en riesgo la solidaridad intergeneracional.

Otro ejemplo es el relativo al importante problema del descenso de la fecundidad. Consideramos, en efecto, que es un problema social porque acelera el ritmo de envejecimiento poblacional, pero también un problema individual (o de pareja) porque refleja una brecha creciente entre aspiraciones y realidades reproductivas. Señalamos, además, que este problema está asociado en gran medida al hecho de que “la revolución social de la igualdad de género esté todavía incompleta”, por lo que consideramos que, desde el ámbito de las políticas públicas, se debe facilitar a las madres trabajar y a los padres el cuidado de los hijos, ya que eso podría tener “un efecto positivo no sólo en la tasa de fecundidad y en el nivel de estabilidad demográfica, sino también en la economía y en el avance hacia la igualdad de género”.

Asimismo, afirmamos que “la perspectiva demográfica puede contribuir al análisis y comprensión de situaciones de emergencia en el ámbito de la salud pública”. Puede ponerse como ejemplo el caso de la pandemia COVID-19, que, en nuestra opinión, ha puesto de manifiesto la importancia de las estructuras y dinámicas demográficas para comprender y modelizar el curso de dicha pandemia (el volumen de población mayor y su distribución espacial, la estructura de los hogares, las condiciones de vivienda, el perfil de la población mayor institucionalizada en residencias, el grado de interacción intergeneracional o la densidad de población). Consideramos, además, el reto que supone para los estudios demográficos analizar las consecuencias de la citada pandemia en los próximos años.

2. Tendencias demográficas

Las actuales tendencias demográficas (relativamente graduales y predecibles) conllevan una serie de importantes desafíos para las políticas públicas, por lo que es necesario tenerlas muy en cuenta a la hora de formularlas con objeto de impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo.

Cabe distinguir siete grandes tendencias, que pueden verse como otros tantos retos: i) el envejecimiento de la población y la calidad de vida de las personas mayores; ii) la posible persistencia de una fecundidad por debajo de las aspiraciones reproductivas de las personas; iii) las repercusiones de la creciente diversificación familiar en el bienestar infantil y las redes de cuidados; iv) la salud a lo largo de todo el curso de vida; v) el creciente volumen, complejidad y diversidad de los flujos migratorios; vi) el despoblamiento rural, y vii) el acceso y gestión metodológica de nuevos datos. (Un amplio desarrollo de estos siete

grandes retos puede verse en el Documento completo que se adjunta como Anexo D a este Informe)

Ante las actuales tendencias demográficas, cabe afirmar que “la demografía y las ciencias de la población proporcionan los instrumentos teóricos y metodológicos idóneos para abordarlas, tanto desde una perspectiva macro (causas y consecuencias del cambio de tamaño, estructura y composición de la población) como micro (interrelación entre las biografías individuales y familiares, laborales o de salud, pasadas, presentes y futuras)”. Asimismo, consideramos necesario abordar dichos retos demográficos desde una perspectiva internacional (ya que “suelen ser cambios globales con distintos ritmos a escala local”) y siempre con una mirada a futuro (pues “las proyecciones de tendencias son un componente esencial de estas disciplinas”).

En todo ello es indudable la ayuda que “proporcionan los avances tecnológicos a los estudios de población, tanto en la tipología de las fuentes de datos disponibles para la investigación, como en los medios para almacenarlos, analizarlos estadísticamente, representarlos gráfica y cartográficamente, transmitirlos y darles difusión”. Cabe recordar que, en apenas unas décadas, la revolución informática y de la comunicación “ha disparado la capacidad de análisis, ha hecho posible nuevas estrategias de los sistemas estadísticos nacionales”, y ha generado un nuevo universo de datos, masivo y de gran heterogeneidad, como es el *big data*.

En nuestra opinión, “los mencionados motores de cambio, tan poderosos y de tan rápida irrupción, obligan a la investigación demográfica a plantearse algunas grandes modificaciones en su plan de trabajo”, al menos en las siguientes direcciones: i) actualizar los temas objeto de investigación, prestando más atención a pautas y tendencias emergentes; ii) expandir el diálogo y colaboración con múltiples disciplinas; iii) proponer marcos explicativos nuevos que den cuenta del cambio demográfico, sus causas y sus consecuencias; iv) aprovechar la innovación tecnológica contemporánea en todas sus facetas (análisis estadísticos avanzados, visualización de datos, enlace longitudinal de múltiples fuentes de datos, Big Data y nuevas infraestructuras); v) asumir un renovado compromiso ético y social ante una materia, como es el estudio de las poblaciones, que es muy sensible desde el punto de vista social e insoslayable para la acción de gobierno y la planificación, y vi) incorporar a las propias personas como sujetos proveedores, pero también receptores, de la información y las evidencias científicas (transferencia social del conocimiento).

Desafío E: Migraciones internacionales en un contexto de cambio global

Coordinadores

Juan Carlos Velasco Arroyo
(IFS, CSIC)

Amparo González Ferrer
(IEGD, CSIC)

Investigadores y Centros

Antonio Campillo (UMA), MariaCaterina La Barbera (UNNE),
Sebastian Rinken (IESA, CSIC), José Antonio Zamora (IFS, CSIC),
Héctor Cebolla-Boado (UNED), Gemma Pinyol-Jiménez (UPF),
Silvia Marcu (IEGD, CSIC), Francisco Fernández-Jardón (IFS, CSIC).

Participantes encuesta

Lidia Farré (IAE, CSIC), Ana López Sala (IEGD, CSIC), Margarita del Olmo (ILLA), Francisco Javier Moreno Fuentes (IPP, CSIC), Francisco Colom (IFS, CSIC), Astrid Wagner (IFS, CSIC), Antolín Sánchez Cuervo (IFS, CSIC), Marta Irurozqui (IH, CSIC), Chelo Naranjo (IH, CSIC), Lola Elizalde (IH, CSIC), Miguel Cabaña (IH, CSIC), Idoia Murga (IH, CSIC), Thierry Desrues (IESA, CSIC).

1. Introducción

Pese a la intensidad de los procesos de globalización en las últimas tres décadas y a la creciente integración de países y economías, “las migraciones internacionales se mantienen en unas magnitudes relativamente moderadas”.

Comparativamente con lo ocurrido hace algo más de un siglo, las migraciones de entonces fueron, en proporción a la población de la época, casi el doble que las actuales. No obstante, “en las últimas décadas se ha registrado una cierta inversión de la trayectoria y, consiguientemente, una cierta concentración de los flujos migratorios (incluyendo los protagonizados por los refugiados que huyen de zonas de conflicto) hacia los países desarrollados”. De hecho, los migrantes internacionales se han incrementado en un 50% (casi 100 millones de personas en términos absolutos), existiendo una diferencia notable ahora, y es que, “si durante la primera globalización (1865-1910), Europa era el continente de procedencia de la mayoría de los emigrantes, ahora es la primera región de destino”.

En este sentido, cabe señalar que las corrientes migratorias mundiales contemporáneas difícilmente se pueden desvincular “de las grandes disparidades entre el *sur global* y el *norte global*, tomados estos términos no en el sentido de referencias geográficas, sino de configuraciones político-sociales que cristalizan en formidables brechas en materia de prosperidad económica, condiciones sociales, derechos humanos, salud y seguridad”. Son disparidades conectadas también con la asincronía en la transición demográfica que se registra en las distintas regiones del planeta: baja natalidad, mayor esperanza de vida y envejecimiento creciente en el norte global; natalidad media-alta, menor esperanza de vida y poblaciones muy jóvenes en el sur global.

2. Dinámicas transversales asociadas a los procesos migratorios

Conflictos bélicos y refugiados

Es una dinámica que irá en aumento y que ya está desestabilizando los modelos migratorios basados en la distinción entre “migrantes económicos”, por un lado, y “desplazados por la violencia bélica o política”, por otro. Supone una clara reconfiguración del régimen migratorio y de refugio de evidentes consecuencias políticas. Es un escenario en el que resulta difícil separar de manera nítida entre quién es migrante por razones económicas y quién es merecedor de un estatuto de refugiado o de otra forma de protección internacional. Ello obliga a los gobiernos de los Estados a interconectar la naturaleza cada vez más mixta de los flujos migratorios con las políticas de admisión y los derechos humanos. Por eso, sería necesario establecer “canales separados de acceso que respondan a la creciente diversidad de los flujos migratorios (...) asegurando una migración legal, ordenada y segura”.

Movilidad humana y adaptación al cambio climático

Las catástrofes naturales asociadas al cambio climático son ya una de las principales causas de los flujos migratorios, y constituye, por ello, uno de los nuevos rasgos que caracterizan a las migraciones contemporáneas. Su combinación con los factores tradicionales de las migraciones (desigualdades económicas, conflictos bélicos, diferenciales demográficos...) da lugar a una diversificación de los circuitos de desplazamiento. No obstante, si bien la ONU, en su Comité de Derechos Humanos, ha abierto el debate sobre este asunto, la realidad es que aún no está plenamente reconocido el derecho de asilo provocado por el cambio climático, no existiendo consenso sobre la magnitud de la relación causa-efecto entre ambos fenómenos. Esto permite señalar que estas cuestiones serán “un ámbito de investigación creciente en los próximos años”.

Transformación, diversificación y feminización de los flujos migratorios

Es un hecho la diversificación del perfil de las personas implicadas en los procesos migratorios internacionales, ya sea por origen, por nivel de cualificación o por género. De ahí que sean necesarias nuevas herramientas de análisis para conocer más y mejor la composición y naturaleza de los flujos migratorios. Asimismo, la presencia cada vez mayor de las mujeres es uno de los rasgos destacados de los actuales procesos migratorios. Esta feminización se está dando no sólo en el área de los cuidados (donde se produce una fuerte precarización laboral), sino también en áreas cualificadas del mercado laboral (cuyas dinámicas familiares y de integración diferencial se desconocen). Es necesario, por tanto, “integrar de forma definitiva la dimensión de género como

una estructura social básica inductora de vulnerabilidades entrecruzadas dentro y a través de las fronteras nacionales”. Por ello, cabe proponer que se analicen los procesos migratorios internacionales complementando la perspectiva de “género” con la perspectiva de la “interseccionalidad”.

Crisis del régimen migratorio “neoliberal”

Es un hecho que la crisis del modelo liberal de regulación de la economía está afectando al régimen migratorio asociado a ese modelo, hasta el punto que la lógica de los derechos se supedita a la lógica económica. Ello puede comprobarse analizando las reformas legislativas en política migratoria emprendidas por los Estados europeos, cuyo objetivo es dificultar la entrada y asentamiento de la población inmigrante en sus respectivos territorios. Por eso, cabe proponer dos líneas de intervención complementarias: i) diseñar una política migratoria que combine procedimientos de regularización en origen con sistemas *ex-post*, y ii) desarrollar instrumentos para blindar los derechos civiles, políticos, sociales y laborales de los migrantes.

Percepción sesgada y politización del fenómeno migratorio

Es una realidad que se producen giros importantes en la percepción que tiene la población autóctona sobre el tema de la inmigración. Ello está llevando incluso a una contracción de los derechos universales y a una fuerte instrumentalización política del tema migratorio, siendo caldo de cultivo para la emergencia de contextos de autoritarismo. De ahí que el discurso político dominante sobre el tema de la inmigración esté siendo un discurso de “control”, basado en la percepción de que los migrantes son una amenaza para la seguridad e identidad nacionales. Es urgente revertir dicho discurso, para lo cual será preciso “una enorme inversión en pedagogía, comunicación y divulgación para reconducir las percepciones negativas”. También las ciencias humanas y sociales deben enfrentarse “al desafío de elaborar nuevas conceptualizaciones para abordar la situación de las personas migrantes y desarrollar categorías teóricas y jurídicas capaces de proteger y garantizar el ‘derecho a tener derechos’ de todo ser humano, con independencia de su nacionalidad y/o lugar de nacimiento”.

El reto de la incorporación de la diversidad en las sociedades receptoras

La creciente diversidad de los procesos migratorios y la intensificación de la movilidad, han hecho que se cuestione la relevancia de temas como la integración legal y sociocultural de la población migrante. Asimismo, han hecho que se redefina la identidad en términos más flexibles con objeto de atender a las experiencias vividas de pertenencia múltiple de los migrantes. Todo eso dificulta la

elaboración de una “teoría general sobre la integración (o incorporación) como se pretendía en el pasado (...)” dando lugar a nociones como las de “asimilación segmentada” o “inclusión adversa”, que son útiles para referirse a la diversidad y dificultad que “reflejan las trayectorias de inclusión de los migrantes y sus descendientes en las sociedades receptoras”. Por todo ello, es necesario complementar los estudios sobre las dimensiones materiales de la integración, con otros que se centren en aspectos tales como el bienestar psicológico, la salud o la participación social y política de los migrantes.

El impacto de las migraciones en los países receptores

Está demostrado que los efectos agregados de las migraciones sobre el empleo y los salarios de la población de los países receptores son muy pequeños, y que, en general, tienen un efecto positivo en la economía de estos países. Sin embargo, también se reconoce la existencia de impactos negativos en ciertos sectores o colectivos. De ahí que deba abrirse un debate sobre la competencia entre migrantes y población autóctona de bajos ingresos respecto al acceso a servicios y ayudas públicas y su “merecimiento” para ser beneficiarios. Cabe afirmar, además, que todo ello acontece en el marco de la creciente preocupación por el envejecimiento de la población en los países más desarrollados y del debate sobre el papel mitigador que puede desempeñar en ello la presencia de inmigrantes en estos países. Por eso, es necesario comprender mejor “los efectos económicos y demográficos de los flujos migratorios (...), sobre la sostenibilidad y características del Estado del Bienestar y sobre la configuración y cambio de las opiniones que los ciudadanos de las sociedades receptoras tienen hacia la inmigración”.

El impacto de las migraciones en los países de origen

Dado que la mayor parte de los estudios sobre el fenómeno migratorio se ha centrado casi exclusivamente en su impacto en los países receptores, se tiene poca información sobre los efectos de la migración en los países de origen. Salvo los estudios económicos sobre el impacto de las remesas, se sabe muy poco sobre sus efectos en el crecimiento y estructura social de los países de donde proceden los migrantes. Por eso, debe centrarse el esfuerzo en estudiar las dinámicas de salida y comprender mejor los movimientos de retorno y circulación. En concreto, es necesario “descomponer el binomio desarrollo-migración (...)”, ampliando la perspectiva de análisis para incluir temas relativos a “los cambios experimentados en los modos de vida, formas de pensar, de estar y de relacionarse con el mundo” de la población migrante.

Globalización fronterizada y proliferación de muros

Partiendo de la visión cada vez más extendida de las “fronteras” como dispositivos de obstrucción de los intercambios y no de regulación del tránsito, debe plantearse el debate sobre la “legitimidad de los Estados para cerrar y abrir las fronteras”. Además de modificarse las formas de concebir y gobernar las fronteras, “se han transformado también los patrones migratorios tradicionales (...) provocando desplazamientos de las rutas de llegada a las fronteras”, con el consiguiente aumento de los riesgos que tienen que asumir los migrantes. Asimismo, la “externalización de las fronteras” ha contribuido a que la gestión de la migración no sea vista “como una cuestión sociodemográfica, sino como un tema de seguridad global (...)”. Todo ello hace que los Estados más prósperos se vean en la “difícil coyuntura de tener que decidir (...) entre ayudar de manera significativa al desarrollo de amplias regiones pauperizadas del planeta o abrir las fronteras a un volumen mayor que el actual”.

Gobernanza global de las migraciones

Es un hecho evidente que el tema de las migraciones internacionales no puede gestionarse de forma duradera a escala nacional, ni siquiera de manera agrupada, como sucede en el seno de la Unión Europea. Esta realidad hace que este tema se vea agravado por la ausencia de una gobernanza global de los procesos migratorios internacionales”, dando lugar a un escenario “bastante anómico”. Por eso, cabe sugerir como única salida el “establecimiento de un régimen migratorio global con un sólido soporte institucional y normativo”. En este sentido, pueden valorarse como un rayo de luz el “Pacto mundial para los refugiados” y el “Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular”, impulsados en 2018 desde Naciones Unidas, pactos que están llamados a ser un importante punto de referencia normativo sobre este asunto, actuando como alternativa a las actuales políticas desarrolladas por los Estados.

Desafío F: Alimentación segura y saludable en sistemas alimentarios sostenibles

Coordinadores

María Dolores del Castillo
Bilbao (CIAL, CSIC-UAM)
Oscar Martínez Álvarez
(ICTAN, CSIC)

Investigadores y Centros

Daniel Ramón Vidal (Archer Daniels Midland Co.), M^a Victoria Moreno-Arribas (CIAL, CSIC-UAM), M^a Begoña Bartolomé Sualdea (CIAL, CSIC-UAM), Raquel Abalo Delgado (URJC), Amaia Iriondo De Hond (CIAL, CSIC-UAM), Tomás García Azcárate (IEGD, CSIC), Cristina de Lorenzo Carretero (DG for Research, Teaching and Documentation, Department of Health, Community of Madrid), Daniel Martínez Maqueda (CIG-CM, IMIDRA), Tiziana Fornari Reali (CIAL, CSIC-UAM), José María Lagarón Cabello (IATA, CSIC-UGR), Sergio Torres-Giner (IATA, CSIC-UGR), Micaela Carvajal Alcaraz (CEBAS, CSIC), Eduardo Moyano Estrada (IESA, CSIC), Belén Peral Fuentes (IIBM, CSIC-UAM), Cecilia Díaz Méndez (Departamento de Sociología, Universidad de Oviedo)

1. Introducción

La “nutrición personalizada” es el elemento clave para lograr una alimentación saludable, entendida ésta como la que asegura un grado de salud sostenible previniendo el riesgo de enfermedades. Se trata de una nueva forma de definir lo que comemos de manera mucho más racional, considerando los genes de nuestro genoma, los microorganismos que viven en nuestro cuerpo (microbioma) y el impacto que tienen los alimentos en la salud general de los individuos (física, mental, emocional...), considerando también nuestro acervo cultural, social y gastronómico. En este sentido, apoyamos la viabilidad de una alimentación personalizada gracias al avance que se ha producido en el área de la genómica, un avance que permite aportar información esencial sobre los genes de los consumidores, los diferentes ecosistemas microbianos que alberga el cuerpo humano (microbiota) y los alimentos que ingerimos.

Una “alimentación saludable” implica necesariamente el mantenimiento de una microbiota sana y diversa en el organismo humano, teniendo en cuenta la individualidad genética del propio organismo y su hábitat de vida, así como la salud del eje cerebro-intestino. La microbiota del tracto gastrointestinal (GI) también es un componente esencial de este eje. El intestino participa en los sistemas endocrino, inmunológico y nervioso. La salud GI determina el soporte nutricional y el estado de salud general del individuo (físico, mental y emocional). Los trastornos del eje cerebro-intestino afectan a la calidad de vida, a la función social, a la productividad laboral y a la resiliencia frente a situaciones de crisis tanto sanitarias como sociales (como la COVID-19), y representan una gran carga para los sistemas de salud pública.

En general, para mantener una microbiota intestinal y el eje cerebro-intestino sanos, se recomienda la dieta mediterránea, así como la ingesta diaria de alimentos de bajo índice glucémico (cereales de grano entero), ricos en proteínas de elevada calidad nutricional (legumbres, insectos, algas...), de probióticos, de fibra dietética principalmente soluble de fuentes naturales (subproductos de la industria alimentaria...), de vitaminas (C, D), de minerales omega-3 y de fitoquímicos (melatonina, cafeína, cannabidiol...). A esto habría que añadir un estilo de vida activo y saludable, así como la utilización de procesos culinarios adecuados para preservar los nutrientes y los compuestos bioactivos de los alimentos.

Como aspectos críticos para alcanzar una alimentación saludable cabe identificar el medio ambiente, el envejecimiento de la población y la cohesión económico y social. Por otra parte, se pone de manifiesto la relevancia que ha cobrado la perspectiva holística, una perspectiva que parte de reconocer la influencia socioeconómica y medioambiental de los procesos productivos ligados a la tierra, pasa por el diseño y creación personalizados de ingredientes y alimentos, e integra en todo ello la calidad nutricional, sensorial y gastronómica del resultado. En este sentido, se recomienda como marco ético para el desarrollo de una alimentación segura y saludable las 5S: salubridad, seguridad, sensorialidad, sostenibilidad y solidaridad. Para lograr este reto, se presentan como estrategias la denominada tecnología “blockchain”, la innovación tecnológica en el sector alimentario, la implicación de los consumidores como co-creadores, la “economía circular” y la reducción de la “huella de carbono” de los alimentos.

En este escenario, las ciencias sociales utilizan conceptos tales como el de la “soberanía alimentaria” (el derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos) y el de la “ciudadanía alimentaria” (el derecho de los ciudadanos a una alimentación sana y de calidad y el deber de realizar un consumo responsable de alimentos, informándose de lo que consumen y valorando los efectos que ello tiene en las generaciones futuras, en otras poblaciones y en el medio ambiente). En ese mismo escenario se plantea también el concepto de “alimentación consciente”, definido como la capacidad de los individuos para tomar conciencia de las sensaciones físicas y emocionales en relación al proceso de comer, siendo además la base de una estrategia imprescindible para la alimentación saludable de la población.

No obstante, en este Desafío entendemos que aún no se ha alcanzado ese ideal alimentario, quizá, entre otras razones, por la complejidad de las estructuras de gobernanza en que se articula el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos, siempre sometido a tensiones y conflictos que impiden consensuar acciones en pro de alcanzar el objetivo de una alimentación saludable, segura y sostenible. Por ello, se plantean una serie de retos futuros, con el propósito de ir avanzando hacia ese objetivo.

2. Retos y escenarios de futuro

Empleo racional e inteligente del conocimiento genómico en la agroalimentación

En aras de lograr una alimentación suficiente, al alcance de todos y personalizada, cabe plantear la necesidad de explotar todos los tipos de agricultura existentes (convencional, ecológica, de precisión y genómica), destacando el interés y potencial de la aplicación de la genómica en la mejora de la materia prima agroalimentaria. No obstante, es preciso resolver el problema que se plantea en torno a la utilización de cultivos transgénicos, dado el recelo que ello despierta en una parte de la sociedad y la obsolescencia de la actual legislación europea.

Desarrollo de ingredientes/alimentos/dietas/hábitos efectivos para una microbiota saludable

Es necesario avanzar en el conocimiento de la microbiota y su interacción con los componentes de los alimentos, con el fin último de reducir el riesgo de enfermedad en los individuos sanos, y emplearla como estrategia terapéutica en poblaciones afectadas por patologías concretas. Para ello, se considera fundamental lo siguiente: i) crear nuevas estructuras integradas/plataformas con instrumentos/infraestructuras menos invasivos y más rápidos que consigan mantener la investigación en primera línea, a la vez que diseñar una analítica de uso cotidiano del microbioma y su variabilidad interindividual; ii) crear protocolos de actuación en el ámbito de la asistencia primaria, que permitan detectar estados de disbiosis en la microbiota para actuar en sus fases más tempranas; iii) desarrollar aplicaciones bioinformáticas para realizar meta-análisis de los datos (big data); iv) integrar la información obtenida en plataformas con datos genéticos para almacenar, organizar y hacer accesible la información a todos los sectores interesados; v) desarrollar modelos de predicción, y vi) construir un nuevo modelo de nutrición de precisión, basado en la evidencia científica y en la tecnología.

Formulación/identificación de alimentos para la salud de los ciudadanos

Debido a la heterogeneidad de la patogénesis de los trastornos del eje cerebro-intestino, que afectan la salud de los consumidores, es difícil diseñar regímenes alimentarios y/o terapias farmacológicas que beneficien a todos los individuos. Para alcanzar este objetivo, sería necesario obtener información relevante del impacto del proceso de digestión (biótico y abiótico) en la biodisponibilidad de nutrientes y compuestos bioactivos y sus efectos en la salud física, mental y emocional de los individuos. Asimismo, sería preciso extrapolar el conocimiento de los mecanismos de acción de los fármacos al área de la ciencia de los alimentos con vista a identificar moléculas de interés para el mantenimiento óptimo de la salud del eje cerebro-intestino. Consecuentemente, estas actuaciones contribuirían a lograr una población con salud sostenible y a reducir los gastos de salud pública. Para alcanzar este objetivo se requiere una interacción multidisciplinar y la innovación en materia de metodologías para obtener información de precisión sobre los órganos implicados en el eje cerebro-intestino.

Investigaciones para evitar la brecha social y alimentaria en tiempos de crisis

Es un hecho que, a corto y medio plazo, nuestra sociedad va a vivir crisis sanitarias y económicas recurrentes. Por ello, existe el riesgo de que la brecha social y alimentaria aumente entre, de un lado, consumidores con disposición y capacidad adquisitiva para apostar por el consumo de productos de calidad certificada, y de otro, consumidores sin esa capacidad ni actitudes. Por eso, el poder público debe apoyar las investigaciones que analicen los hábitos alimenticios de la población, distinguiendo tres grandes áreas de estudio: medioambiente, cambio demográfico (envejecimiento) y cohesión social. Tales investigaciones deben focalizarse en siete tipos de cuestiones: productos más sanos; vuelta de los ingredientes; cambios a nivel local, y también global; cambios de la cartografía mundial del consumo de carnes; aumento del consumo de proteínas vegetales; una dieta más variada (con más frutas y hortalizas), y auge de los productos “funcionales y o nutraceuticos”.

Argumentación frente a la neofobia alimentaria

Los llamados “alimentos creativos” son complementarios de los productos frescos y/o poco procesados, pero no pueden ni deben ser sustitutivos de éstos en la dieta alimentaria si se quiere alcanzar una alimentación saludable. No obstante, los alimentos creativos son de gran utilidad para atender a colectivos con necesidades nutricionales, vitales y cognitivas especiales (ancianos frágiles, pacientes oncológicos, alergias, intolerancias alimentarias, deterioro

cognitivo-sensorial, enfermedades neuro-degenerativas...) Asimismo, estos alimentos creativos facilitan el consumo de ingredientes con valores nutricionales irrenunciables, pero que presentan graves problemas de aceptación cultural, producción, sostenibilidad o acceso (como puede ser el caso del consumo de proteína de insectos). Por tanto, como escenario futuro cabe plantear como una tarea importante en materia de alimentación creativa trabajar por una sólida argumentación frente a la neofobia alimentaria.

El consumidor como pieza clave en la producción de alimentos

En la actualidad, la selección de los alimentos por los consumidores responde a motivaciones de salud, conveniencia, experiencia y sostenibilidad. Existe la tendencia a una mayor exigencia a las empresas para que promuevan una producción más cuidadosa y sostenible. Por ello, y en línea con el concepto ya mencionado de “ciudadanía alimentaria”, cabría identificar al consumidor como un componente activo (no pasivo) de la cadena de producción alimentaria, con un rol fundamental para lograr una alimentación saludable en un mundo global sostenible. El consumidor como sujeto activo de derechos y deberes en materia de alimentación es un factor clave para contribuir a orientar los objetivos y la innovación del sistema alimentario.

La “economía circular” como estrategia para lograr una industria alimentaria sostenible

El reciclado de los plásticos se plantea como un reto para los tecnólogos y científicos, dentro del objetivo más amplio de valorizar los subproductos y de reducir la generación de residuos. Asimismo, se propone el desarrollo de materiales y envasado a partir de la biomasa (bioeconomía circular). Como nuevas líneas emergentes en este campo de investigación se contempla el desarrollo funcional de polímeros naturales, como el almidón, la celulosa y otros polisacáridos, las proteínas, los lípidos y de forma más importante los poli(hidroxialcanoatos) (PHAs) de origen microbiano, en combinación con los nuevos procesos basados en la nanotecnología. Se propone trabajar para obtener nuevos materiales de envase, que se procesarían mediante rutas tradicionales o emergentes, basadas, por ejemplo, en la nanotecnología para hacer envases de un solo uso, cerrando así el ciclo de la economía circular.

Reducción de la “huella de carbono” de los productos alimentarios

Es necesario aumentar las investigaciones sobre los balances de emisión/fijación, dado que actualmente es difícil determinar el impacto climático causado por un determinado producto, ya que ese impacto varía según el material de origen, el sistema de producción, el tipo de industria procesadora, el

modelo de empaquetado, el sistema de transporte... El reto es proporcionar los datos y las herramientas necesarias a los agentes del sistema alimentario para comprender e influir en cuestiones clave como el potencial de secuestro de carbono (producido únicamente por las plantas y las algas) y la reducción de las emisiones en producción primaria, tanto vegetal (incluida la reducción de los impactos negativos de determinadas prácticas agrícolas), como animal, además de en la industria procesadora y el transporte.

Herramientas para dinamizar y fomentar una nutrición consciente

Otro reto fundamental pasa por fomentar la educación en alimentación saludable y conciente en la población, especialmente en los colegios, comenzando por los alumnos de edades tempranas. Se considera una estrategia esencial para prevenir futuras patologías, muchas de ellas debidas al desconocimiento de los hábitos alimenticios saludables. En este sentido son del máximo interés las experiencias desarrolladas en algunos países (como Brasil) en los llamados “mercados institucionales” de alimentos, en los que se garantiza el abastecimiento de alimentos a los comedores escolares con producción procedente de la agricultura de tipo familiar (en muchos casos, de producción ecológica).

Mejora de las relaciones entre los actores del sistema alimentario

Para contar con una alimentación saludable, sostenible y justa es necesario hacer un esfuerzo para organizar las relaciones entre los actores del sistema alimentario. Por ello, explorar con rigor científico estas relaciones es un reto prioritario para lograr una estructura de gobernanza eficiente. De este modo se podrán abrir nuevas perspectivas de análisis, como por ejemplo las relativas a la interacción productor-consumidor, al papel de la gran distribución o a las políticas públicas que serían necesarias para equilibrar las asimétricas relaciones entre consumidores y empresas alimentarias.

BLOQUE TEMÁTICO III. EFECTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DE LOS PROCESOS DE CAMBIO ECONÓMICO Y TECNOLÓGICO

Desafío G: Cambio tecnológico y nuevas formas de trabajo/empleo en la sociedad contemporánea

Coordinadores

Jordi Brandts Bernad
(IAE, CSIC)

Catalina Martínez García
(IPP, CSIC)

Investigadores y Centros

Laura Cruz (IPP, CSIC), Luis Miller (IPP, CSIC), Ana Rute
Cardoso (IAE, CSIC), Luis Sanz (IPP, CSIC)

1. Introducción

El miedo al desempleo ocasionado por la tecnología es algo recurrente en la historia de la humanidad. En los años 1930, Keynes ya hablaba de ello como si fuera sólo la fase temporal de un desajuste del sistema económico. Sin embargo, treinta años más tarde, los economistas concluían que “la tecnología elimina empleos, pero no el trabajo”. El cambio tecnológico afecta a los tipos de empleo requeridos y sus salarios, pero la cuestión clave es la siguiente: si algunos empleos son eliminados en el proceso de cambio tecnológico, ¿cuáles son los nuevos que se crean?

Como señaló en 2019 el Informe de la OCDE sobre el Empleo, el 14% de los empleos actuales podría desaparecer como resultado de los procesos de automatización en los próximos 15-20 años, y otro 32% es probable que cambie radicalmente cuando las tareas individuales sean automatizadas. Mucha gente ha sido dejada de lado por la globalización, y la brecha digital persiste en el acceso a las nuevas tecnologías, lo que dará lugar a desigualdades por razones de edad, género y variables socioeconómicas.

En dicho Informe se añade que no toda la población ha sido capaz de beneficiarse de los mejores empleos que han emergido en el marco del proceso de cambio global, quedando mucha gente atrapada en mercados laborales precarios, mal pagados y con limitado o nulo acceso a los sistemas de aprendizaje y protección social, excluidos además de la negociación colectiva.

Asimismo, hay una preocupación real sobre el vaciamiento que se está produciendo de la clase media conforme el avance del cambio tecnológico va acompañado de nuevos empleos precarios y de calidad cada vez más baja. Según el citado informe de la OCDE, en algunos países, por ejemplo, la probabilidad de que el colectivo de trabajadores no convencionales reciba alguna forma de ayuda a la renta si se quedan sin empleo, es ya del 40-50% menos que

la de los trabajadores convencionales. Asimismo, la probabilidad de que la población adulta poco cualificada participe en cursos de formación es ya, en los países de la OCDE, 40 puntos porcentuales inferior a la de alta cualificación.

No obstante, siendo eso cierto, también lo es que hay una economía emergente caracterizada por nuevas formas de empleo que pueden dar lugar a una mayor inclusión social si se toman medidas para proteger a los menos favorecidos y hacer menos exacerbadas las desigualdades. Estas nuevas formas de empleo implican flexibilidad laboral más alta, teletrabajo, empleos a tiempo parcial, trabajos colaborativos... La encuesta de la UE sobre la Economía y el Empleo Colaborativos muestra que la flexibilidad es la razón más citada por los encuestados que prefieren este tipo de trabajos.

El tema de la protección de los trabajadores en estos nuevos entornos laborales es apenas tenido en cuenta, pero no debería olvidarse. En este sentido, cabe señalar que los sistemas de bienestar y la negociación colectiva no deben ignorar los derechos de las mujeres, de los inmigrantes y de otras minorías, ya que son estos colectivos los que tienden a optar por estas formas de trabajo con mayor frecuencia que otros grupos sociales.

2. Escenarios de futuro

En esta sección se analizan tres retos clave en la relación entre cambio tecnológico y empleo, a saber: la automatización, la polarización laboral y las preferencias sociales en las nuevas condiciones del mercado de trabajo, y se presentan de forma esquemática algunas cuestiones de mayor amplitud.

La automatización/automatización

El proceso de creación y destrucción de empleos debido al cambio tecnológico es un fenómeno que necesita ser comprendido de forma adecuada para que los gobiernos sean capaces de intervenir eficazmente en ello. El impacto del cambio tecnológico en el mercado laboral tiene varias dimensiones, siendo la primera su efecto sobre el número total de empleos. El temor de que la adopción de diferentes tipos de maquinaria conduzca a una reducción del número total de empleos y, de ahí, a un desempleo masivo, no es algo nuevo (basta con hacer referencia al movimiento *ludista* contrario a las máquinas, que se extendió por Inglaterra en el primer tercio del siglo XIX).

Más allá de esa referencia histórica, se ha demostrado, sin embargo, que ese miedo no está justificado, puesto que el número de personas empleadas se ha incrementado de forma notable a lo largo de los dos últimos siglos. No obstante, en

la actualidad es necesario reflexionar si el gran avance que se está produciendo hoy en las tecnologías de la información y la digitalización conducirá, esta vez, a la tan temida reducción de empleos.

Estudios recientes sugieren que no hay un problema real en términos del número total de empleos gracias a los efectos complementarios entre sectores, al aumento de la demanda global debido a los incrementos de productividad y a la emergencia de nuevas ideas y nuevos empleos. Es cierto que el cambio tecnológico y la automatización asociada al mismo, es un proceso positivo, puesto que libera a la gente del trabajo repetitivo y de las tareas más penosas, pero también es cierto que tiene algunos efectos potencialmente negativos, que deben ser tenidos en cuenta.

La polarización del mercado laboral

Las últimas dos décadas han visto un cambio importante en el tratamiento académico de los efectos del cambio tecnológico en el empleo. A final del siglo XX, la teoría dominante era la que afirmaba que el cambio tecnológico influía en el empleo a través de las capacidades y habilidades. En este sentido se decía que cualquier cambio tecnológico beneficiaba, en términos de empleo y salario, a las personas con más alta cualificación, y perjudicaba a las de menos cualificación.

Sin embargo, a comienzos de este siglo XXI emergió una nueva teoría que ponía el énfasis en la importancia del proceso de “rutinización”. Venía a decir que los empleos más rutinarios son los que pueden ser más fácilmente automatizados, y, por tanto, los que tienen más tendencia a desaparecer. Son empleos que están, además, en una posición intermedia en el mercado laboral en términos de salario y prestigio ocupacional: los trabajadores de oficina, los trabajadores manuales y los obreros de las factorías.

Frente a estos empleos intermedios en claro declive, los dos extremos del mercado laboral están creciendo y polarizándose. En la parte más baja de la escala salarial y ocupacional, aumenta la demanda de personal de servicios y de asistencia. Son trabajadores de baja cualificación y bajos salarios, pero que son hoy muy demandados. En la parte más alta del mercado laboral, también está creciendo la demanda de empleos de elevada cualificación, tales como managers, profesionales y técnicos. Este proceso conduce a una polarización del mercado laboral concentrándose la demanda de empleo en los dos extremos del mismo.

Hay una amplia evidencia empírica de este proceso de polarización en muchos países, entre ellos España. Por ejemplo, algunos estudios demuestran que esta polarización se produjo en nuestro país durante la pasada crisis económico-financiera y también en otros países. También confirman esos estudios el efecto

que el mencionado proceso de rutinización y robotización de los empleos tiene en la citada polarización laboral.

En España, por ejemplo, entre 1994 y 2014, hubo una gradual desaparición de empleos en el punto medio de la escala ocupacional variando el destino de esos trabajadores según su nivel de cualificación: los de menores niveles de estudios tendían a moverse a empleos menos cualificados, mientras que los de mayor nivel de estudios se movían hacia los segmentos mejor remunerados en el mercado.

Efectos psico-sociales de las nuevas condiciones laborales

Una cuestión crucial es si el cambio tecnológico afecta psicológicamente a la población, y de qué modo. Las relaciones en el mundo del trabajo no están basadas sólo en incentivos monetarios, sino que dependen también de otros factores, como la motivación intrínseca a realizar determinadas actividades, las preferencias de los individuos, el agravio comparativo, los lazos sociales, la reciprocidad...

Estos aspectos de la motivación humana han sido bien analizados por la economía experimental y del comportamiento, además de por otras disciplinas de las ciencias sociales. Se ha estudiado el tema de las preferencias sociales, mostrando que en ellas tiene mucho que ver la autoestima, el bienestar subjetivo de los individuos al compararse con otros y, en general, un conjunto de circunstancias asociadas a las interacciones sociales.

Respecto al tema específico de las relaciones laborales, la literatura especializada nos dice que es cada vez más relevante la emergencia de entornos de trabajo en los cuales una gran parte del rendimiento es discrecional y no está plenamente asociado a contratos formales. Es ésta una situación en la que llega a ser importante el intercambio de recompensas entre los trabajadores y sus empleadores (te compenso si haces alguna actividad extra fuera de lo formalmente establecido), siéndolo especialmente en las ocupaciones con tareas complejas y que implican trabajo creativo.

Las motivaciones intrínsecas es el vector interno que hace que la gente se ponga a trabajar no por las recompensas externas que pudiera recibir, sino porque el hecho mismo de trabajar es interesante y satisfactorio para las personas. Por lo general, la gente se esfuerza en trabajar por una combinación de motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Los seres humanos crean lazos sociales a través de repetidas interacciones. La fuerza de esos lazos sociales, y si son positivas o negativas, depende de las características de la interacción.

De modo similar, los seres humanos son a menudo recíprocos en sus comportamientos. Esto puede que sea algo positivo (en el sentido de que ellos tienden a recompensar la conducta favorable de los otros con una conducta similar por su parte), pero también puede ser algo negativo (castigando con una mala conducta el mal comportamiento de los demás). Por último, los seres humanos tienen una fuerte tendencia a compararse con los demás, y eso tiene efectos sobre su conducta. Hay otras dimensiones de la sociabilidad que interactúan con las relaciones en el mundo del trabajo, tales como la percepción de que los procedimientos son justos.

La cuestión clave es, por tanto, analizar cómo todos estos elementos motivacionales serán afectados por la reestructuración de las relaciones laborales que se está produciendo en el marco del actual proceso de cambio tecnológico. Por ejemplo, debe analizarse si las nuevas formas de organización laboral pueden conducir o no a cambios en la monitorización y control de los procesos de trabajo, y si esto puede tener efectos, y cuáles, en el rendimiento de los trabajadores.

Otro contexto donde los cambios en la organización del trabajo pueden estar afectando a las motivaciones de la gente, es el relativo a la creciente importancia del trabajo on-line y el tele-trabajo. La reducción del control directo y presencial que este tipo de trabajos encarna puede tener importantes implicaciones que aún se está lejos de adivinar. Trabajar en esos nuevos entornos implica la ausencia de contacto físico con los demás trabajadores, y eso puede tener efectos cuyo sentido aún se desconoce. De hecho, existen estudios que han encontrado resultados diversos sobre este asunto, por lo que se debe seguir desarrollando investigaciones sobre estas cuestiones para tener una visión más completa.

Un tema de especial relevancia es el impacto que pueda tener en la motivación y el esfuerzo de los trabajadores un posible aumento de la desigualdad salarial, resultante del cambio tecnológico. Algunos estudios sugieren que las comparaciones salariales son un importante factor en las decisiones de los trabajadores a esforzarse en la realización de su trabajo.

Usando datos de encuestas y de técnicas experimentales, algunos estudios muestran el efecto que tiene la comparación social en la disposición de los trabajadores de empleos de igual productividad a implicarse en el trabajo. Los resultados de esos estudios nos dicen que la comparación social influye, pero que la forma en que lo hace es compleja, por lo que no se deberían sacar conclusiones a la ligera sobre sus efectos.

El estudio sistemático de estas cuestiones debería ser abordado por las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, pudiendo implicar también a la investigación de carácter multidisciplinar. Lo importante es que estos temas sean estudiados con métodos apropiados, de tal modo que sea posible identificar relaciones causales y descubrir los mecanismos específicos que hay detrás de los hechos observados. Además, en lo que se refiere a los efectos negativos de las consecuencias del cambio tecnológico, sería importante identificar qué tipo de intervenciones sociales y de gestión son las adecuadas para contrarrestar dichos efectos.

Otros desafíos de mayor amplitud

Aparte de los tres retos a los que hemos hecho referencia, cabe añadir cinco cuestiones más, de mayor amplitud y que aquí sólo apuntamos de forma esquemática a saber: i) el reparto del trabajo a gran escala (¿cómo redistribuir el trabajo entre los miembros de los hogares y los distintos grupos sociales?); ii) la organización de la sociedad del ocio (¿cómo ocupar el tiempo libre?); iii) el reparto de los beneficios del cambio tecnológico (¿cómo redefinir la propiedad de los robots?); iv) la desvinculación de los derechos ciudadanos respecto del status y la posición de cada trabajador en el mercado laboral (¿cómo medir la satisfacción y el bienestar subjetivo en el trabajo?), y v) la conciliación del control remoto del trabajo con su ejercicio a escala local (¿cómo conciliar las pautas de consumo y la sostenibilidad del planeta?).

3. Dinámica del sistema científico

Los desafíos sociales descritos en la sección anterior también podrían aplicarse a algunas de las dinámicas de transformación de las actividades de investigación y los sistemas científicos. La automatización del trabajo científico está relacionada con el aumento de las inversiones de capital y los equipos necesarios para realizar las actividades de investigación. La automatización también está relacionada con la expansión de la colaboración científica y la ciencia en equipo, y el efecto más importante es la demanda de nuevas habilidades científicas necesarias para realizar el trabajo.

La polarización y la dualización están sólo parcialmente relacionadas con el impacto de la tecnología en las actividades de investigación y, probablemente, están mucho más vinculadas a la forma en que se va a establecer una nueva división del trabajo. La forma en que la ciencia ha operado tradicionalmente (sistema de tutoría y aprendizaje) también ha cambiado a raíz de nuevos procesos de masificación.

En el mercado de trabajo científico, las relaciones sociales y las nuevas condiciones del mercado de trabajo se rigen principalmente por las cualidades institucionales específicas de los mercados de trabajo en los diferentes países; esto, más que los efectos del cambio técnico, es el principal impulsor. Si la precarización (por ejemplo, salarios bajos y altos niveles de contratos de duración determinada) de las condiciones de trabajo se integra en el sistema científico, los efectos serán graves, no solo en lo que respecta al estrés de los científicos, sino también a la disminución de la creatividad, los niveles de excelencia y calidad y, a medio plazo, una reducción del atractivo de la ciencia.

Desafío H: Tercer sector, economía social y colaborativa

Coordinador

Manuel Pérez Yruela
(IESA, CSIC)

Investigador y Centro

Gregorio Rodríguez Cabrero
(Universidad de Alcalá)

1. Introducción

El tema al que se refiere este Desafío tiene que ver “con la evolución reciente, emergente en algunos casos, de formas de producción, intercambio, consumo, ayuda mutua y ayuda a terceros, que se llevan a cabo mediante acciones colectivas surgidas del seno de la sociedad y de sus instituciones civiles y religiosas”. Aunque en su origen, y no siempre, las organizaciones que desarrollan este tipo de acciones son independientes del Estado, muchas de ellas dependen del poder público en materia de financiación y, obviamente, todas son reguladas por los organismos públicos correspondientes.

Como bien se indica en el documento (ver Anexo H), “ha sido común a estas organizaciones hacer compatible, de un lado, la renuncia o limitación de los beneficios económicos de la actividad que desarrollan, y, de otro, los valores de la cooperación, la solidaridad, la participación y la acción voluntaria en todo lo relacionado con la producción de bienes y la prestación de servicios sociales”.

Otro rasgo que las caracteriza, éste más actual, es el de que “sus acciones se rigen por los criterios modernos de la racionalidad organizativa y orientan al mercado sus actividades económicas, sin perjuicio de mantener los valores sociales en las que se inspiran”. Además, cabe señalar que el fenómeno de la *economía social* es antiguo en cuanto a su origen, si bien, en la actualidad, se ha ido diversificando y adquiriendo mayor complejidad, debido al amplio y variado conjunto de campos organizacionales en los que está presente, siendo también un fenómeno cambiante en relación a los límites en los que actúa.

Es un hecho la persistencia en nuestro contexto cultural de estas fórmulas de carácter cooperativo, que conviven con otros modelos organizacionales, como el Estado, las empresas orientadas al beneficio, y las familias, y que contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. También es un hecho la gran variedad de organizaciones que forman el llamado Tercer Sector, por lo que es necesario distinguir dos grandes categorías: de un lado, el *Tercer Sector de la Economía Social*, formado por las entidades que desarrollan actividades de carácter económico (cooperativas, mutualidades, sociedades laborales...), y de otro, el *Tercer Sector de la Acción Social*, formado por organizaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades de carácter social (en particular asociaciones y fundaciones)

Junto a esas dos categorías organizativas del Tercer Sector, debe prestarse atención a las formas emergentes de economía colaborativa, alternativa y solidaria que se están convirtiendo hoy en un relevante fenómeno social y económico. Por ello, al estar aún pendiente de una adecuada regulación y no haber sido objeto de suficiente interés desde el ámbito de las ciencias sociales, debe ser un objetivo fundamental para futuros programas de investigación.

2. Clasificación del Tercer Sector: un reto metodológico

El Tercer Sector de la Economía Social

Está formado por las cooperativas, las mutualidades, las asociaciones que llevan a cabo actividades económicas (sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación, cofradías de pescadores...). De ellas, las de mayor importancia, en número, empleo y volumen de negocio, son las que integran el cooperativismo, que son también de las que se dispone de mejor información, estando articuladas en fórmulas cooperativas de segundo y tercer grado.

Todas las entidades que componen el Tercer Sector de la Economía Social, sean o no cooperativas, convergen en la Confederación Española de Entidades de la Economía Social (CEPES), que es su máximo órgano de representación, sin perjuicio del peso que mantienen las organizaciones sectoriales y territoriales en la representación de sus intereses específicos. Estas entidades de representación nacional forman parte de las que existen a nivel de la UE.

Cabe señalar la importancia del *sector cooperativo* en España, si bien alejado todavía de lo que representa en otros países de nuestro entorno europeo. El informe 2018 del *World Cooperative Monitor* muestra cómo, entre las trecientas organizaciones cooperativas y mutualistas del mundo con un volumen

de facturación de más 1.100 millones de dólares, hay sólo 4 españolas, por 10 italianas, 23 alemanas y 48 francesas. En 2017 había en nuestro país 20.958 cooperativas, y el número de trabajadores era de 319.792 (el 1,6 % del empleo total de España en el cuarto trimestre de ese año), destacando las del sector industrial y servicios.

Dentro del sector cooperativo, las cooperativas agrarias son las de mayor tradición en España, contribuyendo de forma notable al desarrollo de las zonas rurales y al mantenimiento de la población en ellas, así como a la creación de identidad territorial. En general, la imagen del cooperativismo está asociada para muchos consumidores a la idea de economía con rostro humano, de calidad y confianza, que es “un importante activo intangible”.

Respecto a las otras organizaciones (no cooperativas) que forman parte de la Economía Social, el segundo grupo en importancia es el de las *sociedades laborales*, concebidas como entidades para la creación de empleo bajo la fórmula de sociedades anónimas o limitadas. En 2017 había 9.324 sociedades laborales (el 90% como sociedades limitadas), que empleaban a 63.471 socios y trabajadores. La mayor parte (88%) son microempresas con menos de 10 trabajadores y un tamaño medio de 7, y sus principales actividades son los servicios y, a gran distancia, la industria y la construcción.

Los siguientes grupos en importancia dentro del Tercer Sector de Economía Social son los *centros especiales de empleo* (concebidos para promover el empleo de las personas con discapacidad, de los que en 2018 había 670 centros que daban empleo a 84.946 personas con discapacidad), las *empresas de inserción* (concebidas para ayudar a personas con problemas sociales de acceso al mercado de trabajo, de las que en 2018 había 185 que daban empleo a 7.154 personas) y las *cofradías de pescadores* (de las que ese año había 198 que daban empleo a unos 35.000 trabajadores).

Un caso singular es el de las *fundaciones*, que pueden considerarse parte tanto del Tercer Sector de la Economía Social, como de la Acción Social, ya que realizan actividades relacionadas con ambas áreas (actividades económicas y actividades no económicas, como cultura, ocio y deporte). En 2014, última información disponible, había en España 8.866 fundaciones activas.

El Tercer Sector de la Acción Social

Las entidades de Acción Social son el grupo más importante del Tercer Sector, siendo sus objetivos la producción de servicios de bienestar, la reivindicación de derechos sociales y el estímulo de la participación cívica a través del

voluntariado social. Lo forman diversos tipos de entidades, destacando, por su singularidad, tres de ellas: Caritas Española, Cruz Roja Española y la ONCE, que se rigen por regulaciones específicas.

Además de esas tres entidades singulares, el tercer Sector de la Acción Social está formado por unas 30.000 entidades activas, entre las que predominan las *asociaciones* (70%) y en menor medida las *fundaciones de acción social* (18%).

Las entidades de Acción Social tienen profundas raíces en la historia social de España, pero es a partir de la segunda mitad de la década de los años 1960 cuando se inicia un período de reconstitución que llega hasta finales de la década de los 80. A partir de 1980 han ido creciendo y consolidándose, impulsadas por la restauración de la democracia, por el desarrollo que tuvo el Estado de Bienestar en España durante esos años y por nuestra incorporación a la UE. Su relación con las administraciones públicas es constante, ya que cooperan en la prestación de servicios y en la gestión de programas y estrategias de bienestar y a la vez dependen económicamente de ellas. Pero “los ciclos políticos la condicionan, ya que no son ajenos a las visiones que los distintos gobiernos tienen sobre la función de este sector de la acción social, dificultando su continuidad y perjudicando la eficacia de su actividad”.

Haciendo una comparación con el resto de países de la UE, cabe señalar que, en cada país, la naturaleza del Tercer Sector de la Acción Social es reflejo de sus respectivos sistemas de bienestar. Así, están más desarrolladas estas entidades en el Norte de Europa, debido a que tienen sistemas de bienestar más robustos que en los países del Sur. Eso explica que en España e Italia representen, por ejemplo, sólo el 3,9% del total de empleados, mientras que en los Países Bajos sea el 10,3%, en el Reino Unido el 5,9% y en Alemania el 5,4%.

A pesar de la variedad de las entidades que componen el Tercer Sector de la Acción Social, pueden indicarse algunos rasgos comunes, a saber: la importancia que dan a la prestación de servicios sociales, en colaboración con el sector público; la competencia con el sector mercantil en la prestación de servicios; la participación de voluntarios; la colaboración entre entidades; su creciente interconexión con las entidades de la economía social; la percepción de que sus intervenciones sean cada vez más personalizadas para tener mayor capacidad de integración social de los destinatarios; la preocupación por mejorar la autonomía y estabilidad financiera...

Otro de los rasgos que caracterizan a estas entidades de la Acción Social es su constante renovación (el 56,5% de las entidades se crearon entre 2000 y 2019, muchas después de 2008) y su proximidad a los colectivos y personas a las que atiende. También destaca la precariedad de su situación económica (en 2018, casi la mitad de las entidades tenían unos ingresos inferiores a 30.000 € anuales, un 30 % los tenían entre 30 y 300 mil euros y sólo un 8,5 % pasaban del millón de euros, entre las que están las tres entidades singulares, Cruz Roja, ONCE y Cáritas).

Por sectores, la mayor parte de sus actividades se centran, como es lógico, en la acción social, seguida a distancia por la inserción social y la atención sociosanitaria. El perfil de los colectivos a los que dirigen su actividad son personas sin hogar; en riesgo de exclusión; en situación de dependencia; con discapacidad; con problemas de adicción; infancia, adolescencia, juventud y mayores con problemas; mujeres maltratadas, migrantes y refugiados, entre otros. El resto de actividades son la defensa de derechos y la sensibilización y formación sobre los problemas que atienden. En cuanto a la procedencia de los ingresos, la mayor parte es financiación pública, seguida de la financiación privada, y también de financiación propia (ver anexo H).

En cuanto al empleo generado, en 2018 las entidades del Tercer Sector de la Acción Social empleaban a 577.230 personas, habiéndose incrementado el peso generado por las tres entidades singulares (Cruz Roja, ONCE y Cáritas), que es hoy del 15% dentro de todo el sector (Ver Anexo H). Dado el rasgo de contar con personal voluntario, en 2018 el sector contó con la colaboración de casi millón y medio de voluntarios, con una media de casi 30 voluntarios por entidad. Estos voluntarios se dedican preferentemente a realizar actividades de atención directa y participación en campañas de sensibilización y promoción.

En términos cualitativos, destacan las siguientes *fortalezas* de este sector de la Acción Social: la cohesión interna de las entidades; la estabilidad de la colaboración con el sector público; la apertura creciente a otras entidades del TS; la calidad y compromiso de sus recursos humanos en todos los niveles; el valor e importancia del voluntariado; la rapidez de respuesta ante los fallos del sector público y del mercado, insuficiente no obstante por la escasez de recursos; y una gestión que, en conjunto, es transparente y evita el endeudamiento para asegurar la viabilidad de las entidades.

Mas entre sus *debilidades* cabe señalar su baja visibilidad social; las dificultades para transmitir el valor de sus resultados; la estructura dual del tamaño

organizativo; la insuficiencia financiera a pesar de la creciente diversificación de fuentes de financiación; y la todavía insuficiente articulación interna del sector.

Los cambios en las necesidades sociales han hecho tomar conciencia a este sector de la Acción Social de utilizar mejor su capacidad institucional y organizativa para establecer una agenda de sostenibilidad a medio plazo. Esto puede permitir a las entidades que lo forman adelantarse al cambio social, así como mejorar su solidez financiera, ampliar la base social, establecer alianzas estables con el sector público y otros agentes de la sociedad civil, y ampliar la colaboración con el sector mercantil en proyectos de interés mutuo.

Las organizaciones emergentes de acción social y la economía colaborativa

Como ejemplo de las acciones sociales de naturaleza colectiva que muestran afinidad con los principios del Tercer Sector, y en concreto con la Economía Social, cabe referirse a otro tipo de entidades, como las empresas sociales, las cooperativas sociales y las empresas de economía solidaria, así como las denominadas fundaciones comunitarias y algunas recientes iniciativas de economía colaborativa.

Las empresas sociales

Las empresas sociales son “organizaciones que atienden a necesidades no cubiertas o resuelven un problema social o medioambiental a través de un enfoque de mercado o empresarial”. Estas empresas incluyen “un abanico de casos, que van desde una empresa cuyas actividades son socialmente útiles o beneficiosas, a una organización sin ánimo de lucro que destina todos sus beneficios a objetivos sociales, pasando por empresas que dedican a objetivos sociales sólo una parte de los beneficios”.

No obstante, presentan un conjunto de rasgos de carácter económico, social y participativo, que deben cumplir, a saber: tener una actividad continuada de producción y/o venta de bienes; asumir un grado significativo de riesgo económico; tener una cantidad mínima de trabajadores asalariados; tener un objetivo explícito de beneficiar a la comunidad; surgir por iniciativa de un grupo de ciudadanos o una organización de la sociedad civil; limitar la distribución de beneficio; disponer de un alto grado de autonomía; tener una gobernanza participativa que involucre a los grupos afectados por la actividad de la empresa (socios, empleados, perceptores del servicio...).

Cabe remarcar el esfuerzo que está haciendo la UE por promover las empresas sociales, a través de la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social (2011), reconociendo el papel que pueden desempeñar en el modelo de

crecimiento inteligente, sostenible e integrador propuesto en la Estrategia Europa 2020. Las empresas de inserción para ayudar a la empleabilidad de personas excluidas, así como los centros especiales para promover el empleo de los discapacitados y las políticas de integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, podrían ser calificadas como empresas sociales, junto a aquellas otras que dan oportunidades de manera significativa a personas excluidas y discapacitadas.

Un caso particular de las empresas sociales son las denominadas *cooperativas sociales* (sin presencia en España). Son empresas creadas específicamente para desarrollar dos funciones, que se parecen mucho a los dos tipos de empresas que contempla la Estrategia Europa 2020 antes citada, a saber: a) actividades de atención sociosanitaria, esto es, servicios sociales y asistenciales, y b) actividades de formación a través del empleo para personas con dificultades para integrarse en el mercado laboral. A diferencia del cooperativismo tradicional, el modelo de gobernanza de las cooperativas sociales es el empresarial, similar al de las empresas privadas que compiten en el mercado, diferenciándose de las cooperativas clásicas en que su objetivo principal no es el beneficio, sino la función social que desarrollan, y también en la consideración del personal voluntario como socios.

La economía solidaria

La *economía solidaria* es un ejemplo de nuevas iniciativas económicas que, aun deudoras de la tradición de la economía social, se basan en valores y objetivos que traspasan los límites de las entidades tradicionales. Las entidades de la *economía solidaria* se apoyan en el concepto de “mercado social”, entendido como “una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios...” Según establece la Carta de la Economía Solidaria, se basa en seis principios: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, fines no lucrativos y compromiso con el entorno. A la vista de lo anterior, puede decirse que estas entidades forman parte de una nueva cultura que refleja el avance de movimientos sociales como el ecologismo, el feminismo, el pacifismo...

La Red Española de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) agrupa a unas quinientas entidades, agrupadas a su vez en redes regionales y sectoriales. Sus actividades cubren un abanico muy amplio, desde las de reciclaje y recuperación de residuos, hasta las financieras y comercio justo, pasando por actividades agrícolas, industriales y de servicios especialmente de servicios sociales y educativos. Las entidades de la economía solidaria están asociadas a la

gran confederación de la economía social CEPES, y muchas de sus entidades son cooperativas o asociaciones.

La economía colaborativa

La *economía colaborativa* es un fenómeno social y económico de nuestro tiempo, que está creciendo de manera exponencial. Aunque no hay una definición consensuada sobre qué es realmente, la comunicación del Parlamento Europeo (PE) sobre “Una agenda europea para la economía colaborativa” la define como “modelos de negocio cuyas actividades se facilitan mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de bienes y servicios generalmente ofrecidos por individuos privados”.

Esa Comunicación del PE incluye dentro de las entidades de la economía colaborativa tres categorías de actores: i) los *proveedores*, que comparten su patrimonio, sus recursos, su tiempo y/o sus capacidades; ii) los *consumidores o usuarios* de los bienes y servicios ofertados, y iii) los *intermediarios*, que ponen en contacto a los proveedores con los consumidores o usuarios a través de una plataforma. Un factor esencial para el desarrollo de la economía colaborativa es la existencia de internet y de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sin las cuales aquélla no sería posible.

Aunque las relaciones entre los proveedores y usuarios de este tipo de economía pueden ser entre iguales (como es el caso de las personas que quieren intercambiar sus casas u ofrecer parte de ellas como alojamiento de manera ocasional) o entre empresas que quieren ofrecer sus servicios o vender sus productos a consumidores que quieren adquirirlo pagando por ello a través de las plataformas (como las que existen para alojamiento en hoteles), sólo se considera economía colaborativa la que se desarrolla entre iguales a través de una plataforma, de forma gratuita o mediante pagos que no se consideran beneficio (bancos de tiempo, crowdfunding, crowdsourcing, co-working, monedas locales...)

En la variada casuística que hay de este tipo de relaciones, “se han ido viendo efectos no deseables de su desarrollo: turistificación de barrios, relaciones laborales abusivas (falta de seguridad en las transacciones, entre otros”, por lo que sería necesario proceder a su regulación. En España operan más de 500 entre plataformas de economía y consumo colaborativo y de economía bajo demanda para las más diversas actividades.

Desde el punto de vista de este informe interesa subrayar las relaciones que la *economía colaborativa* puede tener con el Tercer Sector, y las potencialidades que le ofrece. Es un hecho que muchas entidades de la economía colaborativa

se encuentran próximas a los valores del Tercer Sector, ya que cumplen algunos aspectos que lo caracterizan, como el no ánimo de lucro y los objetivos sociales. Asimismo, la economía colaborativa es un claro ejemplo de lo mucho que se puede hacer en el Tercer Sector utilizando las nuevas tecnologías.

Pero también es cierto que las relaciones que se establecen en el marco de la economía colaborativa “es un tipo de intercambio que se puede hacer sin necesidad de utilizar plataformas digitales, a nivel de comunidades más pequeñas, como barrios o municipios con poca población”. En este sentido puede decirse que la economía colaborativa es una actividad que se ha practicado siempre, aunque sea a pequeña escala y entre personas con relaciones de proximidad, por lo que con estas nuevas iniciativas lo que se trata es de recuperarla.

Estas innovaciones han abierto una ventana de oportunidad de alcance extraordinario, por las posibilidades que ofrecen para desarrollar acciones colectivas que se pueden basar en los valores y objetivos que han inspirado las acciones del Tercer Sector tradicional. En todo caso, las entidades de la economía colaborativa son las menos estudiadas y conocidas, entre otras cosas por su juventud e intenso dinamismo, no disponiéndose aún de datos de suficiente fiabilidad como para trazar un mapa de ellas.

Las fundaciones comunitarias

Las *fundaciones comunitarias* cuentan todavía con poca tradición en España, en comparación con países de nuestro entorno, aunque existen algunas que por su sistema de organización y funcionamiento pueden considerarse como tales. Son organizaciones filantrópicas, muy vinculadas al territorio, con el que establecen un compromiso de largo plazo, con el objetivo de contribuir al desarrollo de su potencial endógeno y al bienestar de sus habitantes. Para ello, movilizan recursos financieros, culturales, patrimoniales, humanos y organizativos de la comunidad, y atraen a inversores privados externos y recaban recursos públicos. En su sistema de gobierno implican activamente a los actores del territorio.

Actualmente, existen en el mundo más de 1.800 fundaciones comunitarias. Este tipo de instituciones son muy frecuentes en Estados Unidos y Canadá, también en algunos países de la UE, como por ejemplo en Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, y también se han extendido en otras áreas geográficas como América Latina o África.

Sus ámbitos de trabajo son muy diversos, predominando la vocación territorial y la ayuda a las personas que allí viven. Su configuración, posicionamiento y opciones estratégicas, varían dependiendo de los países y de los entornos

en los que actúan. Esta diversidad se manifiesta en aspectos como la relación y cooperación que tienen con los gobiernos, la procedencia de los recursos económicos de que disponen, su financiación y el tipo de actuación que desarrollan. La importancia de la vinculación territorial de los habitantes de los territorios y su proximidad con los principios y valores de la economía social, solidaria y colaborativa constituyen el sustrato del que suelen surgir. A diferencia de la mayoría de las fundaciones, que surgen por iniciativa de una persona física, la promoción de las fundaciones comunitarias suele tener carácter colectivo y social, fruto de la iniciativa ciudadana.

Desafío I: Democracia, gobernanza y participación en escenarios de pluralidad

Coordinadores

Joan Font Fàbregas
(IESA, CSIC)
José Fernández Albertos
(IPP, CSIC)

Investigadores y Centro

Enriqueta Aragonés (IAE, CSIC), Txexu Ausín (IFS, CSIC), Joan Esteban (IAE, CSIC), Laura Mayoral (IAE, CSIC), Eva Anduiza (UAB), María Jesús Funes (UNED), Gema García Albacete (UC3M), Patricia García-Leiva (UMA), Sonia Royo (UNIZAR)

1. Introducción

El reconocimiento de la existencia de una crisis global de la democracia representativa es el punto de partida de este Desafío. Los síntomas de esta crisis son evidentes: el incremento de los sentimientos de descontento respecto al sistema político; la volatilidad y fragmentación electoral, y la polarización, partidista entre las élites, y afectiva entre los electores.

En el plano electoral, estos patrones podrían estar a su vez “degenerando en una especie de círculo vicioso al provocar un debate político más confrontacional”. Es un debate que o bien paraliza los sistemas políticos en los que existen muchos actores con capacidad de veto (Estados Unidos, Unión Europea...) o bien hace viable la imposición de políticas constitucionales “de parte” (retrocesos democráticos en el Este de Europa...).

En cualquiera de estos dos escenarios, lo que se denomina *nueva política* parece llevar consigo “una intrínseca incapacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos en torno a políticas públicas y reformas institucionales, que podrían contribuir a corregir los problemas que originan esas dinámicas, lo que hace que se continúe con la deslegitimación de las reglas y costumbres democráticas”.

Cabe señalar que la centralidad social y política de estos temas se observa en muy diversos ámbitos, uno de ellos, por ejemplo, en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (concretamente en el Objetivo 16). Asimismo, los

elevados niveles de conflictividad social que ello implica tienen importantes consecuencias en lo que se refiere a aspectos relativos a la convivencia y calidad de vida. Pero también cabe señalar que incluso “tiene efectos en todo lo relacionado con el campo económico, hasta el punto de que el Banco Mundial considera los conflictos civiles como el mayor impedimento para el crecimiento económico”.

Analizando estos conflictos se observa que van teniendo un componente cada vez menos económico, de clase, estando más frecuentemente “motivados por confrontaciones no-económicas, estructuradas en torno a elementos culturales o étnicos”. La democracia “revela el orden de las preferencias de los ciudadanos, pero no indica la intensidad de estas preferencias”. Asimismo, “la manera como los distintos grupos indican la intensidad de dichas preferencias es mediante la organización de actos públicos –manifestaciones, protestas, huelgas...–, actos y movilizaciones con los que dirigen a los gobiernos la intensidad de su descontento”. Es por esto que es necesario prestar atención al estudio de las causas de las protestas y los conflictos civiles, dado el interés que estos temas están suscitando.

Una revisión de la literatura sobre las causas últimas de estos procesos muestra la ingente cantidad de trabajos publicados, que pueden dividirse en tres bloques: i) transformaciones económicas (estancamiento secular, aumento de las desigualdades asociadas a la robotización y la globalización, nuevas brechas estructurales asociadas a la terciarización de las economías post-industriales...); ii) complejización de la forma de ejercer el poder político (instituciones supranacionales, crisis de legitimidad de los modelos de gobernanza multinivel, soberanías compartidas, “deselectorización” de las políticas públicas, expansión de propuestas populistas y de extrema derecha...), y iii) cambios sociales (nuevas formas de interacción social, creciente rol de las tecnologías de la información y la comunicación, cambio en el modelo de medios de comunicación, *fakenews*, redes sociales, deterioro estructural de las instituciones de intermediación social que anclaban a los individuos en el sistema político...)

Además, “la libertad de movimientos del capital ha reducido extraordinariamente la capacidad de los gobiernos nacionales para la redistribución de la renta”, tal como puede constatarse en hechos como los siguientes: el impuesto sobre sociedades era de un 40% en los países de la OCDE hace cuarenta años y hoy es la mitad; la tasa para las rentas más altas del impuesto sobre la renta era hace cincuenta años el 90% en los EE.UU. y hoy es el 40%; empresas evaluadoras, como Standard and Poors, Moody's o Fitch, tienen una fuerte

influencia en las políticas económicas de los gobiernos. Todo ello hace que “el margen de acción de los gobiernos democráticos sea reducido”, y que ello provoque “la desafección de los ciudadanos, ya que la expresión democrática de las preferencias políticas no se materializa en decisiones efectivas”.

Asimismo, la confianza en el “mercado” como mecanismo para la distribución de los derechos sobre el producto social “está alcanzando niveles muy elevados de sesgo en beneficio de las rentas del capital”. De este modo, “el peso de las rentas salariales en el PIB está disminuyendo rápidamente en todos los países de la OCDE”, generándose una “enorme polarización económica, que el Estado del bienestar a duras penas puede contrarrestar”.

Finalmente, cabe señalar que “una parte creciente de los beneficios empresariales de las grandes corporaciones no procede de la innovación o de la eficiencia, sino de la captura de los gobiernos que practican estas organizaciones”. En este sentido, es un hecho que “las decisiones gubernamentales pueden reportar grandes beneficios y pueden obtenerse mediante la generalizada práctica de las ‘puertas giratorias’ de los políticos o mediante la corrupción directa”. Es por eso que el tema de la colonización del espacio público por las grandes empresas privadas y su posible control constituye una cuestión de creciente importancia.

2. El escenario social, institucional y científico-tecnológico

Para realizar un correcto diagnóstico de este ámbito temático, es necesario tener en cuenta el entorno científico-tecnológico, social e institucional.

En cuanto al entorno científico-tecnológico, uno de los cambios fundamentales es “el uso creciente de big-data por analistas, organizaciones, empresas, entidades administrativas...)”, algo que cambiará radicalmente (si no lo está haciendo ya) la “naturaleza de la contrastación empírica en todas las ciencias sociales”. Esta posibilidad plantea enormes retos en cuanto a la anonimización de los datos y preservación de la privacidad, así como desde el punto de vista de las nuevas técnicas de análisis, incluyendo las herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, cabe reconocer que, si bien algunas de las posibles líneas de trabajo que en el marco de colaboración entre distintas disciplinas científicas se abren con el uso de big-data, son de gran utilidad, también exigen la realización de grandes inversiones económicas.

No obstante, hay que admitir la ambivalencia del entorno social para el desarrollo de estas líneas de investigación. Por un lado, puede ser favorable, debido a la visibilidad que los resultados de estos proyectos tienen en el debate

público, posibilitando así la disponibilidad de recursos económicos suficientes. Pero, por otro lado, “el uso de sus conclusiones en el debate político partidista puede crear dificultades para que se acepte la relevancia científica de alguno de estos temas”. Aun así, cabe recordar cómo en la última década han ido surgiendo iniciativas en esta línea (fomentando la transparencia y la responsabilidad de las instituciones, y creando herramientas tecnológicas que faciliten el debate público), tanto en el sector del activismo social, como en las fundaciones, que deben ser tenidas en cuenta, aunque aún son muy débiles en comparación con otros países de nuestro entorno (ver Desafío H).

Respecto al entorno institucional y la presencia de estas temáticas en la agenda investigadora, “el panorama es diferente en función de si ponemos el foco en el ámbito internacional, donde buena parte de las principales convocatorias internacionales ya muestran una fuerte preocupación y sensibilidad hacia estas temáticas” o si lo hacemos a escala de nuestro país, donde estas líneas “han estado mucho más ausentes de las prioridades marcadas por las convocatorias de investigación, quizás con la excepción de algunas convocatorias en el ámbito de las Comunidades Autónomas”.

En función de dónde se ubiquen las causas de estos fenómenos, emergen propuestas de reforma. Así, en el ámbito económico, cabe destacar las nuevas políticas públicas redistributivas, así como un “renacimiento del interés por la política industrial y el creciente replanteamiento del marco institucional en el que se han producido los procesos de integración de los mercados globales de bienes y capitales”.

En lo que se refiere al ámbito socio/cultural, son dignas de ser destacadas cuestiones tales como “la reforma de los medios de comunicación o el fortalecimiento o creación de una nueva cultura democrática pluralista a través de distintos enfoques y políticas públicas, entre ellas la educativa, en tanto que agente promotor de ciudadanía activa y de mantenimiento de unos valores pluralistas”.

En el ámbito *político/institucional*, cabe observar como posibles propuestas de futuro la transparencia, la democracia electrónica y los nuevos mecanismos deliberativos, pero también la delegación a “expertos” o agencias independientes. El objetivo de estas propuestas de transparencia y democracia electrónica es “mejorar los mecanismos e instituciones representativas”, facilitando la labor de control y responsabilidad de las mismas, y también facilitando la comunicación con los ciudadanos.

En lo que se refiere a las propuestas deliberativas (presupuestos participativos, referéndums promovidos desde abajo...) consideramos que el propósito de estas propuestas “es incrementar el rol de la ciudadanía en los procesos políticos” y muestran cómo en ellas aparece el dilema de “cuánto protagonismo dar a los espacios presenciales y cuánto a los online” o el de “qué papel otorgar a la ciudadanía individual y a los representantes asociaciones y grupos organizados”. No obstante, debe señalarse que este tipo de propuestas deliberativas pueden estar orientadas también “a paliar las brechas participativas generadas por la desigualdad social o por fuertes diferencias generacionales”, identificando “poblaciones objetivo cuya voz se encuentre más ausente de la vida política” y por ello con más necesidad si cabe de ser incentivada su incorporación “mediante cuotas, campañas o experiencias piloto dirigidas principalmente a estos sectores”.

Por último, y dentro de este mismo ámbito político-institucional, merecen ser mencionadas aquellas soluciones que ponen el acento en la delegación a “expertos” o agencias independientes, como “mecanismos de búsqueda de mayor eficiencia y de menor vinculación entre políticas públicas y consideraciones electorales, sin necesidad de dar mayor voz a la ciudadanía”.

No obstante, y de forma general, hay que admitir que “los principales protagonistas del proceso de representación política también han sufrido fuertes cambios (tanto en el funcionamiento interno de los actores existentes como en la aparición de otros nuevos y/o en los reequilibrios de fuerzas entre ellos)”. Todo esto daría lugar a un cada vez mayor “cuestionamiento de los espacios institucionales sin que esté claro en qué dirección evolucionarán las alternativas emergentes”.

Además de las causas de estas crisis y de las posibles estrategias para afrontarlas, es preciso reconocer la existencia de algunas incógnitas sobre sus resultados, por ejemplo, en términos de calidad de vida para la ciudadanía. Cabe señalar que, tanto “el debate sobre cómo deben medirse esos resultados (qué tipo de indicadores), como sobre cuáles serían los resultados previsibles con cada una de las posibles estrategias de reforma, son preguntas sin respuestas claras”. En concreto, la futura agenda investigadora debe tratar de responder a las siguientes preguntas: “¿cuál es el atractivo político de cada una de estas propuestas de reforma? ¿cómo de esperable es que sean exitosas? ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan? ¿cuál es su ‘economía política’, es decir, en qué medida es previsible que en el actual contexto institucional emerja una demanda social y política para su adopción?”

A su vez, cabe señalar la existencia de una serie de cuestiones transversales que afectan a los tres ámbitos temáticos antes mencionados: i) el dilema de la escala territorial (o sus combinaciones) a la que pueden aplicarse cada una de las posibles propuestas (por ejemplo, si las soluciones deliberativas de tipo presencial aparecen como más aptas para escenarios micro, pero más difíciles de llevar a cabo en escalas más globales); ii) el encaje institucional entre todas las propuestas para evitar que provoquen disonancias o conflictos innecesarios, y iii) las incógnitas sobre los resultados alcanzables por cada una de dichas propuestas, en términos de calidad de vida para la ciudadanía.

Desafío J: Estrategias y políticas de inclusión en sistemas sociales sostenibles de bienestar

Coordinadores

Francisco Javier Moreno
Fuentes (IPP, CSIC)
Ada Ferrer i Carbonell
(IAE, CSIC)

Investigadores y Centros

Luis Moreno (IPP, CSIC), Eloisa del Pino (IPP, CSIC), Gibrán Cruz Martínez (IPP, CSIC), Roberta Perna (IPP, CSIC), Jorge Hernández Moreno (IPP, CSIC), Jordi Brandts (IAE, CSIC), Ana Rute Cardoso (IAE, CSIC), Lidia Farré (IAE, CSIC), Esther Hauk (IAE, CSIC), Gloria Fernández-Mayoralas Fernández (IEGD, CSIC), Txetxu Ausín (IFS, CSIC), Melania Moscoso (IFS, CSIC), Concha Roldán (IFS, CSIC) y Remedios Zafra (IFS, CSIC)

1. Introducción

En los últimos decenios, los Estados de Bienestar han experimentado diversos tipos de presiones, que, en tanto “nuevos riesgos sociales”, cuestionan su sostenibilidad y les plantean nuevos retos. Entre esas presiones cabe destacar las siguientes: i) los cambios que experimenta la economía y sus efectos sobre el mercado laboral, debidos a la globalización y los avances tecnológicos; ii) los cambios producidos en el sistema de valores y prácticas sociales, y iii) los cambios demográficos que tienen lugar en escenarios de mayor longevidad y envejecimiento.

Respecto al primer elemento de presión (*las transformaciones económicas y sus efectos en el mercado laboral*), puede señalarse la disociación existente entre, de un lado, el objetivo del crecimiento económico y, de otro, la prosperidad compartida. Esta disociación empezó a producirse en la mayoría de las economías industriales avanzadas a partir del decenio de 1970 y ha continuado con mayor intensidad desde principios del siglo XXI, dando lugar a un aumento creciente de las desigualdades sociales. A ello hay que añadir los efectos de la globalización económica y la deslocalización, que han desplazado un buen número de empleos poco cualificados del sector manufacturero de los países occidentales a países con niveles salariales más bajos. Asimismo, los avances tecnológicos han

reforzado la tendencia al aumento de la desigualdad al reducir la demanda de ciertos perfiles de empleo de calificación media y baja, creando nuevas fuentes de vulnerabilidad y formas de empleos precarios (ver Desafío G).

Un segundo grupo de factores que presionan sobre los Estados de Bienestar deriva de los cambios que se han producido en *los valores y las prácticas sociales de la población*, tales como el mayor grado de individualismo, la secularización o la democratización de las relaciones sociales. En especial cabe destacar la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, que, además de darles autonomía económica, está impulsando rápidos cambios en las estructuras familiares.

El tercer eje de transformación que impacta en los Estados de Bienestar es el relativo a los *cambios demográficos*, y en concreto el envejecimiento de la población (ver Desafío 1-D). Esta tendencia rompe los equilibrios económicos del sistema de pensiones y aumenta las exigencias en materia de cuidados de las personas mayores.

Estos cambios plantean una serie de retos a la estructura y funcionamiento de los Estados de Bienestar, que analizamos en la siguiente sección, centrando la atención en la singularidad de los sistemas de bienestar existentes en los países mediterráneos, entre ellos España.

2. Retos fundamentales

El modelo social europeo y su futuro

El “modelo social europeo” es un proyecto político articulado en torno a los valores de igualdad social, solidaridad colectiva y eficiencia productiva. En sintonía con él, las recomendaciones de la UE en materia de políticas sociales se inspiran en dos principios fundamentales: la “flexiseguridad” y la “inversión social”. En el plano normativo, estas políticas europeas se plasman en el llamado “Pilar europeo de derechos sociales”, cuyo objeto es asegurar, mediante programas de intervención, la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, crear condiciones de trabajo justas, y promover la inclusión social de los grupos más vulnerables (jóvenes, mujeres...). Sin embargo, la creciente visibilidad de los citados “nuevos riesgos sociales” presiona sobre el “modelo social europeo” observándose, sobre todo a partir de la recesión de 2008, una clara tensión entre la “Europa del mercado” (preocupada principalmente por la competencia económica y la austeridad fiscal) y la “Europa que corrige el mercado” (que aboga por el fortalecimiento de la protección social).

La singularidad de los regímenes de bienestar en los países europeos mediterráneos

Dentro del modelo social europeo, los países que forman lo que se denomina el “régimen mediterráneo de bienestar” (entre los que se encuentra España) comparten una serie de rasgos definitorios. Entre ellos destaca su desarrollo económico relativamente tardío, su carácter familiar, su fiscalidad relativamente baja, los menores niveles de gasto social y la coexistencia de sistemas de prestaciones universales (sanidad, educación...) y de sistemas de aseguramiento social, sean de carácter contributivo (prestaciones por desempleo, pensiones...) o no contributivo (atención a huérfanos, discapacitados, viudas...) Como resultado de esa configuración específica, el modelo mediterráneo tiende a reproducir las desigualdades de género, siendo criticado por su débil capacidad redistributiva y por su escaso rendimiento en términos de empleo, así como por su marcada dualidad entre los grupos relativamente bien protegidos (*insiders*: trabajadores fijos con antigüedad en las empresas, empleados públicos...) y los numerosos grupos precarizados y menos protegidos (*outsiders*: jóvenes, inmigrantes, familias monoparentales...). La crisis iniciada en 2008, y los recortes de gasto público asociadas a ella, reveló claramente las debilidades de los equilibrios institucionales del régimen de bienestar del Mediterráneo, reduciendo la eficacia de sus programas de protección social y deteriorando la calidad de las prestaciones. Desde entonces, el futuro del modelo de bienestar mediterráneo se cuestiona abiertamente y deberá adaptarse a un entorno socioeconómico muy diferente.

La igualdad de género

La existencia de sólidas redes de apoyo familiar y la delegación de la carga de las responsabilidades de cuidado en las mujeres tienen importantes repercusiones en la forma en que se gestionan los riesgos y las necesidades sociales y, por consiguiente, en la estructura y el funcionamiento de los Estados de Bienestar, especialmente en el modelo mediterráneo. No obstante, algunos de los rasgos distintivos de este modelo están cambiando rápidamente, impulsados por las transformaciones producidas dentro de las familias y los cambios de valores, creencias y prácticas sociales. España es el país del sur de Europa en el que estas transformaciones han afectado de manera más intensa a la capacidad de las familias para responder a las necesidades de sus miembros, lo que ha obligado a las administraciones públicas a intervenir en diferentes ámbitos de la política social.

Familias e infancia

Las políticas familiares fueron un campo residual del Estado de Bienestar español antes de la década de 2000, cuando se introdujo una amplia gama de medidas para satisfacer las necesidades de las familias. Como resultado de la aplicación de estas medidas, el gasto en protección social para las familias/infancia aumentó muy por encima del promedio en el resto de Europa entre 2004 y 2010, lo que supuso un cambio significativo con respecto a los sistemas de bienestar tradicionales de Europa meridional. Pero esta expansión de las políticas familiares no duró lo suficiente como para vencer las inercias institucionales. Las medidas de austeridad introducidas tras la crisis financiera iniciada en 2008 dieron lugar a una severa reducción de las políticas de apoyo a las familias. El futuro de las políticas de género y familia es incierto en un contexto fiscalmente restrictivo, teniendo en cuenta que las políticas regulatorias (de escaso impacto presupuestario) parecen ser una estrategia deficiente para lograr progresos en estas dimensiones. Las familias están reaccionando a la falta de políticas de apoyo teniendo menos hijos y retrasando la edad de emancipación de los jóvenes, como lleva ocurriendo en España durante los dos últimos decenios.

La emancipación de la juventud

Los “nuevos riesgos sociales” en los Estados de Bienestar tienden a afectar a las personas con especial intensidad durante las primeras etapas de la vida activa, ya que están vinculados a problemas de integración en el mercado laboral y a la consolidación de un puesto de trabajo. Además de las tendencias estructurales, la crisis económica iniciada en 2008 afectó considerablemente al desempleo juvenil en España. Entre 2007 y 2013, la tasa de empleo juvenil (16 a 24 años) pasó del 45,2% al 17,6%, lo que supone un descenso de 27 puntos. Sin embargo, este fenómeno no es nada nuevo, ya que las tasas de desempleo juvenil siempre han sido altas en España en comparación con otros países europeos. Este problema ha tenido graves consecuencias a diferentes niveles, entre ellos la gran inestabilidad e incertidumbre económica y sus implicaciones en la trayectoria vital de los jóvenes (retrasando, o incluso truncando, su proceso de emancipación). Se sabe, además, “que las personas que sufren largos períodos en esta situación, o que se incorporan al mercado laboral en tiempos de recesión económica, tienen más probabilidades de tener empleos precarios y mal remunerados a lo largo de su vida laboral y, por lo tanto, una peor protección social en general y una protección muy deficiente en los períodos de desempleo, ya que no han logrado una carrera contributiva suficiente para recibir prestaciones adecuadas”.

Desempleo y precariedad del mercado laboral

Las políticas de desregulación adoptadas en la mayoría de los países europeos en los últimos decenios han dado lugar a la aparición de “mercados laborales duales” con una clara división entre trabajadores estables y precarios (ver Desafío 1-G). La crisis de 2008 agravó esta situación, sacando a la luz los problemas tradicionales del sistema de protección del desempleo en España (bajo nivel de protección de los desempleados, aumento del número de trabajadores desempleados en riesgo de pobreza, desempleo juvenil...) Además de los que no reciben apoyo para afrontar la situación de desempleo, el problema de los “trabajadores pobres” (trabajadores con salarios bajos y/o empleo precario cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza) es muy común entre los empleados poco cualificados. Este problema se ha agravado claramente en los últimos años, ya que los recortes salariales han afectado especialmente a los trabajadores que se encuentran en las últimas decilas de la estructura de distribución de la renta. Al creciente porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza se suman los jóvenes sin empleo, en particular los trabajadores no cualificados, lo que constituye un reto especialmente grave para el futuro del país.

Desigualdad y pobreza

La transición de las sociedades industriales a las denominadas postindustriales implicó profundas transformaciones en los mercados laborales, en la familia y en las estructuras de protección social, ampliando la brecha entre los segmentos más privilegiados y los más desfavorecidos, abriendo nuevos espacios para la exclusión social.

Como resultado de la crisis financiera y económica de 2008, no todos los ciudadanos pudieron integrarse en los circuitos de “normalidad cívica” mediante el acceso a un empleo remunerado. España sufrió muy intensamente los efectos de esa crisis, convirtiéndose en uno de los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad de ingresos de toda Europa. Pero los desequilibrios macroeconómicos que afectaban a España ya estaban presentes antes de la crisis, ya que muchos de esos problemas están relacionados con la configuración de su mercado de trabajo y con la relativa debilidad de su sistema de bienestar. En un contexto de crecientes restricciones presupuestarias, la idea de concentrar los recursos en los grupos desfavorecidos ha ido ganando adeptos. El principio de selectividad tiende a imponerse frente a los viejos valores de universalismo y solidaridad que originalmente habían impulsado la expansión del Estado de Bienestar.

Exclusión residencial

La vulnerabilidad en el campo de la vivienda es simultáneamente causa y consecuencia de la exclusión social. La estructura residencial española se caracteriza por el enorme peso de la propiedad de la vivienda y el papel residual del alquiler, así como por el bajo grado de intervención de las administraciones públicas en este ámbito (España dedica el menor porcentaje del PIB al gasto público en vivienda, en torno al 1% frente a la media del 2% en la UE). La desigualdad social “se expresa geográficamente a través de la articulación de los territorios y la ubicación de los grupos sociales en ellos”. Por ello, los procesos de exclusión social suelen ir acompañados de procesos de segregación territorial que a su vez potencian la exclusión social a través de procesos de estigmatización, precariedad de la provisión de servicios y bienes públicos... El desarrollo de una política urbana que intervenga en los barrios más desfavorecidos para frenar los procesos que operan aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social aparece como una herramienta política extremadamente necesaria y urgente.

Salud y asistencia sanitaria

Aunque es cierta la mejora producida en los principales indicadores de salud en nuestro país a lo largo de las últimas décadas, es también un hecho que esa mejora no se ha distribuido de manera uniforme y que las desigualdades en salud dentro de la sociedad española han aumentado en los últimos años. En el contexto de la crisis económica, las medidas de austeridad presupuestaria adoptadas en 2012 con respecto al Sistema Nacional de Salud alteraron radicalmente el funcionamiento de este sistema, dando lugar a un evidente deterioro de su funcionamiento. Esas reformas y las limitaciones presupuestarias implicaron un deterioro de la calidad de la atención prestada debido al cierre de camas de hospital, la reducción de la proporción de profesionales sanitarios por paciente y la insuficiencia general de financiación de los centros de atención primaria y los hospitales. Asimismo, la desmotivación de los profesionales del sector de la salud, el deterioro de la percepción pública sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y la creciente tendencia de los segmentos más acomodados de la población a recurrir a planes de aseguramiento sanitario privado, constituyen amenazas adicionales para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Un mayor énfasis en la atención primaria y una mejor articulación entre la dimensión sanitaria y el ámbito de los servicios sociales, podrían resultar fundamentales para responder a los desafíos sociales que se plantean a las sociedades avanzadas contemporáneas como la española.

Dependencia

Las políticas de atención a las personas dependientes en España han sido muy deficientes en recursos, basadas en transferencias monetarias relativamente escasas, y sólo marginalmente en la prestación pública de servicios. Así pues, la oferta de residencias públicas de atención y de centros de vida asistida para personas mayores es notablemente limitada. Además, a pesar del gran volumen de personas dependientes que viven con sus familiares, el sistema de atención domiciliaria ha estado poco desarrollado, tanto en términos de cantidad (horas de asistencia ofrecidas), como de cobertura (número de personas mayores atendidas). Una medida clave adoptada para responder a la creciente demanda de la sociedad española fue la elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Protección de las Personas en Situación de Dependencia (conocida como “Ley de Dependencia”, aprobada en 2006), que supuso la creación de nuevas instituciones y el fortalecimiento de algunas de las ya existentes. Sin embargo, las medidas de austeridad fiscal aplicadas desde la crisis de 2008 dificultaron la aplicación de esta legislación y alentaron a las administraciones públicas a reorientar el sistema hacia medidas que pudieran reducir los costes totales del programa. Estos factores desplazaron la prestación de la atención hacia un mercado informal capaz de ofrecer flexibilidad y menores costes.

Sostenibilidad del Estado de Bienestar

La reflexión sobre la sostenibilidad futura del Estado de Bienestar ha girado tradicionalmente en torno a la cuestión de la viabilidad financiera de los programas de protección social. Pero hay otros aspectos relevantes en ese proceso de definición de posibles escenarios futuros, como los que se refieren al papel que desempeña el debate político sobre el Estado de Bienestar, las preferencias normativas de los ciudadanos (con respecto a lo que se considera el grado más deseable de cohesión y solidaridad en el seno de una determinada sociedad) y, en última instancia, el nivel de apoyo social a la redistribución de la riqueza.

Estos elementos son fundamentales para determinar el contexto en el que se enmarcan e interpretan las consideraciones económicas y financieras y, por lo tanto, para establecer los límites del grado de apoyo de los ciudadanos a los programas y planes incluidos bajo el paraguas del Estado de Bienestar.

La crisis que comenzó en 2008 puso de nuevo en el centro del debate social y político la cuestión de la sostenibilidad económica de las políticas de bienestar. Así, la discusión sobre las reformas y la posible reducción del gasto en esta área de políticas volvió a estar en la primera línea del debate político,

especialmente en los países del sur de Europa particularmente afectados por la crisis económica y financiera. Los desafíos para la transformación de los sistemas económicos de estos países son, sin duda, muy importantes.

Hay margen para una profunda redefinición de los equilibrios en las funciones que desempeñan el Estado, el mercado y la sociedad civil (incluyendo no sólo a las familias, sino también a las organizaciones del Tercer Sector) en la regulación, financiación y provisión de los diferentes programas de protección social y políticas de bienestar en Europa (ver Desafío 1-H). En consecuencia, los Estados de Bienestar europeos han buscado una redefinición de sus programas a través de medidas de contención de costes y de modificación de las prioridades asignadas a cada uno de los diferentes esquemas.

Más allá de la forma en que los debates sobre el Estado del Bienestar tengan lugar en la arena política, las actitudes de los ciudadanos hacia la protección social se basan en gran medida en los valores sociales compartidos que constituyen el fundamento de una sociedad y que tienen una importancia crucial. A este respecto, cabe destacar el amplio apoyo de los contribuyentes europeos a la redistribución de la riqueza a través del Estado, estando muy extendida la idea de que las políticas públicas deben financiarse mediante impuestos sin recurrir a la deuda (que debe utilizarse principalmente para financiar políticas y programas expansivos de carácter “extraordinario”).

BLOQUE TEMÁTICO IV: PATRIMONIO Y MEMORIA

Desafío K: Lo que queda del futuro: sostenibilidad a través del patrimonio

Coordinadores

Felipe Criado Boado
(INCIPIT, CSIC)

Blanca Ramírez Barat
(CENIM, CSIC)

Investigadores y Centros

David Barreiro (INCIPIT, CSIC), Montserrat Benítez (EEA, CSIC), Emilio Cano Díaz (CENIM, CSIC), Marta Castillejo Striano (IQFR, CSIC), Judith Farre Vidal (ILLA, CSIC), Rafael Fort González (IGEIO, CSIC-UCM), Mariano García Fernández (MNCN, CSIC), Esther Hernández (ILLA, CSIC), Sagrario Martínez Carrera (IEM, CSIC), Julio Navarro Palazón (EEA, CSIC), Almudena Orejas Saco del Valle (IH, CSIC), Antonio Orihuela Uzal (EEA, CSIC), Cristina Sánchez-Carretero (INCIPIT, CSIC), Mónica Verges Alonso (MNCN, CSIC), María Angeles Villegas Broncano (IH, CSIC), Amalia Zomeño Rodríguez (ILC, CSIC).

Desafío K: Lo que queda del futuro: sostenibilidad a través del patrimonio

Coordinadores: Felipe Criado Boado (INCIPIT) y Blanca Ramírez Barat (CENIM)

1. Introducción

En la relación de todas las sociedades con su pasado existe un conjunto de elementos y prácticas heredadas que se considera necesario conservar para su uso presente y legado a las generaciones futuras. Este conjunto es lo que llamamos “patrimonio”.

El patrimonio es reconocido cada vez más como un elemento clave para la cohesión social, el desarrollo socioeconómico sostenible y el bienestar de las personas. Los recursos destinados a la conservación del patrimonio han pasado de ser considerados un gasto, a ser considerados una inversión con un alto retorno. La industria del patrimonio ha sido parte activa en las transformaciones de las últimas décadas, ha generado empleo, ha contribuido a la expansión mundial del turismo y se ha convertido en codiciado emblema identitario por parte de las comunidades políticas. En la actualidad no existe ningún proceso social ni político que no utilice el patrimonio de alguna forma. De ahí la actualidad del tema y la importancia de que un organismo como el CSIC tenga capacidades de investigación en este ámbito.

El papel del patrimonio en los objetivos de desarrollo sostenible, en la mejora del futuro de las personas y del planeta han sido destacados por diversas organizaciones internacionales, como ICCROM, ICOMOS, UNESCO y Europa Nostra, y reflejado en diferentes documentos estratégicos nacionales e internacionales, destacando la importancia de la investigación científica y técnica para alcanzar estos objetivos. El establecimiento en 2010 de la *Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change* (JPI-CH), en la que España participa desde el principio, parte del reconocimiento de que la investigación científica y técnica es un elemento fundamental para preservar, conocer y difundir el patrimonio y asegurar sus impactos positivos.

Esto lo convierte en un tema de gran actualidad e importancia para la investigación científica y técnica, en la que Europa ocupa claramente una posición mundial de liderazgo en la creación y desarrollo de una ciencia del patrimonio. En este contexto y siendo España poseedora de uno de los patrimonios más ricos y diversos del mundo, debe desempeñar el rol que le corresponde en el avance de la investigación científica en patrimonio en sintonía con el liderazgo que su patrimonio tiene a escala mundial.

El estudio científico del patrimonio o ciencia del patrimonio, presenta unas características singulares y un alto componente interdisciplinar que hacen de

las cuestiones científicas que se plantean en el ámbito del patrimonio resulten especialmente complejas.

La ciencia del patrimonio se fundamenta en tres ideas clave íntimamente relacionadas entre sí, aunque con diferentes abordajes: la salvaguarda o conservación, la valorización y el análisis de los procesos sociales que generaron ese patrimonio. Además, el proceso de creación o ejecución, junto con las transformaciones sufridas a lo largo de su historia hacen que los objetos del patrimonio, con frecuencia, sean únicos, y ello requiere una aproximación particular a cada problema. Finalmente, por su doble naturaleza material e inmaterial es necesario abordar cuestiones con origen en las ciencias humanas utilizando técnicas y herramientas científicas, en un marco que requiere la colaboración entre profesionales de muy diversas disciplinas. Cuando se enfoca desde el campo de las humanidades y las ciencias sociales, trata de resolver cuestiones relativas al origen, historia y significado de los bienes y prácticas culturales, su influencia sobre el desarrollo, y su valor y sentido para las sociedades que lo han generado, custodiado, poseído, disputado o desposeído. Cuando lo hace desde el campo de las ciencias experimentales, la ciencia del patrimonio estudia la composición material, sistemas constructivos y la tecnología de los bienes culturales, los mecanismos de deterioro, y aborda los problemas de conservación y el desarrollo de nuevos materiales y nuevas técnicas de análisis de los mismos.

2. Diagnóstico de situación del CSIC en este Desafío

La naturaleza del CSIC, como institución que abarca todas las áreas del conocimiento, da cabida de manera óptima a campos interdisciplinarios y transversales, como lo es el patrimonio. Hablar de la ciencia del patrimonio en el CSIC es hablar de la variedad de disciplinas que lo abordan desde todos los ámbitos del saber y de líneas de investigación muy diversas: conservación preventiva, desarrollo de nuevos materiales y métodos de análisis, cambio social, variedades lingüísticas, formas de expresión artística, políticas públicas patrimoniales, burocracia y conflicto, análisis de modelos de participación ciudadana, digitalización, etc.

El CSIC cuenta con una extensa trayectoria de investigación en ciencia del patrimonio existiendo grupos en diversos institutos, y dentro de las tres áreas globales (Materia, Vida y Sociedad), con líneas de investigación en este campo y con una dilatada tradición de colaboración. Recordemos, por ejemplo, cómo en el año 2001 se creó la *Red Temática de Patrimonio Histórico* y

Cultural del CSIC (RTPHC), con la participación de más de 30 grupos de investigación de nuestra institución, que tuvo un papel fundamental en el establecimiento de colaboraciones interdisciplinarias y en la formación de una nueva generación de científicos del patrimonio, muchos de los cuales han continuado trabajando en este campo dentro del CSIC. En 2010 la RTPHC se transforma en la *Red de Ciencia y Tecnología para la Conservación del Patrimonio Cultural (TechnoHeritage)*, ampliándose a otras instituciones y la reciente puesta en marcha de la *Plataforma Temática Interdisciplinar Patrimonio Abierto, Investigación y Sociedad (PTI-PAIS)*, diversos grupos de investigación del CSIC en diferentes áreas e institutos han trabajado de forma colaborativa y en contacto con todos los actores del sistema de I+D+i del ámbito del patrimonio (universidades, instituciones culturales y empresas), consolidando una actividad que ha situado a estos grupos en un nivel competitivo tanto estatal como europeo. Esto se refleja en su participación en numerosos proyectos e iniciativas científicas relacionadas con el patrimonio, entre los que cabe destacar el liderazgo de la participación española en la construcción de la futura infraestructura europea de investigación en ciencia del patrimonio, E-RIHS), así como la concesión de tres ERCs en este campo.

Los grupos del CSIC han demostrado, además, una alta capacidad de transferencia del conocimiento a las instituciones y empresas que trabajan en este campo, tanto por medio de colaboraciones en proyectos competitivos como a través de contratos para la realización de proyectos de I+D+i y asistencia científico técnica.

Sin embargo, es preciso reconocer también algunas *debilidades* observadas en el campo de la ciencia del patrimonio a nivel general. La principal debilidad de la ciencia del patrimonio tiene que ver con lo innovador de sus planteamientos. Tratándose de un campo en el que las distintas disciplinas han concurrido de forma independiente durante mucho tiempo, la falta de reconocimiento de este campo interdisciplinar se traduce, en la práctica, en una insuficiencia de recursos humanos y materiales. Dentro del CSIC, la tradicional división en áreas temáticas ha lastrado y dificultado la colaboración interdisciplinar y el desarrollo de los grupos de investigación que han trabajado en este campo frontera entre las diferentes áreas temáticas. Hay que destacar, no obstante, que la reestructuración del CSIC en tres áreas globales y la consideración de la ciencia del patrimonio transversal a todas ellas, pero, sobre todo, el reconocimiento de las zonas de solapamiento entre las mismas (con el desarrollo de acciones como las PTIs) ofrecen una oportunidad de paliar esta debilidad.

En la misma línea, otra dificultad para el avance de la ciencia del patrimonio es la escasez de formación interdisciplinar reglada en esta materia. Las personas que investigan en ciencia del patrimonio proceden bien de estudios de humanidades, o bien de carreras de científico-técnicas, incluyendo la arquitectura y las ingenierías, sin que exista una formación que integre suficientemente ambos aspectos. En relación con este punto, es necesario recalcar que una debilidad de la investigación, y todavía presente, es, precisamente, la falta de conexión con el entorno social y sus demandas, lo que mitiga la relevancia de la investigación y disminuye su potencial de transferencia

3. Retos y escenarios de futuro

La situación actual, con la crisis de nuestro modelo socio-económico, la polarización, la amenaza del cambio climático, la disrupción de la COVID-19, etc. plantea la necesidad de pensar y resolver cómo se construirá la memoria de las experiencias que como sociedad y como individuos estamos viviendo, lo que atañe de lleno al patrimonio: cómo el patrimonio condiciona y tiene efectos sobre nuestras vidas, y cómo nuestras vidas cambian un entorno que mañana será memoria y patrimonio.

El desafío al que se enfrenta la investigación en patrimonio en estos momentos es, de entrada, un regreso al origen: ¿Qué queremos y debemos seleccionar para su salvaguarda, y por qué? Al mismo tiempo nos genera nuevas preguntas en relación al patrimonio del futuro: ¿Qué papel debemos jugar los expertos en un proceso que ha dejado de ser nuestra competencia exclusiva? ¿Cómo abordamos conjuntamente desde la investigación la materialidad de nuestro mundo y de nosotros mismos con la dimensión simbólica e imaginaria, las relaciones sociales, la cultura y el lenguaje, que son las instancias en las que se genera la necesidad de salvaguardar determinadas entidades?

En este contexto la ciencia del patrimonio se enfrenta a una serie de retos globales y específicos que debemos considerar.

El reto principal e inmediato es el fortalecimiento de la ciencia del patrimonio como estrategia de investigación, lo que se traduce en el recurso a la cadena de valor del patrimonio como armazón conceptual de la misma. Esta cadena, que liga los procesos básicos de generación y socialización de conocimiento (registro, análisis, interpretación, intervención, gestión, circulación y valorización) con el entorno en todas sus fases (interacción entre los agentes científicos y los agentes sociales en toda su variedad), es lo que posibilita que el patrimonio sea un medio que contribuya a los Objetivos del Desarrollo

Sostenible en diferente medida. Para abordar este gran reto debe mirarse también hacia Europa, hacia las nuevas estrategias de cooperación científica en este campo, como las *Iniciativas de Programación Conjunta* (JPI) y otras iniciativas como la futura infraestructura europea en ciencia del patrimonio, E-RIHS. Este tipo de iniciativas marcarán el desarrollo y la excelencia de la investigación en ciencia del patrimonio.

Para ello un importante desafío es el *fortalecimiento de la interdisciplinariedad* y de la colaboración entre disciplinas, no sólo en los términos en los que ya hay una trayectoria consolidada (proyectos y redes), sino en el propio diseño de líneas de investigación esencialmente interdisciplinares, con proyectos diferentes, pero complementarios. Esta interdisciplinariedad que describe a la ciencia del patrimonio es fundamental en la estrategia científica que apunta hacia la necesidad de contribuir, en un horizonte de sostenibilidad, a un modelo alternativo de sociedad y ciudadanía, que trate de gestionar los problemas reales, locales y globales, de un mundo en el cual los conflictos derivados de las periódicas crisis humanas y económicas siguen creciendo. El patrimonio no es una entidad neutra, ni mucho menos intrínsecamente positiva, en este mundo; es parte del mismo. Por lo tanto, el desafío es que el patrimonio pueda funcionar como medio de transformación de la realidad: esto es lo que justifica una ciencia del patrimonio en última instancia, su relevancia social. La ciencia del patrimonio debe contribuir, a incrementar la conciencia crítica de la ciudadanía, así como a generar formas alternativas de relación social, basadas en la igualdad, la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad, entendida como respeto a la memoria de los que nos precedieron, a nosotros mismos encarnamos a los que nos sucederán.

4. Retos específicos

Dentro del reto global, cabe destacar algunas líneas de trabajo, en las que ya se viene avanzando, que sin duda seguirán siendo relevantes en el futuro próximo y que darán lugar a nuevos retos que pueden ser abordados por el CSIC.

Territorio, paisaje y patrimonio

A partir del conocimiento histórico hasta la comprensión y transmisión del contexto espacial del patrimonio: el patrimonio es un vehículo de importancia máxima a la hora de proveer a la sociedad actual de las redes de significado necesarias para comprender los fenómenos de cambio acelerado en los que nos hallamos inmersos, así como para ayudar a gestionar los procesos de cambio tanto a nivel simbólico (identidades colectivas) como territorial. El

conocimiento sobre el pasado es necesario para poder gestionar la realidad presente, para contextualizar el tiempo y el espacio actuales y para proyectarlos hacia un horizonte de sostenibilidad.

La investigación arqueológica sobre paisajes, y su reconocimiento patrimonial, han sido y son generadores de recursos comunitarios y duraderos en áreas rurales.

Estudio crítico de los procesos de patrimonialización

El objetivo de este reto es estudiar los procesos de formación y uso del patrimonio en el presente y el pasado. Hasta hace poco se ha mantenido una visión del patrimonio como algo intrínsecamente positivo, y no como un campo social en el que se despliegan valores e intereses, muchas veces contrapuestos, y cuyos efectos no siempre son positivos para la comunidad, o para los sectores más vulnerables de ella. Para poder construir estrategias de valorización patrimonial sostenibles e innovadoras es necesario partir de investigaciones y análisis críticos: es decir, de la producción de conocimiento crítico sobre cómo las sociedades se apropian y usan el patrimonio.

Innovación social y patrimonio cultural

El objetivo es el desarrollo de acciones para una valorización social del patrimonio del que se benefician las comunidades que lo poseen y el conjunto de la ciudadanía, como elemento integrador y parte de la identidad nacional y europea. Dentro de esa línea se está iniciando actualmente una nueva dimensión de puesta en valor hacia la sociedad: la ciencia ciudadana. Desarrollar una metodología de trabajo optimizada y establecer redes de ciencia ciudadana permitiría explotar al máximo este fenómeno tanto para contribuir a la creación de conocimiento como para visibilizar y aumentar la valoración tanto de la investigación científica como del patrimonio. En esta línea también podría considerarse hacer partícipe a la sociedad, desde las premisas del conocimiento científico, en la definición de las estrategias de la investigación sobre el patrimonio e incluso en los procesos de estudio, en la línea de los programas SwafS de Ciencia con y para la Sociedad de los planes nacionales y europeos.

Patrimonio, lenguas y comunicación

El estudio del lenguaje y de la lengua desde el punto de vista patrimonial es una prioridad en casi todas las normativas patrimoniales vigentes, ya que se considera a las lenguas como bienes patrimoniales. El gran desafío es articular una estrategia de investigación y salvaguarda de las lenguas y sus variantes

que integre la dimensión inmanente al sistema lingüístico con sus distintas manifestaciones históricas, geográficas, sociales o estilística.

Desarrollo y aplicación de técnicas no destructivas de análisis

El desarrollo y aplicación de técnicas no destructivas o no invasivas que proporcionen información sobre el bien cultural sin dañar o modificar el objeto. En este aspecto, es especialmente relevante hacer hincapié en las técnicas de evaluación *in situ*, que permitan estudiar objetos que por diferentes motivos no pueden ser trasladados al laboratorio, y en el desarrollo de *técnicas de diagnóstico* que proporcionen información sobre el estado de conservación de los materiales o del BBCC en su conjunto. Estas técnicas se pueden aplicar a todo tipo de BBCC en modo *remote sensing* desde la escala del objeto, a la del yacimiento o la de unidades territoriales.

Avances en conservación preventiva

Avances en conservación preventiva, incluyendo sistemas de monitorización y el desarrollo de modelos matemáticos de predicción y a largo plazo. Uno de los problemas actuales es la limitación temporal de los proyectos (3 años) que impide el desarrollo de proyectos ambiciosos a largo plazo, que por la naturaleza de los bienes estudiados son muy importantes. Por ello hay que recurrir a ensayos acelerados, cuyos resultados no siempre son bien interpretados. En este aspecto resulta de gran importancia la identificación y predicción de los problemas derivados del cambio climático, la aparición de nuevos contaminantes, desarrollo del conocimiento de las interacciones de los mismos con los materiales de los BBCC, etc. En cuanto al desarrollo de sistemas de monitorización y análisis, hay que considerar el empleo de herramientas digitales, inteligencia artificial, aplicaciones móviles etc. para seguimiento y diagnóstico.

Desarrollo de nuevos materiales

El desarrollo de nuevos materiales para la conservación y restauración, compatibles con los existentes y que no aceleren su deterioro, con especial atención al empleo de productos no tóxicos y materiales sostenibles y durables. En este reto uno de los aspectos más importantes es el estudio de la interacción entre el material nuevo y el antiguo, con especial atención a su evolución a largo plazo.

Estandarización y gestión de datos

La estandarización tanto metodológica como en los datos, que favorezcan el acceso y difusión del conocimiento y el intercambio de información, en línea con los planteamientos actuales de Ciencia Abierta, cumpliendo con los criterios FAIR. La estandarización y la interoperabilidad de los datos supone un reto con

diferentes vertientes. Por un lado, hay que considerar la normalización metodológica en la realización de medidas y ensayos de laboratorio, definición de protocolos etc. que permitan obtener datos comparables entre diferentes grupos y técnicas, teniendo en cuenta que en muchos casos la instrumentación y metodología que se emplean no son estándares, sino que han sido desarrolladas específicamente para patrimonio. Por otra parte, están la estandarización y gestión de datos en el campo de las humanidades digitales. La heterogeneidad de los datos científicos y documentales que se manejan en este campo supone un reto para su definición y gestión eficiente. Finalmente debe facilitarse la posibilidad de recoger en normativas europeas los ensayos y metodologías que se aplican.

Protocolos de gestión del material patrimonial

El patrimonio se conserva en manos de instituciones públicas y privadas que, en la mayoría de los casos, necesitan y buscan poner en valor su material. Esto a menudo precisa de una metodología de intervención, gestión y conservación del patrimonio que va de la mano de una investigación científica multidisciplinar. De hecho, es preciso que desde el CSIC se pueda ofrecer un análisis holístico de este patrimonio, formando, manteniendo y afianzando un protocolo de gestión que proporcione a esas instituciones la confianza y a la vez el prestigio de la investigación científica. La existencia de este protocolo, además, podría poner en marcha, de forma tutorizada, los procesos de conservación y restauración del patrimonio, no ya en manos de los investigadores, sino de la mano y financiación de las Comunidades Autónomas interesadas en su preservación.

5. Propuestas y recomendaciones

El CSIC tiene capacidad para aportar soluciones a los retos planteados en el ámbito de la ciencia del patrimonio. Por ello, consideramos necesario seguir apostando y apoyando plataformas colaborativas como la mejor garantía de éxito. Señalamos, además, que, a nivel europeo, “se presenta una oportunidad única a través de la puesta en marcha y consolidación de la infraestructura europea E-RIHS, en la que se contemplan varios de estos retos, incluyendo el desarrollo de nuevas técnicas de análisis o la digitalización y gestión de datos, en la que DIGITAL-CSIC puede desempeñar un papel relevante”. Asimismo, estamos convencidos de que el CSIC tiene en este momento la posibilidad de implicarse activamente y de consolidar el liderazgo nacional en la ciencia del patrimonio, así como de incrementar su peso a nivel internacional. En este sentido, el Plan Estratégico de Grandes Infraestructuras de Investigación (GII) del CSIC indica que “las GII son uno de los principales ejes tractores de la política científica actual (...)” y que “es crucial asegurar el acceso a las infraestructuras

de investigación de primer nivel mundial para mantenernos al frente de la ciencia y la tecnología y ser competitivos en una economía global basada en el conocimiento”. De igual forma, se debería considerar la participación en DARIAH, la infraestructura europea para Humanidades Digitales.

Es también el momento de valorar la importancia y la necesidad de una formación especializada y de alto nivel en ciencia del patrimonio. Por ello, “el CSIC estaría en disposición de ofrecer un programa formativo de tercer ciclo, con estudios de máster” y un programa de doctorado asociado a alguna universidad, como la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo). En este sentido señalamos que el CSIC “dispone de recursos humanos y materiales suficientes para abordar este reto”, gracias a la red de institutos existente en las diferentes áreas y con presencia de grupos especializados en patrimonio cultural (CENIM, IQFR, IEM, INCIPIT, IRNAS, CCHS, IGEO...). Además, “la puesta en marcha de programas propios de contratos predoctorales y de programas de intercambio y de estancias breves de investigadores en formación entre grupos del CSIC favorecería además la formación interdisciplinar necesaria para este campo”.

Por último, otra tarea importante es mejorar la comunicación de la ciencia en el campo del patrimonio. El impacto de la investigación en ciencia del patrimonio resulta poco visible para la sociedad y aunque en los últimos años ha venido creciendo de manera importante la conciencia sobre el valor del patrimonio cultural y natural como elemento identitario fundamental de las personas y los distintos grupos sociales, además de un activo importante para el desarrollo económico sostenible, es importante transmitir el papel de la investigación y las aportaciones del CSIC en este campo.

Desafío L: Memorias movilizadas: despliegues del pasado en el presente y en el futuro

Coordinadores

Francisco Ferrándiz Martín
(ILLA, CSIC)
Reyes Mate Rupérez
(IFS, CSIC)

Investigadores y Centros

José Antonio Zamora (IFS, CSIC), Antolín Sánchez Cuervo (IFS, CSIC), María Jesús Santasmases (IFS, CSIC), Leoncio López Ocón (IH, CSIC), Alfredo González-Ruibal (INCIPIT, CSIC), Pedro Tomé (ILLA, CSIC), Marije Hristova (University of Warwick), Alejandro Baer (University of Minnesota), Stef Craps (University of Ghent), Astrid Erll (Goethe-Frankfurt University) and Memory Studies Association (MSA)

1. Introducción

Comenzamos el análisis de este Desafío señalando que “la memoria es una categoría fundamental para el conocimiento porque es un concepto temporal”. Pero añadimos que “no es un tiempo cualquiera”, ya que se refiere, de entrada, al pasado, y el pasado es “un rico caladero de sentido en el que todas las

disciplinas echan sus redes”. Por eso, y dado que cada disciplina tiene su particular teoría sobre la memoria, consideramos necesario, por un lado, atender a toda esa pluralidad, pero, por otro, poner orden en todo ello para que se pueda hablar de memoria desde una perspectiva interdisciplinar.

Asimismo, afirmamos que la memoria se nos presenta hoy como una categoría que, además de sentimiento, produce conocimiento, y que además de ser privada, es pública. El hecho de que la memoria pertenezca también al orden del conocimiento (la parte oculta de la realidad) la convierte en una facultad hermenéutica, además de presentarse en nuestro tiempo como un imperativo moral para evitar que caigan en el olvido determinados hechos históricos. Es por esto que la memoria se ha convertido en el principio inspirador de un programa teórico y práctico, “alternativo al que rigió en el pasado y sigue rigiendo, capaz de novedad y, por tanto, de futuro”.

Creemos por ello que se ha producido una eclosión de los estudios de memoria en el ámbito académico, pasándose de un supuesto “déficit de pasado”, debido al vértigo de los procesos de globalización, a un “superávit o saturación memorial”. Sea como fuere, lo cierto es que ha emergido un campo de investigación interdisciplinar en el que se estudian las relaciones de los distintos grupos humanos con el pasado, incluyendo en ello tanto el recuerdo individual y familiar, como las políticas de memoria elaboradas a escala nacional o supranacional.

Es éste un campo en el que se tiende a “concebir la memoria más como un proceso fluido, diversificado y flexible, que como un objeto estático”, sobre todo a raíz del uso de las nuevas tecnologías digitales. De ahí que la memoria tenga “cada vez más cualidades transculturales, transgeneracionales y transmedia”, y haga especialmente recomendable la perspectiva interdisciplinar, creándose incluso un nuevo léxico y vocabulario analítico. Disciplinas como la sociología, la ciencia política, la psicología, los estudios literarios, los estudios religiosos, la neurobiología, la antropología o la geografía cultural contribuyen de modo significativo a este campo emergente de investigación.

Por eso planteamos que la vocación de este Desafío es explorar tanto las bases neurológicas de la memoria, “como sus fundamentos teóricos y filosóficos, así como sus modos de representación, su relación con las identidades colectivas en sus distintas escalas, sus formas de movilización política, sus modelos institucionales, sus protocolos y rituales, sus expresiones literarias y artísticas, sus tensiones y vasos comunicantes con la historia formal y con otros registros memoriales alternativos (...)”.

2. Entorno social y líneas transversales de investigación

Al igual que ocurre en cualquier otro ámbito temático, el entorno social (tanto en su dimensión cultural, como política y económica) condiciona, e incluso llega a determinar, las líneas de investigación de los estudios de memoria. En nuestro caso puede destacarse un conjunto de líneas transversales que son las que caracterizan este ámbito temático, y que deben ser la base de los futuros programas de investigación.

Bases neurobiológicas de la memoria

Los estudios de memoria vienen incorporando líneas de investigación relacionadas con los procesos neurobiológicos, con objeto de analizar las pautas de actividad cerebral que están en la base del recuerdo. Tales iniciativas abren el campo de la interdisciplinariedad en este ámbito temático al permitir que emerja la convergencia de intereses entre los estudios de memoria de carácter más biológico y los de base más sociocultural. De este modo, los estudios se abren a temas tales como las enfermedades de la memoria o las dinámicas del olvido activo, cuestiones éstas que están hoy muy presentes en las políticas institucionales de memoria.

Memoria y representación

Consideramos que la “memoria individual opera en marcos de naturaleza colectiva, trayendo el pasado al presente y abriendo la posibilidad de la justicia reparadora del sufrimiento”. Esto encierra un importante potencial de futuro, que se plasma en las políticas que, desde las instituciones públicas, se implementan con esa finalidad de reparación. En ese sentido, adquiere una especial relevancia la *representación*, es decir, la forma en que la “memoria hace presente o representa el pasado”, lo que permite darle en este Desafío un papel significativo a los testigos.

Procesos de memoria e identidades colectivas

La tentación autoritaria es algo implícito al modo como hoy y siempre los Estados forjan las identidades colectivas mediante alguna forma de invención de su pasado. Por eso, no se puede “hacer frente a las manifestaciones autoritarias del presente sin tener en cuenta estas memorias del pasado...”. De ahí el interés de los estudios sobre la conexión entre memoria y nuevas formas de autoritarismo, y, dentro de ellos, el riesgo de que la insuficiencia o el fracaso de la memoria del pasado posibilite el resurgir en las sociedades de hoy de regímenes autoritarios y de sus discursos de racismo, xenofobia o nacionalismo excluyente. Por eso, valoramos dicha línea de investigación, ya que, para comprender el neautoritarismo, creemos necesario realizar investigaciones sobre las insuficiencias y los límites de la memoria histórica.

Políticas de memoria

Son cada vez más frecuentes las pugnas entre los diversos grupos sociales por impulsar determinadas versiones del pasado. En ese contexto de controversia y debate emergen las políticas de memoria como formas institucionalizadas de gestionar el pasado. Son políticas que incorporan medidas reparadoras, justicia retroactiva y nuevos ciclos de conmemoración, así como formulan nuevas categorías de víctimas. Sin embargo, en el marco del actual proceso de globalización, todas se ven influidas por dinámicas transnacionales, dando lugar a memorias en continua negociación (de ahí que se utilice el calificativo de “multidireccionales” para adjetivarlas), memorias que deben ser analizadas.

Memorias de los conflictos

La relación entre “memoria” y “conflicto” es amplia y compleja, lo que explica el actual interés de los investigadores por analizar el rebrote de las memorias de las guerras y las violencias del pasado. Creemos necesario distinguir tres modelos de memoria: i) *memoria antagonista* (que construye comunidades homogéneas en términos de “buenos” y “malos”); ii) *memoria cosmopolita* (que pone en el centro a la víctima y que tiene como puntal el testimonio de los supervivientes, aun a riesgo de descontextualizar el pasado abogando por el diálogo y la reflexión), y iii) *memoria agonística* (que si bien sitúa a los testigos y supervivientes en el centro, aboga también por tener en cuenta los aspectos políticos del pasado, incluso incorporando en el análisis el punto de vista de los perpetradores).

Diásporas y exilios

La relación de la memoria con los exilios y las diásporas se puede abordar en dos niveles: uno, de alcance subjetivo, basado en la experiencia autobiográfica del exilio, y otro, de alcance objetivo, menos descriptivo y más crítico, que aspira a desvelar ámbitos de la realidad ocultos o inadvertidos. En ambos casos, la memoria de los exilios recoge un pasado ausente, planteando otras formas de narrar, acordes con los nuevos modos (más plurales) de entender la ciudadanía. La memoria de los exilios y las diásporas es, en definitiva, una “gran fuente de inspiración para desenmascarar la matriz nacionalista inscrita en los modernos relatos de nación y alumbrar nuevas maneras de narrar esta última a partir de la alteridad, la desubicación y la pluralidad, mucho más que la identidad, el territorio y la unidad”.

Memorias con género

Es un hecho que los estudios de memoria suelen ajustarse a jerarquías de género, de tal modo que predominan en ellos las perspectivas de los hombres sobre las de las mujeres. Consideramos que, si bien el avance del feminismo ha permitido

paliar esta deficiencia, la realidad es que aún persiste ese desequilibrio. Por ello, insistimos en que se deben “buscar las fuentes de mujeres y las tareas denominadas de mujeres para incluirlas en los espacios y las narrativas de la memoria histórica y los análisis del olvido”. Haciendo eso, la perspectiva de género contribuye a una memoria más inclusiva, otorgando a las mujeres una función de acopio, archivo y agencia de la memoria histórica. Este es un gran desafío en los estudios de memoria que, en nuestra opinión, debe ser potenciado.

Memorias de la ciencia

Aunque la lógica de la actividad científica consiste en un constante avance hacia el futuro descartando teorías e interpretaciones procedentes del pasado, no conviene “relegar al olvido el conjunto de ideas, saberes y prácticas que han configurado la historia global del conocimiento”. En consonancia con esa afirmación, valoramos el afán por “recuperar y activar la memoria de las iniciativas acumuladas por las sociedades humanas (de tal modo que se pueda) tener una perspectiva de larga duración de la aventura del saber”, tema éste que incluso viene siendo avalado desde hace treinta años por la UNESCO. Esta dimensión del Desafío puede contribuir a movilizar la memoria de la ciencia almacenada en el CSIC (en sus archivos, bibliotecas y museos) y que son testimonio de los vaivenes históricos del sistema español de producción y distribución de los conocimientos científicos.

Materialidad de la memoria

En los estudios de memoria hay que tener en cuenta, por un lado, una materialidad *consciente* (o intencional) desplegada en la construcción de la memoria colectiva (museos, memoriales, monumentos, fotografías...) y, por otro lado, otra de carácter *inconsciente* (o no intencional), representada por las ruinas y las trazas de eventos del pasado asociados a episodios traumáticos. La tensión entre ambos tipos de materialidad del recuerdo es uno de los campos más productivos de análisis de la memoria colectiva, lo que exige la cooperación interdisciplinar para abordarlo. En España tenemos ejemplos sobrados de esa tensión, lo que hace que esta dimensión del Desafío tenga muy en cuenta el análisis de los aspectos tangibles de las memorias conflictivas, siendo de especial relevancia el papel a desempeñar por la arqueología.

Geografías de la memoria

El paisaje, que es cultura antes que naturaleza, forma parte de la memoria, y por eso valoramos que ese tipo de memoria sea una línea transversal de investigación en este ámbito temático. Los espacios naturales son memoria por que el paisaje desempeña un papel relevante en la construcción de las identidades

nacionales o regionales, así como en la construcción de “topografías patrióticas” a través de producciones literarias, artísticas o de otro tipo. Por eso, valoramos positivamente que se aborden “los procesos de re-especialización inherentes a la globalización en, al menos, tres dimensiones: deslocalizaciones y relocalizaciones urbanas; extensión (...) de los procesos de urbanización (...) y las dinámicas derivadas del turismo, en la medida en que han otorgado a los paisajes nuevos valores sociales, políticos y económicos, movilizando memorias particulares, pero sociales”. Muy relacionado con todo ello, está el tema de las transformaciones de los paisajes debidas al cambio climático, cambios que inciden en el papel que desempeñan en la memoria individual y colectiva.

3. Escenarios de futuro

Ante el conjunto de líneas transversales expuestas en la sección anterior, y que el CSIC viene abordando con mayor o menor intensidad a través de sus grupos de investigación, hay unos escenarios de futuro que nuestra institución debería incorporar en sus programas y estudios de memoria si quiere seguir desempeñando un papel relevante en esta área. Expondremos a continuación algunos de los elementos que conforman esos escenarios de futuro en los estudios de memoria.

Estudio de los perpetradores

Junto al estudio de las experiencias y testimonios de las víctimas, se va potenciando una línea de investigación que pone el foco en los *perpetradores*, con objeto de comprender mejor los contextos sociales, culturales, políticos, económicos e identitarios en los que se produjeron las violencias del pasado. Es ésta una línea en la que es fundamental el posicionamiento ético de los investigadores para evitar que se justifiquen los comportamientos de los perpetradores. En esta misma línea de aproximación, se amplía el horizonte de análisis a las formas de perpetración posibilitadas por las nuevas tecnologías y la transnacionalización y mutación de los conflictos. Es, en definitiva, un nuevo campo en el desafío de los estudios de memoria, constituyendo una investigación de frontera en la que el CSIC debe posicionarse con una perspectiva interdisciplinar.

Memoria y giro forense

Las prácticas y discursos científico-forenses han inaugurado una nueva epistemología de la memoria en la que “el cuerpo violentado, y sus procedimientos de desciframiento científico-técnico, se han colocado en el centro del escenario”. Este llamado “giro forense” en el análisis de las memorias de la violencia ha llegado al esclarecimiento, por ejemplo, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es un cambio de paradigma de amplio espectro que

plantea nuevas preguntas a los investigadores que trabajan en los estudios de memoria, como la necesidad de acercarse al cuerpo herido y sus efectos en las modalidades de memorialización que parecían consolidadas desde antaño. En nuestra opinión, ello obliga a plantearse de qué forma esta especie de modelo “corpocéntrico” modifica la forma de gestionar el pasado traumático.

Memoria y digitalización

Es un hecho los efectos que están teniendo las nuevas tecnologías, dispositivos y plataformas digitales en la producción, circulación y consumo del conocimiento del pasado. Cabe señalar en este sentido que se está dando una evidente intersección entre “memoria social” y “digitalización”, que, al transformar de modo radical la relación con el pasado, hace que emerjan nuevas comunidades de memoria, nuevos circuitos de difusión, nuevas modalidades de visibilidad... En resumen, la formulación digital de la memoria social está teniendo efectos drásticos en la relación entre pasado y presente, además de transformar los movimientos sociales y sus formas de activismo. Estamos ante un paisaje de la memoria conectado a las tecnologías digitales, unas tecnologías que abren caminos a la investigación creando nuevas formas de testimoniar, así como nuevas identidades políticas y nuevos lugares del recuerdo. Por ello, consideramos que es un escenario a tener en cuenta a la hora de diseñar nuevos programas de investigación.

Utopías: memorias del activismo y la esperanza

Cabe reconocer que, en los estudios de memoria, han predominado los referidos a los traumas generados por los conflictos violentos, si bien recientemente se viene desarrollando un área de investigación centrada en las memorias de la utopía y la esperanza. Ejemplos de ello son los estudios de memoria del activismo social y de procesos políticos que dieron lugar a avances en derechos humanos. El objetivo de estos estudios es doble: de un lado, “inyectar optimismo hacia el futuro en una época marcada por la desesperanza”, y de otro, compensar el paradigma traumático de la memoria y evitar el peligro de “alimentar relatos de victimización de corte populista, nacionalista o xenófobo”. Sin embargo, al haber escasas herramientas analíticas para capturar la transmisión memorial del optimismo, un reto teórico-metodológico para los investigadores es precisamente dotarse de un nuevo arsenal que permita analizar esta línea temática.

Distopías: ecotraumas y las nuevas memorias medioambientales

Ampliando lo ya señalado sobre la relación entre paisaje y memoria, cabe observar un nuevo campo de investigación que centra su atención en el impacto traumático del cambio climático en estos procesos, acuñándose nuevos conceptos (ecotrauma, solastalgia, ansiedad climática, duelo preliminar...). Con ello se pretende

analizar un tipo de memoria que se basa en la nostalgia no sólo del pasado, sino también del presente ante un futuro incierto de transformación ecológica e incluso de destrucción. Son “memorias del presente o memorias anticipatorias” ante escenarios distópicos, en las que “los parámetros clásicos de los estudios de memoria quedan subvertidos en términos de escala y direccionalidad”.

Epistemologías alternativas de la memoria y el tiempo

Es un hecho que la memoria social está determinada no sólo por marcos colectivos, sino también por paradigmas culturales. De ahí que los conceptos del pasado y del tiempo no sean universales y no coincidan en las distintas culturas. Ello explica que haya tensión y conflictos entre los diferentes paradigmas memoriales, dificultando los procesos de reconciliación o duelo. Por eso, consideramos muy importante incluir en el escenario de futuro las investigaciones dirigidas a entender las diferentes formas de construir y transmitir relatos a escala local, así como los tipos de actores especializados en ese menester y los rituales asociados a la memoria. En nuestra opinión, sería una forma de contrarrestar el dominio de las epistemologías hegemónicas occidentales, dando voz a aquellas otras periféricas que han solido ser olvidadas.

RESUMEN

En este capítulo, los coordinadores del Volumen exponen **CONCLUSIONES** y hacen **PROPUESTAS** y **RECOMENDACIONES**.

Algunas conclusiones son generales (comunes a todos los centros del CSIC en el área de las ciencias humanas y sociales), al plantearlas aquí se ha tratado de mostrar las debilidades observadas en la propia institución, y afrontarlas aprovechando sus evidentes fortalezas y las oportunidades que surgen en el entorno social, político e institucional. Otras conclusiones son más específicas de las áreas temáticas asociadas a cada uno de los 12 Retos, por lo que las recomendaciones y propuestas tienen su propia singularidad. Para no hacer excesivamente larga esta última sección de conclusiones, los coordinadores del Volumen remiten al lector a las secciones correspondientes de cada Reto, donde encontrará una descripción detallada de los desafíos teórico-metodológicos y las propuestas planteadas. Por lo tanto, en esta sección de **CONCLUSIONES** incluimos sólo las de carácter general y transversal a los Retos.

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES, PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

Coordinadores

Eduardo Moyano Estrada (IESA, CSIC)
y Tomás García Azcárate (IEGD, CSIC)

La redacción de este Informe ha contado con la cooperación previa de casi dos centenares de científicos/as del CSIC y de una treintena de colaboradores externos procedentes de las universidades y otros centros de investigación, así como del sector privado (ver Anexo I).

Ha sido un proceso muy participativo, organizado en DOCE desafíos temáticos. Cada uno de esos Desafíos ha sido coordinado por personal científico del CSIC, siguiendo las instrucciones generales elaboradas por la VICYT y trasladadas a ellos a través de los dos coordinadores de la UT-1 (Dres. Moyano Estrada y García Azcárate).

Los doce Desafíos temáticos se han agrupado en cuatro bloques (ver cuadro nº1). El primer bloque es de carácter transversal y de naturaleza teórico-metodológica, e incluye desafíos más generales vinculados a las ciencias sociales (desafío A) y a las ciencias humanas (desafío B). El segundo bloque lo forman desafíos asociados a áreas más específicas de investigación, y se refieren a temas relacionados con el territorio (desafío C) las tendencias demográficas (D), los flujos migratorios (desafío E) y las cuestiones alimentarias (F). El tercer bloque está formado por desafíos asociados al proceso de cambio tecnológico y sus efectos en el mercado de trabajo (desafío G), en las formas de organización de la actividad económica (desafío H), en la participación social y la gobernanza (desafío I) y en las políticas de inclusión y los sistemas de bienestar (desafío J). Finalmente, el cuarto bloque incluye desafíos asociados a las ciencias humanas en temas de conservación y valorización del patrimonio (desafío K) y en cuestiones

relativas a los estudios de la memoria (desafío L), si bien abriendo puentes de cooperación con las ciencias sociales y otras áreas científicas del CSIC.

La información recogida en cada uno de los DOCE desafíos comprende varias secciones: un estado de la cuestión de los temas asociados a cada Desafío; un análisis de los grandes escenarios en que se desarrolla actualmente la investigación científica en el área temática correspondiente; un diagnóstico de la situación del CSIC en cada Desafío; una presentación de los retos científicos que se le plantea a nuestra institución en el futuro, y, finalmente, un conjunto de propuestas y recomendaciones para que el CISC pueda responder con eficacia a esos retos.

Toda la información procedente de los Desafíos temáticos se ha integrado de manera sintética en este Informe de la UT-1, pudiéndose extraerse de ella una serie de CONCLUSIONES y hacer algunas propuestas y recomendaciones. Unas conclusiones son de carácter general (comunes a todos los centros del CSIC del área de ciencias humanas y sociales), y al plantearlas aquí hemos pretendido mostrar algunas debilidades observadas en la propia institución (envejecimiento de la plantilla científica; baja tasa de reposición; atomización de los grupos de investigación; escaso nivel de divulgación de los resultados...) y afrontarlas aprovechando sus evidentes fortalezas (vocación multidisciplinar y cooperadora; internacionalización; estructura centralizada, pero al mismo tiempo muy extendida en el territorio; interacción con universidades...) y las oportunidades surgidas en el entorno social, político e institucional.

Otras conclusiones son más específicas de las áreas temáticas asociadas a cada uno de los doce Desafíos, y por ello las recomendaciones y propuestas tienen su propia singularidad. Para no hacer excesivamente prolija esta sección final de conclusiones remitimos al lector a las secciones correspondientes de cada Desafío, donde encontrará una descripción pormenorizada de los retos teórico-metodológicos y de las propuestas que se plantean. Ahora, en esta sección de CONCLUSIONES sólo incluimos las de carácter general y las transversales a los diversos Desafíos.

Es ampliamente admitida la fortaleza del CSIC como una institución con vocación de abarcar todas las áreas del conocimiento, dando cabida a determinados campos interdisciplinares. Su propia existencia es ya, en sí misma, una *fortaleza* para el desarrollo de investigaciones que requieren la cooperación entre distintas disciplinas científicas, valorándose de modo muy positivo las oportunidades que ofrecen las PTI. No obstante, se recomienda que esa

vocación multidisciplinar se valore realmente en los concursos de promoción y en la evaluación curricular del personal científico del CSIC.

También se valora positivamente la abierta actitud del CSIC a la colaboración con otras instituciones científicas (en especial, con las universidades) y también con las Comunidades Autónomas. No obstante, se considera que este potencial de apertura a la cooperación no se aprovecha suficientemente, por lo que debería impulsarse con más intensidad la creación de Unidades Asociadas con las universidades para, sobre la base de programas innovadores de investigación, impulsar el desarrollo de sinergias entre ambas instituciones. Asimismo, se considera necesario redefinir la figura de los centros mixtos CSIC-Comunidades Autónomas para darle un nuevo impulso en el marco de los actuales retos sociales.

Es evidente la internacionalización de gran parte del personal investigador del área de ciencias humanas y sociales, y el amplio reconocimiento que recibe en la comunidad científica internacional. Pero también se observa un problema de atomización de los grupos de investigación del CSIC en esta área, lo que crea dificultades para participar con éxito en las grandes convocatorias de proyectos de investigación cada vez más competitivos y exigentes. Sería recomendable, por tanto, promover fórmulas de cooperación entre el personal científico para constituir grupos de mayor dimensión.

Respecto a la colaboración con el sector privado, se admite un déficit importante de las ciencias humanas y sociales, salvo casos muy puntuales de grupos que, por su vocación aplicada, han mantenido abierta esa cooperación. Por eso, se propone con carácter transversal la creación de *hubs* para colaborar con los agentes sociales y económicos con objeto de buscar de forma conjunta fuentes de financiación y así poder avanzar en el diseño de modelos más sostenibles de desarrollo.

Asimismo, y dada la creciente importancia de las grandes bases de datos para el desarrollo de la investigación en el área de las ciencias humanas y sociales, se propone la creación de plataformas colaborativas para crear y compartir esas relevantes bases de información.

Se reconoce la escasa vocación de divulgación científica del personal investigador de las áreas de humanidades y ciencias sociales del CSIC, centrado de forma prioritaria en la publicación de artículos en revistas científicas de impacto. Por ello, se recomienda hacer un esfuerzo especial desde el área de

comunicación del CSIC para fomentar la cultura de la divulgación dentro de los centros e institutos, debiendo ser valorada esa actividad de forma conveniente en el desarrollo de la carrera investigadora.

Salvo excepciones, se observa un escaso interés del personal científico del área de ciencias humanas y sociales en la investigación aplicada, en un momento como el actual en que se dan las condiciones adecuadas para que estas disciplinas puedan adquirir una presencia notable en el conjunto de la sociedad. Por ello, sería recomendable que el CSIC valorará más en esta área la importancia de los convenios y contratos de investigación con otras entidades públicas y, en especial, con el sector privado.

En el caso concreto de las Humanidades, se admite la necesidad de que el CSIC tenga una visión más amplia y propositiva de la que ha tenido hasta ahora, creando mecanismos adecuados para ayudar a articular la investigación en este campo según los retos actuales y reforzando la interacción entre sus diferentes grupos hoy bastante dispersos.

Hay un amplio consenso entre el personal científico sobre el problema de envejecimiento de la plantilla científica del CSIC, que, si no se le pone remedio, dará lugar en el horizonte más próximo a una preocupante cascada de jubilaciones en gran parte de la plantilla investigadora. A ello se le une la escasa creación de plazas científicas estables, que no permite dar continuidad ni consolidar nuevas líneas de investigación. Sólo con una eficaz política de reposición de plazas de personal científico podría subsanarse este grave problema, apuntándose incluso la conveniencia de que pueda ir asociada esa política a otra de renovación del personal en edad de jubilación, de forma tal que al llegar a esa edad (65 años) su plaza pueda ser sustituida por otra de personal joven.

Hay también consenso sobre las dificultades de avanzar en la carrera investigadora del personal científico del CSIC, debido al escaso número de plazas de promoción interna, al menos en el área de ciencias humanas y sociales. Creemos que este problema, de evidentes efectos desmotivadores entre los CT e IC, podría ser resuelto sin un elevado coste económico, pero que tendría un impacto muy positivo en la motivación del personal científico.

Se reconoce también la insuficiente dotación de personal técnico de apoyo, lo que dificulta poner en marcha iniciativas innovadoras en nuevos campos de la ciencias humanas y sociales, que exigen la presencia de personal cualificado en el manejo de las grandes bases de datos.

Unido a lo anterior se admite la escasez de personal de gestión para responder a los complejos y crecientes procedimientos que comporta la gestión de la investigación.

Se critica la excesiva burocratización y rigidez de los procedimientos relacionados con la actividad científica, y que se refleja en las dificultades de contratación de personal, en la compra de equipamiento, en la firma de convenios o en la gestión de viajes y estancias en el extranjero, restando todo ello eficiencia y competitividad a la investigación.

Se reconoce la existencia de serias dificultades para desarrollar mecanismos permanentes y de cierta estabilidad para la formación de los jóvenes investigadores (altos niveles de rotación). Por ello, sería positivo que el CSIC continuara con sus programas propios de formación sin que ello suponga dejar de interesarse por los programas nacionales o autonómicos.

Ausencia de una visión estratégica de medio plazo en las agendas de los programas de investigación en ciencias humanas y sociales. En el actual contexto provocado por las especiales circunstancias de la pandemia COVID-19, la actividad científica del CSIC se ha situado en el centro de la agenda política y social, recibiendo una atención por parte de los medios de comunicación nunca antes conocida. Creemos que es un contexto de oportunidad que debe ser aprovechado con un plan estratégico que dé respuesta a los grandes retos de la sociedad española y europea en su objetivo de recuperación económica y de creación de nuevas estructuras de gobernanza en la prevención de futuros riesgos.

Finalmente, hay un consenso generalizado sobre la necesidad de aprovechar la sinergia generada con motivo de la elaboración del Libro Blanco para avanzar en la renovación de la agenda investigadora del CSIC. Se considera muy positivo el espíritu de cooperación y convergencia expresado en este proceso de debate entre los distintos grupos, centros e institutos de las tres áreas globales del CSIC (Vida, Materia y Sociedad). **Y se insta a la presidencia del CSIC a que genere acciones políticas concretas dirigidas a hacer efectiva la vocación multidisciplinar de nuestra institución definiendo una real agenda interdisciplinar de investigación para afrontar los grandes retos de nuestra sociedad en el horizonte 2050.**

ANEXOS

ANEXO I

Resumen ejecutivo

La UT-1 se centra en el eje “Nuevas bases para una sociedad global sostenible”, y hace referencia al importante proceso de cambio global que afecta a todas las dimensiones de la sociedad, alterando el contexto en el que se ha venido desarrollando nuestro quehacer científico en las últimas décadas.

Es un proceso de cambio no comparable a lo ocurrido décadas atrás, debido sobre todo a su amplitud, multidimensionalidad e interdependencia, y también al hecho mismo de que dicho proceso se manifiesta de forma simultánea en muchas áreas, territorios y grupos sociales.

Su análisis exige, por tanto, realizar un ejercicio de convergencia entre áreas y líneas de investigación, apostando por un enfoque multidisciplinar, ya que tanto la “globalización”, como la “sostenibilidad” son, como hemos señalado, conceptos que afectan a la sociedad en su conjunto.

Marco de referencia

De un modo general, el marco de referencia de la UT-1 parte de la base de que la vida social fluye siempre en escenarios más o menos cambiantes, y que toda aproximación científica a los hechos sociales ha de hacerse teniendo en cuenta su variabilidad en las coordenadas espacio/tiempo. Por eso, hemos considerado necesario incluir de un modo transversal la *perspectiva histórica*, ya que muchos acontecimientos de hoy sólo pueden comprenderse y ser explicados recurriendo al conocimiento que proporciona la historia. Por esas mismas razones, todo ejercicio de prospectiva no puede hacerse sólo desde el presente, sino a través de la indagación de los elementos clave que nos han conducido hasta aquí.

También entendemos que las actuales dinámicas de cambio tienen efectos desiguales en la población, según sea el entorno territorial donde se viva y según las características sociodemográficas, especialmente las relacionadas con la edad y el sexo. De ahí la necesidad de incorporar la dimensión de *género* en nuestros análisis de prospectiva, así como de incluir en ellos una *componente ético-normativa*. En este sentido, afirmamos que, debido a la naturaleza singular de su objeto de estudio, las ciencias humanas y sociales no son disciplinas neutrales

y asépticas ante lo que analizan, sino que tienen que adoptar un compromiso ético, sin que ello implique renunciar al rigor y la objetividad que deben orientar el trabajo del personal científico que trabaja en ellas.

De un modo más concreto, el marco de referencia de la UT-1 se manifiesta en los aspectos relacionados con la demografía, el envejecimiento, la salud, el bienestar y la organización de los núcleos familiares, dando lugar a nuevos roles y modelos de familia, a nuevos sistemas de cuidados y a nuevas formas de desigualdad. También se manifiesta en el modo de producir alimentos y en las actitudes y comportamientos de los consumidores. Y todo ello vinculado a la creciente conciencia de la ciudadanía sobre el medio ambiente y a la relación de los seres humanos con la naturaleza, dando lugar a nuevas dinámicas de interacción rural-urbana.

Pero el proceso de cambio tiene además claros efectos en todo lo relativo a las formas de empleo/trabajo, a los nuevos modelos de organización económica y al papel a desempeñar por las políticas públicas. A ello habría que añadir todo lo que se refiere a los modos de participación de la ciudadanía en la vida política y a las formas de gobernanza de que se dota. Asimismo, los flujos migratorios y la diversidad cultural que ello conlleva en sociedades abiertas e inclusivas son temas que se sitúan en el frontispicio de los procesos de cambio. Lo mismo sucede con todo lo relacionado con la conservación y valorización del patrimonio histórico, natural y cultural y con la memoria histórica, en tanto despliegues del pasado en el presente y el futuro de los ciudadanos

Consideramos, además, que el actual proceso de cambio debe ser estudiado definiendo nuevos conceptos, utilizando nuevas herramientas metodológicas e incorporando los avances que se están produciendo en las técnicas de recogida, tratamiento y análisis de la información empírica, tanto en el ámbito de las humanidades como de las ciencias sociales. También consideramos necesario establecer puentes de cooperación con otras áreas científicas del CSIC a fin de aprehender la complejidad de los procesos de cambio, y muy especialmente todo lo relativo a la percepción del riesgo, a la vulnerabilidad física y sus implicaciones sociales y a la puesta en marcha de protocolos de comunicación y prevención que nos permitan mejorar la resiliencia de las sociedades contemporáneas.

Estructura del Informe

El contenido de este Informe se ha estructurado en DOCE desafíos, agrupados a su vez en cuatro bloques temáticos (ver Cuadro nº 1). Cada uno de esos Desafíos ha sido coordinado por personal científico del CSIC, contando con la participación de personal externo, tanto de otros centros públicos de investigación (universidades, sobre todo), como del sector privado.

Cuadro nº 1

Bloque temático I: Aspectos teórico-metodológicos de las ciencias sociales y humanas

- A. Ciencia, innovación y conocimiento para modelos sostenibles de desarrollo
Coordinadores: Carolina Cañibano Sánchez (INGENIO, CSIC-UPV) and Vincenzo Pavone (IPP, CSIC)
- B. Las ciencias humanas en escenarios de transición
Coordinadores: Josep Martí Pérez (IMF, CSIC) and Idoia Murga Castro (IH, CSIC)

Bloque temático II: Población, territorio y alimentación

- C. Desarrollo territorial en nuevos escenarios de interacción rural-urbana
Coordinadores: Francisco Colom González (IFS, CSIC) and Ana López Sala (IEGD, CSIC)
- D. Retos demográficos en un escenario social de longevidad y envejecimiento
Coordinadores: Teresa Castro Martín (IEGD, CSIC) and Gloria Fernández-Mayoralas (IEGD, CSIC)
- E. Flujos migratorios en sociedades abiertas e inclusivas
Coordinadores: Juan C. Velasco Arroyo (IFS, CSIC) and Amparo González Ferrer (IEGD, CSIC)
- F. Alimentación segura y saludable en sistemas alimentarios sostenibles
Coordinadores: María Dolores del Castillo Bilbao (CIAL, CSIC-UAM) and Oscar Martínez Alvarez (ICTAN, CSIC)

Bloque temático III: Efectos sociales y políticos del proceso de cambio económico y tecnológico

- G. Cambio tecnológico y nuevas formas de trabajo/empleo
Coordinadores: Jordi Brandts Bernad (IAE, CSIC) and Catalina Martínez García (IPP, CSIC)
- H. Tercer sector, economía social y colaborativa
Coordinadores: Manuel Pérez Yruela (IESA, CSIC)
- I. Democracia, gobernanza y participación en escenarios de pluralidad social y política
Coordinadores: Joan Font Fábregas (IESA, CSIC) and José Fernández Albertos (IPP, CSIC)
- J. Estrategias y políticas de inclusión social en sistemas sostenibles de bienestar
Coordinadores: Javier Moreno Fuentes (IPP, CSIC) and Ada Ferrer i Carbonell (IAE, CSIC)

La sostenibilidad a través del patrimonio

- K. Lo que queda del futuro: sostenibilidad a través del patrimonio
Coordinadores: Felipe Criado Boado (INCIPIIT, CSIC) and Blanca Ramírez-Barat (CENIM, CSIC)
- L. Memorias movilizadas: despliegues del pasado en el presente y el futuro
Coordinadores: Francisco Ferrándiz Martín (ILLA, CSIC) and M. Reyes Mate Rupérez (IFS, CSIC)

Desafíos temáticos y coordinadores

Bloque temático I: Aspectos teóricos y metodológicos de las ciencias humanas y sociales

El desafío A “Ciencia, innovación y nuevas formas de conocimiento para modelos sostenibles de desarrollo” hace referencia al modo como las ciencias sociales están abordando los actuales procesos de cambio, tanto en términos teóricos, como metodológicos, redefiniendo y ampliando los conceptos de ciencia, innovación y sostenibilidad. Por su parte, en el desafío B “Las ciencias humanas en escenarios de transición” se hace un similar ejercicio de análisis respecto al modo como las humanidades afrontan los retos de las disciplinas que las forman.

Bloque temático II: Población, territorio y alimentación

En el desafío C “Desarrollo territorial en nuevos escenarios de interacción rural-urbana” se analiza el territorio donde se asienta la población y el espacio físico donde se producen las dinámicas sociales y económicas, estudiándose las tendencias observadas y apostándose por un enfoque innovador que supere la tradicional separación entre espacios rurales y espacios urbanos. El desafío D “Retos demográficos en un escenario social de longevidad y envejecimiento” trata de analizar los cambios en los procesos demográficos, tanto de los ya observados, como de las tendencias que se prevén en el futuro. En el desafío E “Flujos migratorios en sociedades abiertas e inclusivas” se aborda el tema de la migración y las políticas públicas encargadas de gestionarlo, temas éstos íntimamente relacionados con los dos desafíos anteriores, dada su conexión con las tendencias demográficas y con los efectos evidentes que tiene los flujos migratorios en el desarrollo de los territorios rurales y urbanos. Las cuestiones relacionadas con la nutrición y la alimentación a la luz de los cambios en los hábitos alimentarios de los consumidores son el objeto de análisis del desafío F “Alimentación segura y saludable en sistemas alimentarios sostenibles”.

Bloque temático III: Efectos sociales y políticos del proceso de cambio económico y tecnológico

En el desafío G “Cambio tecnológico y nuevas formas de trabajo/empleo en la sociedad contemporánea” se analiza precisamente el impacto de la automatización y la robótica en el empleo y las condiciones del mercado de trabajo, con la emergencia de nuevas formas de empleabilidad (como el teletrabajo) que conllevan nuevas relaciones sociales y que tienen efectos evidentes en las actitudes, preferencias y motivaciones de la población respecto al hecho mismo de trabajar. El desafío H “Tercer sector, economía social y colaborativa en la sociedad

contemporánea” trata de analizar las formas de organización económica, complementarias a las que se regulan en el mercado laboral y que desempeñan un papel cada vez más relevante en la nueva economía (cooperativas, fundaciones, asociaciones...) prestando especial atención a las formas emergentes de la llamada “economía colaborativa”. El Desafío I “*Democracia, gobernanza y participación en escenarios de pluralidad social y política*” aborda el tema de la implicación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, analizándose las nuevas formas de participación que emergen en las democracias modernas (referéndums de iniciativa popular, presupuestos participativos, administración telemática...) y que dan lugar a nuevas formas de gobernanza. El desafío J “*Estrategias y políticas de inclusión social en sistemas sostenibles de bienestar*” trata de cómo afrontar desde el ámbito de las políticas públicas el reto de neutralizar y mitigar los problemas de desigualdad y exclusión asociados al proceso de globalización y cambio tecnológico.

Bloque temático IV: Patrimonio y Memoria

En el desafío K “Lo que queda del futuro: sostenibilidad a través del patrimonio” se abordan los retos relacionados con la ciencia del patrimonio analizando cuestiones relativas al origen, historia y significado de los bienes culturales y su influencia en el desarrollo económico, dada su importancia como activo movilizador de recursos y como importante elemento de construcción de la identidad colectiva. El desafío L “Memorias movilizadas: despliegues del pasado en el presente y en el futuro” trata de los retos que se les plantean hoy a los estudios de la memoria, en tanto factor fundamental en la configuración de las sociedades humanas y también en tanto elemento clave, junto con los temas de conservación y valorización del patrimonio, de las identidades individuales y colectivas.

La información procedente de cada Desafío ha sido integrada de forma sintética por los dos coordinadores de la UT-1 (Eduardo Moyano Estrada y Tomás García Azcárate), siendo responsabilidad exclusiva de ellos el contenido del Informe que aquí se presenta. No obstante, los documentos correspondientes a cada Desafío se incorporan sin cambios como Anexo III a este Informe, siendo esos DOCE documentos responsabilidad exclusiva de los coordinadores que los han redactado.

Conclusiones, propuestas y recomendaciones

De la información proporcionada por los DOCE Desafíos en los que se ha estructurado la UT-1, puede extraerse una serie de CONCLUSIONES y hacer algunas propuestas y recomendaciones.

Unas conclusiones son de carácter general (comunes a todos los centros del CSIC del área de ciencias humanas y sociales), y al plantearlas aquí hemos pretendido mostrar algunas debilidades observadas en la propia institución (envejecimiento de la plantilla científica; baja tasa de reposición; atomización de los grupos de investigación; escaso nivel de divulgación de los resultados...) y afrontarlas aprovechando sus evidentes fortalezas (vocación multidisciplinar y cooperadora; internacionalización; estructura centralizada, pero al mismo tiempo muy extendida en el territorio; interacción con universidades...) y las oportunidades surgidas en el entorno social, político e institucional.

Otras conclusiones son más específicas de las áreas temáticas asociadas a cada uno de los doce Desafíos, y por ello las recomendaciones y propuestas tienen su propia singularidad. Para no hacer excesivamente prolijo este Resumen Ejecutivo remitimos al lector a las secciones correspondientes de cada Desafío, donde encontrará una descripción pormenorizada de los retos teórico-metodológicos y de las propuestas que se plantean. Ahora, en esta sección sólo incluimos las conclusiones y recomendaciones de carácter general y las que son transversales a diversos desafíos temáticos.

Es ampliamente admitida la fortaleza del CSIC como una institución con vocación de abarcar todas las áreas del conocimiento, dando cabida a determinados campos interdisciplinares. Su propia existencia es ya, en sí misma, una *fortaleza* para el desarrollo de investigaciones que requieren la cooperación entre distintas disciplinas científicas, valorándose de modo muy positivo las oportunidades que ofrecen las PTI. No obstante, se recomienda que esa vocación multidisciplinar se valore realmente en los concursos de promoción y en la evaluación curricular del personal científico del CSIC.

También se valora positivamente la abierta actitud del CSIC a la colaboración con otras instituciones científicas (en especial, con las universidades) y también con las Comunidades Autónomas. No obstante, se considera que este potencial de apertura a la cooperación no se aprovecha suficientemente, por lo que debería impulsarse con más intensidad la creación de Unidades Asociadas con las universidades para, sobre la base de programas innovadores de investigación, impulsar el desarrollo de sinergias entre ambas instituciones.

Asimismo, se considera necesario redefinir la figura de los centros mixtos CSIC-Comunidades Autónomas para darle un nuevo impulso en el marco de los actuales retos sociales.

Es evidente la internacionalización de gran parte del personal investigador del área de ciencias humanas y sociales, y el amplio reconocimiento que recibe en la comunidad científica internacional. Pero también se observa un problema de atomización de los grupos de investigación del CSIC en esta área, lo que crea dificultades para participar con éxito en las grandes convocatorias de proyectos de investigación cada vez más competitivos y exigentes. Sería recomendable, por tanto, promover fórmulas de cooperación entre el personal científico para constituir grupos de mayor dimensión.

Respecto a la colaboración con el sector privado, se admite un déficit importante de las ciencias humanas y sociales, salvo casos muy puntuales de grupos que, por su vocación aplicada, han mantenido abierta esa cooperación. Por eso, se propone con carácter transversal la creación de *hubs* para colaborar con los agentes sociales y económicos con objeto de buscar de forma conjunta fuentes de financiación y así poder avanzar en el diseño de modelos más sostenibles de desarrollo.

Asimismo, y dada la creciente importancia de las grandes bases de datos para el desarrollo de la investigación en el área de las ciencias humanas y sociales, se propone la creación de plataformas colaborativas para crear y compartir esas relevantes bases de información.

Se reconoce la escasa vocación de divulgación científica del personal investigador de las áreas de humanidades y ciencias sociales del CSIC, centrado de forma prioritaria en la publicación de artículos en revistas científicas de impacto. Por ello, se recomienda hacer un esfuerzo especial desde el área de comunicación del CSIC para fomentar la cultura de la divulgación dentro de los centros e institutos, debiendo ser valorada esa actividad de forma conveniente en el desarrollo de la carrera investigadora.

Salvo excepciones, se observa un escaso interés del personal científico del área de ciencias humanas y sociales en la investigación aplicada, en un momento como el actual en que se dan las condiciones adecuadas para que estas disciplinas puedan adquirir una presencia notable en el conjunto de la sociedad. Por ello, sería recomendable que el CSIC valorará más en esta área la importancia

de los convenios y contratos de investigación con otras entidades públicas y, en especial, con el sector privado.

En el caso concreto de las Humanidades, se admite la necesidad de que el CSIC tenga una visión más amplia y propositiva de la que ha tenido hasta ahora, creando mecanismos adecuados para ayudar a articular la investigación en este campo según los retos actuales y reforzando la interacción entre sus diferentes grupos hoy bastante dispersos.

Hay un amplio consenso entre el personal científico sobre el problema de envejecimiento de la plantilla científica del CSIC, que, si no se le pone remedio, dará lugar en el horizonte más próximo a una preocupante cascada de jubilaciones en gran parte de la plantilla investigadora. A ello se le une la escasa creación de plazas científicas estables, que no permite dar continuidad ni consolidar nuevas líneas de investigación. Sólo con una eficaz política de reposición de plazas de personal científico podría subsanarse este grave problema, apuntándose incluso la conveniencia de que pueda ir asociada esa política a otra de renovación del personal en edad de jubilación, de forma tal que al llegar a esa edad (65 años) su plaza pueda ser sustituida por otra de personal joven.

Hay también consenso sobre las dificultades de avanzar en la carrera investigadora del personal científico del CSIC, debido al escaso número de plazas de promoción interna, al menos en el área de ciencias humanas y sociales. Creemos que este problema, de evidentes efectos desmotivadores entre los CT e IC, podría ser resuelto sin un elevado coste económico, pero que tendría un impacto muy positivo en la motivación del personal científico.

Se reconoce también la insuficiente dotación de personal técnico de apoyo, lo que dificulta poner en marcha iniciativas innovadoras en nuevos campos de la ciencias humanas y sociales, que exigen la presencia de personal cualificado en el manejo de las grandes bases de datos.

Unido a lo anterior se admite la escasez de personal de gestión para responder a los complejos y crecientes procedimientos que comporta la gestión de la investigación.

Se critica la excesiva burocratización y rigidez de los procedimientos relacionados con la actividad científica, y que se refleja en las dificultades de contratación de personal, en la compra de equipamiento, en la firma de convenios o en la gestión de viajes y estancias en el extranjero, restando todo ello eficiencia y competitividad a la investigación.

Se reconoce la existencia de serias dificultades para desarrollar mecanismos permanentes y de cierta estabilidad para la formación de los jóvenes investigadores (altos niveles de rotación). Por ello, sería positivo que el CSIC continuara con sus programas propios de formación sin que ello suponga dejar de interesarse por los programas nacionales o autonómicos.

Ausencia de una visión estratégica de medio plazo en las agendas de los programas de investigación en ciencias humanas y sociales. En el actual contexto provocado por las especiales circunstancias de la pandemia COVID-19, la actividad científica del CSIC se ha situado en el centro de la agenda política y social, recibiendo una atención por parte de los medios de comunicación nunca antes conocida. Creemos que es un contexto de oportunidad que debe ser aprovechado con un plan estratégico que dé respuesta a los grandes retos de la sociedad española y europea en su objetivo de recuperación económica y de creación de nuevas estructuras de gobernanza en la prevención de futuros riesgos.

Finalmente, hay un consenso generalizado sobre la necesidad de aprovechar la sinergia generada con motivo de la elaboración del Libro Blanco para avanzar en la renovación de la agenda investigadora del CSIC. Se considera muy positivo el espíritu de cooperación y convergencia expresado en este proceso de debate entre los distintos grupos, centros e institutos de las tres áreas globales del CSIC (Vida, Materia y Sociedad). **Y se insta a la presidencia del CSIC a que genere acciones políticas concretas dirigidas a hacer efectiva la vocación multidisciplinar de nuestra institución definiendo una real agenda interdisciplinar de investigación para afrontar los grandes retos de nuestra sociedad en el horizonte 2050.**

RESUMEN

La evidencia científica actual muestra con contundencia que el sistema tierra al completo se enfrenta a cambios a escala global que afectan a la capacidad de supervivencia del ser humano. Estos cambios afectan, entre otros muchos, al clima, al nivel del mar, a los usos y la salud del suelo y a las propias sociedades humanas. La humanidad se enfrenta al reto ineludible de encaminarse hacia futuros más sostenibles, los cuales requerirán cambios socioculturales, económicos y tecnológicos que, por ser interdependientes, han de diseñarse cuidadosamente y acoplarse a diferentes niveles geográficos y sectoriales. El futuro, por tanto, si ha de ser, será inevitablemente sostenible. Las ciencias sociales y humanas, en colaboración con el resto de áreas científicas, tienen la responsabilidad de sumarse al abordaje de la multiplicidad de retos emergentes: i) la identificación y ordenación de los problemas más apremiantes para la sostenibilidad de las sociedades; ii) la comprensión de la naturaleza de estos problemas y de sus mecanismos subyacentes; iii) la búsqueda de soluciones y respuestas innovadoras a estos problemas, que no por ser en su mayoría globales se viven y padecen de la misma forma en todos los ámbitos sociales, culturales o geográficos y iv) el apoyo a las instituciones y estructuras de gobernanza en el diseño e implementación de soluciones que deberían revertir directamente en beneficio de las sociedades y del conjunto del planeta.

DESAFÍO A

CIENCIA, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA MODELOS SOSTENIBLES DE DESARROLLO

Coordinadores

Carolina Cañibano Sánchez
(INGENIO, CSIC-UPV)

Vincenzo Pavone
(IPP, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

El concepto de sostenibilidad ha sido el centro de muchos debates recientemente. El debate se ha articulado en varias disciplinas, en las que se ha manifestado cierta disconformidad con la estrechez de visión y alcance de las definiciones clásicas de sostenibilidad, fundamentalmente centradas en el dominio de la ecología y de la innovación tecnológica. Lo que realmente puede o debe entenderse con ‘sostenible’, ha sido cuestionado desde la economía feminista a la economía ecológica, desde los estudios sobre innovación social a los estudios sobre decrecimiento. Uno de los asuntos más controvertidos sigue siendo el solapamiento de los conceptos de renovable y de sostenible. Desde varios estudios y perspectivas, se ha cuestionado que lo que es renovable sea también sostenible (Pavone and Goven, 2017): los combustibles procedentes de biomásas, por ejemplo, son renovables, pero no sostenibles, ya que siguen emitiendo contaminantes al quemarse, y además entran en conflicto con otros cultivos destinados a la alimentación para su producción (Thompson, 2012; Tomei and Helliwell, 2016).

Las críticas no se limitan a poner en evidencia este solapamiento, sino que también sugieren que la sostenibilidad no debe mirarse desde una perspectiva meramente económica o medioambiental, sino también social y política. Desde la economía ecológica, por ejemplo, se plantea la pregunta de qué tipo de humanidad y de personas se están fomentando a la vez que se fomenta la sostenibilidad (Becker, 2006; Siebenhüner, 2000). Es evidente, argumentan

estos estudios, que una visión esperanzadora de la sostenibilidad debe centrarse en el bienestar integral de las personas y debe poder integrar perspectivas procedentes de las ciencias humanas y sociales (Becker, 2011; York and Becker, 2011).

Desde otra perspectiva, más económica, también se ha propuesto superar el imperativo del crecimiento económico, sea este último “verde” o no. Los estudios centrados en propuestas de decrecimiento critican las definiciones dominantes de desarrollo sostenible y su más reciente reencarnación, el “crecimiento verde”, porque finalmente despolitizan los asuntos más controvertidos e impiden un debate serio sobre visiones alternativas del futuro. De hecho, afirman, estas definiciones dominantes hacen que los problemas ambientales se definan exclusivamente en función de soluciones técnicas posibles o disponibles, para alentar el sueño imposible de perpetuar el crecimiento económico sin dañar el medio ambiente. Ecologizar la sociedad, argumentan las propuestas de decrecimiento, equivale a imaginar y promulgar visiones alternativas al desarrollo moderno basado en el crecimiento. Existen prácticas alternativas que promueven un cambio hacia una economía de base más local con ciclos de producción y consumo cortos y hacen hincapié en la reproducción y el cuidado, para satisfacer los valores de uso, no los beneficios. No tienen una tendencia incorporada a acumular y expandirse, y son menos intensivas en recursos que sus contrapartes en la economía formal. Estas prácticas de “puesta en común” cultivan la solidaridad y las relaciones interpersonales humanas, y generan una riqueza compartida no monetaria (Serge, 2009; Valérie, 2008; Kallis et al. 2010; Schneider et al, 2010).

No obstante, estas propuestas no están exentas de problemas, por ejemplo, los asociados con la escala y con la gobernanza de economías locales sostenibles, no orientadas al crecimiento. Existe tensión entre un deseo de autonomía local y la necesidad de actuar a una escala más amplia. Asimismo, el compromiso con la gobernanza a escala mundial está en gran medida ausente de las discusiones dentro del movimiento de decrecimiento. Esto es especialmente problemático, dada la centralidad de temas como el cambio climático, el libre comercio y la implacable competencia mundial. Por último, la interdependencia global hace imposible que un país emprenda una transición de decrecimiento por sí mismo (Kallis, 2017; Kallis, 2019; Cosme et al., 2017).

2. IMPACTO EN EL ACERVO CIENTÍFICO Y APLICACIONES POTENCIALES

2.1. La economía feminista y el concepto de sostenibilidad de la vida

Propuestas alternativas sobre cómo pensar la sostenibilidad por ejemplo han surgido en el entorno de la economía feminista. En particular, hay varias contribuciones que proponen el concepto de “sostenibilidad de la vida”, que pone su énfasis no solamente en fomentar la posibilidad de que la vida continúe en términos humanos, sociales y ecológicos–, sino también en que la sostenibilidad implique desarrollar condiciones de vida aceptables para la población (Bosch et al., 2015). Los enfoques feministas de sostenibilidad de la vida insisten en dos criterios fundamentales: la universalidad (que todas las personas puedan vivir esa vida en condiciones dignas) y que se respete la singularidad, es decir que se respeten la diversidad de experiencias y condiciones vitales (Calderón, 2015). En palabras de Cristina Carrasco, la sostenibilidad de la vida es un concepto que “permite dar cuenta de la profunda relación entre lo económico y lo social, que sitúa a la economía en una perspectiva diferente, que considera la estrecha interrelación entre las diversas dimensiones de la dependencia y, en definitiva, que plantea como prioridad las condiciones de vida de las personas, mujeres y hombres” (Ferraro and Reid, 2013).

La peculiaridad de los enfoques centrados en la sostenibilidad de la vida es que consideran el sistema socioeconómico como un engranaje de diversas esferas de actividad (unas monetizadas y otras no) cuya articulación ha de ser valorada según el impacto final en los procesos vitales. En concreto, como nos explica Pérez Orozco, se trata de abordar dos preguntas: “cuál es esa vida cuyo sostenimiento vamos a evaluar, qué entendemos por vida digna de ser vivida, o de ser sostenida; y cómo se gestiona dicho sostenimiento, cuáles son las estructuras socioeconómicas con las que lo organizamos” (Orozco, 2011).

Dentro del feminismo contemporáneo, los enfoques de la sostenibilidad de la vida se inspiran en los trabajos publicados en la década de los 2000 sobre feminización de la economía, que enfatizaban la importancia de atribuir un valor monetario al trabajo no remunerado de la mujer. El objetivo era y sigue siendo, conseguir una representación exacta de la economía “entera”. Además, estas aportaciones pretendían pensar de forma diferente sobre cómo se producen o podrían producirse los bienes y servicios. Como consideraba Cameron, la economía feminista se plantea cómo imaginar o promulgar formas de organización económica alternativas (Cameron and Gibson-Graham, 2003).

2.2. La innovación social y la sostenibilidad, más allá del determinismo tecnológico

Los debates sobre sostenibilidad no se han limitado a cuestionar las definiciones dominantes del concepto y sus enfoques limitados a lo ambiental, sino que han cuestionado con fuerza también el papel y las conceptualizaciones dominantes de la innovación. Las voces más críticas, no solamente han cuestionado la estrechez de las conceptualizaciones de la innovación que solapan la idea de innovación con la innovación tecnológica y de ésta con las aplicaciones comerciales, sino que han defendido la importancia de adoptar un enfoque de la innovación más holístico, en el que la innovación social también juegue un papel fundamental.

En línea general, la mayoría de los estudios que intentan abrir el debate de la relación entre innovación y sostenibilidad, se han ido diferenciando en tres ramas distintas, todas centradas en transiciones, pero haciendo énfasis en diferentes aspectos y a partir de disciplinas distintas. Un primer grupo, centrado en la transición socio-técnica, pone el énfasis en la innovación tecnológica, pero situándola en un contexto y en una trayectoria temporal. Bajo este enfoque, la tecnología deja de ser una herramienta neutral conducente a la innovación que soluciona problemas, para convertirse en parte fundamental de una estrategia más compleja. El segundo grupo sitúa el interés sobre las instituciones, las redes y la gobernanza de la transición hacia la sostenibilidad. En esta visión, los cambios políticos e institucionales se vuelven centrales y se convierten en la clave de la transición. Un tercer grupo, centrado en la transición socio-ecológica, traslada el interés a las relaciones sociales y ecológicas, estudia la resiliencia local de las colectividades, valora sus capacidades adaptativas, y reordena la innovación en ese contexto específico (Loorbach et al., 2017).

Pero más allá de los estudios que proponen alentar transiciones, hay un debate intenso, que en las conversaciones sobre sostenibilidad se refleja en la creciente fuerza cobrada por los defensores de un enfoque de sostenibilidad fuerte (*strong sustainability*), y en los estudios de innovación se articula alrededor de lo que se conoce como innovación de sistema (*system innovation*).

Este último, en contraste con los enfoques más tradicionales de los sistemas de innovación, se pregunta, ante todo, para qué estamos realizando innovación, es decir, cuál es la dirección fundamental del cambio. Como consecuencia, pone el énfasis en las potenciales consecuencias negativas de la innovación tecnológica, algo que los estudios tradicionales de innovación consideran *externalidades* y que muy rara vez estudian o cuestionan. Este enfoque intenta re-conceptualizar la innovación de una manera que realmente permita dar acomodo

analítico a los cambios necesarios para lograr un desarrollo sostenible a nivel humano, social y planetario (Chaminade, 2020). Por ejemplo, basándose en los trabajos recientes del Centro de Resiliencia de Estocolmo, el Instituto Tellus y el Centro STEPS, Melissa Leach (et al.) sostienen que para alcanzar los ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible se requiere ahora una gran transformación, no solo en las políticas y tecnologías, sino también en los propios modos de innovación. Los autores insisten en la necesidad de medir y valorar la innovación basándose en tres criterios: las “tres D” de Dirección, Diversidad y Distribución (Leach et al., 2012). Mientras, otros trabajos han planteado la necesidad de añadir al concepto de innovación para la sostenibilidad, las “fronteras sociales”, como complemento de las fronteras planetarias (Raworth, 2012). Leach y colegas argumentan que se necesita prestar una atención más fina a qué tipo de sostenibilidad y desarrollo se persigue, para quién y cómo, y qué implica esto para una mejor administración de nuestro planeta. Desde esta perspectiva, la innovación plantea cuestiones sociopolíticas y de justicia fundamentales, que llevan a cuestionar los procesos de toma de decisiones y sus consecuencias para la administración y la sostenibilidad de los ecosistemas.

2.3. Aplicaciones potenciales

Se ha puesto en evidencia la desconexión entre las dinámicas de innovación a nivel local y los fenómenos de innovación global, cuyas fronteras son planetarias. La clave que permitiría a estas visiones alternativas de sostenibilidad tener el impacto necesario y esperado se encuentra en la capacidad de los nuevos estudios de reconectar estas dos dimensiones de la innovación. En este sentido, cobran cada vez más importancia los llamados “intermediarios de la sostenibilidad”, los cuales tendrían un importante papel en la comprensión de los cambios emergentes. Más específicamente, las aplicaciones potenciales en el futuro de la ciencia e innovación para el desarrollo sostenible pasan por una creciente aceptación e implementación de dos conceptos fundamentales. En primer lugar, un creciente número de académicos está llamando la atención sobre el papel potencial de la innovación social como camino hacia la sostenibilidad. Mientras que, históricamente, se ha hecho hincapié en cómo traducir las innovaciones en ciencia y tecnología en aplicaciones comerciales, la innovación social se distingue por el interés en mejorar el bienestar de las personas en la sociedad (Dawson and Daniel, 2010). Dentro de las contribuciones articuladas alrededor de la innovación social, el concepto de Antropoceno ha adquirido una visibilidad y una fuerza especiales. La evidencia científica actual muestra con contundencia que el sistema tierra al completo se enfrenta a cambios a escala global que afectan a la capacidad de

supervivencia del ser humano. Estos cambios abarcan el clima, las circulaciones atmosférica y oceánica, los ciclos biogeoquímicos, el nivel del mar, el estado de las superficies congeladas, los usos y la salud del suelo y las propias sociedades humanas. Los impulsores de cambio pueden ser externos (variaciones solares, inclinación del eje terrestre, cambios naturales en el clima y la biodiversidad); o antropogénicos (crecimiento poblacional, contaminación y uso de los recursos naturales, producción de energía, urbanización, etc.) (Steffen et al., 2004). La realidad de esta evidencia nos ha revelado que quizás estamos entrando en una nueva era geológica caracterizada por la huella inequívoca de nuestra actividad en el planeta: el Antropoceno. Se argumenta que, debido a esto, las sociedades humanas deben orientarse urgentemente hacia futuros más sostenibles, a través de procesos de cambio socioculturales, económicos y tecnológicos interconectados y diseñados cuidadosamente en diferentes niveles, sectores y geografías (Avelino et al., 2017; Fuenfschilling, 2017; Pellicer-Sifres et al., 2018; Geels, 2019). Olsson y colegas sugieren que es necesario avanzar hacia una innovación que sea capaz de integrar lo social con lo ecológico (Olsson et al., 2017).

Finalmente, hay estudios que conectan más explícitamente la innovación social con la sostenibilidad social. Se empieza a abordar, por ejemplo, la conexión entre innovación social y la innovación agrícola y rural. Algunos estudios identifican la innovación social con la necesidad de la sociedad de contar con métodos de producción más sostenibles, la necesidad de colaboración y aprendizaje social, y el alcance del cambio necesario para revitalizar la sociedad (también rural) (Bock, 2012). La sostenibilidad social y la innovación social aparecen como complementarias en la búsqueda de respuestas a la pregunta de cómo fomentar y llevar a cabo nuevos proyectos de sostenibilidad (Parra, 2013). En la sección siguiente, se detallarán ejemplos de estudios de vanguardia que mueven la ciencia y la innovación hacia un nuevo horizonte de sostenibilidad, articulados y debatidos en relación con los desafíos clave que caracterizan las transiciones existentes hacia una (nueva) sostenibilidad.

3. Desafíos clave

3.1. Ciencia y conocimiento en la transición hacia la sostenibilidad

El conocimiento científico y la innovación tecnológica que emerge de sus descubrimientos son percibidos de forma cada vez más ambivalente. Es evidente que, lejos de simplemente reducir las incertidumbres a las que la sociedad se enfrenta, la ciencia y la tecnología contribuyen también a la generación de incertidumbres y de escenarios no previstos, algunos de los cuales amenazan con desbordar el eco-sistema planetario. Imaginar y trabajar hacia un futuro en el

que la sostenibilidad social y medioambiental sea la aspiración prioritaria de la producción de conocimiento requiere re-pensar estos procesos. ¿Cómo se produce y cómo se utiliza el conocimiento científico y tecnológico?

Las voces que han criticado los mecanismos de articulación entre por una parte la ciencia y la innovación y, por otra, los desafíos económicos, medioambientales y sociales a los que tienen que hacer frente las comunidades y sociedades han tenido dificultades para hacerse oír, en un contexto de irreprimible progreso tecnológico y crecimiento económico. No obstante, como apuntan Funtowicz y Ravetz (1993), la complejidad y la escala de muchos de los problemas a los que se enfrenta la humanidad, superan la capacidad de la ciencia ‘normal’ para aportar soluciones completas y un sentimiento tranquilizador de certidumbre. Cuando se buscan soluciones basadas en la ciencia y la tecnología para abordar problemas caracterizados por su elevada relevancia, por hechos inciertos, valores en disputa y urgencia en la toma de decisiones, entonces, estamos en el ámbito de la ciencia ‘post-normal’, en el que la participación activa de los ciudadanos y de otros actores sociales resulta esencial. A una conclusión similar han llegado quienes desde el estudio de la relación entre ciencia y sociedad argumentan que investigadores e innovadores adoptan una aproximación más reflexiva y ‘responsable’ a sus actividades (Stilgoe et al 2013). Cuestionan así, si la dirección que están tomando la ciencia y la innovación en la actualidad se adapta adecuadamente al abordaje de los retos sociales, económicos y medioambientales más apremiantes.

Volvemos pues a la necesidad fundamental de re-pensar cómo se produce el conocimiento, cómo se gestiona la innovación y qué implicaciones tiene todo ello en la transición hacia un desarrollo sostenible. Los principios fundamentales están claros. Tiene que producirse: i) una apertura hacia la sociedad de quienes están implicados en la producción de conocimiento; y ii) una reconfiguración de los procesos de innovación y aplicación que permita compartir expectativas y disolver las fronteras entre ciencia y sociedad, entre la comunidad científica y los ciudadanos. Las innovaciones basadas en la ciencia no pueden ya lanzarse sin más hacia la comunidad o el mercado. Más bien, los resultados de los procesos de producción de conocimiento y de innovación habrán de emerger de procesos inclusivos de anticipación y co-creación que incrementen la relevancia y legitimidad de las innovaciones. En la transición hacia la sostenibilidad, la amplificación y democratización del espacio de producción y utilización del de conocimiento es crucial. Para lograr con éxito esta transición, la ciencia y la tecnología han de prestar atención a los valores que importan a las comunidades, así como a las actividades económicas, sociales y culturales de las que depende su bienestar.

3.2. Tecnologías sostenibles

Aunque considerar que la transición hacia modelos sostenibles de desarrollo pasa únicamente por soluciones tecnológicas tiene sus limitaciones y dificultades intrínsecas (Sarewitz and Nelson, 2008), cualquier escenario para limitar el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente debe contemplar el desarrollo y la difusión de tecnologías “verdes” o “limpias”. Se llaman así porque sus objetivos principales son mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptar los sistemas socio-tecnológicos al cambio climático, gestionar la contaminación del agua y del aire, y limitar el impacto de la humanidad sobre la biodiversidad. Las tecnologías de mitigación permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas productivos y tecnológicos, como por ejemplo la producción de energía o el transporte, mientras que se califican como tecnologías de adaptación aquellas que permiten el funcionamiento de los sistemas socio-tecnológicos, aunque la temperatura suba o la disponibilidad de agua baje debido al cambio climático, o la calidad del aire y del agua bajen debido a la contaminación. Las primeras investigaciones realizadas sobre las características de las tecnologías verdes apuntan diferencias con las otras tecnologías: son más novedosas, más complejas y tienen un impacto mayor cuando son exitosas pero su implementación es más arriesgada (Barbieri et al., 2016).

A pesar de que una parte significativa de los estudios científicos ha tratado las tecnologías verdes como homogéneas, existen diferencias importantes entre ellas (Barbieri et al., 2020), como por ejemplo entre las tecnologías de captura, almacenamiento y secuestro de los gases de efecto invernadero y las tecnologías de limitación de la contaminación del aire. Las primeras están aún en fase emergente de desarrollo, con algunos prototipos funcionando sin despliegue masivo, mientras que las segundas han sido desarrolladas desde el siglo pasado y están desplegadas masivamente en todos los lugares del planeta. La heterogeneidad de las tecnologías verdes conlleva la necesidad de adaptar las habilidades necesarias para su desarrollo y las políticas para su fomento en función de su grado de madurez. Emerge así el reto de analizar las interacciones entre las tecnologías verdes y las habilidades necesarias para su desarrollo e implementación, así como el de valorar qué políticas deben implementarse, si se toma en cuenta esta diversidad en términos del grado de madurez.

Uno de los objetivos primordiales de las tecnologías verdes es disminuir el impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Por ejemplo, la limitación del aumento de la temperatura global a 1,5 °C requiere que las emisiones de CO₂ a nivel mundial disminuyan un 7,6% cada año a partir del año

2020 (United Nations Environment Program, 2019). Desconocemos aún si el grado de madurez de cada tecnología permitirá un despliegue suficiente para cumplir este objetivo a tiempo. Abordar esta cuestión constituye por tanto un apremiante reto. Resulta importante además estudiar las tecnologías verdes como parte de un ecosistema de tecnologías (Rosenberg, 1976), ya que no sólo una tecnología debe ser sostenible sino todas las que la sustentan. Un ejemplo es la sostenibilidad del transporte: aunque se electrifiquen todos los medios de transporte, el sector no será sostenible hasta que la producción, el transporte y el almacenamiento de la electricidad lo sean, lo que crea una interconexión entre varias tecnologías para lograr el objetivo de la sostenibilidad (Inderwildi and King, 2012). Resulta pues esencial el análisis de las interacciones entre tecnologías y sus desarrollos respectivos.

Al tener características distintas, las tecnologías verdes requieren de ciertas habilidades específicas entre los trabajadores que las desarrollan, como por ejemplo, la capacidad de recombinar conocimientos distantes, no tan necesarias en el desarrollo de otras tecnologías. Sin embargo, las relaciones entre habilidades del capital humano, el desarrollo de las tecnologías verdes y las políticas de I+D y de formación han sido poco estudiadas (Ghisetti, 2017). La difusión de tecnologías sostenibles pasa por unos requerimientos de formación y de capital humano específicos al tipo y grado de madurez de las tecnologías; relación que, por una parte, debemos comprender y, por otra, abordar desde las políticas de formación, lo cual enlaza con lo apuntado en el apartado 3.3.1 relativo al empleo.

Finalmente, las consecuencias de la destrucción del medioambiente y la capacidad de los territorios para afrontarlas varían mucho según las regiones del mundo. El cambio climático, por ejemplo, es un fenómeno global con impactos locales. Las regiones y los países difieren tanto en su exposición a sus consecuencias como en su capacidad de respuesta (Perruchas et al., 2020). Por eso, las respuestas deben adaptarse a las condiciones locales, lo que implica que el estudio de las tecnologías verdes no se pueda abordar sin tomar en consideración las características de las sociedades que llevan a cabo su desarrollo. Nos enfrentamos al reto de entender cuáles son los mecanismos que fomentan o limitan la capacidad de respuesta tecnológica para limitar el impacto humano sobre el medioambiente y apoyan la adaptación al cambio climático.

El abordaje del estudio y la comprensión de estos procesos, que por su propia naturaleza son tecnológicos, pero también sociales, requiere necesariamente la configuración de equipos interdisciplinares de investigación y trabajo, que aúnen los esfuerzos de las disciplinas técnicas y científicas, humanas y sociales.

3.3. Sociedad sostenible

3.3.1. Empleo en transición

Los debates en torno a la sostenibilidad, la innovación y el cambio técnico van de la mano de profundos cambios socio-económicos entre los que ocupa un lugar destacado la transformación de las vidas laborales, los empleos y la estructura de las ocupaciones y los mercados de trabajo.

El enfoque de “sostenibilidad de la vida”, mencionado en la introducción, enlaza directamente con la noción de “trabajo sostenible” (sustainable work) que Eurofund (Eurofund, 2020) define como la consecución de condiciones de vida y trabajo que favorecen la permanencia en y el compromiso con el empleo a lo largo de una extensa vida laboral. Subyacen al concepto de trabajo sostenible cuestiones relativas a la organización del trabajo, la conciliación de la vida laboral y personal, la salud y seguridad, el bienestar, la retribución, la formación y las competencias. Al trabajo sustentador de una “buena vida”, en la medida en que aporta medios materiales, pero también propósito, identidad y sentido de pertenencia, se refiere Cottam (2018) como “buen trabajo” (good work). Un reto científico en sí mismo es abundar en la comprensión de la conexión entre trabajo y “vida” (personal), en un contexto socio-técnico en el que la tecnología puede ser tanto aliada de una conexión fructífera y enriquecedora entre ambas esferas, como también de otra alienante y destructiva. La vida, además, es vivida en el tiempo. Las percepciones de lo que es “calidad de vida” y la relación de los individuos con el trabajo son cambiantes, debido tanto a condicionantes internos (psicológicos, biológicos), como externos (tecnológicos, políticos). Por una parte, la sostenibilidad del empleo requerirá cada vez más periodos de formación y readaptación, con implicaciones para las formas de concebir y organizar los sistemas educativos y de protección del desempleo, que habrá que repensar. Por otra, los cambios demográficos que experimentan las sociedades más desarrolladas plantean preguntas relativas a las vidas del colectivo cada vez más numeroso de mayores de 65 años, a su relación con el mundo del trabajo después de la edad formal de jubilación y al papel que la tecnología y las innovaciones (también sociales) pueden desempeñar en tejer esta relación.

El trabajo y los procesos de producción se han vuelto progresivamente más complejos e intensivos en conocimiento. La creciente intensidad en conocimiento implica una transición progresiva de la preponderancia en los procesos productivos de la fuerza y la destreza hacia la del procesamiento y

evaluación de ideas; del músculo al intelecto (Hodgson, 2016). El trabajo está experimentando una transformación profunda de la mano de la digitalización y el cambio técnico, que modifica la estructura de los empleos disponibles y de la distribución de los salarios. Los trabajadores mejor parados son aquellos que cuentan con la formación, competencias y capacidades necesarias para insertarse con éxito en estas nuevas estructuras productivas, así como para adaptarse a sus cambios y requerimientos. En el polo opuesto, las personas menos cualificadas se ven a menudo relegadas a la precariedad y la penuria y al desempeño de tareas y empleos que poco nutren la vida “buena y sostenible”. Abundar en la comprensión de estas dinámicas constituye otro reto crucial para las ciencias humanas y sociales. Nuestras sociedades y sistemas políticos se enfrentan a las tensiones que vienen de la mano de una desigualdad creciente, la cual es económica, pero también social y cultural; y se enfrentan al reto de tener que paliar esta desigualdad que fractura y divide.

La comprensión de la naturaleza del empleo y del trabajo plantea retos específicos a la ciencia económica. La concepción tradicional del capital humano como conocimiento contenido en individuos autónomos, obtenido mediante la inversión en formación, la migración y la experiencia (Becker, 1964; Schultz, 1961), intercambiado con mayor o menor éxito en los mercados de trabajo y aplicado a procesos de producción definidos, no se ajusta bien a la realidad del mundo en que vivimos. El capital humano es más una estructura que un agregado de conocimientos y experiencias (Boulding, 1968). El conocimiento de cada trabajador/a es interdependiente del de otras personas, de las tecnologías con las que opera y del entorno institucional en el que se inserta, todo lo cual cambia y evoluciona en el tiempo. Si adoptamos una perspectiva desde la que concebamos los empleos como “redes de conocimiento” cuya estructura evoluciona a lo largo del tiempo, nos acercamos más a la descripción del tejido de la realidad socio-económica, pero también nos enfrentamos al reto científico de explicar de qué se componen y cómo emergen, se reproducen, evolucionan y se deterioran esas redes de conocimiento. Esta comprensión resulta clave para conocer, por ejemplo, qué capacidades se demandan y cómo emergen las estructuras que dan pie a nuevos empleos y a la desaparición de otros. La comprensión de estos procesos es un elemento explicativo esencial para entender las dinámicas de desigualdad social arriba mencionadas y para su abordaje desde la política pública.

En esta misma línea, la identificación de las formas de conocimiento que serán indispensables para impulsar nuevos sistemas de producción y distribución compatibles con los objetivos de sostenibilidad, constituyen otro reto

científico importante. Estudios recientes ponen de manifiesto cómo la escasa atención prestada a los aspectos conceptuales arriba indicados, tiene implicaciones para el análisis empírico de la transformación del trabajo hacia estructuras de empleo en las que van adquiriendo mayor peso los conocidos como “empleos verdes”. El método hasta ahora más tradicional para medir el empleo verde se ha basado en un enfoque ‘binario’, es decir considerando ocupaciones ‘verdes’ y ‘no-verdes’ como si éstas fueran mutuamente excluyentes (Becker and Shad-begian, 2009; Peters et al., 2011; Deschênes, 2013; Consoli et al. 2016); siendo el empleo ‘verde’ aquel en el que más peso tienen las tareas laborales asociadas a la sostenibilidad medioambiental. Esta dicotomía supone una barrera para la comprensión de esta transición y para la formulación de políticas públicas para la sostenibilidad y para la igualdad de oportunidades.

La evidencia disponible apunta que la mayoría de las ocupaciones están experimentando, con grado diferente, un aumento del desempeño de tareas laborales relacionadas a la sostenibilidad medio-ambiental. Por lo tanto, el empleo verde no es un fenómeno binario si no una gradual transformación cualitativa de las ocupaciones (Vona et al., 2019). Para comprender esta transformación resulta necesario ahondar en las características intrínsecas de las ocupaciones como, por ejemplo, el conjunto de tareas y habilidades que definen sus ámbitos de acción. El estudio de la evolución de la estructura, y no solo del conjunto, del empleo representa un desafío científico clave para monitorizar si y en qué medida los sistemas económicos se están adaptando a la transición ecológica. Operativamente, la colaboración de las oficinas estadísticas será clave para garantizar la disponibilidad de series temporales de datos pormenorizados sobre empleo por categorías ocupacionales, así como su distribución territorial y sectorial¹.

Por otro lado, la evolución del empleo es solo una de las caras de la compleja adaptación del conocimiento a la transición ecológica. A medida que la demanda de ocupaciones cambia - en aumento para algunas y en disminución para otras - los sistemas educativos se verán abocados a adaptar la oferta de competencias. Este ajuste afectará tanto a la educación superior como a la formación profesional. La reconfiguración del trabajo dentro del paradigma sostenible impulsará la demanda de nuevas ocupaciones - y competencias - así como la transformación de las ocupaciones existentes que experimentarán una evolución en los objetivos y los criterios de ejecución de sus tareas

1 Hasta la fecha, la única fuente de datos que permita este tipo de análisis es el repositorio O*NET de la Oficina Estadística de Estados Unidos: <https://www.onetonline.org/find/green>.

(Maclean, 2018; CEDEFOP and ILO, 2010). Además, los cambios en la oferta formativa afectarán no solo al contenido sino también a la manera de proveer educación. La transición ecológica se encuentra en su fase inicial, lo cual implica que las buenas prácticas compatibles con la sostenibilidad no se han consolidado y están sujetas a experimentación y aprendizaje basados en ensayo y error (Rosenberg, 1976). La transferencia de conocimiento en esta fase requiere adaptabilidad y flexibilidad, más comunes en la formación profesional, además de la participación activa de expertos más allá del círculo académico, como por ejemplo empresarios, técnicos y gestores².

El análisis de la adaptación de la oferta formativa, de sus contenidos y de su organización, constituye otro desafío científico importante para las ciencias sociales. Su abordaje es clave para dar apoyo a la formulación de políticas de soporte a la transición ecológica. El sistema educativo es la plataforma crucial para potenciar la difusión de conocimiento eficaz para adaptar los sistemas de producción y distribución y, a la vez, equilibrar los desajustes debidos a cambios estructurales en la demanda de empleo.

3.3.2. Economías en transición: la Bioeconomía

Una de las transiciones más prometedoras de los últimos veinte años, es sin duda la transición hacia la Bioeconomía, propuesta y fomentada, primero por la OCDE y luego por la Unión Europea (OECD, 2006; EU Commission, 2012). Esta transición se ajusta al propósito de dejar atrás la economía basada en la energía fósil, para pasar a una economía en la que las biotecnologías y las biomasas tienen un papel determinante. El concepto de bioeconomía ha ido cambiando a lo largo de los últimos diez años y sigue siendo evasivo (Styhre and Sundgren, 2011). En este documento nos referimos a dos de las acepciones de bioeconomía: la bioeconomía como economía de la innovación biotecnológica y la bioeconomía como economía de la biomasa, porque son las que más estrechamente están relacionadas con el concepto de desarrollo sostenible.

La bioeconomía como economía de la innovación biotecnológica

En la formulación de esta visión de la Bioeconomía, la OCDE ha desempeñado un papel importante y ha puesto el énfasis en la biotecnología. Bajo esta visión, la bioeconomía se caracteriza por la significativa contribución de la biotecnología a la producción económica (OECD, 2009); el énfasis está en el uso de las biotecnologías presentes y, especialmente futuras, para generar

² Un ejemplo de este tipo de plataformas de aprendizaje a nivel Europeo es <https://www.climate-kic.org/programmes/education/>.

crecimiento económico y, al mismo tiempo, proporcionar soluciones a los desafíos mundiales. En este caso, el uso del término “bio” atiende al énfasis asignado a los conocimientos biotecnológicos, como “la comprensión del ADN, el ARN, las proteínas y las enzimas a nivel molecular; de las formas de manipular células, tejidos, órganos u organismos enteros; y de la bioinformática para el análisis de genomas y proteínas” (OECD, 2009). A partir de esta visión de la bioeconomía, se fomentan estrategias que confían en las enormes promesas de las biotecnologías en una amplia gama de sectores. Como consecuencia, el cambio climático, la contaminación ambiental, la pérdida de la biodiversidad, las amenazas de enfermedades, el hambre, la malnutrición y la escasez de recursos pueden abordarse de una manera que simultáneamente impulsa la competitividad nacional y las tasas de retorno al capital. Esta versión de la bioeconomía ha sido criticada por promover un modelo de desarrollo económico abiertamente neoliberal (Parry, 2007), por tratar los aspectos económicos de la biotecnología como algo central y, al mismo tiempo, tender a tratar los riesgos y las cuestiones éticas como preocupaciones secundarias (Hilgartner, 2007), así como por representar los complejos problemas sociopolíticos como desafíos que pueden afrontarse únicamente mediante la innovación tecnológica (Goven and Pavone, 2015; Pavone and Goven, 2017).

La bioeconomía como economía de la biomasa

En esta segunda visión, la esencia de la bioeconomía reside en el uso creciente y novedoso de las biomásas, y especialmente la sustitución de fuentes de energía fósiles y materias primas industriales por biomasa. Esta bioeconomía se presenta como una economía intrínsecamente más sostenible desde el punto de vista ambiental. El uso del prefijo “bio-” en este caso, atiende a la materia utilizada (biomasa, biorecursos), más que a la tecnología aplicada. La sustitución de los combustibles por biomasa fue el tema central de los primeros documentos de política en que se utilizó la noción de bioeconomía. Esta visión es central en Europa y define la bioeconomía como la producción y conversión sostenibles de biomasa en una gama de alimentos, productos sanitarios, fibras y productos industriales y energía. Según la UE, “la bioeconomía abarca la producción de recursos biológicos renovables y su conversión en alimentos, piensos, productos de base biológica y bioenergía” (EU Commission, 2012). La vinculación de la economía de la biomasa con la sostenibilidad es muy explícita y se asocia a la transición de una economía basada en los combustibles fósiles a una economía basada en materias primas renovables (FORMS, 2012). En general, los defensores de esta visión consideran que una bioeconomía puede obtener los componentes básicos de los materiales, los productos

químicos y la energía, de recursos biológicos renovables (de Besi and McCormick, 2015) y puede configurarse como una economía en la que todas (o la mayoría) de las fuentes fósiles utilizadas para el consumo y la producción se vean sustituidas por recursos de biomasa (Pfau et al., 2014).

Esta versión de la bioeconomía ha sido criticada por equiparar el uso de la biomasa renovable con la sostenibilidad. Los críticos señalan que el aumento del uso de la biomasa puede tener efectos destructivos para el medio ambiente e injustos para la sociedad. Estas críticas se enlazan al uso del término “bioeconomía” por Georgescu-Roegen, que en los años 70 previno de que el crecimiento continuo que depende del agotamiento de los recursos no renovables y de la producción continua de desechos no es sostenible. Georgescu-Roegen consideraba que el mercado no podía impedir catástrofes bioeconómicas, ni conseguir una distribución equitativa de los recursos naturales entre generaciones sucesivas (Georgescu-Roegen, 2011). Las críticas contemporáneas a esta visión de la bioeconomía, conocidas como enfoques agroecológicos, cuestionan que la simple sustitución de los recursos fósiles por biomasa vaya a permitir abordar las cuestiones más amplias planteadas por Georgescu-Roegen (Asveld et al., 2011; Smolker, 2008; Sheppard et al., 2011; Birch et al., 2010; Ramcilovic-Suominen and Pülzl, 2016; Bugge et al., 2016).

Bioeconomía y eco-economía

A pesar de las diferencias, ambas visiones de la bioeconomía proponen 1) aumento de la inversión pública en la ciencia y su infraestructura, con un énfasis creciente en la investigación aplicada y la innovación tecnológica orientada a la comercialización; 2) apoyo público a los agentes comerciales privados, haciendo un gran hincapié en las asociaciones entre el sector público y el privado; 3) garantía de que la reglamentación satisfaga las necesidades de los innovadores y los comercializadores; 4) el fomento de la reglamentación ambiental privada, especialmente mediante las opciones de compra de los consumidores; 5) la intervención del gobierno para la creación de nuevos mercados; y 6) el cultivo gubernamental activo de la aceptación pública de bioeconomía. Ambas visiones además se caracterizan por un discurso de urgencia presente y gran promesa futura en el que las instituciones políticas, los derechos y las responsabilidades están subordinados a las “necesidades” de un régimen de innovación particular (Goven and Pavone, 2015).

Como respuesta al cambio climático y al agotamiento de los recursos, la bioeconomía se propone mejorar los aspectos más derrochadores de los procesos industriales y agroalimentarios tradicionales, intensificando la producción y

el suministro. Esto se traduce en un intento de rediseñar los organismos vivos, para limitar las externalidades peligrosas y minimizar el agotamiento de los recursos, a la vez que se impulsa el crecimiento económico. De esa manera, se ha argumentado, la transición hacia la bioeconomía está desplazando a otros enfoques que tratan de abordar las causas reales (estructurales) de los problemas urgentes. Como resultado, se están protegiendo los atributos fundamentales y problemáticos del statu quo político-económico de las crisis ambientales y sociales que han generado y, a la vez, debilitando la oposición a las causas subyacentes de esos problemas. El enfoque de la bioeconomía, comprometido con el crecimiento económico y la competitividad mundial, hace que los ecosistemas locales sean en gran medida irrelevantes (Horlings and Marsden, 2011; Horlings and Marsden, 2014; Kitchen and Marsden, 2011).

La transición hacia la bioeconomía conlleva la emergencia de varios desafíos. En primer lugar, cabe preguntarse si las promesas que empujan esta transición se van realmente a materializar, ya que una década después de su inicio, muy pocas se han cumplido. En segundo lugar, el enfoque tecnocrático que sustenta la transición hacia la bioeconomía está sembrando dudas sobre el alcance real de las soluciones tecnológicas frente a problemas complejos y con muchas vertientes sociales, económicas, culturales, éticas y políticas. En tercer lugar, las políticas públicas que se han ido introduciendo a lo largo de la última década están fomentando, más que contrarrestando, los patrones de desigualdad global e intergeneracional. Por último, la bioeconomía está acelerando un cambio radical de la forma de entender la ciencia, cada vez más alejada de la ciencia básica y más orientada a la innovación comercial basada en colaboraciones público-privadas donde varios conflictos de interés entre los mundos de la política, de la empresa y de la ciencia no se están ni reconociendo ni abordando.

Mientras que la bioeconomía representa una oportunidad histórica para abordar los grandes desafíos de la humanidad, cabe preguntarse si es posible imaginar una transición distinta, donde los problemas se puedan abordar de manera más compleja, introduciendo todas las variables sociales, económicas y políticas y aprovechando la colaboración de muchas disciplinas, de actores locales; con una visión solidaria en el tiempo y en el espacio; preservando la importancia de la ciencia básica, reconociendo los conflictos de intereses y de poder entre los distintos actores implicados y abordándolos con claridad y contundencia (Luoma et al., 2011; Schmidt et al., 2012; Marsden and Farioli, 2015).

El CSIC se enfrenta al desafío científico fundamental de redefinir los problemas a los que la bioeconomía pretende dar solución, sin reducir su

complejidad y sin ceder a la tentación de un enfoque exclusivamente técnico. Todas las disciplinas, incluyendo las ciencias sociales y humanas, pueden participar activamente en esa redefinición y contribuir a una nueva etapa de la bioeconomía, caracterizada por un abordaje más profundo de la sostenibilidad sea, tanto en el tiempo (tomando en cuenta las necesidades de las próximas generaciones) como en el espacio (tomando en cuenta que cualquier solución sostenible tiene que ser tal en todas las latitudes del globo).

3.3.3. Territorios en transición: ciudades y regiones

El concepto de transición en los debates sobre el futuro de las ciudades y regiones tiene dos significados interrelacionados, pero aun así distintos. Uno se entronca con los temas abordados previamente en este documento, y tiene que ver con el papel del territorio en las transiciones hacia la sostenibilidad y sus problemas de carácter persistente (Grin et al., 2010). La comunidad científica internacional destaca el rol de las ciudades en la transición a la sostenibilidad, por su importancia en términos demográficos y por la densidad de iniciativas disruptivas innovadoras que presentan (Frantzeskaki et al., 2017). Cómo entender y cómo acelerar estos procesos de transición a la sostenibilidad aparecen como cuestiones fundamentales world (Wolfram et al., 2019). La investigación disponible hasta la fecha sobre el papel del territorio en los procesos de transición es limitada (Köhler et al., 2019), con algunas excepciones (Binz et al., 2012; Coenen et al., 2012; Coenen et al., 2010). Algunos autores reclaman innovaciones metodológicas para desarrollar la experimentación real, a pequeña escala, a la vez que se continúa con el desarrollo conceptual derivado de la reflexión y del aprendizaje asociado a estos experimentos metodológicos (Köhler et al., 2019). Los objetivos de estos experimentos de investigación se han centrado en aprender sobre los problemas sistémicos. Se trata de conocer la capacidad de integración de los distintos tipos de innovación (social, tecnológica), así como la agilidad con la que esta integración se realiza en contextos territoriales caracterizados por distintos marcos institucionales y legales (innovation embedding).

Otro fenómeno que ha atraído la atención y esfuerzos de la UE y la OCDE es el de la transición industrial de los territorios (OECD, 2019). Aunque se mencione la necesidad de implementar modelos de desarrollo sostenibles desde el punto de vista ambiental y social, el objetivo primordial de las iniciativas adoptadas por estas organizaciones es ayudar a la economía de los territorios menos desarrollados a transitar hacia la producción de bienes y servicios de alto valor añadido. Esto les permitiría incrementar su productividad,

generar empleo, mejorar el rendimiento, y cambiar su trayectoria de crecimiento (EC, 2017). Aunque éste sea un reto incontestable para muchas instituciones supranacionales y gobiernos, su abordaje tendrá que enfrentarse a dos problemas: 1) la progresiva concentración de actividades económicas de alta intensidad en tecnología y conocimiento y del conocimiento científico en un número cada vez más reducido de ciudades y territorios, lo que conlleva un incremento continuo de las desigualdades territoriales (Balland et al., 2020; Kemeny and Storper, 2020); 2) la incapacidad que las políticas regionales han demostrado, con algunas excepciones, para revertir o incluso atenuar estas desigualdades, a nivel nacional e internacional (Barca, 2009; Pike et al., 2016). Los retos a los que se enfrentan estas líneas de investigación son múltiples e incluyen los siguientes: identificar regiones que han sido capaces de cambiar su trayectoria e identificar a los agentes de cambio (empresas, gobiernos, ONGs, etc.), así como los cambios institucionales que han sido fundamentales; investigar el potencial de modelos alternativos de desarrollo local y regional, como el de la economía fundacional (Collective, 2018) o el de la economía circular (OECD, 2019), que se centran en los sectores económicos que sirven a las poblaciones locales y en la reducción del impacto ambiental de las actividades económicas; entender qué factores organizativos e institucionales impiden el cambio económico estructural y mantienen los territorios en situación de “lock-in” (Isaksen, 2015).

Por otra parte, ante el reto social persistente de mejorar la gobernanza, en el contexto actual de gestión de cambios disruptivos, uno de los desafíos es la implementación de mecanismos de coordinación de políticas públicas a nivel vertical (local, regional, nacional, internacional) y horizontal (gobierno, empresas, ONGs, sociedad civil, etc). Sin estos mecanismos, la apuesta por políticas orientadas a objetivos específicos (*mission-oriented policies*) a nivel europeo o español, puede tener consecuencias negativas para los territorios menos desarrollados (Foray et al., 2018; Morgan and Marques, 2019). Esto es debido a que una inversión a gran escala para la resolución de problemas urgentes (como el cambio climático) significa direccionar recursos hacia organizaciones (públicas y privadas) con capacidad científica y económica para buscar soluciones tecnológicas avanzadas (Mazzucato, 2017). Desde el punto de vista territorial, esto significa dirigir recursos hacia las regiones en las que se concentran estas capacidades. Es necesario por tanto que las políticas orientadas a abordar grandes retos estén acompañadas por políticas que presten atención al territorio (*place based policies*) y que ayuden a las regiones periféricas a desarrollar masa crítica para poder hacer su contribución (Barca,

2009; Barca et al., 2012). Esto solo se puede alcanzar coordinando las acciones locales, regionales, nacionales e internacionales, lo que implica también el desarrollo de nuevas herramientas de toma de decisiones, monitoreo y evaluación (Morgan and Sabel, 2019). En este ámbito, será necesario invertir en investigación sobre coordinación multiescalar de políticas públicas y en la identificación de sistemas de monitorización de políticas de innovación que se adecúen a las características de los territorios y a objetivos que vayan más allá del crecimiento en el número patentes o en el gasto en I+D. Será asimismo necesario investigar el papel que desempeñan las instituciones en el crecimiento económico regional y local.

En este sentido, el estudio de la “calidad de las instituciones” representa también un ámbito clave de trabajo. La calidad institucional se define como un conjunto de rasgos internos y externos de las instituciones que condicionan las contribuciones al desarrollo y al bienestar en los estados y regiones donde se encuentran. Hasta la fecha las siguientes dimensiones han sido las empleadas para estudiar la calidad institucional: 1) burocracia y grado de autonomía que permiten las leyes; 2) meritocracia en la selección y promoción de personal; 3) ausencia de intereses particularistas; 4) ausencia de islas de poder que subvierten los objetivos de la institución, 5) proactividad hacia el cumplimiento de sus objetivos; 6) apertura a la innovación tecnológica y organizativa; y 7) alianzas externas con actores sociales influyentes. Conviene, asimismo, analizar el desempeño de las instituciones del sistema en cuestiones difíciles de observar a través de las metodologías tradicionales basadas en publicaciones científicas, patentes y contratos de I+D, empleando métricas alternativas sobre el impacto de la I+D y medidas de transferencia de conocimiento de proximidad en sistemas locales de innovación (Fernández-Esquinas et al., 2019; Fernández-Esquinas et al., 2018).

3.4. Interrelación entre los sistemas sociales y naturales

Debido a la urgencia de soluciones para avanzar en las transiciones hacia la sostenibilidad, se priorizan en este apartado desafíos que deberán abordarse a corto y medio plazo (5-10 años). Partimos desde una perspectiva de pensamiento sistémico que conceptualiza las interacciones complejas y adaptativas entre los seres humanos y la naturaleza como sistemas socio-ecológicos (SSE) (Berkes and Folke, 1998; Schlüter et al., 2019). Los SSE están constituidos por redes de interacciones entre entidades humanas y otros elementos de la naturaleza, a diversas escalas espaciales y temporales, que producen patrones, estructuras y dinámicas emergentes que a su vez interaccionan con los mismos procesos

que las generaron, adaptándose y evolucionando continuamente (Levin et al., 2013). Así, los resultados emergentes a nivel macro o sistémico de estas interacciones pueden poseer nuevas propiedades o generar nuevas condiciones frente a las que los actores humanos y los elementos biofísicos se pueden o no adaptar. Esta naturaleza compleja y evolutiva de los SSE implica un alto grado de incertidumbre y en ocasiones la emergencia de comportamientos inesperados (Folke et al., 2016), planteando retos importantes a nivel de gobernanza, planificación, gestión y diseño de políticas e instituciones (Galaz, 2019).

Desafíos teóricos

En el medio plazo, será necesaria la adaptación de los conceptos empleados para explicar el origen antropogénico del cambio global a una escala más regional y local (“downscaling”), considerando tanto los contextos específicos (p.ej. socio-culturales, administrativos y sectoriales), como las conexiones entre las distintas escalas espaciales y temporales (Biermann et al., 2016). Esto deberá complementarse con un esfuerzo de actualización de los desarrollos teóricos, metodológicos y de síntesis en el campo de las ciencias de la sostenibilidad, con especial énfasis en las transformaciones hacia la sostenibilidad socio-ecológica (Balvanera et al., 2017), la incorporación de los avances realizados en el campo de las transiciones socio-técnicas (Schot and Steinmueller, 2018) y la articulación explícita del componente normativo de ambos campos.

Será necesario asimismo desarrollar y aplicar marcos conceptuales que permitan el análisis integrado de múltiples dimensiones sociales que son de interés en la resolución de problemas socio-ecológicos. De especial interés son las dimensiones que rigen el comportamiento individual y la acción colectiva, tanto las endógenas (p.ej. cognitiva, emocional, aprendizaje) como las contextuales (p.ej. cultural, histórica, discursiva, política, institucional –“reglas del juego”) (Méndez et al., 2019). Dichos marcos deberán incorporar la multiescalaridad de los problemas socio-ecológicos, incluyendo los ajustes adaptativos entre: los componentes ambientales, los niveles de gobernanza (“policentricidad”), las escalas espaciales y las interacciones y asimetrías de poder interterritoriales. Se buscará asimismo que esta integración tenga capacidades diagnósticas, permitiendo, a través de estudios de caso el diseño de instituciones y políticas para transiciones justas hacia la sostenibilidad local y global.

Desafíos metodológicos y técnicos

El avance en la mejor comprensión de las relaciones entre las comunidades y sociedades, y la naturaleza que las rodea, requiere también la superación de una serie de retos³ de carácter empírico y metodológico entre los que destacamos los siguientes, con especial énfasis en su transdisciplinariedad:

- Reconocimiento de la necesidad de entretener múltiples aproximaciones epistemológicas, teóricas y metodológicas para una comprensión de los valores y las contribuciones de la naturaleza a las personas (Martín-López et al., 2014). Algunos métodos para visibilizar estos valores y contribuciones son el análisis multicriterio (Martínez-Alier et al., 1998), el análisis de redes (Bodin et al., 2019), el diseño experimental que integra evaluaciones biofísicas, socio-culturales y monetarias (Martín-López et al., 2009), o el diseño participativo de escenarios de futuro (Oteros-Rozas et al., 2015). Para identificar vacíos de conocimiento, puede ser de utilidad la triangulación de resultados, la redundancia metodológica y epistemológica, y diseños experimentales caleidoscópicos que permitan revelar y abordar patrones difíciles de observar de otra forma (Nightingale, 2016).
- Incorporar las múltiples interacciones que se dan entre la ciencia y la sociedad a lo largo de todo el proceso de investigación. En línea con lo que plantean algunas propuestas feministas y ‘decoloniales’, se pueden implementar herramientas para entretener diferentes tipos de conocimientos y evidencias: (1) prestando atención a quienes (no) participan en estos procesos y quienes deciden (subjetividades), (2) involucrando a grupos sociales habitualmente marginalizados en la toma de decisiones, (3) reconociendo las dinámicas de poder existentes entre tipos de conocimiento (p.ej. científico-técnico, tradicional, indígena) y entre actores, (4) asumiendo la inconmensurabilidad de los distintos conocimientos (conocimientos situados), y (5) mostrando la validez de diferentes ontologías y epistemologías, incluyendo las que surgen en espacios de encuentro entre la ciencia y la sociedad civil y las alternativas que surgen en el Sur Global (Haraway, 1988; Pérez Prieto, 2017; Iniesta-Arandia et al., 2020). A este último nivel, un ejemplo de alto impacto es el esfuerzo realizado por el Panel Intergubernamental

3 Los autores quieren agradecer su trabajo inestimable a las siguientes revisoras externas que han contribuido a mejorar sustancialmente los desafíos metodológicos y tecnológicos: María D. López-Rodríguez (Internet Interdisciplinary Institute IN3, Universitat Oberta de Catalunya), Marta G. Rivera-Ferre (Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya), Irene Iniesta-Arandia (Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, Universitat Autònoma de Barcelona).

Ciencia-Política para la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas (IPBES), auspiciado por Naciones Unidas (Díaz et al., 2015). En este marco se han puesto a dialogar conceptos científicos y de comunidades indígenas y locales, dando lugar al término de “contribuciones de la naturaleza a las personas” (“nature’s contributions to people”, NCPs) (Kadykalo et al., 2019).

- Puesta en valor y fomento de interfaces robustas ciencia-política-sociedad, que incorporen, desde la fase de diseño: (1) el trabajo en equipos interdisciplinarios de expertos de las Ciencias Sociales y Naturales (considerando la histórica asimetría de poder entre disciplinas); (2) metodologías de investigación-acción participativa y transdisciplinar, orientadas a describir, comprender y transformar los sistemas y problemas socio-ecológicos, y los retos de las transiciones hacia la sostenibilidad; (3) el co-diseño de sistemas de seguimiento a largo plazo dotados de recursos humanos y financieros estables, que ayuden a evaluar y monitorizar el impacto de las acciones de investigación y gestión, y los cambios en los sistemas socio-ecológicos; (4) procesos iterativos para incorporar a la gestión y la toma de decisiones el conocimiento disponible, con especial atención a la co-producción de conocimiento con los actores implicados (Polasky et al., 2011; Wolff et al., 2019).
- Facilitar la familiarización de los actores sociales con las tecnologías y datos de observación de la Tierra, contribuyendo así a la toma de decisiones basadas en la evidencia. Este tipo de información permite entender los impactos de los diferentes impulsores de cambio global a diferentes escalas espaciales y temporales de forma sinóptica y a su vez detallada (Lucas et al., 2017). Para un uso eficiente de la masiva información procedente de estas tecnologías, se habrá de implicar a diferentes expertos y a actores sociales y económicos, para la identificación y validación de los productos y servicios más adecuados para el apoyo a la toma de decisiones y la gestión integrada del paisaje, el medio ambiente y los recursos naturales. Ejemplos de esta aproximación son el Programa Copernicus de la Unión Europea o la Infraestructura de Investigación Europea para el Seguimiento Socio-Ecológico a Largo Plazo (eLTER RI). Asimismo, conviene potenciar el monitoreo ambiental participativo en favor de la transparencia en la toma de decisiones y la justicia socio-ecológica (Radjawali et al., 2017).

DESAFÍO A REFERENCIAS

- Alexander, S., Rutherford, J., Floyd, J. (2017).** A Critique of the Decoupling Strategy: A Limits to Growth Perspective. *Siplicity Institute*.
- Asveld, L., et al. (2011).** Getting to the core of the bio-economy: A perspective on the sustainable promise of biomass. *Scientometrics*.
- Avelino, F. et al. (2017).** Game-changers and transformative social innovation. *Ecology and Society*, 22(4), 41.
- Balland, P. et al. (2020).** Complex economic activities concentrate in large cities. *Nat Hum Behav*, 4, 248–254.
- Balvanera, P. et al. (2017).** Key features for more successful place-based sustainability research on social-ecological systems: a Program on Ecosystem Change and Society (PECS) perspective. *Ecology and Society*, 22(1), 14.
- Barbieri, N. et al. (2016).** A Survey of the Literature on Environmental Innovation Based on Main Path Analysis. *Journal of Economic Surveys*, 30(3), 596–623.
- Barbieri, N., Perruchas, F., Consoli, D. (2020).** Specialization, Diversification, and Environmental Technology Life Cycle. *Economic Geography*, 1–26.
- Barca, F. (2009).** An agenda for a reformed cohesion policy: a place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. *Brussels European Commission*.
- Barca, F., McCann, P., Rodríguez-Pose, A. (2012).** The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. *Journal of Regional Science*, 52(1), 134–152.
- Becker, C. (2006).** The human actor in ecological economics: Philosophical approach and research perspectives. *Ecological economics*, 60.1, 17–23.
- Becker, C. (2011).** Sustainability ethics and sustainability research. *Springer Science & Business Media*.
- Becker, G. (1964).** Human capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. *National Bureau of Economic Research*.
- Becker, R. A., Shadbegian, R. J. (2009).** Environmental products manufacturing: a look inside the green industry. *BEJ Econ Anal Policy* 9(1), 7.
- Berkes, F., Folke, C. (1998).** Linking social and ecological systems: management practices and social mechanisms for building resilience. *Cambridge University Press*.
- Biermann, F. (2016).** Bai, X., Bondre, N., Broadgate, W., Arthur Chen, C. T., Dube, O. P., et al. (2016). Down to Earth. Contextualizing the Anthropocene. *Global Environmental Change*, 39, 341–350.
- Binz, C. et al. (2012).** Conceptualizing leapfrogging with spatially coupled innovation systems: The case of onsite wastewater treatment in China. *Technological Forecasting & Social Change Conceptualizing*, 79(1), 155–171.
- Birch, K., et al. (2010).** Sustainable capital? The neoliberalization of nature and knowledge in the European” knowledge-based bio-economy. *Sustainability*, 2(9), 2898–2918.
- Bock, B. B. (2012).** Social innovation and sustainability; how to disentangle the buzzword and its application in the field of agriculture and rural development. *Studies in agricultural economics*, 114.2, 57–63.
- Bodin, Ö. et al. (2019).** Improving network approaches to the study of complex social – ecological interdependencies. *Nat Sustain* 2(7), 551–559.
- Bosch, A., Carrasco, C., Grau, E. (2005).** Green that I love you violet, Encounters and disagreements between feminism and ecologis., *Tello*.
- Boulding, K. (1968).** The “national” importance of human capital. *The brain drain*, 7, 109–119.
- Bugge, M. M., et al. (2016).** What is the bioeconomy? A review of the literature. *Sustainability*, 8(7), 691.
- Calderón, A. A. (2013).** Feminist Economics: The Challenges of Life Sustainability. *International Journal of Political Thought*, 8, 15–27.
- Cameron, J., Gibson-Graham, J. K. (2003).** Feminising the economy: metaphors, strategies, politics. *Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography*, 10.2, 145–157.
- CEDEFOP and ILO (2010)** Skills for green jobs. *European Synthesis Report*.
- Chaminade, C. (2020).** Innovation for What? Unpacking the role of innovation for weak and strong sustainability

- Coenen, L., Benneworth, P., Truffer, B. (2012). Toward a spatial perspective on sustainability transitions. *Research Policy*, 41(6), 968–979.
- Coenen, L., Raven, R., Verbong, G. (2010). Local niche experimentation in energy transitions: A theoretical and empirical exploration of proximity advantages and disadvantages. *Technology in Society*, 32(4), 295–302.
- Collective, F. E. (2018). Foundational Economy: The infrastructure of everyday life. Manchester: Manchester University Press.
- Consoli, D. (2016). Do green jobs differ from non-green jobs in terms of skills and human capital? *Research Policy*, 45, 1046–1060.
- Cosme, I., Santos, R., O'Neill, D. W. (2017). Assessing the degrowth discourse: A review and analysis of academic degrowth policy proposals. *Journal of Cleaner Production*, 149, 321–334.
- Cottam, H. (2018). Radical Help. How we can remake the relationships between us and revolutionize the welfare state. *Virago London*.
- Dawson, P., Daniel, L. (2010). Understanding social innovation: a provisional framework. *International Journal of Technology Management* 51.1, 9–21.
- De Besi, M., McCormick, K. (2015). Towards a bioeconomy in Europe: National, regional and industrial strategies. *Sustainability*, 7(8), 10461–10478.
- Díaz, S. et al. (2015). The IPBES Conceptual Framework - connecting nature and people. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 14, 1–16.
- EC (2017). Competitiveness in low-income and low-growth regions - The lagging regions report. *European Commission report (Vol. SWD (2017))*.
- EU Commission (2012). Innovating for sustainable growth; a Bioeconomy for Europe. *EU Press*.
- Eurofound (2020). Sustainable work. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: <https://www.eurofound.europa.eu/topic/sustainable-work>
- Fernández-Esquinas, M. et al. (2019). University-business relations and knowledge transfer: a diagnosis of the local innovation system. *UCO Press*.
- Fernández-Esquinas, M. et al. (2018). Tracing the flows of knowledge transfer: Latent dimensions and determinants of university – industry interactions in peripheral innovation systems. *Technological Forecasting and Social Change*, 13, 266–279.
- Ferraro, E., Reid, L. (2013). On sustainability and materiality. Homo faber, a new approach. *Ecological Economics*, 96, 125–131.
- Folke, C. et al. (2016). Social-ecological resilience and biosphere-based sustainability science. *Ecology and Society*, 21(3), 41.
- Foray, D., Morgan, K., Radosevic, S. (2018). The Role of Smart Specialization in the EU Research & Innovation Policy Landscape. *Brussels: European Commission*
- FORMS (2012). Swedish Research and Innovation Strategy for a Bio-based Economy. *EDIT AB: 1-36 (12)*.
- Fournier, V. (2008). Escaping from the Economy: The Politics of Degrowth. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 28, 12/11, 528–545.
- Frantzeskaki, N. et al. (2017). Urban Sustainability Transitions. *Routledge*
- Fuenfschilling, L. (2017). Urban sustainability transitions: Opportunities and challenges for institutional change. *Urban Sustainability Transitions*, 148–155.
- Galaz, V. (2019). Global Challenges, Governance, and Complexity - Applications and Frontiers. *Cheltenham, UK*.
- Geels, F. W. (2019). Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms and elaborations of the Multi-Level Perspective. *Current Opinion in Environmental Sustainability*.
- Georgescu-Roegen, N. (2011). From Bioeconomics to Degrowth: Georgescu-Roegen's 'New Economics'. *Eight Essays*.
- Ghisetti, C. (2017). Demand-pull and environmental innovations: Estimating the effects of innovative public procurement. *Technological Forecasting and Social Change*, 125, 178–187.
- Goven, J., Pavone, V. (2015). The Bioeconomy as Political Project A Polanyian Analysis. *Science, Technology & Human Values*, 40(3), 302–337
- Grin, J., Rotmans, J., Schot, J. (2010). Transitions to Sustainable Development: New Directions in the Study of Long Term Transformative Change. *Routledge*.

- Haraway, D. (1988).** Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, 14 (3), 575-599
- Hilgartner, S. (2007).** Making the bioeconomy measurable: Politics of an emerging anticipatory machinery. *BioSocieties*, 2(3), 382-386.
- Hodgson, G. (2016)** The future of work in the Twenty First Century. *Journal of Economic Issues*, 50(1), 197-216.
- Horlings, L. G., Marsden, T.K. (2011).** Towards the real green revolution? Exploring the conceptual dimensions of a new ecological modernization of agriculture that could 'feed the world'." *Global environmental change* 21 (2): 441-452.
- Horlings, L. G., Marsden, T.K. (2014).** "Exploring the 'New Rural Paradigm' in Europe: Eco-economic strategies as a counterforce to the global competitiveness agenda. *European Urban and Regional Studies* 21(1), 4-20.
- Inderwildi, O., King, S.D. (2012).** Energy, Transport, & the Environment. *Springer London*.
- Iniesta-Arandia et al. (2020).** How can feminist and postcolonial studies of science contribute to the co-production of knowledge? *Outlook for IPBES. Ecosystems*
- Isaksen, A. (2015).** Industrial development in thin regions: trapped in path extension? *Journal of Economic Geography*, 15 (3), 585-600
- Kadykalo, A. N. et al. (2019).** Disentangling 'ecosystem services' and 'nature's contributions to people. *Ecosystems and People*, 15(1), 269-287.
- Kallis, G. (2017).** Economics without growth. *Another Economy is Possible: Culture and Economy in a Time of Crisis*, 34-54.
- Kallis, G. (2017).** Socialism Without Growth. *Capitalism Nature Socialism*, 30(2), 189-206.
- Kallis, G., Kerschner, C., Martinez-Alier, J. (2012).** The Economics of Degrowth. *Ecological Economics*, 84 172-180.
- Kemeny, T., Storper, M. (2020).** Superstar cities and left-behind places: disruptive innovation, labor demand, and interregional inequality. International Inequalities Institute.
- Kitchen, L., Marsden, T. (2011).** Constructing sustainable communities: a theoretical exploration of the bio-economy and eco-economy paradigms. *Local Environment*, 16(8), 753-769.
- Köhler, J. et al. (2019).** An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future directions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 31, 1-32.
- Latouche, S. (2009).** Farewell to Growth. *Cambridge Polity*.
- Leach, M., et al. (2012).** Transforming innovation for sustainability. *Ecology and Society*, 17.2.
- Levin, S. et al. (2013).** Social-ecological systems as complex adaptive systems: modeling and policy implications. *Environment and Development Economics*, 18(2), 111-132.
- Loorbach, D., Frantzeskaki, N., Avelino, F. (2017).** Sustainability transitions research: transforming science and practice for societal change. *Annual Review of Environment and Resources*, 42, 599-626.
- Lucas, R., Díaz-Delgado, R., Hurford, C. (2017).** Expected Advances in a Rapidly Developing Work Area. The Roles of Remote Sensing in Nature Conservation, 309-318. *Springer, Cham*.
- Luoma, P., et al. (2011).** Distributed Bio-Based Economy - Driving Sustainable Growth. *Finnish Innovation Fund (SITRA)*.
- Macleán, R., Jagannathan, S., Panth, B. (2018).** Education and Skills for Inclusive Growth, Green Jobs, and the Greening of Economies in Asia: Case Study Summaries of India, Indonesia, Sri Lanka and Viet Nam. *Springer*
- Marsden, T., Farioli, F. (2015).** Natural powers: from the bio-economy to the eco-economy and sustainable place-making. *Sustainability Science*, 10(2), 331-344.
- Martinez-Alier, J., Munda, G., O'Neill, J. (1998).** Weak comparability of values as a foundation for ecological economics. *Ecol. Econ.* 26, 277-286.
- Martín-López, B. et al. (2014).** Trade-offs across value-domains in ecosystem services assessment. *Ecological Indicators*, 37, 220-228.
- Martín-López, B. et al. (2009).** The Assessment of ecosystem services provided by

biodiversity: Re-thinking concepts and research needs. *Handbook of nature conservation*, 261–282.

Mazzucato, M. (2017). Mission-oriented innovation policy. *UCL Institute for Innovation and Public Purpose Working Paper*.

Méndez, P. F., Amezaga, J. M., Santamaría, L., (2019). Explaining path dependent rigidity traps: increasing returns, power, discourses, and entrepreneurship intertwined in social-ecological systems. *Ecology & Society*, 24(2), 30.

Morgan, K., Marques, P. (2019). The Public Animateur: mission-led innovation and the “smart state” in Europe. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 12(2), 179–193.

Morgan, K., Sabel, C. (2019). The experimentalist polity. *London: NESTA*

Nightingale, A. J. (2016). Adaptive scholarship and situated knowledges? Hybrid methodologies and plural epistemologies in climate change adaptation research. *Area* 48(1), 41–47.

OECD (2006). Scoping document: The bioeconomy to 2030: Designing a policy agenda. *OECD*: 382-286

OECD (2009). The Bioeconomy to 2030: Designing a policy agenda. *OECD*: 1-18.

OECD (2019). Regions in Industrial Transition: Policies for People and Places. *OECD Publishing*: <https://doi.org/10.1787/c76ec2a1-en>.

Olsson, P., et al. (2017). The concept of the Anthropocene as a game-changer: a new context for social innovation and transformations to sustainability. *Ecology and Society* 22.2

Oteros-Rozas, E. et al. (2015). Participatory scenario planning in place-based social-ecological research: Insights and experiences from 23 case studies. *Ecology and Society*, 20 (4), 32.

Parra, C. (2013). Social sustainability: a competing concept to social innovation? *International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research*, 142-154.

Parry, B. (2007). Cornering the Futures Market in Bio-epistemology. *BioSocieties*, 2(3), 386.

Pavone, V., Goven, J. (2017). Bioeconomies. *Palgrave Macmillan*.

Pavone, V., Goven, J. (2017). Bioeconomies: Life, Technology and Capital in the 21st Century. *Science and Technology Studies*.

Pellicer-Sifres, V. et al. (2018). Learning, transformative action, and grassroots innovation: Insights from the Spanish energy cooperative Som Energia. *Energy Research & Social Science*, 42, 100–111.

Pérez Prieto, L. (2017). Feminist epistemology and knowledge from the global South. *Political Ecology*, 12-15.

Pérez, A. (2011). Multidimensional crisis and sustainability of life. *Feminist investigations*, 2, 35.

Perruchas, F., Consoli, D., Barbieri, N. (2020). Specialization, diversification, and the ladder of green technology development. *Research Policy*, 49(3), 103922.

Peters, J., Eathington, L., Swenson, D. (2011). An Exploration of Green Job Policies, Theoretical Underpinnings, Measurement Approaches, and Job Growth Expectations. *Staff General Research Papers*, 32787.

Pfau, S. F., et al. (2014). Visions of sustainability in bioeconomy research. *Sustainability*, 6(3), 1222-1249.

Pike, A., Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. (2016). Local and Regional Development. *Abingdon: Taylor & Francis*.

Polasky, S. et al. (2011). Decision-making under great uncertainty. Environmental management in an era of global change. *Trends in ecology & evolution*, 26(8), 398–404.

Radjawali, I., Pye, O., Flitner, M. (2017). Recognition through reconnaissance? Using drones for counter-mapping in Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 44(4), 753–769

Ramcilovic-Suominen, S., Pölzl, H. (2016). Sustainable development - A ‘selling point’ of the emerging EU bioeconomy policy framework? *Journal of Cleaner Production*, 172, 4170-4180.

Raworth, K. (2012). A safe and just space for humanity: can we live within the donut? *Oxfam Discussion Paper*.

Rosenberg, N. (1976). Perspectives on Technology. *Cambridge University Press*.

Sarewitz, D., Nelson, R. (2008). Three rules for technological fixes. *Nature*, 456.7224, 871–872.

- Schlüter, M. et al. (2019).** Capturing emergent phenomena in social-ecological systems: an analytical framework. *Ecology and Society*, 24(3), 11.
- Schmidt, O., et al. (2012).** The bio-economy concept and knowledge base in a public goods and farmer perspective. *Bio-based and applied economics*, 1(1), 47-63.
- Schneider, F. et al. (2010).** Crisis or Opportunity? Economic Degrowth for Social Equity and Ecological Sustainability: Introduction to this Special Issue. *Journal of Cleaner Production*, 18(6), 511-518.
- Schot, J., Steinmueller, W. E. (2018).** Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change. *Research Policy*, 47(9), 1554-1567
- Schultz, T. (1961).** Investment in Human Capital. *Am Econ Rev*, 51(1), 1-17
- Sheppard, A. W., et al. (2011).** Biosecurity and sustainability within the growing global bioeconomy. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, (1), 4-10.
- Siebenhüner, B. (2000).** Homo substituiens - towards a new conception of humans for the science of sustainability. *Ecological Economics*, 32.1, 15-25.
- Smolker, R. (2008).** The new bioeconomy and the future of agriculture. *Development*, 51(4), 519-526.
- Steffen, W. L. et al. (2004).** Global Change and the Earth System: A Planet Under Pressure. *New York Springer*.
- Styhre, A., Sundgren, M. (2011).** Venturing into the Bioeconomy: Professions, innovation, identity. Basingstoke. *Palgrave Macmillan*.
- Thompson, P. B. (2012).** The agricultural ethics of biofuels: the food vs. Fuel debate. *Agriculture 2.4*, 339-358.
- Tomei, J., Helliwell, R. (2016).** Food versus fuel? Going beyond biofuels. *Land use policy*, 56, 320-326.
- United Nations Environment Program (2019).** Emissions Gap Report 2019. *UNEP*.
- Vona, F., Consoli, D. (2015).** Innovation and skill dynamics: a life-cycle approach. *Industrial and Corporate Change*, 24(6), 1393-1415.
- Vona, F., Marin, G., Consoli, D. (2019).** Measures, drivers, and effects of green employment: evidence from US local labor markets, 2006-2014, *Journal of Economic Geography*, 19 (5): 1021-1048.
- Wolff, M. G. et al. (2019).** Exploring and expanding transdisciplinary research for sustainable and just natural resource management. *Ecology and Society*, 24(4), 14.
- Wolfram, M., Borgström, S., Farrelly, M. (2019).** Urban transformative capacity: From concept to practice. *Ambio*, 48(5), 437-448.
- York, T., and Becker, C. (2012).** Cultivating an ethic of environmental sustainability: Integrating insights from aristotelian virtue ethics and pragmatist cognitive development theory. *Journal of College and Character*, 13.4.

DESAFÍO B

RESUMEN

Este desafío se formula en términos de “humanidades en transición”, es decir, su abordaje y articulación ante los cambios que deben sufrir para lograr el peso social que, por su relevancia intrínseca, les debe corresponder. Ante estas situaciones que demandarían un refuerzo en la investigación y difusión en diversos aspectos de las humanidades, desde múltiples perspectivas, paradójicamente se dibuja un panorama adverso para el desarrollo y difusión del conocimiento humanístico, que atañe a diferentes factores. Algunos están relacionadas con la consideración del área del conocimiento en sí, su organización dentro del sistema científico, el cuestionamiento de sus propios límites y la interacción con otro conocimiento. Considerar los escenarios de transición actuales no significa tener que abandonar viejos objetivos, sino que suma al trabajo realizado nuevos objetos de estudio estrechamente relacionados con la realidad actual, como son: la revolución informacional; las relaciones con el ecosistema y la crisis ambiental; globalización; la intensificación de la movilidad humana y los flujos migratorios; la creciente desigualdad económica y social; las fricciones derivadas de la articulación de identidades colectivas; la descolonización de los discursos; dinámica demográfica; integración de avances tecnológicos; y viabilidad y apoyo a modelos alternativos de sociedad..

DESAFÍO B

LAS CIENCIAS HUMANAS EN ESCENARIOS DE TRANSICIÓN

Coordinadores

Josep Martí Pérez (IMF, CSIC)

Idoia Murga Castro (IH, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace un cierto tiempo, en algunos sectores de la sociedad, e incluso en ciertos ámbitos académicos, se habla de una “crisis de las humanidades”. En términos prácticos se manifiesta en una cierta pérdida, no de relevancia social -creemos que las humanidades siguen siendo relevantes y necesarias-, sino de confianza institucional. Se constata una progresiva pérdida de peso social de este tipo de disciplinas en muchos países de forma que se recortan presupuestos, se cierran facultades o se eliminan asignaturas de tipo humanístico en la enseñanza secundaria. Exceptuando cuestiones como la explotación del saber humanístico como producto cultural de consumo o la preservación y valorización del patrimonio, el grueso de la investigación en Ciencias Humanas es en muchas ocasiones minusvalorado y considerado de poca utilidad y aplicación. Mientras se prioriza una visión de las Ciencias Sociales como exclusivamente enfocadas en el presente, en algunos sectores no parece haber una idea muy clara de para qué sirve el amplio abanico de disciplinas que estudian el pasado humano y su producción artística, científica, lingüística y literaria; que proponen reflexiones éticas, políticas y jurídicas; o analizan las religiones, el multiculturalismo, la diversidad funcional, la bioética y las cuestiones de género, entre otras problemáticas muy diversas.

Resulta descorazonador observar cómo los importantes avances a nivel tecnológico que ha experimentado la humanidad no se corresponden con el impacto que deberían tener los logros de toda una larga tradición humanística que

abogan por el respeto y la dignidad de los seres humanos (a los que deberíamos añadir asimismo los no-humanos). Los investigadores que trabajan en humanidades contribuyen a desentrañar, entre otras cuestiones, cómo la tecnología se desarrolla dentro de marcos socioeconómicos variables; cómo los impactos medioambientales son el resultado acumulativo de milenios de actividad humana; cómo el cambio global es un fenómeno fundamentalmente socioeconómico y geopolítico, no meramente físico; cómo la cultura, la religión o las ideas políticas condicionan y vehiculan los avances científico-técnicos.

Discriminación, injusticia social, uso de la violencia, son fenómenos que en el mundo actual no solo siguen sucediendo a nivel de los individuos, sino también, en ciertas ocasiones, en el institucional, surgiendo incluso formaciones políticas que admiten de forma abierta la negación -según intereses particulares- de valores que el humanismo ya creía bien afianzados.

Es en este sentido en el que se formula este desafío en términos de “humanidades en transición”, es decir, su abordaje y articulación ante los cambios que éstas deben experimentar para llegar a tener el peso social que por su relevancia intrínseca les tendría que corresponder. Ante estas situaciones que demandarían un refuerzo en la investigación y la divulgación en aspectos muy diversos de las humanidades, desde múltiples perspectivas, paradójicamente se dibuja un panorama adverso para el desarrollo y la difusión del conocimiento humanístico, que tiene que ver con distintos factores. Algunos de ellos se relacionan con la consideración de la propia área de conocimiento, su organización dentro del sistema científico –incluido en el seno del CSIC–, el cuestionamiento de sus propios límites y la interacción con otros saberes.

Difícilmente se puede parcelar la esfera del conocimiento en disciplinas concretas, a pesar de los intentos que se hacen para ello en el ámbito administrativo o en las indagaciones de naturaleza estadística. La imagen de una construcción arborescente que reflejan estos intentos se contrapone al hecho de una realidad tozudamente rizomática. Esto hace que no haya consenso en la definición de “humanidades”, para algunos un término sinónimo de “Ciencias Humanas” mientras que otros prefieren diferenciarlos, en base no tan solo de objetivos, sino también de criterios metodológicos.

En el mismo CSIC aparece tanto un término como el otro, por ejemplo: *Centro de Ciencias Humanas y Sociales* (CCHS de Madrid) o *Centro de Investigación en Humanidades* (la IMF de Barcelona). Pero los investigadores de ambos centros del CSIC, de la misma manera que de otros del organismo (incluyendo los seis

institutos que forman parte el CCHS, esto es, IEGD, IFS, IH, ILC, ILLA, IPP, así como los institutos y escuelas que se encuentran en otros puntos de la geografía, EEA, EEHA, EEHAR, IAE, IAM, INCIPIT, IEGPS, IESA, INGENIO¹, realizan de forma completa o al menos parcial, investigaciones que tienen que ver con las humanidades², con una de las dos culturas de las que hablaba P. Snow quien distinguía entre las ciencias y las humanidades en su libro *Las dos culturas* (1959).

En el *Libro Blanco de la investigación en Humanidades* relativo al año 2006 elaborado por la FECYT se constataba la poca presencia de las Humanidades en el CSIC, cifrando en un 9,8 % el número de investigadores del organismo pertenecientes a esta área (FECYT, 2007). Actualmente, el porcentaje debe de ser similar.

Con la voluntad de abrir la participación a quien quisiera colaborar en la formulación de este desafío, se planteó una encuesta con la finalidad de conocer las distintas sensibilidades y opiniones de los/las investigadores/as del CSIC que trabajan en escuelas, institutos o centros de humanidades –precisando que algunas de estas personas consideran que su investigación se realiza en el ámbito de las Ciencias Sociales, como puede ser el caso de la Historia social.

La encuesta (véase anexo II) englobaba varias preguntas dirigidas tanto a aspectos generales de las humanidades, como a los posibles escenarios de transición sobre los que la investigación en Ciencias Humanas podría tener algo que decir, como al trabajo de los propios grupos de investigación en relación con estas realidades. La encuesta se envió a un total de 435 destinatarios³ pudiéndose cumplimentar tanto a nivel individual como en nombre de todo el grupo. Se obtuvieron 25 encuestas cumplimentadas, pero de una forma u otra, en este informe se recogen opiniones de 22 grupos de investigación entre el total de los 66 grupos del CSIC que trabajan en el ámbito de las Ciencias Humanas⁴. Aunque el valor de los resultados desde el punto de vista cuantitativo es muy limitado debido a la baja participación, desde el punto de vista cualitativo, las respuestas obtenidas nos han sido de gran utilidad para elaborar este informe. Asimismo, se han incorporado a los contenidos de este informe las opiniones recibidas por escrito de algunos/as investigadores/as que han

1 <https://www.csic.es/es/investigacion/institutos-centros-y-unidades>.

2 En el CSIC se realiza investigación en ámbitos característicos de las Ciencias Humanas como la filosofía, lingüística, historia, musicología, geografía, antropología o teoría del conocimiento.

3 Los envíos se realizaron, por una parte, utilizando las listas de distribución internas del CCHS por institutos, eligiendo solamente los de Ciencias Humanas así como la de la IMF. Por otra parte, para el resto de centros, institutos y grupos de investigación, se recuperaron los correos electrónicos disponibles en la página web del CSIC.

4 La información se ha extraído de las respectivas páginas webs de los institutos y del CSIC.

preferido no utilizar el formato de la encuesta para trasladar sus perspectivas acerca de este desafío planteado.

En la encuesta realizada solo se obtuvo una respuesta de una persona que no se identificaba con la etiqueta “humanidades”. El resto lo hacían completamente (18) o bien bastante (6). Hay quien prefiere la denominación “Ciencias Humanas” o incluso quienes de manera expresa afirman que su ámbito de estudio pertenece más bien al de las “Ciencias Sociales”.

De acuerdo con la encuesta realizada, los investigadores/as que consideran en crisis las humanidades son algo más que los que niegan tal situación. Y si se habla de crisis es por un conjunto de factores, como las ideas y valores de la sociedad actual tanto en general como de forma más concreta en relación con lo que se espera de la ciencia, el poco apoyo institucional (derivado del anterior punto), el propio trabajo de sus especialistas –la tan socorrida metáfora de la torre de marfil– y la falta de adecuación de este tipo de estudios a la realidad actual. Todo ello está interrelacionado.

Pero se esté o no de acuerdo con la situación de crisis, la opinión mayoritaria de los investigadores encuestados es que la situación actual de generación de conocimiento requiere dar un nuevo rumbo a las humanidades (afirmativo: 19; negativo: 4; no lo sabe: 2). Este nuevo rumbo, según recogen las encuestas, podría orientarse hacia tres ámbitos:

1. Explorar nuevas metodologías que nos permitan avanzar en la investigación en humanidades.
2. Consiliencia. Contribuir a romper las fronteras de las disciplinas científicas para generar una interconexión en términos de convergencia teórica y metodológica.
3. Una mayor adaptación a los nuevos retos, valores sociales y requerimientos socio-político-económico-culturales y éticos de la sociedad y el mundo del siglo XXI.

No todos los grupos que de forma explícita afirman que hay que dar un nuevo rumbo a las humanidades se consideran bien preparados para ello. Deficiencias del sistema y escaso apoyo por parte del CSIC son las principales razones que se aducen. En todo caso, si se quiere mejorar la situación de las humanidades, se debe reflexionar, entre otras cuestiones, sobre el trabajo de los especialistas.

2. LOS RETOS

El mundo y las sociedades humanas desde sus mismos inicios se encuentran siempre en un constante cambio y uno de los retos importantes propio de cualquier tipo de práctica científica no es tan solo el de detectar las características de los escenarios de transición, sino también contribuir a su gestión dentro de sus posibilidades. A través de la encuesta realizada son diversos los aspectos que, relacionados con ello, forman parte de los intereses del personal investigador de humanidades, ya sea como parte del trabajo que se está realizando o como posibilidad futura.

Tomar consciencia de estos escenarios de transición implica tanto focalizar la investigación hacia objetivos de relevancia social como reflexionar sobre la misma práctica investigadora, no tan solo en relación con los marcos teóricos y metodológicos que se aplican, sino también en relación con los valores que subyacen y que, desde nuevas posturas humanistas, son objeto de crítica. Es decir, entendemos que los retos para las humanidades en los escenarios de transición deben dar la debida importancia a cuestiones como, entre otros, los objetos de estudio relacionados con la realidad actual, el desarrollo de herramientas conceptuales y de análisis, y determinados valores.

2.1. Objetos de estudio relacionados con la realidad actual

La producción de conocimiento en el ámbito de las humanidades contempla un vastísimo campo de intereses. El hecho de tener en cuenta actuales escenarios de transición no significa tener que abandonar viejos objetivos, pero sí añadir al trabajo que se ha ido realizando nuevos objetos de estudio estrechamente relacionados con la realidad actual y que pueden ser enfocados desde perspectivas humanistas. Creemos que unas humanidades del siglo XXI, no pueden ignorar las siguientes realidades, entre otras posibles:

2.1.1. *La revolución informacional.*

Los nuevos procesos de generación, difusión y recepción de información que se articulan alrededor de las Tecnologías de la Información y Comunicación constituyen un ámbito de interés para la investigación humanista, además de las implicaciones epistemológicas y metodológicas que posee, como resulta evidente en la aparición de las denominadas “humanidades digitales”.

2.1.2. *Relaciones con el ecosistema y la crisis medioambiental.*

La gravedad de la emergencia climática requiere que se le preste atención desde todos los posibles puntos de vista y las humanidades pueden tener un

papel importante. Las denominadas “humanidades ambientales” contribuyen al desarrollo de una necesaria conciencia ecológica y ecosocial a nivel planetario. El concepto de “antropoceno” nos ayuda a ser conscientes de los excesos antrópicos que ponen en peligro la continuidad del planeta. El antropoceno implica un tiempo de profunda crisis de valores éticos y epistemológicos, y las humanidades son fundamentales para contribuir a promover cambios en los comportamientos individuales y sociales que favorezcan la sostenibilidad y colaboren en la formulación y consolidación de nuevos modelos de cultura material y regulación socioambiental.

2.1.3. La globalización.

Un escenario de transición a la fuerza tiene que tomar en consideración la realidad de la actual globalización. Pero ello no significa pensar de manera simplista tan solo en un escenario global formado por interconexiones a nivel planetario, sino en términos de “glocalización”, neologismo que alude a la necesidad de interconectar lo global y lo local. Es decir, unas humanidades socialmente relevantes requieren tanto “pensar en lo global y actuar en lo local” como también “pensar en lo local y actuar en lo global”. Si los investigadores del CSIC ya son plenamente conscientes de la necesidad de moverse en ámbitos internacionales existe ahora el peligro de olvidarse de lo local, más cuando las políticas científicas actuales, mediante sus procedimientos de evaluación, tienden a minusvalorar lo local. Pensar en lo global y actuar en lo local implica apoyar una “práctica científica de proximidad”.

2.1.4. La intensificación de flujos de movilidad y migratorios humanos.

La migración es algo consubstancial a la especie humana. Por razones principalmente económicas, políticas y ambientales, los flujos migratorios se han intensificado considerablemente en las últimas décadas en todo el mundo, lo que convierte la rearticulación diaspórica y el desplazamiento en un asunto central al que dirigir nuestra atención y aportaciones. Las humanidades constituyen una pieza clave para reflexionar sobre cómo hay que entender estos fenómenos y cuál debe ser su gestión social y política acorde con los valores de dignidad humana.

2.1.5. La creciente desigualdad económica y social.

Un desarrollo humano positivo resulta incompatible con las grandes desigualdades económicas constatables tanto entre diferentes sociedades como en una misma sociedad. Los actuales escenarios de transición presentan una preocupante realidad dado que la manera de generar y distribuir riqueza, acrecentada en las últimas décadas mediante importantes avances tecnológicos,

aumenta, en lugar de mitigar, la creciente desigualdad económica y social. Se perpetúan aún desigualdades y precariedades relacionadas con los cuidados, el consumo, la participación ciudadana, la orientación sexual o la identidad de género, entre otras. Estas desigualdades aún generan lacras tan graves como la violencia machista. Son cuestiones ante las que están emergiendo con fuerza los feminismos de la cuarta ola. Si aquello que se persigue es lograr sociedades más equitativas, aumentar nuestro conocimiento sobre la desigualdad y los modos de combatirla resulta imprescindible.

2.1.6. Las fricciones derivadas de la articulación de identidades colectivas.

La temática de las identidades colectivas es algo que de forma transversal ha preocupado en las últimas décadas a todo ámbito de las Ciencias Humanas, y además constituye un aspecto central en los nuevos escenarios de transición. Además de aquellas identificaciones que de forma más recurrente han llamado la atención de los investigadores, como las relativas al género, etnicidad, religión o clase social, se suman las que continuamente van surgiendo relacionadas con estilos de vida, edad, condiciones corporales, etc. Asimismo, los estudios científicos del pasado humano llevan generaciones deconstruyendo, analizando y criticando ideas, motivos y mitos sobre las identidades y lealtades colectivas. El pasado es un bien por el que se compete en muchos escenarios, por lo que a disciplinas como, entre otras, la Historia, el Arte y la Geografía se les ha asignado el papel primordial de producir y legitimar identidades, imaginarios y estereotipos –cayendo en la trampa del nacionalismo metodológico (Beck, 2006)– más que producir conocimiento científico sobre el pasado. Situaciones actuales evidencian que es muy necesario que las investigaciones del pasado del ser humano contribuyan a comprender el fenómeno humano como un proceso multidimensional a tiempo largo. En escenarios dominados por la globalización y sus fricciones identitarias, las humanidades no se pueden desentender de cómo se mantienen, configuran y reconfiguran las identidades, y muy especialmente cuáles son aquellas que emergen en las nuevas condiciones económicas, políticas y ecológicas que experimenta actualmente la humanidad.

2.1.7. La decolonización de los discursos.

En un mundo globalizado, de fricción de identidades e imaginarios, que debe tender a la lucha contra las desigualdades, es necesaria la implementación de perspectivas decoloniales que favorezcan la concienciación, la empatía y el entendimiento mutuo ante la presencia de la alteridad, y que favorezcan nuevos modelos de relación alternativos a las lógicas de explotación tardocapitalistas.

2.1.8. La dinámica demográfica

La dinámica demográfica constituye un reto importante para las sociedades actuales. No estamos hablando tan solo del exponencial crecimiento de la población humana del planeta sino también de los cambios que se producen en muchas sociedades en la relación diferencial entre las edades, consignándose un envejecimiento general progresivo.

2.1.9. Integración de los avances tecnológicos

El futuro próximo de la humanidad se caracterizará por grandes avances en cuestiones tecnológicas de todo tipo pero muy especialmente en los de carácter biotecnológico que implican un fuerte impacto en la población: Ciborgización, vida artificial, robótica, nanotecnología, manipulación genética... Estos avances no deberían darse sin tener en cuenta su integración progresiva entre la población atendiendo a cuestiones éticas o de equidad y justicia social. Las humanidades deben implicarse muy directamente en esta cuestión, abordando también de forma crítica la cuestión de fondo sobre lo que significa “progreso”, sus implicaciones y su manejo inteligente.

2.1.10. Viabilidad y apoyo a modelos alternativos de sociedad.

Las humanidades pueden proporcionar alternativas, nuevas soluciones y modelos para los problemas de nuestras sociedades. Conceptos como la utopía, la memoria o la poética pueden ser claves para dialogar con el pasado humano, analizar su situación actual y mejorar su futuro. Las oleadas de propuestas populares, desde las llamadas Primaveras Árabes al 15M y otras, han evidenciado escenarios nuevos de participación ciudadana. Entre los retos se encuentra la canalización de estas críticas y deconstrucciones hacia nuevas formas afirmativas de entender el lugar del ser humano en su complejidad. Para ello, el papel de las humanidades es clave.

No obstante, a pesar de esta enumeración de algunos de los principales retos identificados en los que, sin duda, los/las investigadores/as en Ciencias Humanas pueden aportar conocimiento, experiencia y herramientas para su abordaje, no deben olvidarse otros muchos ámbitos de investigación propios de esta área y de larga tradición en el CSIC. Aunque de forma directa ciertos sectores consideren que no ofrecen una aplicación práctica o un lugar prioritario entre las emergencias sociales en la actualidad, deben continuar siendo objeto de investigaciones en el presente y en el futuro, contando con recursos humanos y económicos, con libertad de investigación y cátedra, y con un espacio apropiado para fomentar la creatividad y la formulación de potenciales resultados.

3. DESARROLLO DE HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y DE ANÁLISIS

Al mismo tiempo que se abordan objetivos de investigación relacionados con aspectos que caracterizan los escenarios de transición, la investigación en humanidades tiene también como reto el desarrollo de herramientas conceptuales y de análisis que estén acordes con las necesidades que emergen de la realidad actual. Por regla general, el personal investigador del CSIC es muy consciente de que “there is no greater intellectual crime than to address with the equipment of an older period the challenges of the present one” (Latour, 2004: 231). Al menos, una gran mayoría de las respuestas obtenidas de los grupos en la encuesta hacen mención a esta necesidad, si bien se comenta a menudo la falta de medios, principalmente de tiempo y personal, para hacer frente a estos retos.

La investigación de las humanidades en el CSIC no puede quedar al margen de las nuevas corrientes que a nivel internacional van surgiendo para adaptar desde el punto de vista epistemológico, teórico y también social las Ciencias Humanas a los tiempos actuales, con visiones críticas hacia la tradición humanista y al mismo tiempo propositivas para el presente (Braidotti, 2013). En el núcleo de estas corrientes se halla el reconocimiento explícito de la necesidad de reformular, replantear o incluso superar el mismo pensamiento humanista del cual han surgido las humanidades. Estas corrientes, al constituir un importante reto epistemológico para las Ciencias Sociales y Humanas debido a los esquemas alternativos de pensamiento que desarrollan, constituyen una posible respuesta a la denominada crisis e inherente pérdida de peso social de las humanidades.

Un reto asimismo importante para las humanidades en la actualidad es la necesidad de contrarrestar la progresiva fragmentación del conocimiento mediante enfoques inter y transdisciplinares, incluso en términos de la consiliencia por la que abogaba el biólogo humanista Edward Osborne Wilson (1999), como la voluntad de tender puentes entre las denominadas “ciencias duras” y las humanidades.

En nueve de los grupos de investigación que cumplieron la encuesta, la colaboración con otras áreas científicas ajenas a las humanidades es ya una realidad. Por otra parte, para cinco de ellos, este trabajo conjunto sería deseable aunque no ven la forma de hacerlo, mientras que en otras siete respuestas se especificaba que el establishment institucional más bien dificulta esta colaboración.

4. VALORES

El abordaje de retos como los planteados en los apartados anteriores y otros que puedan ser tenidos en cuenta demanda ser consciente de la necesidad de construir la investigación de forma entrelazada con aquellos valores propios de la tradición humanística que consideremos adecuados. De hecho, los mismos escenarios de transición enumerados ya surgen como la necesidad de hacer casar la investigación humanística con determinados valores sociales. Pero no solo los objetos de investigación deben reflejar la importancia dada a estos valores sino también la misma práctica investigadora. Se trata de implementar aquellos valores pensados no tan solo para el mejor de los mundos posibles sino también para la mejor ciencia posible.

La cuestión del fraude intelectual es algo que tenemos bien asumido aunque conviene tenerlo siempre presente (recordemos la mordaz crítica de Sokal y Bricmont con sus *Imposturas intelectuales* 1997 que si bien fue contestada no resulta en el fondo del todo improcedente). Pero a parte de los valores que habitualmente ya se asocian a la práctica científica, se deberían tener en cuenta aquellos que surgen al tomar en consideración la realidad social actual marcada por la necesidad de que las actuaciones científicas se adecuen a los valores propios del feminismo, ecologismo y del reconocimiento de la diversidad, como asimismo se tenga en cuenta el interés de superar el individualismo en pro de actitudes más propias de un ethos colaborativo, y la necesidad de evitar la explotación sin ética de la investigación. Se trata de cuidar el equilibrio entre aquellos diferentes aspectos que fundamentalmente motivan el trabajo de investigación: los intereses estrictamente personales –el gusto por la investigación o el querer hacer carrera–, la fidelidad a lo que Alvesson et al (2017) denominaban la “microtribu” del investigador y el querer prestar un servicio más allá de estos límites pensando en términos de relevancia social, siendo conscientes de la necesidad de contrarestar la presión del individualismo liberal. Si en las últimas décadas se puede hablar de la implantación de procesos de macdonalización en ámbitos académicos y de gestión de la ciencia (Ritzer, 1996), se debe calibrar el interés de recurrir al pensamiento alternativo de movimientos como el de la *Slow Science*⁵ por los diferentes valores que implica. También resulta imprescindible reconocer que en la investigación no solo el “pensar” tiene un papel, sino seáse consciente o no, el sentipensar o la inextricable relación entre la mente y la dimensión emocional, con sus derivadas de afectividad y empatía, es importante para entender las prácticas científicas.

⁵ <http://slow-science.org/>

En todo caso, la cuestión de los valores pertenece también de forma bien clara a los retos que la investigación debe afrontar en los nuevos escenarios que se nos presentan.

ENCUESTA REALIZADA: Ciencias humanas en escenarios de transición.

Nombre

Grupo de investigación::

1. ¿En qué medida sientes que tu labor investigadora se identifica con el campo de las humanidades?

- ☐ Completamente
- ☐ Bastante
- ☐ No del todo (Razones?):

2. Se habla de “crisis de las humanidades” ¿Estás de acuerdo?

- ☐ SÍ
- ☐ NO
- ☐ Si es así, ¿cuáles crees que son los motivos?

3. ¿Crees que la situación actual de la generación de conocimiento requiere dar un nuevo rumbo a las humanidades?

- ☐ SÍ
- ☐ NO
- ☐ NS/NC

Si es así:

¿Qué podría comprender este nuevo curso?

¿En qué medida su grupo se considera preparado para afrontar este nuevo rumbo?

¿En qué medida su grupo se considera apoyado por el CSIC para afrontar este nuevo rumbo?

4. En relación con la pregunta anterior, los cambios siempre requieren un esfuerzo de adaptación. Implican un proceso reflexivo y crítico sobre el propio trabajo que se ha realizado dentro del campo disciplinar en las últimas décadas, y pensar en nuevos escenarios. ¿Hay posibilidades en su grupo de hacer este esfuerzo?

- ☐ No lo tomamos en cuenta
- ☐ Somos conscientes, pero por falta de tiempo/personal no lo consideramos.
- ☐ Somos conscientes de ello y ya forma parte de nuestro trabajo diario.
- ☐ Otros:

5. ¿Qué escenarios de transición a nivel mundial detecta su grupo que deberían influir en el estudio de las humanidades?

6. Desde hace algunas décadas se habla de la idea (para algunos controvertida) de las “dos culturas” para referirse a una separación entre ciencias, cuyos extremos más opuestos serían las llamadas “ciencias duras” y las humanidades. ¿Qué opinas de establecer puentes entre los dos, por ejemplo, colaborando con grupos de investigación de diferente índole?

- ☐ Ya es parte del trabajo de mi grupo.
- ☐ Nunca lo he pensado.
- ☐ Es imposible para mi ámbito de trabajo.
- ☐ Sería deseable, pero no veo la forma.
- ☐ El establecimiento institucional lo dificulta.
- ☐ Otros:

7. ¿Consideraría interesante que hubiera un mayor esfuerzo institucional por parte del CSIC para promover la transversalidad entre estas “dos culturas” en la investigación?

- ☐ Sí
- ☐ NO
- ☐ Si es así, ¿se le ocurre alguna medida concreta del CSIC?

8. ¿Qué piensas de esta idea? Actualmente, las publicaciones del personal investigador son un fin más que una consecuencia real de un trabajo de investigación innovador y representan un avance en la ciencia. Se trata de la filosofía de publicar o perecer.

- ☐ Completamente en desacuerdo
- ☐ En ocasiones es así
- ☐ Ocurre con más frecuencia de lo deseable.
- ☐ Otros:

9. ¿Qué fortalezas puede ofrecer su grupo en el marco de la transición hacia sociedades globales y sostenibles?

10. ¿Cuáles son los retos de futuro que deben afrontar los investigadores de Humanidades para mejorar nuestra sociedad?

11. ¿Quieres añadir algún comentario?:

¡Gracias por tu colaboración!

Dirección de envío de la encuesta completada:
challenge.cchh.transicion@gmail.com

Fecha límite de envío: 7 de febrero.

DESAFÍO B | REFERENCIAS

Alvesson, M., Yiannis, G., Paulsen, R. (2017). Return to meaning: a social science with something to say. *Oxford University Press*.

Beck, U. (2006). Cosmopolitan Vision. *Cambridge Polity*.

Braidotti, R. (2013). The Posthuman. Malden Polity Press.

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (2007). Libro Blanco en Investigación en Humanidades. *FECYT*: <https://www.fecyt.es/es/publicacion/libro-blanco-en-investigacion-en-humanidades>

Latour, B. (2004). Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. *Critical Inquiry*, 30/2, 225-248

Ritzer, G. (1996). La McDonalización de la sociedad: un análisis de la racionalización en la vida cotidiana. *Barcelona Ariel*.

Snow, C.P. (1978). The Two Cultures and a Second Look. *Cambridge University Press*.

Sokal, A., Bricmont, J. (1997). Impostures intellectuelles. *Paris Editions Odile Jacob*.

Wilson, E. O. (1999). Consilience: The Unity of Knowledge. *New York Vintage*.

RESUMEN

El proceso de urbanización no es homogéneo. En Europa, por ejemplo, las grandes conurbaciones actúan como polo de atracción de la población, mientras que, algunos los territorios rurales, también han mejorado sus condiciones de vida y aumentado su densidad demográfica, y otros han sufrido un notable declive económico, y una despoblación particularmente aguda y progresiva, de su población envejecida. Por tanto, los problemas estructurales y las formas de interacción de las ciudades norteamericanas y europeas con las zonas rurales difieren de las megaciudades asiáticas y latinoamericanas. Las respuestas institucionales para asegurar la gobernanza de estas grandes conurbaciones y el equilibrio con el resto del territorio estatal tampoco han sido las mismas. Todas estas dinámicas plantean, por tanto, nuevos escenarios de interacción rural-urbana con retos de futuro que se pueden clasificar en áreas (sub) temáticas analizadas por diversos investigadores del CSIC y grupos extranjeros consultados para la realización de este documento.

DESAFÍO C

DESARROLLO TERRITORIAL EN NUEVOS ESCENARIOS DE INTERACCIÓN RURAL - URBANA

CoordinadoresFrancisco Colom González
(IFS, CSIC)Ana M^a López Sala
(IEGD, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

Las áreas urbanas se han convertido en los espacios predominantes de asentamiento humano en el siglo XXI. Las consecuencias de este proceso para la evolución de la especie humana son fundamentales, ya que en 200.000 años el *homo sapiens* ha pasado de ser una pequeña especie de cazadores y recolectores que vagaba por las sabanas africanas a convertirse en un auténtico *homo urbanus* cuyo principal hábitat lo constituyen las ciudades. En el año 2007, por primera vez en la historia, la población de las áreas urbanas superó a la de las áreas rurales. Según los datos de las Naciones Unidas, en 2050 se prevé que la población urbana constituya el 68% de la población mundial, con los mayores incrementos en Asia y África.

La estructura de este proceso universal de urbanización es, sin embargo, muy heterogénea. Las regiones más urbanizadas del globo son en la actualidad Norteamérica (82%), América Latina y el Caribe (81%), Europa (74%) y Oceanía (68%), mientras que el porcentaje de población que vive en zonas urbanas en Asia es de aproximadamente el 50%. África sigue siendo mayoritariamente rural (43%), pero está experimentando un acelerado proceso de urbanización. El crecimiento de las grandes conurbaciones constituye un fenómeno cuantitativo que se ha traducido en un cambio cualitativo. El impacto de la urbanización sobre el desarrollo territorial, el medio ambiente y el asentamiento de la población es de un enorme calado, pues si en anteriores períodos históricos las ciudades eran espacios de alta morbilidad, en la actualidad, con un mejor acceso

a servicios médicos y sanitarios, la vida urbana ofrece en general mayores índices de longevidad que el medio rural. Las grandes ciudades consumen cantidades ingentes de energía, recursos naturales y alimentarios, lo que, sumado a la expansión de sus áreas de influencia, está llevando a la transformación de los hábitats y a la progresiva antropización de los espacios naturales.

La creación de grandes áreas metropolitanas supone una continuación histórica del cambio socio-cultural desde lo rural hacia lo urbano, pero la aceleración de este proceso ha incrementando exponencialmente la interdependencia de ambos espacios. Los profundos cambios sociales y económicos que se han producido durante las últimas tres décadas, sumados a las inversiones en infraestructuras y equipamientos, han reducido notablemente en las sociedades avanzadas las diferencias entre los niveles y modos de vida de los medios rural y urbano. Dicho de otra manera, cada vez es menos reconocible la existencia de un prototipo diferenciado de sujeto rural y de sujeto urbano. Las diferencias sociológicas entre el campo y la ciudad se están difuminando.

Este proceso, sin embargo, no es homogéneo. En Europa, por ejemplo, existen grandes conurbaciones que ejercen como polo de atracción de población al tiempo que hay territorios rurales que han mejorado también sus condiciones de vida e incrementado su densidad demográfica, mientras que otros han sufrido un notable declive económico, un envejecimiento de su población especialmente agudo y un progresivo despoblamiento. Por ello, los problemas estructurales y las formas de interacción de las ciudades norteamericanas y europeas con el medio rural no son iguales entre sí ni se asemejan tampoco a los de las megalópolis asiáticas y latinoamericanas. Las respuestas institucionales para asegurar la gobernanza de estas grandes conurbaciones y el equilibrio con el resto del territorio del Estado tampoco han sido las mismas. Todas estas dinámicas plantean, por ello, una serie de nuevos escenarios de interacción rural-urbana con retos de cara al futuro que pueden clasificarse en una serie de áreas (sub) temáticas analizadas por diversos investigadores y grupos del CSIC y del exterior consultados para realizar este documento.¹

2. CAMBIOS EN LA CONCEPCIÓN DE LA INTERACCIÓN URBANO-RURAL, EL DESARROLLO RURAL Y LA ACTIVIDAD AGRARIA

De entre las múltiples definiciones que se han ensayado para definir las ciudades, una particularmente útil para nuestros intereses es la que las describe como un asentamiento humano, altamente dependiente de espacios rurales

1 Con este fin se diseñó un cuestionario con diversas preguntas que circuló entre investigadores de distintos centros del CSIC.

(más o menos próximos), cuyos habitantes son incapaces de producir en él los alimentos necesarios para su subsistencia. La producción y el suministro alimentario ha constituido el eje tradicional de interacción entre los medios rural y urbano. Hasta la fecha, la forma convencional de intervención en la agricultura y el desarrollo rural ha sido a través de políticas sectoriales y ayudas directas destinadas a garantizar las rentas de un determinado sector de la población. La apertura de los mercados y la progresiva eliminación de los sistemas de protección agrícola, sumados a toda una serie de exigencias y limitaciones a la actividad agraria, ya sea por criterios de sostenibilidad ambiental o de seguridad alimentaria, ha abierto el debate sobre otro tipo de políticas que apuesten por un enfoque integral de desarrollo basado en el impulso a los intercambios económicos y sociales entre las poblaciones rurales y urbanas. En esta nueva lógica cuentan más cuestiones como el diseño de las redes viarias, la comunicación por banda ancha y la ubicación de los centros educativos, culturales o los parques tecnológicos que las ayudas directas a los agricultores y a la producción. La idea de fondo es abordar el desarrollo agrario desde una perspectiva territorial de *bienes públicos*, es decir, de bienes que se consumen en común, sin primar la dimensión del consumo rival de los mismos. Detrás de ello está el dato de que la rentabilidad de las explotaciones agrarias depende cada vez menos de su capacidad productiva y más de su inserción en los mercados y las redes de comercialización. Esto implica la integración de los territorios rurales en las dinámicas locales y regionales, así como su apertura a nuevas funciones más allá de la tradicional función alimentaria, como la mitigación de los efectos del cambio climático, la incorporación a los circuitos de ocio y la reintegración e inserción social de determinados sectores de la población.

En principio, podría parecer que la población urbana “explota” el medio rural sin contribuir a él y no valora suficientemente los servicios prestados por el mismo debido a esta desconexión. Actualmente estamos asistiendo en Madrid, Barcelona y otras pocas ciudades de España a un proceso de fagocitación, vaciado y pauperización de su entorno. Lo mismo ocurre en otros países, en particular en aquellos en desarrollo. La gran cuestión del futuro consiste más bien en concebir un co-desarrollo que sea, además, eco-desarrollo. La agricultura y la población dedicada a la misma producen mucho más que alimentos: si los sistemas de cultivo son sostenibles mantienen la biodiversidad, permiten la recarga de los acuíferos, regulan los flujos hídricos y sedimentológicos, evitando la erosión y el aterramiento de los embalses, moderan las crecidas de los ríos y tienen capacidad para capturar el carbono y mitigar los efectos del cambio climático. La investigación en tecnología alimentaria y de

materias primas ha estado enfocada desde hace siglos a aumentar las producciones y los rendimientos. Por el contrario, una agricultura sostenible y funcionalmente integrada con las dinámicas del medio urbano permite mantener una serie de servicios ecosistémicos de apoyo, aprovisionamiento y regulación que proporcionan bienestar a la sociedad en su conjunto y sin los cuales no podemos subsistir. Estos nuevos modos de producción más virtuosos requieren de otro tipo de investigación: genética, técnica, en maquinaria, en labores del suelo, en tratamientos fitosanitarios, etc.

Este nuevo tipo de coexistencia representa un cambio de paradigma hacia la producción de alimentos y materias primas para una economía circular. La interconexión creciente entre las zonas urbanas y rurales ha de promover modos de producción que no sólo sean compatibles con la coexistencia de distintas poblaciones y actividades sobre el territorio, sino que conduzcan también a la creación de ciclos virtuosos. Esto es aún más cierto si introducimos en la ecuación la resiliencia de las producciones agrarias y las zonas rurales para un mundo interconectado como el de hoy, donde se está dando una globalización de las plagas y enfermedades en un contexto de cambio climático.

Por el contrario, los sistemas de alimentación “low cost” dan lugar a paisajes de monocultivos intensivos poco sostenibles, explotando el campo como un mero soporte y abandonándolo cuando se ha degradado, con una pérdida enorme de biodiversidad y otros servicios ecosistémicos añadidos. Estos sistemas de monocultivo intensivo son el resultado, entre otros factores, de una insuficiente concienciación sobre la necesidad de una alimentación saludable y sostenible, del difícil acceso a la misma en muchos lugares (con la creciente aparición de “desiertos alimentarios” en zonas rurales y urbanas) y de la gran demanda basada en el consumo poco responsable, que genera grandes cantidades de desperdicios alimentarios. Este es un aspecto en el que la agricultura puede desempeñar un importante papel a través de sistemas de producción ecológica o integrándose en movimientos como el *slow-food*. En materia de producción y comercialización de alimentos también están cambiando las pautas de la relación rural/urbana. Ya no se trata del flujo unidireccional del campo a la ciudad, en el que los productos agrarios se dirigen a los mercados urbanos para su comercialización a través de una amplia red de intermediarios. Ahora, además de ese flujo, que sigue existiendo, se desarrollan otros fenómenos y formas de interacción, como la agricultura urbana, las granjas urbanas, las cadenas cortas de comercialización, la agricultura periurbana, etc. que acercan los consumidores a los productores y viceversa, como también los sistemas “de la granja a la mesa” o los mercados ecológicos y las cooperativas de consumidores.

Reto:

Concebir un eco-desarrollo colaborativo entre las zonas urbanas y rurales que ayude a generar una economía circular de servicios, trabajo y producción de alimentos y materias primas adaptada a los desafíos del cambio climático. Esto está ligado a la promoción de políticas de consumo responsable para facilitar el acceso a una alimentación saludable y sostenible.

Debilidades:

- Necesidad de un cambio cultural y de mentalidades: que la vida en el medio rural resulte igual de atractiva que la del medio urbano. Desigual distribución de equipamientos culturales, sociales, educativos y tecnológicos que permitan un acceso a los mismos en condiciones de igualdad.

Amenazas:

- Colapso de los ecosistemas naturales.
- Expansión urbana dentro de las áreas protegidas y sus alrededores (*buffer zones*)
- Fragmentación y pérdida de conectividad entre áreas protegidas.
- Falta de relevo generacional en la utilización del territorio.
- Extensificación productiva. Homogeneización del paisaje. Pérdida de biodiversidad.

Fortalezas:

- El CSIC tiene varios grupos de investigación en diferentes institutos (IEGD, Instituto Pirenaico de Ecología, CEBAS, EEAD) dedicados al manejo sostenible de suelos y sedimentos en sistemas agrícolas y forestales, así como a la prospectiva, promoción de políticas públicas y acompañamiento de los cambios estructurales que se van a producir. Asimismo cuenta con especialistas en análisis de políticas agrarias, economías circulares, seguridad alimentaria y circuitos agroalimenticios (IESA e IEGD).

Oportunidades:

- Mayor conexión entre disciplinas medioambientales, disciplinas agrícolas y ciencias sociales. Vínculos entre dinámicas medioambientales, agrarias y sociales.
- Promoción de Concilios Alimentarios Locales (*Local Food Councils*)

- Modos de producción más virtuosos. Otra investigación genética, técnica, en maquinaria, en labores del suelo y en tratamientos fitosanitarios.
- Generación de servicios eco-sistémicos producidos en el entorno rural que beneficien al medio urbano. Por ejemplo, redes de mercados de agricultores locales (a un máximo de 50km de distancia)
- Desarrollo de nuevos sistemas y técnicas de observación de la Tierra para recopilar información geográfica de interés.
- Diseño de un sistema de indicadores de sostenibilidad que oriente la toma de decisiones para planificadores del territorio (urbano y rural), gestores de áreas protegidas, zonas forestales, etc.

3. LA GESTIÓN DEL PAISAJE COMO PATRIMONIO Y RECURSO ECONÓMICO

Las transformaciones en la interacción entre los medios rural y urbano se han visto acompañadas de la aparición de nuevos valores sociales y formas de percepción del entorno. El medio rural cada vez se asume menos como un lugar exclusivamente de producción y cada vez más como un elemento especialmente valioso para la calidad de vida. Además de considerarlo un recurso, es decir, un objeto susceptible de explotación económica, la concepción del territorio como *paisaje* ha hecho que se lo vea como un espacio con un valor estético, de ocio y recreativo añadido. Abordar el desarrollo territorial desde la perspectiva de los bienes públicos permite entender la configuración del paisaje como una síntesis espacial de las relaciones sociales y una expresión diacrónica de la explotación comunitaria de los recursos naturales. El paisaje es objeto de conocimiento histórico por su propio contenido y es también objeto de divulgación, gestión y protección patrimonial en su condición de recurso económico. La investigación y la gestión del patrimonio territorial son, por tanto, dos realidades entrelazadas. En este contexto, la investigación arqueológica aporta valor añadido al generar el conocimiento que dota al paisaje de sentido histórico y permite entender las dinámicas sociales y temporales que explican lo que éste es hoy en día, incluyendo el impacto humano sobre el medio y las estrategias históricas de resiliencia y adaptación. Ese conocimiento facilita su valoración y conservación, pero también hace posible su explotación racional a través de diversos medios de difusión y divulgación. La belleza o la monumentalidad del paisaje son sólo un elemento más de la complejidad y la profundidad espacial y temporal del mismo. El paisaje, por tanto, engloba la noción de *medioambiente* al incluir la intervención cultural como un factor esencial en su configuración,

tanto en su formación histórica como en su percepción y valoración presentes. En la actualidad han dejado prácticamente de existir los paisajes naturales, porque el paisaje es el resultado directo de las actividades humanas.

Un reto adicional en este frente consiste en la adecuada gestión del turismo en los espacios patrimoniales. El patrimonio se integra en su entorno, no se segrega de él. Los criterios de conservación del paisaje sólo pueden tener éxito si éste se concibe como una realidad viva, activa y cambiante. Si desaparecen los usos de suelo y las actividades tradicionales, se pone en riesgo la viabilidad del paisaje como recurso patrimonial. Por otra parte, si los mecanismos puestos en marcha para la protección del paisaje tienden a su fosilización, se corre el riesgo de convertir ese espacio en un mero escenario para la visita turística, pero vaciado de vida propia. La doble dimensión del paisaje y el patrimonio, tomados como factor para la calidad de vida y como objeto de explotación económica, obliga a los investigadores a plantearse la utilidad y la rentabilidad de su objeto de investigación. Esto es algo que queda particularmente manifiesto en los proyectos arqueológicos. Por un lado, una actuación arqueológica no se justifica sin una proyección social. Por otro, dadas las exigencias de conservación para las futuras generaciones del patrimonio en general, y del paisaje en particular, la rentabilidad económica debe estar tamizada por la rentabilidad social. Este es un aspecto conflictivo que coloca al patrimonio en una situación ambigua en la que debe buscarse un equilibrio entre su valor social y su valor económico. Ello obliga a los investigadores a interactuar con los gobiernos regionales y locales, responsables de la gestión patrimonial, y con las comunidades locales y el asociacionismo, en los que reside la viabilidad de un paisaje vivo. Al margen de esto, aunque los métodos son similares, la práctica arqueológica es muy distinta en el campo y en la ciudad. La arqueología resulta más viable en el campo, donde se puede excavar de forma recurrente y suele haber menos intereses en juego. En las áreas rurales, la investigación arqueológica sobre los paisajes y su reconocimiento patrimonial constituye una fuente de recursos duraderos y alternativos a las actividades agresivas sobre el entorno -como pueden serlo las extractivas o industriales- y el abandono del mundo rural. Si bien estos recursos alternativos inciden directamente sobre el sector servicios, para lograr combinar la preservación del patrimonio con un turismo sostenible es preciso un desarrollo armónico de todos los sectores productivos, utilizándolo como incentivo para los sectores primario y secundario, sobre todo en su versión artesanal o tradicional. Es esencial contar con un sector primario innovador que actualice los usos tradicionales del suelo y los recursos locales que caracterizan el paisaje.

Por el contrario, en el ámbito urbano, especialmente en España, la arqueología se encuentra inmersa en un conflicto aparentemente insuperable con los intereses urbanísticos. Por ello, sus intervenciones están dirigidas sobre todo a liberar administrativamente los solares urbanos para permitir su edificación. El resultado es una pérdida enorme de información arqueológica. Donde la arqueología resulta menos conflictiva es en la restauración de arquitecturas. El principal desafío en este frente consiste en salvar el patrimonio arqueológico de las periferias urbanas como parte del esfuerzo por humanizar estos espacios, en continua expansión desde los años 70.

Reto:

Desarrollar armónicamente las investigaciones sobre el paisaje, de manera que se coaliguen con todos los sectores productivos que inciden en el desarrollo del medio rural. Es fundamental lograr un turismo sostenible apoyado en herramientas de gestión y en la implicación proactiva de los agentes locales, así como un sector primario innovador que actualice los usos tradicionales del suelo y los recursos locales que caracterizan el paisaje.

Debilidades:

- Conflicto de la arqueología urbana con los intereses urbanísticos.
- Desaparición de los usos de suelo y de las actividades tradicionales.
- Riesgo para la viabilidad del paisaje como recurso patrimonial.

Amenazas:

- Abandono. Degradación patrimonial y ambiental.
- Necesidad de salvar el patrimonio arqueológico de las periferias urbanas.
- Artificialidad. Riesgo de caer en la “cultura del simulacro”, con la conversión del espacio en mero escenario para la visita turística.

Fortalezas:

- El CSIC cuenta con grupos como el de arqueo-biología del Instituto de Historia, el grupo de Economía Ambiental del Instituto de Bienes y Políticas Públicas, el grupo de Gestión de Recursos Cinegéticos y Fauna Silvestre del IREC o el grupo de arqueología urbana de la Escuela de Estudios Árabes, que trabajan con un enfoque multidisciplinar sobre la arqueología del paisaje y su reconocimiento patrimonial.

Oportunidades:

- La investigación arqueológica sobre paisajes y su reconocimiento patrimonial son generadores de recursos duraderos en áreas rurales.
- Fijación de la población rural, repoblamiento y revitalización rural a través del arte y la cultura.
- Diversificación de ingresos de las áreas rurales. Rentabilización del potencial económico del patrimonio.
- La arqueología rural puede rescatar técnicas tradicionales de agricultura que, una vez excavadas, pueden convertirse en granjas de agro-turismo y similares.

4. DESPOBLAMIENTO RURAL Y FLUJOS MIGRATORIOS

El criterio fundamental para garantizar la sostenibilidad del territorio es su adecuada gestión y ordenación, de manera que las poblaciones intermedias puedan proporcionar servicios y recursos a las más pequeñas y ayuden a generar un sistema no se asiente en el extractivismo y en el que la jerarquización no suponga exclusión. Por ello, a medio plazo resultan insostenibles las grandes infraestructuras que pretendan dotar de servicios a las grandes urbes si ello implica generar “desiertos demográficos” en otras partes del territorio. Resulta más sencillo llevar la población allí donde está la riqueza que llevar los recursos a donde está la población. La retención de población y la generación de riqueza en el medio rural se ve dificultada mientras no se valore su trabajo y no se pueda vivir dignamente del mismo, lo que implica abrirlo a nuevos sectores económicos e iniciativas. Es imprescindible fomentar un cambio de percepción en la sociedad que considere la vida en el medio rural igual de atractiva que la del medio urbano, creando una estructura productiva diversificada que fije población femenina y joven y, con ello, ayude a generar tejido familiar. De lo contrario, las zonas rurales van a seguir descapitalizándose desde el punto de vista natural (la degradación de los agro-ecosistemas por una gestión o uso deficiente de los mismos), social (despoblamiento) y financiero (empobrecimiento). La falta de relevo generacional en la utilización del territorio tendrá como consecuencia la extensificación productiva, la homogeneización del paisaje y la pérdida de biodiversidad.

Por otro lado, el tradicional proceso de migración del campo a la ciudad que acompañó a los primeros períodos de la industrialización ha cambiado en las sociedades que han alcanzado la madurez de su ciclo de urbanización. En la

actualidad, en las sociedades urbanas puede verse un mayor flujo de trabajadores desde la ciudad al campo. A ello ha contribuido la expansión de las áreas periurbanas, que han engullido a antiguas poblaciones rurales, y la aparición de nuevos estilos de vida inspirados en la salubridad, la autonomía personal y la integración con el entorno, tal y como se refleja en fenómenos como el de los “neorurales”: personas que regresan a los pueblos de sus padres para hacerse cargo de sus antiguas tierras y explotaciones pecuarias o sujetos originariamente urbanos que deciden iniciar una nueva vida mediante una actividad económica con un valor añadido ligado al medio rural (turismo rural, agricultura ecológica, etc.). En un sentido contrario, los asalariados agrícolas de hoy viven en muchos casos en áreas urbanas, desde las que se desplazan al lugar de trabajo en el campo, de manera similar a lo que ocurre en los centros industriales o de servicios. De hecho, la mayor parte de los titulares de explotaciones agrarias reside hoy en pueblos y ciudades y sólo se desplaza a sus negocios para supervisar su gestión. Ambos ejemplos reflejan notables cambios en la interacción poblacional y de movilidad rural/urbana.

Los fenómenos migratorios también han incidido en este tipo de transformaciones. Pese a que los flujos de migrantes extranjeros hacia España durante las últimas décadas han tenido a las ciudades como destino prioritario, provocando fenómenos de segregación espacial de nueva factura, numerosos inmigrantes han encontrado un nicho laboral en las actividades agrícolas, particularmente en las que requieren un uso temporal, pero intensivo, de mano de obra. Esto ha llevado en algunos casos a la revitalización de pequeños pueblos que estaban casi despoblados, al surgimiento de rutas itinerantes de los nuevos temporeros en el medio rural (circuitos temporeros) y también a la consolidación de guetos de infraviviendas en los márgenes de las grandes explotaciones agrarias con una demanda intensiva de mano de obra, con la consiguiente necesidad de recursos de alojamiento flexible y adaptado a esta estacionalidad residencial. El alto grado de informalidad de las relaciones laborales que propician este tipo de migraciones internas ha generado bolsas de marginación que corren el riesgo de convertirse en estructurales y requieren de intervenciones ligadas a una concepción integral, sostenible e innovadora del desarrollo territorial. Otros desajustes demográficos ocasionados se vinculan a la elevada masculinización de estos trabajadores y a las necesidades de recursos sociales disponibles para este tipo de población residente temporal.

La despoblación es un fenómeno complejo y con múltiples causas, pero más recientemente ha tenido que ver sobre todo con la concentración de

inversiones, servicios y oportunidades de empleo en áreas urbanas y metropolitanas, en contraposición al medio rural. Las consecuencias de ello han sido grandes desequilibrios, fuertes dualidades y una disminución de la cohesión territorial, social y política. Es difícil buscar una solución a este problema que no consista en iniciativas puntuales que decaen cuando lo hace la generación a la que van destinadas. Como se ha señalado anteriormente, la forma de encarar este problema debe consistir en una gestión del territorio rural más centrada en la promoción de su funcionalidad (agraria, ganadera, cultural), con los empleos y servicios asociados, que en el (re)poblamiento del medio rural mediante iniciativas que intenten mantener demográficamente núcleos fuertemente envejecidos que han perdido su función. En última instancia, la sostenibilidad demográfica del territorio está estrechamente ligada a las condiciones de accesibilidad, participación social y cívica, inclusión, etc. de las comunidades basadas en los entornos más próximos. La promoción de estas cualidades debería tener en cuenta a todos los sectores etarios de la población desde una aproximación de curso de vida.

Reto:

Gestionar el desarrollo territorial de manera que se eviten grandes desequilibrios y rupturas de la cohesión socio-espacial. Para atraer y retener a la población en las zonas en las que se generan recursos es preciso apoyar a las poblaciones intermedias, que proporcionan servicios a las más pequeñas, ayudando así a generar un sistema en el que la jerarquización territorial no suponga exclusión.

Debilidades:

- Escasa valoración del trabajo rural. Escasez de recursos y servicios.
- Existencia de una línea de separación demasiado abrupta entre las aglomeraciones urbanas y el medio rural en España.

Amenazas:

- Despoblación y envejecimiento. Masculinización. Desajustes demográficos.
- Creación de “desiertos geográficos” y “desiertos alimentarios”.
- Dificultad de acceso a recursos y servicios.
- Alta estacionalidad residencial en zonas rurales durante el verano. Tensiones sobre los recursos estacionales.

- Degradación irreversible de algunos espacios habitacionales y productivos.

Fortalezas:

- Estudios antropológicos en el ILLA sobre despoblamiento rural y sobre cómo los procesos culturales modifican sustancialmente las formas de relacionarse con el medio ambiente.

Oportunidades:

- Crecientes similitudes sociales entre las poblaciones de los medios rural y urbano.
- Gestión centrada en la funcionalidad del entorno rural.
- Diseño de sistemas de financiación para cooperativas rurales de mujeres y mecanismos de crédito para *start-ups* liderados por cooperativas juveniles.

5. ENVEJECIMIENTO Y CALIDAD DEL ENTORNO VITAL

En 2020, el 9,3% de la población mundial tiene más de 65 años de edad, pero según las proyecciones demográficas más recientes, en 2050 ese porcentaje alcanzará el 15,9%. Estas proyecciones indican que serán los países en desarrollo los que cuenten con un mayor incremento de ese tipo de población, pero seguirán siendo los países avanzados los más envejecidos. La población, sin embargo, no se reparte uniformemente sobre el espacio geográfico. Existe una acusada tendencia a la concentración en las áreas urbanas. Si bien las áreas rurales tienen en España una estructura demográfica más envejecida, la población mayor, al igual que la población en su conjunto, también se concentra en áreas urbanas. Son muchas las dimensiones que confluyen en este fenómeno. La calidad del entorno habitacional es de extrema relevancia para los mayores, pues se considera que el espacio físico de vida en este grupo etario constituye un espacio de uso prevalente. Se envejece a lo largo del tiempo, pero se envejece ocupando un lugar en el espacio geográfico. Esto, junto al hecho de que la población mayor actual no ha estado sometida a mucha movilidad durante el curso de su vida, influye en que los mayores tengan asociados buena parte de sus recuerdos y memoria de vida con ese espacio. El entorno habitacional no sólo constituye el espacio de vida actual, y en muchos casos pasada, sino el lugar donde suceden buena parte de las relaciones sociales y las dinámicas de integración comunitaria. La amigabilidad del espacio es lo que permite que la población mayor pueda permanecer en su

entorno habitual de residencia el mayor tiempo posible, pero esto tan sólo es factible si se diseñan y ejecutan los proyectos pertinentes para hacer del espacio residencial, ya sea éste urbano o rural, un lugar habitable.

La idea del “envejecimiento saludable” está ligada, pues, a la de la habitabilidad y la amigabilidad del entorno. La Organización Mundial de la Salud está promoviendo el modelo de ciudades amigables como respuesta a la concentración poblacional en las áreas urbanas, al envejecimiento de la población y a la necesidad de facilitar entornos para un envejecimiento activo y saludable. En suma, lo que se propone es una mejor calidad de vida en la vejez. Según la conceptualización de la OMS, una ciudad amigable con la edad debe adaptar sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades. Conjuntamente con el proyecto sobre ciudades y comunidades amigables, son varios los marcos de actuación en esta dirección. La mayoría pretende reunir la colaboración de diversos sectores (gobiernos, sociedad civil, profesionales, academia, etc.) y dar voz a los propios mayores y sus familias para desarrollar propuestas y actuaciones con el fin de mejorar su vida. Bajo el término de envejecimiento saludable no sólo se pretende promover la salud sino también abordar los determinantes ambientales y sociales del proceso de envejecimiento. Un entorno residencial o habitacional adaptado puede facilitar la vida de los mayores y su desarrollo personal. También ayuda a luchar contra las inequidades sociales, económicas, de género, de discriminación por edad y a garantizar la atención socio-sanitaria y el cuidado de larga duración. Ese tipo de entorno puede, en definitiva, ayudar a modificar las perspectivas vitales en la vejez. Es preciso, pues, coordinar el envejecimiento saludable en los entornos rurales y urbanos con los objetivos del desarrollo sostenible. Adicionalmente, es necesario profundizar en las nuevas formas residenciales que han surgido en los últimos años vinculadas a este envejecimiento activo y que en muchos casos son señaladas como buenas prácticas y pioneras (cohousing).

Reto:

Integrar la idea del envejecimiento saludable en la concepción social del desarrollo sostenible. Para ello es preciso modificar las perspectivas vitales en la vejez y abordar los determinantes ambientales y sociales del proceso de envejecimiento. Esto incluye cuidar la calidad y amigabilidad del entorno habitacional de los mayores en los medios urbano y rural.

Debilidades:

- La población mayor en España no ha estado sometida a gran movilidad durante el curso de su vida.
- Necesidad de modificar las perspectivas sociales y vitales sobre la vejez.
- Necesidad de desarrollar acciones prospectivas y de medio plazo que tomen en consideración no sólo a la población mayor actual, sino la tendencia al envejecimiento y al incremento relativo del número de mayores de 65 años en el conjunto de la población.

Amenazas:

- Anomia. Desarraigo. Alienación de los mayores con su entorno habitacional, sobre todo en el medio urbano.
- Acciones cortoplacistas.

Fortalezas:

- Larga tradición en el CSIC de los estudios de vejez y envejecimiento (activo), geriatría y gerontología.
- Portal de Mayores

Oportunidades:

- Alineamiento de las investigaciones en el IEGD sobre envejecimiento activo y ciudades amigables para personas mayores con el marco de actuación de la Organización Mundial para la Salud en ese terreno.

6. EXPANSIÓN URBANA Y NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Si repasamos los desafíos a los que se enfrentan las urbes en general nos encontramos con una serie de problemas comunes, aunque éstos dependen también de la escala de las ciudades: congestión, contaminación y concentración de población y actividades, etc. Estos fenómenos están ligados a desajustes demográficos intraurbanos provocados por la expulsión de población de los centros de las ciudades (gentrificación, turistificación, espacios donde no se vive, sino que se transita), la degradación de los centros urbanos no gentrificados, las desigualdades en el acceso a los servicios y los medios de transporte y el crecimiento a gran escala de las metrópolis sobre las zonas periurbanas, lo que en última instancia impacta también sobre las áreas rurales y, cada vez más, sobre el

despoblamiento de ciudades intermedias, que proveen de servicios a las anteriores. Este modo de ocupación del territorio, en gran medida inédito, incide, como hemos visto anteriormente, en la calidad del paisaje y en la degradación ambiental de las áreas rurales. La supervivencia del medio rural, en el amplio sentido del término, es cada vez más dependiente de las ciudades, de la economía global y de unos medios de transporte eficaces que enlacen a su población con los centros de trabajo y de servicios. El abandono del medio rural retroalimenta el déficit crónico de acceso de estas zonas a recursos y servicios básicos, como el sanitario, el bancario, educativo, etc.

En el medio plazo es muy posible que el desarrollo tecnológico produzca una transformación o desajuste entre el lugar residencial y el lugar de trabajo que lleve a grandes cambios en los sistemas de residencia y movilidad. Esto no afectará al conjunto de la población, pero sí a una proporción considerable, y puede llegar a generar nuevas formas residenciales y nuevos patrones de movilidad cotidiana. Para que esto tenga lugar es preciso un cambio en las lógicas presenciales de la administración pública y de la empresa privada y en la amplia dependencia del transporte privado. Por otro lado, es preciso que la sostenibilidad de esas nuevas movilidades vaya acompañada de una “economía circular” capaz de reciclar y reutilizar los materiales para volver a introducirlos en la cadena productiva, intentando reducir así la huella de carbono.

Reto:

Desarrollar nuevos servicios de movilidad sostenible en el marco de una economía circular de reutilización y reciclado de los materiales.

Debilidades:

- Suburbanización.
- Amplia dependencia del transporte privado.
- Estructura radiocéntrica de los sistemas de transporte.

Amenazas:

- Congestión.
- Contaminación y baja calidad del aire.

Fortalezas:

- Fortaleza y asequibilidad del transporte público en las principales zonas urbanas y periurbanas de España.

Oportunidades:

- Transformación de la movilidad diaria (movimientos pendulares, interprovinciales)
- El CSIC dispone de institutos (CENIM) que investigan la dimensión tecnológica de la movilidad sostenible.
- Posibilidad de enlazar los estudios sobre “economía circular” en la movilidad con la planificación de las políticas de transporte.

7. SEGREGACIÓN ESPACIAL Y HABITABILIDAD DEL ENTORNO URBANO

En las ciudades confluyen y pueden analizarse conjuntamente dinámicas socio-políticas muy heterogéneas. En ellas coexisten de forma territorialmente jerarquizada zonas depauperadas y áreas opulentas, barrios receptores de flujos migratorios internacionales y viejos centros urbanos sometidos a procesos de *gentrificación*. La creciente *financiarización* de lo urbano –es decir, la transformación de los bienes raíces en bienes financieros dirigidos a su rentabilización en los mercados internacionales- está íntimamente vinculada a los procesos de verticalización, densificación, crecimiento urbano descontrolado y formación de burbujas inmobiliarias, con su consiguiente repercusión sobre las políticas públicas y los sectores sociales más vulnerables. La justicia o injusticia de las relaciones sociales se reproduce espacialmente a través de las estructuras urbanas: la manera en que se organiza el territorio, se asignan dotaciones públicas, se trazan las vías de transporte y comunicación, se determina el uso de los suelos o se gestiona la densidad urbana. Todos estos factores inciden de manera desigual en la vida de los ciudadanos y son objeto de negociación política y gestión pública. Junto al desafío de generar espacios habitables sanos y ciudades que contribuyan a la desaceleración del cambio climático, un problema generalizado es la creciente falta de identificación y empatía de los ciudadanos con los lugares que habitan. La globalización de la cultura, el turismo, las franquicias, un urbanismo funcional y especulativo, la desaparición del comercio local, entre otros factores, están creando ciudades con las que los vecinos no se sienten identificados ni motivados.

El proceso de suburbanización se anticipó en los Estados Unidos a otras zonas del mundo y adquirió unas características propias. Los epígonos de la *ecología urbana* de la Escuela Sociológica de Chicago interpretaron la segregación espacial de las grandes ciudades americanas a principios del siglo

XX como fruto de la combinación de dos fuerzas distintas: la tendencia de los intereses económicos a expandirse y el impulso centrífugo ejercido por las nuevas áreas residenciales, más atractivas para los habitantes que los antiguos centros urbanos. Los procesos de segregación espacial y sedimentación étnica en las ciudades están íntimamente ligados a esos procesos. Desde muy pronto, las grandes urbes norteamericanas se articularon espacialmente en torno a la estructura de clase y la filiación étnica de sus habitantes. Observando la dinámica de desplazamiento de las comunidades de inmigrantes en ciudades como Chicago, esta escuela concluyó que los distintos grupos étnicos tendían a ocupar las áreas de las que eran expulsados los residentes anteriores. Los proyectos de *saneamiento* urbano a gran escala emprendidos en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial reflejaban todavía esa idea inicial. La edificación de grandes complejos de bloques urbanos, los malafamados *projects*, sirvió para desalojar a las minorías étnicas pobres del centro de las grandes ciudades y abrir espacio a las nuevas autopistas urbanas y rascacielos corporativos. La idea de una comunidad urbana diversa y socialmente integrada parecía inconcebible desde la perspectiva del darwinismo social.

Con la difusión del automóvil en los años 1920s, vastas áreas alrededor de las grandes ciudades norteamericanas se convirtieron súbitamente en zonas potencialmente urbanas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el apoyo financiero a los veteranos de guerra, unido a las técnicas constructivas en serie y la creación de grandes estructuras viarias, llevaron a las clases medias blancas a emigrar a los nuevos suburbios residenciales. Las minorías étnicas y los pobres quedaron relegados en el centro de las ciudades, donde se mezclaban espacios productivos, residenciales y comerciales. El carácter local de muchos de los servicios sociales y su dependencia de la imposición fiscal sobre la propiedad inmobiliaria acentuaron aún más la segregación étnica y social del espacio urbano estadounidense. En este contexto es posible distinguir conceptual y materialmente entre los *enclaves urbanos*, espacios socialmente diferenciados, pero sin lindes físicos, donde grupos autodefinidos se ubican voluntariamente para impulsar su desarrollo social, económico o cultural, y los *guetos*, en los que se concentran involuntariamente grupos postergados y limitados en sus capacidades de ubicación residencial por los intereses dominantes en la sociedad. Antes de que muchos de estos enclaves urbanos se convirtiesen en guetos, particularmente los de los afroamericanos emigrados desde los estados del sur, los barrios étnicos de las grandes ciudades estadounidenses funcionaron frecuentemente como espacios de integración. En ellos aterrizaban y encontraban redes locales de apoyo los inmigrantes recién llegados al país. Idealmente, la épica de

la inmigración evolucionaba en la segunda generación con el ascenso social (el ‘sueño americano’), la asimilación cultural y el abandono del barrio. Pero esta estructuración espacial no sólo contrapuso las filiaciones étnicas y el estatus económico de la población urbana. A la larga también se sedimentaron con ella unos valores sociales diferenciados: el *familismo* de los homogéneos suburbios blancos del extrarradio frente a las preferencias de realización personal más cosmopolita de los urbanitas de los centros urbanos gentrificados.

En Europa y América Latina los procesos de conurbación han asumido otras características. Tras la independencia, la igualdad cívica de los ciudadanos y la tenencia libre de la tierra propiciaron en Latinoamérica la disolución de la estructura etno-corporativa de la sociedad colonial, con su sistema administrativo urbanocéntrico, sus “repúblicas de indios” y barrios de libertos. El trazado urbano colonial en forma de damero se vio en muchos casos desbordado por la inmigración masiva desde el campo y el extranjero. Con la llegada del ferrocarril y la proliferación de *conventillos*, *favelas* y *villas miseria* se generó un nuevo tipo de segmentación del espacio urbano. A finales del siglo XIX la vía del tren marcaba por lo general el confín entre los antiguos barrios y los nuevos asentamientos de aluvión. El crecimiento desmesurado de las capitales latinoamericanas impulsó asimismo la irrupción en ellas de unas clases populares endémicamente subempleadas que protestaban contra unos sistemas sociales profundamente desiguales y excluyentes. En América latina la moderna política de masas, el populismo y el crecimiento urbano vinieron de la mano. Sin embargo, las megalópolis latinoamericanas no son conurbaciones de suburbios residenciales de clase media, como en los Estados Unidos. La histórica debilidad fiscal de los Estados latinoamericanos y los problemas de seguridad no han facilitado la construcción de infraestructuras viarias que permitan una suburbanización al estilo estadounidense. En su lugar encontramos procesos de polinucleación urbana y de securitización de algunos espacios residenciales con diferentes connotaciones étnicas y económicas. La dependencia del automóvil privado y la carencia endémica de un adecuado transporte público también han marcado pautas distintas de movilidad: mientras las clases medias utilizan el automóvil y colapsan las vías públicas, las clases populares sufren las insuficiencias endémicas del transporte colectivo. En este contexto, los grandes centros comerciales han asumido el papel de lugares de encuentro que en el pasado desempeñaron las plazas públicas. Se trata, sin embargo, de unos espacios que incitan a la acción, no a la interacción social, pues, como recordó Zygmunt Bauman, el consumo moderno y monetarizado es un acto esencialmente individual.

Los sistemas de redistribución fiscal propios de los Estados europeos han generado ciudades espacialmente menos segregadas que las americanas. Sin embargo, la tendencia a dejar que el mercado dirija las políticas de vivienda ha creado crecientes desigualdades urbanas en Europa. A finales de los años 70, en el contexto de los disturbios del Mayo francés, el filósofo Henri Lefebvre hizo famosa una expresión que desde entonces se ha hecho viral: el *derecho a la ciudad*. Según Lefebvre, la dinámica del capitalismo no sólo transcurre en las ciudades sino *a causa* de las ciudades. En un contexto post-industrial y con la desregulación de los flujos financieros globales, la urbanización se ha convertido en un motor de la revalorización capitalista, y no a la inversa, como en el pasado. El análisis de Lefebvre reivindicaba la vida urbana como un instrumento democratizador y como condición necesaria para un humanismo renovado. El habitante de la ciudad sería así portador de unos derechos específicos, de un derecho a la ciudad entendido como disfrute de los bienes de la vida urbana, un derecho a habitar en su centro y a no ser expulsado a las *banlieues* y guetos de la periferia. La geografía política de corte marxista amplió este diagnóstico. Así, para autores como David Harvey, la urbanización juega un papel crucial en la absorción de los excedentes de capital, particularmente durante las crisis de sobreacumulación. En esos contextos, la financiarización inmobiliaria proporciona una ‘reparación espacial’ (*spatial fix*) a las crisis de valorización mediante un proceso de creación destructiva: los estallidos especulativos en la propiedad urbana que expulsan a las masas de determinadas zonas y les arrebatan el derecho a vivir en la ciudad. Así habría ocurrido en la Francia posterior a la crisis de 1848, cuando Napoleón III encargó al barón Hausmann la remodelación de París por medio de grandes bulevares, o en Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Robert Moses reconfiguró la zona metropolitana de Long Island introduciendo grandes autopistas hasta el centro de la ciudad.

En el ámbito urbanístico, Le Corbusier y el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (1928-1959) se convirtieron durante la última post-guerra en el principal laboratorio de ideas del funcionalismo modernista. Le Corbusier mantenía una visión utilitaria de la ciudad entendida como *machine à habiter*. Su doctrina urbanística se proponía responder con economía de medios a las urgentes necesidades de reconstrucción post-bélica, aumentando la densidad y la eficiencia urbana frente al hacinamiento y la insalubridad de las viejas ciudades industriales. Tras ello latía una visión más amplia de la modernización social como homogeneidad inducida a través de la planificación geométrica del entorno construido. Este tipo de *desurbanización* y de intervención masiva en

las ciudades provocó la reacción de autores como Jane Jacobs, cuya defensa de la capacidad de auto-organización espontánea de las comunidades locales constituye ya un clásico. En la década de los años 80 floreció un nuevo urbanismo de corte humanista que reivindicó el papel de la forma construida en el desarrollo de las condiciones económicas, sociales y culturales de la vida urbana. Esta corriente denunció la ideología modernista como una renuncia a aceptar la complejidad del hecho urbano y una entrega a un tipo de diseños que constituyen en realidad utopías anti-urbanas. Por detrás de ello también reconocía la dependencia de unos profesionales del urbanismo desconectados de los intereses y vivencias de los destinatarios de sus productos, así como la injusta prioridad concedida en el diseño urbano a los patrones de acceso de los sectores sociales más pudientes. De cara al futuro, pues, la habitabilidad de los espacios urbanos va a depender tanto de los sistemas de movilidad intra- y periurbana como de la sostenibilidad medioambiental de la masa urbana a través de los materiales de construcción, de manera que se reduzca el gasto energético de los edificios y el efecto de la “isla de calor” en las ciudades.

Reto:

Creación de ciudades sostenibles e inclusivas mediante la generación de espacios urbanos sanos y habitables que contribuyan a la desaceleración del cambio climático.

Debilidades:

- Crecimiento a gran escala de las metrópolis sobre áreas agrícolas.
- Predominio de la función mercantil de la vivienda.
- Predominio de intereses económicos internacionales a intereses de los habitantes en el diseño de políticas públicas.

Amenazas:

- Degradación y expulsión de población de los centros urbanos.
- Gentrificación y turistificación.
- Incremento de la inseguridad.
- Degradación ambiental de las áreas rurales y cambio radical de los paisajes tradicionales.
- Dependencia creciente del medio rural del urbano.
- Poblaciones más envejecidas, feminizadas y racializadas.

Fortalezas:

- Existencia de una línea de investigación en el Instituto de Filosofía sobre la dimensión normativa del espacio urbano y la teoría política de la ciudad.

Oportunidades

- Desarrollo de la idea de *justicia espacial* ligándola al entorno construido, los bienes públicos de naturaleza urbana y la teoría de las capacidades y del desarrollo humano.

8. PROCESOS DE CONURBACIÓN Y GOBERNANZA TERRITORIAL

Buena parte de las ideas que manejamos sobre el gobierno político de los grupos humanos está históricamente asociada a las ciudades, pero con el avance de los procesos de metropolización ese marco conceptual se ha visto desbordado. Las ciudades constituyen un espacio de representación de las relaciones y las identidades humanas cuya creciente complejidad exige formas innovadoras de articulación que no se derivan espontáneamente de la mera acumulación de habitantes. Esto significa que la ciudad, para fungir como tal, debe ser concebida en alguna medida como un *bien común* y no como una mera agregación de propósitos individuales. El sociólogo norteamericano Richard Sennet describió la *civilidad* como una praxis que protege a cada persona de las demás al tiempo que le permite disfrutar de su compañía. La civilidad, como el lenguaje, no puede ser, pues, una virtud o una capacidad privada. Se trata de un rasgo del carácter generado en un marco social y colectivo. Si los habitantes de la ciudad han de adquirir las difíciles habilidades de la civilidad, el espacio urbano deberá ser concebido como un espacio *civil*, es decir, capaz de generar contextos de interacción entre sujetos públicos. De ahí los nexos semánticos de la sociabilidad con la *urbanidad* y del *civismo* con la vida en ciudad.

La decisión sobre la estructura territorial de un país, la opción por un modelo centralizado y unitario, por uno federal y descentralizado o por una estructura multinivel de competencias administrativas es, en última instancia, una decisión política que remite a la propia historia e identidad del *demois*. Pese al enfoque eminentemente tecnocrático con que se ha abordado la implementación de mesogobiernos territoriales, resulta evidente que cualquier decisión que afecte a las estructuras jurisdiccionales de un país terminará implicando a los actores políticos, a los órganos municipales mancomunados y a la opinión pública. Aunque en muchos casos carezca de carácter representativo, el gobierno de las áreas

metropolitanas ha de enfrentarse *de facto* a los intereses políticos creados, debe vencer la resistencia de los otros niveles político-administrativos a ceder competencias y recursos y ha de procurarse una credibilidad operativa ante los ciudadanos. Esta fue precisamente la experiencia de algunos intentos fracasados de regionalización municipal en Europa en la década de 1970.

La formación de áreas metropolitanas no siempre ha estado acompañada del correspondiente marco institucional. La fragmentación político-administrativa impide a este tipo de áreas dotarse de medios adecuados y desarrollar políticas efectivas para enfrentarse a problemas caracterizados por la interdependencia de sus causas y el desbordamiento de los marcos territoriales en los que se originan. El gobierno de las áreas metropolitanas no puede consistir, pues, en un traslado sin más de los modelos de gobernanza municipal a una escala superior. En el contexto europeo, en los países herederos de la tradición napoleónica o latino/mediterránea (Francia, España, Italia, Bélgica, Portugal y Grecia), los gobiernos locales se conciben como comunidades territoriales que defienden los intereses locales frente a una instancia superior. Por el contrario, en la tradición anglosajona (Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y, hasta cierto punto, Estados Unidos), los gobiernos locales poseen un estatus jurídico y político más bajo, pero disfrutan de un amplio nivel de autonomía y discrecionalidad operativa frente a los niveles superiores de gobierno. Por último, los países nórdicos y centro-europeos muestran un equilibrio entre el componente político democrático y el funcional.

En 1972 se crearon en el Reino Unido seis *condados metropolitanos* bajo un régimen de elección directa, facultades tributarias específicamente definidas y responsabilidades sobre el uso del suelo y transporte. Al margen de ellos existía ya el *Greater London Council*, un sistema de gobierno local con dos niveles centrado en la gestión de los servicios de emergencia y el reciclado de residuos. El Consejo londinense compartía las políticas de vivienda, infraestructura viaria y planificación urbana con los distritos de la ciudad. De forma similar, en el curso de los primeros procesos de descentralización, en 1966 se crearon en Francia cuatro *comunidades urbanas* con una amplia gama de responsabilidades en materias de planificación, saneamiento, transporte y vivienda. También las regiones italianas hicieron uso en 1975 de sus recién adquiridos poderes para establecer una serie de *comprensori* o circunscripciones urbanas, entre las que destacaban las de Turín, Bolonia y Milán. En los tres casos su puesta en marcha fue justificada por razones técnico-funcionales e implementada de *arriba-abajo* por la autoridad estatal, sin contar con la

colaboración de los gobiernos y los actores políticos locales. La ausencia de participación de las partes directamente interesadas en el proceso provocó una fuerte resistencia a la cesión de funciones y, en última instancia, el fracaso del modelo. Tanto los condados metropolitanos británicos, incluido el londinense, como las circunscripciones urbanas italianas fueron abolidos en 1986. La crítica a este tipo de descentralización suele coincidir en el exceso de verticalidad en su formulación. En lugar de crear dinámicas complementarias de interacción entre los actores implicados en el proceso, generando con ello una gobernabilidad metropolitana legitimada por la coimplicación, se fio todo a la presión del gobierno estatal. Quizá por ello, la creación del *Greater London Authority* en el año 2000 partió de premisas muy distintas de las de la experiencia previa, dotándose de un poder ejecutivo por elección directa y una asamblea de veinticinco miembros con poderes de revisión.

Este tipo de crítica se ha hecho extensiva a la experiencia de las áreas metropolitanas en América latina. Las estructuras de gestión, financieras e institucionales de estas áreas son allí débiles y están mal preparadas para desempeñar las funciones que se espera de ellas. Sus estructuras locales de gobierno fueron en general diseñadas para funcionar en un sentido *vertical*, de cara a la autoridad estatal, y no tanto en un sentido *horizontal*, para hacer gobernable la interdependencia territorial. En algunos casos, como en Brasil, esas estructuras metropolitanas fueron establecidas por regímenes autoritarios y guiadas por criterios tecnocráticos, con escasa participación de las partes interesadas.

La multiplicidad de variantes en la gestión de las áreas metropolitanas hace muy difícil establecer parámetros con una pretensión de validez general. Las condiciones históricas, políticas, institucionales, socio-económicas y culturales convierten cada formato y experiencia de mesogobierno en un caso único. Aún reconociendo las múltiples combinaciones posibles, resulta posible sin embargo identificar idealmente una serie de variables que intervienen en la configuración de los distintos regímenes de gobierno metropolitano.

TIPOS DE GOBIERNO DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS

NIVELES DE GOBIERNO	UNICO	DOBLE	POLICÉNTRICO
RÉGIMEN DE GOBIERNO LOCAL	Circunscripción urbana ampliada	Distrito metropolitano	Intermunicipal
FORMA DE ASOCIACIÓN	Fusión/Absorción	Mancomunación	Cooperación
LEGITIMACIÓN POLÍTICA	Directa	Mixta (directa/indirecta)	Decentralizada

La creación de una **circunscripción urbana ampliada** implica la fusión o absorción de todos los gobiernos locales de un área metropolitana en un único nivel de gobierno. Este fue el camino seguido por la *Greater London Authority* en el Reino Unido tras la disolución del *Greater London Council* por Margaret Thatcher en 1986. También fue la opción que se implementó en Toronto y Montreal a finales de los años 1990s, pese a la fuerte oposición vecinal. En los Estados Unidos, donde los obstáculos constitucionales y políticos para semejantes fusiones son mayores, ya que requieren una doble mayoría (a nivel local y de condado), podemos encontrar un proceso equiparable en los casos de Nashville con el condado de Davidson y de Indianapolis con el condado de Duval.

La creación de un **distrito metropolitano** supone el establecimiento de un régimen supramunicipal o mesogobierno entre los gobiernos central, provincial/ estatal/ departamental y local a través de un proceso federativo o de mancomunidad. Este régimen de gobierno local puede estar limitado a unas pocas funciones territoriales o recibir la transferencia simultánea de algunas funciones desde instancias inferiores. Su forma de legitimación política puede asumir diversas formas, pero solemos encontrar una legitimación mixta, con elección directa del alcalde e indirecta de la autoridad metropolitana. Un buen ejemplo de ello son las *ciudades gemelas* de Minneapolis-Saint Paul, en Minnesota, que mantienen municipalidades distintas, pero están integradas en una región metropolitana con un consejo propio. Un caso interesante es el del distrito metropolitano de Portland (*Portland Metro*), en los Estados Unidos, ya que pese a no contar con un doble nivel de gobierno abarca espacios urbanos de dos estados distintos (Oregón y Washington), posee una estructura de gobierno directamente elegida por los votantes y fue creado a partir de un modelo de cooperación intermunicipal entre 24 municipios y tres condados.

Una tercera variante es la que presentan los **regímenes intermunicipales**, que mantienen la condición policéntrica del gobierno local y descansan sobre un principio cooperativo. En el plano del desempeño funcional, esta cooperación puede consistir en que un único gobierno desempeñe un servicio para más de una unidad local, que dos o más gobiernos locales compartan un servicio o infraestructura común o bien que se ayuden mutuamente en casos de emergencia o necesidad. Una variante más débil consiste en la asociación voluntaria de gobiernos locales para crear un foro común de análisis y discusión de problemas, pero desprovista de autoridad. Un ejemplo de ello son las *comunidades de aglomeración* y las *comunidades urbanas* francesas, que cubren distintas áreas funcionales en virtud del volumen de población, o la

Comunidad Metropolitana de Montreal, que fue creada en 2001 y abarca 64 municipalidades. En España, la adopción del modelo de Comunidades Autónomas en la Constitución de 1978, la preservación del régimen municipal y el mantenimiento de las diputaciones provinciales, añadido a la decisión de convertir Madrid y su área metropolitana en un Comunidad Autónoma y no en algo parecido a un distrito federal, ha creado un sistema administrativo y político multinivel con diversos solapamientos y sin una distribución clara y cerrada de competencias.

El éxito y consolidación de los sistemas de gobierno de las áreas metropolitanas está condicionado a largo plazo por su legitimación política. Semejante legitimación no sólo atiende a criterios de eficiencia técnica y probidad gestora, sino a la coimplicación de las partes directamente interesadas o afectadas por su implementación (gobernanza multinivel). En este sentido, el respaldo de la autoridad estatal no basta por sí sólo para crear las sinergias locales necesarias. Por otro lado, la gobernabilidad de los procesos de interdependencia que genera un área metropolitana, e indirectamente su legitimación, está ligada a una clara delimitación jurídico-administrativa del reparto de responsabilidades y competencias. Por último, la viabilidad política y funcional de un gobierno metropolitano, como de cualquier forma de mesogobierno, guarda relación con el equilibrio entre la capacidad de gasto y la corresponsabilidad fiscal. En un modelo en el que no existe representatividad política directa, la disociación de las responsabilidades fiscal y gestora puede generar disfunciones de gran calado. La complicación efectiva de las partes constitutivas del área metropolitana está, pues, fuertemente condicionada por la igualación territorial de los servicios que su órgano de gobierno pretende ofrecer.

Reto:

La creación de formas de gobierno supralocal por encima de la tradicional división rural/urbana que amortigüen las diferencias territoriales y equilibren política y administrativamente los distintos intereses en juego.

Debilidades:

- La consolidación de mesogobiernos de este tipo está condicionada a largo plazo por su grado de legitimación política, no sólo técnica.
- La gobernabilidad y eficiencia de un área metropolitana está ligada a una clara delimitación jurídico-administrativa del reparto de responsabilidades y competencias.

- En el CSIC se han ido disolviendo las líneas de investigación ligadas a los estudios urbanos por efecto del envejecimiento de la plantilla y las dificultades para mantener grupos de investigación a través del reclutamiento de investigadores jóvenes.

Amenazas:

- Desaparición de equipos académicos competentes para participar en convocatorias nacionales y europeas y en asesoramiento de políticas públicas urbanas

Fortalezas:

- Existencia de pequeños grupos y líneas de trabajo sobre antropología urbana en el ILLA y la Institución Milá y Fontanals

Oportunidades

- Resurgimiento de los últimos años del interés político y académico por los temas urbanos (“derecho a la ciudad”, etc)
- Desplazamiento del interés sobre la sostenibilidad hacia la conceptualización de los “datos verdes”: tecnologías digitales que permitirán “dataficar” la información que obtenemos sobre los sistemas vivos y organizacionales que nos rodean.

INFORME EJECUTIVO

Los profundos cambios sociales y económicos que se han producido durante las últimas décadas han reducido en las sociedades avanzadas las diferencias entre los niveles y modos de vida de los medios rural y urbano. La aceleración del proceso de urbanización ha incrementando la interdependencia de ambos espacios. Su impacto sobre el desarrollo territorial, el medio ambiente y el asentamiento de la población tiene enormes consecuencias en términos de sostenibilidad medioambiental, equilibrio territorial, producción alimentaria y gobernanza política. Las grandes ciudades consumen cantidades ingentes de energía, recursos naturales y alimentos, lo que sumado a la expansión de sus áreas de influencia está llevando a la transformación de los hábitats y a la progresiva antropización de los espacios naturales. Todas estas dinámicas plantean una serie de nuevos escenarios de interacción rural-urbana de cara al futuro.

Cambios en la concepción del desarrollo rural y la actividad agraria

La producción y el suministro alimentario ha constituido el eje tradicional de interacción entre los medios rural y urbano. Sin embargo, la apertura de los mercados mundiales y la progresiva eliminación de los sistemas de protección agrícola, sumados a toda una serie de exigencias y limitaciones a la actividad agraria, ha abierto el debate sobre un enfoque integral del desarrollo territorial basado en las dinámicas locales/regionales y en la apertura a nuevas funciones, como la mitigación de los efectos del cambio climático, la incorporación de los circuitos de ocio y la reintegración e inserción social de determinados sectores de la población. Este cambio de paradigma requiere otro tipo de investigación: genética, técnica, en maquinaria, en labores del suelo, en tratamientos fitosanitarios, etc. El reto consiste en concebir un ecodesarrollo colaborativo entre las zonas urbanas y rurales que ayude a generar una economía circular y sostenible adaptada a los desafíos del cambio climático.

La gestión del paisaje como patrimonio y recurso económico

El medio rural cada vez se asume menos como un lugar exclusivamente de producción y cada vez más como un elemento especialmente valioso para la calidad de vida. La concepción del territorio como *paisaje* ha hecho que se lo vea como un espacio con un valor estético, de ocio y recreativo añadido. Sin embargo, en la actualidad han dejado prácticamente de existir los paisajes naturales, porque el paisaje es el resultado directo de las actividades humanas. El paisaje es objeto de conocimiento histórico por su propio contenido y es también objeto de divulgación, gestión y protección patrimonial en su condición de recurso económico. Los criterios de conservación del paisaje sólo pueden tener éxito si éste se concibe como una realidad viva, activa y cambiante. El reto aquí es desarrollar armónicamente las investigaciones sobre el paisaje de manera que se coaliguen con un turismo sostenible y con todos los sectores productivos que inciden en el desarrollo del medio rural.

Despoblamiento rural y flujos migratorios

El criterio fundamental para garantizar la sostenibilidad demográfica del territorio es su adecuada gestión y ordenación, de manera que la jerarquización territorial no suponga exclusión social. La despoblación es un fenómeno complejo y con múltiples causas, pero más recientemente ha estado vinculada sobre todo con la concentración de inversiones, servicios y oportunidades de empleo en las áreas urbanas y metropolitanas, en contraposición al medio rural. La retención de población y la generación de riqueza en el medio rural se verá dificultada mientras no se valore su trabajo y no se pueda vivir

dignamente del mismo, lo que implica abrirlo a nuevos sectores e iniciativas económicas. El reto es gestionar el desarrollo territorial de manera que se eviten desequilibrios, dualidades y rupturas de la cohesión socio-espacial. La forma de encarar este problema ha de consistir en una gestión del medio rural más centrada en la promoción de su funcionalidad (agraria, ganadera, cultural) que en intentos de repoblar núcleos fuertemente envejecidos que han perdido su función.

Envejecimiento y calidad del entorno vital

Si bien las áreas rurales tienen en España una estructura demográfica envejecida, la población mayor, al igual que la población en su conjunto, también se concentra en áreas urbanas. La calidad del entorno habitacional es de extrema relevancia para los mayores, pues se considera que el espacio físico de vida en este grupo etario constituye un espacio de uso prevalente. El entorno habitacional no sólo constituye el espacio de vida actual, y en muchos casos pasada, sino el lugar donde suceden buena parte de las relaciones sociales y las dinámicas de integración comunitaria. La amigabilidad del espacio es lo que permite que la población mayor pueda permanecer en su entorno habitual de residencia el mayor tiempo posible, pero esto tan sólo es factible si se diseñan y ejecutan los proyectos pertinentes para hacer del espacio residencial, ya sea éste urbano o rural, un lugar habitable. La idea del “envejecimiento saludable” está ligada a la de la habitabilidad y la amigabilidad del entorno. El reto consiste en integrar el envejecimiento saludable en una concepción social del desarrollo sostenible. Para ello es preciso modificar las perspectivas vitales en la vejez y abordar los determinantes ambientales y sociales del proceso de envejecimiento. Esto incluye cuidar la calidad y amigabilidad del entorno habitacional de los mayores en los medios rural y urbano.

Expansión urbana y movilidad sostenible

Los problemas a los que se enfrentan las urbes en general poseen una serie de rasgos comunes: congestión, contaminación, concentración de población y actividades, etc. Estos fenómenos están ligados a desajustes demográficos intraurbanos provocados por la expulsión de población de los centros de las ciudades, la degradación de los centros urbanos no gentrificados, las desigualdades en el acceso a los servicios y los medios de transporte y el crecimiento a gran escala de las metrópolis sobre las zonas periurbanas, lo que en última instancia impacta también sobre las áreas rurales y, cada vez más, sobre el despoblamiento de las ciudades intermedias. Este modo de ocupación del territorio, en gran medida inédito, incide en la calidad del paisaje y en la degradación ambiental del

territorio. En este sentido, la supervivencia del medio rural es cada vez más dependiente de unos medios de transporte eficaces que enlacen a su población con los centros de trabajo y de servicios. El reto en este frente consiste en desarrollar nuevos servicios de movilidad sostenible en el ámbito de una economía circular de reutilización y reciclado de los materiales.

Segregación espacial y habitabilidad del entorno urbano

En las ciudades coexisten de forma territorialmente jerarquizada zonas de pauperadas y áreas opulentas, barrios receptores de flujos migratorios internacionales y viejos centros urbanos sometidos a procesos de *gentrificación*. La creciente *financiarización* del espacio urbano –es decir, la transformación de los bienes raíces en bienes financieros dirigidos a su rentabilización en los mercados internacionales– está íntimamente vinculada a los procesos de verticalización, densificación, crecimiento urbano descontrolado y formación de burbujas inmobiliarias, con su consiguiente repercusión sobre las políticas públicas y los sectores sociales más vulnerables. La justicia de las relaciones sociales se reproduce espacialmente a través de las estructuras urbanas. Junto al desafío de generar espacios habitables sanos y ciudades que contribuyan a la desaceleración del cambio climático, un problema generalizado es la creciente falta de empatía de los ciudadanos con los lugares que habitan. La globalización de la cultura, el turismo, las franquicias, un urbanismo funcional y especulativo, la desaparición del comercio local, entre otros factores, están creando ciudades en las que los vecinos no se sienten identificados con su entorno ni motivados para su mejora. De cara al futuro, la habitabilidad de los espacios urbanos va a depender tanto de los sistemas de movilidad intra- y periurbanacomode la sostenibilidad medioambiental de la masa urbana a través de los materiales de construcción, de manera que se reduzca el gasto energético de los edificios y el efecto de la “isla de calor” en las ciudades. Aquí el reto es la creación de ciudades sostenibles e inclusivas mediante la generación de espacios urbanos sanos y habitables que contribuyan a la desaceleración del cambio climático.

Procesos de conurbación y gobernanza territorial

Buena parte de las ideas que manejamos sobre el gobierno político de los grupos humanos está históricamente asociada a las ciudades. Con el avance de los procesos de conurbación ese marco conceptual se ha visto desbordado. La decisión sobre la estructura territorial de un país es, en última instancia, una decisión política que remite a la propia historia e identidad del *demós*. Pese al enfoque eminentemente tecnocrático con que se ha abordado la implementación

de mesogobiernos territoriales, resulta evidente que cualquier decisión que afecte a las estructuras jurisdiccionales de un país terminará implicando a los actores políticos, a los órganos municipales mancomunados y a la opinión pública. La formación de áreas metropolitanas no siempre ha estado acompañada del correspondiente marco institucional. La fragmentación político-administrativa impide a este tipo de espacios dotarse de medios adecuados y desarrollar políticas efectivas para enfrentarse a problemas caracterizados por la interdependencia de sus causas y el desbordamiento de los marcos territoriales en los que se originan. El gobierno de las áreas metropolitanas no puede consistir, pues, en un traslado sin más de los modelos de gobernanza municipal a una escala superior. Su éxito y consolidación está condicionado a largo plazo por su legitimación política, que no sólo atiende a criterios de eficiencia técnica y probidad gestora, sino a la complicación de las partes directamente afectadas por su implementación y a una clara delimitación jurídico-administrativa del reparto de responsabilidades y competencias. El reto en este frente consiste en la creación de formas de gobierno supralocal por encima de la tradicional división rural/urbana que amortigüen las diferencias territoriales y equilibren política y administrativamente los distintos intereses en juego.

Debilidades:

- Envejecimiento de la plantilla. Carencia de recambio generacional. Desaparición de líneas de investigación sobre estas temáticas por jubilación del personal.
- En el CSIC se han ido disolviendo las líneas de investigación ligadas a los estudios urbanos y los estudios rurales y agrícolas cuentan con menor personal.
- Fragmentación por áreas del CSIC y de los sistemas de ciencia, incluidas las convocatorias. Debilidad de estudios multidisciplinarios. Falta de estímulos para diseñar y desarrollar estudios multidisciplinarios.
- Los sistemas hiperburocratizados de gestión de los proyectos científicos dificultan la formación de equipos con otras instituciones y erosionan el potencial de liderazgo de los centros del CSIC. Dificultades para liderar proyectos debido a constricciones de elegibilidad de los investigadores jóvenes.
- Dificultades para desarrollar mecanismos permanentes de formación de jóvenes investigadores y problemas de fijación (altos niveles de rotación).
- Estructura multidisciplinar de la investigación sobre el papel, pero no en la práctica. La multidisciplinariedad se sanciona en realidad en los concursos de promoción y en la evaluación curricular.
- Carácter cortoplacista de las prioridades y temáticas estratégicas en las agendas de los programas de investigación en donde las dinámicas rurales/urbanas no aparecen como prioritarias.
- Escasos recursos humanos y materiales.

Amenazas:

- Desaparición de equipos competentes con suficientes recursos humanos y materiales para participar en convocatorias europeas y en asesoramiento de políticas públicas.
- Desaparición de estas líneas de investigación.
- Dificultades para mantener líneas de investigación estratégicas que han producido resultados relevantes y que han dotado de visibilidad al CSIC.

Fortalezas:

- El CSIC cuenta con una pluralidad de institutos dedicados al estudio del territorio desde diversas perspectivas (desarrollo y economía agraria, agricultura sostenible, ecología, gestión del paisaje y del patrimonio). Experiencia previa y capacitación para diagnósticos prospectivos.
- Alto grado de internacionalización y de acceso a fondos nacionales e internacionales.
- Potencialidad para impulsar plataformas multidisciplinares.
- Revival y nueva centralidad de los estudios urbanos y rurales en las humanidades y las ciencias sociales.

Oportunidades:

- El tratamiento de los retos debe ser multidisciplinar e incluir a todas aquellas disciplinas que incorporen el territorio como variable dependiente o independiente.
- Aproximaciones multidisciplinarias que mejoren las sinergias y estén en sintonía con nuevos enfoques de los programas internacionales de investigación.
- Posibilidad de combinar perspectivas cuantitativas, cualitativas y normativas.
- Consolidación de impactos sociales de la investigación y amplias posibilidades de divulgación de resultados.
- Capacidad para producir nuevos sistemas de datos (big data) y desarrollar diseños tecnológicos innovadores (estudio movilidad, economías circulares, patrimonio..)
- Consolidation of the social effects of the research and wide possibilities for the dissemination of results.
- Ability to produce new data systems (Big Data) and develop innovative technological designs (study mobility, circular economies, heritage...)

RESUMEN

En este capítulo hemos seleccionado algunos desafíos demográficos que consideramos prioritarios: i) el envejecimiento de la población y la calidad de vida de las personas mayores, ii) la posible persistencia de la fecundidad por debajo de las aspiraciones reproductivas de las personas, iii) las repercusiones de la creciente diversificación familiar sobre redes de atención y bienestar infantil, iv) salud a lo largo de la vida, v) volumen, complejidad y diversidad crecientes de los flujos migratorios, vi) despoblación rural, y vii) acceso y manejo metodológico de nuevos datos. Las ciencias demográficas y de población brindan los instrumentos teóricos y metodológicos adecuados para abordar los desafíos demográficos, desde una perspectiva macro (causas y consecuencias del cambio de tamaño, estructura y composición de la población) y una perspectiva micro (interrelación entre individuo, familia, trabajo y biografías de salud); desde un enfoque internacional –porque los cambios demográficos son generalmente cambios globales con diferente ritmo en los contextos nacionales–; y siempre mirando hacia el futuro, ya que las proyecciones de tendencias son un componente esencial de los estudios de población.

DESAFÍO D

RETOS DEMOGRÁFICOS EN UN ESCENARIO SOCIAL DE LONGEVIDAD Y ENVEJECIMIENTO

Coordinadoras

Teresa Castro Martín
(IEGD, CSIC)

Gloria Fernández-Mayoralas
(IEGD, CSIC)

1. RESUMEN EJECUTIVO

La demografía ocupa en la actualidad un lugar central en la agenda política internacional –como refleja la Vicepresidencia de la Comisión Europea para Democracia y Demografía– y nacional –Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico–, así como en el debate social y mediático. *Demography matters!* En la actualidad hay un amplio reconocimiento del papel crucial que juegan las estructuras y dinámicas demográficas en la economía, el mercado laboral, la vivienda, la sanidad, las pensiones, el medio ambiente, la equidad intergeneracional y de género, e incluso los resultados electorales. A pesar de las etiquetas convencionales, no existe un solo “reto demográfico”, sino que los cambios demográficos –que son relativamente graduales y predecibles– conllevan una serie de retos y oportunidades que es necesario tener muy en cuenta a la hora de adaptar la organización socio-económica, formular políticas pertinentes e impulsar un desarrollo social y espacial sostenible e inclusivo.

En este capítulo hemos seleccionado algunos de los retos demográficos que consideramos prioritarios: 1) el envejecimiento de la población y la calidad de vida de las personas mayores, 2) la posible persistencia de una fecundidad por debajo de las aspiraciones reproductivas de las personas, 3) las repercusiones de la creciente diversificación familiar en el bienestar infantil y las redes de cuidados, 4) la salud a lo largo de todo el curso de vida, 5) el creciente volumen, complejidad y diversidad de los flujos migratorios, 6) el despoblamiento rural, y 7) el acceso y gestión metodológica de nuevos datos. Estas tendencias demográficas condicionarán aspectos esenciales de la vida social y

económica futura. Por ello, la formulación de políticas que aspiren a afrontar los retos demográficos precisará de una información objetiva y dotada de sólido rigor científico, para contrarrestar las narrativas ideologizadas del catastrofismo demográfico.

Los escenarios demográficos del futuro próximo suponen múltiples desafíos sociales, pero también un sinfín de oportunidades. El envejecimiento de la población, por ejemplo, constituye un reto importante por el gasto en pensiones, salud y dependencia, así como para la organización de los cuidados formales e informales; pero también ofrece oportunidades basadas en la “economía planteada” y en el desarrollo de comunidades y entornos residenciales sostenibles e inclusivos que podrían contribuir a frenar tendencias despobladoras. Como sociedad, debemos cambiar el paradigma edadista “vejez igual a carga” mediante la promoción del envejecimiento activo y saludable, desde el enfoque de los derechos, poniendo el acento en la participación social y el aprendizaje continuo, así como flexibilizando y conciliando trayectorias educativas, reproductivas y laborales. Este cambio redundará en una reducción de costes, una mejor gestión de los servicios públicos y, en definitiva, una mejora de la calidad de vida a todas las edades, sin poner en riesgo la solidaridad intergeneracional. Una fecundidad excesivamente baja es tanto un reto social – porque acelera el ritmo de envejecimiento poblacional – como un reto individual (o de pareja) – porque refleja una brecha creciente entre aspiraciones y realidades reproductivas –. Sin embargo, existen sólidas evidencias de que un nivel de fecundidad excesivamente bajo se debe en gran medida al hecho de que la revolución social de la igualdad de género esté todavía incompleta. Políticas bien diseñadas que faciliten a las madres trabajar y a los padres cuidar tendrían un efecto positivo no solo en la tasa de fecundidad y en el nivel de estabilidad demográfica, sino también en la economía y en el avance hacia la igualdad de género. La integración económica y social de la población migrante supone un reto complejo, pero las oportunidades que abre son también múltiples: la migración impulsa el crecimiento económico, conecta distintas sociedades y culturas, y contribuye al desarrollo internacional mediante el envío de remesas.

La óptica demográfica también puede aportar importantes elementos para el análisis, comprensión e intervención en situaciones de emergencia de salud pública, como en la que nos encontramos actualmente. La actual crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de estructuras y dinámicas demográficas a la hora de comprender y modelizar el curso de la pandemia. El volumen de población mayor y su distribución espacial, la estructura de los hogares –en particular, los hogares multigeneracionales o los hogares unipersonales de personas mayores–, las condiciones de vivienda, el perfil de la población

mayor institucionalizada en residencias, el grado de interacción social intergeneracional o la densidad de población son algunos de los factores socio-demográficos que tienen una influencia considerable en la propagación, gravedad y letalidad de la pandemia. Las consecuencias demográficas de la pandemia también serán objeto de estudio en los próximos años. Además de la sobremortalidad –diferenciada por edad, género y clase social–, que con alta probabilidad impactará en la esperanza de vida a edades avanzadas, es muy probable también que la pandemia tenga un impacto negativo en la fecundidad y en la estabilidad conyugal, que amplifique las desigualdades en salud por clase social, y que conduzca a revisar el modelo de centros residenciales de atención socio-sanitaria de larga duración para personas mayores. Aunque el cierre de fronteras ha supuesto y supondrá durante un tiempo una paralización de las migraciones, es todavía pronto para valorar en qué medida y de qué forma va a afectar esta pandemia a los movimientos migratorios a medio y largo plazo, así como a la movilidad profesional y turística.

La demografía y las ciencias de la población proporcionan los instrumentos teóricos y metodológicos idóneos para abordar los retos demográficos, tanto desde una perspectiva macro (causas y consecuencias del cambio de tamaño, estructura y composición de la población) como micro (interrelación entre las biografías individuales y familiares, laborales o de salud, pasadas, presentes y futuras); desde un enfoque internacional, porque los cambios demográficos suelen ser cambios globales con distintos ritmos a escala local; y siempre con una mirada a futuro, ya que las proyecciones de tendencias son un componente esencial de estas disciplinas. Los estudios de población encuentran un gran aliado en el salto de escala tecnológico que ha habido, tanto en la tipología de las fuentes de datos disponibles para la investigación, como en los medios para almacenarlos, analizarlos estadísticamente, representarlos gráfica y cartográficamente, transmitirlos y darles difusión. En apenas unas décadas, la revolución informática y de la comunicación ha disparado la capacidad de análisis, ha hecho posible nuevas estrategias de los sistemas estadísticos nacionales (como abandonar los censos tradicionales y apostar por el enlace longitudinal de registros), y ha generado un nuevo universo de datos, masivo y de gran heterogeneidad, el *big data*. Además, la participación de la población, las personas, en los procesos de investigación está haciendo imprescindible una apertura al análisis cualitativo de los comportamientos demográficos de los individuos y una revisión del proceso de transferencia social del conocimiento.

2. INTRODUCCIÓN

Frente a los absolutismos previos, el Estado moderno reconoció, desde sus orígenes, que la fuente de su poder y soberanía residía en la población. Este reconocimiento fundamental es visible en el paralelo desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales, con la implantación de los Censos modernos de población o el registro civil de los eventos vitales –nacimientos, matrimonios y defunciones– en el siglo XIX, la realización de encuestas periódicas representativas de la población o el aprovechamiento estadístico de registros administrativos en el siglo XX, y la explotación del Big Data en el siglo XXI. Sobre este universo de datos se han desarrollado las técnicas estadísticas y de análisis (cuantitativo y cualitativo) que hoy configuran las disciplinas que estudian los fenómenos y dinámicas demográficas, como la Demografía, la Geografía de la Población (incorporando la dimensión espacial) o la Sociología de la Población (añadiendo la aproximación sociológica).

Además de su relevancia estratégica para el buen gobierno, las temáticas demográficas han pasado a ocupar un lugar central en el debate político y social, tanto en foros nacionales como internacionales. Cuestiones como el envejecimiento poblacional, la baja natalidad, la evolución de la esperanza de vida, el futuro de las migraciones o el despoblamiento rural tienen una presencia creciente no solo en el ámbito científico, sino también en el político y en los medios de comunicación.

La actual crisis de la COVID-19, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la importancia de los factores demográficos a la hora de comprender y modelizar el curso de la pandemia. El volumen de población mayor y su distribución espacial, la estructura de los hogares –en particular, los hogares multigeneracionales o los hogares unipersonales de personas mayores–, las condiciones de vivienda, el perfil de la población mayor institucionalizada en residencias, el grado de interacción social intergeneracional, las desigualdades en salud según estrato socio-económico, el grado de movilidad internacional y la densidad de las áreas urbanas son algunos de los factores socio-demográficos que tienen una influencia considerable en la incidencia, propagación y letalidad de la pandemia.

Tanto la evolución demográfica –a escala global, regional, nacional y local– como el objeto e instrumentos de las disciplinas que estudian esta evolución han experimentado cambios sustanciales en al menos cuatro ámbitos: 1) en las características y dinámicas de las poblaciones contemporáneas, 2) en la función, procedencia y tipo de datos disponibles para la investigación, 3) en

las herramientas estadísticas y medios técnicos para su almacenamiento, comunicación, tratamiento y análisis, y 4) en el papel que los estudios de población tienen para el ecosistema político, científico y social.

Las poblaciones contemporáneas son el resultado, en sus dinámicas y estructuras, de una alteración radical, irrepetible e históricamente muy rápida de la eficiencia del balance reproductivo entre natalidad y duración de la vida. Ambos componentes del actual modelo reproductivo, intrínsecamente vinculados, están desplazándose hacia una relación radicalmente diferente a la que tuvieron en toda la historia humana anterior. En consecuencia, todas las características y comportamientos vinculados a la reproducción social y de la vida humana, desde las relaciones de género hasta las relaciones entre edades y generaciones, están experimentando una modificación drástica y sin precedentes. La capacidad de comprender y anticipar tales cambios demográficos y sociales plantea la necesidad de revisar conceptos, marcos teóricos, estrategias de análisis y de predicción.

Las personas (la unidad de análisis formal, cuyos agregados componen las “poblaciones”), pero también la “sociedad”, los “grupos sociales” o las “comunidades”, han cambiado en ese proceso, a la vez que lo han impulsado con nuevos comportamientos. La ancestral precariedad de la relación entre la vida y la muerte se ha roto gracias a una expansión enorme, sin precedentes y rapidísima, en la duración media de la vida. Si hasta el siglo XX apenas hubo poblaciones en las que dicha duración media superase los treinta y cinco años, solo un siglo después la media en el mundo es ya de setenta años, y de más de ochenta años en España. Un cambio tan radical solo ha sido posible tras una transformación sustancial en materia de salud, alimentación, vivienda, educación, condiciones laborales y domésticas. Solo así se entiende por qué las poblaciones actuales deben ser estudiadas y concebidas de una forma nueva, distinta a la que ocupó el pensamiento humano anterior, dadas sus novedosas capacidades, exigencias, derechos, preocupaciones o aspiraciones. El mejor ejemplo es la transición epidemiológica y sanitaria, el envejecimiento demográfico y el desplazamiento de las edades mayoritarias junto a los perfiles asociados. Es el ciclo de vida completo, en todas sus etapas, el que se ha visto subvertido. Solo una aproximación multidisciplinar puede aspirar a comprender las dinámicas demográficas en toda su complejidad, y en ello el CSIC se encuentra en condiciones privilegiadas, por su capacidad para aunar el trabajo de una gran diversidad de disciplinas implicadas (antropología, biología,

ciencia política, demografía, economía, epidemiología, estadística, geografía, historia, medicina, sociología...).

La globalización (social, política, medioambiental y económica) también impulsa un nuevo papel de las ciencias que estudian la población, que se encuentran en una posición estratégica para abordar la comprensión y las respuestas a múltiples facetas de dicho proceso. Ramas tradicionales de los estudios demográficos, como el estudio de la movilidad y la distribución residencial en el territorio, adquieren hoy una importancia renovada. La definitiva urbanización de la población mundial y el gran aumento de las migraciones internacionales, pero también su creciente relevancia simbólica y política para los Estados y las ideologías nacionalistas o internacionalistas, o la creciente relevancia de las migraciones causadas por conflictos o por el cambio climático, son algunos de los motivos por los que la investigación demográfica debe intensificarse en el futuro inmediato. Otra rama tradicional, como es el estudio geográfico e histórico de pandemias globales, en particular la gripe de 1918, que se estima que infectó a un tercio de la población mundial, ocasionó 50 millones de muertes y disminuyó la esperanza de vida alrededor de 12 años en algunos países como Estados Unidos, también puede proporcionar enseñanzas útiles para la situación crítica que estamos viviendo actualmente con la pandemia de la COVID-19.

Al desarrollo de nuevas características y comportamientos poblacionales, y a la renovada relevancia que le concede el actual contexto histórico, se suma un salto de escala tecnológico, cuantitativo y cualitativo, tanto en la tipología de las fuentes de datos disponibles para la investigación, como en los medios tecnológicos para almacenarlos, analizarlos estadísticamente, representarlos gráficamente y cartográficamente, transmitirlos y darles difusión. En apenas unas décadas, la revolución informática y de la comunicación ha disparado la capacidad de análisis, ha hecho posible nuevas estrategias de los sistemas estadísticos nacionales (como abandonar los censos tradicionales y apostar por el enlace longitudinal de registros), y ha generado un nuevo universo de datos, masivo y de gran heterogeneidad, el *Big Data*. Además, la participación fundamental de la población –las personas– en los procesos de investigación hace imprescindible una apertura al análisis cualitativo de los comportamientos sociodemográficos de los individuos, así como una revisión del proceso de transferencia social del conocimiento. Todos estos son campos de futuro en los que la investigación desplegada desde el CSIC debe innovar. El CSIC se encuentra especialmente preparado, por la envergadura y variedad de sus

medios, por la riqueza y diversidad de su personal técnico y científico, pero también por la importancia estratégica que para el propio Estado tiene el rápido desarrollo de estas innovaciones.

En suma, los mencionados motores de cambio, tan poderosos y de tan rápida irrupción, obligan a la investigación demográfica en general, y a la desplegada por el CSIC en especial, a plantearse algunas grandes modificaciones en su plan de trabajo, al menos en las siguientes direcciones:

- Actualizar los temas objeto de investigación, prestando más atención a pautas y tendencias emergentes.
- Expandir el diálogo y colaboración con múltiples disciplinas.
- Proponer marcos explicativos nuevos que den cuenta del cambio demográfico, sus causas y sus consecuencias.
- Sacar partido de la innovación tecnológica contemporánea en todas sus facetas: análisis estadísticos avanzados, visualización de datos, enlace longitudinal de múltiples fuentes de datos, Big Data y nuevas infraestructuras.
- Asumir un renovado compromiso ético y social ante una materia, las poblaciones, especialmente sensible socialmente e insoslayable para la acción de gobierno y la planificación.
- Incorporar a las propias personas como sujetos además de objetos de la investigación, proveedores pero también receptores de la información y las evidencias científicas –transferencia social del conocimiento–.

Aunque los retos demográficos a los que se enfrentan las sociedades en las próximas décadas son múltiples, hemos optado por seleccionar los que juzgamos más importantes: 1) el envejecimiento de la población y la calidad de vida de las personas mayores, 2) la posible persistencia de una fecundidad por debajo de las aspiraciones reproductivas de las personas, 3) las repercusiones de la creciente diversificación familiar en el bienestar infantil y las redes de cuidados, 4) la salud a lo largo de todo el curso de vida, 5) el creciente volumen, complejidad y diversidad de los flujos migratorios, 6) el despoblamiento rural, y 7) el acceso y gestión metodológica de nuevos datos. A continuación, presentamos cada uno de estos retos demográficos.

Reto 1. Envejecimiento, longevidad y vejez. Necesidad de un cambio de paradigma basado en el envejecimiento activo y saludable.

Tal y como afirma el Prof. George W. Leeson (2017), la demografía de los siglos XX y XXI ha sido y es sobre todo una demografía del envejecimiento, tanto en el plano individual como poblacional; y el envejecimiento de la población, que en otro tiempo se consideró como un asunto de las economías desarrolladas de Europa y América del Norte, es hoy un fenómeno verdaderamente global que está llegando a América Latina y que tiene como única excepción notable la región del África subsahariana, que mantiene una relativa juventud en términos demográficos.

La tendencia hacia una estructura demográfica envejecida es un proceso, por tanto, mundial, generalizado, que afecta a todas las sociedades y territorios. En efecto Naciones Unidas (2019) estima que, en la actualidad, más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen 60 años y más, lo que supone casi un 14% de la población mundial, y el rápido crecimiento de este grupo etario provocará que para 2050 todas las regiones, excepto África, tendrán una cuarta parte o más de sus poblaciones en este grupo de edad. La mayoría de estas personas mayores son mujeres, con una ratio a escala mundial de 85 hombres por cada 100 mujeres de 60 y más años, y una brecha entre sexos más pronunciada en las cifras de los países desarrollados.

La evolución de la sociedad ha producido una mayor longevidad de la población y, consecuentemente, su envejecimiento demográfico, siendo así un logro y un éxito de la humanidad, porque nunca antes generaciones enteras habían podido tener esperanzas de vida tan elevadas y la expectativa de vivir una vejez más prolongada y, como resultado, convivir tantas generaciones juntas. Efectivamente, nos estamos adentrando en una época de vidas muy longevas en todo el planeta. Este siglo XXI está destinado a ser también el siglo de los centenarios (Leeson, 2018).

En el contexto de las regiones más envejecidas del mundo, España se alinea con la región europea. En el año 2050 será uno de los países más envejecidos; el mayor incremento del envejecimiento se producirá dentro del grupo de más edad, de forma que si hoy en día en Europa el sobreenvjecimiento es 27,2% (personas de 80+ años sobre personas de 65+), esa cifra llegará a 36,0%, y en España al 37,6%, lo que supone que casi 4 de cada 10 personas mayores en España tendrá 80 ó más años de edad.

Considerando la situación actual, y también el hecho de que las proyecciones de población indican una tendencia creciente, el envejecimiento se constituye en un reto, y también en una oportunidad, tanto para la sociedad en su conjunto como para los individuos. Las implicaciones del envejecimiento de la población en todos los órdenes requieren del conocimiento científico y de su traslación a la sociedad, para afrontar convenientemente las políticas sociales que promuevan y faciliten las condiciones y calidad de vida de las personas mayores en su entorno de residencia. Sus impactos abarcan desde la experiencia personal del envejecimiento, la imagen social de la vejez, los entornos inclusivos o las políticas sobre los sistemas de salud y servicios sociales, el cuidado formal o informal, el contexto social y cultural del envejecimiento o la brecha digital y los desarrollos tecnológicos.

Al estreno de este siglo, Naciones Unidas celebró en Madrid su Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento. Se presentó en ella el documento seminal de la Organización Mundial de la Salud “Envejecimiento activo: un marco político” (WHO, 2002; ILC-BR, 2015) que fue el inicio de una estrategia de políticas y actividades desarrolladas por muchos países, con el objetivo de desarrollar una imagen nueva y más positiva del envejecimiento y de las personas mayores. En la misma línea, más recientemente, la OMS presentó su Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud (WHO, 2015), en el que se alertaba de la incidencia de los estereotipos edadistas en las políticas y en los comportamientos, haciendo, así, necesario luchar contra la discriminación por edad. Más aún, ciñéndose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la OMS (2019) ha definido la Década del Envejecimiento saludable, 2020-2030, a través de un Plan de Acción con 10 prioridades:

1. Establecer plataformas para la innovación y el cambio que conecten ideas y personas
2. Apoyar la planificación del país en la creación de políticas que faciliten vidas más largas y saludables
3. Recopilar datos globales sobre Envejecimiento Saludable con el fin de conseguir información actualizada
4. Promover investigaciones que aborden las necesidades actuales y futuras de las personas mayores
5. Alinear los sistemas de salud con las atenciones que requieren las personas mayores
6. Sentar las bases para un sistema de apoyo a los mayores y a sus cuidadores en todos los países

7. Asegurar los recursos necesarios para una atención integral a la vejez
8. Empezar una campaña mundial para combatir la discriminación por edad
9. Definir el contexto económico que permita diseñar soluciones sostenibles, equitativas y eficaces
10. Mejorar la red mundial de ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores.

En este contexto de promoción del envejecimiento activo y saludable, libre de prejuicios, la comprensión de la vejez y el envejecimiento serán claves para posibilitar la sostenibilidad demográfica y poder afrontar los retos sociales y económicos en el siglo XXI. Así, el futuro de la investigación sobre envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva interdisciplinar, y entenderse como un desafío con implicaciones sociales, económicas, y ambientales, pero también, como un área de oportunidad al desarrollo para la sociedad en su conjunto.

Salud, Discapacidad, Dependencia

Las condiciones de vida y de trabajo, a lo largo del curso de vida (nivel de renta, nivel educativo, alimentación, desempleo, vivienda, abastecimientos, transportes, etc.), además del acceso a los sistemas sanitarios y de atención social, seguirán constituyendo una cuestión fundamental que puede resumirse en la necesidad de seguir teniendo muy presente la relación entre salud, bienestar y desigualdades sociales, a distintas escala territoriales, tal y como lo recomienda la OMS.

El aumento de la población mayor ha supuesto el incremento en la prevalencia de enfermedades de perfil crónico, lo que destaca la necesidad de investigar sobre las condiciones de fragilidad, discapacidad y dependencia, muy ligada también a la investigación sobre los cambios en la estructura familiar, en el papel de la mujer en la familia y en el mercado laboral, y sobre los efectos sociales de la atención a los mayores dependientes, del gasto en pensiones y del gasto sanitario. Será, por tanto, necesario efectuar estimaciones sobre el incremento de la población con edad más avanzada (octogenarios, nonagenarios y centenarios) y su distribución espacial, pues ésta muestra mayores y más frecuentes problemas de salud, discapacidad y dependencia. Así, se prevé que se incremente la población con demencias (Alzhéimer) y enfermedades neurodegenerativas (Párkinson), lo que planteará importantes desafíos en materia de provisión de servicios (sociales y de salud) y cuidados de larga duración (Ver *Temática 5. Envejecimiento y Mente, Desafío 7. Envejecimiento y Neurodegeneración*).

Sin embargo, la globalización y el cambio climático están favoreciendo la aparición periódica de emergencias epidemiológicas con base en enfermedades infecciosas agudas que redundan más negativamente entre las personas mayores más frágiles. La crisis actual de la COVID-19 pone el foco en abordar los factores ambientales y sociales determinantes de la morbilidad y la mortalidad en la población envejecida, considerando también la perspectiva de género, así como su relación con los retos de la desigualdad social. Aquí es apremiante implementar nuevas estrategias de salud pública, encaminadas a la comprensión de los comportamientos epidemiológicos y las causas de muerte entre la población envejecida, que se asocian con factores sociales (pobreza y desigualdad social) y ambientales (condiciones de la vivienda y el barrio, entornos residenciales para el cuidado, etc.).

Será también necesario evaluar los sistemas de solidaridad familiar en el cuidado de la población dependiente, desde la perspectiva intergeneracional y de género. Es importante estudiar los hogares unipersonales envejecidos en relación con las necesidades de cuidados y las redes de ayuda/cuidadores (siguiendo un modelo familiar informal o un modelo profesional formal, o un modelo mixto), el problema de la soledad no deseada y el acceso a los servicios sociales y asistenciales (cuidados de larga duración). De hecho, estos servicios van a experimentar importantes transformaciones, derivadas de los cambios sociales y culturales, y de la incorporación de las nuevas tecnologías destinadas a este colectivo y a sus potenciales cuidadores (teleasistencia, comunicación virtual, sistemas multisensoriales para demencias, domótica y seguridad en el hogar). A su vez, es necesario analizar la oferta y la demanda de equipamientos (residencias de mayores, viviendas asistidas, viviendas colaborativas-cohousing, viviendas compartidas) y de servicios sociales y asistenciales (ayuda a domicilio y otras) para adecuarlas a las nuevas estrategias residenciales en la vejez y las preferencias de los nuevos grupos sociales, como personas LGTBI e inmigrantes (diversidad de género y diversidad cultural).

Mención especial merece la investigación en cuidados de larga duración, y, específicamente, sobre los cuidados socio-sanitarios que se prestan en instituciones residenciales de larga estancia. La COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de investigar sobre las ratios de personal y de recursos, así como de espacio privado vs compartido, establecidas en estas instituciones para el cuidado social y sanitario, instituciones que en esta pandemia se han convertido en verdaderos clústeres de comorbilidad y mortalidad para la población de más edad. En algunos ámbitos sociales, incluso ya se está reclamando un cambio sustancial en el modelo de atención en centros residenciales para mayores.

En términos de salud, también será necesaria investigación sobre las cuestiones éticas de los avances tecnológicos que pueden prorrogar la vida en condiciones de muy mala calidad al final de la vida.

Participación, Entornos Físico, Social y Laboral

La participación se sustenta sobre varias dimensiones y canales. Uno de estos canales tiene que ver con la integración laboral para las personas con 50 años y más y su mantenimiento en el mercado laboral, para lo cual es clave promover políticas que mejoren este mercado de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores, lo que sin duda redundará en optimizar el sistema de pensiones y su sostenibilidad y garantizar la protección social de la vejez. También será clave la retención del llamado talento sénior. El escenario del envejecimiento activo prevé un cambio cultural que transforme la tradicional secuencia de formación, trabajo y jubilación. Las etapas habrán de alternarse a la medida de cada persona, para configurar escenarios vitales personalizados que integren las opciones de cada uno y los desafíos sociales de su entorno. Desde las empresas se plantean fórmulas de emprendimiento, en sentido amplio, especialmente a partir de cierta edad, implementando condiciones normativas que conduzcan a aprovechar la pensión para emprender, sin excluir que se pueda hacer en el entorno de la empresa donde se ha estado trabajando. Así mismo se plantean nuevas formas contractuales a partir de cierta edad o un nuevo contrato de relevo, la introducción de una mayor flexibilidad en el proceso de jubilación, incluyendo la jubilación de común acuerdo. También hay propuestas sobre planificar e incorporar talento sénior al trabajo por proyectos. Todas son un desafío en sí mismas y para las normativas del mercado laboral y los derechos de los trabajadores, que habrán de ser cuidadosamente estudiadas.

Otro canal de participación tiene que ver con la realización de actividades, múltiples y diversas, aunque esencialmente culturales, físicas y sociales, durante el tiempo libre que se tiene tras la jubilación. Este comportamiento redundará en la mejora de la salud física y mental, el incremento de las relaciones sociales, y la prevención de la soledad, entre otros aspectos. Entre estas actividades, es destacable la oferta de oportunidades para el aprendizaje, remarcándose la importancia de la formación para el desarrollo personal a lo largo de todo el ciclo vital. El aprendizaje a lo largo del curso de vida, como dimensión específica o como herramienta, contribuye de forma clara a la mejora del envejecimiento, sobre todo si no se tiene una visión reduccionista de la formación continua a meras actividades formales ofertadas por centros y

residencias en las que existe una mayor implicación de las mujeres. En esta dimensión del aprendizaje habría que considerar la formación en las tecnologías de la información y la comunicación, para reducir la brecha digital, y la formación destinada a asegurar los derechos de ciudadanía.

Una tercera dimensión de la participación activa tendría que ver con el fomento de la capacidad de acción de las personas mayores en la sociedad. El reto se centra en promoverla con el objetivo de la mejora de la calidad de vida individual y, consecuentemente, social o comunitaria. Particularmente, la población en España presenta ratios de participación social, también en la vejez, inferiores a la media de la Unión Europea. Se trata, por tanto, de favorecer la integración social de todas las edades en la vida comunitaria, mediante:

- la participación activa en iniciativas sociales;
- la construcción de estructuras sociales de participación;
- el voluntariado;
- la implicación de las personas mayores en la generación de conocimiento y el diseño y aplicación de políticas, planes y programas.

Buena parte de la menor tasa de participación social en España tiene que ver con la participación familiar, que pone en la ayuda y apoyo intrafamiliar los esfuerzos socializadores y la integración. Esta vocación familista de las sociedades mediterráneas es la que se ha ocupado hasta ahora de minimizar el aislamiento y la soledad en el proceso de envejecer. La transformación de la sociedad, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, la reducción en el número de descendientes, y la mayor esperanza de vida en buena salud, está promoviendo una cada vez mayor independencia y autonomía en la vejez, lo que puede llevar aparejado un mayor aislamiento social y formas de soledad no siempre deseadas.

Frente a ello, también se están desarrollando nuevas fórmulas de convivencia basadas en el desarrollo de comunidades colaborativas; se trata de espacios residenciales o viviendas colaborativas formadas entre personas que eligen ese modo de residir y convivir, compartiendo espacios y actividades comunes, pero manteniendo la intimidad y privacidad de la propia casa.

El reto se centra en intentar mantener a las personas mayores integradas en la sociedad y en comunidades de residencia de su propia elección, evitando los ghettos por edad, es decir, crear entornos multi-generacionales. En línea con ello, el espacio geográfico, el entorno medioambiental y residencial, se configura como

una dimensión extraordinariamente relevante. Facilitar el envejecimiento en el lugar o en casa (*ageing in place / ageing at home*) es visto en las últimas décadas como una de las mejores vías para la integración comunitaria pero también, y desde un enfoque de política pública, se considera que puede ayudar en la sostenibilidad de los recursos económicos. Este enfoque está siendo abordado bajo el paradigma de ciudades/comunidades amigables (*age-friendly cities/communities*). La insostenibilidad de muchos hogares individuales en edades avanzadas y en condiciones de fragilidad ha de soslayarse mediante la transformación del urbanismo para hacerlo amigable.

Es preciso analizar los escenarios del proceso de envejecimiento demográfico urbano y su distribución espacial, así como sus implicaciones en la planificación gerontológica de las ciudades. En el siglo XXI la población envejece, sobre todo, en las urbes, lo que obliga a replantear la forma de diseñar las ciudades y a planificar, desde una perspectiva gerontológica, las infraestructuras, equipamientos y servicios, en evitación de procesos de exclusión social y urbana. Asimismo, es prioritario impulsar estudios longitudinales a nivel nacional e internacional, desde el enfoque de la gerontología ambiental, enfocados a desentrañar las claves ambientales que promueven las ciudades y comunidades amigables con el envejecimiento activo (salud, seguridad, participación activa y aprendizaje a lo largo de la vida).

Seguridad, Protección Social y Derechos

Envejecer activamente propugna, en materia de seguridad, garantizar la protección y la dignidad de las personas de edad considerando sus derechos y necesidades sociales, financieras y de seguridad física a medida que se envejece. Al tratarse de un marco global, los elementos que pueden incluirse en el ámbito de la seguridad son múltiples y variados. De esta forma, los aspectos que apuntalan la seguridad de las personas tienen que ver con todos aquellos que definen su calidad de vida: salud (cobertura de salud y dependencia), recursos económicos (sistema de pensiones) y redes de apoyo (familiar y social) y protección social en general.

La perspectiva de los derechos de las personas mayores despliega un campo extraordinario para la investigación. Uno de los argumentos tiene que ver con la discriminación laboral y la demanda de voluntariedad en la edad de jubilación. La jubilación obligatoria se asocia con la pérdida de valor del ser humano una vez que deja de ser económicamente productivo. El debate que se abre en este sentido muestra la oposición que se establece entre el derecho a la autonomía

en las decisiones que han de tener los seres humanos, con independencia de su edad, sexo, raza o credo, y la tutela/protección que la sociedad suele conferir a la población mayor, una vez abandona el mercado laboral, viuda o padece una enfermedad, por el hecho de tener una edad avanzada.

De esta discriminación por edad, o edadismo, se desprenden otros aspectos a considerar, tales como la equidad en el acceso a los cuidados de salud y la ayuda a la dependencia, la prevención y protección contra la violencia y el maltrato hacia las personas mayores, y en particular la que se ejerce contra las mujeres mayores (discriminación múltiple), y la dignidad, la autonomía y el control sobre la propia vida, incluyendo decisiones sobre la propia orientación sexual y la sexualidad en la vejez, así como sobre el tipo de cuidados que se desean recibir al final de la vida (testamento vital) o también sobre la eutanasia o el buen morir. La emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 ha puesto de actualidad este debate sobre los criterios de actuación en los procedimientos sanitarios y el valor de la vida por vivir.

La lucha contra el edadismo ha de implicar a la sociedad en su conjunto, pues en esta sociedad longeva todos podemos llegar a ser viejos, a los medios de comunicación porque son transmisores de ideas e imágenes estereotipadas, y a políticos y decisores, pues el envejecimiento ha de ser entendido como un proceso vital, no algo que evitar y esconder.

Es, por tanto, preciso concienciar a la sociedad del proceso de envejecimiento, para facilitar la integración intergeneracional. Se trata de impulsar la educación y la concienciación social sobre el envejecimiento y la vejez. Al respecto, es esencial que el envejecimiento y la vejez sean contenidos curriculares transversales en los grados y posgrados de las Universidades, así como impulsar una mayor formación en contenidos de gerontología y geriatría. También, es importante preparar a la población, a lo largo de los años, sobre la vejez, posibilitando una mejor adaptación y aprovechamiento de las oportunidades (salud, participación, aprendizaje continuo, trabajo, ocio) que ofrece esta etapa de la vida. A su vez, es necesario brindar un mayor conocimiento y asesoramiento sobre derechos, seguridad, autonomía, control y ambiente (pensiones, sanidad, cuidados, testamento vital), encaminados a favorecer la calidad de vida en la vejez.

Sostenibilidad Demográfica, Social y Económica

El envejecimiento de la población representa una ventana de oportunidad en materia de investigación para poder suscitar la creatividad, la productividad

y la competitividad, mediante la colaboración y la transferencia de conocimientos entre el sector público y privado a nivel nacional e internacional: se prevé que el envejecimiento como fenómeno global generará uno de los sectores económicos más dinámicos en las próximas décadas.

Para implantar las medidas para la sostenibilidad económica y la economía plateada, es necesario realizar estimaciones de los escenarios del envejecimiento de la población y su distribución geográfica, a fin de contribuir al impulso de políticas públicas (en particular, en materia de pensiones, servicios sociales y de salud, dependencia, o vivienda, incluyendo también la economía no monetarizada en la contabilidad nacional), y al yacimiento de nuevas áreas de oportunidad para el sector privado (comercio, servicios, salud, ocio, alojamiento, nuevas tecnologías, comunicación, automatización).

Asimismo, se debería adaptar el sector servicios ante el incremento de los movimientos migratorios de personas mayores a nivel internacional, lo que tendrá también importantes efectos económicos y sociales en los lugares de destino (turismo, ocio, comercio, transportes, alojamiento, salud, cuidados). Además, se espera que los mercados y destinos turísticos compitan por atraer a este creciente sector de la población, por lo que será necesario adaptar el sector servicios a las demandas de una sociedad que envejece a nivel internacional y nacional.

Igualmente, habrá que identificar los factores ambientales que determinan el aumento de la longevidad y la calidad de vida en el envejecimiento, incorporando también la perspectiva de género. Así, desde los enfoques de la epigenética y la gerontología ambiental es prioritario identificar los factores ambientales físicos y sociales, determinantes de la longevidad, y su influencia en la salud física y mental y en la calidad de vida de la población a edades avanzadas, así como en la promoción del envejecimiento activo y la prevención del riesgo de discapacidad y dependencia. Dichas evidencias científicas tendrían efectos beneficiosos en el gasto público y coadyuvarían a generar políticas de sostenibilidad (Ver *Temática 5. Envejecimiento y Mente, Desafío 7. Envejecimiento y Neurodegeneración*).

Del mismo modo, es necesario promover políticas de desarrollo local para frenar la despoblación y sus efectos (sociales, económicos, ambientales) sobre la población envejecida. Al respecto, en estas regiones es importante impulsar la planificación gerontológica de los servicios sociales y de salud para garantizar el acceso de las personas mayores, y evitar el riesgo de la reubicación.

También, en las zonas en riesgo de despoblación es necesario fomentar la participación activa de las personas mayores y aprovechar su experiencia en el diseño de políticas de ordenación del territorio y de adaptación al cambio climático a nivel local (Ver *Reto 6: La despoblación rural, la España ‘vacía’: un desafío socio-territorial y económico*).

Finalmente, será necesario evaluar los efectos de las políticas de sostenibilidad demográfica en el contexto de una sociedad cada vez más envejecida, que deberá ser más eficiente en términos productivos y reproductivos. Asimismo, es urgente establecer previsiones para prevenir y adaptar las estructuras y el gasto público ante un escenario de incertidumbres demográficas, económicas y climáticas.

Reto 2. Posible persistencia de una fecundidad muy baja, tardía y por debajo de las aspiraciones reproductivas de las personas

Un nivel de fecundidad muy bajo y las transformaciones socio-demográficas que conlleva figuran entre los retos importantes a los que se enfrentan muchas sociedades del siglo XXI. De ahí que el debate sobre sus causas y consecuencias no solo tenga una creciente presencia en el mundo académico sino también en la agenda política nacional e internacional. La tasa de fecundidad condiciona en buena medida la evolución de la estructura de edad de la población, el ritmo de envejecimiento demográfico y el tamaño de la futura población económicamente activa. Por ello, la persistencia de un nivel muy bajo de fecundidad en una población cada vez más longeva supone un reto importante para el Estado de Bienestar, que está en gran parte estructurado sobre la base de las transferencias intergeneracionales, y también para la organización de la provisión de cuidados. Si bien el envejecimiento poblacional es un proceso ineludible, gradual y predecible en las sociedades demográficamente avanzadas, la persistencia de un nivel muy bajo de fecundidad puede acelerar este proceso.

En el contexto internacional, la fecundidad por debajo del denominado nivel de reemplazo de las generaciones (2,1 hijos por mujer), que en el pasado reciente era un rasgo exclusivo de las sociedades económicamente avanzadas, pasará a ser la norma a nivel global en las próximas décadas, excepto en el continente africano. Según las últimas proyecciones de Naciones Unidas, aproximadamente la mitad de la población mundial reside actualmente en países con una tasa de fecundidad inferior al umbral de reemplazo, y en 2050 lo harán casi dos tercios de la población mundial. No obstante, el nivel de fecundidad de los

países que han concluido su transición demográfica, dista de ser homogéneo. Coexisten sociedades con un nivel de fecundidad moderadamente bajo y cercano al umbral de reemplazo –como los países del norte y centro de Europa– y sociedades con un nivel de fecundidad muy bajo (inferior a 1,3 hijos por mujer), como los países del sur y el este de Europa, o algunos países del Asia oriental. Por lo general, en aquellas sociedades avanzadas que promueven la igualdad de género –tanto en el ámbito laboral como en el familiar–, el equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal, y el apoyo público a la crianza, la fecundidad tiende a situarse más cerca del nivel de reemplazo.

En cuestiones demográficas, España lidera varios rankings a nivel global. Además de contar con una esperanza de vida de las más elevadas, presenta una fecundidad que se sitúa entre las más bajas y más tardías del mundo. La tasa de fecundidad ya lleva tres décadas por debajo de 1,5 hijos por mujer, y desde 2011 en torno a 1,3 hijos. El patrón de muy baja fecundidad de la sociedad española contemporánea guarda una estrecha relación con el creciente aplazamiento de la decisión de tener hijos, que a su vez está vinculado a la tardía emancipación económica y residencial de los adultos jóvenes y a la precarización laboral. Asimismo, el creciente retraso de la maternidad y la paternidad –la edad media al primer hijo es actualmente de 31 años para las mujeres y de 35 años para los hombres– está asociado al aumento de la proporción de mujeres y hombres que finaliza su etapa reproductiva sin descendencia –una de cada cuatro mujeres de la generación nacida a principios de los años 70 ha concluido recientemente su fase reproductiva sin haber tenido ningún hijo–. Es previsible que estas tendencias se acentúen en el futuro próximo si no hay un aumento significativo de la estabilidad laboral en el mercado de trabajo y un avance en las políticas públicas e iniciativas privadas para facilitar la conciliación, la corresponsabilidad y los cuidados a descendientes y ascendientes.

Como consecuencia del patrón de fecundidad tardía, España se encuentra entre los países europeos con mayor utilización de técnicas de reproducción asistida. Es previsible que el uso de estas técnicas y su índice de éxito aumente considerablemente en las próximas décadas, expandiendo la frontera entre la edad fértil y no fértil. Sin embargo, seguirá existiendo un claro desfase entre las edades relativamente tardías a las que se logran unas condiciones residenciales, conyugales, laborales y económicas que permitan afrontar adecuadamente la crianza y aquéllas que establece como idóneas el reloj biológico. Los debates sociales, políticos, éticos y jurídicos sobre la congelación de óvulos a edades tempranas, la anonimidad de las donaciones de gametos y la

gestación subrogada seguirán abiertos en las próximas décadas en el contexto internacional.

La expansión continuada de la reproducción asistida en Europa, y el hecho de que en España se realicen más de la mitad de los ciclos de ovodonación de toda Europa, plantea muchos retos de cara a las próximas décadas. En primer lugar, la adopción de forma rutinaria de la vitrificación de los óvulos está generando muchas dudas sobre el carácter voluntario y altruista de la donación. Los últimos datos del registro de la SEF (Sociedad Española de Fertilidad) indican que por cada donante y cada ciclo de donación se extraen una media de 19 óvulos (eran 12 en 2009), lo que está facilitando la vitrificación de muchos óvulos que, en lugar de ser utilizados por una pareja en la misma clínica donde se donaron, se almacenan y se venden a otras clínicas del entorno nacional o europeo, generando beneficios importantes para las clínicas o los bancos de óvulos. Estos beneficios no proceden ya del tratamiento de fecundación asistida, como prevé la ley de reproducción asistida 2006, sino de la propia venta de los gametos.

La donación de óvulos, además, está reforzando un patrón de estratificación social y étnica que genera controversia, ya que se ha convertido en la opción prioritaria de acceso al embarazo de mujeres y parejas de avanzada edad (superior a los 40 años) con medio y alto poder adquisitivo, mientras que la donación de óvulos se ha convertido en una forma de generación de ingresos para mujeres de entre 18 y 25 años, que encuentran la donación de óvulos –compensada con más de 1000 euros– atractiva en comparación con lo que ofrece ahora mismo el mercado laboral español. Eso hace que haya un mercado basado en la transferencia de capacidad reproductiva de mujeres jóvenes, con bajo poder adquisitivo y en muchos casos de origen inmigrante a mujeres mayores, con alto poder adquisitivo, españolas o de países desarrollados.

Aunque la tasa de fecundidad ha descendido hasta alcanzar niveles muy bajos, las preferencias reproductivas han permanecido sorprendentemente estables en España. El número medio de hijos deseado, tanto por mujeres como por hombres, sigue situándose en torno a dos hijos, al igual que ocurre en la mayoría de los países europeos, y todavía no hay indicios de cambio en estas preferencias. En este aspecto, España se encuentra entre los países que registran una mayor distancia entre el promedio de hijos que se desean y los que finalmente se tienen. La distancia que se observa entre la fecundidad deseada y la fecundidad alcanzada refleja un déficit de bienestar individual y colectivo, e indica la existencia de una serie de barreras que dificultan a muchas

personas y parejas hacer realidad su proyecto de familia. Por esta razón, la fecundidad muy baja supone un importante reto demográfico: no solo condiciona la evolución colectiva de la sociedad sino también las trayectorias vitales de los individuos.

Algunos de los principales obstáculos que dificultan a las personas tener el número de hijos que desean son las precarias condiciones laborales, la incertidumbre económica que se vive en muchos hogares, los bajos salarios, el elevado precio de la vivienda, las penalizaciones en la carrera laboral, las insuficientes políticas públicas de apoyo a la crianza y a la conciliación, y la desigualdad en las responsabilidades de cuidado asumidas por hombres y mujeres –lo que se traduce en la “doble jornada” femenina–. La investigación demográfica indica que hasta que la igualdad de género pase a ser la norma en la sociedad, tanto en el ámbito público como en el ámbito familiar, es improbable que asistamos a una recuperación de la fecundidad. Para llegar a esa meta, es necesario un claro apoyo institucional. La progresiva ampliación del permiso de paternidad y su igualación al permiso de maternidad prevista para 2021 es una medida en la buena dirección para establecer patrones de parentalidad compartida y promover la corresponsabilidad en los cuidados. Pero serán necesarias más medidas y políticas públicas basadas en evidencia científica si se quiere reducir la brecha entre aspiraciones y realidades reproductivas.

El debate científico, político y social sobre si es posible una recuperación de la fecundidad en aquellas sociedades que presentan niveles muy bajos y sobre qué tipo de políticas pueden impulsar esta recuperación seguirá abierto en las próximas décadas. En el caso de España, es altamente improbable que la fecundidad remonte el umbral de reemplazo generacional a medio o largo plazo, pero sí debería ser posible pasar de un nivel de fecundidad muy bajo a otro moderadamente bajo, y así reducir la brecha entre deseos y realidades reproductivas. Para ello, la investigación demográfica puede informar el debate y el diseño de políticas que favorezcan que las personas que desean hijos puedan tenerlos. Una mejora en el nivel, la protección y la calidad del empleo entre los adultos jóvenes atenuaría el desfase que existe actualmente entre el reloj biológico y el reloj social de la reproducción. Otro reto importante es reducir las dificultades para compaginar responsabilidades familiares y laborales, evitando centrar el debate de la conciliación en las mujeres y fomentando la corresponsabilidad mediante mecanismos que faciliten la plena incorporación de los hombres al cuidado, así como promover una organización más flexible del tiempo de trabajo. A través de las políticas públicas también se pueden redistribuir de forma más

equitativa los costes asociados a la crianza, por ejemplo, garantizando el acceso universal a escuelas infantiles de calidad y minimizando la inseguridad económica de muchas familias con hijos.

No es previsible que el aumento de flujos inmigratorios en el futuro tenga un impacto significativo en la tasa de fecundidad. Por un lado, la fecundidad sigue descendiendo en la mayoría de las sociedades de origen de la población inmigrante. Por otro lado, los estudios muestran una convergencia gradual de las pautas reproductivas de la población inmigrante y autóctona. No obstante, aunque el impacto de la inmigración en la tasa de fecundidad agregada de España se mantendrá modesto, su contribución al volumen de nacimientos seguirá siendo notable –actualmente uno de cada cuatro nacidos tiene una madre o un padre extranjeros–, lo que implica que la sociedad española del futuro tendrá una configuración cada vez más plural y multicultural.

En cuanto al impacto que tendrá la actual pandemia de la COVID-19 en la tasa de fecundidad de los próximos años, todo apunta a que observaremos una reducción adicional de la ya muy baja tasa de fecundidad. El confinamiento es muy probable que provoque un aumento de las rupturas de parejas –como ha ocurrido en China–, la suspensión de los tratamientos de reproducción asistida dejará su huella y, sobre todo, la previsible crisis económica asociada a la parálisis de la economía, el aumento del desempleo y el sentimiento de incertidumbre colectiva e individual influirán negativamente en las decisiones reproductivas.

Reto 3. Repercusiones de la creciente diversificación familiar en el bienestar infantil, la igualdad de oportunidades y las redes de apoyo en los cuidados

Las estructuras familiares y las relaciones intra-familiares han experimentado una transformación particularmente rápida en las últimas décadas y seguirán en proceso de cambio en el futuro próximo. La familia seguirá siendo considerada como una de las principales plataformas de socialización, seguridad y protección de sus miembros, pero aumentará la diversidad de configuraciones familiares y modelos de convivencia. En la sociedad contemporánea, a las familias compuestas por una pareja casada con sus hijos biológicos, se suman, entre otras, las familias sin hijos, las familias con hijos adoptados, las familias formadas por parejas sin vínculo matrimonial, las familias formadas por parejas del mismo sexo, las familias monoparentales, las familias reconstituidas a partir de segundas o terceras uniones conyugales, las familias

transnacionales, las parejas separadas que comparten el cuidado de sus hijos, las parejas estables que optan por residencias separadas, o las personas que optan por la maternidad (o la paternidad) como un proyecto vital no enmarcado en una relación de pareja. La pluralidad de formas familiares irá en aumento en las próximas décadas y un reto importante es garantizar que todas ellas cuenten con el mismo grado de reconocimiento legal y de protección social.

Los cambios familiares del último medio siglo han estado estrechamente ligados a tres “revoluciones” transformadoras: la revolución anticonceptiva, la revolución sexual y la revolución de las relaciones de género, ésta última todavía incompleta, ya que la igualdad de género ha avanzado más rápido en el ámbito educativo y laboral que en el ámbito familiar, donde aún queda mucho camino por recorrer para lograr la plena corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados. Es previsible que la libertad de los individuos para definir su proyecto conyugal, reproductivo y familiar vaya en aumento en las próximas décadas, lo que implica una creciente diversificación de las formas de convivencia familiar, una creciente complejidad de las trayectorias familiares de los individuos a lo largo de su curso de vida y una posible reducción de la densidad de las redes de parentesco.

Si la disociación entre sexualidad y reproducción –gracias a la generalización del uso de anticonceptivos– fue uno de los grandes catalizadores del descenso de la fecundidad y de las transformaciones familiares en la segunda mitad del siglo XX, la disociación entre matrimonio y reproducción, la coexistencia de la maternidad/paternidad biológica y socio-afectiva, y la evolución de las relaciones de género hacia modelos más igualitarios seguramente serán los ejes que moldearán las biografías familiares en los próximos años. Sin embargo, un reto importante al que se enfrentarán las familias es el de los cuidados. La previsible reducción de la red potencial de apoyo intra-familiar, asociada a tendencias socio-demográficas como el descenso de la fecundidad –que tiene entre sus componentes el incremento de personas sin hijos y con un solo hijo–, el aumento de la ruptura de pareja o el incremento de la movilidad y las migraciones, hacen indispensable ampliar el apoyo público a las familias y la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la provisión de cuidados.

En la mayoría de países, la creciente pluralidad de formas familiares, así como su desigual distribución por estratos socioeconómicos, han ido acompañadas de un intenso debate científico y político sobre los vínculos entre estructura familiar, bienestar infantil y desigualdad de oportunidades. En este sentido, uno de los retos que es ineludible abordar es la desigualdad en materia de

educación, salud y riesgo de pobreza entre los menores que viven en distintas configuraciones familiares. Aunque numerosos estudios muestran que la estructura familiar es menos importante para el bienestar de los hijos que la calidad de las relaciones familiares, es necesario avanzar en el diseño de políticas de apoyo a las familias, con independencia de su configuración. También es necesario abordar las implicaciones de las transformaciones familiares previstas en un futuro próximo para la solidez de los vínculos intergeneracionales, la articulación de las redes familiares y la provisión y recepción de cuidados a lo largo del curso de vida.

La actual crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de tener un buen conocimiento y comprensión de la estructura y composición de los hogares (por ejemplo, las personas mayores que viven solas, los adultos jóvenes no emancipados que conviven con padres mayores, los abuelos que participan en el cuidado de sus nietos, las familias monoparentales que no pueden compartir cuidados...), del grado de contacto intergeneracional o de la solidez de las redes familiares de apoyo, a la hora de estimar la vulnerabilidad de la población ante la pandemia.

Reto 4: Salud y Mortalidad: ¿Estamos preparados para la biodemografía, la genómica social y la demografía digital?

La definición más influyente de la salud es, sin duda, la plasmada en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, firmada en Nueva York el 22 de julio de 1946: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La salud se trata, por tanto, de un fenómeno multidimensional y multicausal, que trasciende el campo exclusivamente médico, relacionándose con la biología, la genética, la epigenética, la psicología, la sociología, la economía y la política. Es por ello que el estudio de la salud solo puede ser abordado en su complejidad teniendo en cuenta una elevada cantidad de variables (biológicas, sociales, ambientales, económicas, culturales, del sistema de salud...), con fuerte interacción entre ellas.

El análisis de las condiciones de salud durante todo el curso de vida –desde el nacimiento a la muerte– permite estudiar las desigualdades en salud entre diferentes territorios, distintas clases sociales o entre hombres y mujeres, así como valorar en qué fases de este proceso deben efectuarse intervenciones para mejorar la salud. En el proceso de morbilidad influyen los recursos individuales (educación, ingresos...), los factores personales (genéticos, epigenéticos,

intelectuales, sociales, conductuales...) y las variables de contexto (situación social y residencial, redes de cuidado, calidad de servicios sanitarios...), que contribuyen (o perjudican) al mantenimiento de la salud personal. Aunque podemos medir con bastante precisión las desigualdades en salud, todavía falta mucho por aprender en relación a los mecanismos que subyacen a las diferencias observadas, como por ejemplo las de género.

Entre las líneas más prometedoras de investigación se encuentra aquella que examina cómo las condiciones de supervivencia y de salud a lo largo del curso de vida se ven determinadas por las condiciones experimentadas a edades previas –particularmente en la etapa de desarrollo infantil–, incorporando también una perspectiva demográfica generacional y geográfica. Para ello, es imprescindible el uso de información longitudinal, con enlaces a registros biomédicos y genéticos, un tipo de datos que ya va estando presente en muchos países, y España no es una excepción. También es indispensable una perspectiva analítica multinivel, identificando qué diferencias observadas entre individuos son atribuibles a su propia trayectoria previa o a factores más generales del entorno social o geográfico, e integrando también al análisis agregado poblacional en forma de cohortes de nacimientos.

Dentro de esta línea de investigación, en demografía y en el CSIC, se está trabajando en varios proyectos en los que se analizan los efectos a largo plazo de las condiciones de salud durante las primeras etapas de la vida en la salud adulta. El CSIC está en una posición envidiable, dado que cuenta con equipos que se han centrado durante años en la recogida de datos históricos, que ahora pueden ser vinculados a registros actuales, permitiendo una innovadora línea de trabajo centrada en la explotación de datos de registros longitudinales de larga duración, siguiendo el modelo de los registros nórdicos.

Dentro de esta línea de investigación, existe cada vez más evidencia empírica –en demografía y en epidemiología– sobre algunos mecanismos por los que las condiciones de vida y de salud en la primera infancia pueden condicionar la aparición de enfermedades crónicas en la etapa adulta, en particular, la aparición de diabetes (diabetes de tipo II) y enfermedades cardiovasculares. Algunos de estos mecanismos son muy específicos, como las secuelas de los procesos que comienzan en el útero, durante el desarrollo del feto y/o alrededor del nacimiento o durante otros períodos críticos del crecimiento de los órganos humanos, secuelas que han dado lugar a la “hipótesis del origen o de la programación fetal”. Existen otros mecanismos menos específicos, como los que operan a través de las condiciones socioeconómicas en la primera infancia, incluyendo los

entornos estresantes o los episodios agudos de algunas enfermedades infantiles y su influencia acumulativa en el inicio posterior de enfermedades crónicas. Otro conjunto de efectos derivarían de la exposición recurrente a infecciones y enfermedades parasitarias durante edades tempranas.

Desde una perspectiva agregada poblacional, los efectos de las condiciones de salud infantiles sobre las sucesivas cohortes, pueden resultar contradictorios. Cabe la posibilidad de que, al contrario de lo que producen a escala individual, mejoren las posteriores condiciones de salud y de supervivencia de las cohortes por haber eliminado previamente a miembros especialmente vulnerables (selección), o por haber dotado a los supervivientes de mecanismos de lucha contra ciertos procesos o entornos mórbidos (inmunización). Pero es igualmente posible que las secuelas de los problemas o de las malas condiciones iniciales de una generación se traduzcan en una menor resiliencia y una mayor mortalidad en las etapas posteriores de vida.

Desde una perspectiva individual, la hipótesis de Barker sobre la programación fetal a través de cambios epigenéticos sostiene que la desnutrición en la etapa perinatal se asocia a mayor mortalidad en la etapa adulta por enfermedad cardiovascular y a las alteraciones metabólicas que condicionan dicha enfermedad (síndrome metabólico, resistencia a la insulina, hipertensión). Si una de estas alteraciones, como la hipertensión, ocurre durante el embarazo de una mujer nacida con bajo peso, las consecuencias metabólicas se pueden replicar en la siguiente generación. El hecho de que los cambios epigenéticos sean permanentes y que puedan tener efectos transgeneracionales subraya la necesidad de investigar más a fondo el origen perinatal de las enfermedades adultas.

Hasta el momento, apenas había proyectos de investigación con acceso a registros históricos con información detallada sobre el niño y la madre, lo que permitiría contrastar la hipótesis de programación fetal a lo largo del siglo XX. Sin embargo, este tipo de estudios es ahora factible, gracias al trabajo realizado por investigadores del CSIC durante la última década para desarrollar diversas bases de datos históricas de carácter longitudinal, tanto de la población de Madrid como de Andalucía.

Las trayectorias completas de las generaciones constituyen el objeto de estudio clásico de la demografía –en base a ellas se construyen los indicadores típicos de mortalidad, nupcialidad y fecundidad–. Tradicionalmente, las trayectorias generacionales se han abordado desde una perspectiva agregada, dada la dificultad de enlazar datos individuales de diversos registros. Pese a esa

limitación, la perspectiva longitudinal se lograba gracias a la prolongada continuidad y comparabilidad de la información contenida en los Censos y en el Registro Civil, continuidad poco frecuente en otro tipo de fuentes para las ciencias sociales, y cuyo triple encuadramiento temporal (periodo, edad, generación) constituye uno de los principales avances de las estadísticas oficiales modernas. Aproximadamente desde los años ochenta, este panorama se vio revolucionado por la aparición de nuevas fuentes longitudinales –con datos biográficos retrospectivos y también datos de panel con seguimiento en sucesivas oleadas–, y con nuevas metodologías de análisis de datos biográficos, incluso los censurados por salida de observación. Más recientemente, la posibilidad de enlazar datos de stock individuales (censales o padronales) con los recogidos en registros previos o posteriores de acontecimientos muy diversos (demográficos, pero también educativos, laborales, de renta, sanitarios...) ha abierto enormes posibilidades para la estadística demográfica y social. Una buena prueba de ello es que se están sustituyendo los censos de población –elaborados cada década durante más de dos siglos– por una actualización constante de las cifras de población a partir de los registros de entrada y salida, migratorios o por movimiento vegetativo.

Demografía & COVID-19

La actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha impulsado una colaboración inédita de múltiples disciplinas no siempre cercanas. Investigadoras e investigadores de diferentes áreas científicas se han puesto a disposición de la sociedad, a través de iniciativas propias y de sus instituciones, para afrontar la grave crisis sanitaria y contribuir con la toma de decisiones ante la pandemia.

La demografía y las ciencias de la población poseen muchas herramientas que pueden contribuir a explicar el comportamiento de una pandemia, proyectar sus tendencias y estudiar los efectos que genera. Además de tener entre sus temas clásicos la salud y la mortalidad, la demografía cuenta con un valioso arsenal metodológico para modelar la dinámica poblacional a nivel global, realizar comparaciones estandarizadas de múltiples países y proyectar plausibles escenarios futuros. Asimismo, cuenta con una ubicación idónea en el mapa científico para estudiar la evolución de la pandemia, al estar situada en la intersección entre lo biológico y lo social, las “dos almas” de la demografía, según la conocida formulación de Massimo Livi-Bacci.

Además de la estructura por edades de la población, la densidad poblacional, el contacto cotidiano entre generaciones o las modalidades de hogar, los flujos

de movilidad de la población a lo largo del planeta y en su entorno más cercano –todos ellos objeto de estudio tradicionales de la investigación demográfica– son clave para comprender las singularidades de esta pandemia respecto a fenómenos similares del pasado. Sabemos, por ejemplo, que la movilidad humana ha tenido y seguirá teniendo un rol crucial en la evolución de la pandemia. La reducción drástica de la movilidad durante el periodo decretado de confinamiento en nuestros hogares ha permitido frenar el aumento exponencial de contagios. Una vez relajado el confinamiento, la evolución de la epidemia hasta que exista una vacuna dependerá en gran medida del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social.

Los datos sociodemográficos y de salud de la población son básicos para el diseño de estos modelos. La colaboración entre áreas del CSIC dentro de la Plataforma Salud Global y la Plataforma Movilidad 2030 está permitiendo desarrollar proyectos de frontera al mismo nivel que se abordan en otros países, combinando grupos de ciencias de la computación y grupos especialistas en demografía y estudios de la población.

Por otro lado, los datos compilados a raíz de la actual pandemia de COVID-19 proporcionarán, sin duda, una oportunidad excepcional a futuros investigadores para contrastar el impacto de la pandemia actual en muchos ámbitos ya examinados por quienes se dedican a la investigación de pandemias en el pasado. Es inaplazable que se pongan en marcha estudios longitudinales de seguimiento de la población. Será importante analizar los efectos de la pandemia según la exposición a la misma durante la vida embrionaria, el crecimiento fetal, la primera infancia y la niñez. Además, la crisis económica que seguirá a las (posiblemente) múltiples oleadas de la epidemia de COVID-19 seguramente amplificará las consecuencias adversas para la salud.

Una línea de investigación puede ser el estudio longitudinal de población infantil. Con una muestra nacional de mujeres embarazadas durante la pandemia, de mujeres que dieron a luz durante la pandemia y de mujeres con hijos de 0 a 4 años, con registros hospitalarios que contengan información sobre el preembarazo, el embarazo y el parto, con muestras de sangre completas de madres y niño/as, y con un protocolo para hacer el seguimiento durante un periodo de tiempo suficientemente amplio –por ejemplo, hasta que se detenga el crecimiento físico–, se incluiría también información demográfica y socio-económica de la familia, además de los biomarcadores de adultos y niños (incluyendo, por supuesto, haber contraído o no el virus y haber estado expuesto al mismo). Todos estos datos vinculados permitirían investigar

adecuadamente las secuelas de la pandemia en numerosos ámbitos cruciales del bienestar infantil, desde los marcadores de crecimiento físico hasta los resultados cognitivos, el rendimiento escolar, la exposición a comportamientos de riesgo (dieta deficiente, falta de ejercicio, iniciación al tabaquismo...). Si además el estudio de menores conduce a la creación de un gran banco de datos con identificadores, será posible la formulación de estudios adicionales para investigar el impacto a medio y largo plazo de la pandemia en las diferentes etapas del curso de vida de la “generación COVID-19”.

En línea con esa propuesta, hay también en marcha la posibilidad de hacer seguimiento de cohortes vinculadas a encuestas de salud, a registros sociosanitarios y a datos sociodemográficos que, con previa anonimización, permitan hacer un seguimiento de las condiciones de salud de la población española, midiendo los efectos a corto, medio y largo plazo de la pandemia. Desde un punto de vista más focalizado, se están realizando ya estudios de subgrupos de población, como es el caso de personas viviendo en residencias colectivas, donde el acceso a datos únicos anonimizados permitirá realizar estudios multidisciplinares de la salud de las personas más frágiles y más afectadas durante la pandemia. Estos trabajos, que se plantean dentro de la Plataforma Salud Global, darán paso a líneas de trabajo sobre biodemografía y genómica social con una aproximación longitudinal, no abordadas hasta el momento con la suficiente profundidad con la que se podrá hacer ahora gracias a la colaboración entre grupos de investigación de diferentes áreas de conocimiento.

Reto 5. Creciente volumen, complejidad y diversidad de los flujos migratorios

De acuerdo con los datos proporcionados por la División de Población de las Naciones Unidas, el número de migrantes internacionales alcanzó un número (estimado) que se aproximaba a los 272 millones de personas en 2019, representando el 3,5% de la población mundial. En cuanto a la distribución por sexo y edad, el 47,9% del total eran mujeres, el 14% tenía una edad inferior a los 20 años y el 74% se encontraba entre los 20 y los 64 años.

Respecto a la distribución por regiones del mundo, Europa alberga el mayor número de migrantes internacionales, seguida por Norteamérica, la zona norte del continente africano y la zona occidental de Asia. Estas dos últimas regiones son las que han experimentado un ritmo de crecimiento más acelerado (junto con los países del África subsahariana) en los últimos años. Los migrantes internacionales muestran además una pauta de relativa concentración en su asentamiento territorial, ya que alrededor de dos tercios

residen en solo 20 países. Esta pauta de concentración se observa también si atendemos a los países de origen, ya que un tercio de todos los migrantes proceden de solo 10 países.

A este número se une el volumen internacional de la denominada migración forzosa (*forcibly displaced people*) que alcanzaba en 2019, según los datos de ACNUR, algo menos de 71 millones de personas (70,8 millones), de los cuáles cerca de 29 millones y medio eran refugiados y solicitantes de asilo y algo más de 40 millones desplazados internos. No debemos olvidar que, a pesar de su distinta denominación y estatuto legal, a efectos demográficos este tipo de migración debe ser incorporada al volumen total de la movilidad internacional.

Los movimientos migratorios son uno de los procesos demográficos de más difícil cuantificación. Esta situación se debe no solo a la mala calidad o a la ausencia de registros en muchos países del mundo, sino a la naturaleza del propio fenómeno. Frente a la idea más ortodoxa de que los flujos migratorios suponían un desplazamiento territorial de larga distancia y con vocación de permanencia, la realidad actual muestra la enorme complejidad y diversidad de la movilidad internacional en términos de las variables espacio/tiempo, incluyendo formas de migración pendular, circular, estacional, re-emigración, retorno o reasentamiento que han dificultado, adicionalmente, su registro y, por tanto, su cuantificación. Asimismo, los avances en la investigación han permitido observar cambios significativos en los determinantes de la movilidad internacional, creando nuevos conceptos y “tipologías migratorias” que han sido incorporados recientemente en los sistemas de clasificación y registro (como en el caso, por ejemplo, de los denominados migrantes climáticos o medioambientales).

Cinco son los ejes principales de la investigación sobre los procesos migratorios, que incluyen diversas líneas de indagación y estudio y que se centran en los más destacados retos migratorios de las próximas dos décadas, así como en sus impactos derivados.

1. Análisis de flujos y tipos de movilidad

- Medición y caracterización de la movilidad internacional. Migraciones y (de)crecimiento demográfico.
- Estudio de los determinantes (causales) de la migración internacional.
- Análisis de patrones migratorios. Estructura y cambio de los sistemas migratorios.

- Dinámicas internas de movilidad en sistemas migratorios (ejemplo: migraciones intra-europeas y “ciudadanos móviles”) y migraciones regionales. Nuevos tipos de migración internacional. Migraciones de retiro.
 - Emigración e impactos en países de origen.
2. Interacciones entre flujos migratorios y gestión migratoria
- Regulación laboral. Regulación de las migraciones de alta cualificación. Regulación de la migración estacional y circular. Programas migratorios.
 - Gestión fronteriza.
 - Regímenes de protección internacional.
3. Demografía de las migraciones
- Fecundidad y dinámicas familiares de la población inmigrante. Reagrupación familiar. Familias mixtas o interculturales. Condiciones de salud, envejecimiento y pautas de mortalidad de las poblaciones inmigrantes. Dinámicas demográficas en países de origen y emigración.
 - Segunda generación.
 - Adquisición de la nacionalidad y doble ciudadanía.
4. Impactos económicos, sociales y políticos de las migraciones
- Dinámicas migratorias y condiciones del mercado de trabajo. Incorporación migrante al mercado de trabajo autóctono.
 - Migración y desigualdad. Migraciones y estratificación social. Segunda generación y movilidad social.
 - Migración y Estado del Bienestar. Condiciones del acceso a servicios sociales, sanitarios y educativos.
 - Reacciones de la opinión pública ante la inmigración. Racismo y xenofobia. Discriminación laboral y social.
 - Integración estructural y social de la población inmigrante. Cohesión social.
 - Migración y participación política.
 - Migración y desarrollo. Desigualdades Norte-Sur y migraciones. Migración y remesas.
5. Gestión pública de la diversidad
- Gestión pública de la diversidad lingüística, cultural y religiosa.

En cuanto a los retos futuros de la investigación sobre los procesos migratorios encontramos algunos de corte más conceptual y otros de carácter empírico. En relación con los primeros, la cuestión de mayor envergadura en la literatura

de los estudios migratorios es la revisión actual de los conceptos y la distinción demasiada rígida entre migración voluntaria y migración forzosa a favor de un nuevo etiquetado cuyo término quizás más exitoso es el de flujos mixtos.

En términos de fuentes, la mejora de los datos (tanto de flujo como de stock) existentes y/o de su accesibilidad, así como de su robustez (detallados, desagregados, potencialmente comparables), seguirá suponiendo un reto en el futuro próximo. Otros elementos importantes son la necesidad de desarrollar mecanismos de registro más allá de los realizados en los países receptores y, por tanto, a lo largo de todo el proceso migratorio (origen, tránsito, retornos, etc.) o la mejora de la producción de datos sobre inmigración irregular. Por último, hay que señalar las oportunidades que ofrece en el estudio de la movilidad internacional los datos generados en redes sociales y los cada vez más frecuentes datos producidos por organizaciones privadas (ej. índice Gallup sobre migración potencial neta).

Todavía es pronto para evaluar la repercusión que tendrá la pandemia de la COVID-19 en los flujos migratorios. En el momento presente, con el cierre de fronteras a nivel mundial para mitigar la propagación del virus, la movilidad internacional se encuentra en suspenso y un número considerable de personas se ha visto atrapada en lugares de tránsito. Merece especial mención la situación de los campos de refugiados ubicados en Europa y en el resto del mundo, donde no es posible adoptar las medidas más básicas para prevenir el contagio. En el futuro próximo, es posible que esta pandemia refuerce los discursos de cierre de fronteras y políticas restrictivas de la migración. Pero también es posible que muchas sociedades reconozcan la importante labor que desempeña la población inmigrante en la prestación de servicios básicos y de cuidados. En todo caso, la crisis económica a nivel mundial que seguirá a la pandemia será un factor adicional para que las personas migren y busquen mejores condiciones de vida.

Reto 6. La despoblación rural, la España ‘vacía’: un desafío socio-territorial y económico

La despoblación rural no es un tema nuevo, pero ha tomado cierta relevancia en los últimos años, a la sombra también del fenómeno del envejecimiento, situándose ambos como pilares para abordar el “reto demográfico”. Pero los retos derivados del cambio demográfico son complejos e incluyen dimensiones no sólo demográficas, también territoriales, sociales, económicas, institucionales y políticas, por lo que la investigación ha de dirigirse a encontrar respuestas integrales de todas estas dimensiones.

En primer lugar, la despoblación rural es un desafío a escala europea, yendo de la mano de la progresiva pérdida de peso demográfico del continente, de un lado, y, de otro, de los flujos migratorios procedentes de terceros países, pero también internos, entre el este y el oeste, sur-norte y desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. En segundo lugar, y como consecuencia, la despoblación rural pone al descubierto los contrastes en el modelo territorial, con la concentración en áreas urbanas y metropolitanas que absorberían la inversión, el empleo y la población, frente a la desertización rural. El problema de fondo de todo este complejo asunto radica en el atractivo que sigue teniendo la vida en los núcleos urbanos, atractivo que siempre ha existido, pero que se acentúa con el actual modelo de desarrollo económico basado en la producción y el consumo, y con el sistema de valores asociados al mismo.

Para España, las consecuencias se han ido acumulando desde los años 60 del siglo XX, con un panorama particularmente preocupante en las Comunidades Autónomas del interior de la Península Ibérica, y con especial incidencia en las provincias de Soria, Teruel y Cuenca. A esta evolución intensa hacia la despoblación, las políticas en materia de infraestructuras, industrial, forestal o hidráulica han venido a sumar la desarticulación, y a veces la eliminación, de comunidades rurales de difícil existencia. Actualmente, la despoblación contribuye a desequilibrios territoriales, al tiempo que favorece la disminución de la cohesión territorial, social y política. La tendencia a la despoblación de algunas áreas conlleva la concentración en otras, por ello, al problema a medio o largo plazo de ese vaciamiento de algunos territorios rurales, se une otro sobre cómo gestionar las macropoblaciones y la prestación de servicios a ellas asociada.

En los últimos años, este fenómeno del despoblamiento se ha convertido en una emergencia ciudadana, social y política, llevándose a cabo iniciativas, planes, programas y estrategias que, sin embargo, no parecen haber frenado esta tendencia. Los expertos consultados coinciden en destacar que las políticas basadas en “soluciones” sectoriales, como centrarse sólo en los problemas agrarios, no son la respuesta y que la investigación habría de dirigirse hacia aspectos relativos a la definición del modelo territorial y la ordenación del territorio, la ruptura de la dicotomía rural-urbano y su articulación, la sostenibilidad, los nuevos usos del espacio rural, el empleo de recursos infrautilizados, como el factor tierra (“tierras sin gente vs. gente sin tierras”), la importancia del capital social en el desarrollo rural, la accesibilidad a los servicios básicos para las personas de todas las edades (educación, sanidad, servicios sociales,

dependencia –cuidados–) pero también para las empresas, incluyendo infraestructuras para la movilidad, la reducción de la brecha digital, la formación y capacitación del mercado laboral (en particular, de la población joven y la población femenina), y la diversificación económica hacia sectores diferentes al agrario, como la industria alimentaria o el turismo.

Esta miríada de componentes implicados en el fenómeno de la despoblación rural requiere, por tanto, de enfoques holísticos y aproximaciones multidisciplinarias. Además, otro aspecto a considerar en España, tiene que ver con la heterogeneidad y diversidad del medio rural, lo que exige la utilización de escalas de medida grandes, por ejemplo, la comarca, siendo más adecuada para el análisis y resolución de los problemas, tanto locales como para su proyección global.

La actual pandemia de COVID-19 ha puesto en cuestión la sostenibilidad de las ciudades muy densas, amenazadas –como en siglos pasados– por el peligro de expansión exponencial de enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo, la pandemia ha provocado el mayor experimento de teletrabajo de la historia, abriendo la puerta a nuevos escenarios post-pandemia en los que trabajo en remoto cobre mucha más fuerza que antes. Si se consolida el teletrabajo en algunos sectores laborales y se desarrolla la economía en red, la proximidad con el lugar de trabajo ya no será tan decisiva a la hora de escoger dónde vivir. Esta posible deslocalización residencial –y también empresarial– no solo reduciría costes de vivienda, infraestructuras y medioambientales, sino que incrementaría la conexión humana y virtual entre la España “vacía” y la urbes hiperdensificadas.

Reto 7. Adaptación a la revolución digital de datos con nuevos enfoques y metodologías

No hay duda de que la digitalización progresiva del mundo tiene un impacto innovador en todos los ámbitos de la vida de las personas. Desde principios del siglo XXI, la tecnología digital ha impregnado todos los aspectos de la sociedad moderna, convirtiéndose en una parte integral de nuestra vida cotidiana. Esto brinda grandes oportunidades y nuevos desafíos para la comunidad investigadora de los procesos demográficos en un contexto siempre cambiante y revolucionario, en el sentido de que implica cambios en los paradigmas establecidos y la aplicación de enfoques de estudio completamente nuevos. No obstante, no son solo los científicos quienes se enfrentan al reto de cómo adaptarse a estas nuevas realidades de la manera más eficiente. Muchos organismos gubernamentales en los países desarrollados están avanzando decididamente hacia nuevos sistemas estadísticos, abandonando operaciones estadísticas costosas y haciendo un mayor uso de datos administrativos

recopilados de manera rutinaria por los departamentos y agencias estatales. Por otro lado, la industria misma (por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, energía o transporte) ha comenzado a darse cuenta de la necesidad de aprovechar la gran cantidad de datos que poseen para realizar el análisis de la población, principal productor y principal consumidor de estos datos, lo que ha conducido a un rápido desarrollo de los departamentos de ciencia de los datos como parte de las iniciativas de I + D + i.

Existe una gran cantidad de proyectos en curso que muestran el interés mutuo, tanto desde el mundo académico como desde la empresa privada, y que implican una colaboración exitosa entre estos dos ámbitos. Entre dichos proyectos destacan, por ejemplo, el uso de datos de teléfonos móviles para estadísticas de movilidad urbana y turística, o la aplicación de Big Data para estadísticas de transporte e indicadores del mercado laboral. Dentro de los institutos de estadística y el mundo académico existe un creciente interés en la reutilización y vinculación de datos administrativos de fuentes muy diferentes y la creación de registros de población o registros longitudinales largos basados en fuentes históricas digitalizadas. Buenos ejemplos de estas iniciativas son el inventario del proyecto Big Data de Naciones Unidas, el proyecto Digitising Scotland, o el Proyecto de Infraestructura Longitudinal del Censo (CLIP). En España, la Base de Datos Demográfica Longitudinal de Andalucía, creada en colaboración con el CSIC, o el próximo Censo de población 2021, que será basado enteramente en el enlace de registros administrativos y el uso del Big Data, son también excelentes ejemplos. Estas nuevas iniciativas unen a diferentes áreas de investigación, desde la informática y las ciencias de la vida hasta las humanidades digitales y las ciencias sociales.

Estos nuevos datos pueden verse como una verdadera mina de oro para el campo académico, la industria y el gobierno, porque proporcionarán una visión más profunda, más rica y oportuna de los cambios demográficos y sociales, si se abordan con las herramientas y métodos adecuados. Basándose en las experiencias acumuladas y las lecciones aprendidas en los últimos 20 años, parece ser factible construir un marco exhaustivo para estudiar los procesos de fecundidad, envejecimiento, mortalidad y migración a través del Big Data generado continuamente, involucrando los últimos logros tecnológicos y metodológicos, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

Para posibilitar evidencias empíricas concluyentes es también indispensable implementar aproximaciones longitudinales sobre diversos aspectos de la evolución de la población, que van desde el seguimiento de cohortes de

nacimientos, para medir los efectos de las condiciones en la primera infancia sobre la salud a lo largo del curso de vida; o para evaluar los efectos de cambios bruscos socioeconómicos, producidos por crisis económicas o pandemias como la que estamos viviendo actualmente, sobre la fecundidad, la salud, la vejez o la mortalidad. Las bases de datos longitudinales y la perspectiva de curso de vida permiten comprender mejor la interrelación entre los factores individuales, generacionales, económicos, sociales, ambientales y temporales. España es el único país de nuestro entorno sociocultural que no dispone de amplios estudios longitudinales para hacer un seguimiento detallado de las principales dinámicas demográficas, como la formación de pareja, la fecundidad, la migración, la salud, la discapacidad o el envejecimiento.

Junto con ello, se hace imprescindible la perspectiva geográfica a distintas escalas (macro, meso y micro) para la investigación de las inequidades socio-espaciales, la distribución y accesibilidad a los servicios, la influencia del lugar de nacimiento y de residencia en la salud física y mental de los individuos, o la promoción de entornos comunitarios amigables con todas las edades. Los Sistemas de Información Geográfica y las Infraestructuras de Datos Espaciales serán de gran utilidad para explorar la influencia del entorno en múltiples indicadores demográficos, como por ejemplo la presencia de dotaciones educativas o de cuidado a la primera infancia en la evolución de la fecundidad, la cercanía a parques o focos de contaminación en la salud mental o física, o para aspectos más concretos como la planificación gerontológica de equipamientos y servicios destinados a las personas mayores. También será de gran utilidad la incorporación de indicadores medioambientales (clima, polución) en investigaciones sobre la influencia de los ambientes en la longevidad, la esperanza de vida sin enfermedades y la calidad de vida en la vejez, o igualmente, el uso de drones para comprender el comportamiento espacial de los grupos de riesgo en los espacios públicos, ante futuras emergencias sanitarias y climáticas. Otras tecnologías, como la realidad virtual, pueden brindar también nuevas herramientas en el estudio de las demencias y en el diseño de ambientes amigables con las personas mayores.

Desde otro enfoque, es necesario fomentar también los métodos cualitativos para complementar la aproximación cuantitativa con la profundidad y riqueza de las opiniones de las personas, lo que ayudará a la comprensión de los fenómenos y la explicación de los procesos, y promoverá la participación de la ciudadanía en la investigación. En particular, el envejecimiento es un fenómeno que afecta a toda la sociedad, por lo que hay que dar voz a todos los

individuos, no sólo a la población ya envejecida, a fin de conocer las trayectorias vitales también mediante técnicas longitudinales aplicadas al análisis cualitativo. Estos métodos serán también de gran interés en su aplicación en otros grupos, como mujeres y hombres en edad fértil, para comprender mejor sus decisiones reproductivas, o migrantes, para profundizar en sus decisiones y trayectorias migratorias.

Son muy importantes, asimismo, las revisiones sistemáticas (siguiendo, por ejemplo, procedimientos internacionales como Cochrane), con o sin meta-análisis, sobre los diversos aspectos relacionados con los fenómenos y procesos demográficos a fin de consolidar los conocimientos adquiridos.

La investigación sobre población requiere de enfoques interdisciplinares, multidisciplinarios y transdisciplinares. Para ello, es prioritaria la creación de grupos y centros de investigación formados por investigadores de las ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, ciencias de datos e ingenierías, así como impulsar redes de investigación amplias, con el objetivo de intercambiar conocimientos, compartir recursos materiales y humanos, y desarrollar proyectos de investigación a escala internacional. Asimismo, cada vez está más presente a escala internacional la imbricación de áreas como la demografía, la epidemiología, la epigenética, la biomedicina y el Big Data. Ejemplo de ello es la creación de centros de biodemografía y de estudios doctorales, como el creado por el Max Planck, combinando estas áreas, siguiendo el ejemplo del proyecto Longpop, un proyecto H2020 ITN coordinado desde el CSIC y que es parte central del proyecto ERC Advanced ECHO, que también se coordina dentro del CSIC. El apoyo europeo en financiación a estas líneas de trabajo es un buen indicador de líneas de actuación a potenciar en el futuro. Especializaciones como la demografía evolutiva, la demografía estadística, la geodemografía y la epidemiología demográfica, sobre todo para el seguimiento, la modelización de la salud y de los riesgos que la acechan, desde malos hábitos de salud hasta la incidencia de enfermedades infecciosas, han mostrado en la actualidad, en su más cruda realidad, la necesidad de este tipo de perfiles.

Dentro de la estrategia para el desarrollo sostenible y la adaptación del campo a la revolución digital del siglo XXI, creemos que en el futuro cercano será inevitable para los demógrafos, los estudiosos de la población y los científicos sociales en general, centrarse en construir un puente metodológico y teórico entre la comprensión tradicional de los procesos demográficos/poblacionales y la nueva realidad, con el objetivo de:

- Comprender el impacto más amplio de la revolución digital en la población en diferentes estratos demográficos utilizando datos sobre la penetración de Internet y la cobertura de banda ancha.
- Crear nuevas medidas de diversidad e integración cultural en las sociedades modernas con fines de predicción y pronóstico utilizando las plataformas de redes sociales.
- Integrar una gama más amplia de fuentes de Big Data en múltiples esferas (medio ambiente, infraestructuras, economía, vivienda, comunicaciones) para estudiar el presente y el futuro sostenible de las poblaciones urbanas y rurales.

Finalmente, en el proceso de investigación hay que involucrar a toda la sociedad, no sólo para recabar información sino también para devolver (transferencia social) la información analizada y elaborada al objeto de diseñar y aplicar políticas públicas basadas en el conocimiento, y de reorientar un modo de vida en positivo para alcanzar una buena salud, una buena vejez, y una calidad de vida óptima lo largo de todo el curso de vida.

RESUMEN

La migración internacional es un fenómeno global y altamente complejo, un tema polarizado y con carga ideológica de enorme relevancia simbólica y política, un fenómeno que requiere un enfoque interdisciplinar desde una perspectiva tanto descriptiva como normativa. Los flujos migratorios han aumentado y son causados progresivamente por conflictos armados o el cambio climático, así como por agudas desigualdades globales. Dado que las causas e implicaciones de la migración exceden los límites estatales, un estudio integral necesita abandonar el “nacionalismo metodológico”. La integración económica y social de la población migrante es un desafío complejo, pero las oportunidades que abre también son múltiples: la migración impulsa el crecimiento económico, conecta diferentes culturas y contribuye al desarrollo internacional.

DESAFÍO E

MIGRACIONES INTERNACIONALES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL

CoordinadoresJuan Carlos Velasco Arroyo
(IFS, CSIC)Amparo González Ferrer
(IEGD, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

Pese a la intensidad de los procesos de globalización experimentados en las últimas tres décadas y la creciente integración de países y economías, las migraciones internacionales se mantienen en unas magnitudes relativamente moderadas: un 3,5% de la población mundial vive en un país diferente de aquel en que nació, unos 272 millones de personas (UN DESA 2019). Las migraciones de finales del siglo XIX y principios del XX fueron, en proporción a la población de la época, casi el doble que las actuales: el 6% de los habitantes del planeta. De hecho, algunos autores han destacado la necesidad de explicar la inmovilidad antes que la movilidad, habida cuenta de los múltiples factores de empuje y atracción que, en un mundo globalizado, definen el contexto cotidiano de cientos de millones de personas. No obstante, es cierto que en las últimas décadas se ha registrado una cierta inversión de la trayectoria y, consiguientemente, una cierta concentración de los flujos migratorios – incluyendo los protagonizados por los refugiados que huyen de zonas de conflicto – hacia los países desarrollados. Desde el inicio del tercer milenio, los migrantes internacionales se han incrementado en un 50%, unos 99 millones en términos absolutos. Entre las múltiples diferencias, cabe destacar que, si durante la primera globalización (1865-1910), Europa era el continente de procedencia de la mayoría de los emigrantes, ahora es la primera región de destino.

Así como las migraciones europeas de la primera globalización se dirigieron hacia las colonias y ex colonias ultramarinas, las corrientes migratorias mundiales

contemporáneas difícilmente se pueden desvincular de las grandes disparidades entre el *sur global* y el *norte global*, tomados estos términos no en el sentido de referencias geográficas, sino de configuraciones político-sociales que cristalizan en formidables brechas en materia de prosperidad económica, condiciones sociales, derechos humanos, salud y seguridad. Estas disparidades están conectadas a su vez con la asincronía en la transición demográfica que se registra en las distintas regiones del planeta: baja natalidad, mayor esperanza de vida y envejecimiento creciente en el norte global; natalidad media-alta, menor esperanza de vida y poblaciones muy jóvenes en el sur global.

2. PUNTOS CLAVE DEL DESAFÍO

En el complejo contexto socio-político y socio-económico de alcance genuinamente global al que se ha hecho mención en el apartado anterior, se detectan múltiples dinámicas y conflictos vinculados con los procesos migratorios internacionales. Sin ánimo de exhaustividad, cabe destacar algunos que definen y, sobre todo, definirán las políticas de cada Estado tanto en relación con los demás Estados como en su propio ámbito interno, a saber:

2.1. Conflictos bélicos y refugiados: una constante histórica que irá en aumento

El cambio sustantivo que se ha producido en la forma que adquieren los conflictos bélicos en la actualidad va a conducir a un aumento de la llegada de solicitantes de asilo a los países más ricos. Esto produce ya, y va a seguir produciendo, una desestabilización aún mayor de un modelo migratorio basado en la distinción entre migrantes económicos, por un lado, y desplazados por la violencia bélica y política, por otro, así como una reconfiguración del régimen migratorio y de refugio de consecuencias políticas evidentes. Estamos asistiendo a una reconfiguración decisiva de la autocomprensión política de las democracias occidentales de postguerra.

Las crisis humanitarias provocadas por los desplazamientos masivos de personas que intentan escapar de situaciones de violencia y destrucción extremas no son excepcionales en el último siglo y medio. El encadenamiento de sucesivas crisis de este tipo en las fronteras de Europa no se ha interrumpido en las últimas décadas, aunque las causas desencadenantes hayan ido variando, desde la guerra de los Balcanes a la guerra en Siria, pasando por la guerra de Afganistán, la guerra de Irak, los diferentes conflictos en el África subsahariana y las llamadas “primaveras árabes”. Tampoco los efectos letales del blindaje de las

fronteras representan una novedad. Los debates y negociaciones entre países receptores y países de origen y tránsito también han marcado la agenda de todas estas crisis, con un progresivo deterioro del marco de derechos fijados por los convenios internacionales. Una de las cuestiones que resultan verdaderamente llamativas en este proceso es que los mismos gobiernos que apelaban a la distinción entre “migración económica” y “asilo” para rechazar la entrada de los llamados inmigrantes “irregulares”, terminan aplicando el término “migrantes” para referirse a los demandantes de asilo que huyen de situaciones de conflicto bélico y de persecución política. A lo que han contribuido las sucesivas crisis humanitarias ha sido sobre todo a cambiar el régimen migratorio. Este régimen se ha caracterizado de manera general por un amurallamiento de Europa y Estados Unidos (aunque no sólo) y una creciente supeditación de los derechos humanos fijados jurídicamente en la legislación de sus Estados a medidas policiales y militares de rechazo de los inmigrantes.

Desafíos. Interconectar la naturaleza cada vez más mixta de los flujos migratorios, en los que resulta difícil separar nítidamente entre quien es migrante por razones económicas o familiares y quien es merecedor del estatuto de refugiado o alguna otra forma subsidiaria de protección internacional, con las políticas de admisión y el compromiso de las democracias liberales con los derechos humanos. En esta línea, sería preciso la articulación de políticas de admisión de tal manera que permitan canales diferenciados de acceso que respondan a la creciente diversidad de los flujos migratorios (ver apartado 2.3.), garantizando su verdadera efectividad como herramientas para asegurar una migración legal, ordenada y segura, como establece el *Pacto Global de las Migraciones* (ver apartado 2.10.).

2.2. Movilidad humana y adaptación al cambio ambiental

Los actuales flujos de personas no parece que vayan a detenerse, incluso pueden incrementarse notablemente, no sólo porque las desigualdades globales se han acentuado en las últimas décadas y porque han estallado nuevos focos de conflicto bélico, sino porque a todo ello se ha añadido una nueva causa de movilidad forzosa: el cambio climático antropogénico y las catástrofes ambientales derivadas de él. Según los últimos informes y estudios sobre el tema, el cambio climático fue ya en 2018 la principal causa de los flujos migratorios. En un planeta cuya extensión se mantiene constante y cuyos territorios habitables disminuyen desde hace tiempo a causa, entre otros motivos, del cambio climático, el aumento predecible de la población mundial en las próximas décadas –más acentuado además en las regiones menos prósperas– empujará a muchas personas a abandonar su propio país de origen. En algunas islas del Pacífico (p.ej., Kiribati o Tuvalu) es

donde los efectos se tornan más visibles, hasta el punto de que se están volviendo inhabitables y las autoridades del país están buscando ya lugares de otros Estados en donde reubicar la población. Estos casos, y otros como los de ciertas zonas costeras de Honduras, Myanmar, Dominica y algunas islas caribeñas de Panamá, que previsiblemente pronto quedarán bajo el mar, aunque afectan de momento a poblaciones relativamente reducidas, señalan una tendencia de enorme riesgo. Hay que pensar también en los efectos de la desertificación en amplias zonas de África, o en los huracanes e inundaciones en varias zonas de América y del sudeste asiático. En efecto, el continuo crecimiento del número de inmigrantes provenientes del deterioro climático (sequías, desertificación, subida del nivel del mar, salinización de los acuíferos, etc.) se encuentra ya entre los nuevos rasgos que caracterizan la movilidad a escala planetaria, junto con el incremento del número de personas desplazadas por las desigualdades globales y los conflictos bélicos que buscan refugio en otros países.

Por todas estas razones, la previsión no es que los flujos migratorios vayan a disminuir, sino más bien que puedan incrementarse considerablemente por los efectos entrecruzados de las desigualdades socioeconómicas, los diferenciales demográficos, los conflictos bélicos y las catástrofes ambientales. En todo caso, lo que se observa es una multiplicación y diversificación de los circuitos de desplazamiento: sur-norte, sur-sur, norte-norte, campo-ciudad, etc. Conviene señalar que la migración de los campos a las ciudades en el interior de cada país es un fenómeno global cada vez más acelerado, y que las migraciones internacionales también suelen tener como destino preferente las ciudades, de modo que son estas las que han de afrontar cada vez más los problemas derivados de la diversificación étnica y nacional de sus residentes.

Desafíos. La regulación del derecho de asilo provocado por el cambio climático. Las poderosas razones normativas que asisten a las personas que huyen de la violencia o de la persecución (los motivos contemplados por la *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados* de 1951) para obtener refugio son en el fondo completamente equiparables a las que pueden aducir quienes se encuentran en una situación de riesgo real de daño irreparable para su vida y dignidad. Éste sería el caso, entre otros, de aquellos quienes huyen no tanto de guerras en el sentido tradicional como de violencias estructurales o de aquellas otras personas cuya vida esté en riesgo por motivos medioambientales. El *Comité de Derechos Humanos* de la ONU ha abierto recientemente (en enero 2020) la puerta a reconocer que el derecho internacional de asilo se pueda aplicar a los casos, cada vez más frecuentes, de desplazamientos provocados por desastres ambientales. Por otro lado, los debates y desacuerdos sobre la magnitud de los

desplazamientos causados directa y exclusivamente por el cambio climático son aún importantes y, por tanto, la fuerza de la relación causal entre cambio climático y flujos migratorios hacia los países desarrollados sigue abierta y será un ámbito de investigación creciente en los próximos años.

2.3. Transformación, diversificación y feminización de los flujos migratorios

La globalización ha hecho aún más evidente que todos los lugares están vinculados por una compleja red de conexiones, capaces de generar tanto movilidades intensas como inmovilidades y desconexión. Mientras que la inmensa mayoría de la población mundial continúa viviendo toda su vida en el mismo país en el que nació - a menudo incluso en la misma ciudad-, entre quienes participan en algún tipo de desplazamiento, especialmente si este implica el cruce de fronteras estatales, cada vez resulta más habitual que el número medio de desplazamientos a lo largo de la vida sea superior a uno. Hay migraciones de ida y vuelta, repetidas, estacionales, circulares, etc. Los desplazamientos de menos de un año escapan aún a nuestros sistemas de medida, como también lo hacen las trayectorias migratorias complejas, o incluso el simple retorno, que continúa siendo el hermano menor de los estudios sobre migración internacional, en muchos casos por la dificultad para recabar información estadística fiable sobre él. Investigaciones recientes apuntan a la relevancia de este y su prevalencia como decisión voluntaria de los sujetos, muy superior a la de las expulsiones forzadas del territorio por residencia irregular o entrada no autorizada, para ilustrar la espontaneidad y fluidez de los movimientos migratorios, así como su papel crucial en desarmar el nacionalismo metodológico y el ‘eurocentrismo’ que predominan en los estudios migratorios.

Junto a la intensificación de la movilidad, se ha producido una diversificación del perfil de las personas participantes en los movimientos migratorios internacionales hacia los países desarrollados, con un claro incremento de la diversidad por origen (ver Intro), un aumento de la presencia de mujeres frente a otras épocas, pero también mayor diversificación por nivel de cualificación. De hecho, la feminización de ciertos flujos ha estado muy unida a la demanda en el sector de cuidados en países más ricos. Aproximadamente uno de cada cinco trabajadores domésticos es una migrante internacional. Y se estima que las trabajadoras domésticas migrantes en todo el mundo ascienden a 11,5 millones (ONU Mujeres 2016). Este nicho laboral se encuentra infravalorado, asociado con un estatus legal precario y desprovisto de protección. Curiosamente, algunos estudios recientes también indican que las mujeres predominan en los flujos de

migración más cualificada. El mercado de trabajo está estructuralmente segmentado, tanto en origen como en destino, según el diferencial de género. Las políticas de selección de empleo tienen diferentes efectos en mujeres y hombres migrantes, y generan una creciente polarización por nivel de cualificación que se solapa con el género en modos que no son necesariamente los asumidos. Precariedad y explotación laboral en el sector de los cuidados, que emplea a muchas mujeres migrantes, conllevan también precariedad legal y dificultad para la reagrupación familiar, con consecuencias sobre las formas de movilidad de los parientes, especialmente los hijos e hijas de estas mujeres, y sus posteriores trayectorias de integración en las sociedades receptoras (ver apartado 2.8. y 2.9.). En cambio, apenas conocemos las dinámicas familiares y de integración diferencial (si es el caso) de las mujeres migrantes que se insertan en el segmento más cualificado del mercado laboral.

Desafíos. Conocer más y mejor la composición y naturaleza de unos flujos migratorios cada vez más intensos y diversos requiere de nuevos instrumentos de aproximación a los mismos, que incluyan mejores infraestructuras de medida origen-destino, así como la incorporación de la movilidad de corto plazo y repetida a los instrumentos estadísticos tradicionales (censos y registros de población), con incorporación de nuevas herramientas procedentes del big data, la investigación por encuesta biográfica y las fuentes digitales. Por otra parte, la diversificación del perfil de las personas migrantes y, en especial, la presencia creciente de mujeres en todos sus segmentos pero especialmente en los más desfavorecidos y vulnerables requiere integrar de forma definitiva el género como una estructura social básica inductora de vulnerabilidades entrecruzadas dentro y a través de las fronteras nacionales. De ahí que el análisis de las migraciones internacionales desde la perspectiva de género haya de complementarse con la perspectiva de la *interseccionalidad*: ambas perspectivas se tornan cruciales para entender la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes y repensar no sólo las regulaciones y las praxis en materia de extranjería, sino también las categorías teóricas de la justicia social. La configuración de las fronteras nacionales y los movimientos a través de ellas, la intersección del género con la clase, el estado migratorio y la raza configuran la vulnerabilidad particular de mujeres migrantes que trabajan en el sector asistencial.

2.4. Crisis del régimen migratorio “neoliberal”

La crisis que afecta al modo de regulación liberal de la economía, hoy globalmente hegemónico, ha afectado también al régimen migratorio asociado

estructuralmente a dicho modo. La fase de profundos cambios de las políticas sociales y económicas que siguió a la crisis del sistema de producción industrial intensiva en mano de obra –fase que se ha dado en llamar “neoliberal” por su matriz ideológica– supuso la creación en Europa de un mercado único en abierta competencia dentro del mercado global mundial, algo que exigía el control del acceso al mercado de trabajo europeo bajo unas determinadas condiciones. Este conjunto de decisiones ha acabado afectando a las políticas migratorias de un modo especial: en pocos ámbitos resulta tan perceptible la supeditación de la lógica de los derechos a la lógica económica como en el migratorio. Las políticas migratorias –incluso aquellas más “generosas” de la fase posbélica en Europa– siempre han sido una variable dependiente de las políticas laborales y de regulación de los mercados de trabajo, así como de la evolución de las políticas públicas de lo que hemos convenido en llamar Estados del bienestar.

El régimen migratorio neoliberal –cuyo grado de implementación difiere significativamente de país a país– parece estar al servicio no sólo de la contención de los flujos y de un cierto blindaje de las fronteras, sino también de una “inclusión diferencial” de quienes no pueden ser expulsados, inclusión que supone una vulnerabilización de los migrantes en términos económicos, sociales y políticos. Casi todos los Estados desarrollados han realizado en los últimos tiempos un conjunto de reformas legislativas en política de inmigración presididas por lo que se ha llamado “lógica del regateo”, estableciendo una verdadera carrera de obstáculos con amenaza permanente de recaída en la “ilegalidad”, reduciendo las garantías y aumentando la discrecionalidad de las administraciones, promoviendo legalmente la discriminación laboral y la precariedad de los migrantes, etc. Ciertamente, el cambio de régimen migratorio ha estado asociado a la transformación de los mercados de trabajo, lo que, a su vez, explica en buena medida las nuevas estrategias de irregularización de la inmigración en Europa (con ciertas excepciones, como en España, en donde la regularización por arraigo se ha convertido en una vía razonablemente accesible). Esto tiene que ver con los procesos de movilización y fijación de la fuerza de trabajo bajo unas determinadas condiciones de explotación que se sirven de modificaciones en el dispositivo “frontera” entendido en un sentido amplio.

Desafíos. En contraposición al modelo migratorio “neoliberal”, se debería avanzar en dos líneas de intervención complementarias: por un lado, y con el fin de diseñar una política migratoria diferente en lo laboral, combinar procedimientos de regularización en origen con sistemas de regularización *ex post*; y, por otro, desarrollar instrumentos para el blindaje de los derechos civiles, políticos, sociales y, especialmente, laborales de los migrantes.

2.5. Percepción sesgada y politización del fenómeno migratorio

Incluso teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento, se puede afirmar que no se están produciendo cambios radicales en los procesos migratorios, sino tan sólo graduales, por ejemplo, en lo referente a la escala global de los mismos y en la multiplicación y diversificación de los circuitos de desplazamiento, así como de los perfiles de las personas migrantes. En cambio, se están registrando mutaciones considerables en el modo en que se percibe y se representa la migración, así como un aumento significativo de su instrumentalización política.

En los albores de este nuevo milenio, la hiperpolitización del tema migratorio constituye una evidencia difícil de obviar, especialmente en las sociedades más prósperas del planeta. Cada vez más las percepciones y las respuestas a la inmigración están influyendo en los resultados electorales. Nada hay más contagioso que el miedo. Las políticas de los países democráticos se están viendo cada vez más condicionadas por los discursos xenófobos hacia los migrantes y por la consiguiente proliferación de partidos y gobiernos de ultraderecha. Además, el endurecimiento de las políticas hacia los migrantes está generando una jerarquización de categorías sociales que socava un principio básico de las democracias (la igualdad de derechos), con lo que conlleva de amenaza para la cohesión social y la convivencia.

Los estudios de opinión pública vienen señalando desde hace algún tiempo que, en la calle, las actitudes hacia la inmigración varían en gran medida en función de dos elementos: 1) las representaciones sobre el número de inmigrantes que llegan (flujos) y se asientan (stocks) en el país de referencia; y 2) del grado de amenaza económica, cultural y de competencia por recursos escasos (como los servicios públicos) percibida en relación a la presencia de inmigrantes en el país y conceptualizada con frecuencia como “invasión” (o eufemismos equivalentes).

A partir sobre todo de los atentados del 11-S, y en Europa de una manera aún más acentuada a partir de la denominada «crisis de los refugiados» de 2015, las migraciones internacionales son percibidas por parte de la opinión pública de numerosos países –y éste es un dato que se ha de tener presente– como una «crisis migratoria» de magnitudes inmanejables. La opinión pública apenas tiene en cuenta que, a escala global, los flujos Sur-Sur tanto de refugiados como de migrantes económicos son, en realidad, más nutridos que los flujos Sur-Norte (UN DESA, 2017). Amparados en los temores y ansiedades que generan los actuales flujos migratorios, no son pocos los discursos políticos que utilizan el comprensible deseo de protección de la población para

promover un estado de prevención general ante la inmigración –especialmente ante la de carácter irregular– y endurecer las políticas migratorias. La obsesión por la seguridad, que desde el inicio del nuevo milenio ha colonizado tantos aspectos de la política contemporánea, tiene repercusiones directas también sobre la gestión de la movilidad humana.

A escala global, el discurso político dominante sobre inmigración en la última década ha sido el discurso del control, basado en los umbrales de tolerancia o, a veces, como ya se ha señalado, en la amenaza de invasión (con la consiguiente adopción de un lenguaje bélico de temor y de hostilidad, como si se tratase de defender el país literalmente por tierra, mar y aire frente a un enemigo exterior que pretende invadir y dominar el territorio). Revertir dicho discurso y sus efectos para dar cabida a un nuevo enfoque que permita, de manera real, una gestión de los flujos migratorios mucho más flexible y liberal requerirá de recursos para amortiguar efectos indeseables, así como una enorme inversión en pedagogía, comunicación y divulgación para reconducir percepciones negativas.

Desafíos. En la medida en que ha tenido éxito la construcción de un clima presidido por una representación negativa de la inmigración, pocos cometidos de las ciencias humanas y sociales son más urgentes –aunque no sea tarea fácil y pueda resultar insuficiente– que poner datos encima de la mesa e intentar proyectar claridad sobre una realidad multifacética que se ve empañada por percepciones subjetivas y relatos intersubjetivos de dudoso fundamento, pero dotados de indudable poder persuasivo. Estos atajos cognitivos han de ser desmontados para que se puedan abrir paso nuevos discursos más integradores. Para ello se precisa lo siguiente. En primer lugar, se requiere, entre otras medidas, acciones de pedagogía política que tenga también en cuenta los riesgos asociados al fenómeno migratorio en un contexto de hiperpolitización y *fake news*. El papel de los medios de comunicación y de las redes sociales digitales tiene que ser objeto no sólo de atento análisis, sino también de crítica. En segundo lugar, introducir el tema de las migraciones en los *currícula* educativos y formativos en los distintos niveles (desde la educación primaria, hasta los estudios universitarios, o la formación de los empleados de las administraciones públicas). El conocimiento histórico es fundamental para proteger a la ciudadanía de la manipulación populista. Es necesario recuperar información y divulgar desde la educación primaria, organizar actividades formativas. Las políticas migratorias efectivas viven a menudo presas de las percepciones (creadas) en gran parte de la población que vota a quien decide dichas políticas. Este es sin duda el reto de nuestro tiempo: ¿cómo cambiar de discurso?; ¿cómo mejorar el

conocimiento acerca de las ventajas derivadas de la movilidad a nivel global?; ¿cómo aprovechar las oportunidades que abren las formas de desplazamiento preferida por muchos migrantes y adaptar las políticas a la diversidad interna de la migración? No es sólo una cuestión de datos, ni todo es enmarcable como problema demográfico, sino también de categoría y conceptos.

2.6. Las migraciones en el vórtice de la confrontación política y de la amenaza autoritaria

La contracción de las políticas migratorias basadas en derechos universales va de la mano de una politización creciente del fenómeno migratorio en un contexto de emergencia del neo-autoritarismo. Vuelven a ponerse de actualidad dinámicas sociales, discursos públicos y actos de violencia racista asociados a dicho resurgir del autoritarismo. El fenómeno migratorio no dejará de adquirir presencia y relevancia en la escena política y se va a convertir en uno de los catalizadores de la confrontación. Por tanto, el debate migratorio es una punta de lanza en el debate sobre el neo-autoritarismo y la emergencia de democracias iliberales.

Ante las recurrentes crisis económicas, asistimos a un crecimiento de los discursos y las prácticas xenófobas y antimigratorias. El fenómeno migratorio se ha convertido en un catalizador de un repliegue identitario y de tendencias autoritarias. En la medida en que dichas tendencias imponen sus discursos en la agenda política general, puede acabar convirtiéndose en un eje fundamental de la confrontación social y política. Proliferan eslóganes simplistas que difunden determinadas formaciones políticas y que apelan a recodificar en clave nacional los derechos sociales, así como a establecer prioridades de acceso y a desmontar los mecanismos de equiparación jurídica de las personas que habitan en un territorio. Tales apelaciones se pueden legitimar con argumentos supremacistas o no, pero en todo caso se constata en las sociedades europeas un crecimiento de la aceptación de diferentes tipos de prelación en el acceso a recursos y a derechos, ya sea de corte étnico-nacional o de tipo social. El racismo más o menos burdo, más o menos explícito, permite dar soporte a políticas de segregación o de estratificación política o, incluso, de control duro, discriminatorio e incluso violento de las fronteras. Más allá del endurecimiento visible, la transformación y proliferación de fronteras (administrativas, sanitarias, de protección social, etc.) indica una evolución que puede incluir a una parte creciente de los antiguos sujetos nacionales de derecho que se puede ver afectada por el destino de la “humanidad sobrante” debido a la contracción del alcance de la ciudadanía estatonacional. La

significación del fenómeno migratorio en la evolución política ante la amenaza autoritaria irá previsiblemente en aumento.

Desafío. Se ha pasado de hablar de *ius migrandi* a enmarcar el fenómeno migratorio como una cuestión de seguridad nacional, desatendiendo la necesidades de quienes migran y sus derechos y bienestar. La reivindicación del derecho a migrar se subordina pues a las exigencias instrumentales de los países de destino o se confunde con la “fuga” impuesta por una situación de necesidad. Las ciencias humanas y sociales deben enfrentarse al desafío de elaborar nuevas conceptualizaciones para abordar la situación de las personas migrantes y desarrollar categorías teóricas y jurídicas capaces de proteger y garantizar el “derecho a tener derechos” de todo ser humano, con independencia de su nacionalidad y/o lugar de nacimiento.

2.7. El reto de la incorporación de la diversidad en las sociedades receptoras

Los procesos de integración legal y sociocultural de los migrantes constituyen un reto fundamental para las sociedades contemporáneas. En este contexto, la adquisición de la residencia permanente y de la ciudadanía como instrumento de integración juega un papel central y ha sido objeto de un amplio debate científico. Mientras la adquisición de la ciudadanía se ha considerado tradicionalmente como el reconocimiento oficial de la pertenencia y fidelidad al país de destino, más recientemente algunos estudios han planteado que la adquisición de la nacionalidad puede ser no tanto la culminación de un proceso de integración, sino más bien un canal para adquirir ciertas ventajas sociales y mejorar sus oportunidades de movilidad. Investigaciones recientes han cuestionado la coincidencia entre nacionalidad y ciudadanía y han problematizado las cuestiones identitarias y de pertenencias que clásicamente se habían asumido como elemento imprescindible de la ciudadanía.

El consenso más o menos establecido sobre la situación de desventaja económica en la que se encuentran, en comparación con la población autóctona, la mayor parte de las personas migrantes, se ha nutrido en la última década de matices importantes en función del origen de los migrantes, el contexto receptor que encuentran en destino, a nivel macro y micro, y la dimensión concreta de la integración que se analice. Dichos matices y la creciente diversidad de la migración contemporánea dificultan una teoría general sobre la integración (o incorporación), como se pretendía en el pasado. Nociones como las de ‘asimilación segmentada’ o ‘inclusión adversa’ han sido

adaptadas a distintos contextos de forma más o menos acertada simplemente para referirse a la diversidad y dificultad que reflejan las trayectorias de inclusión de los migrantes y sus descendientes en las sociedades receptoras.

Entre las dimensiones de inclusión menos examinadas se encuentran las que se asocian a la vertiente no material de la integración, y en general cualquiera diferente de la carrera educativa y laboral, los indicadores de renta. Si bien es cierto que la percepción de discriminación ha recibido bastante atención como compensación a esa orientación excesivamente materialista de la integración, otros aspectos como el bienestar psicológico, la salud, los comportamientos en el ámbito familiar (formación de familias, fecundidad, divorcio, cohabitación, etc.), la participación social y política, por citar algunas, han sido examinadas con menos frecuencia. Un campo con entidad propia es el de los estudios dedicados a los descendientes de la inmigración, en la medida en que su instalación en las sociedades receptoras a las que pertenecen –aunque no siempre como ciudadanos de pleno derecho– se asume como definitiva. En su caso, los estudios han prestado mucha más atención a la dimensión simbólica, identitaria y cívico-política, que a los estudios sobre la generación de sus progenitores, especialmente en la literatura de corte más cualitativo. Por otro lado, la intensificación de la movilidad (ver apartado 2.3.) influye en la reinterpretación de la identidad, pertenencia y sentido de lugar de los ciudadanos móviles, y exige una reconceptualización de la identidad en términos más flexibles, que huye de la aproximación estatocéntrica, y atiende a las experiencias vividas de pertenencia múltiple de las personas de origen migratorio que además de sentirse “ciudadanas” de múltiples lugares contribuyen al desarrollo económico y cultural de más de un país.

Desafío. Resolver las deficiencias de información estadística innovadora, con perspectiva longitudinal y, sobre todo, la introducción de avances metodológicos de tipo más experimental, que sí se han producido en el estudio de elementos parecidos con poblaciones no inmigrantes, resultarán cruciales en el progreso de esta área de conocimiento, tan amplia como crucial en la construcción de una sociedad intercultural. Por último, se requiere de mucha más investigación sobre el impacto de los programas y políticas de integración e inclusión sobre los resultados de estos procesos, para garantizar un adecuado diseño de programas destinados a facilitarla. Entender y explotar mejor el papel de las ciudades, que concentran cada vez mayor diversidad, resulta fundamental como laboratorio para el verdadero desarrollo de políticas inclusivas y de construcción de la interculturalidad.

2.8. El impacto de las migraciones

En las sociedades de destino

Desde los años ochenta, los economistas han prestado enorme atención al estudio de los efectos económicos de la migración y, en concreto, al efecto que la llegada de inmigrantes tiene sobre el empleo y los salarios de los trabajadores autóctonos. La mayor parte de estos estudios concluyen que los efectos, a nivel agregado, son inexistentes o, en todo caso, pequeños; y en general, el consenso dominante es que el efecto agregado de la inmigración para las economías receptoras es netamente positivo. Ahora bien, un efecto positivo a nivel agregado es absolutamente compatible con efectos negativos para ciertos sectores y/o colectivos, y esto plantea el eterno debate sobre las consecuencias distributivas de la inmigración en los países receptores que está dando lugar a toda una corriente de nuevos estudios centrados en identificar si la *prominencia* del asunto migratorio responde a un mayor efecto de ésta sobre la población con bajos ingresos en las sociedades de destino, y si la innegable y creciente politización de este asunto responde a causas reales o es una excusa para evitar y esconder un debate más amplio sobre las verdaderas causas de la creciente desigualdad en los países ricos. De hecho, toda la discusión pública sobre la competencia por servicios y ayudas públicas entre inmigrantes y nativos, la idea de que los Estados del bienestar de los países desarrollados -y especialmente europeos- actúan como imán que atrae la llegada de una masa de desposeídos que devendrán dependientes de las ayudas sociales poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar, y los discursos sobre el *merecimiento* de dichas ayudas, son debates que están marcando el terreno de muchas de las investigaciones más recientes sobre la inmigración.

En concreto, en el contexto de este debate sobre el ‘merecimiento’, las categorizaciones orientadas a establecer jerarquías dentro del diverso colectivo de las personas migrantes se han multiplicado, con consecuencias importantes en la configuración de las actitudes hacia la inmigración y su correlato en las políticas migratorias. A la ya difícil distinción legal entre migrantes y refugiados, se añade y solapa la distinción entre regular e irregular, temporal y permanente, y todo directa o indirectamente vinculado a la idea de ‘integrable’ o no, ‘beneficioso’ o no. Además, a menudo existe una distancia enorme entre lo que tales categorizaciones evocan en la mente del ciudadano de a pie, y su base fáctica o científica, distancia que con frecuencia es aprovechada y reforzada por políticos desde distintas posiciones del espectro ideológico.

Este debate sobre cuánto contribuye cada quién y la medida en que lo que recibimos como miembros de una sociedad debe corresponder, o no, a lo que aportamos, reaparece también vinculado a la creciente preocupación sobre el envejecimiento de la población en los países más desarrollados y la conveniencia-necesidad, según muchos, de admitir muchos más inmigrantes en las próximas décadas como única vía para garantizar el crecimiento económico y el bienestar de nuestras sociedades. De todos modos, este tipo de aseveraciones no siempre se basan en datos, estudios y proyecciones realistas y rigurosas.

Desafío. Una mejor comprensión sobre los efectos económicos, sociales, políticos y demográficos de los flujos migratorios, y en concreto sobre el binomio crecimiento-igualdad, sobre la sostenibilidad, funcionamiento y características del Estado del bienestar, y sobre la configuración y cambio de las opiniones que los ciudadanos de las sociedades receptoras tienen hacia la inmigración como fenómeno y hacia las personas inmigrantes en concreto. Este tipo de aseveraciones no siempre se basan en datos, estudios y proyecciones realistas y rigurosas. En cualquier caso, no es fácil predecir de qué modo cambiarán las actitudes hacia la inmigración en sociedades envejecidas cada más dependientes de ella para rejuvenecer su propia estructura demográfica y, en particular, su fuerza de trabajo.

El impacto sobre las sociedades de origen

La percepción de las migraciones sufre en gran parte de la literatura un fuerte sesgo destino-céntrico, en el que tienden a desconocerse casi por completo las dinámicas sociales, económicas, políticas y demográficas imbricadas con el fenómeno del desplazamiento humano en sentido amplio. Esto tiene mucho que ver con la pobreza de información sobre los movimientos de retorno, los procesos de movilidad sostenida de personas migrantes que no se establecen de forma permanente en destino, sino que mantienen de forma continuada un vínculo estrecho con sus países y comunidades de origen, los procesos de reintegración de aquellos que regresan y, en general, los efectos acumulados de un fenómeno tan dinámico como la migración sobre las sociedades de origen. Frente al estudio muy detallado de los efectos económicos de las migraciones en los países receptores ricos, se ha dedicado muchísimo menos esfuerzo científico al estudio del impacto de la migración sobre el crecimiento y la igualdad-desigualdad en los países de origen, más allá de una corriente de estudio centrada en la importancia macro-económica de las remesas.

Desafío. Debemos actualizar nuestro conocimiento sobre las dinámicas de salida, que siguen interpretándose en clave de siglo XX. Necesitamos nuevas

infraestructuras de medida (origen-destino), empezando por un estudio mucho más profundo de las dinámicas de retorno y circulación. Pues a ellas están vinculados diferentes efectos de la migración sobre las zonas y poblaciones de origen de los migrantes. Existe una necesidad imperiosa de descomponer el famoso binomio desarrollo-migración, más allá de la discusión específica sobre los efectos de las remesas, e introducir en los análisis un examen mucho más rico sobre las dimensiones socio-políticas de los impactos, teniendo presentes los cambios experimentados en los modos de vida, formas de pensar, de estar y relacionarse con el mundo como consecuencia de unos flujos de salida, retorno y circulación cada vez más intensos.

2.9. Globalización fronterizada y proliferación de muros, ¿no hay una alternativa?

Desde la caída del Muro de Berlín (1989), se han trazado más de 26.000 km de fronteras como consecuencia del establecimiento de nuevos Estados: unos 12.000 km en Europa y más de 13.000 km en Asia Central. Las fronteras no sólo han proliferado, sino que además se han fortificado con el fin de intentar detener los flujos de personas.

En 1991, al finalizar la Guerra Fría, había en el mundo 15 muros fronterizos. En 2018 alcanzaban ya la cifra de unos 70. La longitud total de los muros construidos no cesa de crecer y es posible que haya superado ya los 50.000 km. Y lo más relevante es que, en general, su función no es defender el territorio estatal soberano ni poner barreras al comercio internacional o al contrabando ilícito, sino impedir el derecho de las personas más vulnerables a encontrar un lugar donde poder vivir en paz. En suma, “el muro se ha convertido en una nueva norma de las relaciones internacionales” (Élisabeth Vallet).

La comprensión de las fronteras como un dispositivo esencialmente obstructivo, tal como se compendia en la imagen de los muros, representa tan sólo una percepción simplificadora que, sin embargo, se ha difundido con éxito. Fronteras y muros no son dos nombres de un solo concepto. Las funciones atribuidas a unas y a otros son nítidamente distinguibles en lo referente a la circulación de personas y bienes: la función primordial de las fronteras, a diferencia de los muros, no es impedir los intercambios, sino la de regular el tránsito. Sin embargo, en la práctica cotidiana de la gestión fronteriza suele prevalecer el objetivo de la contención migratoria sobre el de respetar los derechos básicos de las personas, de tal modo que en aras del interés nacional se infringe con harta frecuencia la legalidad internacional.

Aunque los muros fronterizos se han convertido en barreras enormemente letales, con frecuencia se muestran más bien disfuncionales como instrumentos efectivos de cierre. Esa impotencia hace entrar en liza estrategias retóricas contrapuestas. De hecho, la proliferación de muros y de todo tipo de barreras y tácticas de contención a lo largo del planeta ha reabierto el debate nunca solventado acerca de la legitimidad de los Estados para cerrar o abrir las fronteras o, dicho de manera algo más precisa, si a los Estados les asiste el derecho exclusivo de controlar el acceso de extranjeros a su propio territorio o si se trata de una decisión que ha de ser justificada ante todos los afectados, sean miembros o no de la particular comunidad política en cuestión.

Al modificarse las formas de concebir y gobernar las fronteras se han transformado también los patrones migratorios tradicionales. Las diversas operaciones desplegadas por los Estados receptores de refugiados o por los sistemas de control cooperativo de fronteras han influido poderosamente sobre el número y las condiciones de acceso, pero sobre todo han provocado desplazamientos de las rutas de llegada a las fronteras y el aumento de los riesgos que tienen que asumir quienes huyen de amenazas extremas.

La *securitización* de las políticas o la externalización de las fronteras (comprando a bajo precio complicidades de países escasamente respetuosos con los derechos humanos para que hagan el trabajo sucio de contención), así como invenciones de eufemismos como “tercer país seguro”, han contribuido a que la “gestión” de la migración no sea vista ya tanto como un cuestión socio-demográfica sino como un tema de seguridad global, una resignificación que incide en la imaginación política para comprender las migraciones y en la consiguiente elaboración de nuevos marcos de interpretación del fenómeno.

Desafío. Aparte de por razones estrictamente normativas (derechos humanos, justicia global, solidaridad, etc.), los Estados más prósperos se verán en la difícil coyuntura de tener que decidir por razones prudenciales entre ayudar de manera significativa al desarrollo de amplias regiones pauperizadas del planeta o abrir las fronteras a un volumen mucho mayor que el actual. Ese desafío será cada vez más acuciante y los mencionados Estados tendrán que decidir si proceden de manera ordenada o aceptan a regañadientes dinámicas que acabarán sobrepasándoles. Abrir el debate sobre el cierre/apertura de las fronteras –o sobre mantenerlas más o menos porosas y flexibles– tiene además la virtud de interrogarse públicamente acerca de cómo rutinarias prácticas presuntamente democráticas en inmigración pueden negar la libertad y ayudar a mantener injustas desigualdades.

2.10. Gobernanza global de las migraciones

También en materia de migraciones se hace valer la idea de que no existen soluciones locales para problemas globales. Adoptando únicamente una visión estatocéntrica westfaliana, los procesos migratorios apenas resultan comprensibles y, aún menos, gestionables. Si un Estado trata de adoptar en solitario políticas más abiertas y flexibles hacia los migrantes y refugiados, será acusado – a no ser que se haga sin llamar demasiado la atención – de provocar el “efecto llamada”, lo que acaba llevando a los distintos gobiernos a competir entre sí por el endurecimiento de sus políticas migratorias.

El fracaso casi permanente de las políticas migratorias desarrolladas por distintos Estados en solitario (e incluso de manera agrupada, como sucede en el seno de la Unión Europea) se ve agravado por la ausencia de los oportunos instrumentos para una gobernanza global de los procesos migratorios internacionales. En esta materia, el escenario se revela bastante anómico, una circunstancia que sólo podría salvarse estableciendo un régimen migratorio global con un sólido soporte institucional y normativo que permita aprovechar mejor los beneficios indudables de la migración.

Con todo, algo está cambiando en los últimos años. A partir de la *Declaración de Nueva York* para los Refugiados y los Migrantes, aprobada en 2016 en el seno de la ONU, se abrió un intenso proceso multilateral de negociaciones a nivel internacional, un proceso en el que, junto a los gobiernos, ha sido clave la activa participación y el impulso de actores no gubernamentales. Dicho proceso ha conducido a que en 2018 se ratificaran tanto el *Pacto Mundial para los Refugiados* como el *Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular*, dos documentos que representan en sí mismos un progreso significativo y que están llamados a constituirse en el principal punto de referencia a nivel normativo sobre la materia para los próximos años. Un buen indicio de que con dichos acuerdos se perfila un horizonte alternativo a las políticas hegemónicas es el hecho de que relevantes países se hayan negado a firmarlos pese a que, como tales, no sean normas de obligado cumplimiento. Este mismo hecho también es, por otro lado, señal de las reticencias y resistencias de los Estados a adoptar decisiones vinculantes que implique cesión de parcelas de soberanía.

REFLEXIONES FINALES, QUE NO CONCLUSIVAS

Entre las condiciones previas para avanzar en un estudio integral del fenómeno migratorio se encuentra la ampliación de la escala de análisis y el abandono del «nacionalismo metodológico» y su *injustificada presuposición*

del Estado-nación como la forma natural de organización social. El nacionalismo metodológico conduce a un malentendido fundamental de la naturaleza de la realidad social al no reconocer que, además del Estado, existen formas sub-, supra- y trans-nacionales de organización política y económica, amén de dinámicas sociales y culturales que escapan al control estatal.

En realidad, ningún fenómeno social puede ser descrito únicamente a partir del Estado si sus causas no radican exclusivamente en el interior de su territorio y sus implicaciones sobrepasan sus límites. Pese a ello, y a que los procesos migratorios internacionales son un claro ejemplo de ese tipo de fenómenos, lo cierto es que ese restrictivo enfoque metodológico –y su miope sobredimensionamiento del «*interés nacional*»– es precisamente el que se encuentra detrás de la mayoría de las políticas migratorias actualmente desplegadas.

Otro error metodológico en el que las ciencias sociales incurren con frecuencia es el llamado «presentismo», *con el consiguiente desprecio de las* dimensiones procesual, dinámica y coyuntural que posee todo acontecimiento u hecho que se desarrolla en el tiempo. Este ahistoricismo metodológico (o pérdida sistemática de la perspectiva histórica) puede conducir a graves incorrecciones a la hora de calibrar la relevancia de determinados fenómenos presuntamente novedosos, así como a la pérdida de antecedentes con las que comparar tendencias de larga data (*longue durée*), influyendo a la postre en la efectividad de las decisiones, medidas o disposiciones públicas a tomar.

Mediante el desarrollo de análisis y estudios empíricos en todas las regiones implicadas –países de origen, de destino y de tránsito– las ciencias sociales pueden contribuir de manera inestimable a analizar, desmontar y crear marcos de alternativas posibles para abordar las migraciones y las situaciones de vulnerabilidad en las que viven las personas migrantes. En estrecha colaboración con la filosofía y las ciencias humanas, pueden también contribuir a repensar las categorías y los conceptos que actualmente definen las migraciones internacionales en un mundo globalizado.

Igualmente, el avance teórico y práctico en esta materia depende extraordinariamente de un verdadero enfoque interdisciplinar, en el que los enfoques y saberes procedentes no sólo de diferentes lugares y colectivos sino de diferentes áreas del saber científico, no restringidas a las ciencias humanas y sociales, dialoguen conceptual y metodológicamente para ser capaces de abordar el fenómeno en toda su complejidad y multidimensionalidad.

- Bauböck, R., Heller, A., Zolberg, A. R. (1996).** The challenge of diversity: integration and pluralism in societies of immigration. *Aldershot Avebury*.
- Brown, W. (2010).** *Walled States, Waning Sovereignty*. New York Zone Books.
- Carens, J. H. (2013).** The Ethics of Immigration. *Oxford UP*.
- Cassee, A. (2016).** Globale Bewegungsfreiheit. *Berlin Surhkamp*.
- Castles, S. (2010).** Understanding Global Migration. *Journal of Ethnic and Migration Studies* 36(10), 1565–1586.
- De Haas, H., Castles, S., Miller, M. J. (2019).** The Age of Migration. New York Palgrave Macmillan.
- Estévez, A. (2014).** Derechos humanos, migración y conflicto. *México UNAM*.
- FitzGerald, D. S. (2019).** Refuge beyond Reach. How Rich Democracies Repel Asylum Seekers. *Oxford U.P.*
- Foucher, M. (2016).** Le retour des frontières. *Paris CNRS Editions*.
- Jaggar, A. (2014).** Gender and Global Justice. *Oxford Polity Press*.
- Mezzadra, S., Neilson, B. (2013).** Border as method, or, the multiplication of labor. *UP*.
- Miller, D. (2016).** Strangers in Our Midst. *Harvard UP*.
- Portes, A., DeWind, J. (2008).** Rethinking Migration. New Theoretical and Empirical Perspectives. *Berghah*.
- Sager, A. (2016).** Methodological Nationalism, Migration and Political Theory. *Political Studies* 64 (1), 42–59.
- Sassen, S. (2015).** Massive loss of habitat triggers new array of migrations. *Trumanfactor*.
- UN DESA (2019).** International Migrant Stock 2019. *ONU, Department of Economic and Social Affairs, Population Division*: www.unmigration.org.
- Velasco, J. C. (2016).** El azar de las fronteras. *México FCE*.
- Velasco, J. C., La Barbera, M. C. (2019).** Challenging the Borders of Justice in the Age of Migrations. *Cham: Springer*.
- Wellman, C. H. (2015).** Immigration. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Wellman, C. H., Cole, P. (2011).** Debating the Ethics of Immigration. *Oxford UP*.
- Wilcox, S. (2015).** Immigration and Borders. *Bloomsbury Companion to Political Philosophy*, 183–197.

RESUMEN

La migración internacional es un fenómeno altamente complejo y global, una cuestión cargada ideológicamente y polarizante de enorme relevancia simbólica y política, un fenómeno que requiere un enfoque interdisciplinar tanto desde una perspectiva descriptiva como normativa. Los flujos migratorios se han incrementado y son provocados cada vez más por conflictos armados o el cambio climático, así como por las agudas desigualdades globales. Dado que las causas e implicaciones de la migración superan los límites estatales, un estudio exhaustivo debe abandonar el “nacionalismo metodológico”. La integración económica y social de la población migrante es un reto complejo, pero las oportunidades que abre también son múltiples: la migración impulsa el crecimiento económico, conecta diferentes culturas y contribuye al desarrollo internacional.

DESAFIO F

POR UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN UN MUNDO GLOBAL Y SOSTENIBLE

Coordinadores

María Dolores del Castillo Bilbao
(CIAL, CSIC-UAM)

Oscar Martínez Álvarez
(ICTAN, CSIC)

1. NUTRICIÓN PERSONALIZADA. LA CLAVE PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

1.2. Alimentos adaptados al genoma

En el año 2003 se publicaron los dos primeros borradores de la secuencia del genoma humano. Fue el fruto del trabajo de tres mil científicos durante diez años y tuvo un coste de tres mil millones de dólares. A finales del pasado mes de febrero del 2020, apenas diecisiete años más tarde, la compañía china de secuenciación genómica masiva BGI anunció que podía secuenciar un genoma humano por el módico precio de cien dólares. Esta es la velocidad a la que la genómica ha prosperado, una disciplina científica que ha venido para quedarse e imponerse en muchas facetas de nuestra vida y, entre otras, en la alimentación.

Lo que hace unos años era impensable, definir una alimentación al pasaporte genético, cada día es más posible. Y no sólo por este abaratamiento de los costes de secuenciación, sino por otros factores como por ejemplo la generación durante los últimos años de centenares de datos sobre mutaciones en genes que predisponen a patologías que se pueden prevenir con una alimentación adecuada, la aplicación de nuevas herramientas de manejo de “big data” a estos conocimientos, el desarrollo de dispositivos que permiten cuantificar parámetros bioquímicos y físicos del individuo de forma inmediata y no invasiva, o la disponibilidad de aplicaciones en nuestros móviles que digieren toda esta información de una forma agradable. El resultado ha sido el nacimiento de algo que algunos llaman nutrición personalizada y otros denominan nutrición de precisión, una nueva forma de definir lo que comemos de una

forma mucho más racional, considerando los genes de nuestro genoma, el global de microorganismos que viven en nuestro cuerpo (el llamado microbioma del que otros colegas hablan en otro capítulo de este libro) y nuestro acervo cultural, social y gastronómico.

Cerremos los ojos y pensemos en el año 2030. Probablemente muchos de los niños que en ese momento nazcan en España tendrán de inmediato su genoma secuenciado. Sabremos qué mutaciones acumulan y cuáles de ellas pueden dar lugar a problemas serios de salud, por ejemplo, una mutación en los genes B-RAF o KRAS que den lugar a una mayor probabilidad de desarrollar un cáncer colorectal. De darse esta circunstancia, ese niño tendrá controles a lo largo de su vida que permitan detectar en sus primeros estadios, cuando el tratamiento terapéutico es más eficaz, el desarrollo de esta enfermedad. Pero además deberá asumir hábitos de dieta que prevengan la aparición del problema, por ejemplo, seguir una dieta rica en fibra y pobre en grasa que prevenga la aparición de este cáncer. Lo realmente importante es que no sólo conocerá esta mutación, conocerá miles de ellas presentes en su genoma que analizadas por expertos en bioinformática definirán su dieta más saludable. Tendrá esa nutrición precisa, esa nutrición personalizada de la que antes hablamos.

Este área del genoma del consumidor es uno de los tres ángulos en los que los estudios genómicos afectan a la alimentación. Del segundo ya hablamos antes, el microbioma de nuestro cuerpo y los genes de esos microorganismos, que como indiqué quedan para otro capítulo de este libro. El tercero es más desconocido, pero tan relevante como los dos anteriores. Es la aplicación de la genómica en la mejora de la materia prima agroalimentaria. Se han secuenciado los genomas de la mayoría de las especies animales y vegetales que constituyen el 99% de nuestra dieta. También se han secuenciado los genomas de centenares de especies microbianas que producen los alimentos y bebidas fermentadas que consumimos en las diferentes regiones del planeta. Conocemos las bases genéticas de las propiedades organolépticas, texturales y nutricionales de nuestros alimentos y bebidas, por lo que podemos mejorarlas. No tenemos excusa, durante los próximos años, la comunidad científica y las empresas del sector debemos ser capaces de aprovechar este enorme acervo molecular para desarrollar desde el conocimiento una nueva cadena agroalimentaria más sana, segura y sostenible.

No va a ser tarea fácil por dos motivos. El primero, la complejidad del problema al que nos enfrentamos. Un planeta con 7200 millones de personas, de las cuales más de 800 millones pasan hambre, aunque producimos suficiente comida para

todos, y más de 1600 millones de ellas tienen obesidad o sobrepeso. Un sistema agroalimentario expuesto al cambio climático, con un exceso de huella hídrica y una demografía en la que los puntos de consumo se han alejado de los puntos de producción. El segundo problema, tan grave como el primero, es la conversión de un debate que debería ser meramente científico-tecnológico en un debate ideológico. Hay muchos tipos de agriculturas: la convencional, la ecológica, la de precisión y de la que hablamos en este capítulo, la agricultura basada en la genómica. Las necesitamos todas, ninguna es perfecta y ninguna es diabólica. Cada región del planeta requerirá del trabajo conjunto de varias de ellas. No podemos obviar que la genómica despierta miedos en un sector de la población, un sector que anteriormente ya se ha mostrado receloso, cuando no visceralmente opuesto, a la agricultura transgénica. Esperemos que, dada la gravedad del problema al que nos enfrentamos, nadie imponga su ideología sobre el bien común y lleguemos a un consenso sobre cómo aprovechar de una forma inteligente el conocimiento genómico en la agroalimentación.

1.2. Alimentos adaptados al microbioma

El organismo humano alberga diferentes ecosistemas microbianos (microbiota) localizados en la cavidad oral, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario y la piel, principalmente. El genoma colectivo de esta microbiota (microbioma) codifica 200 veces más genes que el genoma humano. En los últimos años la comunidad científica internacional se ha volcado en el estudio de la microbiota y el microbioma humano, y su implicación en diversas patologías (orales, respiratorias, intestinales, urinarias, neurológicas, etc.) y en la salud humana en general. Son ya varios los grandes consorcios públicos que han abordado esta temática reclutando amplios grupos poblacionales; sirva de ejemplo los proyectos The Human Microbiome en USA y MetaHits entre China y Europa como pioneros en esta temática. Paralelamente, los estudios científicos confirman cada vez más la importancia de la alimentación en el mantenimiento de la salud de nuestra microbiota. En particular, la alimentación se considera una vía terapéutica efectiva para el tratamiento de enfermedades intestinales, asociadas a un desequilibrio en la diversidad y/o funcionalidad de la microbiota (disbiosis intestinal). En esta concepción general de la alimentación adaptada al microbioma, se incluyen tanto ingredientes específicos (probióticos, incluidos los no convencionales, prebióticos, postbióticos, y otros compuestos bioactivos) como la dieta en su totalidad y su interacción con otros hábitos de vida (ejercicio físico, actividad cognitiva, emocional, etc.). Por otro lado, es cada vez más evidente que la respuesta fisiológica derivada de la ingesta de determinados ingredientes/alimentos es variable

entre individuos, debido en gran parte a la gran variabilidad interindividual en el microbioma intestinal. En este marco actual del conocimiento científico, el microbioma (y su variabilidad interindividual) se percibe en el futuro como una diana de apasionante estudio de los efectos beneficiosos de los ingredientes/alimentos en el organismo humano. Dicho de otra forma, la llamada “alimentación saludable” implica necesariamente el mantenimiento de una microbiota sana y diversa en el organismo humano, teniendo en cuenta la individualidad genética del propio organismo y su hábitat de vida.

El gran desafío científico que se plantea en los próximos años en este ámbito es el desarrollo de ingredientes/alimentos/dietas/hábitos efectivos en el cuidado de la microbiota -y por ende, en la protección/tratamiento frente a patologías relacionadas con la misma-, y particularizados a individuos y/o grupos poblacionales específicos. Se trata de un desafío múltiple, en la interfaz entre alimentación/nutrición, biología intestinal y salud, que no sólo es una realidad científica incuestionable sino que también tiene un gran valor industrial. Este desafío se podría desglosar en 3 desafíos concatenados entre sí:

1. Desarrollo de un nuevo panorama para entender la interacción de la alimentación con el microbioma: los esfuerzos se basan en comprender la compleja interacción a nivel molecular entre la microbiota y el huésped, que será la base del desarrollo de alimentos adaptados al microbioma. Entender la relación entre nuestro metaboloma como huéspedes y los metabolitos que proceden de grupos target de la microbiota humana (mutualismo metabólico). Identificar los cambios significativos en el microbioma que causan las enfermedades, y los mecanismos responsables de la transición de la microbiota desde un estado saludable a un estado enfermo. En particular, descubrir las complejas interacciones entre el microbioma intestinal, las células del epitelio intestinal, y el sistema inmune en la respuesta frente a patógenos. Comprender también cómo el intestino se conecta con el sistema nervioso central: el eje intestino-cerebro. Caracterizar cómo la microbiota intestinal metaboliza los alimentos, saber que genes hay o cuáles se expresan, qué metabolitos produce cada grupo microbiano y cuál es su papel en la protección de la salud, tanto intestinal como una vez que son absorbidos en el resto del cuerpo.
2. Alimentación y dieta como prescripción y como terapia: determinar los efectos de ingredientes/alimentos/dietas diseñados específicamente para el mantenimiento del estado saludable (homeostasis) o para la

corrección de un estado enfermo de la microbiota (disbiosis) relacionados con enfermedades inflamatorias intestinales, obesidad, alergias alimentarias, infecciones urinarias y otras, enfermedades neurológicas, cambios metabólicos en la vejez, etc. Validar la efectividad de las terapias/estrategias (suplementos conteniendo probióticos, prebióticos, postbióticos, y otros compuestos bioactivos, alimentos, platos/recetas, dietas combinadas con hábitos de vida, etc.) para los fines propuestos. Diseñar intervenciones y estudios rápidos, precisos y menos complejos que permitan diagnosticar estados de disbiosis temprana en la microbiota, susceptibles de aplicar terapias/estrategias de corrección basadas en la alimentación. Para este desafío es fundamental la conexión con los historiales clínicos, se necesitan colaboraciones mantenidas con hospitales como con la clínica asistencial. La industria alimentaria está atenta al efecto sobre el microbioma de polifenoles, péptidos, polisacáridos y/o de su combinación con prebióticos y probióticos. Por su parte, la industria farmacéutica está abierta al uso de estos ingredientes en suplementos nutricionales y dispositivos de uso clínico hacia grupos de la población. Por tanto, este es un nicho de negocio con relevantes perspectivas a corto y medio plazo.

3. Nuevas estructuras integradas/plataformas con instrumentos/infraestructuras de los más avanzados, menos invasivos y más rápidos que consigan mantener la investigación en primera línea a la vez que diseñar una analítica de uso cotidiano del microbioma y su variabilidad interindividual. Crear protocolos de actuación en el ámbito de la Asistencia Primaria que permitan detectar estados de disbiosis en la microbiota para actuar en sus fases más tempranas. Desarrollar aplicaciones bioinformáticas para realizar meta-análisis de los datos (big data). Integrar la información obtenida en plataformas con datos genéticos y otros. Crear bases de datos para almacenar, organizar y hacer accesible la información a todos los sectores interesados. Desarrollar modelos de predicción. Construir un nuevo modelo de nutrición de precisión basado en la evidencia científica y la tecnología.

Para alcanzar estos desafíos se requerirá el trabajo complementario de diversos equipos humanos y entidades que hagan posible un abordaje científico-técnico completo, desde estudios de ciencia básica hasta desarrollos industriales de ingredientes/alimentos y recomendaciones nutricionales a la población en general y prescripciones a grupos específicos.

En concreto, se requerirá que especialistas en ciencia y tecnología de alimentos, microbiología, ingeniería informática, nutrición y especialidades médicas trabajen conjuntamente en estructuras organizativas innovadoras creadas *ad hoc*, con objetivos concretos (ingrediente/alimento, grupo poblacional, patología específica, etc.) y que involucren centros de investigación, empresas, y servicios sanitarios. Estos tres vértices (investigación, empresa y administración) se articularán en un único triángulo.

1.3. Alimentos para la óptima salud física, mental y emocional.

El eje cerebro-intestino.

El eje cerebro-intestino es el término utilizado para describir la red de comunicación dinámica e íntima entre los dos órganos que lo constituyen. El cerebro regula la motilidad, la liberación de enzimas digestivas y hormonas, el flujo sanguíneo y el soporte nutricional del tracto gastrointestinal (GI) asegurando que se mantenga saludable. El intestino participa en los sistemas endocrino, inmunológico y nervioso. El sistema nervioso entérico, el sistema nervioso autónomo y las hormonas, regulan las funciones de la mucosa y la motilidad intestinal. Gracias a la comunicación entre los sistemas nervioso y hormonal se garantiza el correcto funcionamiento del eje cerebro-intestino, esencial para la salud física, mental y emocional de los individuos. El microbioma del tracto GI también es un componente esencial de este eje. El intestino es una vía de entrada al cerebro de patógenos como virus, priones y sustancias como el beta-amiloide, lo que facilita la aparición de enfermedades neurodegenerativas. El mantenimiento del equilibrio microecológico es fundamental para reducir el riesgo de los trastornos del eje.

La salud GI determina el soporte nutricional y el estado de salud general del individuo. En 2018, el porcentaje total de población diagnosticada con enfermedades GI en España fue del 20%, con mayor prevalencia en mujeres, muchas de las cuales sufren, además, fibromialgia, migraña, dolor pélvico crónico, síndrome de fatiga crónica y depresión. Además de las patologías GI orgánicas como cáncer colorrectal, enfermedades inflamatorias intestinales o intolerancia y sensibilidad a proteínas como el gluten u otros alérgenos, existen otros trastornos, como el síndrome de intestino irritable o la dispepsia funcional, considerados “trastornos funcionales o del eje cerebro-intestino”. Estos afectan la calidad de vida, función social, productividad laboral y resiliencia frente a situaciones de crisis tanto sanitarias como sociales (como COVID-19), y representan una gran carga para los sistemas de salud pública. Los síntomas psicológicos y psiquiátricos (principalmente ansiedad y depresión,

pero también trastornos bipolares, obsesivo-compulsivos y del sueño) son más frecuentes en pacientes con patologías intestinales y viceversa. Muchas patologías neurodegenerativas (como la enfermedad de Parkinson) pueden comenzar en el intestino mucho antes de la sintomatología clínica y “transmitirse” hacia el sistema nervioso central empleando las vías de conexión neural del eje cerebro-intestino (nervio vago, por ejemplo). Otras enfermedades, como el autismo y la esquizofrenia, consideradas como trastornos del neurodesarrollo, cursan con trastornos de la motilidad GI, cuyo alivio es fundamental en el manejo de estos pacientes.

Las estrategias para el tratamiento y prevención de los trastornos del eje cerebro-intestino deben dirigirse a una alimentación y estilo de vida saludables, que permitan lograr una salud sostenible, entendida como “envejecimiento saludable y activo que previene el riesgo de enfermedades”. Debido a la heterogeneidad de la patogénesis de estos trastornos es difícil diseñar regímenes alimentarios y/o terapias farmacológicas que beneficien a todos los individuos. Por tanto, una industria alimentaria global y sostenible debe dirigirse hacia una alimentación segura, suficiente, al alcance de todos, de precisión y/o personalizada. En general, una dieta con efectos beneficiosos para la microbiota intestinal y el eje cerebro-intestino incluye a la dieta mediterránea, así como la ingesta diaria de alimentos de bajo índice glucémico (cereales de grano entero), ricos en proteínas de elevada calidad nutricional (legumbres, insectos, algas), probióticos, fibra dietética principalmente soluble de fuentes naturales (subproductos de la industria alimentaria, algas), vitaminas (C, D), minerales, omega-3 y fitoquímicos (melatonina, cafeína, cannabidiol). Por otra parte, los procesos culinarios y de elaboración industrial de alimentos tienen un impacto en su composición y seguridad, y resulta imprescindible impulsar programas de educación nutricional y elaboración de alimentos saludables para la población general. Todas estas recomendaciones en conjunto ayudan a mantener la salud y reducir pandemias de enfermedades crónicas no-trasmisibles (obesidad y diabetes) e infecciosas como COVID-19, que afectan al eje cerebro-intestino.

Entre las líneas de futuro en esta disciplina se propone el empleo de modelos animales humanizados, inteligencia artificial (envasado inteligente e identificación de etiquetado para una salud óptima con aplicaciones sencillas), técnicas de imagen y organoides para obtener información relevante sobre el papel de la microbiota y la digestión enzimática de los componentes de la dieta en la salud del eje cerebro-intestino, así como la extrapolación del conocimiento de

los mecanismos de acción de los fármacos al área de la ciencia de los alimentos, con vistas a identificar moléculas de los alimentos para el mantenimiento óptimo de la salud del eje cerebro-intestino. Para alcanzar este hito es esencial la interacción entre los farmacólogos especialistas en los órganos involucrados en el eje, expertos en ciencias de la alimentación, personal sanitario (gastroenterólogos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos), la industria agroalimentaria, expertos en inteligencia artificial, ciencias sociales y humanidades. El CSIC cuenta con un equipo multidisciplinar. Sin embargo, para abordar este desafío se hace necesario potenciar la colaboración existente CSIC-URJC y promover y fortalecer una colaboración mantenida con la clínica.

2. LA ALIMENTACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

En estos próximos 30 años, tres de los retos más importantes, y pertinentes para nuestro análisis y que se pueden transformar si no se abordan adecuadamente en crisis, están relacionados con el medio ambiente, el envejecimiento de la población y la cohesión económico y social.

Bloque 1: Medio ambiente (y salud)

El “convenience effect” ha sido uno de los motores principales de la industria alimentaria para presentar al consumidor nuevos alimentos: más elaborados, con mayor duración de conservación, aptos a consumir en el momento.

Se ha encontrado en este proceso con la competencia de los centros que preparan comida para llevar, que la llevan a casa o que suministran los platos ya preparados a los restaurantes para que lo único que tengan que hacer es calentarlos, a menudo en el microondas.

Cambio 1: productos más sanos

Todo esto multiplica el uso de aditivos, conservantes, glutamato, estabilizantes y multiplica los residuos. El “mundo global y sostenible” del futuro internalizará los costes ambientales de la producción, el transporte de los correspondientes residuos (tendremos envases y embalajes comestibles) y verá un reforzamiento de las reglamentaciones sanitarias con un número máximo de aditivos y otros añadidos.

Cambio 2: la vuelta de los ingredientes

Todo este proceso ha sido guiado por la falta de tiempo, tras la incorporación de la mujer al mundo laboral. Comprar y cocinar son actividades que requieren tiempo y ocupan la mente. Con los robots, el tiempo ya no será un factor limitante. Las

mercancías llegarán a casa robotizadas y serán recibidas por otros robots que nos prepararán los platos que estarán listos cuando lleguemos a casa.

Veremos una disminución de los “alimentos” entendidos como los platos ya preparados para ver el resurgir de los “ingredientes”, las materias primas básicas con las que se preparan los “alimentos”.

Cambio 3: local, y luego también global

Los alimentos y los ingredientes serán más frescos, más de temporada por un lado y más variados por otro, ecológicos o sin residuos de pesticidas.

En una primera fase, podríamos ver un aumento de los productos locales (allí donde sea posible), a raíz de la internalización de los costes de transporte. Pero la industria responderá con una reducción drástica de estos costes logísticos, con energías renovables, robotización, transporte intermodal...

El resultado será el desarrollo de los Sistemas Alimentarios Territorializados, por un lado, y una menor huella del transporte.

Cambio 4: cambio de la cartografía mundial del consumo de carnes

El consumo de carne habrá disminuido en el mundo desarrollado y aumentará en los países en desarrollo. Además, el mix de carne consumida en el primer mundo será distinto, con más productos de la ganadería extensiva y menor consumo de granívoros: la internalización de los costes del “Land use Change” penalizará la ganadería intensiva porcina y aviar consumidora de soja.

Cambio 5: Aumento del consumo de proteínas vegetales

No parece posible la explosión de la llamada carne vegetal (o de los “cheese analogues”), dado que su desarrollo se verá limitado por los mayores controles de aditivos (véase cambio 1).

En cambio, en relación con el cambio 2, es muy probable un resurgir fuerte de las proteínas vegetales, garbanzos, lentejas y otros productos similares.

Bloque 2: Envejecimiento (y salud)

Se identifican dos impactos del envejecimiento de la población, complementarios de los cambios señalados anteriormente:

Cambio 6: Una dieta más variada, con más frutas y hortalizas

La preocupación por la salud y la toma de consciencia de su fragilidad van a hacer que la creciente población de edad más avanzada cuide aún más la calidad dietética y la variedad de su dieta.

Los alimentos “más saludables” como las frutas y hortalizas, los quesos y los yogures, el aceite de oliva,... van a consolidar su importancia.

Cambio 7: Auge de los “alicamentos”

Consciente de esta realidad, la industria alimentaria va a reaccionar poniendo aún más en el mercado alimentos compuestos que aporten un valor no solo nutritivo sino de salud pública. Unos de los más conocidos son los productos lácteos con esteroides o estanoles para disminuir los niveles de colesterol en plasma, pero tendremos alimentos con alcachofa incluida para cuidar de nuestro hígado, alimentos anti-reuma, anti-artrosis, anti-depresión, etc.

Bloque 3: Cohesión Económica y Social

“El” consumidor no existe, existen muchos consumidores distintos y con comportamiento distintos. Incluso la misma persona se comporta como un tipo de consumidor en algunos momentos y para algún producto (por ejemplo, el vino), y como otro tipo con otro producto y momento (por ejemplo, los yogures).

A corto y medio plazo, nuestra sociedad va a vivir una crisis económica sin precedente desde la post-guerra española. Las tendencias observadas durante la crisis del 2008 van a reaparecer, con más fuerza y más duración. Por ejemplo, aumentará la compra de marcas del distribuidor, productos de entrada en gama y de las ofertas que pueden llegar a devaluar a los productos (aceite de oliva o leche).

Al mismo tiempo, la fractura social se agrandará, con consumidores dispuestos a seguir (o, incluso a aumentar) consumiendo productos ecológicos, de calidad certificada.

Las tendencias señaladas en los bloques anteriores no se van a distribuir uniformemente entre las categorías sociales. Existe un riesgo importante de que la brecha social y alimentaria aumente.

Son muchos los factores, fuera del ámbito de este desafío, que influyen sobre la mencionada brecha. Pero existe un campo de investigación específico, el cómo trabajar para que los 6 cambios posibles sean lo más inclusive posible.

CUANDO LA CREATIVIDAD ES UN INGREDIENTE: PROBANDO LO NUEVO Y ALIMENTANDO LA NOVEDAD

“Don’t eat anything your great grandmother wouldn’t recognize as food”
Michael Pollan

En el complejo ecosistema que supone la alimentación, y en la última década, ha cobrado relevancia un concepto holístico que parte desde la influencia

socioeconómica y ambiental de los procesos productivos ligados a la tierra, pasa por el diseño y creación personalizados de ingredientes y alimentos, e integra la calidad nutricional, sensorial y gastronómica del resultado. Los ingredientes, alimentos y procesos se sacan de sus nichos tradicionales de producción y uso para entremezclarse en el laboratorio alimentario. Las ciencias y áreas de conocimiento que dan apoyo a este fenómeno amplían su abanico, y ya la alimentación no se fundamenta en Química, Nutrición, Bromatología o Tecnología de Alimentos, sino también en Sostenibilidad, Diseño, Neuropsicología, Bioactividad, Ciencias Sensoriales, Ómicas, Eficiencia Energética e Inteligencia Artificial. La llegada de las bautizadas como Ciencias Gastronómicas –interacción de las citadas con técnicas culinarias, protocolo y servicio, marketing, comunicación y artes- ha incluido en este panorama lo relacionado con la elaboración culinaria, para su presentación a un público cada vez más individualizado en sus requerimientos nutricionales, contexto sociocultural y condición de salud.

En este ámbito de trabajo para el investigador y el mercado agroalimentario, la generación de “nuevos” alimentos desde el laboratorio y la industria no puede obviarse, pero parece preciso fijar los ejes inspiradores de la generación de estos productos. Un marco ético recomendable para su desarrollo sería aquel basado en las 5S: salubridad, seguridad, sensorialidad, sostenibilidad y solidaridad. Desde esta perspectiva, un alimento creativo no puede ser un capricho elitista o fundamentarse en una “nueva experiencia” para una sociedad ávida de sensaciones. Haga uso de un proceso de investigación/innovación evolutiva o disruptiva, un alimento basado en la creatividad debe ser, por encima de todo, una respuesta:

4. a una demanda expresada o percibida de carácter nutricional, de bienestar o salud,
5. presentada de una forma sensorialmente adecuada y satisfactoria,
6. integrada –o al menos, aceptable- en la perspectiva social y cultural del individuo,
7. tendente a suavizar desequilibrios desde diferentes perspectivas, y
8. transparente en sus objetivos y desarrollo, acompañada siempre de acciones de carácter formativo-divulgativo.

3.1. ¿Son necesarios los alimentos creativos y disruptivos?

Una sólida argumentación frente a la neofobia alimentaria es la primera y más importante de las tareas del investigador en alimentación creativa, y sin ella su labor no tiene sentido porque:

- Son vectores de entrada para el consumo de alimentos e ingredientes con valores diferentes de los meramente nutricionales. Ejemplo es el uso de ingredientes que alivien la pobreza de una minoría social o grupo étnico.
- Facilitan el consumo de alimentos e ingredientes con valores nutricionales irrenunciables pero que presentan graves problemas de aceptación cultural, producción, sostenibilidad o acceso, como pueda ser el caso del consumo de proteína de insectos.
- Atienden a colectivos con necesidades nutricionales, vitales y cognitivas especiales: alimentos funcionales, alimentos para situaciones vitales con compromiso sensorial (ancianos frágiles, pacientes oncológicos, desdentados), alimentos para alergias e intolerancias alimentarias, o alimentos seguros, atractivos y favorecedores de autonomía para trastornos del espectro autista, deterioro cognitivo-sensorial o enfermedades neurodegenerativas.
- Dinamizan la industria agroalimentaria, en un entorno competitivo y permitiendo la reconversión de actividades productivas. Como ejemplo, el uso de algas, microalgas y nuevos productos del mar.
- Permiten avanzar en innovación disruptiva, explorando sinergias con otras ramas del conocimiento. Un ejemplo son los platos preparados basados en combinaciones optimizadas mediante redes neuronales, alimentadas con datos bioquímicos y sensoriales y con puntuaciones en agrado sensorial, novedad y sorpresa.
- Aportan herramientas para la necesaria diversificación alimentaria, mediante posibilidad de adecuación progresiva en composición y/o características sensoriales: así, los basados en texturizaciones y emulsiones, o los alimentos “trampantojo” o simulados.

3.2. ¿Qué características debe reunir un alimento creativo?

En un mercado con una tasa de éxito bastante reducida para los nuevos desarrollos alimentarios, un sólido planteamiento de base y un seguimiento riguroso de las características deseadas por el investigador resultan las mejores garantías.

- Deben presentar sensorialidad adecuada, satisfactoria y educativa, sin ser éste el único determinante ni conducir a meras experiencias novedosas.
- Deben ser saludables, con un correcto aporte nutricional y/o contenido en compuestos funcionales.

- Deben presentar versatilidad en su preparación culinaria y consumo.
- Deben ser satisfactorios desde múltiples puntos de vista éticos: sostenibilidad y atención medioambiental en la producción, y solidaridad en su fabricación, distribución y acceso.
- Deben estar integrados en la culturalidad e historia del individuo o población diana. En muchos casos, este aspecto determinará la edad y extracción social y étnica del consumidor.
- En sus formulaciones debe primarse la sencillez, limitando el número de ingredientes, los procesos numerosos y agresivos y la incorporación de aditivos artificiales, y haciendo uso de estándares tipo GRAS y certificaciones Clean Label.
- Deben ser especialmente transparentes y precisos en su público objetivo y la información de la que se acompañen, basada siempre en divulgación ética y rigurosa y una observación minuciosa de la legislación alimentaria en materia de etiquetado y alegaciones.
- Deben ser de coste asequible, tener una distribución amplia, solidaria y fácil, y presentar suficiente vida útil.

3.3.. ¿Hay nicho para este tipo de alimentos?

Los alimentos creativos aparecen como complementarios a la alimentación basada en el producto fresco y/o escasamente procesado. Siendo ésta el tipo de alimentación que debe predominar, hay espacio para el desarrollo de estos alimentos porque:

- Son muy demandados por los consumidores con perfil “early adopter”: inquietos, exploradores, altamente informados.
- Presentan una significativa aceptación comercial por colectivos con necesidades alimentarias especiales.
- Son alimentos comprometidos con visiones y objetivos a largo plazo, como el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (SDGs): SDG2 *Hambre cero*, SDG3 *Salud y Bienestar*, y SDG12 *Producción y consumo responsables*.
- Su incorporación en la alta cocina y hostelería general resulta más sencilla y altamente ventajosa, repercutiendo importantes beneficios económicos.

4. LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN UN SISTEMA ALIMENTARIO CENTRADO EN EL CONSUMIDOR

La producción de alimentos ha experimentado un gran cambio en las últimas décadas para adaptarse a los avances científicos y sociales hacia una alimentación más saludable, con productos orientados a cubrir necesidades específicas, basada en la necesidad de transparencia y en modelos de negocio inspirados en la economía circular, comprometidos con el reciclaje y la sostenibilidad del planeta. En la actualidad, además de la tradicional relación de la tecnología de alimentos con el sector agropecuario, la innovación tecnológica se vincula con muchos otros sectores, debido a la necesidad de responder a las premisas de una nutrición más avanzada, al progreso en el desarrollo de alimentos de uso específico para la salud, a la aparición de nuevos materiales, a la necesidad de considerar su impacto ambiental en toda la cadena de producción, y a la demanda de un consumidor más conectado, informado, responsable y consciente de sus hábitos. La innovación en el sector tecnológico demanda del pensamiento sistémico en la cadena alimentaria, para incluir a todos sus actores, desde el sector primario hasta el consumidor (*“from farm-to-fork”*).

La participación del consumidor como pieza clave en la producción de alimentos es un elemento que las empresas utilizan, hoy más que nunca, para decidir sus estrategias de producción y comercialización. Hasta hace poco, no muchos consumidores se preocupaban por conocer el origen de los alimentos que llegan a sus platos; sin embargo, el consumidor actual está exigiendo cada vez más transparencia y trazabilidad en lo que consume. El avance de la tecnología de *“blockchain”* proporciona un nuevo entorno para compartir datos y registros digitales, que vincula a productores, distribuidores y minoristas, permitiendo la resolución de problemas, así como conectar con pequeñas tiendas y consumidores, quienes pueden seguir la trazabilidad de los productos simplemente escaneando un código QR.

Aunque descubrir lo que realmente desea el consumidor no es tarea fácil, en la actualidad la salud, la conveniencia, la experiencia y la sostenibilidad se han hecho sustanciales en nuestras decisiones de compra. Por ejemplo, más de un 45% de los consumidores españoles han adquirido algún producto *“bio”* o *“eco”* en 2019. La empresa alimentaria reacciona según estas evidencias, comprendiendo las ventajas de fomentar el desarrollo de las innovaciones en co-creación con el consumidor. En una visión top-down (*“from fork-to-farm”*) desde las cocinas de los consumidores se identifican las necesidades, desafíos y nuevas

ideas, para recopilar las preferencias y aceptación, propiciando la participación del consumidor para configurar, probar y refinar alimentos y/o servicios.

Preocupados por llevar una vida más saludable, la alimentación juega un papel fundamental en la sociedad actual. Un gran número de consumidores están convencidos de la necesidad de mantener una dieta saludable, procurando evitar la ingesta de ingredientes percibidos como perjudiciales, siguiendo un modelo de dieta (vegetariana, vegana, sátvica, macrobiótica) o dietas personalizadas según sus necesidades (sin lactosa, sin gluten, bajo en sal, sin colesterol). Los envases inteligentes, los materiales biodegradables, los recubrimientos comestibles, los métodos de conservación no térmica, el corte por ultrasonidos, la extracción con disolventes comprimidos, la homogenización de alta presión, la ingeniería enzimática y microbiana, son nuevas alternativas tecnológicas presentes en la industria alimentaria moderna que juegan un papel esencial para producir alimentos de calidad y seguridad mejoradas, con características que hacen que se perciban como más sanos. Los productos con propiedades funcionales serán en breve como las “*commodities*”, el público acabará prácticamente rechazando lo que no sea saludable, y se sumará a esta tendencia el clamor de las administraciones públicas, porque un gasto elevado en salud está muy vinculado a una alimentación poco saludable.

Por otro lado, los consumidores son cada vez más conscientes del impacto de sus compras sobre el planeta, y son más responsables de sus actos. Controlar los desperdicios o reciclar son aspectos que, en la actualidad, se tienen muy en cuenta a la hora de comprar alimentos o cocinar. Este cambio de actitud no se refiere únicamente a los propios hábitos del consumidor, sino que incluye una mayor exigencia a las empresas para que promuevan una producción más cuidadosa, comprometida y sostenible. Por este motivo, están surgiendo de forma acelerada modelos de negocio inspirados en la economía circular, comprometidos con el “*upcycling*” (materiales reciclados se transforman en productos de mayor valor) y el “*zero waste*” (cero desperdicio) en favor del medioambiente. Sistemas automatizados que permiten crear plataformas de agricultura para hacer que las plantas crezcan sin necesidad de suelo (*granjas verticales*), la cría de peces en huertos urbanos (*acuaponía*), la impresión 3D para crear microestructuras, productos con proteína de insectos (*entomofagia*), filetes hechos con células (*carne in vitro*) y su extensión a otros alimentos de origen animal como los huevos, la leche o el queso, son algunos de los nuevos desafíos que aborda actualmente la producción de alimentos.

La innovación tecnológica en el sector alimentario debe garantizar la producción a gran escala, dentro de las propias ciudades, el bienestar de los animales, el uso de recursos renovables y el respeto al medio ambiente, para dar respuesta a las necesidades, preferencias y aceptación del consumidor, y para permitirnos vivir de un modo más sostenible y responsable. La nutrición de precisión para prevenir enfermedades, el diseño de productos modulares, la formulación ultrarrápida, los alimentos mínimamente procesados, la aceptación de fuentes alimentarias alternativas, la inteligencia artificial aplicada al análisis de los millones de datos generados en el estudio de todos los aspectos que intervienen en la alimentación y la nutrición, son algunos ejemplos del papel imprescindible del consumidor como co-creador, para contribuir a orientar los objetivos y la innovación del sistema alimentario.

5. NUEVOS MATERIALES SOSTENIBLES COMPATIBLES CON ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL ENVASADO DE ALIMENTOS

Dentro de las tecnologías de conservación de alimentos, el envase ha tenido y sigue teniendo un lugar prominente dado que contribuye directamente a la reducción del desperdicio de alimentos y a la mejora de la calidad y seguridad de los mismos. Sin embargo, el uso abusivo de los materiales plásticos para envase, su elevado impacto en la huella de carbono, su corta vida útil y su modelo económico lineal de ‘producir-usar-tirar’ han convertido a los envases alimentarios en un contaminante potencial difícil de erradicar. La mayor parte de los envases y desechables plásticos para contacto con alimentos no son sostenibles, ya que están hechos en la actualidad de polímeros derivados del petróleo, que son químicamente estables en el medio ambiente, y por tanto, a menos que se incineren, se convierten en un residuo muy duradero. Este problema se acrecienta si se considera que un porcentaje relativamente alto de los envases y otros artículos desechables plásticos terminan en el medio ambiente, incluyendo ríos y mares, generando en algunas de sus formas microplásticos que afectan negativamente a los ecosistemas, e incluso acaban en nuestra dieta.

Como resultado de este panorama indeseable y endémico, consumidores, gobiernos, retailers y otros vectores sociales han trazado una línea que ya se considera irreversible. Es de prever una larga lista de restricciones de uso, que empezarán en el 2021 con los desechables, y cuyo horizonte más ambicioso de limitación será el 2030 con los actuales envases alimentarios. Esta estrategia genéricamente denominada Estrategia de Economía Circular, promovida a nivel europeo desde el “DG Environment” de la Comisión Europea”, ha

comenzado ya con la articulación de mecanismos de acción en forma de Directivas para reducir el consumo de plásticos, prohibir algunos artículos desechables, y en todo caso promover la eliminación de “un solo uso” mediante diferentes iniciativas.

La Economía Circular, que en esencia promueve la sostenibilidad en el uso de los materiales basada en la recuperación de valor y en la no generación de residuo, genera nuevos retos para la investigación en este área. Es evidente que los envases derivados del petróleo seguirán existiendo en los próximos 30 años, pero se les exigirá además que sean útiles en la reducción del desperdicio alimentario y que puedan ser reutilizados y/o reciclables. El reciclado, ya sea mecánico o químico, ofrecerá grandes retos a la comunidad de tecnólogos y científicos. Sin embargo, es bien conocido que los materiales plásticos se degradan durante el reprocesado industrial, lo que hace del reciclado mecánico, basado en la recuperación y reprocesado continuo de los envases plásticos, muy difícil de aplicar de forma generalizada en el medio y largo plazo. Por lo tanto, el proceso de reciclado mecánico con la tecnología actual no ofrece soluciones sostenibles e incluso puede plantear problemas de seguridad alimentaria por la potencial migración de ciertos componentes generados durante el reprocesado. El reciclado químico, que consiste en la aplicación de procesos de depolimerización que permiten convertir a los polímeros de los residuos plásticos en sus monómeros de partida, de forma y manera que se puedan volver a polimerizar repetidamente, sí ofrece más garantías de sostenibilidad. Sin embargo, esta tecnología está en un estado de desarrollo muy temprano, y es por tanto una línea a perseguir por parte de los científicos que trabajan en el área.

Otra alternativa más cercana y complementaria con las tecnologías de reciclaje, pero que todavía conllevará mucha actividad investigadora, está relacionada con el desarrollo de tecnologías de materiales y envasado que se obtienen a partir de la biomasa, y de forma genérica en la puesta a punto de estrategias interdisciplinarias basadas en la Bioeconomía. Esta ruta tendrá que acabar contribuyendo de manera muy importante a la sostenibilidad global, ya que promueve aspectos muy interesantes de utilización y valorización de recursos naturales. Así, la obtención de biopolímeros a partir de recursos renovables ofrece no solo materiales con un impacto menor en la huella de carbono, sino también nuevas posibilidades en cuanto a escenarios de final de vida útil. El ácido poliláctico (PLA), ha sido el paradigma de biopolímero industrializable por mucho tiempo. Sin embargo, los problemas principales que plantea este biopolímero son la competición de los recursos agroalimentarios entre alimentación y producción de plásticos, su baja

tenacidad y resistencia térmica y alta permeabilidad a gases y vapores, y el hecho que de su biodegradación es problemática a menos que se ejecute en condiciones de compostaje industrial. Nuevas líneas emergentes en este área contemplan el desarrollo funcional de polímeros naturales como el almidón, la celulosa y otros polisacáridos, proteínas, lípidos, y de forma más importante los polihidroxicanoatos (PHAs) de origen microbiano, en combinación con nuevos procesos basados en la nanotecnología. En especial los PHAs, ofrecen la posibilidad de ser producidos enteramente en microorganismos existentes en la naturaleza a partir de residuos agroalimentarios o de algas, y en su vertiente más actual e innovadora, a partir de CO₂, e incluso de residuos municipales tales como aguas residuales, hojarasca de parque y jardín, y de la fracción orgánica de los residuos sólidos. Esta línea más novedosa de acercarse a la sostenibilidad en el envasado de alimentos es compatible con estrategias denominadas de Bioeconomía Circular, en donde residuos de la biomasa, agroalimentarios, marinos y municipales se transformarán en productos de mayor valor (“upcycling”). De esta forma, se podrán obtener nuevos materiales de envase que se procesarán mediante rutas tradicionales o emergentes basadas, por ejemplo, en nanotecnología, para hacer envases de un solo uso, que se biodegradarán con el resto de la materia orgánica en plantas de compostaje industrial o doméstico, en vertederos e incluso en medios naturales, cerrando así el círculo.

6. REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

La huella de carbono en los alimentos es una medida de la cantidad total exclusiva de emisiones de gases de efecto invernadero (directamente dióxido de carbono y/o equivalentes expresados en dióxido de carbono) causada directa e indirectamente por la actividad productora y transformadora, y que se acumula durante las etapas de vida de un producto. Entre estos gases se encuentra el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que en su mayoría son liberados por la industria, la agricultura, la ganadería y la combustión de combustibles fósiles. Este indicador ambiental está implantado en numerosos países desde hace años (en España desde 2014). Sin embargo, se observa escasa literatura científica sobre el tema. La mayoría de los estudios han sido realizados por organizaciones particulares y empresas predominantemente guiadas por su sentido comercial más que por su responsabilidad ambiental. Considerando que el consumo de productos alimenticios aporta aproximadamente el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), con la creciente conciencia pública sobre el cambio climático, existe una creciente disposición por

parte de las personas para reducir sus emisiones de GEI mediante cambios en sus hábitos alimenticios. Por lo tanto, si la huella de carbono en los alimentos puede ser una herramienta para verificar las emisiones de un determinado producto o dieta, hay que incrementar las investigaciones de los balances de emisión/fijación. Y esto se debe a que actualmente es difícil determinar el impacto climático causado por un determinado producto, ya que varía dependiendo del tipo de material de origen, sistema de producción, tipo de industria procesadora, empaquetado, origen, transporte, etc.

La huella de carbono de los alimentos, es decir, el impacto de los alimentos en las emisiones de CO₂, es posiblemente uno de los temas más importantes para mejorar la responsabilidad ambiental de la cadena alimentaria y también uno de los temas más discutidos dentro del escenario de cambio climático global de los países desarrollados en este momento. Los agricultores, la industria, el comercio y los consumidores están interesados en reducir el impacto del cambio climático, pero actualmente carecen de los medios e información para abordar el problema de manera adecuada. Por lo tanto, el desafío principal para la ciencia es proporcionar los datos y las herramientas necesarias a los involucrados en el sistema alimentario para comprender e influir en cuestiones clave como el potencial de secuestro de carbono (producido únicamente por las plantas y las algas) y la reducción de las emisiones en producción primaria, tanto vegetal (incluida la reducción de los impactos negativos de determinadas prácticas agrícolas), animal, industria procesadora, y transporte.

Por lo tanto, la absorción de CO₂ por las plantas y las algas constituye un punto importante en el equilibrio global del carbono. Las plantas y las algas tienen la capacidad de captar el CO₂ atmosférico, y mediante procesos fotosintéticos metabolizarlo para la obtención de azúcares y de todos los metabolitos que requieren para el desarrollo de su ciclo vital. En general, se puede concluir que las plantas, a través de la fotosíntesis, extraen el carbono de la atmósfera (en forma de CO₂) y lo convierten en biomasa. En este sentido, la biomasa, que tiende a fluctuar entre 40 y 50% de carbono del peso seco de la planta o alga, puede actuar como un sistema altamente eficaz de fijación de carbono. Por lo tanto, la agricultura puede convertirse en uno de los medios más efectivos para mitigar el aumento del CO₂ atmosférico siempre y cuando se sigan determinadas prácticas agronómicas para la reducción de las emisiones que conlleva. En este sentido, las investigaciones sobre el tratamiento de las tierras, las fertilizaciones, los riegos, las podas y la utilización de los subproductos son fundamentales.

Por otro lado, las investigaciones sobre la reducción de emisiones por los animales son fundamentales. En este sentido, el tipo de animales a consumir, su alimentación, su forma de crecimiento y su tratamiento posterior puede convertirse en una forma efectiva de reducción de emisiones. Por otro lado, la incorporación de nuevas fuentes de alimentos basados en animales invertebrados con la idea de sostenibilidad debe ser investigada.

En cuanto al aspecto energético, la búsqueda de soluciones de generación de energía eléctrica y térmica que en el ciclo de producción de cualquier alimento ayude a reducir la huella de carbono y las emisiones contaminantes será fundamental. Se necesitarán nuevos conceptos de equipos de generación de energía en el que la investigación promueva una gestión más sostenible de ciertos residuos que actualmente se consideran como tal y que requieran una gestión especializada. Por lo tanto, finalmente, en el caso de subproductos o alimentos sobrantes en la cadena de producción, la elección del sistema de gestión de residuos debe entenderse y contabilizarse dentro del cálculo de la huella de carbono independientemente de la consideración como generadores de energía.

7. ACTITUDES ÉTICAS Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE

El Desafío “Por una alimentación saludable en un mundo global y sostenible” permite abrir el debate en torno a la producción y consumo de alimentos, revisando viejos términos, basados en enfoques de tipo sectorial (agrarios), e incorporando otros nuevos de carácter más integral y omnicomprensivos.

Lo primero a resaltar es que, desde hace ya varios años, las campañas de FAO ya no están exclusivamente centradas en la lucha contra el hambre, sino que ahora se enfoca sobre temas relacionados con la alimentación en su conjunto (nutrición, salud, sanidad, efectos ambientales, equilibrio de la dieta...). Ello indica que desde la ONU se aborda el problema desde una perspectiva multidimensional a la luz de los retos que han de afrontarse en este siglo XXI en relación con este tema.

7.1. Las limitaciones de los enfoques sectoriales

En lo que respecta a la “seguridad alimentaria” (derecho de los ciudadanos a una alimentación básica y segura), esta perspectiva sigue la línea de los enfoques sectoriales (agrícolas) basados en la idea de que un aumento de la producción de alimentos es condición indispensable para que se resuelva el problema del hambre en el mundo. Para estos enfoques, no importa cómo ni dónde

se produzcan los alimentos, pues lo relevante es que exista un elevado nivel de producción agraria a nivel mundial, y que el comercio sea el que se encargue de asegurar el abastecimiento de la población.

Sin embargo, es un hecho que los enfoques sectoriales no están facilitando que se alcancen los objetivos previstos en la lucha contra el hambre (según FAO existen todavía 800 millones de personas en situación de hambre y desnutrición). Además, están propiciando la expansión de modelos intensivos de producción y consumo que tienen graves efectos en el deterioro de los recursos naturales y que generan importantes desequilibrios en materia de nutrición y abastecimiento de alimentos a las poblaciones más desfavorecidas. Estos modelos, unidos a la apertura total de los mercados, provocan también una fuerte volatilidad de los precios agrícolas, con el consiguiente empobrecimiento y abandono de las explotaciones de tipo campesino en distintas zonas del planeta. Esto es lo que explica gran parte del malestar de los agricultores en muchos países.

Por su parte, la perspectiva de la “soberanía alimentaria” (derecho de los pueblos a alimentarse por sí mismos) se enmarca también en un enfoque sectorial (agrario), centrado además en un modo de ver la relación Norte-Sur como una relación conflictiva (el hambre y la pobreza del Sur como consecuencia de la abundancia y la riqueza del Norte). El derecho de los pueblos a su propia alimentación es planteado por este enfoque sobre la base de una apuesta firme por los modelos de tipo campesino, denunciando las estrategias de las multinacionales (productoras de semillas, pesticidas, fertilizantes...) y rechazando las políticas que protegen a la agricultura en los países ricos (como la PAC europea).

Sin embargo, y dado que estos problemas están presentes en el conjunto del planeta (hambre y malnutrición hay tanto en los países ricos, como en los pobres, aunque en diferente magnitud y con expresiones distintas), el enfoque de la “soberanía alimentaria” debería ser válido para todos los países. También los países ricos tienen derecho a alimentarse por sí mismos, lo que justificaría la existencia de políticas agrarias destinadas a promover sistemas agrícolas capaces de asegurar el abastecimiento de alimentos a sus poblaciones. Otra cosa diferente es si esas políticas proteccionistas tienen o no efectos distorsionadores en los mercados mundiales, y si acaban afectando de modo negativo a los campesinos de los países pobres, tal como ha ocurrido con ciertas medidas (como los precios de garantía o las ayudas a la producción) hoy ya erradicadas de la política agraria europea.

7.2. La “ciudadanía alimentaria” como enfoque integrador

Las limitaciones de los enfoques sectoriales ha hecho que surjan nuevas perspectivas, más integrales y multidimensionales, a la hora de tratar estos problemas. Una de ellas es la perspectiva de la “ciudadanía alimentaria” (acuñada por autores como Renting, Gómez Benito, Lozano...), según la cual los ciudadanos tienen el *derecho* a una alimentación sana y de calidad, pero también el *deber* de realizar un consumo responsable de alimentos, informándose de lo que consumen y valorando los efectos que ello tiene en las generaciones futuras, en otras poblaciones (de nuestro entorno más cercano, y del resto de mundo) y en el medio ambiente.

Esta perspectiva concibe, además, a los productores y consumidores de alimentos (de los países ricos y de los países pobres) como sujetos activos con derecho a participar en el ámbito público para reorientar los modelos de producción y consumo. Para ello promueve la creación de movimientos sociales e impulsa el desarrollo de experiencias de cooperación entre productores y consumidores (canales cortos, mercados locales, *slow food*...).

Como contraste con el enfoque de la “seguridad alimentaria”, esta perspectiva más integral plantea que el hambre y la malnutrición no son sólo un problema de producción de alimentos, sino de modelos de desarrollo. Es una perspectiva de naturaleza ética, que está, además, en sintonía con los planteamientos de la “ecología integral” de la que habla el Papa Francisco en su encíclica “*Laudato si*”.

Según esta nueva perspectiva, el problema de la alimentación no es exclusivo de los países pobres (a los que se les tendría que ayudar por razones humanitarias), sino un problema global que se manifiesta tanto en los países desarrollados (obesidad, dietas desequilibradas...), como en los países en desarrollo (hambre y desnutrición).

El enfoque de la “ciudadanía alimentaria” supera además el enfoque sectorial de la “soberanía alimentaria”, subsumiendo las ideas sectoriales de éste en los planteamientos más amplios e integrales de aquél. Por ejemplo, declarar, como hace la “soberanía alimentaria”, el derecho de los ciudadanos a la alimentación y de los pueblos a alimentarse por sí mismos, no garantiza que los alimentos sean sanos y de calidad, si ese derecho no va unido al de estar informados sobre lo que comemos, y al deber de ejercer una actitud proactiva, tanto a nivel individual, como colectivo.

Como sujetos activos, los ciudadanos deben informarse sobre los modelos de producción de alimentos y asegurarse de que lo que se consume responde a pautas válidas de sostenibilidad ambiental (incluyendo temas como el del bienestar animal). Comprobar, además, que no se han producido en el marco de políticas perjudiciales para los campesinos de otras partes del mundo, y finalmente movilizarse para emprender acciones que busquen sistemas alternativos a los modelos de producción y consumo convencionales. Es un consumo responsable que también afecta a la dieta alimentaria, incidiendo en las nuevas tendencias alimentarias (vegetarianismo, veganismo...) que emergen en determinados segmentos de la población.

Y es ahí en esa perspectiva más amplia e integral donde adquiere sentido el enfoque de la “ciudadanía alimentaria”, al abrir nuevas perspectivas de análisis (interacción productores-consumidores, comportamientos consumistas, actitudes consumeristas, el papel de la gran distribución, las políticas públicas...) y nuevos retos a los investigadores.

8. HERRAMIENTAS PARA DINAMIZAR Y FOMENTAR UNA NUTRICIÓN CONSCIENTE.

La alimentación es una parte esencial de nuestra vida, es una fuente de placer y es la principal oportunidad que tenemos para celebrar, compartir y disfrutar con otras personas de los momentos importantes de la vida. Nuestros hábitos alimenticios están enraizados en nuestra cultura, en las costumbres familiares, en el país donde nacemos, residimos, etc. Dichos hábitos suelen ser inofensivos para la salud, pero en ocasiones aparecen hábitos inconscientes que acarrearán un desajuste en nuestra relación con la comida.

En nuestra acelerada sociedad, debido a la multitud de tareas que asumimos diariamente, comemos con rapidez y de forma inconsciente. Esto tiene serias implicaciones para la salud a medio y largo plazo, como la aparición de obesidad y otros trastornos alimenticios. Además, y muy importante, comer produce satisfacción inmediata, por lo que puede utilizarse para aliviar sensaciones de ansiedad, aburrimiento, insatisfacción o tristeza. El proceso de comer esconde, en estos casos, un intento de calmar nuestro sufrimiento originándose una lucha interna con la comida que podría desembocar en una agonía emocional intensa, junto con sentimientos de culpabilidad y vergüenza.

En Estados Unidos, hace una década aparecieron una serie de herramientas destinadas a re-aprender cómo poner consciencia en el proceso de la

alimentación, naciendo el *Mindful Eating* o “Alimentación Consciente”. Dicha iniciativa se propagó rápidamente por los países occidentales. Definimos “alimentación consciente” como la habilidad para tomar consciencia de los pensamientos, las sensaciones físicas y emocionales que aparecen en relación con el proceso de comer. Estas herramientas están englobadas dentro del concepto más amplio de *Mindfulness* o “Atención Plena”, disciplina que enseña cómo prestar atención al momento presente, con aceptación y curiosidad. Como resultado de comer conscientemente nos percatamos de los patrones mentales que siguen nuestros hábitos alimenticios, con el fin de crear otros más saludables. Esta habilidad ha de ser cultivada (re-aprendida) a través de dirigir la atención deliberada al proceso de comer. Los niños pequeños conservan la facultad de prestar atención al entorno que les rodea, y por tanto a lo que comen, cualidad que perdemos al pasar el tiempo.

Cuando se practica la alimentación consciente se promueve el aprendizaje para elegir libremente comer alimentos que son, a la vez que placenteros para nosotros, nutritivos para nuestro cuerpo, utilizando todos los sentidos (gusto, olfato, vista, oído y tacto) para explorar, saborear y disfrutar. Desarrollamos la destreza para reconocer qué sienta bien a nuestro cuerpo, lo que repercutirá en la salud, mejorando nuestro bienestar físico y mental y nuestra calidad de vida. Además, nos lleva a descubrir las señales fisiológicas de plenitud y saciedad y a distinguir entre el hambre física y el hambre emocional. El hambre física se siente gradualmente, se nota en el estómago, apetece cualquier alimento y es fácil de satisfacer. El hambre emocional, sin embargo, se siente repentinamente, es mental, apetecen alimentos específicos, generalmente hipercalóricos, y es difícil de satisfacer (porque tratas de complacer una emoción). El hambre emocional suele desembocar en la sobre-ingesta compulsiva de alimentos no saludables, comprometiendo nuestra salud.

Publicaciones científicas avalan que el cultivo de la alimentación consciente promueve plasticidad neuronal en diversas regiones de la corteza prefrontal implicadas en cualidades como la disciplina, la voluntad y el autocontrol. Fomentar la nutrición consciente permite, por tanto, sobrellevar “ciertas incomodidades”, desarrollando la resiliencia o capacidad para tolerar la adversidad, lo que a su vez nos fortalece psicológicamente. El hombre actual siente pánico ante el pensamiento de “pasar hambre”. Se trata de un sesgo negativo de la evolución del *Homo sapiens*. Durante decenas de miles de años nuestros antepasados sufrieron grandes hambrunas y el genoma lleva la impronta de que pasar hambre significa morir.

Algunos consejos para comenzar a aplicar la alimentación consciente serían: sentarse bien a la mesa y comer sin interrupciones, como televisión, móvil u ordenador; llevarse a la boca la cantidad adecuada de alimento para saborearlo y mastcarlo bien, ayudando así al proceso digestivo; comer despacio intentando dejar los cubiertos entre bocado y bocado; darse cuenta de las necesidades energéticas del cuerpo según nuestra actividad diaria.

Es imprescindible fomentar la educación en alimentación saludable y consciente en la población, especialmente en los colegios, comenzando por los alumnos de edades tempranas. Es una manera de prevenir futuras patologías, muchas de ellas debidas al desconocimiento de los hábitos alimenticios saludables.

9. ¿POR QUÉ NO ES POSIBLE UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE PARA TODOS? UNA RESPUESTA A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE LOS ACTORES DEL SISTEMA ALIMENTARIO

En una sociedad como la española, con suficiencia alimentaria, cabría esperar un tránsito progresivo hacia una alimentación cada vez más saludable y sostenible y accesible a todas las capas sociales. Hay que preguntarse por qué aún no hemos alcanzado este *ideal alimentario*. Una de las respuestas posibles es la difícil gobernanza entre los actores del sistema alimentario, con tensiones y conflictos que impiden consensuar acciones en favor de este arquetipo. A continuación, se ejemplifican algunos de los desencuentros.

9.1. Relaciones entre los consumidores/ciudadanos y las administraciones públicas

La regulación alimentaria, muy desarrollada en España, permite un entorno más seguro para el consumo de alimentos, pero afecta de manera desigual a las empresas alimentarias y las más débiles tienen más dificultades para adaptarse a los requisitos regulatorios. A la vez que esto sucede, la ciudadanía aumenta su percepción del riesgo y reclama mayor regulación ante el riesgo alimentario. Aparece aquí un escenario conflictivo entre los partidarios de la regulación de los procesos que intervienen en la cadena alimentaria, respaldados por una opinión pública más crítica y exigente; y los partidarios de una menor regulación, que auspician el modelo de autocontrol.

9.2. Relaciones entre los consumidores/ciudadanos y las empresas alimentarias

La existencia de agentes públicos de arbitraje es una muestra de que se producen situaciones de tensión en las relaciones entre consumidores y empresas. Para comprender estos conflictos cabe considerar la cuestión de si las relaciones entre alimentación y salud son un asunto individual, es decir, de hábitos alimentarios individuales basados en cuestiones como la educación, los estilos de vida, los gustos o las preferencias alimentarias, o si además de ello, esos hábitos tienen también raíces estructurales que escapan a las decisiones individuales. El conflicto se muestra a través de la publicidad, donde los intereses legítimos de la industria para promover y ofrecer sus productos chocan con la necesaria protección de los más vulnerables.

9.3. Relaciones entre las asociaciones de consumidores y las empresas

Los nuevos valores asociados al consumo ofrecen respuestas de los ciudadanos cada vez más politizadas: boycott y buycott hacia empresas y alimentos, compras de comercio justo o ecológico, grupos de consumo directo al productor, opciones de consumo por justicia social o sostenibilidad. Con frecuencia este consumo político se difumina en el anonimato y las asociaciones de consumidores, que son la cara organizada de este consumidor anónimo, no actúan con la misma contundencia y presión con la que lo hacen con otros productos o servicios, como los financieros o los tecnológicos. Tampoco se detecta un respaldo a esta politización del consumo en los movimientos sociales tradicionales (sindicatos y partidos políticos) que siguen centrados en los problemas de la producción agroalimentaria y prestando escasa atención al consumo. Y hay nuevos movimientos alimentarios, que hace unos años eran marginales, y hoy están integrados en los debates mediáticos acerca de una alimentación más sana, sostenible y justa. Hay un nuevo escenario de consumo al que no se le está prestando la necesaria atención.

9.4. Relaciones entre las industrias alimentarias y las administraciones

Históricamente los intereses de las industrias han contado con el respaldo del Estado. Pero también común es el desencuentro entre las administraciones y la industria alimentaria: la iniciativa del Ministerio de Sanidad para poner control sobre el consumo de alcohol entre la población más joven se vio cuestionada por los productores de bebidas alcohólicas; el código PAOS (reglas éticas sobre la publicidad para frenar la obesidad) parece estar activo, pero no hay sanciones a quien lo incumple. Hay múltiples ejemplos en los que se pone de manifiesto que existe una falta de acuerdo para responder con rotundidad en favor de la ciudadanía.

9.5. Relaciones entre los científicos

La obesidad es un buen caso para ejemplificar las desavenencias científicas en favor de una investigación orientada hacia el logro de una alimentación sana y sostenible. En los problemas alimentarios ligados a la salud como el sobrepeso y la obesidad, existe una fuerte dominación de la concepción biomédica de la alimentación y de sus trastornos, aunque ya se ha confirmado el origen social de esta epidemia. Los expertos del campo de la salud y los de la sociedad no parecen dispuestos a dialogar sobre la mejor manera de afrontar un problema de salud pública como éste. La interdisciplinariedad, la cooperación entre ciencias, está muy lejos de lograrse. La rigidez de las disciplinas científicas para asumir postulados y metodologías de otras ciencias es una dificultad importante, pero las estructuras de la ciencia también dificultan esta colaboración.

En definitiva, para contar con una alimentación saludable, sostenible y justa es necesario hacer un esfuerzo para organizar las relaciones entre los actores del sistema alimentario. Explorar con rigor científico estas relaciones es una prioridad para lograr la necesaria gobernanza alimentaria.

RESUMEN

En este capítulo presentamos algunos retos de la relación entre el cambio tecnológico y el empleo en relación a las nuevas condiciones del mercado laboral, en general y respecto a las dinámicas del sistema científico. También facilitamos una visión general de la posición privilegiada del CSIC para abordar estos aspectos en una agenda de investigación interdisciplinar en Ciencias Sociales y Humanidades, preferentemente basada en una sólida comunicación con investigadores del CSIC de otras áreas para así poder comprender las fuentes y las repercusiones más amplias del cambio tecnológico.

DESAFÍO G

EL CAMBIO TECNOLÓGICO Y SU EFECTO EN EL EMPLEO

CoordinadoresJordi Brandts Bernad
(IAE, CSIC)Catalina Martínez García
(IPP, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

El miedo al desempleo tecnológico es recurrente en la historia de la humanidad. Ya en la década de 1930, Keynes se refería a él como una fase temporal de inadaptación. Sin embargo, como se dijo treinta años después: ‘la tecnología elimina empleos, no trabajo’ (Bowen 1966, p. 9). El cambio tecnológico afecta tanto al tipo de empleos demandados como a su remuneración, pero la pregunta es, si se eliminan algunos empleos, ¿cuáles se crean?

Como subrayó la OCDE en 2019, «el 14 % de los empleos existentes podrían desaparecer como consecuencia de la automatización en los próximos 15-20 años, y es posible que un 32 % adicional cambie radicalmente a medida que se automaticen las tareas individuales. Muchas personas y comunidades se han quedado atrás a causa de la globalización y persiste una brecha digital en el acceso a las nuevas tecnologías, lo que se traduce en desigualdades por razones de edad, género y socio-económicas. No todos han sido capaces de beneficiarse de los mejores empleos que han se han ido creando, y muchos se han quedado atrapados en acuerdos de trabajo precarios con un escaso salario y un acceso limitado o nulo a la protección social, la formación continua y la negociación colectiva. Además, existe una preocupación muy real por el llamado ‘vaciado’ de la clase media, ya que los avances tecnológicos han ido acompañados de la aparición de empleos precarios y de inferior calidad. En algunos países, por ejemplo, los trabajadores con los empleos más atípicos tienen entre un 40 y un 50 % menos de probabilidades de recibir algún tipo de

subsidio cuando están desempleados que el resto. Asimismo, en los países de la OCDE, los adultos poco cualificados tienen, por término medio, 40 puntos porcentuales menos de probabilidad de recibir formación que los más cualificados» (OCDE, 2019).

En cambio, también está surgiendo una economía colaborativa caracterizada por nuevas formas de trabajo que pueden inclinar la balanza hacia una mayor inclusión, si se toman medidas para proteger a los menos favorecidos y no se agravan las desigualdades. Estas nuevas formas de trabajo implican una mayor flexibilidad laboral, trabajo desde casa, empleos a tiempo parcial, plataformas colectivas, trabajo compartido, jubilación gradual, etc. En la encuesta sobre economía colaborativa y empleo de la Unión Europea, los trabajadores citan la preferencia por flexibilidad como la motivación para optar por estas formas de trabajo (OCDE, 2019).

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo clasificó estas nuevas formas de trabajo en una o varias de las siguientes categorías (Mandl y Biletta 2018), que reproducimos a continuación:

- *relaciones entre empleadores y empleados diferentes de las relaciones laborales establecidas 1 a 1;*
- *prestación de trabajo de forma discontinua/intermitente o durante periodos de tiempo muy limitados en lugar de prestación de forma continuada o regular;*
- *redes de contactos y acuerdos de cooperación entre autónomos — especialmente los que trabajan por cuenta propia— que van más allá de relaciones normales en la cadena de suministro, del uso compartido de locales o de llevar a cabo proyectos.*

La protección de los trabajadores en estos nuevos entornos es también un asunto de gran importancia. Los regímenes de bienestar y la negociación colectiva no deben olvidar los derechos de las mujeres, los inmigrantes y otras minorías, que tienden a adoptar estas nuevas formas de trabajo más que otros grupos.

En el resto del capítulo presentamos algunos de los retos de la relación entre el cambio tecnológico y el empleo en relación a las nuevas condiciones del mercado laboral, en general y respecto a las dinámicas del sistema científico. También facilitamos una visión general de la posición privilegiada del CSIC para abordar estos aspectos en una agenda de investigación interdisciplinar en Ciencias Sociales y Humanidades, preferentemente basada en una sólida comunicación con investigadores del CSIC de otras áreas para así comprender las fuentes y las repercusiones más amplias del cambio técnico.

2. PUNTOS CLAVE DE DESAFÍO

El CSIC es una organización receptiva que apoya y desarrolla la investigación de alta calidad. Uno de los objetivos en Ciencias Sociales es promover el conocimiento de sociedades, economías y sistemas políticos y aportar la mejor evidencia disponible para mejorar las políticas públicas. Como organismo público de investigación, el CSIC mantiene un compromiso con el uso eficiente de los recursos públicos de I+D, que se ve afectado por cambios en el sistema científico derivados de las tendencias sociales generales. En este contexto es también importante identificar los desafíos que los organismos públicos de investigación afrontarán en el futuro como consecuencia del cambio tecnológico. A continuación presentamos algunas de las cuestiones más relevantes en relación con el cambio tecnológico y su impacto en el empleo, primero para la sociedad en general y, después, respecto a las dinámicas del sistema científico.

2.1. Desafíos sociales

Automatización

La repercusión del cambio tecnológico y la transformación digital en los mercados laborales y el contexto laboral tiene diversas dimensiones. La primera es la repercusión en el número total de empleos. El miedo a que la adopción de diferentes tipos de maquinaria diera lugar a una disminución en el número total de empleos y, de ahí, a un desempleo a gran escala no es nuevo, pues data de las rebeliones del movimiento ludita y algunos precedentes históricos. Por el momento, esta preocupación no parece estar justificada: el número de empleados ha ido aumentando de forma constante a lo largo de la historia.

Sin embargo, ahora es un buen momento para reevaluar si los formidables avances en tecnologías de la información y digitalización que estamos presenciando se traducirán, en esta ocasión, en una reducción en el empleo y, lo que es más importante, qué efectos pueden tener estos cambios en las nuevas formas de trabajo y el bienestar social en general. Trabajos recientes sugieren, una vez más, que no afecta verdaderamente al número total de empleos (Autor, 2015). Esto es así por la complementariedad entre puestos de trabajo, el aumento de la demanda global debido al incremento de la productividad y la aparición de nuevas ideas y nuevos empleos. En general, el cambio tecnológico puede ser un proceso positivo, ya que libera a las personas de tareas repetitivas y poco placenteras, aunque no hay que olvidar que también puede tener efectos negativos.

Polarización del empleo

Las dos últimas décadas han presenciado un cambio en el tratamiento académico del efecto del cambio tecnológico en el empleo. A finales del siglo XX, la teoría principal (Autor y Katz 1999; Autor et al. 1998) consistía en que el cambio tecnológico influía en el empleo a través de las cualificaciones. En este sentido, cualquier cambio tecnológico generaba demanda de nuevas cualificaciones: beneficiaba a las más escasas y perjudicaba a las inferiores, más abundantes, en términos de empleos y salarios.

A principios de este siglo surgió una nueva teoría (Autor et al. 2003; Autor y Price 2013) que hace hincapié en la rutinización y sostiene que los trabajos que puedan automatizarse con facilidad tienden a desaparecer. Curiosamente, estos empleos ocupan una posición intermedia en el mercado laboral en cuanto a salario y prestigio profesional. Se trata de trabajadores de oficina, operarios manuales y operarios de fábricas.

Frente al declive de estos empleos intermedios, los dos extremos del mercado laboral en cambio prosperan. En el extremo más bajo de la escala profesional y salarial, se incrementa la demanda de servicios personales y asistentes sociales. Estos son empleos de baja cualificación y salarios reducidos, pero actualmente muy demandados. En la cima del mercado laboral, la demanda de ocupaciones más cualificadas como los directores, profesionales y técnicos también aumenta. Este proceso que consiste en el incremento en los dos extremos de la escala profesional se conoce como *polarización del empleo*.

Hay bastante evidencia empírica sobre esta polarización en muchos países, incluida España. Según Anghel et al. (2014) la Gran Recesión favoreció el incremento de la polarización del empleo en España. Fernández (2019) obtiene el mismo resultado para 16 países europeos. Sebastián (2018) confirma el efecto de la rutinización y la informatización de los empleos sobre el crecimiento de la polarización laboral. En España, entre 1994 y 2014, se observa una desaparición gradual de empleos situados en la mitad de la escala salarial. El destino de estos trabajadores con salarios intermedios en el mercado laboral depende de sus cualificaciones: los que no tienen educación superior tienden a ocupar empleos de baja cualificación, mientras que los graduados universitarios se mueven hacia el segmento superior del mercado.

Relaciones sociales en las nuevas condiciones del mercado laboral

Una cuestión crucial es si el cambio tecnológico afecta a las personas psicológicamente y de qué manera. Las relaciones en el trabajo no sólo se basan en los

incentivos monetarios, también dependen de la motivación intrínseca por el trabajo o muchas otras dimensiones de las relaciones entre las personas en el trabajo, como la comparación social, los vínculos sociales y la reciprocidad. Estos aspectos de la motivación personal se han analizado cuidadosamente en la economía experimental y conductual, así como en otras ciencias sociales. Cooper y Kagel (2015) analizan la literatura sobre las preferencias sociales, sobre todo en economía. El término *preferencias sociales* hace referencia al hecho de que las preferencias de las personas no suelen ser totalmente egoístas, sino que dependen en parte del bienestar de los demás y de circunstancias relativas a la interacción entre personas.

El tema específico de las relaciones en el trabajo lo han estudiado recientemente Charness et al. (2020). Existe una literatura muy extensa al respecto y aquí podemos ofrecer solo unas pinceladas sobre algunas cuestiones relevantes. Estos temas pueden cobrar cada vez más importancia debido al auge de los entornos laborales en los que gran parte de las compensaciones por rendimiento son discrecionales y no se encuentran totalmente vinculadas a contratos formales. En este tipo de situaciones adquiere relevancia el llamado *intercambio de regalos* entre los trabajadores, y entre los trabajadores y los empresarios (Akerlof, 1982; Fehr et al. 1993), lo que puede resultar particularmente importante en ocupaciones con tareas complejas y creativas.

La motivación intrínseca es el impulso interno que hace que la gente trabaje, no por recompensas externas, sino porque trabajar es en sí mismo interesante y placentero. En la mayoría de los casos, las personas se esfuerzan en el trabajo por una combinación de motivación extrínseca e intrínseca. Las personas crean vínculos sociales mediante interacciones repetidas, y el grado de solidez de estos vínculos, o el hecho de que sean positivos o negativos, depende de las características de la interacción. De igual forma, a menudo adoptan comportamientos recíprocos, que pueden ser positivos, en el sentido de que tienden a recompensar el comportamiento favorable de los demás con un comportamiento también favorable, como negativos, al castigar el mal comportamiento con el mal comportamiento. Finalmente, tienen una marcada tendencia a compararse a sí mismos con los demás y a verse afectados por tales comparaciones.

Existen otras dimensiones de la sociabilidad que interactúan con las relaciones en el trabajo, como la percepción de la equidad de los procedimientos. La cuestión es saber cómo se verán afectados todos estos elementos motivacionales por los reajustes de las relaciones laborales como consecuencia del

cambio tecnológico. Por ejemplo, los nuevos ajustes laborales pueden dar lugar a cambios en el seguimiento y control, y esto puede repercutir en el rendimiento (Falk y Kosfeld, 2006).

Otro contexto en el que los cambios en los ajustes laborales pueden estar afectando la motivación consiste en la importancia creciente del trabajo en línea y desde casa. El descenso en la supervisión directa que conlleva este tipo de trabajos puede tener importantes implicaciones, que en este momento son difíciles de valorar. Una implicación distinta que conlleva trabajar en tales entornos es la falta de contacto con los compañeros de trabajo. Una investigación reciente (Bloom et al., 2015) ha obtenido resultados dispares sobre esta cuestión, lo que indica que es necesario profundizar más en la cuestión para disponer de una visión más completa.

Otra cuestión relevante es la repercusión de un posible aumento de la desigualdad salarial, debido al cambio tecnológico, sobre la motivación y el esfuerzo de los trabajadores. Bewley (2002) y Card et al. (2012) han sugerido que las comparaciones salariales son un determinante muy importante del esfuerzo realizado por los trabajadores. Mediante el uso de encuestas y datos experimentales, Gächter y Thöni (2010) y Clark et al. (2010) estudian el efecto de la comparación social sobre el esfuerzo que llevan a cabo trabajadores con la misma productividad. Sus conclusiones muestran que la comparación social sí importa, pero la forma en que afecta las decisiones de los trabajadores es compleja. Cuando los trabajadores tienen diferentes niveles de productividad y es posible mantener los salarios en secreto, la comparación social se vuelve más multidimensional y difícil, y los efectos de la repercusión del cambio tecnológico serán más difíciles de determinar. La comparación social es, por tanto, un asunto complejo y no hay que sacar conclusiones precipitadas sobre sus efectos. Sin embargo, si el cambio tecnológico conduce a una gran desigualdad salarial, estas diferencias pueden resultar muy notables y repercutir negativamente en la motivación de los trabajadores.

El estudio sistemático de estos cambios debería ser abordado desde las ciencias sociales y beneficiarse de la investigación interdisciplinar. También es importante que se usen los métodos adecuados para poder estudiar vínculos causales y averiguar los mecanismos específicos que hay detrás de los fenómenos observados. Además, en caso de que las consecuencias del cambio técnico sean negativas, será importante poder identificar qué intervenciones sociales y de gestión serían necesarias para contrarrestarlas.

Desafíos más amplios

Aparte de los temas que se acaban de discutir, hay otros retos más amplios que también merecen atención:

1. Cómo redistribuir el trabajo entre los miembros del hogar y los grupos de la sociedad al considerar el reparto del trabajo a gran escala.
2. Cómo organizar una sociedad del ocio.
3. Cómo repartir la propiedad de los “robots” al considerar el reparto de los beneficios del cambio tecnológico.
4. Cómo desvincular los derechos ciudadanos y el bienestar psicológico de la situación del mercado laboral
5. Cómo conciliar los patrones de consumo y la sostenibilidad del planeta para poder trabajar a distancia pero consumir localmente.
6. Cómo abordar la precarización y la dualización en el mercado laboral científico en contextos caracterizados por la automatización, la colaboración y la polarización en la ciencia.

2.2. Dinámicas del sistema científico

Los desafíos sociales descritos en el apartado anterior también podrían aplicarse a algunas de las dinámicas de transformación de las actividades de investigación y los sistemas científicos.

La automatización del trabajo científico está relacionada con el incremento de las inversiones en capital y equipos necesarios para llevar a cabo las actividades de investigación. La automatización también tiene que ver con la expansión de la colaboración científica y la *ciencia en equipo*, y el efecto más importante es la demanda de nuevas competencias.

La polarización y la dualización están relacionadas sólo en parte con la tecnología en las actividades de investigación y, probablemente, están mucho más vinculadas a una nueva división del trabajo. La forma en que la ciencia ha operado tradicionalmente (sistema de tutoría y aprendizaje) también ha cambiado tras los nuevos procesos de masificación.

En el mercado laboral científico, las relaciones sociales y las nuevas condiciones del mercado laboral se rigen principalmente por características institucionales específicas de los mercados laborales en los diferentes países; esto, más que los efectos del cambio técnico, es el principal factor a considerar. Si la precarización (por ejemplo, los salarios bajos y los altos niveles de contratos de duración determinada) de las condiciones laborales se instala

en el sistema científico, los efectos serán graves, no sólo en lo relativo al estrés de los científicos, sino también a la disminución de su creatividad, niveles de excelencia y calidad y, a medio plazo, a que la ciencia sea menos atractiva.

3. LA POSICIÓN PRIVILEGIADA DEL CSIC GRACIAS A LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Hasta aquí, hemos destacado los aspectos económicos del debate actual sobre los efectos del cambio tecnológico en el empleo. Sin embargo, el debate es mucho más amplio, ya que, además de los aspectos económicos, implica otros aspectos, tales como los políticos, sociales, psicológicos, históricos y muchos otros que el CSIC puede abordar desde la posición privilegiada que le da el hecho de ser una institución interdisciplinar. Éstas y otras cuestiones relacionadas directa e indirectamente con los efectos del cambio tecnológico en el empleo desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades podrían ser incluidas en una agenda de investigación científica que tenga en cuenta todas las líneas temáticas que se muestran en la figura nº 1.



Figura 1: Líneas temáticas para una agenda interdisciplinar de investigación

Esa amplia agenda de investigación podría ser desarrollada por los investigadores de ciencias sociales y humanidades del CSIC mediante proyectos relacionados con esas nueve líneas temáticas. Las carreras profesionales de

académicos y científicos también se ven afectadas por las nuevas formas de trabajo, experimentando los efectos del cambio tecnológico y la globalización, por lo que el estudio de estos efectos ocuparía también un lugar importante en esta agenda de trabajo.

En la Tabla nº 1 se presenta una selección, no exhaustiva, de los investigadores del CSIC cuyas líneas de investigación guardan relación con las nueve incluidas en la Figura nº 1. No obstante, en esta lista se podría incluir a investigadores de otras áreas del CSIC que podrían igualmente contribuir a ese objetivo, aprovechándose de ese modo las ventajas que ofrece el CSIC en materia de transdisciplinariedad. Todos los investigadores, sean o no de ciencias sociales y humanidades, que trabajan en temas relacionados con el cambio tecnológico y sus efectos en el empleo, deberían ser, por tanto, incluidos en esta agenda de investigación si queremos que sea verdaderamente interdisciplinar. Sólo a través de un diálogo entre los investigadores del área de humanidades y ciencias sociales y los de otras áreas del CSIC, podrán plantearse enfoques más novedosos y radicales de investigación y podrán alcanzarse resultados más innovadores y de mayor alcance.

Tabla 1. Ejemplos de investigadores del CSIC en humanidades y ciencias sociales en líneas de investigación relacionadas con el cambio técnico y sus efectos en el empleo – selección no exhaustiva

TEMA	INSTITUTO	INVESTIGADOR	DISCIPLINA	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA TECNOLOGÍA Y EL EMPLEO	PUBLICACIONES/ PROYECTOS
Confianza y relaciones sociales / Género	IAE	Jordi Brandts	Economía	Psicología y economía, género, preferencias sociales	Distributional concerns, social status ranking, gender
Mercados de trabajo / Nuevas formas de trabajo	IAE	Ana Rute Cardoso	Economía	Economía laboral, economía de la desigualdad	Labor economics, economics of inequality, gender
Cambio tecnológico/ Globalización / Mercados de trabajo / Nuevas formas de trabajo	IPP	Catalina Martínez	Economía	Empleo en ciencia y tecnología, patentes e inventores, plataformas de microtrabajo	Innovation capabilities and S&T workers, Patents and inventors, Pasteur's quadrant, economics of software and software patents, microwork platforms
Confianza y relaciones sociales / Nuevas formas de trabajo	IPP	Luis Miller	Sociología	Cualificaciones y empleo	Youth employment, minorities and jobs, income inequality
Mercados de trabajo / Género / Educación y capacidades	IPP	Laura Cruz	Sociología	Empleo en ciencia y tecnología, carreras académicas, género, internacionalización	Academic employment and careers, Innovation capabilities and S&T workers, International research mobility, gender
Mercados de trabajo /Cambio tecnológico / Género / Educación y capacidades	IPP	Luis Sanz	Ciencia política	Empleo en ciencia y tecnología, carreras académicas, género	Academic employment and careers, Innovation capabilities and S&T workers, gender
Globalización / Cambio tecnológico	IPP	Adelheid Holl	Economía	Ubicación organización espacial de la actividad económica	Multinationals, corporate investment in R&D, logistics
Medio ambiente	IPP	Pablo del Río	Economía	Empleo en sectores verdes, ecoinnovación	Employment in renewable energy sectors
Regímenes de bienestar	IPP	José Fernández Albertos	Ciencia política	Economía política, bienestar, ingresos y fiscalidad	Income perception and taxation, basic income
Regímenes de bienestar	IPP	Eloisa del Pino	Ciencia política	Regímenes de bienestar, sistemas sanitarios	Welfare regimes, healthcare systems
Regímenes de bienestar	IPP	Javier Moreno	Sociología	Regímenes de bienestar, inmigración y políticas urbanas	Welfare regimes, immigration and urban policies
Regímenes de bienestar	IPP	Luis Moreno	Sociología	Regímenes de bienestar, democracias robotizadas	Robotized democracies
Regímenes de bienestar	IPP	Angel Paniagua	Geografía	Geografía humana, despoblación	Human geography, depopulation
Relaciones sociales y confianza	IPP	Vincenzo Pavone	Ciencia política	Bioética, participación de la sociedad civil en ciencia	Bioethics, civil society participation in science

TEMA	INSTITUTO	INVESTIGADOR	DISCIPLINA	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA TECNOLOGÍA Y EL EMPLEO	PUBLICACIONES/ PROYECTOS
Relaciones sociales y confianza	IFS	Sara Degli Esposti	Economía	Inteligencia artificial y ética	Artificial intelligence and ethics
Nuevas formas de trabajo	IEGD	M ^o Angeles Durán	Sociología	Trabajo doméstico no remunerado	Unpaid work for women
Cambio tecnológico / Globalización	IEGD	Ruth Rama	Economía	Multinationales e I+D	Multinationals, subcontracting, technology sourcing
Regímenes de bienestar	IEGD	Amparo González Ferrer	Sociología	Políticas de migración	Migration policies and inequalities
Regímenes de bienestar	IEGD	Antonio Abellán	Demografía	Envejecimiento y servicios	Ageing and services
Dinámicas de población	IEGD	Diego Ramiro	Demografía	Dinámica de poblaciones	Demographic dynamics
Medio ambiente	IEGD	Francisco J. Martínez Vega	Geografía	Análisis geográfico del cambio global	Land use, protected areas, sustainability
Cualificación	Ingenio	Davide Consoli	Economía	Cualificaciones e innovación	Low skill jobs, e-skills, green skills
Educación y cualificación	Ingenio	Adela García Aracil	Economía	Formación y cualificaciones	Students skills and employability
Cambio tecnológico	Ingenio	Joaquín Azagra-Caro	Economía	Patentes e inventores	Pasteur's quadrant
Cambio tecnológico	Ingenio	Pablo D'Este	Economía	Redes de colaboración e I+D	Biomedicine knowledge generation
Mercados de trabajo / Género	Ingenio	Carolina Cañibano	Economía	Carreras de investigación científica, género	Science research careers, gender
Mercados de trabajo	Ingenio	Richard Wooley	Sociología	Formación y cualificaciones, carreras de investigación científica	Education and skills, Science research careers
Cambio tecnológico	Ingenio	Jordi Molas	Economía	Colaboración y cocreación de conocimiento	Collaboration and knowledge co-creation
Género	IFS	Eulalia Pérez Sedeño	Filosofía	Ciencia, tecnología y sociedad	Science, technology and society, gender
Relaciones sociales y confianza	IFS	Txetxu Ausín	Filosofía	Ética del cuidado, inclusividad y robótica	Inclusivity and robotics
	IFS	Jesús Rey Rocha		Impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad	Business scientific culture
Nuevas formas de trabajo	IH	Antonio Lafuente	Historia	Ciencia electrónica, Digital Commons	E-science, digital commons
Nuevas formas de trabajo	ILLA	Alberto Corsín	Antropología	Ciudades y ciencia	Anthropologist of cities and science
Nuevas formas de trabajo	ILLA	Daniel Curto Millet	Antropología	Sistemas de información y ciencias sociales	Opennes, ethics in crowdsourcing
Mercados de trabajo	IESA	Manuel Fernández Esquinas	Sociología	Formación y emprendimiento en la investigación	Research training and entrepreneurship
Regímenes de bienestar	IESA	Sebastián Rinken	Sociología	Migración	Attitudes to migration, integration of immigrants

DESAFÍO C REFERENCIAS

- Akerlof, G. (1982).** Labor Contracts as Partial Gift Exchange. *Quarterly Journal of Economics*, 97(4): 543-569.
- Anghel, B., De la Rica, S., Lacuesta, A. (2014).** The impact of the great recession on employment polarization in Spain. *SERIEs*, 5(2-3): 143-171.
- Autor, D., Katz, L. (1999).** Changes in the Wage Structure and Earnings Inequality, in *Handbook of Labor Economics*: 1463-1555.
- Autor, D., Kartz, L., Krueger, A. (1998).** Computing Inequality: Have Computers Changed the Labor Market? *Quarterly Journal of Economics*, 113: 1169- 1213.
- Autor, D., Levy, F., Murnane, R. (2003).** The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *Quarterly Journal of Economics*, 118(4): 1279-1333.
- Autor, D., Price, B. (2013).** The Changing Task Composition of the US Labor Market: An Update of Autor, Levy and Murnane (2013). *MIT Working Paper*.
- Bault, N. et al. (2015).** Neural dynamics of social tie formation in economic decision-making. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 10:877-884.
- Bewley, T. (2002).** Why Wages Don't Fall During a Recession. *Harvard University Press*.
- Bloom, N. et al. (2015).** Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 130, 1: 165-218.
- Bowen, H. R. (Chairman). (1966).** Report of the National Commission on Technology, Automation, and Economic Progress: Volume I. *Washington: U.S. Government Printing Office*.
- Card, D. et al. (2012).** Inequality at Work: The Effect of Peer Salaries on Job Satisfaction. *American Economic Review*, 102(6): 2981-3003.
- Charness, G., Cooper, M., Reddinger, J.L. (2020).** Wage Policies, Incentive Schemes and Motivation. *Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics*.
- Clark, A., Masclet, D., Villeval, M.C. (2010).** Effort and Comparison Income: Experimental and Survey Evidence. *ILR Review* 63(3), 407-426.
- Cooper, D., Kagel, J. (2015).** Other-Regarding Preferences: A Selective Survey of Experimental Results, in *Handbook of Experimental Economics*, 2, 217-289.
- Mandl, I., Biletta, I. (2018).** Overview of New Forms of Employment - 2018 Update. *Publications Office of the European Union*.
- Falk, A., Kosfeld, M. (2006).** The Hidden Costs of Control. *American Economic Review*, 96, 5: 1611-1630.
- Fehr, E., Kirchsteiger, G., Riedl, A. (1993).** Does Fairness Prevail Market Clearing: An Experimental Investigation. *Quarterly Journal of Economics*, 108: 437-460.
- Fernandez, A. (2019).** The Impact of Technological Progress on the Labor Market: Employment Polarization in Europe. *Fundación ISEAK*.
- Gächter, S., Thöni C. (2010).** Social comparison and performance: Experimental evidence on the fair-wage effort hypothesis. CeDEx Discussion Paper, 2009.23. *University of Nottingham*.
- OECD (2018).** OECD Employment Outlook 2018. *OECD*.
- OECD (2019).** OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work. *OECD*.
- Sebastian, R. (2018).** Explaining job polarisation in Spain from a task perspective. *SERIEs*, 9: 215-248.
- Van Dijk, F., van Winden, F. (1997).** Dynamics of social ties and local public good provision. *Journal of Public Economics*, 64(3):323-341.
- Van Winden, F. (2012).** Affective social ties—missing link in governance theory. *Rationality, Morals and Markets*, 3(57):108-122.

RESUMEN

Con esta aportación se pretende poner de relieve la singular importancia de las funciones que desempeñan las entidades que integran el amplio y difuso campo organizativo denominado Tercer Sector, para una sociedad sostenible y cohesionada. Se trata de señalar la necesidad de avanzar en el conocimiento de diversos aspectos de este sector en España, tales como: la delimitación conceptual y tipología de las entidades que lo componen; las principales características que caracterizan a estas entidades, especialmente considerando las diferencias dentro de ellas entre formas organizativas tradicionales y emergentes; la dinámica de su evolución reciente; y el análisis de algunas cuestiones que su presencia plantea en sociedades como la nuestra, en las que la lógica dominante es la del mercado. En este trabajo también se analizan los límites de la información disponible para tener el conocimiento sobre el Tercer Sector que su importancia requiere y se sugieren las líneas de un plan de investigación que podría resolver esta limitación.

DESAFÍO H

TERCER SECTOR Y ECONOMÍA SOCIAL Y COLABORATIVA EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS. EL CASO DEL TERCER SECTOR EN ESPAÑA

CoordinadorManuel Pérez Yruela
(IESA, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

Esta aportación al trabajo colectivo promovido por el CSIC sobre “Nuevas bases para una sociedad global sostenible”, tiene como finalidad poner de manifiesto, por una parte, la singular importancia que las funciones desempeñadas por las entidades que integran el amplio y difuso campo organizacional llamado Tercer Sector (TS), para una sociedad sostenible y cohesionada. Por otra parte, trata de señalar la necesidad de avanzar en el conocimiento de varios aspectos de este sector en España, tales como: la delimitación conceptual y tipología de las entidades que lo forman; los rasgos principales que caracterizan a esas entidades, teniendo especialmente en cuenta las diferencias dentro de ellas entre las formas organizativas tradicionales y emergentes; la dinámica de su evolución reciente; y el análisis de algunas cuestiones que suscita su presencia en sociedades como la nuestra, en las que la lógica dominante es la del mercado.

El enfoque con el que se aborda el tema puede considerarse, desde el punto de vista sociológico, como un ejercicio de sociología reflexiva. Se trata de ofrecer un análisis que valore la importancia de este campo organizacional para las sociedades democráticas modernas, plurales, con Sistemas de Bienestar consolidados, como es el caso de Europa, que creemos es una cuestión nuclear de este reto. Un análisis de sus fortalezas y debilidades actuales y de sus perspectivas de futuro, en el contexto de la sostenibilidad de los Sistemas de Bienestar. El

uso reflexivo de los resultados puede ser útil para que las organizaciones que integran el sector puedan verse reflejadas en ellos y analizar cómo les afectan y para que el regulador, el Estado, pueda orientar mejor las políticas públicas sobre este sector.

Finalmente, útil también para poner de manifiesto las carencias de información y análisis que existen para avanzar y perfeccionar en el conocimiento del sector en España, que no son pocas por la variedad, complejidad y amplitud, no fácil de acotar, que tiene y por la novedad de muchos de sus aspectos. Todo ello puede servir para definir un programa de investigación sobre temas como, entre otros; el papel del TS en las democracias avanzadas y sus sistemas de bienestar y cohesión social; la estructura y dinámica del campo organizacional que lo integra; las relaciones entre el Estado y TS, e incluso entre el sector mercantil y el TS; y el papel del voluntariado en el funcionamiento del TS.

2. . EL TERCER SECTOR: DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

El uso de la expresión Tercer Sector para referirse a un conjunto específico de entidades que forman parte de la estructura social de nuestras sociedades, tiene un origen relativamente reciente y ha ido creciendo en las últimas décadas. Surgió en el ámbito de las ciencias sociales para identificar un grupo de organizaciones nacidas del seno de la sociedad, que actúan sin ánimo de lucro y suelen contar con la participación de personas voluntarias. Sus objetivos son muy variados, pero tienen el denominador común de estar relacionados con la denuncia de los problemas sociales, la prestación de servicios para resolverlos, la defensa de derechos humanos, la ayuda a los más desfavorecidos de la sociedad, la cooperación internacional para ayudar a otros países en los temas anteriores y la contribución a la promoción del bienestar social general a través de actividades culturales, deportivas o de ocio. En suma, unos objetivos en los que predomina la perspectiva del bienestar de los ciudadanos y, por tanto, de la sociedad. Lo que llama la atención de este campo organizacional es su altruismo y participación cívica, su enraizamiento en la sociedad civil, su independencia del Estado, relativa como se verá, y la separación de sus criterios de funcionamiento de la lógica del mercado. Dentro de este grupo suelen incluirse las organizaciones privadas sin fines de lucro (OPSFL), también conocidas como Organizaciones no Gubernamentales (ONG)¹. Las OPSFL dedicadas a los problemas sociales en España se llaman más concretamente Tercer Sector de Acción

¹ Es preferible el uso de Organizaciones Privadas sin Ánimo de Lucro porque la expresión de Organizaciones no Gubernamentales puede ser confusa. Las razones para ello son varias; las empresas son también organizaciones no gubernamentales; también son gubernamentales las organizaciones públicas que no dependen de los gobiernos; muchas ONG dependen económicamente de los gobiernos.

Social (TSAS)². La mayor parte de ellas adoptan sobre todo la figura jurídica de asociaciones o fundaciones, pero incluyen también otras figuras.

Antes ya habían surgido organizaciones con rasgos parecidos a los anteriores, especialmente durante la revolución industrial. Son las cooperativas, mutualidades y asociaciones de socorros mutuos, organizadas por los trabajadores para mejorar sus pobres condiciones de vida mediante acciones colectivas creadas con los escasos recursos con que contaban. Su origen está asociado a la influencia del socialismo utópico, por ser iniciativas de organización social ajenas, como las que aquella doctrina proponía, a la lógica de mercado, ya dominante entonces como modelo a seguir para lograr, según sus defensores creían, el progreso de la sociedad. Como es conocido, su desarrollo desde que los pioneros de Rochdale crearan en 1844 la primera cooperativa, ha trascendido con creces los primeros objetivos con los que nacieron, llegando en la actualidad a estar presente de manera muy significativa en la mayor parte de las actividades y sectores económicos. Junto a ellas han aparecido organizaciones con fórmulas jurídicas diferentes (sociedades laborales, asociaciones con fines económicos...) que comparten de una u otra manera los principios cooperativos. Las cooperativas y organizaciones afines también surgen del seno de la sociedad, son independientes del Estado, responden a necesidades sociales, y ponen límites al lucro, al que la terminología cooperativa no denomina así sino como excedentes económicos de la actividad que desarrollan. Este grupo se llama genéricamente Economía Social (ES)³, pero como veremos se podría denominar también como Tercer Sector de Acción Económica (TSAE).

Además, en las últimas décadas han aparecido nuevas formas de practicar actividades económicas que, desde el punto de vista de los objetivos y valores que tienen, comparten los de las formas organizativas anteriores. Se trata de innovaciones sociales que, como casi toda innovación, surgen de la recombinação de elementos ya conocidos, a los que se les da una nueva forma que se presume más útil o más eficaz. Entre ellas se encuentran las empresas sociales, las cooperativas sociales, las empresas de economía solidaria, algunas de las

2 La ley Española del Tercer Sector de Acción Social (2015) recoge que son "1. ...aquellas organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, bajo diferentes modalidades, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y ausencia de ánimo de lucro, que impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, así como de los derechos económicos, sociales o culturales de las personas y grupos que sufren condiciones de vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. 2. En todo caso, son entidades del Tercer Sector de Acción Social las asociaciones, las fundaciones, así como las federaciones o asociaciones que las integren". Curiosamente deja fuera de ellas a las cooperativas y otras entidades de la Economía Social con otras fórmulas jurídicas, que se ajustan a la definición del apartado 1.

3 La ley española de la Economía Social, recoge que forman parte de ella "las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los mismos principios". Además de éstas, podrán integrarse otras de acuerdo con un catálogo que la Ley crea para ello.

iniciativas de economía y consumo colaborativo, que tanto han crecido en pocos años, y las fundaciones comunitarias. Algunas de estas iniciativas, a diferencia de las anteriores, no tienen un reconocimiento jurídico específico como el de las organizaciones de alguno de los dos grupos anteriores, pero la mayor parte de ellas podrían formar parte de alguno de ellos.

En una primera aproximación, podría decirse que estos tres tipos de organizaciones son campos organizacionales diferentes y no tendrían por qué estar bajo la etiqueta común de TS (Cabra de Luna y De Lorenzo, 2005). El primero (OPS-FL) está orientado hacia el servicio y la ayuda a otras personas y al conjunto de la sociedad en los temas señalados, mediante acciones colectivas en las que el incentivo principal es precisamente el servicio o ayuda que se presta, sin perjuicio de que quienes lo prestan puedan recibir una remuneración por hacerlo. El segundo (ES) está más orientado a la satisfacción de las necesidades individuales, generalmente económicas, de quienes se asocian para ello, en muchas ocasiones mediante actividades inevitablemente vinculadas a la lógica del mercado. El tercero, el más reciente, es el más difuso desde el punto de vista jurídico y organizativo. En unos casos se trata de innovaciones sobre experiencias tradicionales, como las *cooperativas sociales* dedicadas específicamente a la atención socio-sanitaria y asistencial y a la inserción laboral, con un modelo de gobernanza similar al de las empresas mercantiles, manteniendo las limitaciones al reparto de excedentes; o las empresas sociales, sociedades anónimas o limitadas que, como las cooperativas, incorporan a sus estatutos limitaciones al reparto de beneficios. En otros casos se trata de innovaciones sociales con fórmulas jurídicas diversas, cuyos objetivos son explícitamente sociales, como es la red de economía alternativa y solidaria; o de innovaciones sociales basadas en las nuevas tecnologías de la información, como son la economía y el consumo colaborativo. Pese a estas diferencias hay razones para afirmar que comparten valores y similitudes organizativas, en suma, una cierta lógica común de funcionamiento.

Para construir un relato sintético sobre el origen y evolución de estas formas de acción colectiva, sobre su importancia en las democracias avanzadas actuales, sobre las similitudes que hay entre ellas y sobre su proceso de institucionalización, es necesario hacer una síntesis apretada de algunos procesos históricos conocidos, que configuran el contexto que las ha hecho posibles y, a la vez, han condicionado su desarrollo⁴.

4 El desarrollo de esta idea se basa en el trabajo de Pérez Yruela, M (2012). *El modelo de cohesión social en Europa*. IESA, Working Papers Series, en el que puede verse con más extensión.

Desde la revolución industrial y la consolidación a gran escala geográfica y sectorial de la economía de mercado y la democracia liberal, se ha mantenida viva la crítica sobre los dos supuestos principales que sirvieron de palanca a este gran cambio de las sociedades occidentales. Por un lado, la afirmación constante, hasta casi convertirla en ley natural, de que el mercado autoregulator es la institución que mejor puede servir al progreso de la sociedad, principio básico de la organización económica que ha llegado a impregnar al conjunto de la organización social. Esta mercantilización extensa (Polanyi, 1989) es un cambio hoy reconocido por los ciudadanos de cualquier condición, que ven en él una de las reglas principales que rigen nuestras sociedades, aunque a veces sea reconocimiento resignado a algo que no siempre se comparte o se comparte sólo parcialmente. Por otro lado, el protagonismo creciente de los modelos de *homo oeconomicus*, individualismo posesivo y elección racional basada en el cálculo de intereses, propio de un modelo liberal e individualista de sociedad actual, que no contempla las obligaciones de unos ciudadanos respecto a otros (Macpherson, 1962), en otras palabras, que olvida la idea fuerza de la fraternidad, compañera originaria de las de libertad e igualdad⁵.

En ambos supuestos se basa la democracia y el estado liberal hoy dominante en la mayor parte del mundo, que es renuente a alterar las reglas del mercado y a intervenir en la sociedad más allá de lo estrictamente necesario para que el mercado funcione sin trabas lo más libremente posible. No obstante, es importante recordar que el Estado ha tenido que traspasar estos límites en varios momentos históricos. Lo ha hecho cuando ha tenido necesidad de intervenir con políticas sociales y redistributivas para mantener la cohesión social y la legitimidad del sistema político ante problemas como los derivados de catástrofes y conflictos bélicos, de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social o del riesgo de desamparo de quienes, por diversas causas sobrevenidas, perdían el trabajo con el que obtenían sus medios de vida. Esta es una de las razones que más explica el origen y desarrollo de los sistemas de bienestar europeos o, en otras palabras, del modelo social europeo. También hay que recordar que cuando el Estado se ha enfrentado a esos momentos en los que con su intervención podía alterar el equilibrio entre la disciplina presupuestaria económicamente ortodoxa, los beneficios empresariales y el gasto social necesario para restaurar la cohesión y la legitimidad, ha tendido a que este gasto no dañase significativamente a los dos primeros.

⁵ La fraternidad suele manifestarse más ante catástrofes ajenas y en tiempo de crisis, como es el caso de la pandemia provocada por el coronavirus que estamos viviendo mientras escribimos estas páginas.

Los supuestos anteriores vienen siendo sometidos a una crítica constante con varios argumentos: los basados en la existencia de formas de solidaridad y redistribución colectivas en épocas anteriores a la actual economía de mercado (Polanyi, 1944); los basados en el enraizamiento de la economía en la sociedad, que hace que los principios anteriores se vean modulados, a veces hasta anulados, por la cultura de cada sociedad (Granovetter, 1985; Portes y Moony, 2002) la pluralidad de los valores que perviven incluso en las sociedades más mercantilizadas, como el altruismo, la ayuda mutua y la participación voluntaria en favor de los demás, en suma, la variedad de modelos de conducta humana diferentes que coexisten con el de *homo oeconomicus*, por más que éste sea dominante (Holies, 1977); por la revisión que se está haciendo de la lógica de la acción colectiva en el sentido de la posibilidad de que grupos grandes puedan asumir acciones colectivas para producir bienes públicos con incentivos distintos del interés económico (Weimann et. al., 2019) por la asimetría, desigualdad y erosión de la cohesión social que produce la economía de mercado (Piketty, 2014). No hace falta recordar que han sido el marxismo y las corrientes derivadas de la ortodoxia marxista (progresista, socialdemócrata, socialista, comunista y radical/populista de izquierda) las que han inspirado y siguen inspirando estas críticas.

La pugna entre ambas interpretaciones de la realidad social continúa viva y ha cristalizado como es bien sabido en credos o cosmovisiones políticas enfrentadas: la visión conservadora o de derecha, por lo general afín al credo individualista/liberal, y la progresista, socialdemócrata o radical, más afín al credo comúnmente etiquetado como izquierda o, en otra expresión, colectivista/izquierdista. Dentro de algunos países han surgido recientemente posiciones radicales o moderadas dentro de cada visión, algunas convertidas en nuevos partidos políticos, que han alterado el equilibrio tradicional dentro de cada visión pero no han cambiado sustancialmente su estructura dual originaria. Son visiones con lógicas distintas difícilmente conciliables en sus principios, sin perjuicio de que a veces lo hayan sido en cuestiones pragmáticas de gobierno según la historia de cada país. Esta división hace que en muchos casos los debates sobre políticas públicas relacionadas con los objetivos o la función que desempeña el TS antes señaladas se diriman más con argumentos basados en estos credos que con evidencias empíricas. La visión liberal da preferencia a las soluciones de mercado a través de organizaciones mercantiles para lograr esos objetivos y la visión de izquierda prefiere la solución estatista a través de organizaciones públicas, aunque en diverso grado según la posición sea más o menos radical.

En este contexto, el desarrollo del TS, ni ha sido fácil ni lo sigue siendo del todo, excepto cuando lo hecho con adscripciones ideológicas afines con alguna de las visiones anteriores. La derecha es aún a un TS tradicional tanto en materia de cooperación y mutualismo como de organizaciones asistenciales sin fines de lucro. Todas ellas herederas de la tradición asistencial de la caridad cristiana, aunque también dentro de ellas ha habido cambios significativos de ruptura con esa tradición. Por ejemplo, la modernización de las cooperativas desde que empezaron promovidas por los círculos católicos agrarios o el caso de Cáritas Española, una organización que, además de su importante labor asistencial, ha sido avanzada en la denuncia de los problemas sociales de España, basándose en los estudios sociológicos rigurosos que sobre ello viene realizando desde hace varias décadas. La izquierda en materia de asistencia social es teóricamente afín a las soluciones estatales, basadas en el reconocimiento de derechos legalmente exigibles por los ciudadanos y a la prestación pública de los servicios que los satisfacen. No obstante, en la práctica los gobiernos socialdemócratas han dado muestras de aceptación de la colaboración público-privada con este tipo de organizaciones.

Pese a la situación anterior, ha habido cambios en el Estado, en las sociedades y en las democracias europeas que han abierto la puerta a que la presencia del TS pueda consolidarse como parte importante de su sociedad civil. A partir del último cuarto del siglo XIX empezó a desarrollarse en Europa la idea de “Estado Social”, por la que se atribuye al Estado la misión de corregir, por razones históricas (la cuestión social) y éticas (la dignidad de las personas), las disfunciones y desigualdades producidas por la economía de mercado. La idea no nació vinculada a la democracia, cosa que se conseguiría más tarde cuando quedó constitucionalizada en 1949 en la Ley Fundamental de la entonces República Federal de Alemania, en la que se define en el artículo 28 como un “Estado social y democrático de Derecho”. El contenido de qué debe ser el Estado Social quedó inicialmente recogido en el concepto de procura existencial, también de origen alemán, que consiste en que el Estado “lleve a cabo las medidas que aseguren al hombre las posibilidades de existencia que no pueda asegurarse por sí mismo” (García Pelayo, 1985).

El Estado ha pasado así de ser el portador de los valores del Estado liberal-democrático (libertad, propiedad, igualdad, seguridad jurídica y sufragio universal) a portador de otros valores como: la redistribución de la riqueza; la organización de la procura existencial; la creación de condiciones para el desarrollo económico e incluso la intervención en ciertos aspectos de la

economía; la prestación directa de servicios sociales básicos como la educación o la sanidad; muy especialmente la colaboración con organizaciones de la sociedad civil en muchos ámbitos, desde la prestación de estos servicios a los asuntos más variados que pueden ir desde la concertación social tradicional a la promoción de la cultura.

También las sociedades europeas han cambiado. Hoy son democracias liberales que combinan la economía de mercado con los derechos sociales; sociedades con preeminencia del individualismo y el consumo como ejes fundamentales en torno a los que gira la existencia, pero también en las que las organizaciones de ayuda mutua o a terceros, sin ánimo de lucro y una gama amplia de objetivos son parte importante de su estructura social; sociedades en las que la institucionalización de la investigación y la innovación tienen un papel decisivo en su desarrollo; y sociedades con grados diversos de desigualdad y cohesión social en función del desarrollo del Estado de bienestar en cada país, que requieren de intervenciones del Estado por las razones antes citadas.

Las democracias occidentales cambian cuando las imperfecciones y fallos del orden social liberal-democrático en el que se basan entran en conflicto con los intereses del propio mercado y/o lesionan las expectativas de mejora del bienestar de los ciudadanos. Las instituciones de representación y defensa de los intereses de los ciudadanos recogidas en las constituciones (partidos políticos, sindicatos...) son hoy insuficientes para gestionar adecuadamente las demandas, intereses y propuestas tan diversas y especializadas como las que existen en sociedades complejas como las nuestras, conciliando la particularidad y la diversidad con el carácter universal de los derechos de ciudadanía. La corporatización y particularismo de partidos y sindicatos, la oligopolización de su actividad y la tendencia al ensanchamiento de su influencia hacia cuantos espacios sociales les sea posible, achica sus propias posibilidades para reflejar y canalizar esa complejidad social. La respuesta de la sociedad civil a estas deficiencias se canaliza, con más o menos fortuna según los países, a través de iniciativas colectivas formalizadas en organizaciones como las que integran el TS (Giner y Sarasa, 1995), cuya base de partida suelen ser movimientos sociales de protesta y demanda social alternativa.

En este contexto han crecido las organizaciones del TS. El que hayan conseguido hacerlo se explica por varias razones de carácter sociológico⁶: a)

6 También se ha explicado en términos económicos arguyendo que venían a suplir fallos de mercado en la provisión de bienes públicos de consumo colectivo que el Estado no proveía suficientemente o lo hacía de forma que, por esos fallos, no se ajustaba a los deseos de los destinatarios de aquellos bienes (Weisbrod, 1974 y Hansmann, 1987)

porque las formas tradicionales de este tipo de organizaciones, el cooperativismo y el mutualismo, siguen siendo todavía la solución a problemas de trabajadores y pequeños propietarios que se benefician de esas acciones colectivas, como antaño, para defender los precios percibidos por su producción, abaratar suministros, procurarse seguridad ante enfermedad o accidentes laborales o crear empleos produciendo bienes y servicios para el mercado; hoy han cambiado, con objetivos nuevos como la producción ecológica, las energías renovables, la atención socio-sanitaria o la educación, entre otras; b) por el crecimiento de las organizaciones sin fines lucro cuya existencia ha servido para que se popularice la expresión de TS que tienen un papel muy importante en el Estado de Bienestar; c) por el crecimiento del asociacionismo para fines diversos, desde la cultura hasta la participación por este medio en los asuntos públicos o colectivos, muy importante en la vertebración de la sociedad civil; d) por la persistencia en el tiempo de valores como el altruismo, la solidaridad y la fraternidad, que son parte del cambio cultural de las últimas décadas hacia lo que ha dado en llamar *valores postmaterialistas*, observado en las sociedades occidentales; e) por cambios más generales de las estructuras sociales que han facilitado los cambios anteriores (más alto nivel educación, reconocimiento jurídico y apoyo público al TS, disponibilidad de tiempo para participar, sociedad de servicios...); f) también por la creciente complejidad de la protección social que ha derivado hacia sistemas relativamente mixtos (Marbán y Rodríguez Cabrero, 2013). Ya en 1973 algunos análisis solventes del cambio social en las sociedades occidentales anticipaban la importancia que en el futuro habría de tener el TS, afirmando que sería el más importante de los sectores institucionales (Daniel Bell, 1973).

En suma, el TS surge como un actor de la sociedad civil, diferente de los que conforman el orden político (sector público, partidos, sindicatos y otras instituciones de representación) y el orden económico mercantil (empresas mercantiles). Es un sector que se ha ido formando con la iniciativa de muchos ciudadanos que por las razones diversas han creado instituciones para realizar actividades a través de las que canalizar ciertos valores. Las realizan de modo diferente al del ámbito reglado, impersonal y burocrático del Estado, al del sistema de partidos de la democracia representativa y al del modelo de individualismo posesivo del mercado, aunque no es independiente de ellos, pues los tres están unidos por lazos de interdependencia. En este sentido el TS supone una ampliación cualificada de la politeya, ya que no solo ensancha en el campo de la participación política sino que, además, lo hace sobre la base reforzar los valores profundos de la democracia que conjugan la libertad, la igualdad y la fraternidad.

El interés por establecer un marco de análisis común a todas las entidades que pueden formar el TS puede ser útil por varias razones: para facilitar un grado de articulación adecuado a su importancia; para facilitar la cooperación e integración entre ellas que podría redundar en una mejora sustancial de su eficacia; para reforzar su visibilidad social; y para aumentar su poder de negociación ante los demás actores sociales del sector público y mercantil. Este es un objetivo de largo plazo, si es que llegara cumplirse, que queda lejos del escenario de partida en el que ahora se encuentran. En la actualidad, las entidades que forman el TS, pese a compartir aspectos nucleares de su razón de ser, responden a figuras jurídicas distintas⁷ con escasa conexión entre ellas, que facilita la actuación por separado de cada uno de los subgrupos que lo forman, cuya visibilidad social y poder de negociación es débil

Existe, no obstante, una base razonable para pensar que es viable el esfuerzo de buscar principios comunes entre esas entidades, que faciliten un tratamiento más integrado del TS. Para empezar, las entidades de la ES y las OPSFL, las más importantes y numerosas, comparten más principios de los que los separan. Las cooperativas, el subgrupo más importante dentro de la ES, son instituciones que desarrollan su actividad produciendo bienes para el mercado u organizando la prestación de determinados servicios para beneficio de ellos mismos o para terceros, de acuerdo con ciertos principios -los principios cooperativos- que se concretan en los siguientes: son organizaciones voluntarias surgidas de la iniciativa social; son independientes de los poderes públicos; dan primacía a los fines sociales y a las personas sobre el capital; promueven los valores de la solidaridad, la igualdad y la cohesión social; se gestionan de forma autónoma, participativa y democrática; asignan los resultados obtenidos de la actividad económica a los propios fines sociales o los distribuyen entre los socios en función del volumen de transacciones de cada uno con la organización y no del capital que hayan aportado a la institución⁸.

Sobre las OPSFL hoy hay bastante consenso en aceptar la propuesta hecha por Salamon y Anheier (1992), que concreta los rasgos que definen a estas organizaciones en los siguientes: son organizaciones formales de adscripción voluntaria; son organizaciones privadas e independientes de los poderes públicos aunque pueden recibir financiación de ellos; tienen capacidad de gestión

7 Ley de Cooperativas, Ley de Sociedades Laborales y Participadas, Ley de Fundaciones, Ley de Asociaciones, Ley de Economía Social, Ley de Mutualidades, Ley del Tercer Sector de Acción Social, Ley del Voluntariado, Ley de Integración Social del Minusválido, entre otras.

8 La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la guardiana de estos principios, que han evolucionado a lo largo del tiempo para facilitar la adaptación de las cooperativas a los cambios y exigencias del contexto económico en el que se desenvuelven.

autónoma; debe haber voluntariado en sus órganos de gestión y en la realización de sus actividades; no tienen fines de lucro y no pueden repartir entre sus socios los excedentes económicos que generen con su actividad, que deben reinvertir en los fines sociales de la organización.

Las principales diferencias formales entre las organizaciones del ES y las OPS-FL se concretan en que dos de los principios de funcionamiento de las primeras no son exigibles en el caso de las segundas. El primero es el principio de gestión participativa y democrática y el segundo es el que permite distribuir los excedentes de la actividad económica entre los socios. En cuanto al primero, muchas organizaciones sin ánimo de lucro practican el principio de la gestión participativa y democrática, ya que la mayor parte de ellas son asociaciones, que por su naturaleza jurídica así tienen que hacerlo. No obstante, la diferencia se mantiene en el caso de las fundaciones que ni están obligadas ni suelen practicar voluntariamente esa forma de gestión. En cuanto al segundo, es cierto que existe la diferencia del destino que puede darse a los excedentes económicos de la actividad, pero también es cierto que el reparto de excedentes entre los socios de las cooperativas no tiene el mismo significado y tratamiento que tiene el beneficio en las empresas mercantiles no cooperativas.

Hay otras diferencias, tal vez más importantes, relacionadas con los objetivos y la cultura organizativa de ambos tipos de organizaciones, que son las que más influyen para considerar que ambas no pueden formar parte del mismo grupo. Las de la ES realizan principalmente actividades para el mercado o condicionadas por él, lo que las obliga a ajustar su funcionamiento a los imperativos y condicionantes de la competencia. Esto las acaba acercando en ciertos aspectos a la lógica del funcionamiento de las empresas no cooperativas, que puede acabar afectando a la práctica y observancia de sus principios. Por su parte, las OSPFL realizan actividades de carácter altruista, como actividades educativas y culturales, atención a los más necesitados y a colectivos con problemas específicos (personas con discapacidad, inmigrantes y refugiados, personas sin techo, personas que sufren diferentes adicciones ...), o actividades de defensa de los derechos humanos y sociales y de denuncia de desigualdades y problemas sociales. Estas actividades requieren del compromiso de quienes voluntariamente las realizan con los valores que implican, tanto el voluntariado como los objetivos mismos de las actividades sociales, y se desenvuelven en la cultura de la solidaridad, la ayuda a los más necesitados y el compromiso social.

No obstante, no se trata de dos ámbitos de culturas organizativas separadas y sin contacto entre ellas. En las OSFL que se dedican sobre todo a la prestación

de servicios sociales hay personal asalariado además del voluntario y tienen que incorporar a su actividad criterios de gestión económica y organizativa como cualquier otra organización que tiene que ajustar su balance de ingresos y gastos, aunque no se persiga el beneficio. Esto las acerca a la cultura de las sociedades cooperativas que producen para el mercado. A su vez, dentro de la ES hay organizaciones dedicadas a actividades de prestación de servicios sociales cuya cultura organizativa está más próxima a la de las OSFL.

En el caso de las iniciativas emergentes, algunas como las cooperativas sociales son una versión nueva del modelo cooperativo que sigue compartiendo sus mismos valores. En otros casos, como los de la economía alternativa y solidaria o las empresas sociales, tienen figuras jurídicas diversas (asociaciones y sociedades anónimas o limitadas) pero sus estatutos les obligan a aplicar principios similares a los de la ES y las OPSFL. El caso de las plataformas en las que se basa la economía colaborativa es más complejo, como veremos más adelante, y no todas se puede decir que puedan ser parte del tercer sector. No obstante, hay otras que pueden ser parte de él más que por su figura jurídica por los valores (buscar relaciones sociales, compartir gastos, intercambiar tiempo, reciclar y alargar la vida de objetos, consumo responsable...) en los que se basan. Estas iniciativas emergentes plantean la necesidad de revisar los rasgos que definen a las entidades del TS, dando más importancia a los valores con los que en la práctica desarrollan su actividad que a las figuras jurídicas que las constituyen.

Finalmente, el campo organizacional de las asociaciones en una de los más poblados y menos conocidos de España, como veremos más adelante. Además de las que se dedican a la acción social, son muy importantes las que se dedican a las actividades culturales, de ocio y deporte. También son parte del TS que bien podría llamarse Tercer Sector de Acción Cultural (TSAC).

El TS puede considerarse un sistema institucional y funcional con valores compartidos y objetivos que, aun siendo diversos, tienen un común denominador. En la práctica opera a través de los diversos campos organizativos que lo forman. Ambos aspectos, la dimensión funcional-institucional y la organizacional, serían el objeto del objetivo de investigación que aquí proponemos. En este sentido, el reto sería construir una teoría de alcance intermedio sobre el TS, como existe por ejemplo en temas como el de Sociedad Civil, tan afín que a veces se confunden como una misma cosa, o como los de partido político o sindicato, que han acaparado hasta ahora casi la totalidad de la función de representación y acción colectiva y la atención de los estudiosos. Tal teoría debería formar parte de una teoría normativa y a la vez empírica de la democracia. La primera,

por el papel que la democracia debe reconocer a la articulación de la sociedad civil para perfeccionar su calidad mejorando los mecanismos de participación, de cuyo vigor el TS es un buen indicador. La segunda, porque el TS es una realidad en las democracias más avanzadas, que prueba la posibilidad de que la sociedad se puede corresponsabilizar junto al Estado en los asuntos que le conciernen y no sólo cuando fallan el Estado y el mercado.

Esta teoría debería tener en cuenta la asimetría originaria del TS respecto al Estado y al mercado y las dificultades que tiene para crecer en medio de ambos, mucho más desarrollados y consolidados, con tendencia a no dejar espacios mostrenco entre ellos. Esto hace que el TS se tienda a ver como un sector menor, casi al margen de los otros dos, excepto cuando es necesario liberar o externalizar presiones económicas (procedentes de la presión del sector mercantil) y presiones sociales (procedentes de la incapacidad del Estado para desarrollar derechos sociales). Además, para hacerlo haría falta producir la información suficiente sobre las entidades y sus características, mediante operaciones estadísticas de Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística, previstas parcialmente en la legislación vigente que no se han llevado a cabo. Igualmente es necesario producir información sobre los rasgos de la sociedad española que condicionan la existencia del TS, para lo que es necesario conectar esa teoría con otras como las de acción colectiva y movimientos sociales, acción voluntaria y participación ciudadana.⁹

3. EL TERCER SECTOR EN ESPAÑA

El objetivo de este apartado es aportar información cuantitativa y cualitativa sobre el TS en España, para mostrar la importancia que ya tiene en términos absolutos y en comparación con algunos parámetros sociales, laborales y económicos del país. Dentro del conjunto de entidades que forman el TS, vamos a referirnos aquí a las que por su tamaño y actividad son más importantes: el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) y algunas de las entidades de la ES, en especial las cooperativas, que son de las que hay más información disponible. Se trata de una información que aún tiene carencias, cuya solución constituyen un reto para avanzar más y mejor en su análisis.

Una parte muy importante de entidades del TS lo constituyen las que actúan en el ámbito de la cultura, las actividades de I+D+i, la formación, el ocio, el

⁹ Sobre el Tercer Sector hay una amplia literatura internacional y existen revistas especializadas (Voluntas, Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly, Voluntary Sector Review...), También en España existen revistas especializadas (Revista Española de Tercer Sector, Documentación Social...). Los aspectos teóricos son de los que menos se tratan y menos aún en el caso español.

deporte y la religión, sobre las que la información disponible de interés a efectos de este trabajo es escasa y parcial, razón por la se pueden incluir en el reto anterior. Esta apreciación es aplicable sobre todo a las entidades constituidas como asociaciones, porque en el ámbito de las fundaciones, que con frecuencia actúan en varios de los campos anteriores, se han hecho varios informes similares a los que existen para el TSAS. Hay fundaciones de acción social (FAS), sobre las que también existe alguna información.

3.1. El Tercer Sector de Acción Social (TSAS)¹¹

El TSAS es la parte cuantitativa y cualitativamente más importante del TS. Sus objetivos son: la producción de servicios de bienestar, la reivindicación de derechos sociales o abogacía social y el estímulo de la participación cívica a través del voluntariado social (Marbán, Pérez Yruela y Rodríguez Cabrero, 2020). Es el sector por antonomasia de la acción voluntaria, si bien esta se extiende a otros ámbitos del TS.

Lo forman tres entidades singulares, Caritas Española, Cruz Roja Española y la ONCE, que se rigen por regulaciones específicas, y un colectivo estimado en unas 30.000¹² entidades activas, entre las que predominan las asociaciones (70%) y en menor medida las fundaciones de acción social (18%). Casi dos tercios dicen haberse creado por iniciativas ciudadanas (63%) y un 6% por iniciativa de entidades religiosas, pero es probable que la influencia de los motivos religiosos sea mayor, porque parte de las de iniciativa ciudadana tengan los motivos religiosos como motivación subyacente para crearlas.

Las entidades de acción social tienen profundas raíces en la historia social de España, pero es a partir de la segunda mitad de la década de los años 60 del pasado siglo cuando se inicia un período de reconstitución que llega hasta finales de la década de los 80. A partir de 1980 han ido creciendo y consolidándose, impulsadas por la restauración de la democracia, por el desarrollo que tuvo el Estado de Bienestar en España durante esos años y por nuestra incorporación a la UE. El TSAS llegó a la crisis económica y financiera de 2008 razonablemente consolidado, con bastantes diferencias internas, y mostró su capacidad para dar respuesta, en un contexto restrictivo de recursos, al

¹⁰ Este apartado se basa en un texto más amplio de Pérez Yruela, M. y G. Rodríguez Cabrero (en prensa). "El Tercer Sector de Acción Social como actor estratégico de la sociedad civil española". Madrid: Fundación Botín.

¹¹ This section is based on a broader text by Pérez Yruela, M., and G. Rodríguez Cabrero (2020). *The Third Sector of Social Action as a strategic actor of Spanish civil society*. Madrid: Botín Foundation.

¹² Esta es la cifra estimada en los cuatro informes que hasta se han hecho hasta ahora sobre la situación del TSAS (Fundación Luis Vives, 2010 y 2012 y POAS 2015 y 2019)

incremento de las demandas sociales que provocó la crisis. Lo hizo con un gran esfuerzo. Tuvo que afrontar cambios profundos, no concluidos aún, internos (creación de redes de colaboración, reestructuraciones organizativas), y externos (redefinición de las formas de colaboración con las Administraciones Públicas en sus diferentes niveles, con la economía mercantil y con la economía social). Ha sido una adaptación muy exigente, que dentro del sector se resume en la expresión “hacer más con menos recursos”. La postcrisis, parte de cuyo impacto social llega hasta la actualidad, ha generado nuevos problemas y demandas sociales, que le han exigido más cambios en la dinámica de sus tres objetivos centrales: abogacía social, prestación de servicios y participación cívica. Este nuevo contexto social y económico ha abocado al TSAS a preocuparse internamente sobre su sostenibilidad futura.

La actividad del TSAS está muy relacionada con los ciclos económicos y políticos. Los ciclos económicos generan necesidades y demandas sociales cambiantes, lo vimos en tras la crisis de 2008 y lo veremos tras la pandemia de 2020. Los ciclos políticos crean el modo de colaboración entre el sector público y el TSAS y cambios regulatorios. Su relación con las administraciones públicas es constante, ya que coopera en la prestación de servicios y en la gestión de programas y estrategias de bienestar y a la vez depende económicamente de ellas. Pero los ciclos políticos la condicionan porque no son ajenos a las distintas visiones que los gobiernos tienen sobre la función del TSAS, que no facilitan su estabilidad y perjudican la eficacia de su actividad.

No puede comprenderse el desarrollo del TSAS en España sin incardinarlo en el desarrollo conjunto de este sector en la UE. En las últimas dos décadas el TSAS dentro de la UE ha ido tejiendo relaciones y formas de articulación supranacional a través de las cuales fluye el intercambio de conocimiento y la innovación social¹³. La creciente europeización del TSAS es una realidad, tal como nos muestran los estudios comparados. No obstante, la naturaleza del TSAS de cada país de la UE es reflejo aproximado de su sistema de bienestar social. Como es bien sabido, los países del norte de Europa y los escandinavos tienen sistemas de bienestar más robustos que los del sur. El indicador del número de trabajadores del TSAS en cada país así lo refleja. En España e Italia representan el 3,9 por ciento del total de los empleados del país, por debajo de Países Bajos (10,3), Reino Unido (5,9), Alemania (5,4) y Dinamarca (4,9) (Salomon y Sokolowski, 2018)

¹³ Son ejemplos de esto la Red Europea de Lucha contra la pobreza, la Social Platform, la Federación Europea de Organizaciones de Asistencia a Personas sin Hogar (FEANTSA) o el Foro Europeo de Personas con Discapacidad (EDF), entre otras.

También existen algunas tendencias relativamente comunes entre ellos, como: la importancia que dan a la prestación de servicios sociales, en colaboración con el sector público; la competencia selectiva del TSAS con el sector mercantil en la prestación de servicios; la participación de los voluntarios en el gobierno de las organizaciones sociales; la colaboración entre entidades mediante trabajo en red y desarrollo de proyectos conjunto, facilitado por las estrategias nacionales y europeas de política social; creciente interconexión entre entidades de la ES y OPSFL; una estrategia explícita compartida para avanzar hacia una mayor vertebración interna (donde el tamaño importa, aunque no sea la última ratio de la eficiencia y efectividad) y lograr mayor visibilidad social; la percepción de la necesidad de una acción cada vez más transversal, para que sus intervenciones sean cada vez más personalizadas y tengan mayor capacidad de integración social de los destinatarios; preocupación compartida sobre la necesidad de ampliar la base social, promoviendo la participación social e intensificando la función de defensa de derechos; preocupación también por la necesidad de mejorar la autonomía y la estabilidad financiera.

El TSAS¹⁴ en España es un sector consolidado, con una importante renovación (el 56,5% de las entidades se crearon entre 2000 y 2019, muchas después de 2008) cuyo rasgo característico es la proximidad a los colectivos y personas a las que atiende. Es también un sector muy polarizado según el tamaño económico de las entidades. En 2018, casi la mitad de las entidades tenían unos ingresos inferiores a 30.000 € anuales, un 30 % los tenían entre 30 y 300 mil euros y sólo un 8,5 % pasaban del millón de euros, entre las que están las tres entidades singulares. El gran número de entidades con menos de 30.000 euros anuales es una debilidad del sector. No lo es tanto por su tamaño cuanto por su viabilidad económica. Las entidades pequeñas suelen ser de mucha proximidad, capaces de prestar servicios de calidad en esos entornos, con importante enraizamiento social y participación de voluntariado, pero su situación económica es precaria, son las que tienen más deudas y su fragilidad pone en peligro las actividades y servicios que prestan, que son importantes. Algo parecido a lo que sucede con las pymes en la economía del país.

El 75% de las actividades del sector se centran en la acción social (37%), la inserción social (14%) y la atención sociosanitaria (24%). El perfil de los colectivos a los que se dirige la actividad del TSAS son: personas sin hogar, en riesgo de exclusión,

14 La información disponible a nivel nacional más importantes sobre el TSAS procede de los cuatro informes que se han realizado entre 2008 y 2019, dos ellos promovidos por la fundación Luis Vives publicados en 2010 y 2012 y otros dos promovidos por la Plataforma de Organizaciones de Acción Social (POAS), publicados en 2015 y 2019. Los autores de este trabajo han participado en la dirección científica y realización de esos informes. Todos los datos que se recogen proceden de ese trabajo y en los que son de otra procedencia se cita la fuente

en situación de dependencia, con discapacidad y con problemas de adicción; infancia, adolescencia, juventud y mayores con problemas; mujeres maltratadas, migrantes y refugiados, entre otros. El resto de actividades son la defensa de derechos y la sensibilización y formación sobre los problemas que atienden.

En 2018 sus ingresos alcanzaron 16.583 millones de euros, un 1,37 % del PIB de España, cifra algo mayor que la de 2008 que fue de 16,824 millones. Entre 2008 y 2013 perdió por la crisis 2.354 millones de euros. Las entidades singulares representan el 19% de los ingresos del sector. Es un sector en conjunto saneado en el que el endeudamiento sólo se produce en las entidades con ingresos inferiores a 30.000 euros. En cuanto a la procedencia de los ingresos, el 41,4 % es financiación pública, veinte puntos porcentuales menos que en 2008; el 26% es financiación privada, tres puntos más que en 2008; y el 32,6% es financiación propia, dieciocho puntos más que en 2008, casi el doble. Durante la crisis el TSAS compensó la caída de la financiación pública aumentando sobre todo la privada.

El TSAS ha hecho un esfuerzo sostenido durante los años más intensos de la crisis económica para atender el crecimiento de las nuevas necesidades sociales. El número de atenciones directas a beneficiarios aumentó de 42 millones en 2008 a casi 53 millones en 2018. La salida relativa del impacto social de la crisis las ha reducido al nivel de 2008, unos 42 millones de intervenciones.

En 2018 empleaba a 577.230 personas, el 3 % del total de empleos de España. Durante la crisis, para atender nuevas demandas, aumentó los empleos desde 529,029 en 2008 a 644,979 en 2013. Después bajó a la cifra antes citada de 2018. El empleo de las entidades singulares ha pasado de representar el 8% en 2008 al 15% en el 2018, que son las que han absorbido casi todo el aumento de empleo que ha habido en el conjunto del sector entre esos años, que ha sido de unos 48.000 empleos.

El 62,4 % de las entidades tenía alguna persona contratada en 2018, quince puntos porcentuales menos que en 2008 y el número medio de personas por entidad era de 28, unas 3,5 personas más que en 2008. Las entidades con más de un millón de euros de presupuesto son las que tienen una media de empleados más alta y la que ha crecido más, que ha pasado de 70 en 2008 a 130 en 2018. A su vez, las entidades con menos de 5 personas contratadas han crecido del 34,5% en 2008 al 45,7% en 2018, aumentando la polarización, rasgo que, por otra parte, se asemeja bastante a la distribución del empleo en el conjunto de las empresas de España.

Casi un tercio (35%) de las personas contratadas tienen contratos temporales, una media algo más alta que la española (30%), y el 46,5% tiene jornada a tiempo parcial, ambas características debidas a la fragilidad financiera de buena parte de las entidades del sector y a la peculiaridad de sus actividades. Dos tercios de las personas contratadas son mujeres y tres cuartas partes tienen estudios con nivel de grado o licenciatura.

En 2018 el sector contó con la colaboración de un 1,05 millones de voluntarios, un 31 % más que en 2008, con una media de casi 30 voluntarios por entidad, cuya dedicación equivale a unos 170.000 empleos anuales a tiempo completo. Los voluntarios se dedican preferentemente a realizar actividades de atención directa y participación en campañas de sensibilización y promoción. Las actividades de organización y mantenimiento de servicios también forman parte creciente de sus actividades.

En términos cualitativos, sus fortalezas demostradas son: la cohesión interna de las entidades; la estabilidad de la colaboración con el sector público; la apertura creciente a otras entidades del TS; la calidad y compromiso de sus recursos humanos en todos los niveles; el valor e importancia del voluntariado; la rapidez de respuesta ante los fallos del sector público y del mercado, insuficiente no obstante por la escasez de recursos; y una gestión que, en conjunto, es transparente y evita el endeudamiento para asegurar la viabilidad de las entidades.

Sus debilidades son: su baja visibilidad social; las dificultades para transmitir el valor de sus resultados; la estructura dual del tamaño organizativo; la insuficiencia financiera a pesar de la creciente diversificación de fuentes de financiación; y la todavía insuficiente articulación interna del sector.

La crisis económica de 2008 puso a prueba al sector y ha sido una oportunidad para reforzar capacidades que ya tenía, gracias a las entidades de segundo y tercer nivel, que han facilitado la sinergia de esfuerzos entre las entidades más pequeñas. Lo han hecho facilitando la participación en redes de colaboración, en proyectos comunes o en la adquisición conjunta de servicios. Esto no soluciona la acusada polarización, pero contribuye a paliarla y prepara el camino a la realización de fusiones amigables que mejoren la eficiencia y eficacia organizativa. Igualmente ha ayudado a aumentar la mentalidad estratégica de todas las entidades, grandes, medianas y pequeñas.

Los cambios en las necesidades sociales (inclusión laboral, envejecimiento, pobreza infantil, entre otras) han hecho tomar conciencia al sector de utilizar

mejor su capacidad institucional y organizativa para establecer una agenda de sostenibilidad a medio plazo, que ayude a adelantarse al cambio social; mejorar la solidez financiera; ampliar la base social; establecer alianzas estables con el sector público, las organizaciones y plataformas europeas y otros agentes de la sociedad civil; y ampliar la colaboración con el sector mercantil en proyectos de interés mutuo.

Estas escuetas cifras dan idea de la importancia y fortalezas que ya tiene el TSAS y también de sus debilidades. Como se ha visto, es un sector importante, pero los estudios empíricos en los que se basa esta afirmación son muy recientes, ha habido poca acumulación histórica de conocimiento, y los estudios cualitativos para completar los datos de las encuestas son escasos (Casado, 2015). Por ello, la información sobre el sector es aún incompleta para tener una idea más exacta sobre él. Los datos que hemos utilizado proceden de los cuatro informes sobre el TSAS citados que se han hecho desde 2008, que se refieren a todo el país. Se han basado en encuestas on-line que, como toda encuesta, tiene limitaciones por la longitud de los cuestionarios. Al no existir registros públicos homogéneos de entidades de este tipo, el universo se estimó a partir de registros parciales existentes, que puede ser incompleto. Por el tamaño de las muestras utilizadas, condicionadas por los recursos con los que se hicieron, no se pueden desagregar los datos por debajo del nivel nacional. Por eso los resultados son todavía muy generales, de grandes rasgos, que no llegan a los detalles de la diversidad que tiene el sector. Es necesario conocer la estructura y dinámica del sector en las comunidades autónomas, responsables de la política social e incluso en el ámbito local. Igualmente necesario es disponer de información para realizar tipologías de entidades que permitan conocer con más detalle la estructura del sector. Se ha escrito mucho sobre su papel en la gestión de la política social del sistema europeo de bienestar y cohesión social, pero se ha hecho más con referencias generales que con referencias concretas sobre su situación. Por eso es necesario ampliar las recomendaciones anteriores del ámbito europeo y hacer más estudios comparados. En suma, queda por delante un campo de investigación amplio y necesario para que el conocimiento del sector esté a la altura de su importancia social. Esto es aplicable a otras áreas de actividad de las organizaciones privadas sin fines de lucro en ámbitos de la cultura, el deporte o el ocio, mucho menos conocidas aún que el TSAS.

En las últimas décadas el TSAS ha crecido, se ha modernizado y se ha convertido en actor social necesario en la producción de bienestar, en la creación de cohesión social y en la canalización de un voluntariado diverso y cada vez más

cualificado. Ese proceso ha estado asociado a dos causas principales. Una, las crisis por las que el Estado de Bienestar ha ido pasando desde la primera crisis del petróleo a principios de los años setenta hasta la última crisis económica (Pérez Yruela, 2018), que han ido reduciendo sus recursos e impulsando la idea de la corresponsabilidad de la sociedad en su gestión y en su mantenimiento económico; el TSAS y las familias han sido los actores principales sobre los que ha recaído ese traspaso de responsabilidades del Estado a la sociedad. Otra, las críticas a la falta de atención estatal a algunas necesidades sociales por su dificultad para conocer y llegar a todos los grupos que las sufren; las críticas a la falta de calidad y eficacia de la provisión pública de servicios asistenciales que necesitan de cercanía, empatía, proximidad, flexibilidad y hasta generosidad para prestarlos, incompatibles con el modelo de gestión burocrático; la respuesta del Estado ha sido promover y aceptar la participación del TSAS, que por sus características, es el actor principal para asumirlas, sin renunciar a que también las empresas mercantiles puedan hacerlo.

El crecimiento del TSAS en medio de este dilema ha sido a la vez una debilidad y una oportunidad. Una debilidad, porque algunas entidades han crecido de forma frágil y precaria al dar respuesta a problemas que el Estado no atiende, pero que ayuda a resolver transfiriendo recursos al TSAS insuficientes para hacerlo adecuadamente; Una oportunidad, porque otras entidades han podido crecer al abrigo de las posibilidades económicas derivadas de la colaboración con el Estado sostenida y por el reconocimiento que implica delegar en ellas tareas de interés general.

Este dilema es responsable de algunas de las tensiones más importantes que afectan al sector. La primera, cómo compaginar dos funciones de las entidades del sector a veces difíciles de conciliar: una, la función de defensa de los derechos sociales y denuncia de su incumplimiento, que incluye la denuncia a las administraciones públicas por la insuficiencia de la financiación que destina a esos problemas; otra, de prestación de servicios concretos a quienes los necesitan, que realizan con la ayuda de la financiación pública. Son funciones con lógicas de realización distintas, que requiere recursos para cumplirlas, no siempre disponibles sobre todo cuando en un contexto de recursos escasos ambas compiten por ellos. La segunda, garantizar su autonomía de funcionamiento mediante el aumento de la autonomía financiera y la reducción de la dependencia financiera del sector público. Son tensiones difíciles de resolver porque el TSAS no puede renunciar a ellas. Sólo se resolvería si el Estado fuera receptivo a las críticas que se formulan por no atender derechos sociales y la financiación pública fuera suficiente para que el TSAS pudiera atenderlos.

Ambos son temas que requieren de análisis normativos en el contexto de una teoría del TS que resuelvan la cuestión de su reconocimiento como parte organizada de la sociedad civil, reconozca los privilegios que le corresponden, como a otras entidades así reconocidas, y ordene las relaciones entre sus entidades y las administraciones públicas en función de los objetivos de cada una tiene. La legislación ha avanzado en esta dirección reconociendo al sector, sus relaciones con las administraciones públicas y su participación en órganos de consulta, pero no ha desarrollado las normas concretas para su aplicación. Los avances que ha habido a través de los conciertos sociales y las cláusulas sociales en la contratación pública son insuficientes,

3.2. La economía social (ES)¹⁵

La ES la forman, según la legislación española, las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los mismos principios. Como hemos dicho antes, podría denominarse Tercer Sector de Acción Económica.

Para subrayar la importancia de la ES y las carencias sobre su conocimiento que son parte del reto al que este trabajo quiere contribuir, nos vamos a referir con más extensión a las cooperativas, que son el grupo de entidades más importantes de la Economía Social. Haremos al final una breve referencia al resto de las entidades, asumiendo que pueden aplicárseles los mismos comentarios hechos sobre como ampliar y mejorar el conocimiento de las cooperativas.

Las cooperativas tienen reconocimiento jurídico mucho más antiguo que el de las OPSFL. La primera ley de cooperativas la promulgó la II República en 1931. En 1987 se promulgó la primera ley de cooperativas de la democracia, que fue sustituida en 1999 (Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas) por la actualmente vigente. Esta ley introdujo modificaciones sobre las anteriores para facilitar la actividad de las cooperativas removiendo obstáculos que podrían entorpecerla. Entre otras cosas, autoriza las operaciones con terceros y aumenta su volumen económico permitido, permite que las asambleas puedan introducir el voto plural con limitaciones (abandono del principio

¹⁵ Este apartado es una versión resumida del apartado resumen del apartado 4 del trabajo: Pérez Yruela, M. (2019). "Panorámica del Tercer Sector en España durante la crisis". *Informe FOESSA 2019*. Los datos que se recogen proceden de este trabajo y en los que son de otra procedencia se cita la fuente.

tradicional de un hombre un voto) y amplía las formas de colaboración económica entre cooperativas para facilitar los procesos de fusión e integración que faciliten la ampliación del tamaño tan necesario para mejorar la competitividad (Sáez Fernández, González Gómez y Sánchez Martínez, 2003).

En suma, se ha tratado de acercar lo más posible el modelo cooperativo a la empresa no cooperativa para facilitar su adaptación a mercados cada vez más globales y competitivos. Con estos cambios, las empresas cooperativas no abandonan uno de sus principios básicos (la primacía de las personas sobre el capital), pero el contexto global en que se desenvuelven hace que a veces sea difícil de cumplir. Por ello, es un tema de debate en qué medida la presión del entorno, la evolución de la normativa que las regula y la propia cultura de las cooperativas como empresas, pueden haber ido alejándolas de los ideales originarios del cooperativismo como espacio de defensa y ayuda mutua de los sectores más débiles de la sociedad.

Las cooperativas están fuertemente articuladas bajo la fórmula de cooperativas de segundo y tercer grado, en corporaciones de representación de intereses de ámbito territorial y sectorial. Todas ellas convergen en la Confederación Española de Entidades de la Economía Social (CEPES) que es el máximo órgano de representación, sin perjuicio del peso que mantienen las organizaciones sectoriales y territoriales en la representación de sus intereses específicos. En esto se distinguen de las OPSFL, cuya articulación, como se dijo antes mucho más débil. Estas entidades de representación de nivel nacional forman parte de las que existen a nivel de la UE.

Ha habido desde hace mucho tiempo un órgano de la administración pública especializado, que se encarga, entre otras cosas, de la aprobación y registro de las cooperativas que se crean y de las estadísticas de las entidades de la ES. Es el órgano que actúa como interlocutor ordinario de la administración pública con el sector en los temas de interés común y de cada parte. En la XIV legislatura en curso, este órgano ha alcanzado el mayor rango, pues existe un Ministerio de Trabajo y Economía Social, una Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social y una Dirección General del Trabajo Autónomo, la Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas. En esto también se diferencia del TSAS, que no cuenta con un órgano especializado como este, aunque obviamente existen otros que realizan la función de interlocución con las entidades de este sector según los programas sociales específicos (infancia, juventud, mayores, discapacidad...) en los que colaboran. Generalmente, estos órganos de la administración han dependido del Ministerio

competente en materia de asuntos sociales, que en la legislatura actual es el de Derechos Sociales y Agenda 2030.

La importancia de este sector puede verse en los datos siguientes, En 2017 había en España 20.958 cooperativas. Entre 2007 y 2017 se perdieron algo más de cinco mil cooperativas, un 19,5%, de las cuales el 90% se perdió entre 2007 y 2013. Entre 2007 y 2017 la proporción de sociedades anónimas que desaparecieron fue el 29 %.

En 2017, el número de trabajadores de las cooperativas era de 319.792, que representaban el 1,6 % del empleo total de España en el cuarto trimestre de ese año. Eran unos 2.200 más que en 2007, lo que indica que las cooperativas han recuperado mejor que el conjunto de la economía española la pérdida de empleo provocada por la crisis, que en el caso de las cooperativas fue de 30.771 empleos menos entre 2007 y 2013.

En el mismo tiempo, las cooperativas han aumentado el número medio de trabajadores por cooperativa que han pasado de 12,3 en 2007 a 15,2 en 2017, debido al descenso del número de cooperativas y el aumento del número de trabajadores en ese mismo periodo. Ha habido un ligero proceso de concentración necesario en el sector, que tenía un 76,6% de micro empresas con menos de 10 empleados.

Dos tercios de esos empleos (66,4 %) eran del sector servicios, algo más de un quinta parte (22,4%) del sector industrial, una décima parte de la agricultura (10,2 %) y un 3,1 % de la construcción. En el sector industrial, la proporción de trabajadores de las cooperativas es seis puntos porcentuales mayor que la media española y en el sector de servicios nueve puntos menor, lo que indica una estructura más próxima que la media del país a un modelo productivo con mayor peso del sector industrial.

Un indicador interesante de la proximidad de las cooperativas a las entidades del TSAS es cuantas de ellas se dedican a actividades parecidas. En 2017 lo hacía un pequeño número de ellas, eran 540 cooperativas que representaban un 2,6% del total. Trabajaban en ellas cerca de 19.000 empleados, un 5,9 % del total. Además, entre 2007 y 2017 han tenido un cierto crecimiento, sin interrupción en el periodo álgido de la crisis que llega a 2013, ya que al principio de esa década la proporción de cooperativas dedicadas a esta actividad era el 1,9% y la de trabajadores el 4,6%. Un crecimiento debido probablemente a las necesidades sociales creadas por la crisis.

Las cooperativas agrarias son las de mayor tradición en España. Han cumplido y siguen cumpliendo funciones muy importantes en el proceso de modernización de la agricultura y de la sociedad rural. En 2017 el número de cooperativas de la industria alimentaria eran poco más de la mitad de las del sector exclusivamente agrario pero generaban ya más empleo que este, unos 35.000 empleos en el primero frente a unos 32.000 del segundo. Es un indicador de la contribución de estas cooperativas al proceso de transformación e industrialización de la producción agraria. En 2016, tres comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña y Valenciana, concentraban el 41% de las cooperativas agroalimentarias y el 54% de la facturación de todas las cooperativas españolas de este sector. Andalucía es la comunidad que, a distancia de las demás, concentra la mayor parte de este sector, con el 22% de las cooperativas y el 38% del total de la facturación del sector cooperativo agroalimentario. Las cooperativas agrarias representaban además un tercio del total de las ventas y casi una quinta parte del total de las exportaciones del sector agroalimentario español, responsables de dos tercios de la producción final agraria.

La contribución de las cooperativas agrarias y agroindustriales a la economía de las zonas rurales y a su modernización, al mantenimiento de la población en ellas y a la creación de identidad, lealtad territorial y capital social para ayudar al desarrollo rural-territorial, ha sido y sigue siendo importante. La imagen de estas cooperativas como empresa está asociada para muchos consumidores a la idea de economía con rostro humano, calidad y confianza, que es un importante activo intangible. Pese a la importancia histórica y social de las cooperativas agroalimentarias, las del sector industrial y de servicios son hoy mucho más importantes en número y en creación de empleo y riqueza, como reflejo del cambio experimentado por la economía española.

El cooperativismo en España está menos desarrollado que en los países de su entorno, como muestran algunos indicadores. Según datos de 2015¹⁶, el número de trabajadores de las cooperativas era mucho mayor en Francia (1.217.400), Italia (1.150.200) o Alemania (860.000) que en España (290.221). También lo era el número de socios que tenían, en España casi 3 millones, en Francia 26 millones, en Alemania 22 millones y en Italia 12,5 millones. Igualmente lo era en el volumen de facturación que en España alcanzaba 62.000 millones de euros, en Francia 300.000 millones, en Alemania 195.000 y en Italia 150.000. Según

¹⁶ Estos datos proceden del informe realizado por Carmen Quintana Cocolina para Cooperative Europe publicado en 2016. <https://coopseurope.coop/sites/default/files/The%20power%20of%20Cooperation%20-%20Cooperatives%20Europe%20key%20statistics%202015.pdf>

el informe 2018 del World Cooperative Monitor¹⁷, que no es exhaustivo, entre las trescientas organizaciones cooperativas y mutualistas del mundo, que tienen un volumen de facturación de más 1.100 millones de dólares, hay 4 españolas¹⁸, 10 italianas, 23 alemanas y 48 francesas. A la vista de estos indicadores, el cooperativismo tiene en España un amplio margen de crecimiento.

No obstante, en España existen grandes grupos cooperativos. España tiene el primer grupo cooperativo industrial del mundo, el Grupo Cooperativo Mondragón, con más de 63.000 empleados; Cofares de distribución de medicamentos, con más de 2.500 empleados; Fundación Espriu de sanidad, educación y asistencia social, con más de 57.000 empleados, Consum del sector del comercio, con más 14.000 empleados; el Grupo Cooperativo Cajamar de banca y servicios financieros, con más de 6.000 empleos; Coren (287) del sector agroalimentario, con más de 3.000 empleados. Además de estos, pueden citarse otros como el Grupo Ilunion, con más de 35.000 empleados, vinculado al grupo ONCE, dedicado a la integración laboral de personas con discapacidad a través sobre todo de centros especiales de empleo. O el Grupo Clade, grupo empresarial de la economía social de ámbito catalán, multisectorial, con más 5.500 empleados.

Finalmente, vamos a añadir alguna información sobre otras entidades de la ES para completar la visión sobre su importancia. El segundo grupo en importancia son las sociedades laborales (SL) concebidas como entidades para la creación de empleo bajo la fórmula de sociedades anónimas o limitadas, que funcionan de acuerdo con algunos principios de la economía social. En 2017 había 9.324 SL, el 90% como sociedades limitadas, que empleaban a 63.471 socios y trabajadores. La mayor parte (88%) son microempresas con menos de 10 trabajadores y un tamaño medio de 7. Entre 2007 y 2017 tuvieron un retroceso muy importante, perdiendo 10.500 entidades y 61.000 empleos. Sus actividades principales son los servicios (59%), la industria (27%) y la construcción (12%).

Los siguientes grupos en importancia son: los centros especiales de empleo, concebidos para promover el empleo de los personas con discapacidad de los que había 670 que daban empleo a 84.946 personas con discapacidad¹⁹; las empresas de inserción concebidas para ayudar a personas con problemas social-

17 Este informe de periodicidad anual lo realiza la Alianza Cooperativa Internacional

18 Las organizaciones españolas entre esas trescientas, con el puesto que ocupan y su ámbito de actividad, son Corporación Mondragón (39, industria), Mutua Madrileña (102, seguros), Fundación Espriu (193, sanidad, educación y asistencia social) y Grupo Cooperativo Cajamar (248, Banca y servicios financieros), organizaciones muy distintas entre sí.

19 CEPES. https://www.cepes.es/social/estadisticas?e=personas_relacionadas_es Consulta 20.03.2020

es de acceso al mercado de trabajo, de las que en 2108 había 185 que daban empleo 7.154 personas, el 60 % trabajadores de inserción y el 40 % a técnicos y gestores de la empresas; cofradías de pescadores, de las que había 198 que daban empleo a unos 35.000 trabajadores²⁰.

Las fundaciones pueden considerarse parte del TS porque realizan actividades relacionadas con el TSAS, con la ES y con otras actividades como cultura, ocio y deporte. Existe información agrupada disponible sobre las fundaciones en general y sobre las de acción social. En 2014, última información disponible, había en España 8.866 fundaciones activas. Es un sector en el que en torno a un tercio (34%) de sus entidades tenía un presupuesto inferior a 30.000 mil euros y otra proporción similar tenía entre 30.000 y 500.000 euros. Existen unas 270 asociaciones con presupuesto mayor de 10 millones de euros y unas 40 de más de cincuenta, muchas de ellas promovidas por grandes grupos económicos o por el sector público. Es un sector polarizado según el criterio del presupuesto, aunque en menor medida que el TSAS. Poco más de un tercio de las fundaciones no tenían empleados (38%). Los dos tercios que si los tienen contaban con 213.683 empleos directos. Los ingresos anuales del conjunto de las fundaciones fueron de unos 7.400 millones de euros. Las fundaciones de acción social son una parte pequeña del subsector fundacional y sus características están más cerca de las entidades del TSAS que las del subsector al que pertenecen. Tenían 3.025 trabajadores, 8.079 voluntarios y unos ingresos de 354 millones de euros.

Las asociaciones son el campo organizacional del que se tiene menos información accesible. Por una parte, existen registros locales, provinciales, autonómicos y nacionales, dispersos y no integrados en un registro único, que impiden realizar análisis de ámbito nacional y territorial comparado. La información de los registros es muy escueta y no suele estar actualizada. Según un estudio reciente (Pérez Yruela, 2016) entre 1993 y 2012 las asociaciones activas de ámbito estatal crecieron mucho, pasando de 9.190 a 44.20612. Entre las asociaciones activas, las culturales eran la mayoría (40%), seguidas a bastante distancia de las de carácter económico y profesional (18%), las de acción social, sanitaria y educativa, incluidas las de atención a enfermos y dependientes (16 %) y las deportivas, recreativas y de jóvenes (11 %). El grupo que más creció entre esos años es el de acción social, sanitaria y educativa que en 1993 solo representaba el 8 %. Según sus actividades, unas asociaciones podrían formar parte del TSAS, otras de la ES, otras del ámbito de la

20 CEPES. https://www.cepes.es/social/estadisticas6e=personas_relacionadas_es Consulta 20.03.2020

representación de intereses corporativos y otras del ámbito genérico de la cultura, que son la mayoría. Como dijimos antes, podrían formar parte de un área distinta que podría denominarse Tercer Sector de Acción Cultural.

El campo organizacional de la ES es importante, variado y complejo. Disponemos de estadísticas básicas para analizarlo, como las que se han utilizado aquí, pero son insuficientes. Se necesitan datos e investigaciones que aporten información más detallada sobre él. El Cooperativismo es el que más ha llamado la atención del ámbito académico. Hay bastantes instituciones dedicadas al estudio y la investigación sobre esta materia, casi todas integradas en el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC-España), miembro de CIRIEC-Internacional. Entre ellas está la Red Española Interuniversitaria de Institutos y Centros de Investigación en Economía Social (RED EUNIES), de la que forman parte más de trescientos investigadores procedentes de distintas universidades españolas. En España se publican tres revistas especializadas en esta materia: *CIRIEC-España. Revista de Economía Pública. Social y Cooperativa*; *Revista de Estudios Cooperativos (REVECO)* de la Universidad Complutense y *DEUSTO Estudios Cooperativos* de la Universidad de Deusto. Por todo esto, existe abundante literatura científica sobre cooperativismo, especialmente en los aspectos descriptivos de la dimensión del sector, históricos, jurídicos, económicos y bastante menos en los sociológicos.

La información estadística de la que se disponía hasta ahora constaba de series históricas sobre cooperativas en alta en la Seguridad Social, clasificadas por sector de actividad, comunidad autónoma y número de trabajadores. A partir de 2017 esta información ha dejado de estar accesible de manera directa. Se trata de una información básica que recoge el número de cooperativas, el número de socios y el número de trabajadores según el tipo de cooperativa, sector de actividad y comunidad autónoma a la que pertenecen. Lo mismo se puede decir de las otras entidades de la AS, cuya información básica es parecida pero de producción privada y muy reciente, como en el caso de las otras entidades de la ES que antes se han citado. Esta información es insuficiente para conocer en profundidad todo el sector de la ES. Sería necesario disponer de registros con información suficiente y actualizados de producción público-privada obligatoria y promover a partir de ellos investigaciones para conocer mejor, según tipología de organizaciones, sectores de actividad y territorios, de la dimensión empresarial (plan estratégico, estructura organizativa, dirección y liderazgo, política de personal, vinculación cultural a los

principios de la ES, gestión de conflictos, participación de los socios, características del voluntariado, calidad institucional...) y de la dimensión social (recursos humanos y base social, gestión y actividades de la obra social, colaboración con OPSFL...) de estas entidades

Para las asociaciones la información es aún más escasa. Pero merecería la pena hacerlo, especialmente para las asociaciones culturales, porque ocupan una posición de primera línea, a modo de infantería de la cultura de la sociedad civil, que nutre de ideas y efectivos a muchas iniciativas posteriores de participación ciudadana.

4. ORGANIZACIONES EMERGENTES DE ACCIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA SOCIAL Y COLABORATIVA²¹

Como ejemplo de las acciones sociales colectivas afines con los principios de la ES, vamos a referirnos en este apartado a las empresas sociales, a las cooperativas sociales, a las empresas de economía solidaria, a algunas de las iniciativas de economía y consumo colaborativo, de origen reciente, y al desarrollo de las denominadas fundaciones comunitarias. El objetivo es analizar su proximidad a los principios de la ES y de las OPSFL, para ver hasta qué punto es posible la renovación institucional de estas entidades utilizando otras fórmulas jurídicas y nuevos modelos organizativos. En otras palabras, si es posible que en la delimitación del Tercer Sector se puede pasar de los criterios formales de las definiciones jurídicas de las entidades a otros criterios en los que primen los principios, valores y objetivos de la actividad, sobre las fórmulas jurídicas en las que concreten.

4.1 S Empresas sociales

Las empresas sociales son un movimiento que ha crecido en importancia en Estados Unidos y Europa en las últimas décadas. Lo que se entiende por empresa social es distinto en ambos continentes (Kerlin, 2006; Galera y Borgaza, 2009; Hulgard, 2010). En EEUU hay una concepción laxa de lo que es una empresa social. La Alianza de la Empresa Social (Social Enterprise Alliance) de EEUU, una organización muy activa en la representación y promoción de las empresas sociales, las define como “organizaciones que atienden a necesidades no cubiertas o resuelven un problema social o medioambiental a través

²¹ Este apartado es una versión ligeramente modificada del apartado 7 de: Pérez Yruela, M. (2019). “Panorámica del Tercer Sector en España durante la crisis”. Informe FOESSA 2019.

de un enfoque de mercado o empresarial”. Considera tres tipos de empresas sociales: a) empresas que emplean personas con dificultades para incorporarse al mercado de trabajo normal; b) empresas que ofrecen productos o servicios innovadores, que crean impacto social o ambiental positivo; c) empresas que donan una parte de sus beneficios a organizaciones sin fines de lucro que atienden necesidades sociales no cubiertas. La empresa social, dicen, no es tanto una figura jurídica determinada, sino una filosofía que pretende atender problemas sociales o causas socialmente útiles a través de una organización que está dentro del mercado. Incluye, pues, un abanico de casos que van desde una empresa cuyas actividades son socialmente útiles o beneficiosas a una organización sin ánimo de lucro que destina todos sus beneficios a objetivos sociales, pasando por empresas que dedican a objetivos sociales sólo una aparte de los beneficios. El movimiento de empresas sociales de este modelo está extendido por muchos países de Europa y otros continentes.

En Europa, la noción de empresa social está más asociada a las formas de economía social tradicional, como las cooperativas y entidades similares, y trata de definirla de manera clara. La Red Europea de Investigación sobre la Empresa (EMES), las define a través de varios rasgos de carácter económico, social y participativo, que deben cumplir (Defourny y Nyssens, 2012: 12-15). Los primeros son: tener una actividad continuada de producción y/o venta de bienes; asumir un grado significativo de riesgo económico; tener una cantidad mínima de trabajadores asalariados. Los segundos: tener un objetivo explícito de beneficiar a la comunidad; surgir por iniciativa de un grupo de ciudadanos o una organización de la sociedad civil; limitar la distribución de beneficios. Finalmente, las terceras son: disponer de un alto grado de autonomía; que el poder de decisión no esté asociado al capital que posea cada socio (p. e. un socio un voto); tener una gobernanza participativa que involucre a los distintos grupos afectados (stakeholders) por la actividad de la empresa (p.e. socios, empleados, perceptores del servicio...). La definición que propone EMES es más restrictiva que la anterior, para recoger dentro de ella a las cooperativas y otras entidades de la economía social, que tienen un peso importante en europea, y para tratar de precisar qué es una empresa social.

La Unión Europea está haciendo un esfuerzo importante por promover las empresas sociales, a través de la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social que se aprobó en 2011, porque reconoce que pueden desempeñar un papel muy importante en el modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador propuesto en la Estrategia Europa 2020. La iniciativa se puso en

marcha sin que hubiera aun una definición aceptada de ellas. Se utilizó una noción de empresa social tomando algunos rasgos de la definición anterior: empresas cuyo fin principal es un objetivo social de interés común, cuyos beneficios se reinvierten principalmente en la realización de ese objetivo y cuya forma de gobernanza es democrática y participativa. Como casos de empresas sociales cita dos tipos: a) las que prestan servicios sociales o suministran bienes y servicios destinados a un público vulnerable (atenciones sociales grupos necesitados, actividades formativas y de inclusión...); b) empresas cuyo modo de producción de los bienes o servicios persigue un objetivo de tipo social (integración social y profesional mediante el acceso al trabajo de personas desfavorecidas con riesgo de exclusión, cuya actividad puede incluir bienes o servicios que no sean sociales). Reconoce que los regímenes jurídicos específicos de la economía social (cooperativas, fundaciones, asociaciones...) son los que mejor se adaptan a esa concepción de la empresa social, pero reconoce también que hay muchas empresas sociales en forma de sociedad privada o de sociedad anónima tradicional. Cita varios ejemplos de empresas sociales, algunas de las cuales son entidades similares a las Empresas de Inserción y a las Centros Especiales de Empleo de España.

El Parlamento Europeo ha aprobado en 2018 un conjunto de recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre la necesidad aprobar un estatuto para las empresas sociales y solidarias. Son recomendaciones muy útiles para la definición, consolidación y crecimiento de un modelo europeo de este tipo de empresas. La recomendación más importante es que se promueva “activamente la etiqueta europea de economía social y que se den a conocer las ventajas económicas y sociales de las empresas sociales y solidarias, incluida la creación de empleo de calidad y la cohesión social”. Añade observaciones interesantes, como la de señalar que no puede ser condición para merecer la consideración de empresa social el sólo hecho de tener una estrategia de responsabilidad social de empresa, de manera que se distinga claramente entre una y otra cosa. Que se pida a los Estados miembros una lista de las empresas que según su ordenamiento jurídico deban considerarse empresas sociales. O sobre la importancia del principio de que un porcentaje considerable de los beneficios obtenidos por la empresa debe reinvertirse o utilizarse de otro modo para alcanzar la finalidad social de las empresas sociales y solidarias. Además, hace recomendaciones sobre la necesidad de apoyar financieramente a estas empresas, crear un marco favorable para su desarrollo, integrarlas mejor en la legislación de la Unión y establecer un marco jurídico más coherente y completo en apoyo de las empresas basadas en la economía social, en el ámbito de la contratación

pública, del derecho de competencia y de la fiscalidad, para que estas empresas sean tratadas de manera coherente con su naturaleza específica y su contribución a la cohesión social. Finalmente, señala que entre los requisitos mínimos para la obtención de esa etiqueta debe ser el desempeño de una actividad de utilidad social definida a escala europea. Además, el impacto social de la actividad debe ser mensurable en el ámbito de la integración social y/o laboral de personas vulnerables y en riesgo de exclusión, de la reducción de las desigualdades de todo tipo y en especial de género, de la mejora de la igualdad de oportunidades, de la lucha contra la pobreza y se deben respetar las mejores prácticas en el ámbito de las condiciones de trabajo y empleo.

Como se decía antes, la visión europea y su plasmación en las iniciativas de la Unión es diferente de la de EEUU en cuanto no contempla el caso de empresas que destinen sus beneficios o parte importante de ellos a fines sociales o realicen actividades de utilidad social o ambiental más amplias que las recogidas en los requisitos anteriores. No obstante, hay que esperar a ver si la UE llega a desarrollar una definición de empresa social, bien con estas recomendaciones o ampliándolas a esos otros casos, y crea la etiqueta europea de empresa social, que sería un avance muy importante para el sector. La definición de lo que se considera utilidad social sería un aspecto clave para delimitar el ámbito de las empresas sociales, tarea nada fácil por otra parte. En cualquier caso, es importante la observación que se hace de distinguir con claridad la frontera entre empresas sociales y empresas que se quieran calificar como tales por aportar una parte pequeña de sus beneficios a algún objetivo social para adquirir buena imagen ante la sociedad, como está sucediendo.

Las empresas de inserción para ayudar a la empleabilidad de personas excluidas, los centros especiales de empleo para promover el empleo de los discapacitados y las políticas de integración de los discapacitados en el mercado de trabajo podrían ser calificadas empresas sociales junto a aquellas que den oportunidades a excluidos y discapacitados de manera significativa.

4.2. Cooperativas sociales

Italia se adelantó con la creación en 1991 de las cooperativas sociales a la regulación de estas nuevas formas de economía social y solidaria. Las cooperativas sociales surgen en el contexto del papel que las empresas sociales y, en general, todas las entidades del tercer sector, van a tener en el modelo de Estado de Bienestar que se está gestando en Europa desde hace años. Un modelo en el que, como se decía al comienzo, el Estado está transfiriendo responsabilidades a la

sociedad para colaborar en la política social que él financia, a través sobre todo de su aplicación, y en la cobertura de las necesidades que él no llega a cubrir.

Las cooperativas sociales se crearon específicamente para desarrollar dos funciones, que se parecen mucho a los dos tipos de empresas que contempla la estrategia europea antes citada: a) actividades de atención sociosanitaria, esto es, servicios sociales y asistenciales (art. 1.a); b) actividades de formación a través del empleo para personas con dificultades para integrarse en el mercado laboral, en cooperativas sociales que realicen actividades agrícolas, industriales, comerciales o de servicios (art. 1.b).

El modelo de gobernanza de las cooperativas sociales, a diferencia de otras cooperativas, es el empresarial, el propio de las empresas privadas que compiten en el mercado. No obstante, su objetivo principal no es el beneficio sino la función social que desarrollan. Pueden tener tres tipos de socios (Thomas, 2004): a) Los socios fundadores que aportan fondos para su creación (65%); b) socios voluntarios que aportan trabajo sin remuneración (20%); c) los socios beneficiarios (5%) de la actividad que desarrolle la cooperativa, que participan en la gestión de la entidad; d) otros socios (10%) que pueden incluir socios financiadores a través de acciones, miembros estatutarios que puedan prestar algún servicio relevante a la entidad, trabajadores de la entidad, o representantes de instituciones públicas. Este tipo de miembros no está previsto en otras cooperativas.

Desde el punto de vista de la participación, las cooperativas sociales incorporan algunas innovaciones. Una, vinculando a los voluntarios como socios, que los hace más partícipes del proyecto. Otra, ampliando el abanico de quienes pueden participar en la creación y gestión de las cooperativas. Se distingue así de las cooperativas tradicionales, en las que la gestión está sólo en manos de los socios a través de la asamblea y del órgano de dirección que ella elige. También en los objetivos, que dejan de ser los tradicionales de ayuda mutua y defensa de los intereses de los cooperativistas. Desde el punto de vista de la gestión, estas cooperativas, por su carácter empresarial, parecen estar en mejores condiciones para competir con otras entidades en la captación de recursos y tener más facilidad en el acceso a fuentes de financiación (Thomas, 2004). Lo están por la experiencia a la que tienen que someterse de competir entre ellas y con otras entidades públicas o privadas en el mercado de la prestación de los servicios que se externalizan en el modelo de Estado de Bienestar en el que lo hacen. Las cooperativas sociales pueden considerarse como un tipo de empresa social, concretado y regulado conjugando la doble vertiente de objetivos sociales y funcionamiento empresarial. Es un modelo que

podrían considerar las entidades del TSAS, pasando de la fórmula jurídica de asociación, demasiado genérica y poco apta para entidades que pueden competir entre sí y con el sector mercantil.

Entre 2005 y 2013, casi se ha duplicado el número de cooperativas sociales, pasando de 7.765 a 13.041 (en 2014 descendieron a 12.319). El número total de trabajadores en las cooperativas sociales en 2013 fue de 390.079, incluyendo trabajadores fijos y temporales, de los cuales 24.509 eran personas con discapacidad o tenían otros problemas. En España no existen ese tipo de cooperativas, aunque, como ya se ha dicho, hay otras figuras que cumplen funciones similares.

4.3. Economía alternativa y solidaria

La economía solidaria, que es parte de la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS), es un ejemplo de nuevas iniciativas económicas que, aunque deudoras de la tradición de la economía social, se basan en valores y objetivos que traspasan los límites del cooperativismo tradicional. La economía solidaria se basa en los principios recogidos en la Carta de la Economía Solidaria, que en el preámbulo dice que “es una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano...por lo que no se la identifica según los beneficios materiales de una iniciativa, sino que se define en función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de toda la sociedad como sistema global”.

Las entidades de la economía solidaria se apoyan en el concepto de mercado social: “Una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, en un territorio determinado, constituida tanto por empresas y entidades de la economía solidaria y social como por consumidores/as individuales y colectivos. Cuyo objetivo es cubrir una parte significativa de las necesidades de sus participantes dentro de la red y desconectar la economía solidaria de la economía capitalista, tanto como sea posible”.

La Carta de la Economía Solidaria fija seis principios:

- *Equidad*, equivalente a un principio de igualdad, que reconoce a todas las personas como sujetos de igual dignidad, ausencia de relaciones de dominación.
- *Trabajo*: reconoce su importancia en la calidad de vida de las personas, de la comunidad y de las relaciones económicas y la importancia de recuperar

la dimensión humana del trabajo considerando que es más que un empleo o una ocupación.

- *Sostenibilidad ambiental*: la alianza con la naturaleza y el reconocimiento de sus derechos es punto de partida de la economía solidaria.
- *Cooperación*: favorecer la cooperación en lugar de la competencia y buscar la colaboración con otras entidades y organismos públicos y privados.
- *Sin fines lucrativos*: la economía solidaria tiene como finalidad el desarrollo integral, colectivo e individual, de las personas, y como medio, la gestión eficiente de proyectos económicamente viables, sostenibles e integralmente rentables, cuyos beneficios se reinvierten y redistribuyen. Los balances de resultados deben tener en cuenta no solo los aspectos económicos, sino también los humanos, sociales, medioambientales, culturales y participativos.
- *Compromiso con el entorno*: participación en el desarrollo local sostenible y comunitario del territorio. Las organizaciones de la economía solidaria están plenamente integradas en el territorio y entorno social en el que desarrollan sus actividades.

A la vista de lo anterior, puede decirse que estas entidades forman parte de una nueva cultura que refleja el avance de movimientos sociales como el ecologismo, el feminismo, el pacifismo y el anticapitalismo. Esto último más en el sentido del rechazo a aspectos como los hábitos del consumismo irresponsable, a la cultura de la competencia agresiva, al lujo derrochador como símbolo de estatus y las desigualdades sociales que ese modelo genera. Una cultura que quiere tener su sitio, aunque por ahora sea pequeño, en las sociedades de corte liberal democrático e individualismo posesivo, hegemónico en los países desarrollados donde han surgido.

La REAS agrupa a unas quinientas entidades, agrupadas a su vez en redes regionales (en todas las Comunidades Autónomas menos en tres) y sectoriales (AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria; Mesa de Finanzas Éticas (FIARE Banca Ética, Coop57, Oikocredit, y CAES) y Red de Finanzas Alternativas y Solidarias; Unión Renovables (Red de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Energías Renovables) y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo). La actividad de sus entidades cubre un abanico muy amplio, desde las de reciclaje y recuperación que propone la economía circular, hasta las financieras, pasando por actividades agrícolas, industriales y de servicios especialmente de servicios sociales y educativos.

La economía solidaria forma parte sin duda de Tercer Sector, de hecho está asociada a CEPES, y muchas de sus entidades son cooperativas o asociaciones, pero en comparación con las cooperativas y entidades similares tradicionales puede decirse que es casi una recién llegada. No obstante, plantea su actividad desde valores y principios que pueden ayudar al sector tradicional a refrescar los suyos, estableciendo contactos y proyectos en común con ella.

4.4. Economía y consumo colaborativo

La economía colaborativa es un fenómeno social y económico que está creciendo de manera exponencial. Aunque no hay una definición consensuada sobre qué es la economía colaborativa, hay que adoptar alguna definición para fijar los términos de cualquier análisis sobre el tema que se quiera emprender. Así, la Unión Europea en su comunicación al Parlamento sobre “Una agenda europea para la economía colaborativa” la define como “modelos de negocio cuyas actividades se facilitan mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de bienes y servicios generalmente ofrecidos por individuos privados. La economía colaborativa involucra tres categorías de actores: i) proveedores que comparten su patrimonio, sus recursos, su tiempo y/o sus capacidades (puede tratarse de proveedores individuales privados que los ofrecen de manera ocasional (iguales o ‘peers’) o proveedores que ofrecen sus conocimientos y/o capacidades profesionales actuando como tales; ii) consumidores o usuarios de los bienes y servicios ofertados; iii) intermediarios que ponen en contacto a los proveedores con los consumidores o usuarios a través de una plataforma. Las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y se pueden llevar a cabo de manera lucrativa o no lucrativa”. Como es bien sabido, un factor esencial para el desarrollo de estas plataformas y, por tanto de la economía y el consumo colaborativo, es la existencia de internet y de tecnologías de la información y las comunicaciones necesarias para desarrollarlas y utilizarlas.

Las relaciones entre los proveedores y usuarios de este tipo de economía pueden ser entre iguales, como es el caso de las personas que quieren intercambiar sus casas u ofrecer parte de ellas como alojamiento de manera ocasional. O entre empresas que quieren ofrecer sus servicios o vender sus productos a consumidores que quieren adquirirlo pagando por ello a través de las plataformas, como las que existen para alojamiento en hoteles. Las plataformas actúan como lugar de encuentro entre proveedores y usuarios, por lo que pueden cobrar una comisión o no, dependiendo del tipo de plataforma. O son

plataformas que prestan un servicio a través de personas que contratan para ello, como algunas de mensajería o de servicios a domicilio.

Por lo general, se considera economía colaborativa a la que se desarrolla entre iguales a través de una plataforma, de forma gratuita o mediante pagos que no se consideran beneficio, como por ejemplo los siguientes: bancos de tiempo, crowdfunding, crowdsourcing, co-working, monedas locales, compartir servicios o bienes de alojamiento, uso de equipos o movilidad por intercambio, de forma gratuita o por pequeñas compensaciones por coste del servicio (Rodríguez et al., 2017).

En los demás casos se puede hablar de relaciones comerciales entre proveedor y consumidor (economía bajo demanda, Sharing España, 2017), a las que afectan los impuestos por el ejercicio de la actividad y la legislación sobre consumo y protección de los consumidores, además de la legislación sobre relaciones laborales para el caso de plataformas que tengan empleados para prestar los servicios, además de los que tengan para el funcionamiento de la plataforma. La comunicación de la Comisión Europea citada, quiere advertir sobre las implicaciones jurídicas (autorizaciones de actividad, obligaciones fiscales y laborales, derechos de los consumidores, seguros...) que tienen ese tipo de relaciones económicas, hasta hace poco desconocidas, para crear el marco jurídico apropiado para que su desarrollo se ajuste al ordenamiento jurídico. Tarea compleja por la diversidad de plataformas que existen.

En la variada casuística que hay de este tipo de relaciones, se han ido viendo efectos no deseables de su desarrollo: turistificación de barrios, relaciones laborales abusivas (falta de seguridad en las transacciones, entre otros. Por eso es necesaria su regulación. En España operan más de 500 entre plataformas de economía y consumo colaborativo y de economía bajo demanda para las más diversas actividades.

Desde el punto de este informe lo que interesa sobre este tema es subrayar las relaciones que pueden tener con el Tercer Sector y las potencialidades que le ofrece. La economía colaborativa es una relación entre iguales, que cumple importantes funciones sociales: facilitar el acceso a ciertos bienes a personas con menos recursos, utilizar de forma más eficiente recursos infrautilizados, reciclar productos, donar e intercambiar productos o servicios, poner en contacto a personas a través de los intercambios o crear comunidades de usuarios o proveedores. En esto se encuentra próxima a los valores del Tercer Sector. En cuanto a si estas plataformas cumplen con los requisitos formales que se exigen a las entidades del

tercer sector, también puede decirse que sí en algunos aspectos (no ánimo de lucro y objetivos sociales) (Díaz-Foncea et al., 2016) sobre todo si se incorporan al Tercer Sector nuevas figuras como las empresas sociales.

Al mismo tiempo, es un ejemplo de lo mucho que se puede hacer en el Tercer Sector utilizando esa tecnología. Por ejemplo, la plataforma Dónalo, que es un punto de encuentro en el que las empresas donan sus excedentes (restos de stock, material informático, mobiliario...) en buen estado y las entidades sin ánimo de lucro lo reciben gratuitamente. Pero también es un tipo de intercambio que se puede hacer sin necesidad de utilizar plataformas digitales a nivel de comunidades más pequeñas, como barrios o municipios con poca población, ya que se puede decir que la economía colaborativa se ha practicado siempre, aunque sea a pequeña escala y entre personas con relaciones de proximidad y, en estos casos se trata de recuperarla.

En este sentido, adquiere relevancia la idea de que, para aprovechar las ventajas que ofrecen estas nuevas formas de relaciones económicas, sean las entidades del Tercer Sector las que promuevan plataformas para la economía colaborativa, como ha sugerido T. Scholz para el caso concreto de las cooperativas (Scholz, 2016). Eso haría que esas plataformas, que son ajenas a quienes las utilizan, adquieran una identidad más próxima y más beneficiosa para ellos. A estos efectos, señala ejemplos de posibles plataformas que, en régimen de cooperativa, sean propiedad de los trabajadores, para ofrecerse a desarrollar actividades diversas que pueden estar realizando a través de una plataforma ajena. También sugiere el ejemplo de “prosumidores”, artistas o artesanos puede ser el caso, que posean en régimen cooperativo infraestructuras para su actividad (talleres, instrumentos, herramientas, sala de exposición). O plataformas de propiedad pública, ayuntamientos por ejemplo, para reunir en ella la oferta de alojamientos turísticos. Sólo son una muestra de las posibilidades que ofrece la economía y la acción colaborativa. Caben muchos más ejemplos que no es del caso extenderse aquí sobre ellos.

Estas innovaciones han abierto una ventana de oportunidad de alcance extraordinario, por las posibilidades que ofrecen para desarrollar acciones colectivas que se pueden basar en los valores y objetivos que han inspirado las acciones del TS tradicional, que debería abrirse a ellas para afrontar el reto que tiene de ampliar su base social y renovarse para garantizar su consolidación y sostenibilidad futura. Sin duda ello requiere, por una parte, un mejor conocimiento de estas formas emergentes de acción social colectiva, todavía incipiente. Por otra, relaciones más estrechas entre ambas partes.

No obstante, son las menos estudiadas y conocidas entre las que venimos tratando en este trabajo. Como se ha visto, todavía estamos lejos de tener una identificación y definición clara de bastantes de ellas y, menos aún, de conocer sus efectos en nuestras sociedades y la mejor forma de regularlas para evitar los no deseables.

4.5 Las fundaciones comunitarias

Las fundaciones comunitarias (FC) cuentan todavía con poca tradición en España en comparación con países de nuestro entorno, aunque existen algunas que por su sistema de organización y funcionamiento pueden considerarse como FC ²². Son organizaciones filantrópicas, muy vinculadas al territorio con el que establecen un compromiso de largo plazo, con el objetivo de contribuir al desarrollo de su potencial endógeno y al bienestar de sus habitantes. Para ello, movilizan los recursos financieros, culturales, patrimoniales, humanos y organizativos de la comunidad. También atraen a inversores privados externos y recaban recursos públicos. En su sistema de gobierno implican activamente a los actores del territorio.

Se estima que existen actualmente en el mundo más de 1.800 fundaciones comunitarias. Este tipo de instituciones son muy frecuentes en Estados Unidos y Canadá, también en algunos países de la Unión Europea²³, como por ejemplo en Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, en este último existen más de 400; también se han extendido en otras áreas geográficas como América Latina o África.

Los ámbitos de trabajo de las FC son muy diversos, pero predomina entre ellas la vocación territorial y la ayuda a las personas que allí bien. Su configuración, posicionamiento y opciones estratégicas, varían dependiendo de países y de los entornos en los que actúan. Esta diversidad se manifiesta en aspectos como la relación y cooperación que tienen con los gobiernos, la procedencia de los recursos económicos, su estructura de financiación y el tipo de actuación que desarrollan.

La importancia de la vinculación territorial de los habitantes de los territorios y su proximidad con los principios y valores de la economía social, solidaria y colaborativa constituyen el sustrato del que suelen surgir. A diferencia de

²² Ejemplos de fundaciones próximas a las fundaciones comunitarias pueden ser la Fundación el Huevo (Soria) o la Fundación Santa María la Real.

²³ Para más información sobre las Fundaciones Comunitarias en Europa ver <https://www.communityfoundations.eu/community-foundations-in-europe.html>

la mayoría de las fundaciones, que surgen por iniciativa de una persona física, la promoción de las FC tiene suele carácter colectivo, social, fruto de la iniciativa ciudadana.

No obstante, no resulta sencillo delimitar sus diferencias con otras modalidades organizativas del Tercer Sector. Entre sus requisitos básicos están los siguientes: la promoción privada; la adscripción a un territorio más o menos amplio, sea urbano o rural; la implicación de las personas en la actuación cotidiana de la fundación; y la captación de fondos privados, una gran parte de los cuales deben ser del propio territorio.

Las FC tienen similitudes con otras organizaciones de vocación territorial y objetivos de desarrollo y bienestar, como los grupos de acción local promovidos por el programa Leader de la Unión Europea. Lo mismo que ellos, las FC pueden contribuir a potenciar la iniciativa cívica en España y a activar los recursos de todo tipo de los territorios en beneficio de sus habitantes.

5. CONCLUSIONES

Hay suficiente evidencia empírica sobre la importancia del TS en España y en otros países de nuestro entorno con los que podemos compararnos. Su importancia no se debe sólo a los aspectos funcionales y económicos que lo caracterizan, sino también al valor democrático que tiene como sector con valores propios, que vertebra una parte importante de la sociedad civil.

Aporta participación y compromiso con el bienestar social y ciudadano y ha dado muestras de su capacidad de colaboración con el Estado, especialmente en el ámbito de nuestros sistemas de bienestar, en actividades tan variadas como las derivadas de la gestión y aplicación de la política social y otras como la promoción de la cultura y el deporte.

Su orientación hacia las personas, hacia la limitación del lucro, hacia la promoción del voluntariado y hacia la gestión participativa y democrática son señas importantes de su identidad, que se refuerza por la opinión favorable que la sociedad tiene de ellas, en general bastante más alta que la que tienen de otras instituciones públicas y privadas.

Ha demostrado, además, capacidad para producir bienes y servicios en el marco de la economía de mercado utilizando la tecnología y la cultura organizativa necesarias para ello, sin renunciar a la participación, la gestión democrática y la

contención del lucro. Ha demostrado capacidad para la colaboración entre entidades pese al pluralismo ideológico que tiene, cosa en otros ámbitos institucionales menos frecuente. También hay evidencias de que el Tercer Sector se va renovando con la aparición de iniciativas que siguen la senda de las que tradicionalmente han formado parte de él, aunque se concreten en organizaciones diferentes, lo que puede ser estímulo para ampliar su base social y cultural.

Es un ámbito funcional-institucional en el que no faltan los problemas y debilidades que se han ido señalando en este texto: la polarización del tamaño de las entidades y la estructura asimétrica de sus respectivos campos organizacionales; los conflictos y pugnas por el poder dentro de ellos; la debilidad económica de buena parte de las entidades en todos los subsectores que lo forman; la dependencia de la financiación pública; una cierta situación de desventaja respecto al gran peso que tienen las organizaciones públicas y mercantiles y su lógica de funcionamiento; y una falta de articulación interna que limita su reconocimiento institucional y su poder de interlocución con el sector público y mercantil.

Para que el conocimiento del TS esté a la altura de su importancia funcional y democrática, hace falta mejorar significativamente muchos aspectos, ya que la información y los estudios de que disponemos sobre él son, como hemos dicho, insuficientes. Es necesario un esfuerzo mayor del que se viene haciendo en España para aliviar esas carencias. Basta comparar el conocimiento económico, jurídico y sociológico que se tiene sobre el sector público y el sobre el sector empresarial mercantil, con el que tenemos sobre el TS para hacerse cargo de la distancia. A lo largo del texto se han ido señalando necesidades de conocimiento indicativas que se resumen y amplían a continuación, sobre las que podría construirse una estrategia de investigación básica y aplicada sobre el TS:

- Análisis jurídico de la normativa vigente sobre las entidades del TS en el marco del UE, para proponer un modelo común de definición de entidades y refundiciones de normas que las integren lo más posible en un marco normativo común.
- Diseño de registros públicos para las entidades del TS de cualquier ámbito territorial y de actividad, actualizables, que recojan variables relevantes para su análisis y se puedan integrar en registros nacionales.
- Diseño de operaciones estadísticas periódicas mediante encuesta y otras técnicas, a realizar por los organismos públicos de estadística, entre las entidades de los distintos campos organizacionales del TS, que sirvan para complementar la información que proporcionan los registros.

- Propuesta de un campo de investigación sobre el TS dentro del Plan Nacional y del Programa Marco Europeo que incluya:
 - Teoría del TS como ámbito funcional-institucional de la sociedad civil en el marco de una teoría normativa de la democracia, que ayude a su reconocimiento como actor relevante en la colaboración público-privada.
 - Estudio de las relaciones entre cultura política, participación ciudadana, voluntariado y Tercer Sector.
 - Estudios comparados europeos sobre: reconocimiento institucional del TS; ordenación de las relaciones entre Estado, TS y mercado en la ejecución de políticas públicas; reconocimiento de valor especial a las entidades del TS en la contratación pública; régimen de financiación pública de las entidades del TS.
 - Estudios comparados sobre la dimensión empresarial y social de las entidades del TS, como las citadas en texto
 - Estudios comparados sobre las diferencias en la prestación de servicios por entidades públicas, mercantiles y del TS, incluidas la eficacia, eficiencia y satisfacción de los beneficiarios en cada caso.
 - Análisis comparado de casos para identificar factores de éxito y fracaso de entidades del TS.
 - Estudios comparados sobre experiencias emergentes de economía social y colaborativa, sobre las condiciones de su incorporación al TS y sobre la forma de perfeccionar su funcionamiento.²⁴

²⁴ En este tema puede ponerse como ejemplo el proyecto de un investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC, Flip Klijn, para diseñar un mecanismo que, utilizando una plataforma que recoja las preferencias, los participantes puedan hacer los intercambios de la forma más eficaz.

DESAFÍO H REFERENCIAS

- Adigital (2017).** Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales. *Asociación española de la economía digital*: <https://adigital.preproduccion.es/informes/estudios-los-modelos-colaborativos-demanda-plataformas-digitales/>
- Baamonde, E. (2013).** Agri-food cooperatives in Spain. *The role of agri-food cooperatives in the world economy. Mediterráneo Económico*, 24.
- Bell, D. (1976).** The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. *Penguin Books*.
- Bijman, J. (2013).** Agri-food cooperatives in the EU. *The role of agri-food cooperatives in the world economy. Mediterráneo Económico*, 24.
- Cabra de Luna, M. A., Lorenzo, R. (2005).** The Third Sector in Spain: scope, size and perspectives. *Revista Española del Tercer Sector*, 1, 95-134.
- Calderón Millán, B., Calderón Millán, M. J. (2012).** How cooperatives in Spain face crises. *CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 76, 5-26.
- Casado, D. (2015).** Changes and continuities in the Third Sector of Social Action. *Revista Española del Tercer Sector*, 30, 23-47.
- Casado, D., Fantova, F. (2019).** Voluntary action. *Fundació Apip-Acam, Hacer*.
- CEPES (2017).** The most relevant companies in the social economy, 2016-2017. *CEPES*.
- Clemente López, J., Díaz-Foncea, M., Marcuello Servós, C. (2008).** Study on cooperatives and labor societies in Spain: job creation and contribution to economic development.
- Defourny, J., Nyssens, M. (2012).** The EMES approach of social enterprise in a comparative perspective. *EMES Working Papers Series*, 03/12.
- Díaz-Foncea, M., Marcuello Servós, C. (2012).** Social enterprises in Spain: concept and characteristics. *GEZKI*, 6, 143-164.
- Díaz-Foncea, M., Marcuello Servós, C., Monreal Garrido, M. (2016).** Social economy and collaborative economy: fit and potentialities. *Industrial economy*, 402, 27-35.
- Dimaggio, P. J., Powell, W. W. (1983).** The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-60.
- Entrena, F., Moyano, E. (2006).** Reactions of Spanish Farm Co-operatives to Globalization. *Co-operatives and Globalization. Adaptation or Resistance*. New Harmony Press.
- Galera, G., Borgaza, C. (2009).** Social enterprise. An international overview of its conceptual evolution and legal implementation. *Enterprise Journal*, 5(3), 210-216.
- Galindo Martín, M. A., Rubio Guerrero, J. J., Sosvilla Rivero, S. (2012).** The Founding Sector in Spain. Fundamental attributes. *Spanish Association of Foundations*.
- García Pelayo, M. (1985).** The transformations of the contemporary state. *Alianza Editorial*.
- Garrido Chamorro, C. (2013).** Structure of agri-food cooperatives in Spain. *The role of agri-food cooperatives in the world economy. Mediterráneo Económico*, 24.
- Giner, S., Sarasa, S. (1995).** Civic altruism and social policy. *Leviathan*, II, 61, 67-98.
- Granovetter, M. (1985).** Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.
- Hansman, H. (1987).** Economic Theories of Nonprofit Organizations. *The Non-Profit Sector: a Research Handbook*.
- Hulgård, L. (2010).** Discourses on social entrepreneurship. Variation on the same theme? *EMES-European Research Network: WP No. 10/01*.
- Kerlin, J. A. (2006).** Social Enterprise in the United States and Europe: Understanding and Learning from the Differences. *Voluntas*, 17, 247-263. DOI 10.1007 / s11266-006-9016-2.
- Luis Vives Foundation (2010).** Yearbook of the Third Sector of Social Action 2010. *Luis Vives Foundation-Caja Madrid Obra Social*.
- Luis Vives Foundation (2012).** Yearbook of the Third Sector of Social Action 2012. *Luis Vives Foundation-Caja Madrid Obra Social*.
- Macperson, C. B. (1962).** The Political Theory of Possessive Individualism (Hobbes to Locke). *Oxford University Press*.
- Marbán, V., Pérez Yruela, M., Rodríguez Cabrero, G. (2020).** Current challenges and prospective analysis of the third sector of social action (TSSA) in Spain. *CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 98, 95-126.

- Marbán, V., Rodríguez Cabrero, G. (2008).** Panoramic vision of the third social sector in Spain: environment, development, social research and challenges. *Revista Español del Tercer Sector*, 9, 13-39.
- Marbán, V., Rodríguez Cabrero, G. (2013).** Mixed systems of social protection. The third sector in the production of well-being. *Presupuesto y Gasto Público*. 71/2013, 61-82.
- Montagut, M., Sarasa, S. (1995).** Social theory and welfare state. *Revista Catalana de Sociología*, 22, 47-76.
- Montagut, T. (2003).** Volunteering: the logic of citizenship. *Ariel*.
- Montagut, T. (2009).** The Third Sector and the policy process in Spain: the emergence of a new policy player. *The Handbook of Third Sector Policy in Europe*-Edward Elgar Publishing.
- Montagut, T. (2011).** Assessing the Welfare Mix: public and private in the realm of social welfare. *The Spanish Welfare State in European Context*.
- Montero, J. R., Font, J., Torcal, M. (2006).** Citizens, associations, and participation in Spain. *Madrid: CIS*.
- Monzón Campos, J. L. (2010).** The great figures of the Social Economy in Spain. *Valencia, CIRIEC*.
- Monzón Campos, J. L., Chaves Ávila, R. (2012).** The Social Economy in the European Union. *Brussels, European Economic and Social Committee*.
- O'Neill, M. (1989).** The Third America: The Emergence of Non-Profit Sector in The United States. *Josey Bass*.
- Pérez Yruela, M. (2012).** The model of social cohesion in Europe. *IESA-Working Papers*.
- Pérez Yruela, M. (2015).** The Third Sector: social economy and non-profit entities. *Spain 2015-Social situation*.
- Pérez Yruela, M., Navarro Ardoy, L. (2013).** The Third Sector of social action in Spain. Situation and challenges in a context of crisis. *Revista Española del Tercer Sector*, 23, 41-58.
- Pérez Yruela, M., Montagut, T. (2012).** The Third Sector of Social Action in Spain. Yearbook of the Third Sector of Social Action in Spain. *Luis Vives Foundation Caja Madrid Obra Social*.
- Piketty, T. (2014).** Capital in the 21st century. *Fondo de Cultura Económica*
- POAS (2015).** Prospective analysis on the current and future challenges of the Third Sector of Social Action in Spain.
- POAS (2015).** The Third Sector of Social Action in 2015: Impact of the crisis. https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/resumen_ejecutivo_el_TSAS_en_2015_impacto_de_la_crisis.pdf.
- POAS (2020).** The Third Sector of Social Action in Spain 2019. https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1583424466_informe-poas-completo.pdf
- Polanyi, K. (1989).** The great transformation. *Madrid, La Piqueta*.
- Portes, A., Moony, M. (2002).** Social capital and community development. *The new economic sociology: Development in an Emerging Field*. Russell Sage Foundation.
- Rodríguez Cabrero, G. (2013).** Structural Crisis and Third Sector of Social Action. *Revista Española del Tercer Sector*, 23, 17-40.
- Rodríguez Cabrero (dir) (2015).** RESUMEN EJECUTIVO ANÁLISIS PROSPECTIVO SOBRE LOS RETOS ACTUALES Y FUTUROS DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. *Plataforma ONG*: https://www.plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/resumen_ejecutivo_retos_del_TSAS.pdf
- Rodríguez Cabrero, G., Sosvilla Rivero, S. (2018).** Social Action Foundations in Spain in the face of the crisis: social and economic impact. *Asociación Española de Fundaciones*.
- Sáez Fernández, F. J. et al. (2003).** Cooperatives, labor societies and mutual benefit societies: 25 years of progress in the social market economy under the 1978 Constitution. *CIRIEC-España Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 47, 175-198.
- Salamon, L. M., Anheier, H. K. (1992).** In Search of the Non-Profit Sector: Question of Definition, *Voluntas*, 3(2), 125-152.
- Scholz, T. (2016).** Platform Cooperativism. Challenging the Corporate Sharing Economy. *Rosa Luxemburg Stiftung*.
- Sharing Spain (2017).** Collaborative and on-demand models on digital platforms. *Sharing Spain*.
- Subirats, J. (1999).** Is there a civil society in Spain? Public responsibilities and shared values. *Fundación Encuentro*.

RESUMEN

El ámbito temático de este texto es el de algunas transformaciones y amenazas importantes que está sufriendo nuestro modelo de toma de decisiones colectivas en las sociedades democráticas. La desconfianza política de gran parte de la ciudadanía muestra la erosión de las prácticas democráticas en algunos países o la aparición de propuestas de transformación profunda en diversas direcciones. El objetivo de este texto es estar a la última, lo que sitúa esta área temática en el marco de las instrucciones que distribuye el CSIC. Por tanto, su estructura sigue la propuesta realizada, partiendo de un estado del arte con dos grandes apartados, uno centrado en el diagnóstico de los grandes desafíos que enfrenta la democracia hoy y otro centrado en respuestas y posibles soluciones.

DESAFÍO I

DEMOCRACIA, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS DE PLURALIDAD SOCIAL Y POLÍTICA

CoordinadoresJoan Font Fábregas
(IESA, CSIC)José Fernández Albertos
(IPP, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

El ámbito temático que incluye este texto es el de algunas de las importantes transformaciones y amenazas que está sufriendo nuestro modelo de toma de decisiones colectivas en sociedades democráticas. Aunque la extensión global de los países que se reivindican como democracias representativas sea de los más amplios que haya habido nunca, los síntomas de cuestionamientos profundos de sus lógicas de funcionamiento habituales están claramente presentes en muchos países.

En forma de desconfianza política por parte de buena parte de la ciudadanía, de erosión de prácticas democráticas en algunos países o de aparición de propuestas de transformación profunda en diversas direcciones. Incluso por parte de aquéllos que no pretenden cuestionar la existencia de la democracia representativa como sistema, sus maneras de funcionar se transforman profundamente en varias dimensiones, desde la erosión del estado-nación como espacio central de toma de decisiones, hasta el desarrollo de mecanismos de poder y toma de decisiones más complejos y menos obvios, que pasan a incorporar nuevas formas de gobernanza democrática.

En todo caso, muchos de los temas que aparecen en este texto están claramente conectados con los retos abordados por otros grupos de trabajo por lo que las ideas expuestas en unos y otros se alimentarán y cruzarán necesariamente.

El objetivo de este texto es ser un estado de la cuestión que sitúe este ámbito temático en el marco de las instrucciones distribuidas por el CSIC. Por ello, la estructura del mismo sigue la propuesta realizada, empezando con un estado de la cuestión con dos grandes apartados, uno centrado en el diagnóstico de los grandes desafíos a los que se enfrenta la democracia hoy y otro centrado en las respuestas y potenciales soluciones a los mismos.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. Una agenda de problemas

El reconocimiento de la existencia de una crisis global de la democracia representativa es el punto de partida de este desafío. Los síntomas de esta crisis son bastante claros e incluyen un amplio abanico de realidades, desde las que tienen que ver con la ciudadanía y se manifiestan en actitudes o comportamientos, hasta las que se sitúan más en el ámbito de las respuestas y capacidades institucionales.

Entre aquellas que se manifiestan muy especialmente a través de actitudes y comportamientos de la ciudadanía se encuentran el incremento de los sentimientos de descontento respecto al sistema político (aumento de desconfianza hacia la capacidad del sistema para responder a las demandas de los ciudadanos, que a veces lleva a una menor aceptación de los principios básicos democráticos), de la volatilidad electoral y la fragmentación (especialmente en los sistemas multipartidistas en Europa), y de la polarización afectiva entre electores. El incremento del apoyo a ideas y/o partidos populistas formaría parte de este conjunto de señales. Claramente, no todos estos indicadores tomados de forma aislada han de ser considerados como problemáticos: una ciudadanía más desconfiada puede significar también una ciudadanía más crítica, con las ventajas que ello puede suponer en términos de control de la actuación de las autoridades o de revigorización de los espacios participativos. Lo mismo puede decirse de la fragmentación partidista, que puede suponer un enriquecimiento de la representación en algunos casos o llevar a situaciones extremadamente difíciles de bloqueo político en otras. Sin embargo, el conjunto de todos estos síntomas (más claros en unos países y momentos que en otros), que se agudizan en contextos especialmente difíciles (por ejemplo, en la Europa del Sur con la Gran Recesión de hace unos años) sí conforma un escenario de ciudadanía insatisfecha, desconfiada y con capacidad de mostrarse al menos parcialmente atraída por soluciones no plenamente democráticas.

Junto a estos patrones generales, en algunos países persisten o se incrementan nuevas y viejas desigualdades políticas. En algunos ámbitos siguen existiendo fuertes patrones de desigualdad política vinculados a clase social y género y, en otros casos, estos aparecen en forma de brechas generacionales (con consecuencias importantes como el voto en el referéndum del Brexit, por ejemplo) o vinculadas a nuevas desigualdades relacionadas con la precariedad laboral, la inmigración o los territorios que quedan aislados o perjudicados por las dinámicas de globalización.

Estos patrones en el plano electoral podrían estar a su vez favoreciendo una suerte de círculo vicioso al provocar un debate político más confrontacional (con manifestaciones como un elevado nivel de polarización, también entre las élites políticas, o el uso reiterado de los ataques deslegitimadores del adversario y las noticias falsas por parte de importantes actores políticos) que, o bien paraliza los sistemas políticos en los que existen muchos actores con capacidad de veto (Estados Unidos, Unión Europea), o bien hace viable la imposición de políticas constitucionales con costes elevados para parte de la población (por ejemplo, retrocesos democráticos en el Este de Europa). En cualquiera de los dos escenarios, la nueva política parece llevar consigo una intrínseca incapacidad para llegar a acuerdos en torno a las políticas públicas y reformas institucionales que pudieran contribuir a corregir los problemas que originan estas dinámicas, con lo que se produce deslegitimación de las reglas y costumbres democráticas.

La centralidad social y política de estos temas se observa en muy diversos ámbitos, por ejemplo, a través de su presencia entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivo 16). Los elevados niveles de conflictividad social tienen consecuencias tanto en convivencia y calidad de vida como incluso en el campo económico, hasta el punto que el Banco Mundial considera los conflictos civiles como el mayor impedimento para el crecimiento económico. Estos conflictos van teniendo menos un componente económico, de clase, y más frecuentemente aparecen motivados por confrontaciones no-económicas, estructuradas en torno a elementos culturales o étnicos. La democracia revela el orden de las preferencias de los ciudadanos pero no indica la intensidad de estas preferencias. La manera que los distintos grupos sociales indican la intensidad de dichas preferencias es mediante la organización de actos públicos –como manifestaciones, protestas, huelgas...--- que señalan a los gobiernos la intensidad de su descontento. El estudio de las causas de las protestas y los conflictos civiles está obteniendo un enorme interés que no puede ser descuidado.

La literatura sobre las causas últimas de estos procesos es enorme, y puede ser dividida en tres bloques: transformaciones económicas (aumento de las desigualdades asociadas a la robotización y la globalización, nuevas brechas estructurales asociadas a la terciarización de las economías post-industriales); Mecanismos de poder y toma de decisiones más complejos y menos obvios (instituciones supranacionales, crisis de legitimidad de los modelos de gobernanza multinivel, soberanías compartidas, políticas públicas adoptadas por instituciones no expuestas al control electoral de la ciudadanía); y cambios sociales (nuevas formas de interacción social, creciente rol de las tecnologías de la información y la comunicación, cambio en el modelo de medios de comunicación, *fake news*, redes sociales, y deterioro estructural de las instituciones de intermediación social que anclaban a los individuos en el sistema político). Esta búsqueda de explicaciones puede extenderse incluso más allá del ámbito estrictamente social, analizando todos los procesos psico-biológicos que se pueden activar con este tipo de situaciones. Saber cómo responde nuestro cerebro y nuestro organismo a determinados contextos de crisis, de conflicto o de participación política institucional puede aportar muchas pistas sobre cómo diseñar soluciones.

El peso de cada uno de los actores en los procesos actuales de toma de decisiones colectivas se ha modificado con consecuencias que aún no conocemos plenamente. La libertad de movimientos del capital ha reducido extraordinariamente la capacidad de los gobiernos nacionales para la redistribución de la renta. El impuesto sobre sociedades era de un 40% en los países de la OCDE hace cuarenta años y hoy es la mitad. La tasa para las rentas más altas del impuesto sobre la renta era en los EEUU el 90% hace cincuenta años y hoy es el 40%. Empresas evaluadoras, como Standard and Poors, Moody's o Fitch, tienen una fuerte influencia en las políticas económicas de los gobiernos. El margen de acción de los gobiernos democráticos es reducido y ello provoca la insatisfacción de los ciudadanos ya que la expresión democrática de las preferencias políticas no siempre se materializa en decisiones efectivas.

Por otra parte, el “mercado” como mecanismo para la distribución de los derechos sobre el producto social está alcanzando niveles muy elevados de sesgo en beneficio de las rentas del capital. El peso de las rentas salariales en el PIB está disminuyendo rápidamente en todos los países de la OCDE y el mercado crea una polarización económica, que el estado del bienestar a duras penas puede contrarrestar. Una parte creciente de los beneficios empresariales de las grandes corporaciones no proceden de la innovación o de la eficiencia, sino

de la captura de los gobiernos que practican estas organizaciones. Las decisiones gubernamentales pueden reportar grandes beneficios, que pueden obtenerse mediante la generalizada práctica de las “puertas giratorias” de los políticos o mediante la corrupción directa. La colonización del espacio público por las grandes empresas privadas y su posible control del mismo es un tema de creciente importancia.

2.1. Y una de posibles propuestas

En función de dónde se ubiquen las causas de todos estos fenómenos, emergen diferentes propuestas de reforma y abordaje de los mismos. Apuntaremos algunas ideas sobre los tres grupos principales ámbitos de actuación (ámbito económico, socio-cultural y político-institucional), pero dado que los dos primeros encuentran mayor acomodo en otros retos (E, H y L, por ejemplo), desarrollaremos en mayor medida las respuestas del ámbito político-institucional.

En el ámbito económico podemos hablar de nuevas políticas públicas redistributivas, un renacimiento del interés por la política industrial, y un replanteamiento del marco institucional en el que se han producido los procesos de integración de los mercados de bienes y de capitales globales.

En el ámbito socio-cultural las propuestas de actuación apuntan a cuestiones como la reforma de los medios de comunicación o el fortalecimiento o creación de una nueva cultura política democrática pluralista a través de distintos enfoques y políticas públicas, entre ellas la educativa, en tanto que agente promotor de ciudadanía activa y de mantenimiento de unos valores pluralistas.

En el ámbito político-institucional las respuestas podrían agruparse en diferentes direcciones. En primer lugar, aquellas que principalmente pretenden mejorar los mecanismos e instituciones representativas, facilitando la labor de control y responsabilidad de las mismas. Aquí podríamos incluir tanto todo el ámbito temático de la transparencia, como la introducción de herramientas digitales para el control y la mejora de la comunicación con las instituciones. También los principales actores protagonistas del proceso de representación política (partidos políticos, sindicatos,..) han sufrido cambios intensos (tanto en el funcionamiento interno de los actores existentes como en la aparición de nuevos actores y/o reequilibrios de fuerzas entre ellos), con fuertes dinámicas de cuestionamiento de los espacios institucionales, sin que esté claro en qué dirección evolucionarán las alternativas emergentes.

En segundo lugar podemos incluir aquellas propuestas que tienen como objetivo incrementar el rol de la ciudadanía en los procesos políticos, tanto si abundan en instituciones con una lógica más cercana a la democracia directa como muchas de las experiencias de presupuestos participativos o referéndums iniciados desde abajo, como si avanzan más en la dirección de los espacios de tipo deliberativo, formados a menudo por personas elegidas al azar. En todas estas herramientas aparece también el dilema de cuánto protagonismo dar a los espacios presenciales y cuánto a los online o el de qué papel otorgar a la ciudadanía individual y a los representantes asociaciones y grupos organizados.

En la línea de reforzar los espacios participativos habría una variante menos pensada para ampliar la oferta de oportunidades de voz y más preocupada en paliar las brechas participativas generadas por la desigualdad social o por fuertes diferencias generacionales. Tanto la preocupación inicial como las posibles alternativas estarían más centradas en identificar poblaciones objetivo cuya voz se encuentre más ausente de la vida política e incentivar de forma particularizada su incorporación, sea con cuotas, campañas o experiencias piloto dirigidas principalmente a estos sectores.

Por último estarían las soluciones que ponen el acento en la delegación a “expertos” o agencias independientes, como mecanismos de búsqueda de mayor eficiencia y de menor vinculación entre políticas públicas y consideraciones electorales, sin necesidad de dar mayor voz a la ciudadanía.

La agenda investigadora sobre este conjunto de temáticas debe tratar de examinar cuál es el atractivo político de cada una de estas propuestas de reforma. ¿Cuál es su “economía política”, es decir, en qué medida es previsible que en el actual contexto institucional emerja una demanda social y política para su adopción? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan, que recursos necesitan y cuáles son las técnicas apropiadas para su desarrollo? ¿Cómo de esperable es que sean exitosas? ¿Cómo definimos y medimos su éxito?

A su vez, también existen una serie de cuestiones transversales que afectan a los tres ámbitos temáticos:

La escala territorial (o sus combinaciones) a la que pueden aplicarse cada una de estas posibles respuestas es otro dilema abierto. Así, por ejemplo, las soluciones deliberativas de tipo presencial aparecen como más aptas para escenarios micro, pero más difíciles de llevar a cabo en escalas más globales, lo que ha abierto todo un amplio campo de trabajo en torno a cómo llevarlas a ámbitos más amplios (*scaling up*).

Los encajes entre todas las propuestas. Es decir, dado que no se trata de alternativas excluyentes sino que las opciones reales pasan normalmente por combinar ideas y piezas de varias de las mismas, se trata de reflexionar sobre como diseñar un encaje institucional donde estas sean complementarias y no provoquen disonancias o conflictos innecesarios.

Existen también incógnitas sobre los resultados alcanzables por cada una de ellas, por ejemplo, en términos de calidad de vida para la ciudadanía. Tanto el debate sobre cómo deben medirse esos resultados (a través de qué tipo de indicadores) como el de cuáles serían los resultados previsibles con cada una de las posibles estrategias de reforma son preguntas sin respuestas claras.

Como cierre de este estado de la cuestión, la Tabla nº 1 sintetiza las principales temáticas señaladas a lo largo del mismo.

Tabla nº 1. Síntesis de agenda temática

Problemas	Ciudadanía	Populismo, volatilidad electoral, descontento, desigualdades políticas
	Bloqueos	Retrocesos democráticos, polarización élites
	Causas	Económicas (robotización, crisis mercados,...)
		Mecanismos de poder y toma de decisiones más complejos y menos obvios
Cambios sociales		
Soluciones	Económicas y socioculturales	Ver otros desafíos (E, H, K,...)
	Político-institucionales	Mejora de los canales y actores propios de los sistemas representativos
		Instituciones de profundización democrática
		Soluciones tecnocráticas
	Temáticas transversales	Scaling up, resultados, encajes institucionales

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL

En cuanto al entorno científico-tecnológico, uno de los cambios fundamentales es el uso creciente de big-data por analistas, científicos y organizaciones. La disponibilidad y el uso de big data va a cambiar radicalmente –lo está haciendo ya-- la naturaleza de la contrastación empírica en todas las ciencias sociales.

La creciente posibilidad de trabajar con estas bases de datos (administrativas, de registro, provenientes de redes sociales, etc.) suponen a su vez enormes retos en cuanto a anonimización de los datos y preservación de la privacidad, así como desde el punto de vista de nuevas técnicas de análisis, incluyendo herramientas de inteligencia artificial. Aunque muchos de esos datos empiecen a estar disponibles, a menudo estos son difíciles de usar porque están en distintos formatos, o existen regulaciones que dificultan su uso.

Asimismo, algunas de las líneas de trabajo posibles como resultado de la colaboración interdisciplinaria y especialmente prometedoras (por ejemplo, las que implican factores biológicos con el estudio de muestras orgánicas o de funcionamiento cerebral) pueden aportar muchísima información útil, pero implican grandes presupuestos.

En cuanto al entorno social, un factor aparentemente favorable para el desarrollo de la investigación sobre estas temáticas es la visibilidad de muchas de las mismas en el debate público, lo que podría favorecer el apoyo a que las mismas cuenten con proyectos y presupuestos suficientes. Por otro lado, el uso de las conclusiones en el marco del debate político partidista puede dificultar la aceptación de la relevancia científica de alguno de estos temas.

Asimismo, a lo largo de la última década han ido surgiendo iniciativas sociales que trabajan en esta línea (principalmente en fomentar la transparencia y responsabilidad de las instituciones, así como en la de crear herramientas tecnológicas que faciliten el debate público), con las que es posible tejer alianzas y complicidades. Por otro lado, estas, tanto en el sector activista como en el de la financiación privada (por ejemplo, Fundaciones) son muy débiles en comparación con el papel central que han jugado en este ámbito temático en otros países.

Finalmente, respecto al entorno institucional y la presencia de estas temáticas en la agenda investigadora y de preocupaciones de las instituciones, el panorama es diferente en función de si ponemos el foco en el ámbito internacional, donde buena parte de las principales convocatorias internacionales ya muestran una fuerte preocupación y sensibilidad hacia estas temáticas, frente

a la situación en nuestro país, donde las mismas han estado mucho más ausentes de las prioridades marcadas por las convocatorias de investigación, quizás con la excepción de algunas convocatorias de ámbito autonómico.

4. CONCLUSIONES

El ámbito temático que engloba las transformaciones en los modos de adopción de decisiones colectivas vinculantes se encuentra muy vivo, tanto desde el punto de vista de las fuertes dinámicas de cambio real que se están produciendo, como de la agenda investigadora que se desarrolla al respecto.

Aunque se trata de un campo amplio, podemos estructurarlo en torno a dos grandes áreas: i) el diagnóstico de las transformaciones y dificultades que se están produciendo y sus causas en primer lugar; y ii) el conjunto de potenciales soluciones que se proponen. En la Tabla nº 2 se resumen las principales temáticas.

Tabla Nº. 2

Problemas	Ciudadanía	Populismo, volatilidad electoral, descontento, desigualdades políticas
	Bloqueos	Retrocesos democráticos, polarización élites
	Causas	Económicas (robotización, crisis mercados,...)
		Mecanismos de poder y toma de decisiones más complejos y menos obvios
Soluciones	Cambios sociales	
	Económicas y socioculturales	Ver otros desafíos (E, H, K,...)
	Político-institucionales	Mejora de los canales y actores propios de los sistemas representativos
		Instituciones de profundización democrática
		Soluciones tecnocráticas
	Temáticas transversales	Scaling up, resultados, encajes institucionales

RESUMEN

Los sistemas de bienestar se pueden definir como el conjunto de instituciones que desarrollan políticas sociales con la finalidad de proteger a los ciudadanos, mejorar sus condiciones de vida y garantizar la igualdad de oportunidades. Durante los últimos años, el estado del bienestar en España está experimentando desafíos de sostenibilidad que precisan su análisis exhaustivo para garantizar una estrategia de «inversión social» orientada al bienestar de todos los ciudadanos. Ponemos de manifiesto la necesidad de garantizar la «escalera social» con el objetivo de establecer una sociedad más justa y más próspera con políticas familiares eficaces, acceso equitativo a la educación, sanidad y empleos de calidad, y con una red de seguridad social que proteja a las familias e individuos frente a las dificultades temporales. Las Ciencias Sociales y las Humanidades pueden desempeñar un papel clave en el análisis de estos desafíos, así como estudiar el diseño, la implantación y la evaluación de las políticas incluidas en el ámbito del estado del bienestar.

DESAFÍO J

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE BIENESTAR

CoordinadoresFrancisco Javier
Moreno Fuentes
(IPP, CSIC)Ada Ferrer i Carbonell
(IAE, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

El significativo desarrollo de los sistemas de protección social al término de la Segunda Guerra Mundial permitió alcanzar un nivel alto de bienestar así como la aparición de mecanismos de equiparación de oportunidades que ampliaron considerablemente las posibilidades de movilidad social ascendente de las clases trabajadoras. La financiación y provisión pública de la educación, la sanidad y los servicios de bienestar contribuyeron significativamente a la legitimación de la economía de mercado, sentando las bases del orden social en Europa durante la segunda mitad del siglo XX. España se incorporó a este modelo tras la transición a la democracia a principios de los años ochenta del siglo pasado, con el desarrollo progresivo de un sistema de bienestar que convergía en sus rasgos generales con los de la mayoría de los países de Europa occidental, aunque nunca llegó a alcanzar niveles de financiación similares.

El estado del bienestar se define como un conjunto de instituciones públicas que implantan políticas sociales con la finalidad de mejorar las condiciones de vida, proteger a los ciudadanos de los riesgos derivados del ciclo vital y garantizar la igualdad de oportunidades. En el estado de bienestar europeo, las administraciones públicas intervienen mediante políticas y reglamentos para modular las fuerzas del mercado. Esto se consigue básicamente mediante tres tipos de mecanismos: (i) garantizar los ingresos de los ciudadanos, con independencia del valor de mercado de su trabajo o propiedad; (ii) minimizar la inseguridad

apoyando a los individuos y a las familias cuando están expuestos a riesgos vitales asociados a las enfermedades, el desempleo o la vejez; y (iii) prestar servicios clave a los que se puede acceder a través de lógicas de elegibilidad específicas (seguros, residencia, ciudadanía, etc.), como la educación, la asistencia sanitaria o los servicios sociales personales. A diferencia del periodo anterior al establecimiento de los esquemas de protección social (cuando la supervivencia material dependía de la capacidad de la persona para vender su trabajo en el mercado laboral), cuanto mayor sea el nivel de desmercantilización, mayor será la protección frente a los riesgos vitales. El gasto social público en Europa (sobre todo en los ámbitos de la sanidad, la educación, el empleo, la seguridad social y los subsidios) representa entre una quinta y una tercera parte del PIB total, y constituye aproximadamente la mitad del gasto público en Europa occidental.

Las principales tendencias observadas en las últimas décadas que afectan al estado del bienestar se engloban en los denominados *nuevos riesgos sociales*. Estos nuevos riesgos sociales son consecuencia de la transformación de la economía y de los mercados laborales, los cambios en los valores sociales y las prácticas asociadas a la transición al orden posindustrial y a los cambios demográficos, que plantean nuevos retos al estado del bienestar. El crecimiento y la prosperidad compartida se desasociaron en la mayoría de las economías avanzadas en la década de 1970 y han seguido divergiendo desde principios de la década de 2000, con lo que las desigualdades en la distribución de la renta han aumentado de forma notable en las sociedades desarrolladas. Los avances tecnológicos han deslocalizado diversos puestos poco cualificados del sector manufacturero a países con niveles salariales más bajos, con el consiguiente aumento del riesgo de desempleo entre amplios sectores de la clase trabajadora en el mundo occidental, sobre todo en los países con plantillas menos productivas. La tecnología también ha reforzado la tendencia a una creciente desigualdad al reducir la demanda (y, por tanto, la remuneración relativa) de ciertos perfiles laborales intermedios y poco cualificados, mientras que premia mucho más a ciertos perfiles de alta cualificación y a los que tienen ingresos de capital. Disponer de competencias profesionales que han quedado obsoletas o no poder reciclarse al ritmo del progreso tecnológico constituyen nuevas fuentes de vulnerabilidad para los trabajadores que no están preparados para afrontar la posibilidad del desempleo a una edad avanzada. Sin embargo, la transición de las estructuras profesionales en el orden posindustrial ha abierto nuevas oportunidades de empleo precario en el sector de los servicios. Los bajos salarios y los empleos de mala calidad han mostrado una dura repercusión en la vida de algunos grupos socioeconómicos, en

particular los que tienen un bajo nivel educativo, como algunos jóvenes (sobre todo los que abandonaron la escuela) y los inmigrantes. En algunos países como el nuestro, los jóvenes se enfrentan a enormes dificultades a la hora de alcanzar la independencia económica, abandonar el hogar paterno, formar una pareja y/o convertirse en padres (lo que fomenta la desafección y la exclusión). Los inmigrantes (sobre todo los que se encuentran en una situación administrativa precaria) se han visto a menudo confinados en la economía informal en condiciones de gran inseguridad y vulnerabilidad.

Un segundo grupo de presiones sobre el funcionamiento del estado del bienestar clásico se deriva de la evolución de los valores y prácticas sociales, como el creciente individualismo, la secularización o la democratización de las relaciones sociales. Estos factores han alcanzado una crisis de reproducción social sin precedentes, en la que disminuye el tiempo disponible para llevar a cabo las tareas básicas de los cuidados, por lo que se crea una nueva división entre quienes pueden permitirse tener familia y ocuparse de ella mediante el trabajo doméstico remunerado y quienes no pueden ocuparse de sus propias familias precisamente por realizar el trabajo del primer grupo.

La creciente autonomía financiera de las mujeres que se incorporan al mercado laboral no solo les ha proporcionado nuevas destrezas de negociación, que están impulsando cambios rápidos y positivos en las relaciones de género dentro de las familias, sino que también pueden tensar las relaciones de pareja, con la consiguiente disminución de la satisfacción con la vida familiar y un mayor riesgo de ruptura. La creciente insatisfacción con la conciliación de la vida laboral y familiar, la creciente *precariedad* del matrimonio, junto con la propensión de muchos jóvenes a participar en formas de pareja menos estables ponen sobre la mesa nuevos desafíos y necesidades que se asocian a la monoparentalidad. Cada vez hay más niños que crecen en hogares monoparentales, lo que conlleva un mayor riesgo de pobreza y problemas derivados de las dificultades de los padres (normalmente las madres) para conciliar las responsabilidades laborales y familiares.

En la década de 1970, el sociólogo francés Robert Castel describió el efecto conjunto de la transformación tecnológica, financiera y política que dio lugar a que grandes cohortes de personas avanzaran hacia un estado de ruptura social integral y acumulativa como la de la desafiliación social (Castel, 1995). La pandemia mundial de la soledad es solo una manifestación de este debilitamiento de los vínculos sociales y comunitarios.

Junto con la soledad y la desafiliación social que disminuye la resiliencia de la comunidad, la capacidad de los individuos y las comunidades para minimizar y superar los efectos adversos y los contextos (Rutter, 1993; Werner, 2003), también existe una brecha cada vez mayor entre el trabajo asalariado y el trabajo realizado por las mujeres que cuidan de las personas, lo que hace que las personas se excusen de las responsabilidades básicas de los cuidados porque tienen un trabajo más importante que hacer. Joan Tronto (2005) ha llamado a este proceso de externalización de la reproducción social la *irresponsabilidad privilegiada*, al referirse a «a type of personal service in which the person who receives caregiving tasks from others simply takes it for granted to have a right to this care». Además, la existencia de este derecho permite que se desarrolle de forma un poco oculta («a bit hidden»).

El tercer eje de transformación de nuestras sociedades, que afecta al estado del bienestar, es el envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad. Tal y como se aborda en el Desafío C de esta unidad temática, sobre los desafíos demográficos, se espera que en los próximos cinco años la proporción de personas de 65 y más años aumente en toda Europa, pero especialmente en el sur, donde las tasas de natalidad son de las más bajas del mundo. El aumento del número absoluto y relativo de personas mayores puede afectar negativamente a la creación de empleo y a los salarios, ya que serán necesarias mayores cotizaciones sociales de los trabajadores para satisfacer las expectativas de bienestar de los mayores. Las restricciones financieras también pueden obligar a los gobiernos a reducir las pensiones públicas y a fomentar la expansión de los sistemas privados para complementar las pensiones estatales, lo que puede dejar a segmentos de la población con protección insuficiente para hacer frente a los años de jubilación. Además de las presiones financieras que puede ocasionar, el envejecimiento de la población también aumenta las exigencias en materia de cuidados, una responsabilidad generalmente asumida por las mujeres en virtud de la división tradicional del trabajo en los hogares. Sin embargo, el papel tradicionalmente central de las mujeres en la prestación de cuidados a los ancianos se vuelve inviable en los sistemas posindustriales, en los que el número de hogares en los que trabajan dos adultos ha aumentado de modo drástico.

En estas secciones revisaremos la repercusión de estas transformaciones sobre las dimensiones clave de la estructura y la función del estado del bienestar.

2. DIMENSIONES CLAVE DEL DESAFÍO

El diseño de políticas económicas que mantengan el crecimiento y respondan a los desafíos del cambio climático debe garantizar también las mejores condiciones de vida, un alto nivel de bienestar y una adecuada protección social para los ciudadanos para lograr el objetivo de construir sociedades competitivas, cohesionadas y sostenibles. Los países europeos deben abordar estos desafíos en función de sus características sociales, económicas y políticas específicas. El bienestar de los individuos se ve amenazado en España por el alto nivel de desempleo y la precariedad laboral, los bajos niveles de capital social, el aumento de la desigualdad y la necesidad de reforzar la igualdad de oportunidades.

2.1. El modelo social europeo y su futuro

Las características básicas de cada régimen de bienestar siguen diferenciando los equilibrios institucionales de los distintos países europeos, pero es posible destacar la existencia de una clara tendencia a la convergencia entre los distintos regímenes, tanto en relación con los niveles de gasto social como en la consolidación de rasgos compartidos que apoyan la cohesión social dentro de la UE. En este sentido, el modelo social europeo aparecería como un proyecto político articulado en torno a valores de igualdad social, solidaridad colectiva y eficiencia productiva. A pesar de la diversidad entre países dentro de Europa, los contornos del modelo social europeo están bien definidos mediante tres dimensiones: un gasto social relativamente grande; la existencia de un sistema de protección social que incluye educación, sanidad y sistemas públicos de pensiones, así como un mercado laboral regulado con instituciones de negociación colectiva. Sin embargo, el nivel de protección social varía según los países. Este modelo promueve la ciudadanía social como la aspiración a una vida digna y al bienestar de los individuos gracias al acceso a un trabajo remunerado y digno, y a la previsión social en situaciones de riesgo a partir de unos niveles de vida legitimados por la sociedad. Como objetivo estratégico general, el modelo social europeo promueve un crecimiento económico sostenido y sostenible basado en la cohesión social. Asimismo, este modelo influye en la visión de las políticas económicas y sociales compartidas por la mayoría de la opinión pública europea, y contrasta en gran medida con otros sistemas socioeconómicos a escala mundial donde prevalece el individualismo mercantilista (por ejemplo, Estados Unidos), o el *dumping* social como mecanismo de articulación del crecimiento (por ejemplo, China y otros países asiáticos).

En las décadas anteriores a la recesión de 2008, las recomendaciones de la UE se centraban sobre todo en cuestiones económicas, mientras que las iniciativas de protección social se regulaban principalmente en un ámbito nacional. Sin embargo, desde entonces el papel de la UE en la promoción de los elogios en materia social, laboral y de bienestar ha aumentado significativamente, hasta el punto de que el modelo social europeo ahora se refiere principalmente a una serie de políticas articuladas en el ámbito europeo con el objetivo de promover el desarrollo armonioso del territorio y combatir la exclusión social con mayor eficacia.

Las recomendaciones de la UE se inspiran esencialmente en dos paradigmas principales: la *flexiseguridad* (reducir la protección de las personas con una buena posición en el mercado laboral y ampliar los derechos de quienes cuentan con empleos temporales o de baja calidad para lograr una protección más equilibrada de estos dos grupos de trabajadores) y la *inversión social* (prevenir en lugar de abordar las situaciones de necesidad, fundamentalmente mediante la formación del capital humano a lo largo del ciclo vital y la intervención prioritaria en la infancia). A escala normativa, estas políticas europeas se concretan en el establecimiento del pilar europeo de derechos sociales, que pretende garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas y la protección e inclusión social de los colectivos más vulnerables. Estos principios se aplican mediante la inversión en políticas activas del mercado laboral, el fomento de la formación profesional y el desarrollo del programa de Garantía Juvenil para hacer frente al desempleo entre las cohortes más jóvenes y con menor formación.

El proceso de europeización de las políticas sociales y del modelo social europeo implica una confluencia de recursos, representaciones sociales y acciones entre los países de la UE. Son el resultado de la difusión de ideas comunes, procesos de armonización económica estructural, construcción de instituciones políticas transnacionales y un sistema de valores compartidos en materia de protección social. Sin embargo, la creciente visibilidad de los nuevos riesgos sociales ha tenido lugar en un contexto en el que el modelo social europeo se encuentra bajo presión. La recesión iniciada en 2008 profundizó en las tensiones que tienen lugar entre la *Europa del mercado*, preocupada principalmente por la competencia económica y la austeridad fiscal, y la *Europa correctora del mercado*, que aboga por el refuerzo de la protección social. Esta tensión sitúa a este modelo de organización social, económica y política en una situación especialmente compleja. Estas tensiones volvieron a surgir con la crisis de la COVID-19, ya que España aún no se ha recuperado del todo de la última crisis.

2.2. . Evolución del régimen mediterráneo de bienestar

Los países del régimen mediterráneo de bienestar, entre los que se encuentra España, comparten varios rasgos definitorios, como su desarrollo económico relativamente tardío, su carácter orientado a la familia, combinado con un apoyo estatal relativamente débil a las familias, su fiscalidad relativamente baja y sus menores niveles de gasto social. Además, coexisten sistemas de prestaciones universales (sanidad, educación, pensiones no contributivas, etc.), con otros regímenes de protección social de carácter contributivo (pensiones, subsidios de desempleo, etc.) y con otros programas no contributivos dispares y mal coordinados que atienden a grupos específicos considerados beneficiarios merecedores (huérfanos, viudas, discapacitados). Sin embargo, a menudo no responden del modo adecuado a las necesidades de todos los grupos vulnerables (los recién llegados al mercado laboral, los trabajadores de la economía sumergida, los parados de larga duración, los individuos inactivos que cuidan de forma informal a personas dependientes, los inmigrantes irregulares, los jóvenes, los que abandonan los estudios, etc.).

A causa de esta configuración específica, este régimen de bienestar ha recibido críticas por su tendencia a reproducir las desigualdades de género y socioeconómicas, por su escasa capacidad redistributiva, por su bajo rendimiento en materia de empleo (y la calidad de los empleos) y por sus elevados niveles de desigualdad y pobreza derivados de la marcada dualidad entre colectivos relativamente bien protegidos (los *trabajadores estables*, entre los que se encuentran los trabajadores fijos con antigüedad en las empresas, los empleados públicos, las personas con un alto grado de cualificación, etc.) y los numerosos colectivos precarios (los *recién llegados*, entre los que se encuentran los jóvenes, los inmigrantes, las personas de menor nivel educativo, las familias monoparentales, etc.), cuyo nivel de protección social es significativamente inferior. A esto hay que añadir que España no ofrece igualdad de oportunidades educativas a todos los individuos, con lo que se perpetúan las desigualdades existentes.

Para entender el estado del bienestar español, resulta imprescindible tener en cuenta las circunstancias históricas en las que se desarrolló durante la década de los ochenta del siglo pasado, mientras la mayoría de los países europeos intentaban contener el gasto social y habían iniciado procesos de reconfiguración de sus sistemas de protección social recortando ciertos derechos sociales. Las instituciones y políticas modernas de bienestar en España tomaron forma en el contexto de la transición a la democracia, tras 40 años de dictadura, y en un periodo de alta contestación social, lo que redundó en el

desarrollo de un sistema de protección social de carácter esencialmente paliativo. Por ello, los recursos destinados a las políticas sociales por lo general se han considerado en España como un gasto y no como una inversión. Asimismo, el contexto político en el que se ha producido este despliegue del estado del bienestar ha dado lugar a la articulación de un modelo de gobernanza con un alto grado de descentralización y en varios niveles en el que la potestad de recaudar impuestos sigue estando en gran medida centralizada (con la notable excepción del País Vasco y Navarra, donde la autonomía fiscal es considerablemente mayor).

El papel de las familias como proveedoras de bienestar a sus miembros de manera informal y en el que actúan como *amortiguadores* contra las formas más extremas de exclusión social se ve cada vez más cuestionado por los nuevos estilos de vida y las necesidades sociales emergentes de los jóvenes. En este contexto, los países del sur de Europa se encuentran atrapados en el dilema entre mantener los arraigados equilibrios socioculturales que tradicionalmente han ayudado a responder a los retos sociales a los que se enfrentan estas sociedades o promover la restructuración de sus sistemas de protección social para adaptarse a las nuevas demandas y aspiraciones sociales, mientras que la satisfacción con la vida familiar y el capital social se encuentran entre los más bajos de Europa.

La crisis iniciada en 2008 puso de manifiesto las debilidades de los equilibrios institucionales del régimen mediterráneo de bienestar. Los recortes de derechos sociales, el deterioro de la calidad de las prestaciones derivado de las medidas de contención de costes y la introducción de copagos debilitaron la capacidad de protección de los programas de protección social. Los mecanismos de solidaridad intergeneracional en los que se basa este modelo no pudieron funcionar con la misma eficacia que en crisis anteriores (cuando los lazos y las expectativas familiares eran más sólidas y los adultos —generalmente hombres— responsables de generar los ingresos del hogar estaban protegidos por estrictas normativas del mercado laboral). En este nuevo contexto, el futuro del modelo mediterráneo de bienestar se cuestiona abiertamente y debe adaptarse a un entorno socioeconómico que se diferencia con suma claridad del que se desarrolló a lo largo de la historia.

2.3. Igualdad de género

La reproducción social y la creación de vínculos sociales tanto entre generaciones como mediante redes horizontales de solidaridad entre las familias y la comunidad las han llevado a cabo de forma habitual las mujeres. Como tal,

es un prerequisite de la vida y de la actividad económica. Por desgracia, las tareas de reproducción social se han dado por sentadas desde el inicio de la industrialización. Fraser (2016) ha señalado que el desdoblamiento de la reproducción social y del trabajo asalariado sentó las bases institucionales de la subordinación de las mujeres, que en la forma financiera del capitalismo contemporáneo no ha hecho más que crecer a escala transnacional, lo que fomenta fenómenos como el que Arlie Hochschild (2000) denomina «cadena global de cuidados», entendida como los vínculos personales entre personas de todo el planeta basados en el trabajo remunerado y/o no remunerado de los cuidados, lo que en última instancia conduce a una visión neoliberal del hecho de proporcionar cuidados.

Solo recientemente, los países del modelo mediterráneo del estado de bienestar han implantado políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. En España estas políticas, como los permisos maternos/paternales/parentales, por lo general han marcado salidas legítimas del mercado laboral (Lombardo y San Giuliano, 2008), lo que ha llevado a la construcción de un sujeto «no empleado» que replica el sesgo de género entre las labores o tareas, relacionadas con la reproducción social, generalmente no remuneradas, y las asociadas al mercado laboral. Estas políticas transfirieron parte de la responsabilidad de la conciliación de la vida laboral y familiar a los empleadores, quienes debían proporcionar guarderías para los niños y otros servicios, y a los gobiernos, que asignarían fondos para estos servicios en todo el país.

El confinamiento por la crisis sanitaria de la COVID-19 ha devuelto esta responsabilidad a las familias. Esta privatización de la conciliación de la vida laboral y familiar, cuando las familias no tenían ninguna escuela a la que acudir para cuidar de sus niños y adolescentes, ha supuesto una carga excesiva para las mujeres.

El papel de las mujeres ha sido tradicionalmente crucial en la prestación de cuidados dentro de los hogares en el régimen mediterráneo de bienestar. Las mujeres se han hecho cargo del cuidado de los hijos o de los familiares mayores a costa de carreras profesionales erráticas o de la retirada total del mercado laboral, en especial tras el nacimiento del primer hijo. Se esperaba que el número cada vez mayor de mujeres que participaban en el mercado laboral formal también asumiera las responsabilidades domésticas y de los cuidados, incluso buscando la ayuda de su madre u otros familiares femeninos. La asunción por parte de los hombres del modelo del «sostén familiar» los disuadió de dedicarse con mayor intensidad a las actividades domésticas y de los cuidados, por lo que las madres trabajadoras se han visto a menudo abocadas

a la hiperactividad. Estas *supermujeres* solo podían emprender actividades profesionales exigentes en el mercado laboral si las compaginaban con un trabajo a tiempo completo de cuidados no remunerado en el hogar.

En los países del norte y centro de Europa, la intensidad de los vínculos familiares es mucho más débil, y la capacidad de la familia para funcionar como amortiguador de los diferentes riesgos sociales es considerablemente más limitada (y mucho menos necesaria). La línea divisoria entre sistemas familiares fuertes y débiles se ve reforzada por la división religiosa entre los principios protestantes, más *individualistas*, y los católicos (u ortodoxos), más comunitarios (Greeley 1989). Hasta hace relativamente poco tiempo, las iglesias han influido tradicionalmente en la estructuración y el funcionamiento de la vida social en las sociedades del sur de Europa, en particular en lo que respecta a los asuntos familiares, haciendo hincapié en la importancia del matrimonio, los vínculos familiares y las responsabilidades para el bienestar de los individuos y para el orden social. La hegemonía cultural y la influencia ejercida por las iglesias fueron las principales responsables de los importantes retrasos en el desarrollo de marcos legislativos que ya existían en otros países europeos desde hacía varias décadas, como el reconocimiento del matrimonio civil, los derechos de los hijos fuera del matrimonio, las leyes de divorcio o el aborto. Las tradiciones religiosas también han favorecido ciertas pautas de género en la prestación de cuidados, asumiendo las mujeres prácticamente toda la responsabilidad en el ámbito doméstico.

La existencia de sólidas redes de apoyo familiar, y la asignación de la carga de las responsabilidades de los cuidados para las mujeres, tiene importantes implicaciones en la forma en que se gestionan los riesgos y las necesidades sociales y, por tanto, en la estructura y funcionamiento de los estados del bienestar. La apelación a las responsabilidades familiares legitimó la prestación de los escasos servicios sociales y justificó abiertamente la inacción política en estos ámbitos de la política social (Saraceno, 1994). El papel central de la familia permite a los gobiernos apoyarse en ella para satisfacer las necesidades de bienestar de sus miembros y garantizar su seguridad económica básica, lo que mantiene el reclamo político de mayores niveles de intervención pública en niveles bajos. Las expectativas de solidaridad y la puesta en común de los recursos dentro del hogar también desactivan las demandas de desegregación de los mercados laborales, en los que las mujeres y los jóvenes han operado tradicionalmente como *precarios*, ocupando puestos de trabajo menos deseables que los *cabezas de familia* masculinos, ya sea en la economía informal o

en trabajos con contratos temporales. Un ejemplo de ello es la ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, también conocida como *Ley de Dependencia*. Presentada como el cuarto pilar del estado de bienestar español, se apoyaba en el trabajo de las mujeres, bien como cuidadoras familiares que recibían 350 euros al mes y su pensión de jubilación, o bien como asistentes personales o cuidadoras a domicilio, por lo general llevadas a cabo por mujeres con baja cualificación o mujeres inmigrantes. En ambos casos se creaba una falsa división entre los receptores de los cuidados y los cuidadores (en su mayoría mujeres) cuya vulnerabilidad se desestimaba y, por tanto, se consideraba población prescindible, como en el caso de la gran mayoría de los cuidadores familiares que eran mujeres de mediana a avanzada edad, o de las mujeres, inmigrantes o nacionales con baja cualificación que se singularizan exhaustas y debilitadas por las agotadoras condiciones de trabajo, como era el caso de las que trabajaban como proveedoras de servicios de atención domiciliaria o asistentes personales con arreglo a la ley 39/2006.

Algunos rasgos distintivos del modelo mediterráneo están cambiando con suma rapidez, impulsados por las rápidas transformaciones de las familias en el ámbito de las instituciones, valores, creencias y prácticas. La aparición de nuevos estilos de vida y riesgos sociales para las cohortes más jóvenes, así como la aparición de innovaciones políticas para hacerlos frente, han resultado cruciales para esta evolución. España es el país del sur de Europa donde estas transformaciones han afectado, en un alto grado, a la capacidad de las familias para responder a las necesidades de sus miembros, lo que ha obligado a las administraciones públicas a intervenir en diferentes ámbitos de la política social.

Sin embargo, las políticas sociales en España tienen pendiente abordar las consecuencias del sistema dual de cuidados, lo que Joan Tronto denomina *privatización de los cuidados*, la división del poder social entre quienes pueden delegar estas tareas de los cuidados en otras personas y quienes no pueden atender a sus familias porque ya están cuidando a otras familias.

2.4. Familias e hijos

Las políticas familiares eran un campo residual del español de bienestar antes de la década de 2000, cuando se introdujo una amplia gama de medidas para satisfacer las necesidades de las familias. Estas iniciativas incluían medidas para promover la autonomía residencial de los jóvenes, fomentar el empleo femenino y la conciliación de la vida laboral y familiar (mediante la expansión de

los servicios de los cuidados de niños y de larga duración para los ancianos) y ayudar a las familias jóvenes con hijos (mediante un subsidio por nacimiento de hijos). Debido a la implantación de estas medidas, el gasto en protección social de las familias/niños se amplió muy por encima del aumento medio en el resto de Europa entre 2004 y 2010, lo que marcó un significativo alejamiento de los sistemas tradicionales de bienestar del sur de Europa.

Sin embargo, esta ampliación de las políticas familiares no duró lo suficiente como para garantizar la resiliencia institucional. Las medidas de austeridad presupuestaria introducidas tras la crisis fiscal de 2008 provocaron un grave retroceso de las políticas de género y familia. El sueño de alcanzar las generosas políticas familiares que se daban en el norte y centro de Europa nunca se hizo realidad, ya que las expansivas reformas del bienestar se vieron frenadas repentinamente por los esfuerzos para contener el gasto social.

Las políticas familiares parecen inadecuadas para abordar algunos de los problemas más persistentes y las necesidades más acuciantes derivadas de las profundas transformaciones sociodemográficas sufridas por la sociedad española en los últimos años. Por esta razón, siguen dándose problemas derivados de la falta de igualdad en el mercado laboral (menores tasas de participación en el mercado laboral y salarios para las mujeres, muchas mujeres se retiran del mercado laboral después de dar a luz, etc.), la falta de racionalidad en los horarios laborales y las tasas anormalmente altas de pobreza infantil (siendo los hogares monoparentales especialmente vulnerables). El porcentaje de niños de 0 a 2 años matriculados en la educación preescolar formal ha aumentado significativamente; sin embargo, existe una brecha importante en las tasas de matriculación entre los niños de familias de ingresos altos y medios (que se benefician del compromiso público con estas políticas) y las familias de bajos ingresos que parecen más reacias a utilizar estos servicios (ya sea por la política y las expectativas, o por las barreras financieras e institucionales).

El futuro de las políticas de género y familia es incierto en un contexto de restricciones fiscales, teniendo en cuenta que las políticas reguladoras sin costes parecen ser una estrategia deficiente para lograr avances. Las familias están reaccionando ante los esquemas de apoyo poco desarrollados teniendo menos hijos y retrasando la edad de emancipación de los jóvenes, como ha sucedido en España en las dos últimas décadas.

2.5. Emancipación juvenil

Los europeos del sur siguen prácticas distintivas en cuanto a sus trayectorias vitales (emancipación tardía del hogar de los padres, residencia conjunta con los padres después del matrimonio o la proximidad espacial entre los hogares de los padres y sus hijos emancipados). Estas prácticas han permitido mantener lazos familiares sólidos y duraderos, y sostener la microsolidaridad intergeneracional. Los hijos reciben apoyo y protección hasta que abandonan el hogar de forma definitiva, normalmente al establecer su propio hogar con una pareja, incluso si esto supone un sacrificio para el hijo. Los hijos adultos también reciben el apoyo de los padres en diferentes etapas y momentos del ciclo vital. Pueden contar con el apoyo financiero de los padres si necesitan hacer inversiones importantes (por ejemplo, comprar una casa o crear una empresa) o para el cuidado de los hijos. Las familias de las sociedades europeas mediterráneas también intentan proteger a sus miembros más jóvenes de las crisis económicas y laborales, absorbiendo parte del efecto del alto nivel de desempleo.

Los nuevos riesgos sociales afectan con especial intensidad a las personas en las primeras etapas de la vida, ya que están vinculados a los problemas de integración en el mercado laboral y al establecimiento de una posición en él, y a las responsabilidades de los cuidados, principalmente en la etapa de construcción de la familia (Taylor-Gooby, 2004). Además de las tendencias estructurales, la crisis económica de 2008 afectó significativamente al desempleo juvenil en España. De 2007 a 2013, la tasa de empleo juvenil (16 a 24 años) pasó del 45,2 % al 17,6 %, un descenso del 27 % (Dolado et al., 2013). Sin embargo, este fenómeno no es ni mucho menos nuevo, ya que las tasas de desempleo juvenil siempre han sido altas en España en comparación con otros países europeos. En 2013, el desempleo juvenil era uno de los más altos de Europa (55,5 % de los desempleados entre 16 y 24 años) y solo superado por Grecia (58,3 %) y muy por detrás de los países europeos con menos jóvenes desempleados, Noruega y Alemania (9,1 % y 7,9 %, respectivamente). A diferencia de los países nórdicos, donde las diferencias entre las tasas de desempleo juvenil y el resto de la población son relativamente pequeñas, en los países del sur de Europa estas diferencias se han mantenido en los niveles más altos a lo largo de los años.

El elevado desempleo juvenil ha tenido profundas consecuencias a diferentes niveles. Además de la elevada inestabilidad e incertidumbre económica y sus implicaciones en la trayectoria vital de los afectados (retrasando, o incluso truncando, la emancipación), las personas que sufren largos periodos en esta

situación o que se incorporan al mercado laboral en épocas de recesión económica tienen más probabilidades de tener empleos precarios y mal pagados a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, sufren una peor protección social y muy escasa en los periodos de desempleo, ya que no han alcanzado una carrera contributiva suficiente para recibir prestaciones. Esto puede generar conflictos intergeneracionales porque la protección de los jóvenes en muchos sistemas de bienestar está considerablemente menos desarrollada que los regímenes aplicados para proteger a los adultos y a los ancianos.

2.6. Desempleo y precariedad del mercado laboral

Las políticas de desregularización adoptadas en toda Europa en las últimas décadas condujeron a la aparición de *mercados laborales duales* en algunos de esos países, y especialmente en España, con una clara división entre trabajadores estables y precarios. Esta configuración otorga un riesgo de desempleo relativamente bajo y una protección social adecuada para los trabajadores con contratos estándar (*los trabajadores estables*: la mayoría de ellos hombres adultos), mientras que condena a los trabajadores con contratos atípicos a un alto riesgo de desempleo y a una escasa protección social (*los recién llegados*: la mayoría de los trabajadores jóvenes, las mujeres y los inmigrantes).

En España, alrededor de un tercio de la población activa tiene un contrato temporal involuntario y aproximadamente el 9 % de los trabajadores están empleados en la economía sumergida. Estos grupos están muy expuestos a las fluctuaciones del ciclo económico y tienen un acceso limitado a los sistemas de protección social. En el caso de los trabajadores temporales (con contratos de duración determinada, empleo estacional, actividades de autónomos y/o prácticas), su corta e intermitente trayectoria laboral implica una productividad reducida porque apenas se invierte en su formación laboral, y puede limitar su derecho a las prestaciones contributivas por desempleo, y sus bajos salarios les proporcionan (si cumplen los criterios de elegibilidad) unas prestaciones de asistencia social poco generosas. Sin embargo, los trabajadores de la economía informal solo pueden acceder a los regímenes de asistencia social en caso de pérdida de empleo.

La crisis agravó significativamente la situación del empleo y los problemas tradicionales del sistema de protección del desempleo en España (escasa protección de los desempleados, especialmente afectados por el desempleo de larga duración, aumento del número de trabajadores sin empleo en riesgo de pobreza, desempleo juvenil —incluidos los jóvenes que no tienen empleo,

educación o formación, conocidos como *ninís*—, etc.); además, la crisis de la COVID-19 apunta a un empeoramiento de la situación del mercado laboral.

Los sistemas de protección por desempleo tratan de responder a los desafíos que plantea la falta de empleos mediante una combinación de *políticas pasivas* destinadas a la concesión de ingresos a los desempleados y de *políticas activas de empleo* que tratan de reubicar a los desempleados en el mercado laboral lo antes posible. Aunque España es uno de los países de la OCDE que más recursos financieros destina a la protección del desempleo, esto se debe no tanto a la generosidad de las prestaciones, como al elevado número de trabajadores desempleados que están protegidos con un nivel de intensidad medio o bajo. Diferentes factores complican el objetivo de proteger a los desempleados y ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral en España: tasas de desempleo extremadamente altas, gran volumen de trabajadores desempleados de larga duración, elevado desempleo juvenil, falta de financiación de las políticas activas, complejidad de la relación entre el gobierno central y las administraciones regionales, etc.

Las medidas de consolidación fiscal introducidas durante la crisis financiera implicaron la reducción de la generosidad del sistema, tanto por la disminución de las prestaciones (a menudo por debajo del umbral de pobreza), como por el endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, lo que implica que muchos trabajadores sin empleo no tengan protección.

Además de quienes no tienen ayudas al desempleo, el problema de los *trabajadores pobres* (trabajadores con salarios bajos o empleos precarios que no les permiten superar el umbral de la pobreza) es muy común entre los trabajadores poco cualificados. Este problema se ha agravado claramente en los últimos años, ya que los recortes salariales han afectado especialmente a los trabajadores situados en el extremo inferior de la distribución salarial. Al creciente porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza se suman los jóvenes sin empleo, sobre todo los *ninís*, lo que supone un reto especial para el futuro del país desde el punto de vista económico y social.

2.7. Desigualdad y pobreza

La transición de las sociedades industriales a las denominadas posindustriales, que condujo a la aparición de los nuevos riesgos sociales, conllevó profundas transformaciones en los mercados laborales, la familia y las estructuras de protección pública, ampliando la brecha entre los más privilegiados y los segmentos desfavorecidos de la población y abriendo nuevos espacios

para la exclusión social. Nuevos grupos vulnerables se han visto afectados por la evolución socioeconómica de las últimas décadas. Sometidos a intensas inercias institucionales, los estados han desatendido la aparición de los nuevos riesgos sociales, concentrando la acción política en iniciativas destinadas a la consolidación de las estructuras clásicas de protección social (centradas en los *antiguos riesgos sociales*). En este sentido, las nuevas formas de exclusión social reflejan en gran medida la inacción política frente a los nuevos riesgos sociales. La consecuencia ha sido una tendencia creciente a la dualización social con un claro perfil político e institucional provocado en gran medida por la segmentación social de los derechos sociales y la consiguiente diferenciación en el acceso a las prestaciones monetarias y a los servicios públicos.

Desde la década de 1980, los niveles de ingresos de los segmentos de población más favorecidos han crecido por encima de los de los grupos de menores ingresos a causa de la creciente dispersión salarial, la desregularización del mercado laboral y las políticas fiscales regresivas. Debido a esa polarización de los patrones de distribución de la riqueza, la pobreza ha aumentado en toda Europa, y los grupos no acostumbrados a ocupar los escalones inferiores de la estructura social se ven obligados a hacerlo de forma transitoria o permanente. Así, mientras que en la mayoría de los países europeos la pobreza se concentraba en los grupos de mayor edad a finales del siglo XX, la pobreza infantil y juvenil ha cobrado protagonismo desde finales de la primera década del siglo XXI. Las dificultades económicas que atraviesan los hogares con hijos a su cargo y los jóvenes en crisis económica contribuyen a concentrar la vulnerabilidad en las primeras etapas del ciclo vital.

En las sociedades occidentales, ser pobre rara vez supone un riesgo para la supervivencia (porque no se cuestionan las necesidades más básicas de las personas, como la alimentación, el vestido o la vivienda), si bien crea importantes dificultades para participar en las actividades cotidianas de la sociedad y, en consecuencia, las personas en situación de pobreza no pueden desarrollar sus capacidades y funcionalidades. En estas sociedades, las oportunidades para participar en la sociedad y alcanzar un nivel adecuado de funcionalidad dependen del acceso a bienes y servicios (vivienda, transporte, educación, servicios sanitarios, etc.), cuya ausencia empuja a los individuos a una espiral de marginación de difícil escapatoria. La falta de servicios telefónicos o de transporte adecuados puede, por ejemplo, condicionar la participación en la sociedad si impide a las personas encontrar trabajo (porque las exigen estar localizables) o acudir a él a tiempo cada día. Estas carencias pueden empujar a las

personas a desempeñar actividades ilegales, lo que aumenta el riesgo de problemas con la justicia o de estigmatización, lo que lleva a los individuos a una espiral acumulativa que convierte en crónica su situación marginal. Además, la mayoría de los individuos en Europa parecen mostrar una preferencia por vivir en sociedades igualitarias y socialmente cohesionadas, por lo que el bienestar declarado por los individuos se ve afectado de forma negativa por el aumento de las desigualdades. A causa de la crisis financiera y económica de 2008, no todos los ciudadanos pudieron integrarse en los circuitos de *normalidad cívica* mediante el acceso a un empleo remunerado. España sufrió intensamente los efectos de esa crisis, por lo que se convirtió en uno de los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad de ingresos de Europa. Sin embargo, los desequilibrios macroeconómicos que afectan a España ya estaban presentes mucho antes de la crisis. Muchos de esos problemas están relacionados con la configuración de su mercado laboral y con la relativa debilidad del sistema de bienestar español.

Aunque entre 2014 y principios de 2020 se produjo un crecimiento económico relativamente vigoroso, que creó alrededor de medio millón de puestos de trabajo al año, más de un millón de personas permanecieron en el paro de larga duración con enormes dificultades para reincorporarse al mercado laboral. De ellas, 7 de cada 10 son personas mayores de 45 años, con bajos niveles de formación y que perdieron su empleo en la crisis. Ningún otro país de Europa occidental tiene casi la mitad de ese número de trabajadores en paro de larga duración, y este es uno de los factores determinantes de las crecientes desigualdades de renta que existen en España en comparación con nuestros socios europeos. Por lo tanto, la reciente crisis de la COVID-19 podría tener efectos agravados si España no se ha recuperado aún de la crisis de 2008, con niveles todavía bajos de empleo, precariedad laboral, desigualdad de ingresos y educación, y bajos niveles de capital social.

Otro de los problemas a los que se enfrenta la sociedad española son los bajos niveles de movilidad social que implica que los hogares que viven en la pobreza tengan dificultades muy importantes para salir de esa situación. Esto es grave si se tiene en cuenta la evidencia que demuestra cómo los niveles de pobreza se transmiten de generación en generación. Las oportunidades de los niños que viven en hogares pobres hoy en día son menores que las de los demás niños, lo que rompe directamente cualquier objetivo de establecer una sociedad con igualdad de oportunidades para todos. Los cambios en el sistema

educativo son fundamentales y urgentes. Estos cambios no solo deben aumentar las oportunidades sino también la cohesión social y el crecimiento.

Las lagunas del sistema de protección social han sido cubiertas tradicionalmente por la familia (sobre todo por las mujeres), que se ocupa de los niños y los ancianos. Si bien la capacidad de la familia para proteger a sus miembros está en declive en España, lo que deja desatendidas muchas necesidades (Moreno y Mari-Klose, 2013), las prestaciones sociales no llegan a una gran parte de los desempleados que tenían historiales laborales demasiado cortos para cumplir los criterios de elegibilidad o habían tenido empleos informales en la economía sumergida. Mientras que los trabajadores más experimentados (y los ancianos en general) se convirtieron en los principales beneficiarios de los planes de protección social, los trabajadores más jóvenes y las familias quedaron en gran medida fuera de la red proporcionada por las políticas sociales, lo que dio lugar a una incapacidad mayor que la de la mayoría de los países europeos para luchar contra la pobreza y la desigualdad.

En un contexto de crecientes restricciones presupuestarias, la idea de concentrar los recursos en los grupos desfavorecidos ha ganado adeptos. El principio de selectividad se impone frente a los viejos valores de universalismo y solidaridad que habían impulsado en un principio la expansión del estado de bienestar (Cox, 1998). En los últimos años, la Comisión Europea ha formulado varias recomendaciones para que los estados se comprometan en general a mejorar las políticas de asistencia, adaptarlas a las necesidades de las personas en situaciones adversas y promover la empleabilidad de los beneficiarios. El *ingreso mínimo vital* que acaba de introducirse en España va en esta dirección.

2.8. Exclusión residencial

La vivienda es, sin duda, un elemento clave en la vida de las personas y una de las dimensiones fundamentales para la correcta y plena incorporación de un individuo a la sociedad. La vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda es simultáneamente causa y consecuencia de la exclusión social. Dado su alto grado de mercantilización, y el relativamente escaso desarrollo de las políticas públicas en este ámbito, la relación entre privación material y exclusión residencial es clara en España.

La estructura residencial española, caracterizada por el enorme peso de la vivienda en propiedad (el valor de las casas representa alrededor de 2/3 de la riqueza total de las familias y el 50 % de la riqueza acumulada del país), que representa alrededor del 80 % del parque total de viviendas en 2020 (muy por

encima de la media de alrededor del 60 % de la UE), asigna un papel relativamente residual al alquiler, uno de los porcentajes más bajos de la UE. Especial atención merece la extrema debilidad del alquiler social público, que representa menos del 3 % del total del parque de viviendas en España, frente a la media europea que ronda el 21 %.

La caracterización precisa del papel de la vivienda, o de la dificultad de acceso a ella, en el desarrollo de los procesos de exclusión social en España viene definida en gran medida por la evolución de los precios inmobiliarios en las últimas décadas. En una comparación internacional, España estaría entre los tres países de la OCDE con un mayor crecimiento a largo plazo del precio de la vivienda, algo que se hace aún más flagrante cuando consideramos los salarios brutos al precio medio de la vivienda, midiendo así el esfuerzo que debe hacer una familia para adquirirla.

Los más afectados por el aumento del precio de la vivienda han sido, sin duda, quienes no poseían una casa antes de la escalada de precios y que han tenido que hacer un esfuerzo considerable para poder acceder a este bien básico. Esto incluye a los que compraron una casa al precio más alto, mientras los precios bajaban en 2008, con la crisis fiscal. El crecimiento acumulado de los precios de la vivienda en España durante las dos últimas décadas ha ayudado a acumular riqueza en los estratos más altos de la estructura social y ha contribuido al excesivo endeudamiento de las economías domésticas, con la consiguiente limitación de su capacidad de consumo e inversión en otros bienes y servicios.

Con la estructura de propiedad de la vivienda y el aumento de los precios, el tercer elemento del problema de acceso a la vivienda en España viene determinado por la escasa intervención de las administraciones públicas en este ámbito (España dedica el menor porcentaje del PIB al gasto público en vivienda, en torno al 1 % frente a la media del 2 % en la UE). La construcción de viviendas de promoción pública también es prácticamente anecdótica. Las desgravaciones fiscales para los compradores de vivienda, defendidas desde la administración como un instrumento de política de vivienda con un bajo coste de gestión y una relativa sencillez en su funcionamiento, han recibido críticas por tener un carácter regresivo y favorecer a los que compran frente a los que deciden, o no tienen otra alternativa, alquilar (mientras que los beneficios también aumentaban con el precio de la vivienda).

Los altos precios, tanto de la compra como del alquiler, constituyen una barrera muy importante para muchos ciudadanos que buscan acceder a una

vivienda, especialmente las personas con ingresos más bajos o inestables, los hogares monoparentales, los jóvenes o los inmigrantes. Debido a esta situación, estos grupos a menudo deben recurrir a formas de solidaridad residencial o comunitaria intergeneracional para hacer frente a su posible exclusión residencial. El impacto social de la crisis económica y fiscal fue visible en las dificultades para acceder y mantener una vivienda adecuada. La crisis disparó el número de ejecuciones hipotecarias por insolvencia y los desalojos de viviendas de inquilinos morosos.

Sin embargo, los aspectos relacionados con la habitabilidad, la adecuación de la vivienda a las necesidades específicas de cada momento del ciclo vital de una persona (desde las barreras físicas que impiden el normal desarrollo de las actividades cotidianas en determinadas circunstancias —ancianidad, discapacidad, etc.—, hasta los problemas derivados de la inadecuada superficie o distribución de los espacios interiores de la vivienda —sobrepoblación—, etc.) constituyen un importante problema en España. Las consecuencias sociales de la exclusión residencial son múltiples: desde la obstaculización de la transición de los individuos a la vida adulta (emancipación del hogar paterno y formación de nuevos hogares) hasta el retraso en la decisión de tener hijos (y el número final de estos), pasando por las inadecuadas soluciones habitacionales (estado precario de la vivienda, dimensiones insuficientes, ubicación, etc.) que sufren los colectivos vulnerables. Además, las dificultades para encontrar una vivienda en las grandes ciudades pueden constituir un factor agravante de la violencia de género. En los casos más extremos, esta exclusión residencial se traduce en el alojamiento en infraviviendas (horizontales o verticales) o directamente en el *sinhogarismo*, fenómeno de exclusión social extrema en el que los problemas de falta de acceso a la vivienda aparecen a menudo acompañados de otras circunstancias agravantes (problemas de salud mental, alcoholismo, irregularidad administrativa con inmigrantes indocumentados, etc.).

La desigualdad social se expresa geográficamente mediante la articulación de los territorios y la localización de los grupos sociales en ellos, por lo que los procesos de exclusión suelen ir acompañados de procesos de segregación que potencian la propia situación de exclusión social. El desarrollo de una política urbana que intervenga sobre los barrios más desfavorecidos para frenar los procesos que operan aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social (deterioro de la vivienda, insuficiencia de las redes de transporte público, servicios públicos y sociales deficientes, escuelas de baja calidad, desempleo, destrucción del tejido económico, desaparición del comercio de

proximidad y degradación del espacio público) se manifiesta como una herramienta política necesaria y urgente.

2.9. Salud y atención sanitaria

La relación entre el estado de salud y la privación relativa (en varias dimensiones clave como el nivel de ingresos, la educación, el entorno vital, etc.) se encuentra ampliamente documentada. Como demuestran los datos sobre desigualdades sanitarias, las poblaciones desfavorecidas son vulnerables y su estado de salud (expresado tanto en indicadores de mortalidad como de morbilidad) es sustancialmente peor que el del resto de la población. Aunque todavía no se ha explicitado la compleja interacción de factores (materiales, sociales, culturales, psicológicos y actitudinales) que provoca este gradiente de la salud, es evidente que su existencia supone una grave limitación de las oportunidades vitales de los grupos sociales más desfavorecidos. Los individuos con mala salud tienen menos oportunidades de participar en el mercado laboral y de obtener ingresos.

Analizado desde una perspectiva diacrónica, el estado de salud de la población de un determinado territorio puede mejorar a medida que aumenta la riqueza agregada del territorio, aunque es muy posible que las desigualdades en materia de salud no se reduzcan o incluso aumenten. A lo largo de las dos últimas décadas, los datos disponibles apuntan a un aumento constante de las desigualdades sociales en la mayoría de los países desarrollados y, en particular, en España. Aunque la evidencia empírica disponible sobre la existencia de desigualdades en la salud dentro de la población española es relativamente escasa (lo que representa la escasa prioridad que se le da a esta cuestión), la mejora de los principales indicadores de salud de la población española, paralela al aumento del nivel socioeconómico agregado del país en las últimas décadas, no se ha distribuido de manera uniforme y las desigualdades en salud dentro de la sociedad española han aumentado.

Se ha establecido empíricamente una correlación bilateral significativa entre la esperanza de vida y diversas variables como la distribución de la renta, el capital social, el nivel educativo, los indicadores de desempleo o el desarrollo del estado de bienestar. En España aparece un claro gradiente geográfico nor-este-suroeste que refleja esas desigualdades. Las diferencias en la esperanza de vida al nacer de los varones entre las distintas áreas territoriales podrían ser de hasta 6 años, y la replicación de los análisis ecológicos de las desigualdades en salud en el nivel más agregado (Comunidades Autónomas)

reproducen patrones similares de mortalidad prematura. Lo mismo ocurre con el estado de la salud, ya que las personas de las clases más desfavorecidas presentan un peor estado de salud a lo largo de su vida (expresado en numerosas condiciones de salud como trastornos respiratorios, hipertensión arterial, obesidad, diabetes o enfermedades crónicas).

Más allá de la ausencia de interés político por llevar a cabo una investigación sistemática sobre las desigualdades en salud, las disposiciones institucionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) dificultan en concreto la generación y el análisis de información sanitaria comparativa (esencial para evaluar las políticas sanitarias y sus resultados en materia de equidad en particular). La naturaleza fuertemente descentralizada del SNS ha determinado con claridad el alcance del debate sobre la equidad de las políticas sanitarias en las últimas décadas. La herencia del antiguo sistema sanitario de la Seguridad Social y la atribución de competencias y responsabilidades entre los distintos niveles de la administración del estado (nacional, regional e incluso local), mientras que la administración regional no tenía capacidad para recaudar impuestos, dejaba poco margen para introducir las desigualdades sanitarias en la agenda política.

Con la crisis económica, las medidas adoptadas en 2012 respecto al SNS alteraron el funcionamiento de este sistema. Los severos recortes presupuestarios (disminución del gasto sanitario público total desde el 6,78 % del PIB en 2009 hasta el 5,89 % en 2017), la introducción de reformas (copagos) y sobre todo el cambio de lógica del modelo (se volvió a una lógica de aseguramiento social, a pesar de la ética universalista del modelo sanitario desde su creación en 1986) se tradujeron en un deterioro del funcionamiento del SNS y en una visibilidad relativamente alta de este ámbito de la política en la esfera judicial, en los medios de comunicación y en el ámbito público y político. El proceso de consolidación fiscal parecía estar lejos de terminar antes de que surgiera la pandemia de la COVID-19 a principios de 2020 (el Programa de Estabilidad 2017-2020 presentado por el Gobierno español a la UE proponía seguir recortando el gasto sanitario público total hasta el 5,57 % del PIB en 2020), lo que cuestionaba significativamente la capacidad del sistema para cumplir su misión.

Dichas reformas y restricciones presupuestarias implicaban un deterioro de la calidad asistencial por el cierre de camas hospitalarias, la reducción de la proporción de profesionales sanitarios por paciente y la infrafinanciación general de los centros sanitarios. Las evidencias empíricas analizadas recientemente apuntan al deterioro de la salud física y mental entre ciertos grupos de

la población española, en especial los varones adultos afectados por el desempleo de larga duración, o entre los grupos de población más vulnerables que sufren otros efectos secundarios negativos de la crisis, como las ejecuciones hipotecarias. Los servicios de salud mental no pueden evitar el considerable aumento de las tasas de autolesión y suicidio que experimentan ciertos segmentos de la población española desde 2011.

La reducción de la ingesta de medicamentos necesarios (a causa de la introducción de copagos) y la muerte de pacientes por una inadecuada prestación de asistencia sanitaria vinculada a las restricciones financieras también se han asociado a los recortes y reformas del sistema sanitario público. Algunos indicadores de la salud, estrechamente asociados a aspectos del estilo de vida (morbilidad vinculada al asma, accidentes laborales y hospitalizaciones) también presentan una tendencia negativa. La crisis económica también puede contribuir a una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y a una mayor presencia de factores de riesgo, como la obesidad, entre los grupos más vulnerables de la población, así como a un sesgo favorable a los ricos en los programas de cribado preventivo.

Los recortes presupuestarios provocaron un aumento significativo de los tiempos de espera para recibir atención dentro del SNS. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica hospitalaria no urgente pasó de 74 días en diciembre de 2007 (con 376 000 pacientes en las listas) a 89 días en diciembre de 2015 (550 000 pacientes en las listas), y alcanzó los 115 días en diciembre de 2016 (614 000) para reducirse a 93 (584 018) en junio de 2018. Los pacientes que esperaban una intervención neuroquirúrgica tuvieron que esperar una media de 91 días en 2007, y esta cifra aumentó a 145 días en junio de 2018. Con los pacientes de traumatología, el tiempo de espera pasó de 86 a 111 días, y para los tratamientos de cirugía pediátrica aumentó de 79 a 103 días en ese mismo periodo.

Si se reflexiona sobre algunas de las consecuencias más extremas de la crisis, algunos autores han señalado la muerte de pacientes por una inadecuada prestación de la asistencia sanitaria en el SNS. Otros autores aseguran que la mortalidad observada parece disminuir a un ritmo más lento de lo que cabría esperar en ausencia de la crisis, mientras que se percibe un aumento de la mortalidad invernal entre las personas mayores.

La desmotivación de los profesionales del sector sanitario, el deterioro de la percepción pública sobre el funcionamiento del SNS y el creciente desplazamiento hacia los seguros médicos privados por parte de los segmentos más

ricos de la población constituyen amenazas adicionales para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Un mayor énfasis en la atención primaria y una mayor articulación entre la dimensión sanitaria y el ámbito de los servicios sociales podrían resultar fundamentales para responder a los retos sociales que plantean las sociedades avanzadas contemporáneas (envejecimiento de la población, aumento de las desigualdades, inmigración, etc.). Por lo tanto, uno de los principales objetivos que debería abordar el sistema sanitario público consiste en la reducción de los obstáculos que sufre la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales en un ámbito local y comunitario, con la consiguiente búsqueda de una mayor integración con los servicios de atención a las personas, en particular en lo relativo a los colectivos dependientes (niños, ancianos, enfermos crónicos, discapacitados físicos, etc.).

2.10. Atención a largo plazo

La atención a las personas en situación de dependencia, en especial los ancianos, se ha convertido en una prioridad en todo el mundo desarrollado, y en particular en Europa occidental. Sin embargo, diversos factores, entre los que destaca la crisis económica iniciada en 2008, han hecho que, a pesar de la creciente institucionalización de una respuesta pública al riesgo social de la dependencia, la responsabilidad del cuidado de los afectados y sus familias no haya sido interiorizada por el Estado, en especial en los países pertenecientes al régimen de bienestar mediterráneo. El papel de los cuidadores atribuido tradicionalmente a las mujeres en este régimen de bienestar ha ido acompañado de una escasa intervención pública de apoyo a las familias. Cuando ha existido, la intervención pública se ha caracterizado por ser débil, fragmentada y residual, dejando la mayor parte de las responsabilidades legales en manos de las familias.

En el ámbito del cuidado de los mayores, las preferencias de los ciudadanos españoles chocan abiertamente con la realidad de las nuevas dinámicas familiares que cuestionan los supuestos básicos del régimen de bienestar familiarista. A pesar del deseo de ser atendidos por la familia, y de la buena disposición de las familias a cuidar de sus parientes cercanos, la imposibilidad de compaginar la vida moderna (trabajar, desplazarse, atender las necesidades reproductivas, cuidar de los hijos) con la carga de cuidar a un familiar mayor dependiente está obligando a los ciudadanos a dirigirse al estado en busca de ayuda.

Las políticas de atención a las personas dependientes en España han sido tradicionalmente deficitarias en recursos, basadas en transferencias monetarias relativamente escasas, y solo de modo marginal en la prestación pública de servicios. Por esta razón la oferta de residencias públicas y residencias asistidas para

personas mayores es notablemente limitada. Además, a pesar del gran volumen de personas con un alto grado de dependencia que viven con sus familiares, el sistema de atención domiciliaria ha estado tradicionalmente poco desarrollado, tanto en términos de cantidad (horas de asistencia ofrecidas por semana) como de cobertura (número de personas mayores atendidas).

Una medida política clave adoptada para responder a la creciente demanda de la sociedad española fue la elaboración de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Protección a las Personas en Situación de Dependencia, conocida popularmente como *Ley de Dependencia*, aprobada en 2006 tras 8 años de debate público y político. El nuevo reglamento define el derecho individual a recibir atención cuando una persona se encuentra en situación de dependencia y establece una base normativa común para las prestaciones y servicios que deben proporcionar las Comunidades Autónomas. Esta ley supuso la creación de nuevas instituciones y el refuerzo de las existentes (en especial en los servicios sociales en el ámbito local y regional). Originalmente destinada a cumplir con los compromisos de España tras la ratificación del Protocolo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2007, la aplicación de la ley 39/2006 se tradujo en la financiación de los cuidadores familiares, la mayoría de ellas mujeres, y de las residencias de ancianos y personas con discapacidades graves. Como ha puesto de manifiesto la crisis de la COVID-19, el sector de las residencias para mayores y dependientes ha sido vulnerable a la pandemia en España. Las medidas de austeridad fiscal aplicadas desde la crisis de 2008 amenazaron la aplicación de esta legislación y animaron a las administraciones públicas a reorientar el sistema hacia esquemas que pudieran contribuir a reducir los costes totales del programa. Esta combinación de factores desplazó la prestación de cuidados hacia un mercado informal no regulado capaz de proporcionar flexibilidad y menores costes. Este nicho del mercado laboral español (mayoritariamente clandestino) ha estado ocupado en gran medida por mujeres inmigrantes.

En la segunda mitad de la década de 2010 los regímenes públicos incluidos bajo el paraguas de la Ley de Dependencia mostraron signos de recuperación, con un aumento del número de beneficiarios (entre diciembre de 2015 y 2018 el incremento fue del 32 %, 258 000 personas adicionales cubiertas por estos regímenes) y de la intensidad de la protección. No obstante, persisten importantes disparidades regionales en cuanto al acceso, los niveles de cobertura y las listas de espera. Por término medio, cada beneficiario recibe 1,25 prestaciones, siendo la prestación económica de asistencia domiciliaria la más habitual. Se calculó que en 2016, el porcentaje de la población de 65 y más años que

recibió cuidados de larga duración en instituciones fue del 1,9 %, y el 7,1 % recibió atención en el hogar. En cuanto a los cuidados informales, según la OCDE, España tiene uno de los porcentajes más altos de cuidadores informales (15,3 % de la población) y en cuanto a la cantidad de horas dedicadas por los cuidadores familiares es de las más altas de la OCDE (más de 20 horas semanales). La intensidad de los cuidados también está por encima de la media de la UE: el 14,1 % de las mujeres (el 8,4 % de los hombres) pasan varios días o todos los días de la semana cuidando a sus familiares mayores o discapacitados (el 11,3 % y el 7,5 % respectivamente en la UE). Esta situación es más intensa entre las personas con menos ingresos (15,1 %; 10,5 % en la UE) que entre las que tienen más ingresos (8,2 %; 8 % en la UE).

Entre los desafíos de este sistema podemos señalar la persistencia de las listas de espera para el acceso a las prestaciones por parte de las personas que tienen reconocido el derecho a la protección social; la deficiente calidad de determinados puestos de empleo dentro del sector de los cuidados; las excesivas diferencias de cobertura entre las Comunidades Autónomas; el decreciente compromiso financiero de la administración central; y las carencias en el desarrollo de la coordinación institucional entre los servicios sociales y sanitarios en el ámbito de la dependencia.

Estos escollos del sistema de dependencia evidencian los desafíos que plantea el sistema dual de cuidados (Tronto, 2015) en el que prospera un mercado de servicios de cuidados a costa de amplias capas de población incapaces de atender las necesidades de sus propias redes sociales y de personas que se ven expulsadas de la vida social en entornos institucionalizados porque sus familias están demasiado presionadas en el mercado laboral.

Como ya se ha mencionado, el proceso de desafiliación provocado por la deslocalización hace que se pierdan los lazos comunitarios, lo que sitúa a determinadas personas, como las madres solteras, en un mayor riesgo de exclusión social. La soledad es un factor importante que contribuye a esta exclusión. La repercusión negativa de la soledad en la salud física y mental y en la calidad de vida de quienes la padecen se ha demostrado con creces. Provoca problemas cardiovasculares, descensos del sistema inmunitario e incluso aumenta el riesgo de mortalidad prematura en las personas que se sienten solas (Gené-Badía et al., 2016). No obstante, la soledad se relaciona con diversos trastornos psicológicos, con lo que aumentan los síntomas ansioso-depresivos, las tendencias suicidas y los niveles de agresividad (Cacioppo, Grippo, London, Goossens y Cacioppo, 2015). Asimismo, la soledad tiene una repercusión negativa en la calidad de vida mediante diversas

conductas de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la alimentación inadecuada y el empeoramiento de la calidad del sueño (Gené-Badía et al., 2016). Por lo tanto, la soledad se está convirtiendo en una de las mayores amenazas para los sistemas de salud pública, superando incluso el riesgo de otros problemas como la obesidad (Holt-Lunstad, 2017). Según Caccioppo (2017), se trata de una pandemia silenciosa del primer mundo, que afecta a una de cada cuatro personas en los países industrializados.

2.11. Sostenibilidad del estado de bienestar

El análisis de la sostenibilidad futura del estado de bienestar se ha conceptualizado tradicionalmente en torno a la cuestión de la viabilidad financiera de los programas de protección social. Sin embargo, el reduccionismo económico es, cuando menos, incompleto ya que existen otros aspectos relevantes para definir posibles escenarios futuros del estado de bienestar. Entre estas dimensiones complementarias se encuentran las que tienen que ver con el papel que desempeña el debate político sobre el estado de bienestar, las preferencias normativas de los ciudadanos (respecto a lo que se considera la cohesión y solidaridad más deseable dentro de una sociedad determinada) y, en última instancia, el nivel de apoyo social a la redistribución. Estos elementos resultan fundamentales para determinar el contexto en el que se enmarcan e interpretan las consideraciones económicas y financieras y, por lo tanto, para establecer los límites del grado de apoyo de los ciudadanos a los programas y esquemas bajo la cobertura del estado de bienestar.

El debate sobre la sostenibilidad económica del estado de bienestar no es nuevo, ya que las discusiones sobre el grado de reducción de los derechos sociales y de la legislación laboral en una economía cada vez más globalizada han estado presentes en el ámbito político europeo al menos desde mediados de los años setenta del siglo pasado. Muchas contribuciones a este debate predijeron (y a veces recomendaron) el desmantelamiento de los programas de protección social en respuesta a la internacionalización de los flujos de capital. Sin embargo, un análisis minucioso de las realidades de las reformas de las políticas de bienestar en Europa occidental durante las dos últimas décadas pone de manifiesto una gran variedad de respuestas dictadas, en gran medida, por los diferentes acuerdos institucionales que rigen la política y la economía de los distintos países, con cierto repliegue en determinadas dimensiones, pero también con la ampliación de ciertos programas de protección social, y la aplicación de una amplia gama de reformas que tienen como fin aplicar un *ajuste* del estado de bienestar sin cuestionar su continuidad.

La crisis iniciada en 2008 volvió a situar la sostenibilidad económica de las políticas de bienestar en el centro del debate social y político. De este modo, la discusión sobre las reformas y la posible reducción del gasto en este ámbito político volvió a la primera línea del debate político, en concreto en los países del sur de Europa, especialmente afectados por la crisis económica y fiscal. Los retos para la transformación de los sistemas económicos de estos países son, sin duda, muy importantes (no pueden competir con los países en vías de desarrollo con salarios bajos, sus empresas multinacionales son escasas, les resulta difícil generar actividades de gran valor añadido que puedan crear puestos de trabajo cualificados, sus poblaciones tienen unas expectativas y unas competencias que no se corresponden con los puestos de trabajo que se pueden crear en los sectores en los que siguen siendo relativamente competitivos —turismo, agricultura, etc.—). Al mismo tiempo, y aunque parece haber una *ventana de oportunidad* para los agentes políticos que abogan por el desmantelamiento de los sistemas de protección social, esta opción sigue siendo poco probable ya que, además de proteger a la población de los principales riesgos asociados a las diferentes etapas del ciclo vital y de proporcionar un nivel básico de protección a las personas que corren el riesgo de caer por debajo del umbral de la pobreza, el estado de bienestar desempeña un papel clave en la promoción del progreso económico. Al facilitar la creación de empleo, regular los mercados de trabajo, la estabilidad salarial y la baja conflictividad laboral, y promover el ajuste de los ciclos económicos, el estado de bienestar ha sido un agente clave para garantizar la estabilidad macroeconómica de las sociedades de Europa occidental. Sin embargo, existe un margen para una profunda redefinición de los equilibrios en los papeles que desempeñan el estado, el mercado y la sociedad civil (incluidas no solo las familias sino también las organizaciones sociales de asistencia) en la regulación, financiación y provisión de los diferentes programas de protección social y políticas de bienestar en Europa. Los estados de bienestar europeos han perseguido una recalibración de sus programas mediante medidas de contención de costes y de modificación de las prioridades asignadas a cada uno de los diferentes esquemas de protección social (en distinto grado y según sus peculiares trayectorias históricas).

La conceptualización de lo que es *posible* en relación con la ampliación de los derechos sociales está relacionada con el marco que define los escenarios futuros para el estado de bienestar. Las ideas sobre la solidaridad y la redistribución entre las diferentes fuerzas políticas condicionarán la naturaleza y la intensidad del apoyo social y político al estado de bienestar. Sin embargo, más allá del modo en que se desarrollen los debates sobre el estado de bienestar en

el ámbito político, las actitudes de los ciudadanos hacia la protección social se basan en gran medida en los valores sociales compartidos que constituyen la base axiológica de una sociedad. Las ideas y creencias de los ciudadanos sobre las políticas sociales conforman la evolución de las políticas de bienestar, condicionando especialmente la viabilidad de las reformas en las políticas ya existentes. La dimensión de los valores sociales compartidos resulta de crucial importancia como guía interpretativa de la (des)institucionalización de las políticas sociales.

Cabe destacar el apoyo generalizado de los contribuyentes europeos a la redistribución de la riqueza a través del estado de bienestar, que contrasta con la disparidad implícita en los principios del modelo económico neoliberal de la autorresponsabilidad individual al margen de la redistribución colectiva. La noción de que las políticas públicas (y en particular las políticas sociales, responsables aproximadamente del 50 % del gasto público total en los países europeos) deberían financiarse mediante los impuestos sin recurrir a la deuda (que debe utilizarse principalmente para financiar políticas y programas expansivos *extraordinarios*) por lo general se acepta en Europa.

4. CONCLUSIÓN

Los nuevos riesgos sociales que se abordan en este documento presenta una estrecha conexión con los principales desafíos de sostenibilidad a los que se enfrenta el estado de bienestar en nuestro país, constituyendo desafíos clave para nuestra sociedad que deben investigar todas las disciplinas científicas, en especial las Ciencias Sociales y las Humanidades.

El creciente protagonismo de estos nuevos riesgos sociales en la agenda social y política surge fundamentalmente de su repercusión económica, de su relevancia social y, en parte, también de la relevancia electoral de los colectivos que las experimentan más directamente. La necesidad de abordar los nuevos riesgos sociales se plantea sobre todo como parte de una estrategia más amplia destinada a movilizar económicamente a una mayor proporción de la población y a mejorar la competitividad y el bienestar del país. Como tal, la respuesta a estos desafíos formaría parte de una estrategia de *inversión social* orientada al futuro de toda la sociedad. Instituciones transnacionales como la UE o la OCDE, suelen estar a la cabeza de la promoción de políticas para *modernizar* las políticas sociales tratando de asegurar el bienestar individual (mejores perspectivas de empleo y calidad de vida), al tiempo que se mejoran las posibilidades de éxito colectivo de las sociedades. Este

paradigma de la política social, que se irradia desde estas instituciones, ha dado forma a los debates políticos nacionales en toda Europa, introduciendo la necesidad de *recalibrar* el estado de bienestar, legitimando nuevas prioridades de gasto social que permitan abordar transformaciones que requerirán la participación de toda la sociedad. La crisis de la reproducción social, con el doble sistema de cuidados, plantea una amenaza específica que se debe abordar desde las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Entre estas estrategias de *inversión social* podemos destacar la mejora del funcionamiento de la *escalera social* asegurando la igualdad de oportunidades a todos los grupos sociales, en especial a los que parten de una posición más desfavorecida. La desigualdad de oportunidades, la desigualdad de ingresos, el escaso crecimiento económico (baja productividad), la precariedad laboral y los niveles bajos de capital social y bienestar operan como un círculo vicioso del que es difícil salir sin la intervención de las políticas públicas. Los factores que pueden convertir esa dinámica negativa en un círculo virtuoso que produzca una sociedad más justa y próspera son, entre otros, las políticas familiares eficaces (permisos parentales y acceso a guarderías de calidad), el acceso equitativo a sistemas educativos de calidad que permitan a los individuos acceder a empleos de calidad, el acceso equitativo a una sanidad de calidad, los procesos meritocráticos de acceso a oportunidades de empleo justas y satisfactorias, y las redes de seguridad social que protejan a los hogares de las dificultades temporales. El estudio del diseño, funcionamiento, implantación y evaluación de estos esquemas de protección social requiere una estrecha implicación por parte de los investigadores que acompañen estos procesos y ayuden en las dinámicas de aprendizaje para la maximización de los recursos invertidos en ellos. El bienestar de los individuos debe pasar al centro de la formulación de políticas, lo que tendrá implicaciones en la cohesión social, el capital social, la educación y la productividad.

Dado que la política monetaria ya no está en manos de las autoridades nacionales dentro de la Eurozona, las políticas fiscales dirigidas a las inversiones en infraestructuras, educación e innovación social pueden mejorar la productividad, apoyar el empleo y ampliar la demanda agregada, constituyendo instrumentos clave dentro de la *caja de herramientas* macroeconómicas de las autoridades estatales europeas. Dentro de ese enfoque, la actualización de los sistemas y la política fiscal es un elemento más de la protección social. Por lo tanto, el establecimiento de un sistema fiscal más equitativo sin poner en peligro la actividad económica o la productividad, la mejora de la fiscalidad de las empresas teniendo en cuenta la complejidad de la arquitectura fiscal internacional y la utilización

de las políticas fiscales como instrumentos para la creación de incentivos (y desincentivos) para luchar contra los nuevos riesgos sociales constituyen medidas políticas que deberían proporcionar los recursos financieros para aplicar las estrategias de *inversión social* y requieren mucha más atención por parte de los científicos sociales para evaluar sus efectos.

Para mantener la competitividad, los países europeos también han introducido cambios importantes en la normativa que protege el empleo, exigiendo un despido más flexible, menos burocrático y más barato para el empresario. También se han reducido los costes laborales no salariales mediante exenciones fiscales o subvenciones a los empresarios y moderación salarial. El concepto de *flexiseguridad* ha tenido una importante penetración, refiriéndose a la combinación de esas iniciativas de desregularización del mercado laboral con el refuerzo de la protección social para quienes perdieron su empleo y la provisión de mayor seguridad en las etapas de transición entre empleos, en especial con trabajadores con una posición relativamente débil en el mercado laboral. El incremento de la *gig economy* (economía de falsos autónomos y de trabajadores en contratos irregulares y esporádicos), acentuado con el estallido de la pandemia de la COVID-19, supone un importante desafío adicional para el bienestar de los trabajadores y requerirá regulaciones políticas específicas. El análisis de estos instrumentos políticos debe constituir el centro de atención de las Ciencias Sociales y Humanidades.

Las reformas introducidas en el ámbito de las políticas sociales para redefinir el reparto de tareas y responsabilidades entre el estado, el mercado y las organizaciones de la sociedad civil requieren una atención similar por parte de las Ciencias Sociales y Humanidades. A lo largo de las dos últimas décadas, un patrón de reformas llevadas a cabo en diferentes sectores de la política social implicó una redefinición del papel de las administraciones públicas, que compartieron cada vez más responsabilidades con organizaciones privadas o de servicios de atención, especialmente en la prestación de servicios. Esta tendencia produjo una *remercantilización* de los derechos sociales, que a menudo no implicó necesariamente menos que un simple tipo diferente de intervención estatal, en los controles administrativos y en la regularización reforzada. El papel de las Ciencias Sociales y Humanidades en relación con esta transformación consiste en investigar la capacidad del estado para ajustarse a esta nueva forma de intervención y los efectos de estas tendencias en la repercusión de esos esquemas de política social sobre diferentes poblaciones. Estas reformas suelen apelar a la introducción de la libertad de elección, el mérito o la activación de los trabajadores, y debe prestarse una atención significativa a analizar estas reformas así como sus efectos sobre

los objetivos de redistribución de la riqueza, igualdad de oportunidades y equidad que tradicionalmente habían caracterizado al modelo social europeo.

Las reformas del modelo social europeo de la última década implicaron a menudo recortes de fondos o el endurecimiento de las condiciones para acceder a las prestaciones o servicios, pero con estas medidas restrictivas la ampliación de ciertos derechos sociales también afectó a grupos específicos que hasta la fecha estaban peor protegidos o en ocasiones no estaban directamente cubiertos por el sistema con anterioridad. Así pues, los países europeos también pusieron en marcha nuevas políticas de protección para grupos específicos como las familias, los niños, las mujeres, los parados de larga duración, los ancianos y los económicamente desfavorecidos, a menudo dentro del marco epistemológico general de la atención a los nuevos riesgos sociales. Los estudios para evaluar la eficacia de estas nuevas políticas sociales son fundamentales para estimar su alcance y repercusión reales.

Por último, la transformación de las administraciones públicas en la forma de distribuir las responsabilidades entre ellas dentro de estructuras de gobernanza más complejas con varios niveles, con la introducción de nuevas formas de reordenación horizontal de tareas y funciones, requiere un análisis más profundo. Así, la complejidad de la organización vertical del reparto de responsabilidades entre los distintos niveles de las administraciones públicas en países descentralizados como España constituye una dimensión clave para entender el funcionamiento de las políticas sociales y sus efectos sobre los distintos sectores de la población. Asimismo, la creciente introducción de servicios de *ventanilla única* para la gestión de los programas de protección social (como la fusión de los servicios de atención a los desempleados, con los responsables de la prestación de asistencia social —en particular, los regímenes de renta mínima—, facilitando el acoplamiento entre las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo) puede tener efectos muy significativos en la forma en que los beneficiarios acceden a los subsidios y en cómo transitan desde la percepción de las prestaciones hasta la incorporación al mercado de trabajo.

Como señala el presente informe, el papel de las Ciencias Sociales y Humanidades en la comprensión de las lógicas básicas subyacentes, el funcionamiento y los efectos de las políticas sociales son la clave para que su diseño, implantación y efectos y consecuencias finales sean más eficaces, y los institutos de investigación del CSIC pueden desempeñar un papel importante en el cumplimiento de esta misión.

DESAFÍO | REFERENCIAS

Cox, R. H. (1998). The consequences of welfare reform: How conceptions of social rights are changing, en *Journal of Social. Policy* 27(1), 1-16.

Dolado, J., et al. (2013). Youth Labour Market Performance in Spain and its Determinants: A Micro-Level Perspective. *OECD Economics Department Working Papers*, 1039.

Greeley, A. (1989). Religious Change in America. *Harvard University Press*.

Moreno, L., Marí-Klose, P. (2013). Youth, family change and welfare arrangements. Is the South still so different? *European Societies*, 15(4), 493-513.

Saraceno, C. (1994). The ambivalent familism of the Italian welfare state. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 1(1), 60-82.

Taylor-Gooby, P. (2004). New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State. *Oxford University Press*.

RESUMEN

El patrimonio se reconoce cada vez más como un elemento clave para la cohesión social, el desarrollo socioeconómico sostenible y el bienestar de las personas. Los recursos dedicados a la conservación del patrimonio han pasado de ser considerados un gasto a ser considerados una inversión, con una alta recaudación. La industria del patrimonio ha sido parte activa de estas transformaciones en las últimas décadas, ha generado empleo, ha contribuido a la expansión mundial del turismo y se ha convertido en un codiciado signo de identidad para las comunidades políticas. Hoy no existe ningún proceso social o político que no utilice el patrimonio de alguna manera. De ahí la actualidad del tema, y la importancia de que una organización como el CSIC tenga capacidad investigadora en este campo.

DESAFÍO K

LO QUE QUEDA DEL FUTURO: SOSTENIBILIDAD A TRAVÉS DEL PATRIMONIO

Coordinadores

Felipe Criado Boado
(INCIPIT, CSIC)

Blanca Ramírez Barat
(CENIM, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

“¿Qué es el futuro si de tu pasado ya no queda nada?”

¿Os acordáis? Albert Pla, junio de 2020, himno post-COVID-19

El pasado conforma todo nuestro entorno vital, expresándose de múltiples formas. El mundo material que nos rodea, nuestras prácticas, nuestro lenguaje, pensamiento y nosotrxs mismxs, somos parte del devenir, que es continua transformación, a veces abrupta, casi siempre imperceptible. Todo cambia, y somos parte de un proceso que no se detiene: lo que ha sido, la memoria que es nuestro entorno, materializada en sitios, paisajes, arquitecturas, artefactos y restos, o idealizada en valores y símbolos, condiciona nuestra vida. Lo que es, lo que hacemos, condicionará la vida del porvenir. Seremos la memoria del futuro.

Todas las sociedades se han relacionado de una manera u otra con su propio pasado, pero han sido las potencias europeas de la edad moderna, a partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX y XX, las que, de formas distintas, llegaron a la misma conclusión: hay un conjunto de elementos y prácticas que heredamos del pasado y que queremos conservar para su uso presente y su legado a las generaciones futuras. A este conjunto de elementos se le llamó patrimonio. Como tal invento de las potencias occidentales, es una categoría histórica preñada de juegos de valor y poder, vinculados con nuestra propia experiencia histórica y con la dominación cultural de nuestra civilización sobre las

demás, que es la historia de la globalización occidental. Desde muy pronto en las actitudes culturales hacia el patrimonio se puso de manifiesto (como ejemplificó perfectamente Aloïs Riegl en su obra precursora “El culto moderno a los monumentos”, de 1903) que no había un único criterio a la hora de seleccionar aquellos bienes que debían ser salvaguardados, y que el hecho patrimonial era un proceso de negociación en el que intervenían criterios científicos, estéticos, políticos y económicos, entre otros, que cambiaban con el tiempo, igual que los bienes que se pretendían conservar y proteger.

En la actualidad no existe ningún proceso social ni político que no utilice el patrimonio de alguna forma. Los recursos destinados a la conservación del patrimonio han pasado de ser considerados un gasto, a ser considerados una inversión con un alto retorno. La industria del patrimonio ha sido parte activa en las transformaciones de las últimas décadas, ha generado empleo, ha contribuido a la expansión mundial del turismo y se ha convertido en codiciado emblema identitario por parte de las comunidades políticas. La celebración en 2018 del “Año Europeo del Patrimonio Cultural” es un ejemplo de la importancia fundamental que se le está dando al patrimonio en Europa, y el eslogan elegido “Our heritage: where the past meets the future”, demuestra la relevancia que se le otorga para la construcción del tiempo futuro.

Como parte de esta ampliación y expansión, el patrimonio ha comenzado a considerarse como un activo importante no sólo para la atracción de visitantes y, por lo tanto, para la generación de ingresos, sino como parte esencial de un desarrollo sostenible, en el que intervienen más valores aparte del económico, desde el científico al educativo. Diversas organizaciones internacionales, como ICCROM, ICOMOS, UNESCO y Europa Nostra, han destacado el papel fundamental que detenta el patrimonio para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y mejorar el futuro de las personas y del planeta.

Los elementos patrimoniales españoles inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO son de los más variados del mundo, siendo el tercer país tras Italia y China con mayor número de sitios. La Convención del Patrimonio Mundial establece la obligación de los países de “identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural [...] hasta el máximo de los recursos de que disponga, y llegado el caso, mediante la asistencia y la cooperación internacionales de que se pueda beneficiar, sobre todo en los aspectos financiero, artístico, científico y técnico” (1972). Entre los medios para ello, los países se comprometen a “desarrollar los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar

los métodos de intervención que permitan a un Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural”. De la misma forma, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, establece “la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de este patrimonio” (2003) como su principal objetivo.

Diferentes documentos estratégicos han destacado la importancia de la investigación científica y técnica para alcanzar estos objetivos. El patrimonio es reconocido cada vez más como un elemento clave en las identidades, la cohesión social, el desarrollo socioeconómico sostenible y el bienestar de las personas, destacando que las inversiones realizadas en su estudio, difusión y conservación tienen un retorno -tanto social como monetario- muy elevado. El establecimiento en 2010 de la *Joint Programming Initiative Cultural Heritage* (JPI-CH), en la que España participa desde el principio, parte del reconocimiento de que la investigación científica y técnica es un elemento fundamental para preservar, conocer y difundir el patrimonio y asegurar sus impactos positivos. En la Recomendación de la Comisión Europea sobre el establecimiento de la JPI-CH, se apunta que: “la programación conjunta de la investigación sobre el patrimonio cultural y el cambio mundial aportaría coordinación a la investigación en este ámbito, lo cual contribuiría notablemente a la construcción de un Espacio Europeo de Investigación plenamente operativo sobre la conservación del patrimonio cultural, a la vez que reforzaría el liderazgo y la competitividad de Europa en la investigación en este campo” (2010/238/EU).

De hecho, dentro del futuro programa europeo *Horizon Europe* el patrimonio cultural cobra un papel mucho más relevante que en los anteriores programas (H2020 en particular, donde era un tema transversal), como se refleja en su plan estratégico.

En el contexto español, en 2011 el Consejo de Patrimonio aprobó el Plan Nacional de Investigación en Conservación del Patrimonio Cultural (PNIC), como “herramienta de gestión y marco conceptual en el que se programan y financian las actuaciones de investigación en conservación del patrimonio”. Este documento parte del reconocimiento de la importancia de la investigación en este campo en nuestro país, el potencial de los agentes del sistema nacional de I+D+i para abordar esta cuestión, y la necesidad de coordinación de los mismos y/con las instituciones encargadas de su ejecución y financiación. En el mismo se recogen diversas prioridades agrupadas en cinco programas: conservación y medio ambiente; materiales y nuevas tecnologías de

estudio y análisis; estudio de la tecnología de los bienes culturales; economía, valor social y sostenibilidad; y puesta a punto y mejora de metodología y protocolos de conservación y restauración.

La conservación, estudio y documentación del patrimonio cultural y natural son, así mismo, mencionados en varias ocasiones en el vigente Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, y de manera muy especial en el Reto 6, donde se reconoce la interdisciplinariedad del campo y se señala específicamente el alineamiento con los principios recogidos en el PNIC.

Aunque ello no sea ajeno a la genealogía y propia historia del concepto de patrimonio (pegado, como se indicó, a la modernidad y globalización europea), Europa ocupa claramente una posición mundial de líder en el aprecio y uso del patrimonio y, sobre todo, en su estudio, investigación y, consiguientemente, en la creación y desarrollo de una ciencia del patrimonio. En este contexto regional, España debe desempeñar el rol que le corresponde en el avance de la investigación científica en patrimonio en sintonía con el liderazgo que su patrimonio tiene a escala mundial.

2. EL PATRIMONIO COMO PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El patrimonio es un ámbito privilegiado para estudiar las interacciones entre lo material y lo simbólico en su generación y desarrollo, a través de prácticas sociales que, a su vez, interaccionan con otros ámbitos de la realidad y la experiencia humanas (sea la cognición, la comunicación o la economía, por ejemplo). Esto significa que una noción abierta e inclusiva de patrimonio no tiene techo: es omniabarcante, lo es todo. O, al menos, puede llegar a ser todo. Esto puede constituir un problema práctico por su amplitud y por lo tanto dificultar la concreción de prioridades, temáticas y estrategias. Pero también es un campo de posibilidades que resalta la potencia real de los “Heritage studies”: toda la realidad humana se puede estudiar desde el patrimonio. Y toda realidad humana es susceptible de ser considerada patrimonio en un contexto cultural y social dado.

Como tantas otras categorías generadas por la modernidad occidental y exportadas al resto del mundo (desde la separación de poderes hasta el rock and roll), el patrimonio se ha generalizado y ha sido adoptado con notable éxito ya que proporciona una noción básica para construir juegos de identidad y poder, y establecer o negociar las pautas de relación entre los grupos dentro de ellas o con otras sociedades. El patrimonio traduce las tramas intangibles de

los procesos sociales: relaciones intra e intercomunitarias, de género, percepciones, formas de apropiación de recursos y bienes, de espacios o del poder. El patrimonio no es ajeno al poder, sino más bien un arma de poder, y de ahí su naturaleza conflictiva en muchos casos. Este proceso debe ser, en sí mismo, uno de los ejes de estudio del desafío: el triunfo del patrimonio como fenómeno social y su propia constitución como un proceso, en muchas ocasiones, de dominio, colonialismo y expropiación de comunidades y culturas.

Pero, aunque este fenómeno sea moderno, lo que las sociedades actuales consideramos patrimonio es resultado de siglos, incluso milenios, de interacciones de las comunidades humanas entre ellas y con su entorno. Estos procesos, complejos y diacrónicos, generan un registro diverso, que requiere una investigación cada vez más especializada, basada en aproximaciones analíticas, capaces de producir un corpus sólido de datos interconectados sólido, del que partan explicaciones e interpretaciones rigurosas en términos de procesos sociales.

Porque el patrimonio es, ante todo, un problema de investigación. La forma más inclusiva e integral de considerar ese problema y vincularlo a las dimensiones y procesos sociales relacionados, es centrarse en la cadena de valor del patrimonio cultural, esto es: el estudio de los procesos que crean en el pasado y en el presente elementos a los cuales determinados procesos de valorización cultural otorgan carácter patrimonial, lo que introduce esos bienes en la vida social y los convierte en coadyuvantes de todo tipo de usos comunitarios, que se relacionan con la tradición, las costumbres y hábitos, la lengua, la política, su instrumentación como recurso por movimientos sociales de un tipo u otro, como arma de conflicto o aglutinación, e incluso su rentabilización económica. La investigación genera conocimiento innovador sobre las sociedades del pasado y del presente, y a partir de él es posible conocer y reconocer su valor social para la sociedad de hoy y la del futuro.

Aunque formulado desde hace tiempo, el concepto de cadena de valor aplicado al patrimonio requiere una reflexión profunda que lo actualice y lo sitúe como armazón conceptual de la estrategia de investigación para el futuro. De la investigación deben nacer propuestas científicas de salvaguarda, conservación, protección, restauración o difusión, en las que el personal investigador ha de ser parte activa, junto a otros agentes sociales. Pero la investigación también debe saber reconocer estas propuestas cuando emanan desde ámbitos no académicos, y debe estar ahí para evaluar y ayudar a la emergencia de procesos de aprecio y patrimonialización de abajo-arriba.

3. LA CIENCIA DEL PATRIMONIO: UNA PROPUESTA GENERAL, INCLUSIVA Y EXIGENTE

El estudio científico del patrimonio, lo que se conoce como ciencia del patrimonio, presenta unas características singulares y un alto componente interdisciplinar. La ciencia del patrimonio se fundamenta en tres ideas clave: salvaguarda/conservación, valorización y análisis de los procesos sociales íntimamente relacionadas entre sí. El concepto “salvaguarda” se puede aplicar igualmente al patrimonio inmaterial y al natural, además del tangible. Por ejemplo, una lengua en riesgo de extinción o un ecosistema concreto pueden ser objeto de medidas que posibiliten las formas de vida que los producen. El concepto “valorización” alude a los procesos sociales (en el sentido más amplio) que generaron esa materialidad, o esa inmaterialidad, que hoy reconocemos como patrimonio; es decir, los procesos de generación de valor social que se dan en torno al patrimonio, lo que significa que el patrimonio no posee un valor intrínseco, sino que éste, en sus múltiples dimensiones (existencial, cognitiva, ética, estética, política, económica...) es construido socialmente. Aunque la noción de valor generalmente se vincula de forma preferente a la economía y al valor económico, por lo que a menudo se censura su aplicación al patrimonio, en el contexto en el que se utiliza en este texto nos referimos a la noción amplia de valor, desde luego no confundida con “precio” y más bien en el sentido que Rullani (2009: 244) otorga al proceso de creación de sentido (*process of meaning-creation*) “which is carried out in the networks and flows that connect various physical places and draws forth their recognized and sustainable differences of identity. In other words, it is an exercise of differentiation, rather an exercise in identification”.

Las cuestiones científicas que se plantean en el ámbito del patrimonio resultan especialmente complejas. El proceso de creación o ejecución, junto con las transformaciones sufridas a lo largo de su historia hacen que los objetos del patrimonio, con frecuencia, sean únicos, y ello requiere una aproximación particular a cada problema que se plantea. Además, por la doble naturaleza material e inmaterial de los bienes culturales (BBCC) y las prácticas en las que se inscriben, es necesario abordar cuestiones con origen en las ciencias humanas utilizando técnicas y herramientas científicas, en un marco que requiere la colaboración entre profesionales de muy diversas disciplinas.

La ciencia del patrimonio, cuando se enfoca desde el campo de las humanidades y las ciencias sociales, trata de resolver cuestiones relativas al origen, historia y significado de los bienes y prácticas culturales, su influencia sobre el desarrollo, y su valor y sentido para las sociedades que lo han generado, custodiado, poseído, disputado o desposeído.

Cuando lo hace desde el campo de las ciencias experimentales, la ciencia del patrimonio estudia la composición material, sistemas constructivos y la tecnología de los bienes culturales, los mecanismos de deterioro, y aborda los problemas de conservación y el desarrollo de nuevos materiales y nuevas técnicas de análisis de los mismos. Así mismo, también estudia los materiales y tecnología de forma diacrónica.

Tanto en un caso como en el otro, la digitalización supone el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas para acceder y entender nuestros activos culturales, a través del planteamiento y la verificación de hipótesis de investigación, la gestión informatizada de los datos, la virtualización 3D de los entornos patrimoniales, la generación de toda una serie de nuevos documentos y archivos, susceptibles de ser a su vez convertidos en patrimonio digital, así como un gran abanico de posibilidades para multiplicar el potencial de salvaguarda y valorización del patrimonio.

Por tanto, este desafío pretende fortalecer la relevancia de la investigación científica en patrimonio, ir siempre más allá, trascender la relevancia social que tiene a día de hoy para ser parte activa de la misma. Coadyuvar al desarrollo sostenible de la sociedad a través del patrimonio, de su diversidad de valores, de su importancia para los procesos de creación de bienestar social y del análisis de sus riesgos como campo de enfrentamiento identitario.

El patrimonio es parte de los procesos de valorización social. Esto significa que debe ser parte del empoderamiento comunitario y de articulación de la comunidad a diferentes escalas espaciales (desde lo local a lo global) y temporales (desde el pasado remoto a la memoria más reciente), así como factor de igualdad, multiculturalidad, mestizaje e hibridación. En definitiva, de diversidad. Y también puede y debe ser parte activa de las políticas de gestión y ordenación del paisaje, concepto abarcador que aglutina la doble dimensión natural y cultural del patrimonio y las proyecta hacia un horizonte de sostenibilidad y desarrollo duradero, ya desde el momento presente, como generador de oportunidades de empleo y generación de riqueza, y como medio didáctico y educativo.

4. LOS RETOS DEL PRESENTE COMO DESAFÍOS DE FUTURO

Más allá de sus efectos inmediatos, la disrupción de la COVID-19 plantea la necesidad de pensar y resolver cómo se construirá la memoria de las experiencias que, como sociedad y como individuos, estamos viviendo, lo que atañe de lleno al patrimonio: cómo el patrimonio condiciona y tiene efectos sobre

nuestras vidas, y cómo nuestras vidas cambian un entorno que mañana será memoria y patrimonio. La fuerza de esta idea la recoge perfectamente el tema del que se extrae la cita introductoria de este Desafío: el cantante no es capaz de hablar de la pandemia sin pensar en el recuerdo, en la memoria y trenzar un pliegue entre pasado y futuro; esto es lo que hace el patrimonio. Veremos un patrimonio específico de la época COVID y pronto se asistirá a procesos de ritualización, memorialización y patrimonialización.

Por otro lado, y aunque no es la primera vez que sucede en la historia, ni será la última, el actual abatimiento de estatuas (mayo y junio de 2020) como consecuencia de la toma de conciencia de la injusticia social sistémica que ha producido nuestra civilización sobre todas las demás, y sobre sus sectores dependientes, nos devuelve a viejas dudas patrimoniales no resueltas: ¿qué queremos y debemos proteger del viento de la historia?

Parecen cosas diferentes, pues en el primer caso un proceso destructivo requiere la construcción del imaginario social que lo represente para el futuro, y en el segundo un proceso constructivo en el pasado es destruido en el presente para desafiar la memoria dominante. Pero lo que es común a ambos es ser procesos que construyen memoria y lo hacen a partir de elementos que representan valores sociales y procesos históricos. Somos el resultado de lo que fuimos, y seremos el producto de lo que somos. El patrimonio no puede congelar el devenir, pero la ciencia del patrimonio sí puede ayudarnos a entenderlo, gestionarlo y orientarlo.

No puede haber mejor forma de actualizar la importancia crítica del patrimonio en nuestras sociedades. Ambos fenómenos recientes (aún en marcha, y lo estarán por un tiempo) nos recuerdan la naturaleza compleja, siempre presente y cada vez más conflictiva del patrimonio cultural. Nos permiten mostrar la relación del patrimonio con la sociedad y la vida, con los grupos y las personas, nos recuerdan su importancia para constituir aspectos esenciales de las identidades y la historicidad, y nos alertan sobre la relevancia de estudiar el patrimonio en todas sus dimensiones científicas, para lo cual es necesario partir de las condiciones que hacen posible desde la existencia de algo llamado patrimonio hasta el hecho de que todo pueda ser considerado como tal.

Por tanto, el desafío al que se enfrenta la investigación en patrimonio en estos momentos es, de entrada, un regreso al origen: ¿Qué queremos y debemos seleccionar para su salvaguarda, y por qué? ¿Cuándo y dónde? ¿Para quién hacerlo y quién debe participar? Al mismo tiempo, el haber llegado hasta aquí,

la memoria que somos, nos genera nuevas preguntas en relación al patrimonio del futuro, a las que debemos dar respuesta: ¿Qué papel debemos jugar los expertos en un proceso que ha dejado de ser nuestra competencia exclusiva? ¿Cómo abordamos conjuntamente desde la investigación la materialidad de nuestro mundo y de nosotros mismos con la dimensión simbólica e imaginaria, las relaciones sociales, la cultura y el lenguaje, que son las instancias en las que se genera la necesidad de salvaguardar determinadas entidades? ¿Cómo lo hacemos cuando estas relaciones tienen lugar de forma cada vez más amplia en un espacio digital que es, por definición, más energía que materia?

Son preguntas universales que trascienden las fronteras: pero, sin dejar de trabajar en marcos científicos internacionales, tampoco debemos desatender la responsabilidad hacia nuestro entorno más próximo, donde podemos actuar e interactuar, como científico/as y ciudadano/as, con mayor eficiencia e intensidad.

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Desde el punto de vista del contexto social, se dan una serie de oportunidades y amenazas para el emprendimiento del desafío de crear una ciencia del patrimonio orientada a la sostenibilidad.

5.1. Colaboración europea

En el contexto de la creación del Espacio Europeo de Investigación, existen numerosas iniciativas europeas de coordinación en políticas científicas, grandes proyectos e infraestructuras científicas compartidas, también en el área de las ciencias del patrimonio. Además del citado JPI-CH, la participación española en la futura Infraestructura Europea de Investigación para la Ciencia del Patrimonio (E-RIHS) es una oportunidad para impulsar el desarrollo de la investigación en ciencia del patrimonio y alinearnos con la investigación de excelencia en este campo en un Nivel europeo y mundial.

La amenaza es cualquier movimiento contrario a estas iniciativas europeas conjuntas, y el aislamiento de las estrategias de investigación de los diferentes estados miembros. El actual momento político supone cierto riesgo de involución en este sentido.

5.2. Valorización del patrimonio

El patrimonio suele ser percibido por las personas y los grupos sociales como algo propio. Esto supone, en cierto sentido, una oportunidad, dada la valoración

positiva, el prestigio y el interés social por los bienes objeto de nuestro estudio. Pero también una amenaza, pues la cotidianeidad y cercanía de los bienes culturales dificulta a veces la apreciación de su fragilidad y la necesidad de avanzar en su conocimiento y salvaguarda. Además, asociados al fenómeno patrimonial se dan una serie de riesgos sociales que tienen que ver con su sobreexplotación, mercantilización y banalización, pero también con procesos de dominación. Desde un punto de vista objetual, el patrimonio sería una víctima de estos procesos; pero, desde un punto de vista más procesual, el patrimonio es parte de estos procesos de valorización, no siempre deseados.

Posiblemente el sector económico donde la presencia del patrimonio se manifiesta de manera más evidente es el del turismo cultural. En un país como el nuestro, en el que el turismo es uno de los principales sectores económicos, el patrimonio desempeña sin duda un importante papel. Sin embargo, no existe una conciencia en este sector de la importancia de la investigación en el campo, ya que sus efectos, tanto positivos como negativos, son indirectos y difíciles de percibir a corto plazo, como se ha mencionado en el apartado anterior. Por eso es fundamental que la ciencia del patrimonio incorpore como parte de su estrategia científica los aspectos relativos a la valorización patrimonial, tanto como a la salvaguarda.

5.3. Contexto actual y anticipación

La crisis generada por la COVID-19 ha tenido un impacto muy negativo en el acceso al patrimonio, con el cierre de museos, archivos y otras instituciones culturales, aunque ha promovido un impulso notable en el desarrollo de nuevas formas de acceso y difusión (volvemos más abajo sobre esto). Instituciones internacionales como ICCROM e ICOM, o nacionales como el IPCE han generado y recopilado información y consejos para la actuación inmediata, pero el impacto posterior es una incógnita. Los cambios que se produzcan en aspectos como la disminución o cambio de patrones del turismo, la disponibilidad de fondos para conservación y estudio del patrimonio, la valorización social del patrimonio frente a otros bienes, o el papel que el mismo puede desarrollar para la resiliencia de las sociedades son, en este momento, inciertos.

Aun así, es necesario seguir trabajando para visibilizar socialmente la investigación en ciencia del patrimonio y ello ofrece una oportunidad de acercamiento entre ciencia y sociedad.

Por otro lado, es necesario profundizar en una línea todavía incipiente, pero que viene dada por la introducción de la perspectiva crítica de los estudios de patrimonio en el mundo de la gestión: es decir, la aplicación del conocimiento crítico generado. De cara al trabajo en el ámbito de la valorización del patrimonio, es necesario asumir la responsabilidad: ante la generalización de problemas asociados a la masificación turística y la proliferación de circuitos turístico-culturales (gentrificación, turismofobia, trivialización de la visita...), hay que investigar en los efectos sociales a largo plazo que una gestión crítica del patrimonio también puede llegar a tener.

Por último, también la actual crisis generada por la COVID-19, amplificada por el cuestionamiento radical que supone de la *normalidad* asumida hasta ahora y legitimada por haber evidenciado todo lo que no funciona, funcionaba mal o requería ser actualizado (también en patrimonio, al igual que ocurre en muchos otros campos), es sin embargo una oportunidad para la reflexión sobre qué modelos de gestión patrimonial pueden resultar más adecuados para diversificar, especializar, espacializar (*territorializar*), estacionalizar y graduar el impacto de los flujos turísticos. Pero también lo es para coadyuvar a un urgente reequilibrio territorial que debe mirar hacia el pasado, hacia formas sostenibles de gestión de los recursos y el territorio, y hacia el futuro, tratando de rellenar los espacios que la Modernidad tardía vació, pero de forma ordenada y científicamente informada. En este ámbito también tiene que hacerse presente y relevante la investigación en patrimonio: el patrimonio no es solo un elemento de atracción para el turismo, sino un motor de otras actividades (por ejemplo, el sector primario), factor de estabilización demográfica en zonas rurales, activo en la ordenación territorial o en programas conjuntos de preservación/acceso a lo cultural y lo natural como parte de los mismos procesos.

La crisis de la COVID-19 ha tenido un efecto claro en el patrimonio, que además será persistente, como diferentes organizaciones internacionales han reconocido en diferentes declaraciones y acciones (Europa Nostra, ICOMOS, Historic England, European Association of Archaeologists, ...) y en la acción conjunta de más de dos docenas de organizaciones que el 19 de mayo de 2020 dirigieron al Ministro de Cultura y Deporte un escrito unitario sobre la COVID-19 y cómo éste compromete la viabilidad de muchas instituciones museísticas y bienes patrimoniales, empresas y proyectos culturales. El impacto económico en el sector es dramático y requerirá estudios empíricos e innovadores para fundar nuevos modelos de gestión. Trascender ese impacto

implicará viabilizar nuevas formas de disfrute y acceso al patrimonio (régimen de visitas, etc.) que, desde una perspectiva positiva, serán una oportunidad para que al tiempo que se cumpla con las medidas de seguridad sanitaria vigentes en cada momento, se pueda redistribuir y desconcentrar la demanda de visitas y uso del patrimonio entre un vasto universo de sitios y no sólo limitándose a los “buques insignia” patrimoniales, algo que de paso será sinérgico con las estrategias frente al vaciamiento rural y la prioridad que pone en la agenda pública el debate sobre la España vaciada.

Pero esos dos campos de acción son, aunque urgentes, sólo algunos de los posibles. Será igualmente necesario pensar cómo desde el patrimonio se documenta y valora la construcción de la memoria de esta crisis y cómo se refleja ella en futuros procesos de memorialización. Incluso desde el patrimonio y desde el *expertise* aportado por el conocimiento de las formas tradiciones de luto y dolor, se podrán entender mejor los efectos sociales y psicológicos del truncamiento del duelo, o la emergencia de formas sustitutivas del duelo inexistente.

La crisis de la COVID-19 no viene sola. Al golpear al mundo cuando éste no se había aún recuperado de los efectos socio-económicos y político-organizativos de la Gran Recesión, al golpear a una sociedad tensionada por la inequidad creciente en el reparto de la renta y concentración de ésta en un porcentaje reducido de privilegiados (uno de los grandes efectos de la Gran R), y al golpear sobre estructuras sociales debilitadas por los procesos anteriores, la situación post-COVID-19 se está caracterizando por el incremento sustantivo de tensiones sociales en todas partes. Los movimientos BlackLivesMatters y que denuncian la injusticia social como inherente y sistémica a las sociedades capitalistas, tienen también su reflejo en el patrimonio y en procesos de construcción-destrucción de patrimonio (verbigracia, el abatimiento de estatuas, etc.). Una vez más afloran aquí ejemplos de cómo el patrimonio va vinculado a la construcción de la memoria del poder y cómo su cuestionamiento es el testimonio de las reclamaciones y las luchas de grupos alternativos.

Lo anterior converge con la asignatura pendiente que España tiene con su memoria histórica y su autorrepresentación como Estado. Las políticas de la memoria histórica van (o iban) a ser una de las prioridades de los próximos años y particularmente de esta legislatura, son objeto de un Desafío concreto, pero en la medida que involucran creación, uso y actos de valoración (positivos o negativos) de elementos patrimoniales, son también un campo de estudio urgente para la ciencia del patrimonio.

6. RETOS FUTUROS

Acotado el dominio interdisciplinar y los desafíos genéricos, realizado un análisis de las condiciones de la investigación en ciencia del patrimonio y del entorno, es necesario perfilar con más nitidez el reto al que se enfrenta esta estrategia en el horizonte de la sostenibilidad, sus características fundamentales, lo que nos permitirá especificar los retos de investigación en los cuales se concretaría.

6.1. Reto estratégico

El reto principal e inmediato es el fortalecimiento de la ciencia del patrimonio como estrategia de investigación, lo que se traduce en el recurso a la cadena de valor del patrimonio como armazón conceptual de la misma. Esta cadena, que liga los procesos básicos de generación y socialización de conocimiento (registro, análisis, interpretación, intervención, gestión, circulación y valorización) con el entorno en todas sus fases (interacción entre los agentes científicos y los agentes sociales en toda su variedad) es la condición de posibilidad para el reto futuro: la emergencia de un patrimonio abierto y más rico, plural y relevante. Por lo tanto, lo que posibilita que el patrimonio sea un medio que contribuya a los Objetivos del Desarrollo Sostenible en diferente medida.

Para ello, un desafío principal es la necesidad de un *fortalecimiento de la interdisciplinariedad* y de la colaboración entre disciplinas, no sólo en los términos en los que ya hay una trayectoria consolidada (proyectos y redes), sino en el propio diseño de líneas de investigación esencialmente interdisciplinares, con proyectos diferentes, pero complementarios, y con el apoyo a carreras científicas de jóvenes investigadores de formación interdisciplinar. Esto debe producirse, además, en un marco internacional donde el CSIC puede y debe jugar un papel de liderazgo. Aunque la variedad disciplinar es importante, el nexo principal sobre el que hay que trabajar es el que pretende salvar las distancias entre las ciencias experimentales y las ciencias sociales y humanas.

Otro desafío es la *inmersión reflexiva en el entorno digital*, en términos de producción, gestión y socialización del conocimiento. Aunque esto ya es una realidad, es todo un desafío hacer que las humanidades digitales sean algo más que un compendio de disciplinas humanísticas y sociales que manejan herramientas de software. El potencial que implica el desafío digital en términos de acción investigadora va más allá de esto: abre un mundo de posibles líneas de trabajo en las que, además, la factibilidad de la interdisciplinariedad a la que antes aludimos se multiplica. Por otro lado, la capacidad de manejo y

generación de datos que proporciona el entorno digital obliga a una reflexión profunda sobre sus condiciones de uso, así como sobre las implicaciones éticas del mismo. Por último, la digitalización multiplica enormemente las posibilidades de integrar al ámbito de lo patrimonial (en términos de registro y salvaguarda) las entidades intangibles que tanto ha costado atraer: las prácticas sociales, las expresiones orales y artísticas o las lenguas en sus diferentes modos de expresión y en su evolución.

La dimensión digital del mundo que viene no anula la persistencia de una realidad física que, en buena medida, está siendo modificada por aquella. La aplicación de tecnologías avanzadas para el *diseño de una nueva materialidad* es otro de los desafíos a los que se enfrenta la ciencia del patrimonio: desde el campo de las ciencias experimentales se contribuye a la generación de materiales más sostenibles tanto en su producción como en su utilización, algo que es primordial de cara a una gestión y salvaguarda de la materialidad de una parte del conjunto de los bienes culturales y patrimoniales.

Del mismo modo, ciencias experimentales, sociales y humanas deben confluir en el *diseño de una nueva territorialidad*: esto implica trabajar en el ámbito de la espacialidad, lo cual es nuevamente posibilitado, en parte, por la digitalización. Esta nueva territorialidad también enraíza en la necesidad de reconfigurar los lazos de sociabilidad intra e intercomunitarios. El modelo moderno que segrega lo rural y lo urbano, y subordina el primero al segundo, con resultados tan dramáticos en nuestro país, es un modelo en revisión y la ciencia del patrimonio debe tener mucho que aportar para que esto se vehicule en un proceso de reordenamiento. Esencialmente desde la geografía, la sociología y la antropología, pero también desde una arqueología que puede indagar en la historicidad de los modos de ocupación del territorio y de espacialización de las relaciones sociales, la investigación sienta las bases para un patrimonio pensado en términos de sostenibilidad: repensar el concepto de turismo cultural en términos de oferta, demanda y mediación.

Esta estrategia científica apunta hacia la necesidad de contribuir, en ese horizonte de sostenibilidad, a la *emergencia de una nueva ciudadanía*, en el sentido de un modelo alternativo de sociabilidad, que trate de gestionar los problemas reales, locales y globales, de un mundo en el cual los conflictos derivados de las periódicas crisis humanas y económicas siguen creciendo. El patrimonio no es una entidad neutra, ni mucho menos intrínsecamente positiva, en este mundo; es parte del mismo. Por lo tanto, el desafío es que el patrimonio pueda funcionar como medio de transformación de la realidad: esto es lo que

justifica una ciencia del patrimonio en última instancia, su relevancia social. Nuestro papel como científicas y científicos no se limita a estudiar y salvaguardar el patrimonio porque sí, sino porque éste es socialmente valioso. Pero este valor social es plural, y no es homogéneo ni estable. Los estudios de patrimonio ayudan a entender por qué el patrimonio es un campo de disputa, y por tanto nos aportan lucidez crítica sobre los procesos de los cuales nosotros mismos somos parte. En este ámbito es especialmente significativa la aportación de los estudios de género y el enfoque feminista: despatriarcalizar el patrimonio como medio para despatriarcalizar la sociedad. La ciencia del patrimonio debe contribuir, entonces, a incrementar la conciencia crítica de la ciudadanía (no sólo a través de narrativas sino de la propia experiencia del acceso a la entidad o evento), así como a generar formas alternativas de relación social, basadas en la igualdad, la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad, entendida como respeto a la memoria de los que nos precedieron, la que nosotros mismos encarnamos, y como respeto a la dignidad vital de los que nos sucederán.

6.2 Retos específicos (RE)

A modo de ejemplificación, reflejamos aquí algunas de las líneas de trabajo, entendidas como restos específicos que deberían conformar este desafío, en línea con los desafíos globales que hemos expresado más arriba. Estas líneas, en las que ya se viene avanzando, sin duda seguirán siendo relevantes en los próximos años, y darán lugar a nuevos retos que pueden ser abordados por el CSIC. Esta sección se ha organizado describiendo primero los retos específicos más generales que tienen que ver con los retos relativos a cambios en los procesos sociales a los más concretos sobre la conservación y formas de registro y documentación del patrimonio.

Retos relativos a cambios en los procesos sociales

RE.1. Territorio, paisaje y patrimonio

La investigación básica en procesos de cambio social y cambio tecnológico, y la producción de conocimiento histórico a través de diversas fuentes documentales es fundamental para generar las narrativas y los contenidos que nutren de significado al patrimonio y sus múltiples significantes. En tanto medio transmisor de este conocimiento, el patrimonio es un vehículo de importancia máxima a la hora de proveer a la sociedad actual de las redes de significado necesarias para comprender los fenómenos de cambio acelerado en los que nos hallamos inmersos, así como para ayudar a gestionar los

procesos de cambio tanto a nivel simbólico (identidades colectivas) como territorial. El conocimiento sobre el pasado es necesario para poder gestionar la realidad presente, para contextualizar el tiempo y el espacio actuales y para proyectarlos hacia un horizonte de sostenibilidad.

La investigación arqueológica sobre paisajes, y su reconocimiento patrimonial, han sido y son generadores de recursos comunitarios y duraderos en áreas rurales. Se trata de recursos alternativos tanto a actividades agresivas sobre el entorno (como pueden ser las extractivas o industriales) como al abandono del mundo rural, ya que inciden directamente en desarrollo del sector de servicios, pero también pueden y deben ser un incentivo para el desarrollo del sector primario (ver párrafo anterior) estimulando su recuperación. Ello nos lleva a converger activamente con los gobiernos regionales y locales, responsables de la gestión patrimonial, y con las comunidades locales, asociaciones, emprendedores y demás actores locales en los que reside la viabilidad de un paisaje vivo.

Ejemplos: Estudio de la minería prehistórica y antigua como campo de investigación que permite entender los efectos de la antropización del medio en diferentes tiempos históricos, desde el acontecimiento concreto hasta la larga duración (lo que incluye la patrimonialización de los paisajes mineros prehistóricos); en diferentes escalas territoriales, desde la zona más inmediata (área de extracción) hasta la larga distancia (diferentes formas de contaminación); y en diferentes planos sociales, desde la organización de los procesos de trabajo hasta la ideología de la explotación. Hay varios grupos del CSIC trabajando en este reto, por ejemplo, Arqueología medioambiental, Estructura Social y territorio. Arqueología del paisaje, Paleoeconomía y subsistencia de las sociedades preindustriales, Prehistoria social y económica, o Sociedades Ibéricas de la Edad del Hierro.

RE.2. Estudio crítico de los procesos de patrimonialización

El objetivo de este reto es estudiar los procesos de formación y uso del patrimonio en el presente y el pasado. Hasta hace poco, y todavía muchos sectores sociales y académicos lo comparten, se ha mantenido una visión del patrimonio como algo intrínsecamente positivo, y no como un campo social en el que se despliegan valores e intereses, muchas veces contrapuestos, y cuyos efectos no siempre son positivos para la comunidad, o para los sectores más vulnerables de ella. Para poder construir estrategias de valorización patrimonial sostenibles e innovadoras es necesario partir de investigaciones y análisis críticos: es decir, de la producción de conocimiento crítico sobre cómo las sociedades se apropian y usan el patrimonio.

Ejemplo: Decolonizing the Archive: Memory and identity The purpose of this line is to rescue the whole range of semantic and instrumental potentialities of the colonial archive, recovering its critical genealogy and clearing its praxis of the theoretical and epistemic prejudices with which it has been taxed.

RE.3. Innovación social y patrimonio cultural

El objetivo es el desarrollo de acciones para una valorización social del patrimonio del que se benefician las comunidades que lo poseen y el conjunto de la ciudadanía, como elemento integrador y parte de la identidad nacional y europea. Dentro de esa línea se está iniciando actualmente una nueva dimensión de puesta en valor hacia la sociedad: la ciencia ciudadana. Desarrollar una metodología de trabajo optimizada y establecer redes de ciencia ciudadana permitiría explotar al máximo este fenómeno tanto para contribuir a la creación de conocimiento como para visibilizar y aumentar la valoración tanto de la investigación científica como del patrimonio. En esta línea también podría considerarse hacer partícipe a la sociedad, desde las premisas del conocimiento científico, en la definición de las estrategias de la investigación sobre el patrimonio e incluso en los procesos de estudio, por ejemplo, en las fases de recopilación de datos o de vigilancia y seguimiento, en la línea de los programas SwafS de Ciencia con y para la Sociedad de los planes nacionales y europeos.

Por una parte, la investigación no se justifica sin una proyección social que contribuya a la valoración y explotación del patrimonio. Por otra, dadas las exigencias de conservación para las futuras generaciones del patrimonio en general, y del paisaje en particular, la rentabilidad económica debe estar tamizada por la propia rentabilidad social. Se trata de un aspecto conflictivo, que coloca al patrimonio en una situación ambigua en la que debe buscarse un equilibrio entre su valor social y su valor económico. Ese equilibrio es la base de su condición de recurso comunitario y duradero. En todo caso, la innovación social debe ponerse al servicio de la generación de recursos, ante todo sociales (incluyendo patrimoniales), que permitan el aumento de la calidad de vida.

Ejemplo: Prácticas de conservación en comunidad: el objetivo es diseñar e implementar prácticas de gestión de espacios patrimoniales basadas en la generación de conocimiento colaborativo y en principios de ciencia abierta, con el objetivo de alcanzar un grado de implicación óptimo en las estrategias de conservación preventiva.

RE.4. Patrimonio, lenguas y comunicación

El estudio del lenguaje y de la lengua desde el punto de vista patrimonial es una prioridad en casi todas las normativas patrimoniales vigentes, ya que se considera a las lenguas como bienes patrimoniales. El gran desafío para un horizonte de sostenibilidad es articular una estrategia de investigación y salvaguarda de las lenguas y sus variantes que integre la dimensión inmanente al sistema lingüístico con sus distintas manifestaciones históricas, geográficas, sociales o estilística.

Ejemplo: Relaciones entre las lenguas y las variedades lingüísticas: La investigación de las relaciones entre las lenguas y las variedades lingüísticas ayuda a entender lo que unifica a las lenguas y lo que las diferencia. Además, una visión desde la lingüística permite distinguir los contenidos ideológicos implícitos en determinados discursos de la sociedad que utiliza las lenguas como armas para sus intereses identitarios.

*Retos relativos a cambios en los registros, formas de documentación y materiales**RE.5. Desarrollo y aplicación de técnicas no destructivas de análisis*

El desarrollo y aplicación de técnicas no destructivas o no invasivas que proporcionen información sobre el bien cultural sin dañar o modificar el objeto. En este aspecto, es especialmente relevante hacer hincapié en las técnicas de evaluación in situ, que permitan estudiar objetos que por diferentes motivos no pueden ser trasladados al laboratorio, y en el desarrollo de técnicas de diagnóstico que proporcionen información sobre el estado de conservación de los materiales o del BBCC en su conjunto. Estas técnicas se pueden aplicar a todo tipo de BBCC en modo remote sensing desde la escala del objeto, a la del yacimiento o la de unidades territoriales.

Ejemplos: Avances tecnológicos en marcha hacen posible la utilización de equipos compactos e híbridos en los que se combinan técnicas complementarias, y que permiten emprender campañas multi-analíticas de BBCC con un único instrumento, en ocasiones portátil (por ejemplo, equipo portátil de espectroscopía de impedancia electroquímica o instrumento que combina 3 modalidades de espectroscopías láser). Otro ejemplo es el desarrollo de infraestructuras de datos espaciales (IDE) y, en especial, de IDEARQ (Infraestructura de datos espaciales en investigación arqueológica), con la cual la investigación del patrimonio arqueológico desde un enfoque espacial tiene una herramienta muy potente.

RE.6. Avances en conservación preventiva

Avances en conservación preventiva, incluyendo sistemas de monitorización y el desarrollo de modelos matemáticos de predicción y ecuaciones dosis-respuesta a partir de datos a largo plazo. Uno de los problemas de la ciencia actual es la limitación temporal de los proyectos (3 años, de manera habitual) que impide el desarrollo de proyectos ambiciosos a largo plazo, que por la naturaleza de los bienes estudiados son muy importantes en el caso del patrimonio. Por ello hay que recurrir a ensayos acelerados, cuyos resultados no siempre son bien interpretados. En este aspecto resulta de gran importancia la identificación y predicción de los problemas derivados del cambio climático, la aparición de nuevos contaminantes, desarrollo del conocimiento de las interacciones de los mismos con los materiales de los BBCC, etc. En cuanto al desarrollo de sistemas de monitorización y análisis, hay que considerar el empleo de herramientas digitales, inteligencia artificial, aplicaciones móviles etc. para seguimiento y diagnóstico.

En otra escala, el mantenimiento de usos de suelo y actividades tradicionales es una excelente forma de conservación preventiva del patrimonio en muchas ocasiones, en especial en medios rurales.

Ejemplo: New techniques to study in situ deterioration of the underwater heritage caused by new agents of deterioration: i.e. fuels, plastics. The emergence of new pollutants in the seas requires the use of new techniques to study the deterioration of underwater heritage.

RE.7. Desarrollo de nuevos materiales

El desarrollo de nuevos materiales para la conservación y restauración, compatibles con los existentes y que no aceleren su deterioro, con especial atención al empleo de productos no tóxicos y materiales sostenibles y durables o incluso nanomateriales. En este reto uno de los aspectos más importantes es el estudio de la interacción entre el material nuevo y el antiguo, con especial atención a su evolución a largo plazo. Este desarrollo es fundamental para coadyuvar a una conservación sostenible de los BBCC y a una mayor accesibilidad de los mismos a la ciudadanía.

Ejemplo: Design of new sustainable lime based repair mortars. Use of waste as a source of pozzolanic material and design of lime mortars. The process of obtaining the lime involves CO₂ emissions; one way of reducing this is to use waste without carbonates, so it is necessary to study the behaviour of these “new materials”.

RE.8. Estandarización y gestión de datos

La estandarización tanto metodológica como en los datos, que favorezcan el acceso y difusión del conocimiento y el intercambio de la información sobre el patrimonio cultural, en línea con los planteamientos actuales de Ciencia Abierta, cumpliendo con los criterios FAIR. La estandarización y la interoperabilidad de los datos supone un reto con diferentes vertientes. Por un lado, hay que considerar la normalización metodológica en la realización de medidas y ensayos de laboratorio, definición de protocolos etc. que permitan obtener datos comparables entre diferentes grupos y técnicas, teniendo en cuenta que en muchos casos la instrumentación y metodología que se emplean no son estándares, sino que han sido desarrolladas específicamente para patrimonio. Por otra parte, están la estandarización y gestión de datos en el campo de las humanidades digitales. La heterogeneidad de los datos científicos y documentales que se manejan en este campo supone un reto para su definición y gestión eficiente. Finalmente debe facilitarse la posibilidad de recoger en normativas europeas los ensayos y metodologías que se aplican.

Ejemplo: Tecnologías semánticas para patrimonio cultural: El objetivo es crear, seleccionar, desarrollar, analizar, validar, demostrar y diseminar las tecnologías necesarias para la construcción de significado en torno a la información que se genera y maneja durante los trabajos de investigación y gestión del patrimonio cultural.

RE.9. Protocolos de gestión del material patrimonial

El patrimonio -tanto en España como en otros países- se conserva en manos de instituciones públicas y privadas, incluyendo al propio CSIC. En la mayoría de los casos, estas instituciones necesitan y buscan poner en valor su material lo que, muy a menudo precisa de una metodología de intervención, gestión y conservación del patrimonio que va de la mano de una investigación científica multidisciplinar. De hecho, es preciso que desde el CSIC se pueda ofrecer un análisis holístico del patrimonio de esas instituciones, formando, manteniendo y afianzando un protocolo de gestión que proporcione a esas instituciones la confianza y a la vez el prestigio de la investigación científica. La existencia de este protocolo, además, podría poner en marcha, de forma tutorizada, los procesos de conservación y restauración del patrimonio, no ya en manos de los investigadores, sino de la mano y financiación de las Comunidades Autónomas interesadas en su preservación. Finalmente, este protocolo debe incluir un amplio espacio al esfuerzo y dinamización de la transferencia del conocimiento

que deben realizar, igualmente, las instituciones propietarias, tomando como base y fuente principal los resultados de la investigación sobre el patrimonio.

Ejemplo: Protocolo de gestión del patrimonio árabe escrito. El objetivo es proponer y revisar un modelo de gestión protocolizada entre las instituciones que guardan los documentos y los investigadores implicados, para la caracterización y restauración material de las colecciones, así como un estudio histórico-cultural de las mismas.

7. RESUMEN / INFORME EJECUTIVO

El patrimonio es reconocido cada vez más como un elemento clave para la cohesión social, el desarrollo socioeconómico sostenible y el bienestar de las personas en diferentes documentos estratégicos nacionales e internacionales. Por eso, la investigación científica y técnica en este ámbito resulta fundamental; en especial en un país como el nuestro, que posee uno de los patrimonios más ricos y diversos del mundo.

El estudio científico del patrimonio, o *ciencia del patrimonio*, es un campo complejo y que requiere la colaboración entre profesionales de muy diversas disciplinas como lo demuestra la multiplicidad de especialistas del CSIC centrados en este problema de investigación, muchas veces interactuando entre sí: Archivística, Arqueología, Arquitectura, Antropología, Astrofísica, Biblioteconomía, Ciencias de Materiales, Edafología, Filología, Física, Geoquímica, Geología, Historia del Arte, Historia, Ingeniería, Lingüística, Literatura, Museología, Química o Sociología. Esta característica interdisciplinar es una de las mayores dificultades que presenta, tanto en su desarrollo como en su reconocimiento. Dada la tradicional división existente entre las ciencias humanas y las ciencias experimentales a la hora de definir prioridades, distribuir recursos, etc., las personas que investigan en ciencia del patrimonio a menudo se encuentran en desventaja en cualquiera de los dos campos. Afortunadamente, este aspecto ha mejorado en los últimos tiempos y a nivel nacional el patrimonio aparece en los planes de investigación como un elemento transversal en muchos instrumentos y convocatorias.

Por otra parte, el impacto de la investigación en ciencia del patrimonio resulta poco visible para la sociedad. Aunque el volumen del sector de las industrias culturales relacionadas con el patrimonio es muy grande, su estructura es muy dispersa y carece de grandes empresas. En este contexto, el impacto económico de la investigación es fundamentalmente indirecto, y difícil de

cuantificar, lo que no contribuye a su visibilidad. A pesar de ello en los últimos años ha venido creciendo de manera importante la conciencia sobre el valor del patrimonio cultural y natural como elemento identitario fundamental de las personas y los distintos grupos sociales, además de un activo importante para el desarrollo económico sostenible.

La ciencia del patrimonio se ha orientado recientemente hacia una serie de cuestiones clave, que sin duda seguirán siendo relevantes en un futuro próximo y darán lugar a nuevos retos:

- avances en *territorio, paisaje y patrimonio*, a partir del conocimiento histórico hasta la comprensión y transmisión del contexto espacial del patrimonio;
- el *estudio crítico de los procesos de patrimonialización*, que permite entender qué es y como se ha utilizado el patrimonio, y cómo es necesario gestionar procesos sociales complejos de los que éste forma parte;
- la investigación en *innovación social vinculada al patrimonio*, que es la valoración plena de la investigación generada, incluyendo el acercamiento de la ciudadanía a la ciencia y al conocimiento y nuevos modelos de participación como la ciencia ciudadana, en tanto se trata de implementar socialmente el modelo en el cual patrimonio y sociedad se conforman mutuamente: el patrimonio es, así, un medio para la transformación social hacia un horizonte de sostenibilidad;
- avances en *patrimonio, lenguas y comunicación*, incidiendo tanto en la esencia comunicativa del fenómeno patrimonial como en el carácter patrimonial del instrumento comunicativo por excelencia: el lenguaje;
- avances en *desarrollo y aplicación de técnicas no destructivas* o no invasivas que proporcionen información sobre el BBCC y en especial técnicas de evaluación *in situ*, que permitan estudiar objetos que por diferentes motivos no pueden ser trasladados al laboratorio;
- *avances en conservación preventiva*, incluyendo procedimientos avanzados de análisis de materiales y de remediación/restauración, sistemas de monitorización y desarrollo de modelos matemáticos de predicción largo plazo, con especial atención a la identificación y predicción de los problemas derivados del cambio climático o la aparición de nuevos contaminantes;
- *desarrollo de nuevos materiales* para la conservación basados en el empleo de productos no tóxicos y materiales sostenibles; *gestión y estandarización de metodologías, protocolos y datos*, que favorezcan el

acceso y difusión del conocimiento y el intercambio de la información sobre el patrimonio, en línea con los planteamientos actuales de Ciencia Abierta, cumpliendo con los criterios FAIR (*Findable Accessible Interoperable and Reusable*).

- *desarrollo de protocolos de gestión del material patrimonial*, por ejemplo, el material escrito en archivos y bibliotecas españolas, en su aspecto menos estudiado como es el material escrito en lenguas no europeas (árabe, griego, copto, hebreo, etc.).

RESUMEN

Los procesos de memoria —como despliegues selectivos del pasado en el presente— son un componente esencial de la configuración y desarrollo de todas las sociedades humanas y afectan áreas que van desde los gestos cotidianos hasta la política de alto nivel. El desenvolvimiento de la memoria es especialmente importante en la constitución de identidades individuales y colectivas, y su enorme potencial de cohesión solo es comparable a su gran capacidad para generar exclusión, diferencia y disputa. Es imposible comprender en profundidad los conflictos históricos o contemporáneos sin analizar los procesos de memoria en los que están o han estado inmersos. De ahí la importancia estratégica de este desafío para una institución como el CSIC.

El abordaje de la memoria y los procesos de la memoria es necesariamente interdisciplinario, ya que puede analizarse a través de los campos científicos de la neurobiología, la filosofía, la sociología, las ciencias políticas, la psicología, los estudios literarios, los estudios religiosos, los estudios culturales, la historiografía, la antropología social, la arqueología o la cultura. geografía, entre otros. Al revisar los principales anclajes históricos, teóricos y temáticos de los estudios de la memoria —con especial énfasis en la investigación basada en el CSIC—, así como sus perspectivas de futuro, este desafío se propone fomentar de manera proactiva esta interdisciplinariedad para construir un lenguaje analítico común sustancialmente más rico y más sofisticado que cada una de sus partes individuales.

DESAFÍO L

MEMORIAS MOVILIZADAS: DESPLIEGUES DEL PASADO EN EL PRESENTE Y EL FUTURO

Coordinadores

Francisco Ferrándiz Martín
(ILLA, CSIC)

Reyes Mate Rupérez
(IFS, CSIC)

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Resumen ejecutivo

1.1.1.

Los procesos de memoria –como despliegues selectivos del pasado en el presente– son un componente esencial de la configuración y desarrollo de todas las sociedades humanas, y afecta desde los gestos más cotidianos hasta las grandes políticas de Estado. El despliegue de la memoria es especialmente importante en la constitución de identidades individuales y colectivas, y su enorme potencial de cohesión solo es equiparable a su gran capacidad de generación de exclusión, diferencia y disputa. Es imposible entender en profundidad los conflictos históricos o contemporáneos sin analizar los procesos de memoria en los que están o han estado inmersos. De ahí la importancia estratégica de este desafío.

1.1.2.

La gran expansión de los estudios científicos sobre la memoria social en los últimos años responde a diversos factores. Aunque la memoria siempre ha intervenido en la comprensión y construcción del individuo y de la sociedad, los grandes genocidios del siglo XX y las violaciones de los derechos humanos que proliferan en todo el mundo multiplicaron los colectivos de víctimas de diversas formas de violencia que reclaman reconocimiento de su sufrimiento y plantean la necesidad moral de recordar las tragedias para no repetirlas. La

experiencia del Holocausto colocó la necesidad de impulsar la memoria en el centro del foco, convirtiéndola en un nuevo imperativo categórico. El campo de concentración y exterminio de Auschwitz se tornó en referente simbólico del crimen de Estado, como arquetipo y metáfora de otras tragedias pasadas y presentes. Por otro lado, el vértigo derivado de la globalización y los efectos desestructuradores asociados a la sociedad de la información y el conocimiento fomentan nuevas relaciones casi obsesivas con el pasado, como anclaje identitario ante la desterritorialización y pérdida de identidad.

1.1.3.

Entender científicamente los procesos memoriales es una tarea ineludiblemente interdisciplinar en total sintonía con los objetivos del Libro Blanco del CSIC 2020-2040. La memoria puede analizarse desde la neurobiología, la filosofía, la sociología, la ciencia política, la psicología, los estudios literarios, los estudios religiosos, los estudios culturales, la historiografía, la antropología social, la arqueología o la geografía cultural, entre otros. Este desafío propone fomentar de manera proactiva esta interdisciplinaridad para construir un lenguaje analítico común que sea sustancialmente más rico y sofisticado que cada una de sus partes.

1.1.4.

En los últimos años, el análisis de los procesos de memoria, España, en toda su complejidad, se ha convertido en un laboratorio conceptual muy importante dentro de los estudios de la memoria a nivel global. Esto subraya la importancia estratégica de promover institucionalmente este desafío.

1.1.5.

El desafío desarrolla una serie de temas transversales que afectan a las investigaciones que se están llevando a cabo en la institución, en sintonía con los temas centrales de los estudios de memoria, agrupados en los siguientes epígrafes: bases neurológicas de la memoria; la memoria como un logos-con-tiempo y categoría central del conocimiento contemporáneo; memoria e identidades colectivas; políticas de memoria; memoria y conflicto; diásporas y exilios; memorias con perspectiva de género; memorias de la ciencia; materialidades; y memorias de los espacios naturales.

1.1.6.

El desafío también sienta las bases de un giro epistémico de carácter anamnético tanto en cuestiones teóricas como prácticas, resumidos en los siguientes epígrafes: epistemologías alternativas de la memoria y el tiempo,

nuevos horizontes de la memoria digital, nuevas tecnologías de la memoria, estudios de perpetradores, memorias de la utopía y la esperanza, y distopías relacionadas con el cambio climático y las grandes pandemias (COVID-19).

1.1.7.

El amplio espectro de temáticas plasmado en la redacción del desafío demuestra que los estudios científicos de los procesos memoriales son un área de investigación de extraordinaria importancia social y con múltiples retos de futuro. Lejos de ser un área en extinción, el *boom* actual de los estudios de memoria es testimonio de que el pasado está cada vez más presente, y que el estudio de los modos en éste afecta la vida de individuos, colectivos y sociedades su análisis es una necesidad no solo científica sino también ética a la hora de entender adecuadamente tanto la solidaridad como la conflictividad social.

1.2. Bases epistemológicas y éticas de la memoria

La memoria es una categoría fundamental para el conocimiento porque es un concepto temporal y, como bien sabemos, el tiempo y el espacio son condiciones de posibilidad del conocimiento. Pero la memoria no es un tiempo cualquiera. Se refiere de entrada al pasado. Y el pasado es un rico caladero de sentido en el que todas las disciplinas echan sus redes. Por el pasado se interesan la historia, claro, pero también la antropología, la literatura, el arte, la religión, la ciencia, el psicoanálisis, la filosofía, etc. Eso explica que la memoria se diga de muchas maneras y que cada disciplina tenga su particular teoría sobre lo que sea o deje de ser memoria. Tarea de este desafío será atender toda esa pluralidad, pero también ordenarla de suerte que podamos hablar interdisciplinariamente sobre la memoria.

La memoria ha ido adquiriendo con el tiempo un capital semántico que tenemos que tener en cuenta. Si para Aristóteles la memoria era un concepto menor (propio de los “sentidos internos”) que sólo producía sentimientos (y que por tanto no superaba el ámbito de lo subjetivo y privado), hoy se nos presenta como una categoría que además de sentimiento produce conocimientos, y que además de ser privada es pública o política, como bien denotan expresiones como “memoria colectiva” o “memoria histórica”.

La memoria es del orden del conocimiento y no sólo del sentimiento porque capta una parte de la realidad que se escapa al conocimiento que se centre en hechos (como la historia o la ciencia). Lo memorable es la parte oculta de la realidad. Eso convierte a la memoria en una facultad eminentemente

hermenéutica porque no sólo se refiere al tiempo pasado sino también a la parte oculta de la realidad, que es “la historia del sufrimiento” sobre el que está construida la historia fáctica.

Pero, además, la memoria es un deber o, como diría Theodor Adorno, se nos presenta hoy como un “Nuevo Imperativo Categórico”. Este aspecto se ha puesto en evidencia a lo largo del siglo XX cuando la humanidad enfrentó la experiencia de un proyecto radical de olvido como fue el campo de exterminio de Auschwitz, que se presentó como algo impensable. Lo que se quiere decir con esa expresión es que si queremos construir la historia de una manera diferente, de suerte que la barbarie no se repita “nunca más”, hay que repensar las piezas de las que está compuesta la historia (la política, la ética, la estética, el derecho, la educación, etc.) teniendo en cuenta lo que el hombre hizo aunque no fuera capaz de pensarlo. Cuando ocurre lo impensable, lo ocurrido se convierte en lo que da que pensar. La memoria se convierte así en el principio inspirador de un nuevo programa teórico y práctico, alternativo al que rigió en el pasado y sigue rigiendo, capaz de novedad y, por tanto, de futuro.

1.3. ¿Qué significa investigar procesos memoriales?

Es indudable que los procesos de memoria son fundamentales para comprender como grupos humanos establecen de forma selectiva anclajes con el pasado y en la conformación y transformación de diferentes modalidades de comunidades de pertenencia. Del mismo modo que la memoria está en la base de sentimientos de pertenencia y comunidad, lo está también en procesos paralelos o entrelazados de exclusión, marginación y disputa. Por este motivo, entender desde el punto de vista científico el despliegue del pasado en los procesos de identidad se ha convertido en un desafío de una importancia crucial para descifrar la naturaleza de la solidaridad y el conflicto en las sociedades contemporáneas. ¿Cuál es la razón por la que las pugnas por el pasado inundan los discursos políticos, impregnan la producción cultural o capturan con tanta facilidad la atención mediática? ¿Por qué hay personajes o hechos del pasado que se activan en una determinada coyuntura histórica, y otros se marginan o silencian? ¿Cómo es posible que el pasado pueda ser interpretado desde el presente de formas tan diferentes, incluso antagónicas, por distintos colectivos sociales? ¿Cómo se rememoran episodios de violencia extrema, pero también de utopía y esperanza? ¿Cuáles son las relaciones dialécticas que se establecen entre memorias hegemónicas y subalternas? ¿Qué formas tomaron las formas memoriales en el pasado y cuáles son las que están configurándose en las sociedades contemporáneas? ¿Cuáles son las tensiones y vasos comunicantes entre

memoria e historia? ¿Qué actores sociales e instituciones las promocionan y por qué? ¿Cuáles son sus retóricas, sus claves estéticas, sus topografías, sus soportes y sus dispositivos? ¿Qué significa, cómo se originan y cómo evolucionan los monumentos, los nuevos museos memoriales, los aniversarios o las conmemoraciones? ¿Cómo escuchamos e interpretamos a los testigos? ¿Cómo interaccionan los procesos memoriales con los discursos y prácticas transnacionales de los derechos humanos? ¿Hasta qué punto las nuevas formas de organización política y sociabilidad, y el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, están transformando los modos de relación con el pasado? A la postre, ¿qué es el “pasado” y cómo se despliega y actualiza en el presente, y cómo se moviliza para anticipar futuros?

Para responder a estos interrogantes, en los últimos años ha tenido lugar una eclosión de los estudios de memoria en el ámbito académico, a medida que los procesos memoriales se han ido complejizando y diversificando en las sociedades contemporáneas y ha aumentado la necesidad de análisis para entender mejor las razones por las que el supuesto *déficit de pasado* vinculado al vértigo de los procesos globalizadores se puede estar transformando en un *superavit* o *saturación memorial*. Se trata de la emergencia de un espacio de investigación genuinamente interdisciplinar en el que, desde distintas metodologías y marcos teóricos, se estudian las relaciones que los diferentes grupos humanos establecen con el pasado, cuyas modalidades incluyen desde el recuerdo individual y familiar hasta las políticas de memoria que cultivan las ideologías nacionalistas o que conforman espacios transnacionales, como la Unión Europea, pasando por todas las instancias intermedias. Entre las disciplinas que contribuyen significativamente a este campo podemos destacar la filosofía, sociología, la ciencia política, la psicología, los estudios literarios, los estudios religiosos, la neurobiología, la antropología social o la geografía cultural. Un magnífico ejemplo del amplio espectro de temas que se están trabajando en este campo interdisciplinar se encuentra en el programa del III congreso internacional de la *Memory Studies Association*, organizado por un equipo de investigación del ILLA-CCHS-CSIC y celebrado en Madrid entre el 25 y 28 de junio de 2019.

Las tendencias mas contemporáneas en este campo de investigación tienden a concebir cada vez más la memoria social como un proceso fluido, diversificado y flexible que como un objeto estático, aunque no todos los procesos memoriales son igualmente dinámicos. En esta lógica, la memoria emigra, viaja, muta, y se intercambia en el contexto de los procesos globales, adoptando configuraciones transnacionales y circulando a través de las nuevas tecnologías

digitales. Así, los especialistas sostienen que la memoria tiene cada vez más cualidades transculturales, transgeneracionales y transmedia, y eso hace especialmente recomendables los estudios interdisciplinarios como los que se presentan en este desafío. Para poder aprehender esta creciente complejidad, interconexión y fluidez de los procesos memoriales, muchos autores contemporáneos han ido progresivamente creando un nuevo vocabulario analítico. Por colocar cronológicamente algunos ejemplos de este *giro transcultural* –o *conectivo*, según los autores interesados en la intersección de la memoria con las nuevas tecnologías— de los estudios de memoria, disponemos de un amplio repertorio de conceptos como los de *memoria colectiva*, *lugares de memoria*, *memoria comunicativa o cultural*, *memoria cosmopolita*, *memoria multidireccional*, *memoria viajera*, *postmemoria*, *mediación y remediación memorial*, *memoria palimpséstica*, *memoria agonística*, *ecomemoria*, *memoria sin fronteras*, etcétera. Para algunos autores punteros, lo que mantiene alineados conceptos aparentemente tan dispares y que provienen de diferentes disciplinas son ciertos elementos comunes: la relación de la memoria con la construcción del futuro; los discursos conmemorativos están cada vez más vinculados con los regímenes globales de los derechos humanos; el marco comparativo es clave para entender las intersecciones entre los procesos globales y locales; y el foco de análisis se desplaza de los lugares de memoria estáticos a las dinámicas y tecnologías mediante las cuales se articula la memoria en el mundo contemporáneo.

En este contexto, el desafío tiene la vocación de explorar desde las bases neurológicas de la memoria hasta sus fundamentos teóricos y filosóficos, sus modos de representación, su relación con las identidades colectivas en sus distintas escalas, sus formas de movilización política, sus modelos institucionales, sus protocolos y rituales, sus expresiones literarias y artísticas, sus tensiones y vasos comunicantes con la historia pública, la historiografía y con otros registros memoriales alternativos, sus políticas de olvido, su modulación en situaciones de diáspora y exilio, sus dimensiones espaciales y territoriales, su conexión con el trauma pero también con la utopía y la esperanza, su intersección con políticas de género, sus formas de materialidad, su derivación patrimonial, su circulación global y transnacional, o sus nuevas expresiones digitales, por poner algunos ejemplos.

2. ANTECEDENTES: ESTUDIOS DE MEMORIA EN EL CSIC (DAFO)

Los estudios de la memoria y los usos del pasado son un campo netamente interdisciplinar y sus procesos apelan a un importante número de enfoques, algunos de los cuales están bien representados en el área de ciencias sociales y humanas

del CSIC. Hay un elevado número de investigadores en el CSIC que analizan temáticas afines a este desafío, ya sea de manera intensiva o parcial. Una de las claves de la fortaleza, solidez y proyección de futuro de esta temática en el CSIC proviene de la serie de proyectos dirigidos por Reyes Mate (IFS), entre los que se encuentra *La Filosofía después del Holocausto*. Este proyecto, articulado en torno al estudio del alcance de la memoria de las víctimas, empezó en el año 1992 bajo la denominación inicial de *El judaísmo, tradición olvidada de Occidente* y tiene continuidad hoy en día. De esta investigación han resultado claves interpretativas sobre el significado de las víctimas que ha sido utilizadas teórica y prácticamente en campos tan variados como las víctimas del terrorismo, de la Guerra Civil, de la esclavitud o de los accidentes de tráfico.

En el mismo entorno de investigación también ha sido clave la dimensión memorial del proyecto *Pensar en español*, que aboga por un modo de pensar en base a explicitar las experiencias ocultadas en la lengua española, hablada por vencedores y vencidos. Resultado de ese proyecto ha sido la *Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía* (1978-2018) que consta de 34 volúmenes y en la que han participado unos 500 autores hispano y lusoparlantes. El desarrollo de esta línea convirtió al CSIC en un referente nacional e internacional en las reflexiones sobre las derivas memoriales de las principales tragedias de la modernidad. En el IFS caben destacar además los proyectos dirigidos por José Antonio Zamora sobre la memoria, el sufrimiento social, la condición de la víctima y el fracaso de la memoria ante los nuevos totalitarismos; José María González sobre la iconografía política y las imágenes de los ángeles de la memoria en Walter Benjamin; Antolín Sánchez Cuervo, sobre las relaciones entre la memoria y la experiencia del exilio, con especial atención al exilio intelectual español de 1939; Francisco Colom, sobre las plasmaciones memoriales en el espacio urbano, entendiendo las ciudades como palimpsestos que han de ser descifrados por sus habitantes; y María Jesús Santesmases, sobre la perspectiva de género en los estudios de memoria.

En el capítulo de fortalezas, otra línea relevante y consolidada de análisis de procesos memoriales tiene su sede en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología (ILLA), donde tuvo lugar un proyecto sobre la actividad memorial generada en torno a los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004, denominado *El archivo del duelo*, dirigido por Cristina Sánchez Carretero, y uno posterior sobre la cárcel de Carabanchel como lugar de memoria dirigido por Carmen Ortiz. El trabajo más contemporáneo de Ortiz sobre patrimonio cultural en las Islas Canarias también entra en intersección con este desafío, especialmente su

investigación sobre el comercio y coleccionismo de restos arqueológicos, incluyendo momias y otros restos humanos guanches. Asimismo, se ha constituido desde 2007 un grupo de investigación denominado *Subtierra* que investiga las políticas de la memoria de la Guerra Civil española, en un marco interdisciplinar y comparado, bajo la coordinación de Francisco Ferrándiz. Este proyecto analiza las culturas memoriales asociadas a las exhumaciones de fosas comunes conectadas con procesos transnacionales de los derechos humanos, así como el impacto memorial de las tecnologías forenses de rescate de cuerpos de los conflictos del pasado (*giro forense*). Este equipo organiza desde 2010 el seminario permanente internacional *Rastros y rostros de la violencia/Faces and Traces of Violence*, con más de 80 sesiones celebradas y disponible en la página web del equipo (<https://politicasdela memoria.org/>). En este contexto, se han obtenido sucesivos proyectos PIE e I+D+i, en el plano nacional, y se ha participado en proyectos Marie Curie ITN (*Sustainable Peace Building*, SPBUILD), COST (*In Search of Transcultural Memory in Europe*, ISTME) y H2020 (*Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe*, UNREST), lo que prueba el gran atractivo que este tipo de estudios tienen para las entidades de financiación nacionales e internacionales. La organización desde el ILLA (junto con la UNED y la UCM) de la III Conferencia anual de la *Memory Studies Association* en 2019 muestra la posición de liderazgo del CSIC en este desafío y señala su potencial de crecimiento. En el periodo 2008-2014, los grupos de investigación sobre memorias del Holocausto y Guerra Civil del IFS y el ILLA se unieron bajo la línea de investigación interdisciplinar *Justicia, memoria, narración y cultura* (JUSMENACU), que llevó a cabo debates, congresos internacionales y publicaciones conjuntas. De especial relevancia fue la extensa investigación que realizó Carlos Closa (IPP) en 2009 sobre cómo los países de la UE enfocan la memoria de los crímenes cometidos por regímenes totalitarios en el continente, denominada *Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States*, por encargo de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad Comisión Europea, que es la base de un informe que publicó el Consejo Europeo en 2011.

Hay otros investigadores y grupos de investigación en el CSIC que han hecho aportaciones muy relevantes a este campo, aunque los estudios de memoria no ocupen la totalidad de su programa científico. En el ámbito de la antropología del ILLA, Juan José Villarías está desarrollando investigaciones comparadas sobre los usos políticos de Tartessos en conexión con el nacionalismo andaluz y, en el continente americano, de los movimientos de revitalización y las pugnas contemporáneas entre diferentes mitos del origen del estado boliviano. Pedro

Tomé y Luis Díaz de Viana, por su lado, han llevado a cabo estudios sobre paisaje, territorio y nostalgia. En el Departamento de Literatura del ILLA, Judith Farré desarrolla un proyecto sobre la movilización transoceánica de los objetos y archivos coloniales y las relaciones de poder que se generan en sus márgenes, y Zeljko Jovenovic estudia la producción literaria sefardí en judeoespañol en la diáspora, tras la expulsión de los judíos españoles en 1492 y su asentamiento en el antiguo Imperio otomano y el norte de África. Este desafío tiene una especial proyección en el Instituto de Historia (IH). En el ámbito de la Historia de la Ciencia, autores como Leoncio López Ocón o Juan Pimentel han dedicado un importante esfuerzo a analizar la movilización u olvido coyuntural y política de determinados científicos, instituciones o hechos científicos desde el punto de vista memorial, y su inserción en el imaginario colectivo. Pimentel investiga además las relaciones entre memoria e historia, el giro espectral (la supervivencia de las imágenes y su anacronismo), y el patrimonio científico. El trabajo de Antonio Lafuente sobre la influencia de las nuevas tecnologías en la producción de conocimiento enlaza con los estudios sobre el despliegue digital de las memorias. En Estudios Medievales, Julio Escalona ha investigado los métodos de división del espacio (límites de parcelas, cotos jurisdiccionales, términos municipales) para entender el papel de la memoria local como registro del paisaje y como vía de acceso al control de la tierra en sociedades sin catastros (conocimiento local denso). Asimismo, ha estudiado la forma en la que los documentos se resignifican al cambiar de contexto en manos de nuevos actores, viviendo “nuevas vidas” y activaciones memoriales, sirviendo a propósitos diferentes de aquéllos para los que fueron concebidos. El énfasis está en la “mentira”, es decir, la producción de falsificaciones documentales para apoyar discursos sobre el pasado que construyen presentes “deseables”, y las pugnas por apoderarse de dichos discursos si tienen éxito. En el año 2000 Eduardo Manzano participó en el proyecto editorial *La gestión de la memoria: la historia de España al servicio del poder*, y en 2010 publicó, junto con Sisinio Pérez Garzón (UCLM), el libro *Memoria histórica* en la colección “Debates Científicos” del CSIC y Catarata. En Historia del Arte, investigadores como Miguel Cabañas, Idoia Murga y Wilfredo Rincón han estudiado la movilización, el expolio, los botines o el retorno de la obra de arte y el patrimonio artístico desde muy antiguo hasta la actualidad –incluyendo desde los equipajes de la guerra de la Independencia, el arte y los artistas del exilio, encargos y retornos de iconos como el *Guernica*, la movilidad del arte en las giras de la danza, y la musealización de la memoria artística. Desde el Instituto de Análisis Económico (IAE) de Barcelona, Laura Mayoral, Hannes Mueller, Joan Esteban y Anastassia Obydenkova llevan a cabo estudios sobre el impacto de los usos del pasado en las

actitudes y conflicto contemporáneos, y están interesados en la creación, persistencia y transformación de normas culturales y su anclaje con pasados imaginados, los componentes culturales y económicos de los conflictos étnicos, o el impacto de los legados históricos en las políticas migratorias y actitudes hacia los inmigrantes.

Algunos elementos comunes de estas investigaciones se desarrollan con más detalle como líneas de investigación transversales. Por lo tanto, existe una importante masa crítica en el CSIC con un gran potencial para impulsar este desafío de una manera coordinada. Al mismo tiempo, existen posibilidades reales de conectar este desafío con otros en diversas unidades temáticas del libro blanco del CSIC, como por ejemplo el desafío de humanidades digitales, el de ciudadanía digitales, el de sufrimiento y dolor, el de retos demográficos en sociedades envejecidas, el de conservación y valorización del patrimonio o el de desarrollo territorial.

Globalmente, constatamos una gran oportunidad de desarrollo de este desafío en el gran interés que hay en promover este tipo de investigaciones desde las instituciones públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el plano nacional, los proyectos de investigación orientados al análisis de procesos y culturas memoriales tienen encaje en los retos definidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020. El mero hecho de que en 2020 el gobierno del Estado sitúe la promoción de la “memoria democrática” como uno de sus ejes legislativos, colocándola en el máximo nivel institucional (Vicepresidencia Primera del Gobierno), es una muestra evidente de su relevancia política y social. En el plano internacional, en los últimos años, la Unión Europea ha financiado importantes proyectos directamente vinculados con este desafío, como respuesta a la necesidad de entender con mayor profundidad la gestión contemporánea de la memoria de las guerras europeas y las razones que subyacen al rebrote de movimientos xenófobos y nacional populistas en el continente en el periodo de postguerra fría. En el FP H2020 y en HERA, se han financiado un número significativo de iniciativas de investigación como *Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe* (UNREST, en el que participaron investigadores del ILLA y del IFS), *Transmitting Contentious Cultural Heritage with the Arts* (TRACES), o *Critical Heritages: Performing and Representing Identities in Europe* (CoHERE). Del mismo modo hay un número importante de proyectos ERC en los últimos años que están en el ámbito del desafío, como por ejemplo *Bosnian Ghosts and Spanish Bones, Corpses of Genocide and Mass Violence*, *Digital Memories*, *Remembering Activism*, o *Greyzone*. En

general, existe una red muy importante de proyectos e instituciones internacionales trabajando sobre esta temática, en la que los grupos del CSIC tienen una presencia importante. Así, otra fortaleza y oportunidad es la conexión de investigadores del CSIC con la principal asociación de estudios de memoria que existe en el mundo, la *Memory Studies Association* (para la que se organizó desde el ILLA la III conferencia internacional MSA2019, con más de 1.500 participantes, y de cuyo Comité Ejecutivo forma parte Francisco Ferrándiz), así como con la revista insignia de este campo de estudios, *Memory Studies*. En este contexto de internacionalización se están publicando investigaciones de alto impacto, académico, pero también social y político. Entre las fortalezas del campo es importante enfatizar el impacto social de estas investigaciones, que muchas veces se orientan al análisis de problemas sociales de gran importancia, como es la gestión del pasado y los conflictos de identidades que se derivan de ello. Algunos investigadores del CSIC que trabajan procesos memoriales tienen un importante perfil mediático (nacional e internacional), están implicados en tareas de transferencia y trabajan de manera habitual como asesores en el diseño de políticas públicas de memoria en ámbitos institucionales.

En el capítulo de debilidades y amenazas, cabe destacar el progresivo envejecimiento de la plantilla, que es un problema más generalizado en la institución, y que dificulta la consolidación del desafío hacia el futuro. La falta y en ocasiones inadecuación de personal técnico y de apoyo es otro de los problemas endémicos de la institución, que lógicamente afecta al desafío. Es por ello fundamental la dotación de recursos humanos, muy especialmente de investigadores jóvenes. Aunque los investigadores del CSIC han demostrado una notable capacidad para trabajar de manera interdisciplinar, es este un capítulo que requiere aún más esfuerzo y coordinación estable en los próximos años. La articulación de este desafío es una oportunidad para solventar otra debilidad, que es la dispersión actual de los grupos de investigación, especialmente tras el fin de la línea JUSMENACU en 2015.

En resumen, el desafío tiene una base muy sólida en el CSIC, reconocida internacionalmente, pero su viabilidad futura precisa de una apuesta clara por parte de la institución en la dotación de recursos en los próximos años. Su proyección a futuro también requiere del establecimiento de una estructura de coordinación estable que incorpore un equipo asesor internacional de primer nivel y dibuje la hoja de ruta de investigación hacia el futuro. Esta coordinación tendrá como tareas principales impulsar el crecimiento de la masa crítica de investigadores en el desafío (tanto los de plantilla como las nuevas incorporaciones), poner en

marcha un laboratorio de ideas, orientar a los investigadores hacia oportunidades de financiación en convocatorias nacionales e internacionales, fomentar seminarios y publicaciones internacionales de primer nivel, consolidar el tejimiento del desafío en redes internacionales, generar recursos didácticos autónomos y en coordinación con instituciones académicas, promover actividades de transferencia, consolidar la presencia pública y mediática de sus miembros y, cuando sea preciso, movilizar su capacidad investigadora de respuesta rápida ante problemas sociales cuyas dimensiones memoriales requieran análisis científico.

3. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL

3.1. Bases neurobiológicas de la memoria

Este desafío tiene la voluntad de incorporar las investigaciones más contemporáneas sobre los procesos de memoria en el nivel neurobiológico. Para ello se ha entrado en contacto con investigadores del Centro de Biología Molecular (CSIC-UAM) de Madrid y del Instituto de Neurociencias de Alicante, que están implicados en la coordinación de la Unidad Temática 5. Estas conversaciones han hecho aflorar los muchos cruces e intereses comunes que hay entre los estudios de carácter más biológico y los de cariz más socio cultural, desde las enfermedades de la memoria (que pueden expresarse tanto en el ámbito biológico como en el social) a las dinámicas del olvido activo, tan presentes en los estudios de cerebro como en las políticas institucionales de memoria.

Los estudios más punteros en neurobiología de la memoria utilizan tecnologías de visualización de última generación para tratar de detectar los procesos y pautas de actividad cerebral en la base del recuerdo, tanto en animales como en humanos, así como el funcionamiento y límites de la plasticidad neuronal —la capacidad de las neuronas para reorganizar sus conexiones sinápticas y los procesos bioquímicos subyacentes. Entre los retos que afrontan en su búsqueda de las huellas de la memoria en el cerebro o engramas [*engrams*] —que integran en el nivel neuronal visiones, olores, sonidos y una multitud de sensaciones y emociones y se movilizan por todas las regiones del cerebro—, los neurobiólogos tratan de entender las bases biológicas del aprendizaje, la morfología de almacenamiento y activación de la memoria, las características específicas e interacciones entre la memoria a corto y a largo plazo, la relación entre memoria y sueño, la memoria espacial, la pérdida de memoria (vinculada al envejecimiento, accidentes cerebrovasculares o enfermedades

específicas), el miedo aprendido, los circuitos específicos de las memorias declarativas o semánticas y de las memorias implícitas inconscientes –vinculadas a reflejos o asociaciones emocionales–, las interacción y solapamiento entre memorias, la capacidad de recreación y su evolución en el tiempo, o los mecanismos que dan lugar a las llamadas *falsas memorias*.

3.2. La memoria, un logos-con-tiempo, categoría central del conocimiento contemporáneo

La memoria, además de hacer referencia a una función física, es también una categoría meta-física. Nuestra hipótesis de trabajo es que se ha convertido en la categoría filosófica fundamental del modo de conocer de nuestro tiempo. Nuestra racionalidad es anamnética o memorial debido a una experiencia epocal que hizo la humanidad en el siglo pasado y que simbolizamos en el término “Auschwitz”. Ocurrió lo impensable y ese hecho obliga a pensar de otra manera. Es lo que se da a entender con la fórmula “deber de memoria” o “nuevo imperativo categórico”. Quiebra la confianza ilustrada en la razón basada en la certeza de que la mente humana podía conocer todo y anticipar la realidad. Del *mente concipio* de Galileo al *dictum* adornado “dejar hablar al sufrimiento es la condición de toda verdad”. Aparece el convencimiento de que lo impensable, pero que tuvo lugar, es lo que debe dar que pensar. Ese imperativo anamnético debería guiar nuestro trabajo pues nos exige repensar las piezas con las que se construye la historia de una manera nueva. Habría pues repensar la política (ya no puede pivotar sobre el concepto de progreso), la ética (pasar de una ética discursiva a una interpelativa), el derecho (hacer justicia no debería consistir tanto en castigar al culpable cuanto es satisfacer a la víctima), la ciencia, la religión... y también la estética. La representación estética tiene que habérsela con el lado oculto de la realidad, con hacer presente lo ausente que, en clave “Auschwitz”, es un pasado doloroso, fracasado o vencido. Representar lo que no está, lo que no es, la nada, es un desafío a la creación artística que es lo que nos ofrecen obras cumbres de esta nueva estética como el film *Shoah* de Claude Lanzmann, *La Indagación* de Peter Weiss o *Himmelweg* de Juan Mayorga.

3.3. Procesos de memoria e identidades colectivas

Decía Renan que no había Nación que se precie que no se invente su pasado. Benedict Anderson enfatizó la importancia de la dialéctica entre la memoria y el olvido en la constitución de “comunidades imaginadas”. El pasado es uno de los materiales con los que se forjan las identidades colectivas. El precio que normalmente se paga es, por un lado, el de la arbitrariedad a la hora de

seleccionar y de interpretar los momentos del pasado y, por otro, la forja de individuos-masas, dispuestos a sacrificar su subjetividad en aras del interés del grupo en donde se sienten más protegidos.

Ese mecanismo desarrolla un tipo de personalidad autoritaria tan sumisa al fuerte como opresora del débil. En los últimos años, como respuesta a un problema social creciente, son de particular interés los estudios sobre la conexión entre memoria y nuevas formas de autoritarismo, como los que llevan a cabo el grupo de investigación coordinado por Reyes Mate y José Antonio Zamora. La insuficiencia o el fracaso de la memoria del pasado autoritario es una condición de posibilidad, no la única, del resurgir del autoritarismo en la actualidad. Los discursos mediáticos y políticos articulan una sorpresa por esa emergencia del racismo, la xenofobia, el chovinismo nacionalista, la deshumanización y estigmatización de colectivos, la interpretación y aplicación restrictiva de derechos, etc. Se consideraba que eran fenómenos residuales y marginales en las democracias “avanzadas” y ahora sorprende su amplia aceptación. También se busca una correlación entre esos fenómenos y la multicrisis que viven las sociedades más desarrolladas. Pero esto no es suficiente, la desmemoria de las poblaciones es un factor que coadyuva de manera decisiva a hacerlas vulnerables a las falsas respuestas a la crisis social, económica y política de hondo calado que vive la civilización occidental.

Tanto los acontecimientos de los que somos testigos hoy como el asombro sobre los mismos son deudores del mismo desconocimiento de antaño alimentado ahora por la desmemoria. Esto queda confirmado por un rasgo que comparten todos los movimientos neoautoritarios actuales: trivializar y minimizar los autoritarismos y las formas de gobierno dictatoriales del pasado y el rechazo de la memoria histórica y la construcción de imaginarios memoriales antagónicos. Dicha memoria es identificada por estos movimientos como una afrenta a la identidad nacional y al orgullo patrio. Recordar ese pasado agranda la herida narcisista abierta por la crisis y se vuelve insoportable para los sujetos debilitados por la misma. Que el autoritarismo actual identifique la memoria histórica como enemigo prioritario de su contienda cultural y política es un índice revelador de que solo puede crecer e imponerse sobre el silencio y el olvido de la barbarie que los regímenes autoritarios han producido en el pasado. Así pues, para comprender el neoautoritarismo actual es necesario realizar investigaciones a fondo de los límites e insuficiencias de la memoria histórica y política incluso allí donde oficialmente se ha pretendido convertirla en un objetivo político. Es necesario entender las razones, los motivos y los mecanismos de la producción social del olvido, así como sus raíces culturales, sociales y psicosociales.

3.4. Políticas de memoria

En los estudios de memoria, el análisis de las políticas de memoria tiene un lugar privilegiado. Las políticas de la memoria se refieren en un sentido amplio a las pugnas que se producen entre diversos tipos de actores sociales –Estados, asociaciones memoriales, colectivos de víctimas, grupos de poder– por impulsar determinadas versiones del pasado. Algunos autores atribuyen esta intensificación de las políticas memoriales a los traumas de la Segunda Guerra Mundial y al despliegue transnacional de la memoria del Holocausto. Estos conflictos de memoria siempre existen, pero se exacerban en momentos históricos determinados –por ejemplo, en momentos transicionales de paso de un régimen dictatorial a uno democrático, o en momentos de cuestionamiento generacional de los arreglos de sus mayores, como ha sido en el caso de las fosas comunes de la Guerra Civil en España y el complejo proceso memorial que han desencadenado.

Cabe destacar la importancia que ha cobrado el análisis de aquellas modalidades institucionales de gestionar el pasado violento, aunque teniendo en cuenta que no operan en el vacío sino en campos sociales y políticos muy complejos, y que siempre son objeto de presión, debate y polémica por parte de otros actores sociales institucionales y no institucionales. Estas políticas pueden incorporar medidas reparativas, justicia retroactiva, esquemas de financiación, apertura de archivos, construcción de lugares de memoria, museos y monumentos, nuevos ciclos conmemorativos, formulación de nuevas categorías de víctimas, etcétera. En el mundo contemporáneo, es evidente que los procesos globalizadores de la memoria a los que nos hemos referido anteriormente influyen de manera acusada en la reconfiguración de las memorias institucionales, de fácil encuadre dentro del concepto de memorias *multidireccionales* –memorias en continua negociación, y con constantes referencias y préstamos recíprocos. Aún cuando el marco de las políticas memoriales suele ser el del estado-nación, o incluso el de una región concreta, están necesariamente orientadas globalmente, e influidas –a veces de maneras insospechadas o no inmediatamente detectables– por estos procesos transnacionales.

3.5. Memorias de los conflictos

La experiencia histórica del Holocausto está en la base del boom contemporáneo de los estudios de memoria, lo mismo que su pujanza actual se conecta con el resurgimiento de movimientos nacional-populistas y el rebrote de conflictos de base identitaria que, se pensaba, ciertos componentes

éticos y pedagógicos de la memoria, como el deber de recordar las tragedias para que “nunca más” sucedieran, habían contribuido a desactivar.

La relación entre memoria y conflicto es amplia y compleja. En un proyecto H2020 en el que han participado investigadores del ILLA y del IFS (UNREST, 2016-2019) se planteaban las bases teóricas para analizar el rebrote de las memorias de las guerras y las violencias del pasado y la proliferación de nociones agresivas y amenazantes de pertenencia colectiva, que ponían en riesgo los principios básicos que dieron lugar a la UE. En este contexto, pueden considerarse tres modelos principales de memoria en las sociedades contemporáneas. El modelo de memoria “antagonista” está muy extendido y es de muy fácil digestión en situaciones de potencia tensión social. Es monológico y carente de reflexividad, y funciona construyendo comunidades homogéneas basadas en mitos de origen y enfrentadas a otras del entorno, en términos binarios de “buenos” y “malos”. El modelo memorial que se derivó del esfuerzo por rememorar los horrores del Holocausto, se conoce como “cosmopolita”. El cosmopolitismo memorial puso en el centro de las mediaciones con el pasado traumático a la figura de la víctima. Este modo memorial tiene como puntal el testimonio y experiencia de los supervivientes, un tema donde la obra de Primo Levi es central. Se trata de un modo memorial que convierte el pasado en categorial y, en ese proceso de abstracción, corre el riesgo de descontextualizar e incluso despolitizar el pasado, enfocándose en el sufrimiento humano y la compasión por la víctima. Es un modelo dialógico y reflexivo que es actualmente hegemónico en los discursos y practicas transnacionales de los derechos humanos y en muchos ámbitos institucionales y de activismo memorial.

Aunque la hegemonía del cosmopolitismo parecía suficiente para frenar el regreso de las identidades enfrentadas a través de la creencia en la eficacia social y política de las lecciones aprendidas del pasado, el resurgir del antagonismo ha puesto en duda su eficacia a medio largo plazo. Las propuestas más recientes abogan por el fomento de un tercer modelo, denominado “agonístico”, que aunque también reflexivo y dialógico como el cosmopolitismo, aboga también por el multiperspectivismo y la aceptación de la existencia de memorias diferenciadas e incluso contrapuestas del pasado traumático en entornos democráticos complejos. Los proponentes del agonismo enfatizan también la importancia de que la memoria no margine los aspectos políticos del pasado y enfatice la necesidad de entender el despliegue de la memoria en su contexto social, histórico y político concreto incluyendo prestar atención analítica al punto de vista de los perpetradores. No para avalar o suspender el juicio sobre su perpetración, sino para entender las causas complejas que desembocaron en ella.

3.6. Memorias, diásporas y exilios

Pueden distinguirse dos niveles a la hora de relacionar la memoria con los exilios y las diásporas. El primero de ellos tiene un alcance subjetivo y es el más explorado o el que arroja más lugares comunes, articulándose a partir de la experiencia autobiográfica (individual o colectiva). Por sí misma, por la zozobra, discontinuidad y ruptura que esta experiencia introduce en la vida de un sujeto, se convierte en una fuente insoslayable de reflexión sobre la subjetividad y sus dimensiones temporales, sobre la identidad y sus necesidades narrativas. Existe una amplísima literatura que recoge este desafío (re-significar los conceptos de sujeto e identidad a partir de la memoria de los exilios) desde ángulos y matices diversos (sociológico, antropológico, cultural, literario...), a propósito de casos también muy diversos, mostrando siempre que dichos conceptos son construcciones complejas y que las memorias (individuales, colectivas, testimoniales, generacionales, transmitidas o “históricas”...) juegan un papel fundamental en ellas. Es decir, el exilio (y la diáspora dado el caso) es una experiencia que, por su condición “traumática”, obliga a (re)introducir la memoria en la vida del sujeto, a sembrarla de paradojas y a alterar sus plasmaciones narrativas.

Esta memoria descriptiva nos conduce hacia un segundo nivel epistemológico y moral en la relación entre memoria y exilio, más ambiciosa y desafiante, y también más problemática. Está relacionado con el impacto que ha generado la memoria de Auschwitz en el pensamiento crítico contemporáneo. No obedece ya solo a un giro epistemológico e interdisciplinar, sino a todo un cambio epocal que obliga a desenmascarar la violencia inscrita en la racionalidad moderna (por su vocación de olvido) y a re-significarla en un sentido anamnético. En este contexto, la memoria exiliada no se traduciría sólo en una plasmación narrativa descriptiva inmanente, sino que también tendría un alcance crítico y sería portadora de una nueva objetividad. Tendría un contenido autorreflexivo e interpelador, más allá del ámbito meramente privado o sentimental. La memoria exiliada tendría entonces un alcance objetivo al desvelar ámbitos de la realidad ocultos o inadvertidos bajo una mirada científica convencional (las ausencias y los no-hechos, que no por ser tales dejan de ser significativos) y hacer de ellos un argumento moral y político que cuestiona el olvido inscrito en las lógicas historicistas.

La memoria de los exilios recoge un pasado ausente que cuestiona el presente que sucesivamente se ha ido construyendo sobre él, advirtiéndolo así su condición excluyente y violenta, abriendo la posibilidad de otras maneras de reconstruir el pasado y de transformar el presente. La memoria exiliada cuestiona los relatos de nación con los que el estado y las comunidades modernas legitiman la exclusión, no para construir otros relatos, más

integradores pero análogos y abocados, por tanto, a reproducir dicha lógica excluyente, sino para plantear otras maneras de narrar, acordes con nuevas maneras de entender la ciudadanía, más plurales, democráticas y de perfil transnacional. Este puede ser el principal desafío de la memoria exiliada, a contrapelo de la actual oleada de nacional-populismos y de los universalismos particularistas característicos de muchas de las lógicas globales actuales. La memoria de los exilios y más aún de las diásporas, es una gran fuente de inspiración para desenmascarar la matriz nacionalista inscrita en los modernos relatos de nación y alumbrar nuevas maneras de narrar esta última, a partir de la alteridad, la desubicación y la pluralidad, mucho más que la identidad, el territorio y la unidad.

3.7. Memorias con perspectiva de género

El espacio que la memoria y el olvido reciben en la historiografía, la antropología y los estudios de las humanidades y las ciencias sociales se ajustan, en buena parte como las sociedades y las culturas que relatan, a jerarquías de género y recogen las perspectivas de los hombres en mucha más medida que las de las mujeres. El feminismo ha contribuido a paliar esta circunstancia y hay memorias de mujeres publicadas, incluidas en estudios y recogidas en bibliografías destacadas. Estamos lejos de conceder a las mujeres su autoría social, cultural y política en la construcción de nuestro tiempo. Se acude a la memoria de los hombres para analizar sucesos y proponer medidas que contribuyan a conservar la memoria y soslayar los olvidos. La incorporación de las mujeres y de la perspectiva de género está contribuyendo de manera radical a la recuperación de una memoria inclusiva, en la que se adjudica agencia no solo a los hombres, a quienes tenían el poder y sobre todo a quienes carecían de él, sino a las labores que desempeñaron las mujeres, los espacios sociales y productivos que contribuyen a crear, que ocupaban y ocupan, sus tareas dentro y fuera del hogar, y el espacio doméstico como generador de saberes, prácticas, subversión y represión. Las mujeres como acopio, archivo y agencia de la memoria histórica, y su trabajo y los estereotipos y prejuicios de género como elementos participantes en la definición, la práctica y el estudio de la memoria histórica constituyen por eso un gran desafío. Hay grupos de historiadoras que han tomado en serio el relato de las mujeres sobre sus vidas, sus aspiraciones, sus trabajos y sus actividades como constructoras de políticas; que han tomado las memorias del dolor y del deseo como fuente para renovar el relato historiográfico sobre la cultura, la sociedad y la política.

Una memoria con perspectiva de género se propone buscar las fuentes de mujeres y las tareas denominadas de mujeres para incluirlas en los espacios y las

narrativas de la memoria histórica y los análisis del olvido. Hay muchos testimonios disponibles desde la perspectiva de género cuyo despliegue y análisis contribuiría a una memoria más inclusiva.

3.8. Memorias de la ciencia

Movilizar la memoria de la ciencia pudiera parecer un contrasentido. Se suele considerar que las ciencias avanzan y se despliegan resolviendo enigmas sucesivos mediante el descarte de teorías e interpretaciones procedentes del pasado. De manera que resuelto un problema se generan nuevas cuestiones que movilizan a los investigadores y hacen evolucionar las ciencias possibilitando nuevas interpretaciones de la materia, la vida y las sociedades humanas.

Y, sin embargo, no conviene relegar al olvido el conjunto de ideas, saberes, prácticas, que han configurado la historia global del conocimiento por diversas razones. Por un lado porque en la producción de conocimientos que han configurado la ciencia-mundo actual han intervenido e intervienen múltiples actores humanos y no humanos. Sus contribuciones a lo largo del tiempo merecen ser resaltadas para contribuir a combatir los sesgos cognitivos y socio-históricos con los que interpretamos el mundo actual, procedentes de un doble frente. Por desdeñar los saberes de poblaciones nativas de los continentes extraeuropeos, que han acumulado una sabiduría ancestral sobre sus cuerpos y entornos como han revelado las etnociencias, o minusvalorar las aportaciones de quienes desdeñosamente son considerados profanos, carentes conocimientos expertos pero que pueden ser portadores de una experiencia que merece ser recuperada y compartida.

Dada la naturaleza global de los desafíos que tiene la humanidad ante sí se hace necesario recuperar y activar la memoria de las iniciativas acumuladas por las sociedades humanas para afrontar los retos a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de los tiempos para tener una perspectiva de larga duración de la aventura del saber. Esa memoria es activada en la actualidad por iniciativas culturales como *Memory of the World Programme*, propulsada y coordinada por la UNESCO desde 1992, con el fin de procurar la preservación y el acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, en el que los materiales científicos son estratégicos.

Este desafío debe contribuir a movilizar la memoria de la ciencia almacenada en el CSIC, el principal lugar de la memoria científica del Estado español, condensado en sus archivos, bibliotecas y museos, como se aprecia por

ejemplo en la iniciativa SIMURG, que es el nombre de la colección de fondos patrimoniales del CSIC digitalizados. Esos depósitos del saber producido en nuestro país son testigo y testimonio de los vaivenes históricos de nuestro sistema de producción y distribución de conocimientos científicos. La tarea de los historiadores de la ciencia consiste también en dar cuenta y esclarecer las tensiones entre memoria y olvido para combatir los silencios y ocultamientos sobre las aportaciones a la construcción del conocimiento de aquellos que quedan orillados en los márgenes del proceso histórico.

3.9. Materialidades de la memoria

La materialidad es inseparable de la memoria. Existe una materialidad consciente o intencional desplegada en la construcción de la memoria colectiva (museos, memoriales, monumentos, contra-monumentos, elementos patrimoniales, fotografías, artes plásticas) y una materialidad inconsciente o no intencional, representada por las ruinas y las trazas de eventos pasados, con frecuencia asociados a episodios traumáticos. La primera forma de materialidad es la que ha recibido más atención por parte de historiadores, historiadores del arte, antropólogos y otros científicos sociales. La materialidad no intencional como forma de memoria, que entraría dentro del campo de la arqueología, la antropología forense y el psicoanálisis, solo ha sido objeto de estudio sistemático recientemente, tanto desde la perspectiva de los estudios de violencia política como desde paradigmas posthumanistas. La tensión entre ambos tipos de materialidad del recuerdo—voluntaria e involuntaria, consciente y reprimida—es uno de los campos más productivos de análisis de la memoria colectiva y supone un desafío metodológico y epistemológico, dado que requiere la concurrencia de disciplinas muy dispares.

La materialidad ha sido uno de los elementos más debatidos en los combates por establecer narrativas hegemónicas sobre el pasado reciente tanto en España como en otros países: pensemos el caso de las estatuas de confederados en Estados Unidos o la Topografía del Terror en Alemania. En el caso de España, no se pueden entender las controversias sin la realidad física del Valle de los Caídos, los papeles del archivo de Salamanca o los restos humanos de las fosas comunes. La pregunta sobre la materialidad y la tensión entre su dimensión activa y no intencional es un aspecto central que plantea preguntas sobre las selecciones y criterios en la activación y mediatización de los sedimentos del pasado. Algunos acontecimientos llevan a la recuperación del lugar físico y su inscripción como lugar de memoria, mientras que otros no. La materialidad de la memoria invita por tanto a una exploración

interdisciplinar que aborda tanto el objeto físico mismo y sus métodos de recuperación y archivo, como también los ámbitos o contextos sociales que dan sentido pleno a estas expresiones físicas del pasado y los tornan en lugar de memoria.

3.10. Memorias de los espacios naturales

El punto de partida para entender la relación entre memoria y espacios naturales y paisajes es que éstos son y cuentan una historia compartida por quienes en el decurso del tiempo los han construido. En ese sentido el paisaje es cultura antes que naturaleza. Por lo mismo, participar, transcurrir o percibir a través de un paisaje supone un compromiso perceptivo con un entorno socialmente construido. No se trata, sin embargo, de que esa naturaleza culturalmente producida que observamos sea un mero “documento” del pasado. Más bien son espacios presentes en los que se anudan componentes materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, públicos y privados, cargados todos ellos de vivencias personales que pueden tener significaciones distintas en función de los mapas cognitivos del entorno producidos por diferencias de género, clase, edad, posición social, etc.

Los espacios naturales no solo nos hablan de quien los ha habitado, sino del tipo de mediación cultural que ha operado en el pasado y en el presente y de las relaciones que la misma ha propiciado y propicia con lo “natural”. Justamente por ello, la primera condición del paisaje es la de ser memoria. Una memoria que puede ser apropiada –como la naturaleza– de múltiples modos (destruyéndolo, representándolo simbólicamente, reproduciéndolo en diferentes lugares, etc.). En ese sentido, cualquier apropiación de lo natural concretado en el paisaje es susceptible de recibir significaciones ideológicas. Uno de los ámbitos en que esto puede ser visto es el papel que juega la memoria del paisaje en la construcción de identidades nacionales o regionales, en la construcción de “topografías patrióticas” a través de producciones literarias, artísticas o de otro tipo. En todo caso, no pueden comprenderse las memorias nacionales al margen de la producción (reproducción, revitalización, reinención) de paisajes simbólicos sobre los que/desde los que se proyecta tal memoria.

Vinculado a las mismas hay que plantear lo que está aconteciendo con los espacios protegidos de los que, en ocasiones, se ha expulsado población o impedido algún tipo de específica relación entre lo natural-humano para favorecer una visión incorrupta de la naturaleza al margen de la construcción social. Esta percepción, de larga data, puede relacionarse igualmente con la

producción imperial-colonial de paisajes, bien mediante una transformación radical de carácter económico (extractivo), bien con cambios simbólicos derivados de retoponimizaciones, bien adoptando otras formas. En la medida en que gran parte de los espacios naturales son producidos en “tiempos largos”, exhiben ciertos valores que aparentemente son estéticos pero que revelan los modos en que se han ido transformando los éticos, políticos y, en definitiva, culturales de los que los han habitado. Esto implica que cada paisaje, por mucho que unos se parezcan a otros, es simultáneamente único y producto de múltiples de interacciones en las que han entrado en juego no sólo variadas formas de razonar sino múltiples formas sensoriales (*smellscapes*, *soundscapes*, etc.) de acercarse a lo natural y aprehender lo histórico.

Así, es preciso abordar los procesos de re-espacialización inherentes a la globalización en tres dimensiones diferentes: deslocalizaciones y relocalizaciones urbanas; extensión de los procesos de urbanización que han transformado los paisajes (rurales) surgidos de las actividades productivas cotidianas; y los derivados del turismo. Estos procesos, a veces de manera divergente y otras convergente, han otorgado a los paisajes nuevos valores sociales, políticos y económicos, movilizándolo procesos memoriales.

4. ESCENARIOS DE FUTURO

A continuación se plantean de forma sintética algunos de los principales escenarios de investigación de futuro que es imprescindible desarrollar a medio y largo plazo.

4.1. Epistemologías alternativas de la memoria y el tiempo

La memoria social está determinada por marcos colectivos, pero también por paradigmas culturales. Los conceptos del pasado y del tiempo que se manejan en occidente, y están en la base de la investigación científica de los despliegues del pasado en el presente, no son universales. Los estudios de los procesos memoriales han de abrirse a otras epistemologías del pasado, que desnaturalicen nuestras formas de percepción del devenir histórico y permitan entender la riqueza de pasados que existen en las sociedades humanas. Y esto es importante más allá de cualquier programa científico porque la falta de entendimiento entre los diferentes paradigmas memoriales, y la hegemonía de algunos sobre otros, está en la base de mucha de la conflictividad social actual, y puede producir graves interferencias en acciones humanitarias o procesos más o menos institucionalizados de reconciliación o duelo.

Por ello, uno de los horizontes futuros de este desafío es entender no solo estas epistemologías periféricas, sino también las diferentes formas de construir y transmitir relatos, así como los distintos tipos de especialistas –desde chamanes a historiadores *folk*—y acciones memoriales –desde rituales de iniciación a ceremonias espiritistas o arreglos funerarios— que sean significativas en los contextos locales, y que han quedado fuera del radar de los estudios sobre las relaciones con el pasado en occidente. En un mundo globalizado estas epistemologías del tiempo, que en ocasiones tienen referentes circulares, o están relacionadas con el flujo de las mareas, o con ideas sobre el eterno retorno o la morfología de los paisajes, no están aisladas en mundos cerrados. Interaccionan y se retroalimentan con las epistemologías hegemónicas occidentales y, a pesar de su carácter subalterno, operan en campos de fertilización recíproca, aunque también de fricción. Disciplinas como la antropología social sí han prestado históricamente más atención a estas formas indígenas o culturalmente ajenas de relacionarse con el paso del tiempo, en un ejercicio de producción de conocimiento cuyo objetivo es acercarse al *punto de vista nativo*. De hecho, puede considerarse que la gran cantidad de estudios que la antropología ha llevado a cabo sobre rituales, chamanismo, posesión espiritista, creencias en espíritus o fantasmagorías, pueden considerarse antecedentes de esta nueva tendencia. Estos estudios sobre las características específicas de los diferentes regímenes de historicidad que coexisten y se contaminan recíprocamente en la sociedad global tienen como objetivo, por un lado, superar asunciones implícitas sobre la cronología y la progresión del tiempo como universales humanos y, por otro, contribuir a generar políticas memoriales más abiertas e informadas en lugares del mundo donde las situaciones de conflicto o desastres naturales son endémicas y la memoria social opera con claves muy diferentes a las que manejan, por ejemplo, actores humanitarios o burocracias transicionales.

4.2. Memoria digital

El análisis de cómo y con qué profundidad las nuevas tecnologías, dispositivos y plataformas digitales están afectando a la producción, la circulación y el consumo del conocimiento del pasado, y cómo las imágenes del pasado en sus diferentes formatos entran a formar parte de circuitos virtuales, es un campo de enorme proyección futura. La intersección entre memoria social y digitalización está transformando radicalmente la relación con el pasado: emergen nuevas comunidades de memoria, nuevos circuitos de difusión, nuevas formas de experiencia, nuevas modalidades de visibilidad, nuevas formas expresivas y, también, nuevos repertorios de manipulación y falsificación. El

creciente interés sobre este enfoque en los estudios sobre la memoria queda ilustrado, por ejemplo, en la sección especial de la revista *Media, Culture and Society* titulada “Digital Media-Social Memory” en 2014. Pongamos el ejemplo de las transformaciones que ha habido en los procesos memoriales en España, especialmente aquéllos relacionados con las exhumaciones de fosas comunes que han tenido lugar en el siglo XXI. En los últimos diez años, la aparición y el incremento del acceso a las tecnologías digitales han cambiado y acelerado radicalmente el proceso de construcción de la memoria de la Guerra Civil, proyectándola a escala mundial y transformando profundamente sus soportes y redes de difusión. La amplia disponibilidad de dispositivos digitales (especialmente *smartphones*) que pueden ser utilizados sobre el terreno y la creciente preeminencia del ciberespacio en la transmisión de la memoria suponen además su reconfiguración profunda como constructo social. Es decir, por un lado, la reformulación digital de la memoria social está teniendo efectos drásticos en la relación entre pasado y presente y, por otro, las nuevas tecnologías están transformando los movimientos sociales y sus formas de activismo memorial.

Una de sus características más sobresalientes es la asombrosa rapidez con la que los tradicionales álbumes fotográficos de familia en blanco y negro y los contextos sociales asociados de circulación de la memoria han dado paso a un paisaje de la memoria dominado por las tecnologías digitales. Las imágenes y la información relativa al pasado en todas sus variantes comenzaron a aparecer y reciclarse con frecuencia en blogs, presentaciones de *PowerPoint*, páginas web y, a medida que se iban creando y popularizando, plataformas y redes sociales como *Facebook*, *Twitter*, *Flickr* y *YouTube*. Esta nueva ecología de soportes digitales está transformando drásticamente la temporalidad, la espacialidad y, sin duda, la movilidad de los recuerdos. Este entorno puede permitir un consumo visual más rápido o incluso *en tiempo real* de las memorias emergentes; es el caso, por ejemplo, de las fotos o los vídeos tomados con teléfonos móviles en actos conmemorativos que se distribuyen rápidamente a determinadas redes de recuperación de la memoria a través de *WhatsApp*, de *Facebook* o, a distancias más cortas, de *Bluetooth*. Con la proliferación de los dispositivos digitales y los servicios de las redes sociales, los nuevos equipos y plataformas están abriendo caminos para la producción, la circulación y el consumo de la memoria, así como, en general, creando nuevos géneros, iconografías y estilos de representar, imaginar y reciclar el pasado. La accesibilidad potencialmente instantánea de contenido e imágenes en tiempo real que permiten las culturas digitales

también crea nuevas formas de testimoniar, nuevas subjetividades, nuevas identidades políticas y nuevos lugares para la configuración de recuerdos multidimensionales. Asimismo, sitúa los procesos de memoria locales más cerca de un ciberespacio que es necesariamente global. En suma, la memoria social contemporánea está profundamente imbricada en una suerte de deriva tecnológica, en la que se produce una *coevolución* dinámica de memoria y tecnología, y una transformación radical de los procesos memoriales cuyo análisis es ineludible y necesariamente transversal a cualquier investigación sobre este tema en el futuro.

4.3. Nuevas tecnologías del recuerdo: memoria y *giro forense*

Los procesos, relatos y dispositivos memoriales contemporáneos, en todas sus variantes, están sometidos a profundas transformaciones a medida que se amplían sus repertorios expresivos y se modifican las estructuras de sociabilidad que los encuadran. Algunos autores están desarrollando investigaciones sobre los procesos de *burocratización* o *medicalización* de la memoria, es decir, sobre la colonización de la memoria social por diversos sistemas de conocimiento experto que van desde la elaboración biomédica de patologías de la memoria –Alzheimer, amnesia, dismnesia, etcétera-- hasta el desarrollo de procedimientos técnicos que condicionan profundamente la rememoración. En relación con las nuevas configuraciones de la memoria traumática, algunos autores denominan *efecto CSI* a la nueva fascinación por el cadáver y el hueso y a la paulatina penetración de las lógicas y retóricas forenses en el imaginario popular transnacional, y a su gran poder explicativo y analítico para establecer marcos de referencia para dar sentido a la violencia, la muerte, el crimen y todas sus derivadas. Las series de televisión con trama forense, como *CSI* o *Bones*, o la propia novela negra contemporánea, no son las únicas causantes de este fenómeno –que es más profundo, globalizado y extenso. Pero sí son indicadoras de un nuevo orden de realidad y evidencia que está transformando nuestra concepción del mundo, de la vida y la muerte, del cuerpo humano, de la relación entre ciencia y verdad, de la justicia, de la reparación del daño, de los protocolos funerarios, o incluso de la mente criminal. Así, las series televisivas y las novelas que nos atrapan en sus sofisticadas tramas técnicas forman parte de un proceso más amplio y todavía insuficientemente comprendido donde las prácticas y discursos científico-forenses han inaugurado una nueva epistemología de la memoria en la que el cuerpo violentado, y sus procedimientos de desciframiento científico-técnico, se han colocado en el centro del escenario y atraen todos los focos.

Este *giro forense* en la comprensión de las memorias de la violencia, en buena parte enmarcado en tramas policiales, ha llegado de manera especialmente llamativa a las prácticas de los derechos humanos y al esclarecimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya sea verificando la muerte de perpetradores, recuperando e identificando víctimas, o amasando evidencias criminales que, en no pocos casos, entran a formar parte de procesos penales. Se trata de un cambio de paradigma de amplio espectro, que nos plantea nuevos tipo de preguntas. ¿Por qué esta creciente necesidad de acercarse al cuerpo herido? ¿Cuáles son las razones del predominio cada vez más acusado de las ciencias forenses en los procesos de reciclaje memorial contemporáneo del pasado violento? ¿Cuáles son las raíces históricas y las características del despliegue contemporáneo de este proceso? ¿Qué consecuencias están teniendo en los discursos y prácticas de los derechos humanos en el siglo XXI? ¿Hasta qué punto están desplazando modalidades de memorialización que parecían ya consolidadas desde antaño? ¿En que contextos, con qué procedimientos y estructuras jurídicas e institucionales, y por qué razones se están excavando y exponiendo con metodología forense diversas modalidades de violencia en muchos lugares del mundo? ¿Cuáles son los mecanismos de duelo y reparación de las víctimas que se ponen en marcha y cuáles son los potenciales y limitaciones de este nuevo modelo *corpocéntrico* de gestión del pasado traumático?

4.4. Estudios de perpetradores

Durante décadas, los estudios de memoria vinculados a la reelaboración de los conflictos y traumas del pasado se han enfocado principalmente en analizar el testimonio y punto de vista de las víctimas, y su recolección de los hechos. El Holocausto inauguró la conocida como “era del testigo”, que ha dado lugar a encendidos debates y a una bibliografía muy amplia. Aunque hay antecedentes muy importantes en este campo, como puede ser el trabajo de la conocida escritora y filósofa Hannah Arendt sobre el militar nazi Adolf Eichmann y la *banalidad del mal*, no ha sido hasta los últimos años que un número importante de investigadores están virando el foco hacia el estudio del punto o de visto de los perpetradores, o cómo reconstruyen la memoria de sus actos, con la finalidad de entender más adecuadamente y con mayor densidad las circunstancias sociales, culturales, políticas, económica e identitarias que dan lugar a determinados tipos de perpetración, en el arco que va desde las violencias selectivas a pequeña escala a los genocidios. En este campo el posicionamiento ético es especialmente importante, porque estudiar las condiciones y procesos de perpetración y la forma en la

que los perpetradores memorializan sus actos no puede en ningún caso desembocar en su aval sino justo lo contrario, en la prevención y la detección temprana de situaciones de posible violencia.

La fundación en 2017 de la revista internacional e interdisciplinar *Journal of Perpetrator Research* muestra la pujanza de este campo especializado de los estudios de memoria. El fin de la guerra fría supuso la apertura de numerosos archivos de regímenes totalitarios a los que era muy difícil acceder previamente. La consolidación de los discursos y prácticas transnacionales de los derechos humanos, el establecimiento de tribunales penales internacionales (Yugoslavia, Ruanda) y la movilización institucional de la figura legal de los crímenes contra la humanidad contribuyeron también a poner un nuevo foco en los perpetradores, como lo fue la eclosión de Comisiones de la Verdad. Asimismo, las nuevas tecnologías y la transnacionalización y mutación de los conflictos han abierto el paso a nuevas formas de perpetración cuyas claves es importante descifrar. Así, tanto la novedad del campo como su permanente mutación hace de esta temática un ámbito de investigación de frontera en el que confluyen disciplinas como la historia, la sociología, la antropología, la ciencia política, los estudios de género, la criminología, la ciencia forense, la filosofía, los estudios literarios, los estudios culturales, la psicología, los estudios étnicos, los estudios de cine y medios, o la educación.

4.5. Utopías: memorias del activismo y la esperanza

Una mirada retrospectiva a los estudios de los procesos memoriales muestra el predominio de la memoria traumáticas y los pasados violentos. La influencia del Holocausto, los estudios de genocidios o la conexión entre memoria y derechos humanos o justicia transicional han condicionado profundamente su crecimiento exponencial en las últimas décadas. En los últimos años, una tendencia creciente dentro de este campo científico está tratando de sacudirse la sombra de las tragedias del pasado en la constitución de memorias individuales y colectivas, enfocándose en las memorias de la utopía y la esperanza. Este énfasis en rescatar utopías tiene él mismo un giro utópico, pues su razón de ser es rescatar proyectos olvidados o abandonados ante las grandes tragedias, y así inyectar optimismo hacia el futuro en una época marcada por la desesperanza. Muy especialmente, este tipo de estudios de memoria tratan de desnaturalizar una relación de la memoria con el pasado que es coyuntural, rehuyendo marcos de violencia, atrocidades, traumas, sufrimiento, injusticia y victimización. Se considera que el paradigma traumático de la memoria hegemónico tiene varios peligros. Por un lado, la investigación se vuelve

repetitiva y predecible, mientras se acumulan estudios sobre catástrofes, e impide la aparición o consolidación de otros registros o modelos de investigación. Por otro lado, el foco en las violencias en el estudio de procesos memoriales puede estar contribuyendo a alimentar relatos de victimización de corte populista, nacionalista o xenófoba en un bucle epistemológico en el que la valoración científica crítica puede ser reciclada como apología de identidades victimizadas.

La felicidad y la utopía también tienen problemas de representación, sin duda muy diferentes a los de las memorias de las violencias. Precisamente por el dominio de la memoria traumática, hay pocas herramientas analíticas para capturar la transmisión memorial del optimismo y la felicidad. No se conocen bien ni sus relatos, ni sus dispositivos, ni sus formas conmemorativas, ni sus materialidades. Los autores que promocionan con sus estudios esta nueva mirada tratan además de diferenciar la memoria en positivo de la nostalgia, que es solo una modalidad de un espectro mucho más amplio de recreaciones del pasado. Esta corriente de estudios de memoria se desplaza hacia temas como la memoria de los movimientos sociales y el activismo, las luchas por la igualdad de género, las memorias de los procesos políticos que desembocaron en avances en derechos sociales y humanos, las memorias cotidianas de “pequeñas felicidades”, o la relación entre memoria y humor. Este enfoque permite revisitar pasado teñidos de tragedia con otra mirada, rescatando otras experiencias y recuerdos previamente colonizados por los relatos del trauma.

Los usos de la memoria son múltiples: hay abusos de la memoria y hay memorias que son olvidos. Ahora bien, parte substancial del contenido semántico del concepto actual de memoria es la idea del “nunca más” y, por tanto, la propuesta de una estrategia que impida la repetición de la barbarie. Asociamos al concepto de memoria la creación de un tiempo que sea nuevo y la superación del pasado traumático, con todo lo que eso conlleva.

4.6. Distopías: *ecotrauma*, memorias medioambientales y pandámicas

Queda demostrado que los procesos memoriales están en continua transformación, y son extraordinariamente sensibles a los cambios sociales, políticos, tecnológicos y también medioambientales. Las tendencias más recientes en los estudios de las conexiones entre memorias y espacios, paisajes, territorios y geografías apuntan al impacto que la crisis climática está suponiendo en estos procesos. Autores como Stef Craps han acuñado conceptos como

“ecotrauma”, “síndrome de stress pre-traumático” (en relación de espejo con el clínicamente aceptado “síndrome de estrés post-traumático o PTSD, por sus siglas en inglés), “solastalgia” –echar de menos el lugar en el que aún se vive–, “duelo preliminar” o “proléptico”, o “ansiedad climática” para analizar un tipo de memoria que se fundamenta en la nostalgia no solo del pasado sino también del presente ante un futuro incierto de destrucción o transformación ecológica radical. En algunos casos, este tipo de memorias del presente, o “memorias anticipatorias” desembocan en ansiedad ante escenarios distópicos presuntamente apocalípticos. Así, el presente se valora (y se “recuerda” en tiempo real) desde un futuro incierto. La memoria pasa de estar conectada fundamentalmente con el pasado a depender y estar condicionada por las expectativas de futuro en el nivel personal y global. Los parámetros clásicos de estudios de la memoria quedan subvertidos en términos de escala y direccionalidad. Este tipo de estudios de memoria analizan de manera especial la creciente producción cultural construida en torno a distopías. Están además vinculados a las nuevas epistemologías del antropoceno, es decir, a la conciencia creciente de que el impacto del ser humano sobre el planeta es comparable a las eras geológicas, de que el ser humano es el protagonista de una nueva era planetaria de carácter destructivo. En este paradigma, se desdibujan los límites claros entre naturaleza y cultura, o incluso entre seres humanos y no humanos en el planeta, y desencadena nuevos desafíos interdisciplinares. Desde este punto de vista, la memoria social que viene del futuro puede activarse para crear una conciencia global de los peligros que se avecinan y contribuir a combatir o atenuar el cambio climático. El estallido de la pandemia del COVID-19 en el proceso de redacción de este desafío y la construcción vertiginosa de su crónica y memoria, muy especialmente en formatos digitales, es un ejemplo del potencial analítico de esta perspectiva.

DESAFÍO L REFERENCIAS

- Adorno, Th. W. (1990).** Negative Dialectics. *Routledge*.
- Aguilar, P. (2000).** Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy. *Berghahn Books*.
- Anderson, B. (1991).** Imagined Communities. *Verso*.
- Antze, P., Lambek, M. (1996).** Tense Past: Cultural Essays in Trauma and Memory. *Routledge*.
- Arendt, H. (1963).** Eichman in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. *New York: Viking Press*.
- Assman, A., Conrad S. (2010).** Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories. *Palgrave Macmillan*.
- Azcárate, P. et al. (2006).** Volver a nacer: historia e identidad en los monasterios de Arlanza, San Millán y Silos (siglos XII-XIII). *Cahiers d'études hispaniques medievales*, 359-394.
- Baer, A., Sznajder N. (2017).** Memory and Forgetting in the post-Holocaust Era. The Ethics of Never Again. *Routledge*.
- Balibrea, M. P. (2007).** Tiempo de exilio. *Montesinos*.
- Barad, K. (2007).** Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. *Duke University Press*.
- Benavides, A. C. (2014).** La soledad de Macondo o la salvación por la memoria. *Siglo del hombre*.
- Berger, S., Olick, J. (2020).** A Cultural History of Memory. *Bloomsbury*.
- Cabañas, M. et al. (2020).** Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano de 1936. *Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática*.
- Cento Bull, A., Hansen, H.L. (2016).** On Agonistic Memory. *Memory Studies*, 9(4), 390-404.
- Closa, C. (2010).** Study on How the Memory of Crimes Committed by Totalitarian Regimes in Europe is Dealt With in the Member States. *European Commission*.
- Connerton, P. (1989).** How Societies Remember. *Cambridge University Press*.
- Colom, F. (2019).** Tristes patrias. Más allá del patriotismo y el cosmopolitismo. *Anthropos*.
- Craps, S. (2017).** Climate Change and the Art of Anticipatory Memory. *Parallax*, 23(4), 479-492.
- Craps S. (2020).** Ecological Grief. *American Imago* 77(1), 1-7.
- Craps S., Vermeulen P. (2017).** Memory Unbound. Tracing the Dynamics of Memory Studies. *Berghahn Books*.
- Das, V., Kleinman, A. et al. (2001).** Remaking a World: Violence, Social Suffering, and Recovery. *University of California Press*.
- De Cesari, Ch., Rigney, A. (2014).** Transnational Memory. Circulation, Articulation, Scales. *De Gruyter*.
- Dziuban, Z. (2017).** Mapping the 'Forensic Turn': Engagements with Materialities of Mass Death in Holocaust Studies and Beyond. *New Academic Press*.
- Egido, Á., Montes, J. (2018).** Mujer, franquismo y represión. Una deuda histórica. *Editorial Sanz y Torres*.
- Erlil, A. (2011).** Memory in Culture. *Palgrave Macmillan*.
- Erlil, A., Rigney, A. (2009).** Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. *De Gruyter*.
- Escalona Monge J., Vésteinsson, O., Brookes, S. (2019).** Dense Local Knowledge: Grounding Local to Supralocal Relationships in Tenth-Century Castile. Polity and Neighbourhood in Early Medieval Europe. *Brepols Publishers*, 13-102.
- Farré, J. (2020).** Las exequias a Mariana de Austria en los virreinos americanos, traslato y metáforas en vuelo. *Edad De Oro*, 39, 297-311.
- Ferrándiz, F. (2013).** Exhuming the Defeated: Civil War Mass Graves in 21st Century Spain. *American Ethnologist* 40(1), 38-54.
- Ferrándiz, F. (2014).** El pasado bajo tierra. Exhumaciones contemporáneas de la Guerra Civil. *Anthropos*.
- Ferrándiz F. (2019).** Unburials, Generals, and Phantom Militarism: Engaging with the Spanish Civil War Legacy. *Current Anthropology* 60(S19), S62-S76.
- Ferrándiz, F., Robben, A.C.G.M. (2015).** Necropolitics: Mass Graves and Exhumations in the Age of Human Rights. *University of Pennsylvania Press*.

- Gensburger, S., Lefranc, S. (2020).** Beyond Memory. Can We Really Learn from the Past. *Palgrave*.
- González, J. M. (2020).** Walter Benjamin: de la diosa Niké al ángel de la Historia. Ensayos de iconografía política. *Antonio Machado Libros*.
- González-Ruibal, A. (2009).** Arqueología y memoria histórica. *Revista Patrimonio Cultural de España* 1, 103-122.
- González-Ruibal, A. (2017).** Excavating Memory, Burying History. Lessons from the Spanish Civil War. *Between Memory Sites and Memory Networks New Archaeological and Historical Perspectives*. Freie Universität Berlin, 279-302.
- Gross, D. (2000).** Lost Time: On Remembering and Forgetting in Late Modern Culture. *University of Massachusetts*.
- Halbwachs, M. (1992).** On Collective Memory. *University of Chicago Press*.
- Hayner, P. B. (2002).** Unspeakable Truths: Facing the Challenges of Truth Commissions. *Routledge*.
- Hirsch, M. (1997).** Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. *Harvard University Press*.
- Hoskins, A. (2018).** Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition. *Routledge*.
- Hoskins, A., Sutton, J. (2009).** Memory Studies. *Palgrave Macmillan*.
- Hristova, M., Ferrándiz, F., Vollmeyer, J. (2020).** Memory Worlds: Reframing Time and the Past. *Memory Studies* 13(5), 777-791.
- Huyssen, A. (2003).** Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. *Stanford University Press*.
- Ingold, T. (1986).** The Appropriation of Nature: Essays on Human Ecology and Social Relations. *Manchester University Press*.
- Jelin, E. (2004).** State Repression and the Labors of Memory. *University of Minnesota Press*.
- Jelin, E., Vinyes, R. (2021).** *Cómo será el pasado. Una conversación sobre el giro memorial*.
- Jones, A. (2007).** Memory and Material Culture. *Cambridge University Press*.
- Kansteiner, W. (2006).** In Pursuit of German Memory: History, Television, and Politics after Auschwitz. *Ohio University Press*.
- Keenan, T., Weizman, E. (2012).** Mengele's Skull. The Advent of Forensic Eesthetics. *Stenberg*.
- LaCapra, D. (1998).** History and Memory After Auschwitz. *Cornell University Press*.
- Lafuente, A., Alonso, A., Rodríguez, J. (2013).** *¡Todos sabios! Ciencia ciudadana y conocimiento expandido. Cátedra*.
- Levi, P. (1998).** The Drowned and the Saved. *Summit Books*.
- Levy, D., Sznajder, N. (2006).** The Holocaust and Memory in the Global Age. *Philadelphia, PA: Temple University Press*.
- López-Ocón, L. (1999).** El Centro de Estudios Históricos: un lugar de la memoria. *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 34-35, 27-48.
- López-Ocón, L. (2003).** Breve historia de la ciencia española. *Alianza Editorial*.
- López-Ocón, L. (2019).** Una colección, un congreso, una asociación. Antecedentes de la creación de un Museo y Biblioteca de Indias en Madrid. *Iberoamericana* 19(72), 159-180.
- Lowenthal, D. (1985).** The Past is a Foreign Country. *Cambridge University Press*.
- Manzano, E. (2000).** La construcción histórica del pasado nacional. *La gestión de la memoria. La historia de España al servicio del poder*.
- Mate, R. (2006).** Medianoche en la historia, Comentarios a las tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de historia. *Trotta Madrid*.
- Mate, R. (2018).** El tiempo, tribunal de la historia. *Trotta Madrid*.
- Mate, R., Zamora, J. A. (2011).** Justicia y memoria: hacia una teoría de la justicia anamnética. *Anthropos*.
- Mayoral, L., Huber, J. (2019).** Group Inequality and the Severity of Civil Conflict. *Journal of Economic Growth* 24(1), 1-41.
- Mir, C., Cenarro, Á. (2021).** Mujeres, género y violencia en la guerra civil y la dictadura de Franco. *Tirant lo Blanch*.
- Nash, M. (2013).** Represión, resistencias, memoria. Las mujeres bajo la dictadura franquista. *Comares*.

- Pierre, N. (1996-98).** Realms of Memory, 3 vols. *Columbia University Press*.
- Olick, J. (2007).** The Politics of Regret. On Collective Memory and Historical Responsibility. *Routledge*.
- Olsen, B. (2010).** In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. *Lanham, MD: Altamira*.
- Ortiz, C. (2013).** Lugares de represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel. *Catarata*.
- Ortiz, C. (2016).** Antigüedades guanchescas. Comercio y coleccionismo de restos arqueológicos canarios. *Culture and History* 5(2), 90-113.
- Pérez Garzón, J. S., Manzano, E. (2010).** Memoria histórica. *CSIC/Catarata*.
- Pimentel, J. (2020).** Fantasmas de la ciencia española. *Marcial Pons*.
- Radstone, S., Schwarz, B. (2010).** Memory: History, Theory, Debates. *Transaction Publishers*.
- Reading, A. (2016).** Gender and Memory in the Global Age. *Palgrave Macmillan*.
- Ricoeur, P. (2004).** Memory, History, Forgetting. *The University of Chicago Press*.
- Roigé, X., Frigolé, J. (2010).** Constructing Cultural and Natural Heritage. Parks, Museums and Rural Heritage. *ICRPC Llibres*.
- Rojas, I. (2017).** Mourning remains: state atrocity, exhumation and governing the disappeared in Peru's postwar Andes. *Stanford University Press*.
- Rothberg, M. (2009).** Multidirectional Memory. *Stanford University Press*.
- Rothberg, M. (2019).** The implicated subject: Beyond victims and perpetrators. *Stanford University Press*.
- Sánchez-Carretero, C (2011).** El archivo del duelo: análisis de la respuesta ciudadana ante los atentados del 11 de marzo en Madrid. *CSIC*.
- Sánchez Cuervo, A. (2019).** Pasado inconcluso. Las tensiones entre la historia y la memoria bajo el signo del exilio. *Isegoría* 45, 653-668
- Santesmases, M. J. (2000).** Mujeres científicas en España: profesionalización y modernización social. *Instituto de la Mujer*.
- Shen, E. (2018).** Portrait of a Memory. Researchers are Painting Intricate Pictures of Individual Memories and Learning how the Brain Works in the Process. *Nature* 553, 146-148.
- Subirats, E. (2002).** Memoria y exilio. *Losada*.
- Sutton, J. (2006).** Memory, Embodied Cognition and the Extended Mind. *Routledge*.
- Theidon, K. (2012).** Intimate Enemies: Violence and Reconciliation in Peru. *University of Pennsylvania Press*.
- Tomé, P. (2016).** Paisajes serranos en una economía política de los sentimientos. *El patrimonio cultural inmaterial de Castilla y León. CSIC*, 161-182.
- Tomé, P., Casillas, M. A. (2016).** Hidden, Moved, Forgotten: The Building of the Dam El Zapatillo in Jalisco, Mexico. *Ambiente & Sociedad*, 19(4), 137-152.
- Van Dyke, R. M. (2019).** Archaeology and Social Memory. *Annual Review of Anthropology* 48, 207-225.
- Vinyes, R. (2009).** El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. *RBA*.
- Winter, J. (1995).** Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. *Cambridge University Press*.
- Zambrano, M. (2014).** Carta sobre el exilio. *Anthropos*, 3-13.
- Zamora, J. A. (2011).** Memoria e historia después de Auschwitz. *Isegoría, Revista de Filosofía Moral y Política*, 45, 501-523.

Este volumen del Libro Blanco está centrado en el eje “Nuevas bases para una sociedad global sostenible”. Se refiere al importante proceso de cambio que afecta a todas las dimensiones de la sociedad, transformando el contexto en que se ha venido desarrollando en las últimas décadas la actividad de investigación científica. Es éste un proceso de cambio global que no es comparable a lo que había sucedido en otras épocas, debido, sobre todo, a su amplitud, interdependencia y naturaleza multidimensional, y debido también al hecho de que se manifiesta de forma simultánea en muchas áreas, territorios y grupos sociales. Su análisis requiere, por tanto, llevar a cabo un ejercicio de convergencia y cooperación entre áreas y líneas de investigación apostando por un enfoque multidisciplinar, puesto que tanto la “globalización” como la sostenibilidad son conceptos que afectan a la sociedad como un todo.